

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/43371> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Jara Ibarra, C.

Title: Trayectorias de (des)movilización de la sociedad civil chilena : post-trauma, gobernabilidad y neoliberalismo en la restauración democrática (1990-2010)

Issue Date: 2016-09-29

An aerial photograph of a massive crowd gathered in a city park, likely Plaza de la Moneda in Santiago, Chile. The crowd is dense and fills the central and left portions of the frame. In the background, a skyline of modern skyscrapers rises against a hazy sky. To the right, a large, multi-story building with many windows is visible. The park has green grass and some trees with autumn-colored leaves. A small soccer field is visible on the left side of the crowd.

TRAYECTORIAS DE (DES)MOVILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL CHILENA:

**POST-TRAUMA, GOBERNABILIDAD Y NEOLIBERALISMO
EN LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA
(1990-2010)**

Camila Jara Ibarra

Trayectorias de (des)movilización de la sociedad civil chilena

**Post-trauma, gobernabilidad y neoliberalismo en la
restauración democrática (1990-2010)**

Camila Jara Ibarra

Trayectorias de (des)movilización de la sociedad civil chilena

**Post-trauma, gobernabilidad y neoliberalismo en la
restauración democrática (1990-2010)**

Proefschrift

ter verkrijging van
de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,
op gezag van Rector Magnificus prof.mr. C.J.J.M. Stolker,
volgens besluit van het College voor Promoties
te verdedigen op 29 september 2016
klokke 11.15 uur

door

Camila Jara Ibarra
geboren te Santiago (Chili)
in 1982

Promotiecommissie

Promotor: Prof.Dr. P. Silva

Overige leden: Prof.Dr. M.E.R.G.N. Jansen
Prof.dr. R.Th.J. Buve
Prof.dr. C. Peña (Universidad Diego Portales/Chili)
Mw.dr. D.A. Vicherat Mattar

Índice

Agradecimientos.....	viii
Introducción.....	1
Capítulo 1	
El fenómeno de la (des)mobilización de la sociedad civil.....	19
1.1 El debate sobre la activación y desactivación de la sociedad civil: abordajes teóricos.....	20
1.1.1 (Des) movilización de la sociedad civil: hacia una definición.....	20
1.1.2 Desmovilización: importancia del estudio de las fases de subsidencia.....	35
1.1.3 La influencia del contexto en las trayectorias de (des) movilización.....	44
1.2 Trayectorias de (des) movilización y reconfiguración de identidades en América Latina.....	48
1.2.1 La influencia del trauma, el miedo y la reflexión.....	51
1.2.2 La gobernabilidad democrática y la búsqueda de estabilidad institucional..	55
1.2.3 El impacto de la modernización neoliberal sobre la (des)mobilización social.....	60
1.3 Movilización y desmovilización en Chile: la fase de subsidencia de la era concertacionista y sus factores determinantes.....	65
1.3.1 Desmovilización de la sociedad civil chilena en la era concertacionista.....	66
1.3.2 Desactivación social en la redemocratización: diversidad de factores.....	77
Capítulo 2	
Trayectorias de movilización y desmovilización de la sociedad civil chilena....	82
2.1 Constelación histórica 1920-1938: la erosión del sistema oligárquico, la convergencia de los movimientos sociales y las clases medias.....	86
2.1.1 Década del veinte: la institucionalización de los movimientos sociales.....	86
2.1.2 Año 1931: una nueva fase de movilización.....	92
2.2 Del Estado de Compromiso a la Unidad Popular 1938-1973.....	95
2.2.1 Inclusión política, estagnación económica.....	95
2.2.2 De la ‘revolución en libertad’ a la ‘vía chilena al socialismo’: hipermovilización social.....	102
2.3 Represión, desmovilización y explosión social bajo la dictadura militar.....	111
2.3.1 La fase de subsidencia del autoritarismo neoliberal 1973-1982.....	111
2.3.2 Explosión social y transición a la movilización latente de la era democrática.....	117
Capítulo 3	
Desmovilización social: violencia política, memoria emblemática y post-trauma colectivo.....	124
3.1. Memoria, trauma y violencia política.....	125
3.1.1 Memoria colectiva y trauma social: algunas precisiones teóricas.....	125

3.1.2 Características globales del trauma colectivo y su impacto sobre la sociedad civil en Chile.....	132
3.2 Consecuencias del trauma: post-trauma colectivo y desmovilización de la sociedad civil.....	145
3.2.1 Silencio, negación y olvido como reacción al trauma colectivo	149
3.2.2 La imposibilidad de la organización: desconfianza, desarticulación y deslegitimación	157
3.2.3 Transmisión social, re-traumatización o cronificación del trauma	168
Capítulo 4	
El paradigma de gobernabilidad como factor desmovilizador de la reconstrucción democrática	175
4.1 Gobernabilidad democrática en la transición chilena.....	176
4.1.1 Gobernabilidad en Chile: ¿de qué estamos hablando?	176
4.1.2 Gobernabilidad, partidos políticos y sociedad civil en Chile.....	185
4.2 Influencia de las estrategias de gobernabilidad en la desmovilización de la sociedad civil.....	193
4.2.1 Despolitización: democracia de las elites, ascenso tecnocrático y política instrumental.....	195
4.2.2 Desmovilización como anticipación, cooptación y operaciones políticas.....	203
4.2.3 El discurso del protagonismo ciudadano y las políticas públicas participativas como factor desmovilizador	209
Capítulo 5	
Impacto de la modernización neoliberal sobre la desmovilización de la sociedad civil.....	218
5.1 Modernización neoliberal: ideas, orígenes y reestructuración social.....	219
5.1.1 Precisiones teóricas, desarrollo e imposición del modelo neoliberal	219
5.1.2 Neoliberalismo, reestructuración y sociedad civil en Chile.....	232
5.2 Influencia de la imposición del modelo neoliberal en la desmovilización de la sociedad civil.....	246
5.2.1 Reformas estructurales y nueva estratificación social: hacia un país de propietarios y no de proletarios	249
5.2.2 La masificación del consumo y del endeudamiento como inhibidor del movimiento y organización colectiva.....	262
5.2.3 Nuevas cosmovisiones: tecnocracia, meritocracia e individuocracia	274
Capítulo 6	
Movilizaciones sociales: reconstrucción identitaria y un nuevo ciclo político.....	283
6.1 La memoria traumática como agente (des)movilizador	285
6.1.1 El trauma pasado como identidad presente: el fetichismo de la memoria	287
6.1.2 Herencias de memoria y aprendizaje inter-generacional	294

6.1.3 Memoria traumática y una nueva noción de derechos humanos.....	296
6.2 Paradigmas de gobernabilidad democrática y (des) movilización.....	299
6.2.1 Cambios en las estrategias de gobernabilidad: 1998 y 2006 como puntos de inflexión	301
6.2.2 Las estrategias de gobernabilidad del gobierno de Piñera y nuevas oportunidades para la movilización.....	303
6.3 La modernización neoliberal como insumo para la movilización	312
6.3.1 Neoliberalismo: segregación y endeudamiento como insumos para la protesta social	318
6.3.2 Neoliberalismo avanzado: consumidores empoderados y cultura capitalista	324
Conclusiones	333
Referencias	344
Samenvatting	387
Summary	394
Curriculum Vitae	400

Agradecimientos

Esta investigación no habría sido posible sin el apoyo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología (CONICYT) de Chile y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES, CONICYT/FONDAP/15130009). Muchas gracias al Departamento de Estudios Latinoamericanos y al Instituto de Historia de la Universidad de Leiden por la excelente disposición y gran hospitalidad. Quisiera agradecer infinitamente a Patricio Silva por confiar desde el principio en mi proyecto, por su guía académica y, especialmente, por su constante apoyo y buena voluntad.

Quiero agradecer los valiosos comentarios y sugerencias en diferentes etapas de la investigación a Daniela Vichérat, Pablo Isla, Carlos Peña, Claudio Fuentes, Mario Garcés, Miguel Urrutia, Gonzalo de la Maza, Marco Moreno y Raúl Encina, sus consejos dieron forma a este trabajo. A todos los entrevistados en Santiago, Calama y Aysén, gracias por tan buena disposición.

Mil gracias a mi familia en Chile, mi padre y mis hermanas, y a la familia de amigos en Holanda, especialmente a Soledad Valdivia, Håvar Solheim, Mariano Álvarez, Andrea Cerda, Honorata Mazepus, Daniela Egas, Cristóbal Sifón, Iván Veyl, Miriam Groen-Vallinga, Arvid Degeenars, Nicole van Baal, Fransje Molenaar y María José Vásquez. Me llevo a Chile recuerdos felices de tantos momentos compartidos.

Quiero dedicar de forma especial este trabajo y agradecer de todo corazón a tres personas que, en distintos momentos y de distintas maneras a lo largo de este camino, me entregaron todo el cariño, los consejos y el apoyo necesarios para concretar este libro: Mariana Perry, por tu amistad en los momentos más necesarios; Carmen Ibarra, por tu incondicional presencia a pesar de la distancia; y Alekos Vuskovic, por el diseño de la portada y, especialmente, por alentarme a zarpar en este proyecto, a perseverar y acompañarme con amor por la vida.

Finalmente, mi infinito amor y agradecimiento a Marina, por elegirme y venir a acompañarme en la última etapa de la tesis: por ti y por los que vienen, seguiremos trabajando para dejarles un Chile mejor.

Introducción

A principios de enero de 2016, un significativo hecho tenía lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: luego de 35 años se inscribía el primer estudiante beneficiado con la gratuidad en la educación superior. Esto gracias a la entrada en vigencia de una ley que le permitirá a él y a otros 170 mil estudiantes no pagar matrícula y tampoco arancel.¹ El hecho resulta relevante ya que representa el resultado de un programa político y legislativo que emerge desde las movilizaciones del año 2011, con el movimiento estudiantil como su principal protagonista. Con esto, se vuelve pertinente y correcto afirmar que el 2011 la sociedad civil, o al menos ciertos sectores de ella, tomó el control de la agenda política, imponiendo desde la calle demandas y exigencias que se transformarían cinco años más tarde en un resultado concreto y patente.

El año 2011 se inauguraría así un estadio en el proceso socio-político reciente caracterizado por una politización que se manifiesta en diversos planos: un aumento en el debate público, un incremento en la conflictividad, un mayor involucramiento ciudadano y, quizás el más evidente, una expansión en el número de protestas o movilizaciones sociales (PNUD, 2015). Luego de las primeras movilizaciones de 2011, éstas aumentaron en masividad mientras las demandas ciudadanas se fueron expandiendo y diversificando. En efecto dominó, se desplegaron multitudinarias protestas primero contra el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén en el sur del país, para continuar luego con el masivo movimiento estudiantil, protestas regionalistas, marchas a favor de la diversidad sexual y de la legalización de la marihuana, entre otras. Al mismo tiempo, la clase política, la academia, los medios de comunicación y la propia ciudadanía miraban con asombro el fenómeno que estaba teniendo lugar.

La sorpresa y conmoción frente a la emergencia de las movilizaciones se explica al comprender que, aun cuando existieron episodios de movilización durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010), éstos estuvieron lejos de tener la masividad y el impacto de las manifestaciones del año 2011. Muy por el contrario, el período de los veinte años de la Concertación se caracterizó por una retracción ciudadana, una desmovilización y un bajo involucramiento de la sociedad civil en los debates públicos, en contraste con las protestas y movilizaciones constantes durante los años ochenta, así como posteriormente en la mencionada ola de manifestaciones de 2011. Más aún y de acuerdo con diversos diagnósticos, el advenimiento democrático en Chile se

¹ Ver 'Universidad de Chile matricula a primer estudiante beneficiado por la gratuidad', *La Tercera*, 6 de enero de 2016, y 'La historia del primer beneficiado con la educación gratuita', *Qué Pasa*, 6 de enero de 2016.

caracterizó por la fragmentación, debilitamiento y crisis de los movimientos sociales, por la desmovilización y desactivación de la sociedad civil y una sociedad ampliamente despolitizada, por una retracción ciudadana, un desarrollo sin ciudadanos o, incluso, por una ausencia civil.

Diferentes definiciones y conceptos se han utilizado para describir el repliegue ciudadano desde el espacio público hacia la esfera privada luego del fin del autoritarismo, así como su escasa presencia en la toma de decisiones y en la definición de la agenda política nacional en la fase post-dictatorial. Lo anterior se opondría tanto a la efervescencia social en el resto de América Latina durante ese período, como al supuesto de que la reconstrucción democrática se desplegaría inserta en un escenario de posicionamiento ciudadano, revitalización y articulación de la sociedad civil. Asimismo, la afirmación respecto a una desmovilización entre los años 1990-2010, se puede constatar en base a diferentes hechos, entre ellos, la ya mencionada comparación con la movilización y las dinámicas sociales de las etapas precedentes y subsecuentes, desde el fenómeno de la desafección política o, de igual forma, desde una mirada a la participación en organizaciones sociales durante esos años.²

Una vez identificada la desmovilización de la sociedad civil chilena, el ejercicio que generalmente tiene lugar es un análisis sobre las variables que dieron forma a esta transformación, desde la efervescencia de décadas anteriores, a la desactivación. Este proceder es reconocible en parte de la extensa literatura sobre la ‘transitología’ chilena que, abordando el fenómeno desde procesos micro, meso o macrosociales dependiendo del autor, permite obtener una amplia constelación de factores que revelan la complejidad del problema de la desmovilización durante la redemocratización.

Una primera explicación tiene que ver con la tesis del cambio en las condiciones políticas para explicar tránsitos de pasividad a actividad política o viceversa. Para esta teoría, la actividad de los movimientos sociales es considerada un fenómeno cíclico, que surge y decae en función de factores externos u oportunidades políticas cambiantes al movimiento, tales como la apertura o clausura de un sistema que generan cambios estructurales de impacto sustancial a las estrategias y formas de la acción colectiva. De manera más específica, las transiciones de regímenes autoritarios a sistemas democráticos y su efecto sobre la (des)activación de la sociedad civil, ha sido analizada planteando diferentes hipótesis o escenarios. La primera asume que la democratización debería tener un efecto positivo sobre la actividad de los

² Aun cuando existieron episodios de movilización durante los veinte años de gobierno de la Concertación (1990-2010), éstos no alcanzaron a tener la escala y el impacto de aquellas producidas en la década del ochenta o más tarde el año 2011. La más importante fue la llamada ‘revolución de los pingüinos’ que resultaría ser el antecedente del ciclo de protestas a partir de 2011.

movimientos sociales en la medida que muchas de las limitaciones tales como obstáculos legales, la clausura de las instituciones del Estado y su respuesta represiva, son eliminadas una vez que la democracia retorna y se expanden las oportunidades para la participación política. La hipótesis contraria, plantea que la democratización obstaculizaría el desarrollo de la actividad movilizadora dado que los movimientos sociales de oposición al autoritarismo pierden su sentido una vez recuperada la democracia. Asimismo, en tanto los partidos políticos son legalizados, los movimientos sociales dejan de ser el único espacio de canalización de demandas, la participación institucionalizada se vuelve más atractiva, mientras los activistas y los líderes más capacitados de los movimientos son absorbidos por los nuevos gobiernos.

La tesis del cambio de régimen y su efecto inhibitor sobre la movilización social entrega luces importantes para entender la desmovilización. Es un hecho que ningún ciclo de movilización puede sostenerse durante demasiado tiempo, especialmente si sus principales motivaciones han desaparecido o si los niveles de participación y compromiso requerido han sido particularmente altos. Sin embargo, aun cuando la desmovilización chilena en 1990-2010 puede ser explicada desde el cambio de régimen y la tesis de la caída de un ‘enemigo común’ representado por la dictadura, no puede ser reducida únicamente a ello. La desmovilización post-dictatorial en Chile es un fenómeno complejo, y su examen y comprensión, tal como quedará demostrado en este trabajo, consta de una multiplicidad de capas y niveles de análisis.

Más allá del cambio de régimen, se ha planteado que el repliegue de la sociedad civil luego del fin del régimen militar estuvo influenciado por un amplio abanico de variables que van desde el trauma de la dictadura hasta el proceso de individualización global post-moderno. Estas explicaciones incluyen la satisfacción del fin de la fase dictatorial y la espera paciente de una alegría que estaba por venir,³ el boom consumista que produjo la inyección de capital extranjero en los años noventa, así como la ausencia de una alternativa viable al libre mercado mundial luego del fin de los modelos populistas y socialistas y la caída del muro de Berlín. Otra tesis plantea que la redemocratización chilena estuvo marcada por la instalación y expansión de un malestar social implícito derivado de la desigualdad socioeconómica y una percepción de abuso que fue procesado por medio de la sublimación o la represión y la despolitización. Asimismo, el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica por los gobiernos de la Concertación, que tendió conscientemente a limitar la participación ciudadana, a instaurar la política de los consensos, la naturaleza pactada de la transición chilena y el fuerte control y presencia de las elites, han sido otros de los

³ ‘La alegría ya viene’ fue el slogan utilizado en la franja electoral de la opción del No en el plebiscito de 1988.

factores propuestos para explicar la retracción civil del período. Por otra parte, se señala que la presencia de enclaves autoritarios, la democracia tutelada y los resabios del régimen militar tuvieron un efecto negativo sobre la inclusión ciudadana, mientras otros trabajos advierten sobre la importancia de la profunda y radical modernización neoliberal, la mantención y profundización de la inequidad social, así como el fortalecimiento de las posiciones tecnócratas al interior de la democracia.

Con todo lo anterior, el propósito de este estudio es retomar y ampliar el debate respecto a los procesos de activación y especialmente de desactivación política de la sociedad civil chilena, poniendo especial atención en el período de reconstrucción democrática llevado a cabo por los cuatro gobiernos de la Concertación, como un momento de especial desactivación o desmovilización política.

Y así como este estudio observa la desmovilización post-dictatorial intentado iluminar los procesos culturales y sociales del período, es su objetivo mayor el profundizar y ampliar la discusión académica respecto de los factores que incidieron en esta desactivación social - o movilización latente - durante la era concertacionista. Tal como se expone a lo largo del libro, se plantea que la desactivación política así como los intereses, objetivos y formas de asociación de la sociedad civil durante el período 1990-2010 fueron fuertemente influenciados por el fenómeno de la memoria post-traumática como residuo dictatorial, por la relación de la sociedad civil con el Estado y su paradigma de gobernabilidad, y finalmente por el mercado y las lógicas de la modernidad neoliberal, como factores inhibidores del involucramiento público ciudadano. Estos factores y la manera en que influenciaron las dinámicas de la sociedad civil, con mayor o menor fuerza dependiendo del momento analizado dentro del período, se alzan como las principales hipótesis y objetivos a desarrollar a lo largo de este trabajo.

El primer factor planteado para explicar la desactivación social se centra en el post-trauma y aprendizaje colectivo derivado del período precedente. Esta memoria grupal será fundamental para analizar las dinámicas de la época pues, las fases de subsidencia o desmovilización en Chile normalmente han ocurrido luego de enfrentamientos entre civiles y militares, o por crisis económicas sociales mayores. Estos hechos son almacenados en una especie de dispositivo colectivo que actúa como un resumen interpretado de la experiencia empírica acumulada por un grupo social y que, dependiendo de las transformaciones y evoluciones a las que se someta, podrá activar o inhibir nuevos procesos de movilización social. Asimismo, se ha planteado que el telón de fondo de una exitosa reconstrucción democrática chilena en términos de estabilidad política y crecimiento económico, fue un aprendizaje sustantivo y doloroso cuando sectores tanto de izquierda como de derecha cargaron con el trauma de los

acontecimientos políticos recientes (Silva, 1999). Para este autor, el rol jugado por los componentes psicológicos durante el cambio de régimen no ha recibido suficiente atención, destacando por otra parte la relevancia de los mismos para una comprensión profunda de las dinámicas del período - como la obsesión por los consensos, la aversión y la invisibilización del conflicto social, etc. - y sus consecuencias sobre la desactivación de la sociedad civil chilena.

Por otra parte y como una segunda hipótesis explicativa de la desmovilización, se analiza la perspectiva de gobernabilidad que dominó el proceso de restablecimiento de las democracias de Latinoamérica, en general, y de Chile, en particular. Este paradigma, empeñado en la estabilidad política, el crecimiento económico y la evasión del conflicto social, redujo el espacio de participación de la sociedad civil en el debate público y en la construcción del proyecto nacional, limitando esta arena exclusivamente a las elites políticas, a la vez que consagrando al Estado a la contención de demandas sociales. De igual manera, el paradigma de la gobernabilidad democrática en Chile se ha caracterizado por un fortalecimiento de las posiciones tecnócratas, el debilitamiento de los partidos políticos y del estamento intelectual tradicional, contribuyendo así a la despolitización de la sociedad chilena y a la desarticulación de las respuestas colectivas desde la ciudadanía.

Finalmente, el desarrollo y configuración de la sociedad civil en la era democrática no puede entenderse desvinculada del modelo neoliberal en que se enmarca. La modernización neoliberal impuesta en dictadura y consolidada durante los gobiernos de la Concertación, se tradujo en la atomización de la sociedad y en la transportación de la autorrealización de los individuos desde la esfera pública hacia la vida privada, donde el consumo se sitúa en el centro de la vida social y el mercado se transforma en el principal canal de integración y socialización. Con un Estado cuya tarea se reduce a la producción de las condiciones mínimas para garantizar el acceso de los ciudadanos al mercado, se determina la hegemonía de las lógicas individualistas así como el abandono de métodos de participación y de reivindicación colectiva tradicionales. Asimismo, la modernización neoliberal es de especial relevancia para el estudio de la desactivación social post-dictadura tanto por la radicalidad y precocidad con que el modelo fue impuesto en Chile, como por las profundas transformaciones que supuso para el mercado laboral y las estructuras sociales. Las consecuencias sociales de un modelo de libre mercado con correctivos de política social que no otorga un rol significativo a la regulación estatal ni a la ciudadanía organizada (De la Maza, 2003), constituye una temática central en este estudio.

Por otra parte, los movimientos sociales y su acción de protesta serían un fenómeno cíclico, que puede surgir o decaer en función de los cambios políticos y las

oportunidades externas al movimiento. Los movimientos sociales se visibilizan así sólo en áreas y espacios temporales limitados, pero al hacerlo revelan redes que se encontraban sumergidas u ocultas en la cotidianidad de las relaciones sociales. La movilización se vuelve visible sólo cuando un conflicto determinado o ciertas circunstancias específicas lo permiten, de otra forma, se mantiene en estado de latencia o movilización potencial que no implica inactividad, sino un momento de construcción y reconstrucción de formas de acción que son alimentados por la producción constante de marcos de sentido alternativos.

Observado y abordado así, el período post-dictatorial se presenta como un terreno fecundo no sólo para analizar en profundidad los factores causantes de la desmovilización, sino también para examinar el proceso en términos de la reconstrucción identitaria que sentó las bases y generó las plataformas necesarias para la fase de movilización inaugurada en 2011. De esta forma, la premisa del debilitamiento o ausencia ciudadana en el período 1990-2010 hasta aquí expuesta, es cuestionada, replanteada y ampliada para considerarla más bien como una etapa de reestructuración de la sociedad civil o, utilizando los conceptos de Salazar (2001) y Melucci (1989) respectivamente, un período de subsidencia⁴ o una fase de movilización latente, donde nuevas identidades y valores colectivos son generados e ‘incubados’. Los períodos de aparente desactivación política formarían así parte de un ciclo o trayectoria más amplia de actividad social y se caracterizarían por movimientos subterráneos e invisibles de reestructuración de discursos aglutinadores y reconstrucción identitaria que se transformarán en insumos para los ciclos de movilización venideros.

Con todo lo anterior, este estudio busca sumarse al debate teórico que pone foco en el período de desmovilización o desactivación social ocurrido luego del retorno democrático en Chile. Con ese fin, se realiza un extenso análisis de los factores que mayormente indujeron una fase de movilización latente post-dictatorial. Se plantea que la desmovilización así como los intereses, objetivos y formas de asociación de la sociedad civil durante el período 1990-2010, estuvieron fuertemente influenciados por el trauma colectivo heredado de la dictadura e instalado en la memoria social, por la relación de la sociedad civil con el Estado y su paradigma de gobernabilidad y, finalmente, por las lógicas de la modernización neoliberal, como grandes factores inhibidores del involucramiento público ciudadano. Estos factores y la manera en que incidieron en las dinámicas de la sociedad civil, con mayor o menor fuerza

⁴ El término subsidencia es importado desde la geología donde se aplica para definir los procesos de hundimiento de la superficie de un terreno. El autor lo utiliza en este contexto evidentemente haciendo alusión a los momentos en que la sociedad civil y sus movimientos sociales tienden a desaparecer de la escena pública.

dependiendo del momento analizado dentro de la época concertacionista, se alza como el principal argumento a desarrollar a lo largo de este trabajo. Así, se busca contribuir de forma teórica y empírica a la comprensión de esta fase de desmovilización al recoger, analizar y sistematizar el debate antes expuesto a través de los tres grandes factores anunciados.

Al mismo tiempo, se observa la manera en que a medida que el proceso de redemocratización se fue desarrollando, el impacto de estos factores en las dinámicas de la sociedad civil facilitó la (re)generación de nuevas matrices culturales, identidades, valores e ideas-fuerza y, con ello, *inputs* movilizadores o plataformas para la acción colectiva en el ciclo de protestas del año 2011. Para esto, se examina la desactivación social entre 1990 y 2010 considerándola, por una parte, como una fase de subsidencia dentro de una trayectoria de activación y desactivación mayor y se observa, por otro lado, la manera en que los factores desmovilizadores comienzan a devenir en insumos para la movilización en la medida que fueron nutriendo dinámicas sociales y generando nuevas identidades para la acción colectiva.

Finalmente, el análisis busca aportar e insertarse en la gran línea de investigación del conflicto social y político, movimientos sociales e historia de los conflictos en Chile, así como en el estudio de la sociedad civil y las interacciones entre diferentes grupos dentro de un sistema social. En una perspectiva más amplia, la investigación se enmarca en los estudios sobre la redemocratización, la construcción democrática con foco en las dinámicas de las sociedades civiles en el continente (Dagnino *et al.*, 2006b; De la Maza, 2010a; Escobar y Alvarez, 1992; Foweraker, 1995).

Relevancia académica

El fenómeno de la despolitización se vuelve relevante dentro de la discusión sobre esta materia por varias razones. Primeramente es importante volcar el trabajo analítico sobre los procesos de desactivación política de igual forma como la ciencia social se concentra en las fases de emergencia o ebullición ciudadana. Esto, pues los científicos sociales normalmente examinan las etapas de movilización descuidando en ocasiones el estudio de los momentos en que la ciudadanía tiende a desaparecer de la escena pública. La importancia de centrar el análisis en dichos períodos radicaría en que, siendo la activación y desactivación política las dos caras del mismo fenómeno de la movilización social, en una etapa de aparente desactivación podría esconderse una reestructuración, una organización y un desarrollo diferente de la sociedad civil, donde se cimentarían las bases para las fases de activación política venideras.

De igual manera, el caso chileno se alza como un objeto de estudio atractivo en esta materia dada la radicalidad de sus trayectorias de activación y desactivación social.

En la historia política reciente del país se observa una fase de fuerte irrupción ciudadana en la esfera pública entre los años 1964-1973 cuando la sociedad chilena llegó a ser señalada como una de las más politizadas de Latinoamérica, siendo definido incluso el período del gobierno de la Unidad Popular como una fase de hipermovilización civil. En contraste, la acometida del golpe y dictadura militar desencadenaría un proceso de despolitización y desarticulación ciudadana explícito y forzado por los aparatos de represión de los servicios de inteligencia, que se materializaría con éxito especialmente durante la etapa más temprana del régimen (1973-1982). A partir del año 1983, sin embargo, se inicia un nuevo episodio de agitación social bajo la forma de *protestas nacionales* que logran desestabilizar el sistema dictatorial. Antecedido por la crisis económica de 1982, durante tres años y medio se produce una movilización reiterada de la sociedad civil en oposición directa al régimen militar. Esta movilización fue liderada, primeramente por el núcleo más poderoso del sindicalismo nacional (las empresas estatales) y sustentada luego por amplias masas urbanas de pobladores, estudiantes e, intermitentemente, por los sectores medios. De la Maza (2010a: 85) señala que la protesta “fue organizada a través de una red de grupos contruidos pacientemente durante diez años por activistas políticos, defensores de los derechos humanos, agentes pastorales de las iglesias y mujeres incorporadas a la lucha de la subsistencia, [que] en la práctica movilizó masivamente también a los ‘no organizados’”.

Esta idea contiene los supuestos de la hipótesis presentada anteriormente, esto es, los períodos de aparente desactivación política forman parte de un ciclo o trayectoria más amplia de actividad social, caracterizada por movimientos subterráneos e invisibles de (re)estructuración, (re)construcción identitaria y acomodamiento social. Abordado desde esta perspectiva analítica, el período posterior a la dictadura militar se ofrece también como espacio inexplorado y fértil para el estudio de las dinámicas de la sociedad civil.

Finalmente, la desactivación política en la era democrática normalmente ha recibido un tratamiento desde el estudio de las élites del país y la forma en que sus lineamientos y directrices políticas moldearon un escenario de despolitización. En este trabajo, en cambio, se plantea un enfoque de la desmovilización centrado en la sociedad civil, con la atención puesta en los procesos inherentes y exclusivos al llamado tercer sector. Con ello, no se pretende negar que las dinámicas y los modos de organización ciudadana sean influidos o moldeados por las acciones de las elites y el quehacer del Estado, sino más bien se busca enfatizar en la manera en que esta triada de factores actuaron y fueron experimentados por la base social. Asimismo, se intenta develar hasta qué punto existe un desarrollo ciudadano autónomo e independiente del

Estado o más aún, en qué medida este proceso deviene de la construcción o diseño estatal. Este análisis podría explicar, en parte, el fracaso de las políticas gubernamentales de fortalecimiento ciudadano, dado que la autonomía y autodeterminación de la organización social impediría que ésta fuese creada artificialmente o por decretos de políticas de Estado. La articulación social surgiría más bien de manera independiente con insumos tales como la construcción identitaria y la memoria colectiva, transformándola en un factor sociocultural de difícil producción o reproducción en el corto plazo (Putnam *et al.*, 1994).

Algunas precisiones sobre el estudio

Pese a la diversidad y complejidad interna que posee la sociedad civil y a riesgo de asumir una postura reduccionista o simplista, este trabajo realiza un análisis de las organizaciones y movimientos sociales que fueron protagonistas de los ciclos de movilizaciones en los años ochenta y durante el 2011, considerando al tercer sector en términos generales. Lo anterior no implica que no se haya contemplado ni tomado en cuenta la complejidad de las categorías sociedad civil y movimientos sociales antes de emprender el análisis sobre su desmovilización y concretar con ello el principal propósito de este trabajo.

Así, será necesario primeramente detenerse un instante sobre el concepto de sociedad civil como la categoría analítica utilizada en gran parte de la literatura científica de finales de siglo XX, tanto en Chile como en el resto del mundo, y realizar algunas precisiones. La detención en este punto recoge e intenta hacerse cargo de la crítica de la que ha sido objeto la semántica de la sociedad civil que sugiere que la utilización de este concepto, apolítico - al menos en su uso moderno - y relativamente ambiguo y abstracto, ha auxiliado los procesos de desideologización y despolitización contemporánea así como ha contribuido a potenciar el predominio de las corrientes técnico-gerenciales en el contexto del neoliberalismo (Hevia, 2006). Estas críticas plantean que la sociedad civil en su resignificación neoliberal permite una homogeneización y simplificación de la diversidad interna de la sociedad al invisibilizar clases sociales y tendencias políticas (Meschkat, 2003), favoreciendo la desaparición del conflicto social y facilitando, por ende, un diagnóstico de despolitización ciudadana.

Sin embargo y aun cuando una parte de la crítica al concepto de sociedad civil se centra en su funcionalidad a los requerimientos intelectuales del neoliberalismo actual, el resurgimiento del término tiene su origen en las corrientes de pensamiento de las izquierdas de Europa oriental y Latinoamérica a mediados de la década de los ochenta. En ese contexto, la categoría ofreció una nueva racionalidad para una oposición más

compleja, diversa, multifacética e inclusiva de la ciudadanía contra los gobiernos autoritarios y militares *vis-à-vis* una cada vez más reducida y limitada lucha de los sectores populares - o más aún del proletariado - contra el capitalismo (Pearce 1997; Cohen y Arato 1994). El concepto de sociedad civil planteado de esta forma, pretendía ser una especie de renovación o limpieza de los conceptos y categorías planteadas por las ideologías marxistas. De manera más reciente, el término resurge complementando la lógica anti-Estado del neoliberalismo occidental y de las corrientes de pensamiento de derecha, generando una distancia o provocando una oposición entre la sociedad civil y la sociedad política (Stepan y Linz, 1996). Tal como lo señalan Edwards y Foley (1998: 10) “especialmente entre los defensores de la sociedad civil en oposición al Estado, ésta es a menudo explícitamente antipolítica y, dependiendo de si la perspectiva es de izquierda o de derecha, es selectiva en cuanto a los grupos que pueden ser etiquetados apropiadamente bajo esta denominación”.⁵

Por otra parte, los críticos dirán que esta ambigüedad vuelve a la sociedad civil un concepto altamente impreciso pues, dependiendo de si es utilizada por sus defensores, ésta puede ser agente de emancipación, vehículo de transformación, actor fundamental para la consolidación de la democracia o, al contrario, funcional al sistema neoliberal e instrumental para el fortalecimiento de dicho modelo económico, reproductor de las desigualdades sociales e incluso de prácticas antidemocráticas (Armony, 2004) si es usada por aquellos con posturas más críticas.

La exposición de estos argumentos es necesaria pues, siendo el móvil de este estudio el análisis del fenómeno de la desmovilización de la sociedad civil en Chile, es importante estar al tanto del componente ideológico y la utilización que se le ha dado a este concepto en la producción de conocimiento científico. Asimismo, este trabajo reconoce las posturas diversas e incluso antagónicas en el debate sobre la importancia de potenciar y fortalecer al tercer sector. Este estudio considerará la arena civil más bien como “un campo de batalla en que se juegan distintos actores colectivos con sus intereses, la mayor de las veces contrapuestos, y procesos que permiten avanzar o retroceder respecto de la profundización democrática” (Vidal, 2008: 60), asumiendo con ello una postura que se distancia tanto de aquellos que asocian este espacio con la reproducción de los intereses hegemónicos del capital como de aquellas apologías de la sociedad civil que tienden a una sobrevaloración de su rol en el proceso de democratización. Se profundiza sobre esta discusión en el primer capítulo del libro.

Igualmente, el análisis que se presenta a continuación sólo podrá ser realizado una vez que no sólo el factor ideológico de la sociedad civil sea atendido sino también en cuanto su heterogeneidad interna sea considerada. Lo anterior, porque el dictamen de

⁵ Esta y otras traducciones en esta tesis han sido realizadas por la autora.

una sociedad civil desmovilizada, desarticulada e invisibilizada durante el período postautoritario en Chile, es válido sólo para ciertos grupos del llamado tercer sector, puesto que otros aumentaron su presencia y se ‘activaron’ durante este mismo período. Como señala Pearce (1997: 59), el impacto de las inequidades y asimetrías ocasionadas por el modelo neoliberal se traducen en el fortalecimiento de algunas asociaciones, como por ejemplo los grupos de empresarios, mientras otros se ven diezmados, como es el caso de los sindicatos y gran parte de las organizaciones sociales que se analizan en este trabajo. Asimismo, Díaz (1995) arguye que generalmente se asocia el autoritarismo y las políticas neoliberales con consecuencias tales como el aplastamiento o desarticulación de las sociedades civiles y que, siendo esto cierto para el caso chileno especialmente durante el período 1973-1981, esto aplica sólo para el mundo de las organizaciones sociales ya que, en paralelo, se reconstruyó y se potenció la arena de los negocios, del empresariado, o lo que el autor hegelianamente llama la sociedad civil burguesa. En otras palabras, el retorno democrático hereda del régimen de Pinochet la desestructuración de algunos sectores y la desintegración de ciertas identidades asociadas a clases y organizaciones más tradicionales,⁶ mientras que se estructuraron nuevos espacios y categorías sociales especialmente en los cambios en el mundo laboral y la emergencia de nuevas clases trabajadoras. Esto se tradujo en nuevos procesos de construcción de identidad colectiva que, de manera silenciosa y subterránea, se desplegaron a partir de la década del noventa.

Asimismo, las formas de asociación y organización social, la generación de capital social y procesos de politización que se desarrollan con la llegada de la democracia son diferentes si se trata de hombres, mujeres o jóvenes. De acuerdo con Garcés y Valdés (1999), los patrones de asociación y las formas de participación e involucramiento en la esfera pública observadas con el retorno de la democracia, son diversas y se movieron en un rango amplio desde aquellas formas más tecnocráticas promovidas por el Estado, especialmente en el caso de organizaciones funcionales a programas y políticas públicas basados en fondos concursables, hasta nuevas formas de participación asociadas a la emergencia de una nueva cultura juvenil.

Por otra parte, la tarea de entender las razones por las que el retorno a la democracia y su apertura de canales de participación ciudadana derivó en una retracción ciudadana e incluso en apatía social, no sería posible tampoco preciso considerando a la era concertacionista como un bloque temporal homogéneo.

⁶ Díaz se refiere a los empleados públicos y el empleo industrial no asociado al procesamiento de recursos naturales y todas las formas de trabajo que comenzaron a ser reemplazadas especialmente por empleo primario y terciario moderno.

Ciertamente, los 20 años de los gobiernos de la Concertación son un período complejo, dinámico y con coyunturas políticas y sociales variables. Sin embargo, sería posible afirmar que un punto de inflexión en términos de la trayectoria de desmovilización social es el año 1998, especialmente en relación con los factores o hipótesis propuestas en este trabajo.

Para Tironi (2003), en el período comprendido entre 1992 y 1997 el progreso chileno se transformó en euforia. Esto, ya que mientras el país crecía a tasas del 8%, la inflación se contrajo del 27,3% en 1990 al 4,7% en 1997, las cuentas fiscales adquirieron solidez, el desempleo se situó en torno al 6% y el ingreso *per capita* se duplicó desde 2.625 dólares en 1990 a 4.956 dólares en 1997. En paralelo, la pobreza se reducía de un 38,6% recién estrenada la democracia a un 21,7% en 1998. Las expectativas de la población y el consumo aumentaron a la vez que el progreso económico se complementó con una estabilidad política materializada en las elecciones presidenciales de 1989 y 1993 que el bloque concertacionista gana por amplios márgenes. La gobernabilidad de la nueva democracia chilena se afianzaba mientras el modelo socio-económico implantado bajo el régimen autoritario lograba legitimidad social.

En 1997 se iniciaría una etapa diferente. El crecimiento de la economía se contrae casi a la mitad (de 6,7% a 3,2% en 1998), la tasa de desempleo se expande desde 6,4% en 1997 a 11,1% en 1999, congelándose además el incremento en los ingresos. Con ello, la euforia del período precedente se transforma en un desconcierto que se traduce en un cambio en las tendencias de sufragio. En la elección parlamentaria de 1997, la inclinación por la Concertación se muestra por primera vez contractiva mientras, dos años más tarde, Ricardo Lagos triunfará sobre el candidato de oposición por sólo una estrecha diferencia. Asimismo, la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 reabre espacios para la polarización, la reaparición del tema de los derechos humanos y la visibilización de los resabios del régimen autoritario en la era democrática (Alcántara y Ruiz-Rodríguez, 2006). Con el arresto del General Pinochet se desplegaron las primeras manifestaciones sociales y protestas de mayor masividad de la década del noventa iniciándose, junto a la crisis asiática y el fortalecimiento electoral de la derecha, un nuevo ciclo en relación con las motivaciones, las formas de organización y de acción colectiva de la sociedad civil.

Metodología

Partiendo con un procedimiento hipotético-deductivo, esto es, una idea a investigar es transformada en preguntas relevantes y luego en hipótesis y variables de investigación, en un ejercicio que antecede y determina las observaciones. De continuar con este

esquema analítico, los pasos a seguir incluirían medir los conceptos contenidos en las variables para transformarlos en datos numéricos o cuantificables, analizar los datos posteriormente con técnicas estadísticas y establecer conclusiones respecto a la hipótesis. En esta última etapa, sin embargo, antes de medir o intentar comprobar cuantitativamente la relación entre las variables incluidas en las hipótesis, este estudio incorpora un esquema mayormente cualitativo con el fin profundizar, analizar, describir e interpretar las hipótesis desde la perspectiva de los actores relevantes para la sociedad civil y sus movimientos sociales. De esta forma, la fase analítica de este trabajo asume un enfoque cualitativo, donde la recolección de datos está mediada y fuertemente influida por las experiencias, descripciones y prioridades de los participantes en la investigación (Bhattacharjee, 2012; Olabuénaga, 2012; Sampieri *et al.*, 2003).

Con ello, las tres grandes variables que sirven de guía para este análisis, son observadas y analizadas en la realidad utilizando principalmente técnicas cualitativas, complementadas con análisis estadístico. De forma específica, la información empírica fue relevada por medio de entrevistas en profundidad a dirigentes sociales de movimientos y organizaciones sociales de los años 1990-2010,⁷ conversaciones con expertos y el análisis de datos secundarios de indicadores y encuestas de opinión. En este sentido, el estudio alterna y complementa ambas metodologías, derivando en un modelo multimodal o de convergencia y fusión entre los enfoques cuantitativo y cualitativo (Sampieri *et al.*, 2003). Se trata de un esquema metodológico de dos etapas, en que se aplica primero un diseño deductivo para proceder con una etapa de análisis cualitativo. Con esta decisión metodológica, se buscó añadir profundidad así como abordar el fenómeno de estudio de una manera pragmática y apropiada para la pregunta de investigación.

Lo anterior, pues la dificultad o imposibilidad de medir y evaluar empíricamente o en términos cuantitativos el impacto de las tres variables sobre la desmovilización es evidente. En primer lugar y tal como se verá más adelante, los movimientos sociales son un objeto de estudio difícil de abordar dada su complejidad y heterogeneidad interna, con integrantes que poseen motivaciones diversas, e incluso contradictorias, respecto a su participación movilizaciones o protestas.⁸ El examen de la visión y

⁷ Se realizaron 30 entrevistas en total en las ciudades de Santiago, Calama y Aysén.

⁸ Grandes avances en este sentido es lo que está realizando el proyecto colaborativo 'Caught in the Act of Protest' en que expertos en movimientos sociales de ocho países europeos (Bélgica, República Checa, Italia, España, Suecia, Suiza, Holanda y Reino Unido) liderados por Bert Klandermans de la Universidad de Amsterdam. El proyecto busca conocer las dinámicas de protestas y las identidades tras los protestantes - ¿quiénes participan, por qué razones, cómo son movilizados los participantes de la protesta y cómo influyen los contextos nacionales en las dinámicas de protesta - a través de encuestas y herramientas estandarizadas que permitan representatividad, y con ello una generalización y comparación

discurso de sus líderes es ciertamente una manera de abordar su estudio, pero asumir que tal perspectiva es unívoca o, más aún, representativa de las motivaciones de los participantes de un movimiento sería ciertamente impreciso. Asimismo, la pretensión de un análisis a la sociedad civil en su conjunto implicaría abordarla únicamente desde una dimensión, esto es, como opinión pública, aplicando encuestas con una muestra representativa de los chilenos en general. Esa opción metodológica tampoco resulta adecuada para la pregunta que guía esta investigación, dado que no se trata de la sociedad civil en su totalidad la que se involucra o bien se resta de las movilizaciones cuando éstas tienen lugar.

En cualquier caso, escapa de los objetivos de este estudio el probar una relación de causalidad entre el trío de factores y la (des)movilización de la sociedad civil, sino más bien realizar un análisis profundo sobre las repercusiones de la evolución de la memoria traumática, de las perspectivas y definición de gobernabilidad así como de las lógicas y cultura neoliberal sobre el quehacer de los movimientos sociales y la sociedad civil en los últimas décadas en Chile. Con ello, la intención es comprender un fenómeno social complejo sin enfatizar en la medición de las variables involucradas, sino en su entendimiento. Tampoco se persigue generalizar los resultados o extraer conclusiones de una muestra representativa, sino explorar y describir el fenómeno de la desmovilización e intentar desde ahí generar una perspectiva teórica.

Estructura

El libro está estructurado de forma de poder dar respuesta y un tratamiento exhaustivo al problema de investigación que le atañe. El conjunto de ideas que sirven de guía para este trabajo es expuesto y desarrollado en el primer capítulo, donde se presentan en detalle las teorías sobre el fenómeno de la activación y desactivación de la sociedad civil. Se retratan las principales características y elementos constitutivos de la acción social, enarbolando con ello una batería de herramientas analíticas que serán utilizadas más adelante para el caso de la desmovilización social en el Chile post-dictatorial. Asimismo, se presentan las principales trayectorias de (des)movilización de la sociedad civil en América Latina, enmarcando así el caso chileno en un contexto más amplio. Específicamente, se sintetiza la influencia sobre el quehacer de la sociedad civil latinoamericana de las tres variables que se plantean como los grandes agentes desmovilizadores de la sociedad civil chilena durante la redemocratización. Al finalizar el capítulo, el problema de la desmovilización social al retorno democrático

de los resultados. Ver <http://www.protestsurvey.eu/index.php?page=index>. La autora participó del workshop 'En el acto mismo de protesta: Una metodología para estudiar los perfiles, motivos y características de los manifestantes' realizado el día 16 de noviembre de 2015 en Santiago de Chile, a cargo de Cristiana Olcese, una de las responsables del proyecto en Inglaterra.

en Chile es examinado en extenso para luego presentar, de manera general, los factores que han sido planteados para dar explicación a la desactivación social del período.

El segundo capítulo, de naturaleza esencialmente descriptiva, intenta una contextualización histórica, presentando para ello las principales trayectorias de movilización y desmovilización de la sociedad civil chilena durante el siglo XX. Desde la constelación histórica 1920-1938, pasando por el Estado de Compromiso y el gobierno de la Unidad Popular, se exponen las características de un ciclo político marcado por un intento de democratización del poder y un correlato de efervescencia social expansiva y desborde ciudadano. Se analizan luego las nítidas fases de desmovilización y movilización desplegadas durante el régimen dictatorial, definidas por la represión y el autoritarismo. Del relato que compone este capítulo, es posible deducir que los períodos de (des)activación social han sido influenciados por factores internos a los movimientos sociales, tales como la acción de agentes movilizadores o la constitución de una identidad social y memoria colectiva, que unen y articulan las demandas. De igual forma, se trata de trayectorias definidas por variables externas, como los desafíos y necesidades políticas del Estado o las fluctuaciones del mercado y la economía, y que tienen como respuesta la movilización o bien el repliegue de la sociedad civil.

En los capítulos centrales del libro, el tema de la desmovilización se examina en profundidad en función de las tres grandes hipótesis, del trabajo empírico y de los datos cuantitativos y cualitativos recolectados. El vínculo entre la memoria post-traumática y la desmovilización social es el tema que da forma al tercer capítulo, sugiriendo que luego de la exposición directa o indirecta durante décadas a diferentes situaciones de violencia, conflicto y recursos de dominación social, se produce en Chile un trauma colectivo. A través de diferentes hechos y actuando en diversos niveles, se intenta demostrar que el impacto de este trauma fue multidimensional y se tradujo, luego de cesado el régimen, en un clima de silencio, olvido, negación, desarticulación social y retracción ciudadana, todos ingredientes necesarios para la fase de subsidencia o desmovilización de la sociedad civil post-dictadura. Se expone primeramente el escenario socio-político del Chile de las últimas décadas desde una descripción de los principales elementos constitutivos de la experiencia traumática y la forma en que éstos van determinando un clima de silencio y repliegue ciudadano hacia la esfera privada, relevando con ello las primeras pistas para entender la desmovilización del período 1990-2010. A continuación, se analiza lo ocurrido con la sociedad civil y sus movimientos sociales a partir de 1990 como consecuencia del post-trauma colectivo. En específico, se detalla la forma en que la desactivación social

o movilización latente sería resultado del impacto del trauma instalado en la sociedad chilena, tanto por los mecanismos de supervivencia y reacción al trauma colectivo, por la influencia de la desconfianza, desarticulación y deslegitimación de la organización social, como por la transmisión social, re-traumatización o cronificación del trauma.

En el cuarto capítulo del libro se examina la influencia del quehacer del Estado y el de los partidos políticos de la coalición de gobierno sobre dicha desmovilización, cobrando mayor importancia la variable política, los factores externos a los movimientos sociales y el rol de los agentes movilizadores como elementos desactivadores. En esta sección se presentan algunas precisiones teóricas, el origen y características del paradigma de gobernabilidad para el caso chileno y las implicancias de dicha visión sobre la relación del Estado y sus partidos políticos con la sociedad civil. Se desarrollan las principales lecciones del aprendizaje político de las elites respecto a la definición y la práctica de la democracia, para luego presentar las lecciones y conclusiones específicas sobre la sociedad civil y sus movimientos sociales. Se propone que este ejercicio reflexivo se tradujo en un quiebre y distanciamiento entre el Estado y los partidos político con la sociedad civil. Asimismo, se analiza la influencia de las estrategias de gobernabilidad puestas en práctica por los gobiernos de la Concertación sobre la desmovilización observada en el período. De forma concreta, se propone que esta desactivación estuvo influida por las características de la transición y el rol preponderante de las elites, por el control ejercido por el Gobierno y los partidos políticos sobre las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, así como por el conjunto de políticas públicas centradas en el tercer sector.

La tercera hipótesis del problema de investigación es desarrollada en extenso en el quinto capítulo del libro. En 1973 comienza un ambicioso proyecto para reestructurar y redefinir a la sociedad chilena mediante mecanismos de despolitización de la vida social, como el fortalecimiento del rol regulatorio de los mercados, la reducción de la intervención estatal, el ascenso tecnocrático, el reforzamiento del individualismo y la erradicación de los fundamentos institucionales que facilitaban la formación de sujetos colectivos. Dado este escenario, en el quinto capítulo se examina en profundidad las consecuencias de la llamada revolución capitalista y sus implicaciones en el plano ideológico y cultural, que facilitan una desmovilización y despolitización de la sociedad chilena por medio de diferentes mecanismos. Primeramente, una desestructuración identitaria y de los marcos normativos tradicionales de la mano de un nuevo y acelerado proceso de estratificación, acompañado de una enérgica movilidad social ascendente. Asimismo, el acceso al crédito, la transversalización del consumo y un vigoroso crecimiento económico propiciaron un clima de fascinación y euforia frente al mercado, mientras los espacios de debate y deliberación política tradicionales

perdían relevancia e interés para la ciudadanía. Finalmente, la celeridad del crecimiento económico y el acceso generalizado a la educación y al consumo permitió la emergencia de nuevas cosmovisiones como la meritocracia y el emprendimiento, ambas formuladas en clave individual.

Estas tres hipótesis explicativas del cuadro general de desmovilización de la sociedad civil, representan al mismo tiempo grandes transformaciones sociales de profundo impacto sobre las identidades colectivas. El examen de la relación entre las tres variables y la desmovilización sirve asimismo de excusa para emprender un análisis sociológico sobre el proceso socio-político chileno de las últimas décadas. De acuerdo a lo planteado, el trauma colectivo generado previo a 1990, el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica por la Concertación y una acelerada modernización neoliberal, viabilizaron un estado generalizado de silencio, olvido, apatía y desarticulación que, en el marco de este trabajo, son entendidos como factores constitutivos para la desmovilización o la invisibilización de la sociedad civil durante la redemocratización. Se ausculta así en estos capítulos en las dinámicas de movilización de la sociedad civil desde el impacto de factores psicológicos, políticos y económicos.

Sin embargo y a medida que la transición avanzaba, dichos factores y su influencia sobre la sociedad civil comienzan a evolucionar, a transformarse y a originar nuevos discursos e identidades colectivas con implicancias para el quehacer de los movimientos sociales. El año 2011, se produce la emergencia de un nuevo ciclo político inaugurado por las movilizaciones de mayor escala e impacto observadas en las últimas décadas. En el sexto y último capítulo, se analiza la manera en que los factores que indujeron la desmovilización a principios de los noventa, comienzan pronto a evolucionar para influir y posibilitar una lenta (re)generación de identidades e ideas-fuerza para la acción colectiva del ciclo de protestas de 2011. Siguiendo la lógica y estructura del libro,⁹ en la primera sección de este capítulo se expone la forma en que la memoria colectiva evoluciona, origina nuevas interpretaciones sobre el pasado, se empieza a producir el cierre del ciclo de amnesia transicional con consecuentes implicancias para el quehacer de los movimientos sociales. A continuación, se examina la relación entre las estrategias de gobernabilidad y la (des) movilización de la sociedad

⁹ Es importante aclarar que el análisis de las movilizaciones 2011 podría haberse abordado utilizando otros factores como posibles explicaciones. Sin embargo y respetando los objetivos de investigación y sus hipótesis, se optó por continuar el análisis en base a la triada de factores explicativos de la desmovilización, en una decisión metodológica, analítica y pragmática. No se pretende reducir, simplificar y forzar la realidad social argumentando que los mismos factores que sirven para desmovilizar a la sociedad chilena luego son capaces de movilizarla, lo que se busca más bien es hacer un análisis coherente, en que el problema del trauma, de la gobernabilidad y del neoliberalismo sufren cambios y transformaciones que tienen repercusiones sobre los actores, las instituciones y los contextos socio-políticos.

civil, analizando las repercusiones de la evolución de la definición de gobernabilidad y las consecuencias de los cambios en el contexto socio-político sobre la acción de los movimientos sociales en Chile. Finalmente, el capítulo se enfoca en el modelo económico neoliberal, el problema de la desigualdad y la concentración de poder junto a expectativas sociales y estándares más altos como elementos propulsores para la emergencia de un nuevo conjunto de valores sociales y, con ello, nuevas demandas para la movilización social.

Capítulo 1

El fenómeno de la (des)movilización de la sociedad civil

Siendo el propósito de este estudio el retomar y ampliar el debate respecto a los procesos de activación y especialmente de desactivación o desmovilización de la sociedad civil chilena, se vuelve relevante revisar los conceptos y la manera en que el problema ha sido abordado por estudios previos, por una parte, y asimismo situar el caso chileno en términos temporales y problemáticos dentro de un contexto regional más amplio.

Si bien existe consenso en la literatura científica respecto a que el período de la reconstrucción democrática chilena llevado a cabo por los cuatro gobiernos de la Concertación (1990-2010) fue una fase de especial desactivación o desmovilización social, hablar de este último fenómeno implica un desafío de clasificación y sistematización conceptual. La complejidad se encuentra principalmente en que el fenómeno de la activación o movilización ciudadana ha recibido múltiples tratamientos dependiendo de los conceptos que se empleen, las escuelas que lo analicen y muchas veces los propósitos que los debates teóricos y políticos arrastran. Las fases de desmovilización, en cambio y tal como se verá más adelante, no han recibido la misma atención por parte de la ciencia social.

En términos generales, es posible afirmar que el estudio tanto de los momentos de retracción o repliegue ciudadano así como de su mayor presencia, relevancia o incidencia en la esfera pública han sido abordados preferentemente desde el estudio de las movilizaciones y movimientos sociales, por una parte, y desde el fenómeno de la participación social, popular y sociedad civil, por otra. En la primera sección de este capítulo se presentan en detalle las teorías sobre el fenómeno de la activación y desactivación de la sociedad civil. Asimismo, se retratan las principales características y elementos constitutivos de la acción social, enarbolando con ello una batería de herramientas analíticas que serán utilizadas más adelante para el caso de la desmovilización social en el Chile post-dictatorial. En la segunda sección, se presentan las principales trayectorias de (des) movilización de la sociedad civil en América Latina, enmarcando con ello el caso chileno dentro de un contexto más amplio. Específicamente, se sintetiza la influencia sobre el quehacer de la sociedad civil latinoamericana de tres variables relevantes para la construcción de un nuevo sistema social luego de los autoritarismos en el continente y que, al mismo tiempo, se plantean como los grandes agentes desmovilizadores de la sociedad civil chilena durante la redemocratización, esto es: (i) la influencia del trauma colectivo derivado de un pasado dictatorial y de alta conflictividad social, (ii) el paradigma de gobernabilidad puesto en

práctica por los gobiernos encargados de las reconstrucciones democráticas de la región y, finalmente (iii) el impacto de la modernización neoliberal. En la tercera y última sección, el problema de la desmovilización social en el Chile post-dictatorial es examinado en extenso para luego presentar, de manera general, la forma en que los mencionados tres factores han sido planteados para dar explicación a la desactivación social del período.

1.1 El debate sobre la activación y desactivación de la sociedad civil: abordajes teóricos

1.1.1 (Des) movilización de la sociedad civil: hacia una definición

Al enfrentar la literatura sobre movilizaciones, movimientos sociales, sociedad civil y, en general, toda la amplia gama de acciones colectivas, parece ser cierto que la diversidad no sólo teórica sino especialmente fenomenológica en el terreno empírico desafía el intento de análisis, clasificación y sistematización. Al respecto, Giménez (1994) advierte que el estudio de la acción colectiva es complejo dado que aun cuando en apariencia se muestra como un fenómeno homogéneo, en realidad es heterogéneo y multiforme, con múltiples objetivos y diversos sentidos que pueden no ser claros o incluso contradictorios para los propios individuos involucrados en la acción. Sin embargo, y pese al desafío de la ambigüedad y la polisemia de los conceptos, al explorar la diversidad teórica de la literatura sobre movimientos sociales y sociedad civil, ciertos elementos comienzan a ser comunes y relevantes a las distintas formas de acción colectiva así como a las diferentes escuelas de pensamiento devotas a estos fenómenos. La sistematización de dichos elementos permite traspasar épocas y realidades nacionales determinadas y avanzar en el intento por analizar la acción social específica al caso chileno.

Movilización, movimientos sociales y sociedad civil en contexto

El fenómeno de la activación social ha sido un tema recurrente y relevante para diferentes disciplinas de la ciencia social siendo abordado tanto desde las teorías de movimientos sociales como de los estudios sobre la sociedad civil. Durante las décadas del sesenta y setenta, el quehacer científico se volcó especialmente al estudio del fenómeno de la movilización de masas. Durante esos años, las teorías de movimientos sociales mostraron una vigorosa producción tanto en Europa como en Estados Unidos que intentaba explicar la emergencia de la oleada de movilizaciones y

efervescencia social que tuvo lugar en aquel período (Foweraker, 1995).¹ Tal como lo señalan diversos autores (Cohen y Arato, 1992; Della Porta y Diani, 2006; Diani, 1992; Escobar y Alvarez, 1992; Foweraker, 1995; Freeman y Johnson, 1999; Garcés, 2004b; Ibarra, 2000; Melucci, 1989; Parra, 2005; Torres Carrillo, 2002), el materialismo histórico había sido hasta aquel entonces la herramienta analítica principal en la tradición europea y utilizada para la explicación de un rango de fenómenos tan diverso como las rebeliones de esclavos durante el Imperio Romano, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa.² En Norteamérica, por su parte, la tradición estructural-funcionalista preocupada de los mecanismos de integración social, identificaba a las movilizaciones como un tipo de conducta social anómica, situada fuera de los valores, normas e instituciones predominantes y, por ello, como un fenómeno disfuncional, potencialmente peligroso y capaz de desequilibrar el sistema social. Sin embargo, el amplio abanico de acciones colectivas desplegadas a partir de la década del cincuenta comenzó a evidenciar la insuficiencia tanto del modelo marxista como del modelo estructural-funcionalista para describir adecuadamente la emergencia de este nuevo tipo de movilizaciones.³

Así, los esfuerzos de los cientistas sociales del primer mundo se intensificaron durante estas décadas dando pie básicamente a dos grandes corrientes analíticas,⁴ con foco en la identidad y en la estrategia de los movimientos sociales respectivamente (Cohen, 1985). Tal como lo han advertido los autores referidos hasta este punto, desde Europa, y siguiendo con la tradición explicativa del modelo marxista, la teoría de los ‘nuevos movimientos sociales’ se consagró a indagar en las *causas* que empujan a los actores sociales a la movilización, mientras la tradición norteamericana, heredera del modelo estructural-funcionalista centró sus esfuerzos en explicar la *manera* en que

¹ Esto es, movimientos por los derechos civiles, movimientos de mujeres y protestas anti-guerra en Estados Unidos y el movimiento estudiantil, el movimiento anti-nuclear y los primeros movimientos ecologistas en Europa, entre otros.

² Con esta idea se ofrecía una perspectiva de análisis de la historia y de la sociedad con centro en la conflictividad social producida por las contradicciones de la estructura económica y material de las sociedades. Aunque los fundadores del materialismo histórico no desarrollaron una teoría de las movilizaciones como tal, su concepción teórica crítica de la economía, de la sociedad capitalista así como sus análisis históricos y políticos del movimiento obrero del siglo XIX proporcionaron perspectivas y claves interpretativas para el análisis de los movimientos sociales (Torres Carrillo, 2002).

³ Esto, pues ni los movimientos de estudiantes ni los **ambientalistas** encajaban dentro de las lógicas de acción y de organización de grupos tradicionales como el movimiento obrero, no respondían al tradicional conflicto de clases así como no soportaban el reduccionismo de las ‘masas irracionales’ planteadas por las escuelas americanas.

⁴ De estas, tres se desarrollaron en Estados Unidos: la teoría del comportamiento colectivo de Turner y Killian, un número de enfoques denominados teoría de movilización de recursos de Zald y McCarthy y la teoría del proceso político de Tilly, mientras la producción europea de autores como Touraine y Melucci generalmente se congregó bajo la etiqueta de la teoría de los nuevos movimientos sociales (Diani, 1992).

los movimientos sociales era desplegados.⁵ Por su parte, autores como Deutsch (1961) y Etzioni (1968) buscaron contribuir al estudio de la efervescencia social de la época proponiendo una definición y caracterización desde el concepto de movilización social.

Mientras para el primer mundo la década del sesenta representa un punto de inflexión para la ciencia social preocupada de la movilización social, en América Latina las preocupaciones de esta ciencia hasta entonces no se centraron en los movimientos sociales y no lo harían hasta entrada la década del ochenta. Las teorías endógenas sobre desarrollo de los años cincuenta y sesenta en la región se concentraron en los procesos de modernización, industrialización y aculturación con interés por entender el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna con los conflictos y asincronías de las estructuras sociales y políticas (Calderón, 1986a; Jelin, 2003). Asimismo, las teorías de la dependencia hicieron hincapié en los fenómenos del subdesarrollo, dependencia y marginalidad, capital subordinado y subimperialismo. Los movimientos sociales fueron vistos en este contexto como reflejos voluntaristas o como acciones determinadas por el orden económico, estatal o partidista y “no constituyeron ejes analíticos básicos de las sociedades latinoamericanas” (Calderón, 1986a: 330). Para Jelin (1990), las expresiones no-institucionalizadas de acción colectiva fueron consideradas formas embrionarias de participación popular que debían ser apropiadamente canalizadas a través de los partidos de vanguardia.

Al igual que lo hicieran sus pares del primer mundo en los años sesenta, en la década del ochenta los teóricos latinoamericanos comenzaron a cuestionar la explicativa que las teorías tradicionales ofrecían frente a las nuevas manifestaciones sociales que se distanciaban del tradicional movimiento obrero y campesino protagonista de las décadas anteriores (Garcés, 2012). Como señalan Escobar y Alvarez (1992), durante los años ochenta muchas formas de acción colectiva empezaron a ser etiquetadas transversalmente bajo el concepto de ‘nuevos movimientos sociales’⁶ dados los nuevos intereses populares y las nuevas formas de

⁵ Dada las diferencias entre ambas regiones, fue inevitable que ambas escuelas pusieran sus focos de análisis también en diferentes aspectos de los llamados ‘nuevos’ movimientos sociales. Un número importante de revisiones sobre los principales supuestos de cada una de estas corrientes han sido elaborados así como esfuerzos por sintetizar y vincular los enfoques de ambas escuelas con el fin de crear una herramienta analítica de mayor alcance para el estudio de los movimientos sociales. Una nueva revisión pormenorizada de estas teorías escapa del interés y objetivos de este trabajo, para ello ver Eyerman y Jamison (1991); McAdam *et al.* (1996); McAdam *et al.* (2001); Melucci (1989); Munk (1995); Scott (1990); Tarrow (2011).

⁶ Para Calderón y Jelin (1987), la salida a la tensión entre la teoría marxista y la funcionalista en sus versiones latinoamericanas se vio fuertemente influida y transformada por la presencia de los trabajos de Touraine primero en Chile y en el resto de la región después. Así, en América Latina la ciencia social comenzó a utilizar una metodología centrada en los actores y los procesos microsociales tras la movilización social (Esteve, 2010). El análisis se centró en los procesos identitarios y simbólicos, en la

hacer política contenidas en estas formas de orgánica social que cuestionaban los modelos autoritarios y jerárquicos partidistas hasta entonces observados. Esto implicó que en la segunda mitad de los ochenta:

las continuidades entre las prácticas antiguas y nuevas y los determinantes estructurales comenzaron a ser reconocidos como el paso hacia la reevaluación de la “novedad” de estos movimientos. Al mismo tiempo, se examinó más a fondo el uso de las teorías europeas y estudios empíricos se llevaron a cabo de manera más sistemática y evaluada. Aunque estos acontecimientos no resultaron en un “paradigma” claramente definido o en programa de investigación, estos estudios avanzaron y transformar significativamente el estado del arte, haciendo posible inaugurar una nueva ola de investigación y teorización de la década de 1990 (Escobar y Alvarez, 1992: 3).

A pesar de esta positiva y promisorio proyección hecha por los autores a principio de la década del noventa, ya a mediados del mismo decenio, Foweraker (1995) sostendría que, pese a la masividad de las movilizaciones ocurridas en América Latina - argumento extremado en las palabras de Eckstein quien califica a la región como un “museo viviente” para el estudio de los movimientos sociales (1989: 10) -, la producción teórica sobre este fenómeno en el continente fue limitada. Más aún, y pese a la multiplicidad de estudios realizados en la región, “el siglo XXI ha sorprendido pues, a la teoría latinoamericana [de movimientos sociales], sobre todo en su formulación general, en un notorio *status quo*” (Salazar, 2013: 432). Estas últimas visiones se refieren a que la ciencia social latinoamericana se ha centrado más bien ya sea en análisis de casos o bien de las estructuras sociales y políticas que condicionan la emergencia de un cierto tipo de movilización social más que en la producción de un cuerpo teórico especializado y endémico para el estudio de los movimientos sociales latinoamericanos.

De esta forma y de acuerdo a lo expuesto, hasta la década del ochenta el quehacer científico se centró en el estudio de las movilizaciones y movimientos sociales mientras que los conceptos de ciudadanía, sociedad civil o tercer sector no gozaron en

dimensión cultural como el conjunto de valores sociales y los códigos y narrativas que definen los criterios más generales de pertenencia a un movimiento social (Bobes, 2002). Asimismo, y siguiendo la línea de análisis de Touraine y luego de Melucci, los investigadores latinoamericanos se concentraron en explicar el porqué de la emergencia de los ‘nuevos’ movimientos sociales y con ello replicaron el ejercicio analítico sobre las estructuras políticas y sociales que, al mutar, desplegaban un proceso de lucha por el control de la dirección social de la historicidad (Berrío, 2006). De esta manera, en Latinoamérica predominó la escuela de pensamiento europea centrada en el paradigma de la identidad por sobre el análisis de las estrategias de los actores sociales presente en las escuelas norteamericanas (Escobar y Alvarez, 1992) así como se instaló el análisis de los cambios profundos en las grandes estructuras sociales como detonadores de los movimientos sociales que contienen.

ese contexto de mayor protagonismo. Con la llegada de la tercera ola democratizadora, en cambio, se produjo una individuación de la masa electoral y el ciudadano participativo y la sociedad civil comenzaron a ser alabados tanto en el campo político como académico. De acuerdo con Salazar (1998), la emergencia del quinto Kondratiev se caracterizó no sólo por la descentralización del Estado y la liberalización de los mercados sino también por la focalización de la ciencia. La supuesta ‘devolución de poder’ a la base ciudadana generada por la descentralización estatal se habría producido en paralelo al reemplazo de las macro-teorías de la ciencia social por focos teóricos más específicos y, con ello, el redescubrimiento de la noción de sociedad civil.⁷

Por una parte, el resurgimiento del concepto tiene su origen en las corrientes intelectuales de las izquierdas de Europa oriental y Latinoamérica a mediados de la década de los ochenta. En ese contexto, la categoría ofreció una nueva lógica para una lucha ciudadana más compleja, multifacética e inclusiva contra los gobiernos autoritarios y militares que abundaban para entonces en dichas regiones. Esto permitiría el reemplazo de las grandes disputas sociales que buscaban el derrumbe del modelo capitalista presenciadas en décadas anteriores por una lucha específica contra los regímenes totalitarios (Cohen y Arato, 1992). De esta manera, señala Pearce (1997: 64), la noción de sociedad civil resultó funcional a los requerimientos e intereses de la oposición a regímenes totalitarios en la medida que sustituyó rápidamente a los partidos políticos, a sindicatos tradicionales, a grupos armados, al movimiento obrero, etc. intentando por medio de esta “nueva izquierda”, más plural y diversa “vencer donde otros habían fallado” (Castañeda, 1994, citado en Pearce (1997)).⁸

Para las visiones más tecnócratas y neoliberales por otra parte, la emergencia del concepto de tercer sector resultó funcional para la descompresión del poder y deberes del Estado traspasando la responsabilidad de la generación de bienes y servicios otrora públicos a los municipios y, con ello, hacia los propios individuos. La sociedad civil

⁷ Esta noción ya había sido abordada en el pasado por Toqueville y Gramsci entre otros. En los siglos XVII y XVIII, los liberales fueron los que comenzaron a hablar de la separación del Estado y del mercado como un manera de neutralizar la influencia que tenía sobre este de los reyes, las noblezas y los señores feudales. La noción moderna de sociedad civil surge en paralelo al Estado Liberal en un esfuerzo por repensar las bases del orden social frente al absolutismo y como una forma de establecer una relación entre el estado y la ciudadanía que estuviera libre de los múltiples intermediarios del medioevo. Las nociones de conflicto de clases lo sustituyeron en el siglo XIX para reemerger con fuerza a partir de los años setenta en respuesta a los estados totalitarios en Polonia y en todo Europa del Este, en Europa occidental entre críticas a los Estados de Bienestar y en América Latina como respuesta a las dictaduras militares del momento (Edwards y Foley, 1998).

⁸ Para Procupez y Obarrio (2006), el descubrimiento de la sociedad civil como ámbito político se produjo en América Latina durante las dictaduras cuando las víctimas de la represión y la persecución política buscaron protección en asociaciones civiles, organizaciones religiosas y grupos de familiares al no poder hacerlo a través del Estado y las instituciones del sistema judicial.

sería con ello la encargada de generar su propia integración al desarrollo al mismo tiempo que se solucionaba el problema de la participación ciudadana deficitaria en los procesos de redemocratización global (Hevia, 2006; Salazar, 1998). Esta es la lógica tras la diversificación y masificación de políticas públicas especialmente en países en vías de desarrollo que, incorporando los mandatos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), se enfocaron en la participación y fortalecimiento ciudadano.

Si bien hay un consenso en entender a la sociedad civil como un espacio de asociaciones voluntarias que emergen diferenciándose de arenas como el mercado (interacciones económicas) y el Estado (regulación política) (Bobes, 2002), la manera en que se define a este actor, por una parte, y los objetivos que persigue (o debe perseguir) la participación social, por otra, estarían supeditados a modelos ideológicos y variarían, por tanto, dependiendo de quién haga uso de estos conceptos.⁹ Así, existiría una versión liberal en que la sociedad civil es responsable de ejercer acciones correctivas sobre las deficiencias del Estado a la vez que éste expande sus libertades, mientras que en una versión más socialdemócrata, este actor se encargaría de la lucha por la extensión de los derechos y por equilibrar la tendencia a la desigualdad generada por el mercado (Arditi, 2004; Garcés, 2004b; Lechner, 1994; Torres-Rivas, 1993). Se reconoce y se asume así que existen posturas diversas e incluso antagónicas en el debate sobre la definición del tercer sector. Siguiendo a Garcés, más allá de las definiciones y alcances del concepto de sociedad civil, desde el “punto de vista del trabajo social o la acción de los movimientos sociales, parece poco realista (o ingenuo) pensar la sociedad civil como un campo neutral” (2004b: 35).¹⁰ En este sentido y para el caso latinoamericano Hevia (2006) advierte que:

⁹ Por otra parte, los críticos dirán que esta ambigüedad vuelve a la sociedad civil un concepto altamente impreciso pues, dependiendo de si es utilizada por sus defensores, ésta puede ser agente de emancipación, vehículo de transformación, actor fundamental para la consolidación de la democracia o, al contrario, funcional al sistema neoliberal e instrumental para el fortalecimiento de dicho modelo económico, reproductor de las desigualdades sociales e incluso de prácticas antidemocráticas si es usada por aquellos con posturas más críticas, ver Armony (2004); Ducatenzeiler y Oxhorn (1994).

¹⁰ Bobes (2002) al respecto señala que la sociedad civil debe ser siempre considerada como una arena de conflictos pues junto a actores democráticos existen fuerzas antidemocráticas así como junto a la tolerancia y al pluralismo existe también la intolerancia y tendencias autoritarias. La autora ejemplifica lo anterior señalando que a junto a los grupos de defensa de los derechos humanos y los movimientos prodemocráticos existen los fundamentalistas y los racistas, todos formando parte también de la sociedad civil. Y así como se requiere una visión crítica respecto al uso del término sociedad civil, también se requiere dicha visión respecto al rol del investigador frente a los movimientos de la sociedad civil, como señala Slater (1994: 24): “the overly sanguine way in which the political potential of the new social movements was interpreted at the beginning of the 1980s was perhaps not entirely unrelated to the desire on the part of several researchers to be able to discern the seeds of radicalizing change. Conversely, the inclination of some observers to minimize the achievements of social movements or emphasize their failures, even though frequently salutary, may also not be entirely unrelated to implicit theoretical and political predispositions”.

Una primera insatisfacción es la insistente tendencia a tratar a la sociedad civil como un actor unificado, sin admitir su heterogeneidad intrínseca, lo cual es un vicio recurrente del análisis político latinoamericano. Una de las maneras de reconocer esa heterogeneidad, sino de exponerla de modo que contribuya al estudio más complejo de las distintas configuraciones del proceso de construcción democrática, es identificar los distintos proyectos en disputa alrededor de ese proceso. (...) se origina una concepción simplista del proceso de construcción democrática que tiene su base en una visión apologética de la sociedad civil. Considerada como polo de virtudes democratizantes, su participación y su poder de influencia frente al Estado y a los partidos constituirían el eje de la construcción democrática y concentrarían el peso explicativo de las características que este asume. El reconocimiento de distintos proyectos al interior mismo de la sociedad civil y su identificación cuidadosa puede apuntar a una visión mucho más compleja y realista de aquel proceso (2006: 17–18).

Así, y tal como se he presentado hasta este punto, desde mediados del siglo XX el debate sobre la participación y la activación social emergió y ha sido abordado tanto por las escuelas de movimientos sociales en un primer momento, como por los teóricos de la sociedad civil más tarde. Estos autores, ya sea desde el primer mundo o en América Latina, han dedicado e intensificado esfuerzos por entender las diferentes manifestaciones de la acción colectiva durante las últimas décadas. De esta forma, es posible reconocer que en términos generales existen dos dimensiones principales para el estudio y definición de las formas de acción colectiva. Por una parte, se observa una dimensión institucional o formal en la que el conjunto de organizaciones propiamente sociales (no económicas ni políticas) son incluidas (Bobes, 2002) y una dimensión que llamaremos no institucional o informal en la que las movilizaciones y los movimientos sociales son considerados. Y ya sea en su expresión formal o informal, la acción colectiva de la sociedad civil se mantiene como “aquel espacio del Estado donde grupos auto-organizados, movimientos e individuos, que son relativamente autónomos del gobierno, intentan articular valores, crear asociaciones y solidaridades, y avanzar sus intereses” (Linz y Stepan, 2011: 7). De forma más específica y en línea con los objetivos de esta investigación, sociedad civil puede ser entendida como “las formas de asociación autónomas del mercado y el Estado que tienen por objetivo reivindicar derechos, expresar opiniones, influir en las decisiones que afectan a la comunidad y controlar a sus autoridades” (PNUD, 2004: 218). Asimismo, y a partir de la revisión de los principales planteamientos respecto a movimientos sociales, movilización y sociedad civil, es posible identificar ciertos elementos centrales y transversales a la acción colectiva ya sea en su dimensión formal o informal, y tanto en

base a los planteamientos surgidos en el primer mundo o en América Latina, que son presentados a continuación.

Movilización, movimientos sociales y sociedad civil: elementos constitutivos

En primer término y retomando la discusión planteada con anterioridad, es posible afirmar que la sociedad civil y sus movimientos sociales constituyen un terreno en disputa por la apropiación de valores o recursos centrales para un sistema social en un momento dado. De acuerdo a la propuesta de Vidal (2008: 60), la arena civil se puede entender como “un campo de batalla en que se juegan distintos actores colectivos con sus intereses, la mayor de las veces contrapuestos, y procesos que permiten avanzar o retroceder respecto de la profundización democrática”. Asimismo, Garretón (1996) define a los movimientos sociales como un tipo de acción colectiva con alguna estabilidad en el tiempo y algún grado de organización, orientados algunas veces hacia el cambio u otras hacia la conservación de la sociedad o de alguna de sus esferas. Desde estas visiones, se reconoce la existencia de distintos proyectos al interior mismo de la sociedad civil.

Para Pearce (1997), la visión de la sociedad civil como un ‘campo de batalla’ reflejó, especialmente en la década de los ochenta, la influencia de Gramsci en la izquierda latinoamericana cuando los activistas de oposición empezaron a usar el término de manera intercambiable para ONGs y movimientos populares, considerando la sociedad civil como la arena en que la lucha por la hegemonía debía tener lugar.¹¹ Gracias a esta perspectiva, el concepto de ‘disputa cultural’ se hizo parte del repertorio de los movimientos de oposición en el mundo (Hodgkinson y Foley, 2009).

La noción de sociedad civil como un campo de batalla por la hegemonía, ideología o proyecto político central de un sistema social en un momento dado, es equiparable a la idea del control de ciertos recursos sociales (ya sea materiales o simbólicos) valorados y disponibles en un sistema social, planteado por los teóricos de los movimientos sociales. Para Touraine (2002: 90), los movimientos sociales responden a un conflicto entre actores organizados, no por la apropiación de recursos materiales, sino por “el uso social de los valores culturales compartidos” o el control del proceso histórico de transformación de esa sociedad.¹² Para este autor, aun cuando la

¹¹ Para Gramsci (1986), en el sentido común conviven de manera caótica, contradictoria y desordenada diversas concepciones del mundo e ideologías políticas. De todas ellas hay una que predomina, la políticamente hegemónica

¹² La teoría de los nuevos movimientos sociales se centra en el hecho que las movilizaciones emergidas en los años sesenta y setenta en Europa respondían a una nueva forma de acción colectiva que pasó de ser un conflicto por la distribución de los recursos de la era industrial, hacia una disputa por la construcción de la historicidad o proyecto societal en el terreno de los sistemas simbólicos derivada de un mayor acceso al consumo y a la educación (Foweraker, 1995: 11).

existencia de conflicto sobre estos valores no es razón suficiente para la aparición de un movimiento social, una vez que éste fenómeno emerge, el desarrollo de la acción conflictiva cambia tanto las orientaciones culturales como el campo de la historicidad definidas por la dominación social. Es por ello que Calderón (1986b: 335) se pregunta si las diferentes manifestaciones de los movimientos sociales en América Latina se relacionan con diferentes “graduaciones en los niveles de conciencia y de capacidad de lucha por la apropiación y/o la destinación de los recursos o valores sociales”. El control sobre la historicidad o el proyecto central de una sociedad dada, también fue abordado por Melucci (1989) quien, continuando el trabajo de Touraine, sostiene que los movimientos sociales son la expresión de la oposición entre al menos dos actores por la apropiación o el control de recursos centrales o que ambos valoran.

La matriz de valores o recursos centrales en una sociedad y la lucha por su control podrían definir así la emergencia y demandas de los movimientos sociales. Los cambios en la matriz de valores o recursos simbólicos en occidente han sido retratados tanto por Inglehart (2008) en sus análisis sobre la transformación de valores materiales a post-materiales, como por el mismo Touraine (1988) en su estudio sobre la transición de una sociedad industrial a una post-industrial.¹³ Germani (1981), en tanto, caracteriza la transformación de esta matriz en el paso de una sociedad con una estructura de valores tradicionales a una de valores modernos, así como las numerosas asincronías y superposición de estructuras que, sobre todo en el caso latinoamericano, aún persisten. Tomando justamente en consideración el caso latinoamericano, es que diversos autores (Calderón, 1986b; Cavarozzi, 1992a; Escobar y Alvarez, 1992; Garretón, 1996, 2002; Pearce, 1997; Salazar, 2013) han analizado la emergencia, desactivación o cambio en las características de los movimientos sociales desde un examen a las transformaciones en la matriz socio-política del continente, específicamente la forma en que el paso de la matriz clásica a una matriz moderna ha devenido en valores o recursos simbólicos diferentes, lo que ha impactado el quehacer de la sociedad civil. Este tema será retomado en detalle en la siguiente sección de este capítulo.

El fenómeno de la activación social entendido como la lucha por la apropiación de ciertos recursos sociales también ha sido abordado desde el estudio de la movilización social. Deutsch (1961) definió movilización como el proceso en que grupos extensos

¹³ Valores materialistas o industriales estaban relacionados con la seguridad y la estabilidad tanto económica como física mientras los valores post- materiales se relacionan con la necesidad de pertenencia, de autonomía y capacidad de expresión. Asimismo, Habermas planteó una creciente racionalidad del mundo moderno y una colonización de la sociedad civil por parte de las estructuras del Estado y el mercado (Habermas 1973, 1987 citado en Foweraker (1995) para retratar este cambio en la matriz de valores.

con visiones sociales, económicas y psicológicas son erosionados o quebrantados, resultando en que el sistema social al que pertenecen se abre y dispone a nuevos patrones de socialización y comportamiento. Desde esta perspectiva, la movilización social se plantea como un fenómeno positivo y necesario para la modernización en la medida que produce la transformación de valores sociales. Etzioni (1968) definirá movilización como un proceso en el cual un cierto grupo (*social unit*) dentro de un sistema social toma el control de forma acelerada sobre los recursos que antes no controlaba. Siguiendo lo propuesto por los teóricos de la sociedad civil y movimientos sociales, Etzioni arguye que dichos recursos pueden ser económicos, militares, políticos, psicológicos o mediáticos. Desde esta definición, se infiere que la movilización tiene lugar concretamente cuando una determinada *social unit* - en este caso los movimientos sociales, la ciudadanía o sociedad civil - toma el control de forma acelerada sobre recursos - por ejemplo la agenda política y/o mediática - que hasta entonces fueran controlados por otras unidades sociales como el Estado, la clase política o el mercado.

Sin embargo, y tal como lo advirtiera Melucci (1989), la acción colectiva llevada a cabo por los movimientos sociales no sólo implica la lucha por la apropiación y orientación de los valores sociales y de los recursos, sino que también incluye aspectos adicionales. El desarrollo de conflictos o las luchas en el seno de la sociedad civil también implica un mutuo reconocimiento de los actores como perteneciente a una única unidad social. Así, Melucci arguye que la acción colectiva se desarrolla sobre la base de un interés y unas expectativas comunes haciendo referencia al proceso de identificación. El concepto de identidad colectiva, como elemento explicativo para los movimientos sociales, fue central en las teorías europeas de movimientos sociales, es planteado por Touraine (1988), Pizzorno (1989)¹⁴ y redefinido por Melucci al analizarlo como un “proceso de construcción interactivo central para entender los valores, símbolos e ideologías inmersas en los movimientos sociales” (Bidaseca y Giarracca, 2012: 19). Para el autor,

¹⁴ Para Touraine, la noción de identidad es central pues forma parte de los tres principios constitutivos de movimientos social dentro de su teoría: identidad, que implica la definición de un discurso propio, oposición, que conlleva la identificación del adversario o antagonista y totalidad, esto es, plantear un proyecto alternativo de sociedad. Para Pizzorno, en tanto, la acción colectiva es en sí un proceso de identificación incluso señalando la importancia de los ‘identificadores’ o los miembros que dotan de identidad a una organización al mismo tiempo que refuerzan su propia identidad individual (Blanco, 1996). Respecto a la identidad colectiva, Castells (1999) ha sugerido tres tipos de identidades en medio de los actuales procesos de globalización: identidades legitimadoras (cuando son introducidas por las instituciones dominantes) identidades de resistencia (por sectores con posiciones devaluadas o estigmatizadas y que se oponen a las instituciones) e identidades proyecto (cuando los actores sociales recurren a su propia cultura y construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y que con ello buscan la transformación de toda la estructura social).

que un actor elabore expectativas y evalúe las posibilidades y límites de su acción implica una capacidad para definirse a sí mismo y a su ambiente. Este proceso de «construcción» de un sistema de acción lo llamo *identidad colectiva* (...) una definición que debe concebirse como un proceso, porque se construye y negocia a través de la activación repetida de las relaciones que unen a los individuos. (...) La identidad colectiva es, por tanto, un proceso, a través del cual los actores producen las estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y calcular los costes y beneficios de la acción; las definiciones que formulan son, por un lado, el resultado de las interacciones negociadas y de las relaciones de influencia y, por otro lado, el fruto del reconocimiento emocional. (...) La identidad colectiva así definida propone la exploración de una dimensión analítica clave en el caso del análisis sociológico de los fenómenos colectivos. La estabilidad o variabilidad, la concentración o difusión, la integración o fragmentación de tal dimensión variará considerablemente dependiendo del grado de estructuración del fenómeno colectivo (Melucci, 1994: 172-174).

Respecto a la manera en que el proceso de construcción identitaria es llevado a cabo por un grupo social, Calderón (1986b: 332) señala que éste se da tanto en términos de la “recreación de las experiencias del pasado presente en la memoria colectiva del sujeto - donde por lo general se redefinen de acuerdo al tipo de enfrentamiento vivido y a los mitos contruidos-, como en términos de las formas psicológicas de autoafirmación colectiva”. Asimismo, respecto al rol de la memoria colectiva en la construcción de identidad, Camacho y Menjívar (1989: 14) advierten que para el estudio de los movimientos sociales esta noción debe ser incorporada pues “la memoria colectiva [tiene un rol importante] en el desenvolvimiento de los movimientos populares, los cuales se fortalecen cuando se reconocen a sí mismos como herederos y continuadores de una tradición”.¹⁵

La centralidad del tema de la identidad - entendida como la ideología que define y mantiene la cohesión de un grupo - en el estudio de la acción colectiva no contempla

¹⁵ En el caso de América Latina, y dado que el análisis de los movimientos sociales en la región estuvo fuertemente influido por los trabajos de Touraine y Melucci (Garcés, 2012), el tema de la identidad de la acción colectiva se volvió de suma relevancia y los cambios o transformaciones de éstas fueron las explicaciones más utilizadas al hablar de los nuevos movimientos sociales del continente. Tal como se observa en el análisis de Alvarez *et al.* (1998), la diferencia entre los movimientos tradicionales y los nuevos movimientos sociales del continente está en la identidad. Para los autores, la identidad de los nuevos movimientos sociales se enmarca en nuevas formas de hacer política y generar nuevos espacios de sociabilidad, para estos la identidad (y la búsqueda de ella) es un elemento fundamental. Para Calderón *et al.* (1992), estos nuevos movimientos sociales latinoamericanos representan una pluralidad de demandas basadas en ‘identity-centered actions’.

únicamente a la memoria colectiva como ingrediente central, sino que también posee una determinada racionalidad como dispositivo colectivo a través del cual se evalúan los recursos, las estrategias, las alianzas a establecer, etc. por un determinado colectivo social. El tema de la racionalidad ha sido central para las escuelas norteamericanas y en especial para teoría de la movilización de recursos (Tilly, 1979) que se enfocó en el rol organizacional y estratégico (racional) presente en los movimientos sociales. Esta teoría estableció que los movimientos sociales expresaban conductas perfectamente racionales, con objetivos políticos y sociales muy precisos así como estrategias de movilización y adquisición de recursos (humanos, organizativos, materiales, tácticos) deliberadamente adecuados a esos objetivos.

Pese a la relevancia del elemento identitario, la memoria colectiva y la racionalidad involucrada en el desarrollo de las estrategias de acción colectiva, existen también otros elementos que han sido destacados en el estudio de la movilización social tales como el rol de los liderazgos o agentes movilizadores así como los repertorios de acción desplegados. Para Munk (1995: 25), el análisis sobre el liderazgo y sobre los fundadores de los movimientos sociales debe ser el punto de partida del estudio de los movimientos sociales pues, para este autor, los fundadores son “literalmente, el actor social que organiza a la masa descentralizada que constituye la base de un movimiento social y lo orienta hacia el cambio; en este papel, constituye su centro o núcleo”. Para este autor, aun sin enfatizar explícitamente en la noción de liderazgo, la escuela europea de movimientos sociales planteó indirectamente la relevancia del tema al proponer un enfoque con centralidad en los individuos, en el famoso “regreso del actor” de Touraine (1988). Asimismo, Alberoni (1989) advierte que los grandes movimientos se forman en base a la fusión de grupos más pequeños o unidades en el movimiento que cuentan cada uno con sus propio líderes. El líder de un gran movimiento es la persona que logra un cierto control y la unificación de esas pequeñas e innumerables unidades en el movimiento o también ser la persona cuyas acciones han puesto en marcha el proceso que dio origen a los mismos.

A pesar de lo planteado por los autores, aun cuando la figura del líder es claramente reconocible para el caso de las organizaciones formales de la sociedad civil, no siempre es así de evidente cuando se trata de la acción de movimientos sociales. Lo anterior se puede ejemplificar a través del caso de movimientos en América Latina donde los liderazgos no tienden a centrarse en una figura única o particular sino muchas veces en un conjunto de ‘agentes movilizadores’. En el caso de los movimientos sociales tradicionales, Calderón (1986b) advierte que éstos fueron prácticas subordinados a los partidos o a la acción del partido-vanguardia como el gran conductor, que interpretaba y sintetizaba los intereses de los movimientos. Se

trataba de una acción colectiva altamente dependiente del liderazgo de la “sociedad política” dadas las “formas estadocéntricas de organización, asentadas en el centralismo, la división entre dirigentes y dirigidos y la disposición piramidal de la estructura de los movimientos” (Zibechi, 2003: 185). Los llamados ‘nuevos’ movimientos sociales, en tanto, se formaron en base a un distanciamiento entre los movimientos sociales, partidos y Estado (Calderón y Jelin, 1987) y buscaban autonomía, tanto de los Estados como de los partidos políticos. Si bien la identificación de liderazgos en contextos donde los movimientos buscan mayor horizontalidad y autonomía resulta dificultosa, la relevancia y riqueza analítica de este ejercicio es indudable.

Otro elemento relevante para la acción colectiva que puede ser observado tanto en las formas de sociedad civil organizada como en los movimientos sociales es un determinado repertorio de acción colectiva. Esta noción, introducida por Tilly (1979: 131) postula que el rango de acciones colectivas que las personas emplean está “(1) bien definido y (2) es relativamente limitado en comparación con el rango de acciones que teóricamente están disponibles para ellos. En este sentido, determinados tiempos, espacios y poblaciones tienen sus propios repertorios de acción colectiva”. Para Tilly, todas las formas de acción colectiva son repertorios aprendidos y, mientras nuevas formas son introducidas, las antiguas son abandonadas o adaptadas (Foweraker, 1995). En palabras de Garcés (2012), “estos repertorios están condicionados histórica y culturalmente, es decir, los movimientos recurren a formas conocidas de acción, pero también pueden introducir innovaciones en los márgenes de las formas inexistentes”. Por ello, señala Eckstein (1989), no es accidental que las formas de protesta utilizadas sean, para algunos, negarse a trabajar mientras otros demostrarán su malestar en las calles o a través del sabotaje electoral. Tarrow (2011) también analiza este elemento considerándolo como un conjunto de capacidades de acción que forman parte de la ya mencionada memoria de los actores del movimiento.

Fijando su atención en América Latina en la primera década del siglo XXI, Revilla Blanco (2005, 2010) señala que existen “repertorios de acción colectiva propios de la región” tales como los cortes de ruta, las caceroladas o las marchas de la dignidad característicos de los movimientos indígenas, los piqueteros o los desocupados. De manera más general, dirá que actualmente se observan tres tipos de repertorios de acción colectiva latinoamericana: (i) un repertorio de acción colectiva contenida, basada en rutinas conocidas por la gente y aceptadas por las autoridades tales como mítines, campañas, propaganda, manifiestos, firma de peticiones, manifestaciones, marchas y huelgas, (ii) un repertorio de confrontación basado en acciones que implican la alteración del orden público o uso de la violencia (daños contra la

propiedad), y (iii) un repertorio de violencia que incluye justamente la agresión de otras personas, con la lucha armada, conflicto armado, terrorismo y guerrilla como algunas de sus expresiones.

Junto a los elementos ya mencionados, Giménez (1994) plantea que las movilizaciones son siempre la expresión de conflictos estructurales del sistema social, pero señala que éstos son a su vez activados o ‘revelados’ por factores coyunturales, es decir, por las condiciones políticas o el ambiente institucional en el que emergen o se desenvuelven los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, conectadas a las teorías americanas que analizan los recursos disponibles para la acción, surge la perspectiva de las estructura de oportunidades donde el rol del Estado pasa a tener una importancia relevante (Ibarra, 2000; Navarro y Herrera, 2009). Lo último, en especial respecto a la forma en que los movimientos sociales ajustan y reajustan sus estrategias movilizadoras y sus recursos a partir de un contexto político determinado (apertura o cierre del sistema político o de las elites políticas, posibles aliados, etc.). La importancia del contexto político y sus autoridades es relevante en la medida que “se vuelve evidente que los movimientos sociales varían en naturaleza y organización de acuerdo a los tipos de autoridad política a la que desafían. Donde el “repertorio de acción” de un movimiento social ha cambiado, es evidencia *prima facie* de un cambio en la “estructura de poder”” (Foweraker, 1995: 19). Las corrientes americanas de estudio de los movimientos sociales empezaron a hablar de una ‘estructura de oportunidades políticas’ que consideraba el contexto político en el surgimiento de los movimientos sociales sobre la base de coyunturas favorables y enfatizando en variables externas e institucionales (Esteve, 2010). Esto quiere decir que los movimientos tienden a actuar en contextos políticos que les pueden resultar más propicios como, por ejemplo, cuando los oponentes o la clase política se encuentra fragmentada (Garcés, 2012). Entre los factores externos que dan forma a la movilización se encuentran, entre otros, arreglos de las instituciones locales, alianzas de clases, cultura popular de resistencia, y estructuras del Estado (Eckstein, 1989).

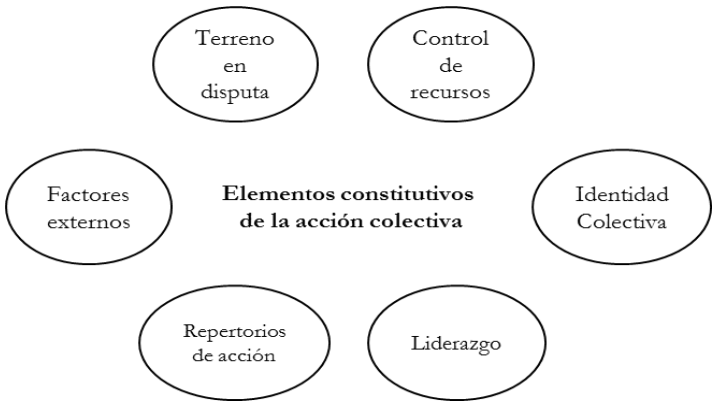
Desde Latinoamérica, Dagnino *et al.* (2006b: 36) advierten sobre la importancia del contexto socio-político que gira en torno a la acción colectiva, pues si bien la sociedad civil se expresa como una densa red de movimientos sociales y asociaciones de carácter diverso,

la naturaleza de tales asociaciones es una contingencia histórica, lo que quiere decir que en cada momento el patrón asociativo es el resultado de tendencias de largo plazo que nos remiten al modelo de acumulación de capital (actores económicos y relaciones de producción), el tipo de régimen político (sistema de partidos, sistema de gobiernos,

modelos de intermediación representación, inclusión y exclusión), los patrones culturales dominantes (interacción de los discursos políticos legitimadores, el tipo de imaginario nacional e internacional construido en el proceso, el tipo y alcance de la educación pública y el modelo de distribución de los bienes culturales), el marco jurídico que regula específicamente los tipos de asociación y la correlación que existe entre el mapa de las clases y grupos sociales con las otras variables mencionadas.

Dada la importancia que los factores externos a la movilización suponen para el despliegue de la misma, así como la relevancia que representan tanto para la activación como para la desactivación de la sociedad civil, se profundizará sobre este último elemento con posterioridad. Por ahora, es posible esquematizar los elementos constitutivos de la acción colectiva que serán utilizados en el marco de esta investigación.

Figura 1.1. Elementos constitutivos de la acción colectiva



Fuente: Elaboración Propia

Por lo tanto, y en base a los elementos teóricos expuestos hasta este punto, en el contexto de esta investigación se entenderá a la sociedad civil y sus formas de acción colectiva a aquellas formas de organización ciudadana surgidas de manera autónoma, voluntaria y espontánea desde arenas diferentes a las del Estado y el mercado, tanto de forma institucional (organizaciones, asociaciones civiles, grupos de interés) como no institucional (movimientos sociales),¹⁶ y que ya sea buscando objetivos como la

¹⁶ Esto no quiere decir que las movilizaciones y los movimientos sociales no puedan ser dirigidos o haber sido cooptados por instituciones formales como partidos políticos o por el Estado, sino más bien se

ampliación de derechos o la conservación de patrones culturales existentes, lo que dicha acción persigue, en definitiva, es un acceso a ciertos *recursos sociales* (materiales o simbólicos) valorados y disponibles en un sistema societal, generando con ello un *terreno en disputa*. Lo anterior se realiza a través de la definición de una determinada *identidad colectiva* o una racionalidad común relativamente transversal al conjunto social, la actuación de ciertos *liderazgos* o agentes movilizadores, el despliegue de un determinado e identificable *repertorio de acción* y que finalmente interactúan y responden a *oportunidades políticas* específicas y factores externos a las fronteras del grupo, movimiento u organización.

Asimismo, entenderemos como activación de la sociedad civil al momento en que ésta (tanto en sus dimensiones formales como informales) muestra mayores niveles de organización y densificación de redes, de interacción, exposición y ocupación del espacio público. Es la fase en que la acción colectiva se hace evidente y explícita logrando un control acelerado de los recursos que persiguen (políticos, culturales, discursivos y mediáticos) y con ello de la agenda de prioridades nacionales, los contenidos del debate público, la construcción de la historicidad y del devenir nacional. Así, independientemente de la manifestación o expresión de la sociedad civil que se analice (movimientos sociales, protestas, movimiento de masas u organizaciones de la sociedad civil), es posible afirmar que en algunos momentos estas expresiones se hacen más densas y visibles o activas, mientras en otros se observa un déficit, ausencia o desactivación de las mismas.

La literatura presentada hasta este punto se enmarca en el contexto de este estudio centrado en las trayectorias de activación y desactivación de la sociedad civil chilena. Su objetivo principal, sin embargo y más allá de observar la activación social, es analizar especialmente la desactivación social experimentada por la sociedad civil chilena, específicamente después del fin de la dictadura militar.

1.1.2 Desmovilización: importancia del estudio de las fases de subsidencia

Tal como se ha mencionado, el propósito de este trabajo es ampliar el debate respecto a la movilización y desmovilización de la sociedad civil chilena, poniendo especial atención en la fase de desmovilización social observada luego de la restauración democrática. Para Etzioni (1968), la desmovilización ocurriría cuando el control de recursos por parte de un grupo o unidad social se reduce apresuradamente. Para Tilly (1978), desmovilización es el proceso en que un grupo pasa desde una participación

refiere a la forma de organización que no nace con pretensiones de constitución formal o participación a través de las vías tradicionales.

activa en la vida pública a un estado de pasividad, mientras para Deutsch (1961) es el momento en que un sistema social conserva o mantiene sus esquemas de socialización. Para Remmer (1980), el concepto de desmovilización puede ser definido como el proceso en que grupos subordinados pierden la capacidad de perseguir objetivos colectivos.

Estas premisas, sin embargo, definen el fenómeno de la desmovilización mas no hacen referencia a las características fundamentales de dichos procesos, sus posibles causas así como las dinámicas internas que experimenta y desarrolla la sociedad civil durante estas fases. En esta sección se presentan elaboraciones relativas al proceso de desmovilización en detalle, considerándola ya sea como el resultado de anomia social, como el fin de un movimiento social o como una fase de subsidencia.

Desmovilización como anomia social

Junto a los episodios de ebullición social, hay períodos en que la sociedad civil tiende a desaparecer del espacio público en una retracción que ha sido comúnmente clasificada como despolitización, apatía ciudadana y otras expresiones vinculadas con el fenómeno de la ‘anomia social’ (Salazar, 2001). Este último concepto está asociado principalmente al trabajo de Durkheim (1987) quien lo definiría como el problema que enfrenta una sociedad por la ausencia de reglas morales y jurídicas derivada de desequilibrios económicos o debilitamiento de sus instituciones, y que implica períodos de bajo grado de integración o de desintegración social. Más tarde, Merton (1938) abordaría este concepto desde el conflicto que sufre el individuo ante la contradicción entre los fines o las metas que se ha propuesto y los medios existentes para alcanzarlos en función del lugar que ocupa en la estratificación social, definiendo este conflicto como una forma de desviación. Germani (1981) divide esta noción en anomia psicológica (objetiva) y anomia estructural (subjetiva). Para este autor, la causa principal de dicho fenómeno es el cambio acelerado de estructuras sociales (generacionales, ecológicas, culturales, etc.) y la carencia de normas o el conflicto con las vigentes. Para Durkheim era este cambio de estructuras, específicamente el paso de una sociedad industrializada (desde una sociedad de solidaridad mecánica a una orgánica) la que incide mayormente en las posibilidades de observar anomia, dado que es en dichas transiciones desde una antigua a una nueva estructura societal donde los vínculos que unen a los individuos con los grupos sociales o colectividades no son fuertes ni constantes.

Desde esta última perspectiva, el concepto de anomia puede entenderse como una pérdida de las identidades sociales dada la necesidad de asimilación de nuevos patrones culturales. En momentos de transición, traslape o superposición entre

antiguas y nuevas sociedades en procesos tales como la industrialización o globalización, se produce una lenta pérdida de los valores y las reglas de conducta tradicionales y el posterior reemplazo por nuevos componentes normativos. Siguiendo a Durkheim, Tironi (1990) señala que cuando una sociedad muestra solidaridad interna, ésta se constituiría naturalmente en un conjunto cuyas partes están ligadas o reunidas entre sí y sería esta cohesión del conjunto lo que la anomia, cuando se presenta, logra disolver.¹⁷ La anomia surge, por tanto, en momentos de crisis de transición donde una sociedad deja lugar a otra sistema social todavía no establecido (Duvignaud, 1969). Los procesos asociados a mutaciones culturales desde un tipo más tradicional de sociedad hacia una más moderna, señala Tironi, implica una situación heteróclita donde se mezclan las formas nuevas y antiguas de ordenamiento social, donde la sociedad se fragiliza y los fines comunes o colectivos son prácticamente inexistentes produciéndose un distanciamiento generalizado de los individuos respecto del orden establecido y los fines colectivos.

Cuando estas transiciones ocurren, los individuos tienen la sensación de estar inmersos en una sociedad cuyas normas, reglas de comportamiento y valores son ajenos o desconocidos para ellos.¹⁸ Los individuos perciben un colapso en sus estructuras sociales y culturales, una confusión entre medios y fines, desorden social, un cambio en los roles y conductas y, por tanto, una pérdida de la seguridad que la sociedad tradicional les proporcionaba (Poblete y Galilea, 1984). Gill (1999) señala que la anomia social se produce, por ejemplo, en el contexto latinoamericano a partir de los cambios estructurales que la región ha presenciado en las últimas décadas. El acelerado cambio socio-económico (industrialización, masiva migración campo ciudad) provocó el destierro de los individuos de sus comunidades tradicionales y, en este proceso, se producen alienaciones del acceso a las que solían ser sus redes de soporte social. La anomia creada por el rápido cambio societal afecta también los estados mentales de los individuos en un extendido estrés colectivo que destruye los valores comunales, las normas y creencias dejando a las personas a la deriva.

Los momentos de transformación cultural y aparente confusión y desorden - anomia o alienación - podría ser entonces un fenómeno relevante para los períodos de desmovilización social. Esto, pues tal como señala Tironi, Durkheim advierte que el paso de las sociedades de solidaridad mecánica a las solidaridad orgánica supone la presencia de períodos de ‘calentamiento’ seguidos por períodos de ‘enfriamiento’

¹⁷ El autor también se refiere a un tipo de anomia más relacionado con los individuos que con la sociedad que se relaciona con la incapacidad de un individuo de integrarse a la sociedad (anomia simple o crónica).

¹⁸ Esto puede observarse a nivel individual con las migraciones o, a nivel colectivo, cuando una sociedad completa tiene un cambio estructural y sus miembros pierden las identidades que antes le generaban pertenencia a dicho sistema.

pasando entre medio por momentos de crisis y desorganización donde la colectividad tiende a disociarse (se privatiza) en contraste a lo que ocurre en los períodos ‘calientes’ o efervescentes en que las relaciones sociales se intensifican al máximo. En estos períodos, es donde crece la importancia del dominio privado¹⁹ así como los procesos de particularización, atomización, apatía y desinterés individual respecto al curso que sigue la sociedad, procesos necesarios y encargados de preservar la memoria colectiva y de dar origen a las innovaciones que precede siempre a los ‘renacimientos’ de las civilizaciones. En condiciones de disolución social, señala el autor, no hay conflictos de clases ni movimientos sociales pues los lazos y la identidad colectiva no existe o está en proceso de reconstrucción:

Los grupos de interés y las asociaciones intermedias desaparecen o se debilitan, y la movilización colectiva - cuando la hay - adopta la forma de revuelta. Los individuos tienden a adoptar actividades de resignación, y a buscar seguridad replegándose en grupos primarios basados en nexos de tipo afectivo, lo que ahonda su aislamiento y la segmentación social. Las movilizaciones colectivas ocurren en sociedades relativamente cohesionadas, no en sociedades en procesos desintegrativos (Tironi, 1990: 103).

Así, este concepto nos entrega luces importantes respecto a la manera en que las dinámicas de la anomia social pueden redundar en procesos de apatía y desmovilización. El debilitamiento social en este contexto se utiliza como una consecuencia de la degradación del sistema simbólico que servía de referente a los individuos y actores sociales. Aun cuando este factor resulta relevante, y es aplicable como veremos más adelante por el período de transición democrática chilena, no es la única dimensión o explicación asociada al fenómeno de la desmovilización.

Desmovilización como fin de un movimiento social

Tal como se presentó anteriormente, el fenómeno de la desmovilización social no ha sido analizado en profundidad por los teóricos de la ciencia social quienes se han consagrado preferentemente al análisis de las etapas de ebullición o efervescencia en sus estudios sobre los movimientos sociales. Desde estas teorías sin embargo, es posible recoger elementos sobre las fases de desmovilización al poner atención en

¹⁹ Dada la desintegración social (que implica una fragmentación de las identidades colectivas) que se produce en los períodos de transición cultural, los individuos parecen replegarse al ámbito privado como una manera de protegerse y preservar las memorias colectivas y facilitar la innovación cultural. Es un primer mecanismo de reconstrucción identitaria. Luego de estos períodos de repliegue además vienen fases de renacimiento que para efectos de las trayectorias de (des)activación pueden entenderse como períodos donde la cohesión social es rearticulada.

aquellos análisis que no atienden únicamente al origen y desarrollo de los movimientos sociales, sino preferentemente al destino o lo que ocurre con dichos movimientos luego de su irrupción en la escena pública. Para Andrews (1997), la tendencia a centrarse en las primeras y más visibles fases de un movimiento social desatiende las dinámicas del desarrollo y las consecuencias a largo plazo de los movimientos sociales. Para McAdam, McCarthy y Zald (1988: 728) existe un “existe un estado relativamente subdesarrollado de conocimientos respecto a las dinámicas de la acción colectiva una vez pasada la emergencia de los movimientos”. Concordando con estos autores, Tarrow señala que “el campo de estudio de los movimientos sociales ha desarrollado en alto grado nuestro conocimiento del proceso de movilización; ha sido mucho menos exitoso en analizar los procesos de desmovilización que inevitablemente le siguen” (2011: 190). De acuerdo con Ajangiz:

Las consecuencias que tiene la acción de los movimientos sociales es una de las cuestiones menos estudiadas en la bibliografía existente al respecto. A los y las analistas de los movimientos parece preocuparles más el cómo y el por qué se mueven que lo que al final consiguen mover en realidad, más sus orígenes y procesos que sus resultados. (...) Una cuestión muy interesante, sin duda, pero la paradoja está en que para dar fuerza a su argumento dan por bueno y suficiente el conocimiento existente sobre el “antes” y el “después” de la acción colectiva cuando, en realidad, ese “después” no era en aquel momento sino una caja prácticamente vacía de propuestas teóricas, metodológicas o estudios de casos (2000: 23–24).

Siguiendo a autores como Miller (1999) y Tarrow (2011), entre los factores que actúan gatillando el fin de una movilización se encuentran: *represiones* y descabezamiento de los movimientos y organizaciones de la sociedad civil.²⁰ Esto es lo que de forma transversal se observó en Latinoamérica durante los años setenta y ochenta del siglo pasado cuando los manifestantes, miembros de organizaciones populares, sindicatos, etc. fueron exiliados, desaparecidos, acosados, torturados y muertos debilitando o definitivamente sepultando el tejido social presente en una fase de activación. Un segundo factor es la *consecución de objetivos*. Si se trata de organizaciones de la sociedad civil, lo más probable es que el objetivo de sus demandas sea alcanzado o resuelto ya sea por las acciones de las mismas organizaciones o por la influencia de políticas públicas.²¹ El desarrollo de los movimientos sociales, por otra parte, sigue un camino

²⁰ Respecto a la represión y los movimientos sociales ver Earl (1996); Stockdill (1996) y Tilly (1978).

²¹ Como en el caso de organizaciones para la superación de la pobreza, de derechos humanos, de derechos civiles, etc.

diferente. A medida que una movilización avanza, sus demandas comienzan a ampliarse y hacerse más generales, lo que deriva en la aspiración de transformaciones más radicales del sistema social en que se llevan a cabo. Para Melucci (1989: 72), “lo que ocurre normalmente es que las respuestas desde la institucionalidad política nunca logran incorporar la totalidad de dichas demandas y lo que sucede es una fragmentación del movimiento”. Para Munk (1995), otros factores tras el fin a un movimiento social serían la *cooptación* partidista, de una fuerza política populista o pérdida de autonomía. Esto se puede observar tanto en el control ‘desde arriba’ de aparatos estatales que logran asimilar a segmentos de la sociedad civil (ONGs, sindicatos, etc.) dentro de su propia esfera, como cuando la movilización deja de ser autónoma y el movimiento pierde su orientación hacia el cambio para pasar a ser parte del sistema político institucional. Este proceso también ha sido analizado y definido como la *institucionalización* de los movimientos sociales o el “proceso que implica un cambio hacia formas más estandarizadas, menos amenazantes de acción colectiva que suponen menos movilización y menos perturbaciones” (Hipsler, 1998: 157) y que implica negociaciones y una fuerte presencia de las instituciones y agencias de gobierno. Finalmente, el fin de una movilización social puede estar en su *ensimismamiento*, esto es, una acción colectiva basada en una política pura de identidad, dirigida a la protección de la identidad grupal frente a la posible intrusión de personas ajenas. Esta opción deriva en que el movimiento social se transforma en una fuerza social comunal o fundamentalista que conduce igualmente a la pérdida de fuerza y la larga a la disolución del movimiento social o desmovilización.

Respecto a los impactos de una movilización una vez que ésta se ha disuelto, Jamison (2006) señala que a través de la oposición a olas de industrialización, los movimientos sociales y culturales desencadenan un proceso de producción de conocimiento propio denominado “praxis cognitiva”. Dicho proceso provoca la renovación de visiones cosmológicas, tecnológicas y organizacionales que, transformadas en discursos científicos, institucionales y prácticos, se vuelven luego formas de conocimiento aceptadas y generalizadas.²² Asimismo, de acuerdo con Foweraker y Landman (1999), las movilizaciones y otras formas de acción colectiva tienen un impacto directo en la generación de conocimiento y, con ello, en la

²² Como señala Jamison (2006: 54): “Out of the anti-imperialist and student movements of the 1960s and the environmental and women’s liberation movements of the 1970s have emerged a range of alternative ideas about science, in form, content, and meaning, which have given rise to new theories, academic fields, and technological developments. (...) The new social movements rose to prominence in the downturn of a period of industrial expansion and economic growth. They emerged in opposition to the dominant social order and to its hegemonic cognitive regime, which had been largely established during and immediately after World War II”.

consecución y expansión de derechos civiles.²³ De acuerdo a sus hallazgos, existe una correlación histórica entre movilizaciones y derechos individuales, esto es, cada factor condiciona el desarrollo y la trayectoria política del otro, son constitutivos mutuamente y que el uno no puede desarrollarse sin el otro.²⁴

Siguiendo la línea de las teorías de los movimientos sociales para entender lo que ocurre una vez que éstos se tienden a retraer de la escena pública, Tilly (1984) plantea que las movilizaciones y los movimientos sociales son parte de procesos políticos mayores, y mediante un análisis histórico, determina fases de disputa o conflicto con sus correspondientes repertorios de acción colectiva. Desde esta visión, de gran relevancia para los objetivos de esta investigación, los movimientos sociales se entienden como series de interacciones constantes entre los poderosos y las personas sin representación formal en un proceso defensivo u ofensivo en que las demandas se hacen públicas y visibles, exigen cambios en la distribución del ejercicio del poder y son acompañadas con demostraciones públicas (Diani, 1992: 5). De la misma manera, Tarrow (1995) considera a las movilizaciones no como un grupo que se constituye en un momento particular sino como un proceso constante. La teoría del proceso político concibe a los movimientos sociales y su acción de protestas como un fenómeno cíclico, que puede surgir o decaer en función de los cambios políticos y las oportunidades externas al movimiento. Los períodos de efervescencia son momentos puntuales de ‘locura’ que se conectan a épocas de contención configurando ‘ciclos de protesta’ que van introduciendo nuevas formas de acción o reutilizar las formas de protesta tradicional. Para que las fases de ebullición tengan lugar, Andrews (1997) señala que la teoría del proceso político distingue entre las dinámicas internas de los movimientos sociales y la estructura de oportunidades políticas, es decir, la extensa red de dinámicas sociales, económicas y políticas que dan forma a las oportunidades y limitaciones para la movilización. Entre los factores internos a la movilización están las habilidades de sus líderes, formas y fortalezas organizacionales, redes informales de activistas y sus vínculos con otros movimientos sociales. La estructura de oportunidades políticas, por otra parte, incluye el rol de las alianzas o coaliciones

²³ A través de un análisis estadístico comparativo y longitudinal sobre los períodos autoritarios en Chile, México, Brasil y España, los autores establecen trayectorias tanto de las movilizaciones como de la provisión de derechos a través de los años. Construyendo un índice para evaluar los derechos en principio, los derechos en la práctica y la brecha entre ellos en cada año analizado, análisis de correlación y de regresión son aplicados para concluir que dichas variables están significativamente vinculadas con la actividad de movimientos sociales (movimientos de trabajadores y otras formas de movilización).

²⁴ Señalan los autores: “durante los períodos de transformación democrática son los movimientos sociales los que demandan los derechos de ciudadanía y desafían a los regímenes autoritarios para poner estos derechos en la práctica. En la medida en que esto ocurre durante una transición, muchas de sus demandas se cumplen y su impulso político comienza inevitablemente a declinar” (Foweraker y Landman, 1999: 318).

políticas y red de apoyo, la disponibilidad de puntos de acceso efectivos hacia el sistema político, la capacidad y propensión de los Estados hacia la represión así como el nivel de fragmentación de las elites.

Desmovilización como fase de subsidencia

Salazar (2001) y Melucci (1989) señalan que los científicos sociales normalmente examinan las etapas de movilización descuidando en ocasiones el estudio de los momentos en que la ciudadanía tiende a desaparecer de la escena pública. La importancia de centrar el análisis en dichos períodos radicaría en que, siendo la activación y desactivación política las dos caras de la misma moneda del fenómeno de la movilización ciudadana, en una etapa de aparente desactivación podría esconderse una reestructuración, una organización y un desarrollo diferente de la sociedad civil donde se cimentarían las bases para las fases de activación política venideras. Se sugiere con ello un replanteamiento de la lógica de desactivación o debilitamiento social, por una fase de reestructuración de la sociedad civil o de movilización latente (Remmer, 1980: 227) correspondiente a un período de ‘incubación’ social, donde nuevas identidades y estructuras civiles son generadas y que servirán de cimiento para las futuras olas de movilización.

Para Melucci (1989), los movimientos sociales se visibilizan sólo en áreas y espacios temporales limitados, pero al hacerlo revelan redes sociales que se encontraban sumergidas u ocultas la cotidianidad de las relaciones sociales. La movilización se vuelve visible sólo cuando un conflicto determinado o ciertas circunstancias específicas lo permiten, de otra forma, se mantiene en estado de latencia o movilización potencial que no implica inactividad sino un momento de construcción y reconstrucción de formas de acción que son alimentados por la producción constante de marcos de sentido alternativos. Estas etapas son relevantes pues en ellas se elaboran las respuestas a nuevas formas de control, a la vez que la resistencia y el conflicto también se encuentran presentes, aunque en una dimensión molecular. Paradójicamente dirá el autor, “la latencia de un movimiento es su fuerza más efectiva” (1989: 71).

Asimismo, Salazar (2001) propone que los movimientos sociales atraviesan por etapas de emergencia y también de subsidencia.²⁵ Al hacer un análisis de los movimientos populares en la historia de Chile, el autor observa que en una perspectiva de largo plazo hay momentos de emergencias o irrupciones sociales en el espacio

²⁵ El término subsidencia es importado desde la geología donde se aplica para definir los procesos de hundimiento de la superficie de un terreno. El autor lo utiliza en este contexto evidentemente haciendo alusión a los momentos en que la sociedad civil y sus movimientos sociales tienden a desaparecer de la escena pública.

público que, presentando diferentes formas y niveles de organización, han producido diferentes impactos en la estabilidad del sistema institucional. Junto a estos episodios de ebullición ciudadana también son identificados períodos en que la sociedad civil desaparece del espacio público y se sumergen en las llamadas fases de subsidencia. Para el autor, durante esta invisibilización:

el movimiento social es tan social y tan movimiento cuando irrumpe en el espacio de lo público y lo político, que cuando subyace en estados de subjetivación, privatización y alejamiento aparente de lo público. Nos pareció que era tan movimiento y tan social lo que se presenta como un conflicto objetivo y político, tramitado institucionalmente, como lo que se sumerge como un conflicto subjetivo o intersubjetivo, que se expresa a través de actitudes y conductas privadas (2001: 12).

Los movimientos y acomodaciones que se producen en las fases de movilización latente o de subsidencia dan lugar a un denso entramado social de características subterráneas. En dichas fases, se despliegan diversos procesos de reagrupación local, organización, multiplicación y desarrollo de numerosos tipos de los lazos microasociativos, espontáneos y no necesariamente estatutarios. Entre las características que es posible observar en estos momentos se encuentra: (i) una reconfiguración de los espacios sociales que, sin ser necesariamente espacios físicos, son lugares de convergencia, móviles y constituidos por redes de interacción donde se desarrolla lentamente el proceso de reagrupación social, (ii) Una intensificación de la oralidad que permite la creación de nuevas formas expresivas, nuevas palabras e imágenes dentro del imaginario social y (iii) una reconstrucción constante de la identidad colectiva. Para el autor, en las fases de subsidencia la memoria asociativa es el insumo que permite el desarrollo cultural necesario para el florecimiento de una nueva identidad colectiva.

En los períodos de inmersión del movimiento social, por tanto, se produce una rearticulación que da lugar a núcleos culturales e identitarios que permite a los sujetos colectivos adquirir visiones, opiniones conjuntas y masivas en procesos espontáneos y autogestionados. Los períodos de emergencia ciudadana no son más que el resultado de la cultura interna que se origina, se desarrolla y se potencia en los complejos procesos sociales, culturales e históricos que tienen lugar en los períodos de subsidencia (Salazar, 2013: 420). Para el autor, este desarrollo o acumulación de capital social es lo que permitiría la irrupción de la sociedad civil en el espacio público como un proceso constante o como una constante ‘capacidad de retorno’. Revilla Blanco (2010) invita así a hacer la distinción entre *episodios* y *procesos* de acción colectiva

alertando la necesidad de estudiar los procesos de movilización considerando las fases de latencia.²⁶ Para la autora, para que la movilización llegue a concretarse “es necesario que exista organización, comunicación, identidad, liderazgo, intercambio, etc., el período de inactividad movilizadora, de invisibilidad, suele ser el tiempo en el que se tejen las redes que serán la base de la movilización” (2010: 60).

Sin analizar explícitamente el tema de la movilización o desmovilización, Stepan (1985) revela lo que podemos considerar trayectorias de (des)activación civil al observar las dinámicas de fortalecimiento o debilitamiento de la sociedad civil *vis-à-vis* el Estado. Esto pues, el Estado mismo, los objetivos de aquellas elites que lo controlan, las contradicciones en su interior así como su continua capacidad de represión y transformación económica, impactan directamente en la forma en que interactúa con la sociedad civil. Las relaciones recíprocas por tanto entre el poder del Estado y el poder de la sociedad civil (movilizada y densa en ciertos momentos, desmovilizada y más fragmentada en otros) se traduce, en el mayor nivel de abstracción, en al menos cuatro dinámicas: en la primera combinación, el crecimiento del poder del Estado puede ser acompañado por una disminución del poder de la sociedad civil en un juego de suma-cero. Es también posible que las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil resulte en una suma-positiva o que las interacciones muestren ser una suma-negativa: la capacidad del Estado puede declinar mientras la capacidad de la sociedad civil se ve de igual manera mermada. Finalmente, existe la posibilidad de que el poder de los actores que operan fuera del aparato del Estado - o sociedad civil - crezca mientras que el poder de los que están dentro de ese Estado se ve eclipsado.

1.1.3 La influencia del contexto en las trayectorias de (des) movilización

A partir de lo expuesto, las movilizaciones son un proceso constante que en ciertos períodos históricos se visibiliza mientras, en otras, permanece oculto. Si bien existen ciertas características generales que se pueden observar de manera más o menos transversal a los períodos de (des) activación social, las formas que adopta la acción colectiva tienen especificidades y particularidades dependiendo de cruce tiempo-espacio en que se despliegue.

²⁶ En palabras de Almeyra (2008: 100): “el aparente reflujo de los movimientos sociales (muy espectacular en el caso del EZLN) esconde en realidad un proceso más complejo, ya que las luchas sociales son como ríos cárnicos, que a veces dejan la superficie y parecen hundirse en la arena para aparecer algunos kilómetros más abajo, reforzados por otras surgientes y por las aguas subterráneas, y proseguir su camino hacia el mar. Sólo en la visión anárquica, los trabajadores, obreros o campesinos pueden estar constantemente movilizadas y en la calle. En particular cuando carecen de dirección política que dé sentido y perspectivas a sus luchas”.

De esta forma, aun cuando en esta primera sección se han presentado los debates necesarios para construir un marco de referencia útil para el análisis posterior, no se pretende con ello establecer una estructura analítica rígida ni universalizante respecto a la (des)movilización social. Dada la complejidad epistemológica y ontológica del estudio de la sociedad civil y sus movimientos sociales, su análisis no sólo supone la definición de ciertas categorías, orientaciones y modelos sino también requiere situar estos fenómenos en relación a fuerzas políticas, económicas y sociales.²⁷ Asimismo, cada nueva oleada de activación o período de desactivación tiende a redefinir los espacios en los que se desenvuelve en términos de prácticas políticas, su relación con la cultura, la economía, los medios, la sociedad y la naturaleza. Para Escobar y Alvarez (1992), los investigadores asumen una existencia unitaria y coherente (un dato empírico unitario en palabras de Melucci (1994) a través del flujo histórico lo que podría esconder el carácter cambiante de la acción colectiva en términos de las orientaciones, los significados, niveles y sistemas históricos. Esta simplificación, dice Melucci, es igualmente equivocada de aquella “imagen opuesta de una masa amorfa guiada exclusivamente por sus instintos gregarios” (1994: 155) asumiendo con ello las complejidades del fenómeno de la movilización social al cual se debe considerar un “sistema de acción multipolar”²⁸ que representa, no un punto de partida, sino un resultado.

el fenómeno colectivo es, de hecho, producto de procesos sociales diferenciados, de orientaciones de acción, de elementos de estructura y motivación que pueden ser combinados de maneras distintas. El problema del análisis se centra, de esta forma, en la explicación de cómo esos elementos se combinan y unen, de cómo se forma y se mantiene un actor “colectivo” (1994: 156).

En este sentido, y además de entender la emergencia y latencia de la acción colectiva como un proceso político de larga escala, Tilly (1995) advierte que el análisis

²⁷ Más aún, para Hevia (2006): “La sociedad civil se expresa empíricamente como una densa red de movimientos sociales y asociaciones de carácter diverso. La naturaleza de tales asociaciones es una contingencia histórica, lo que quiere decir que en cada momento el patrón asociativa es el resultado de tendencias de largo plazo que nos remiten al modelo de acumulación de capital (actores económicos y relaciones de producción), el tipo de régimen político (sistema de partidos, sistema de gobiernos, modelos de intermediación representación, inclusión y exclusión), los patrones culturales dominantes (interacción de los discursos políticos legitimadores, el tipo de imaginario nacional e internacional construido en el proceso, el tipo y alcance de la educación pública y el modelo de distribución de los bienes culturales), el marco jurídico que regula específicamente los tipos de asociación y la correlación que existe entre el mapa de las clases y grupos sociales con las otras variables mencionadas”.

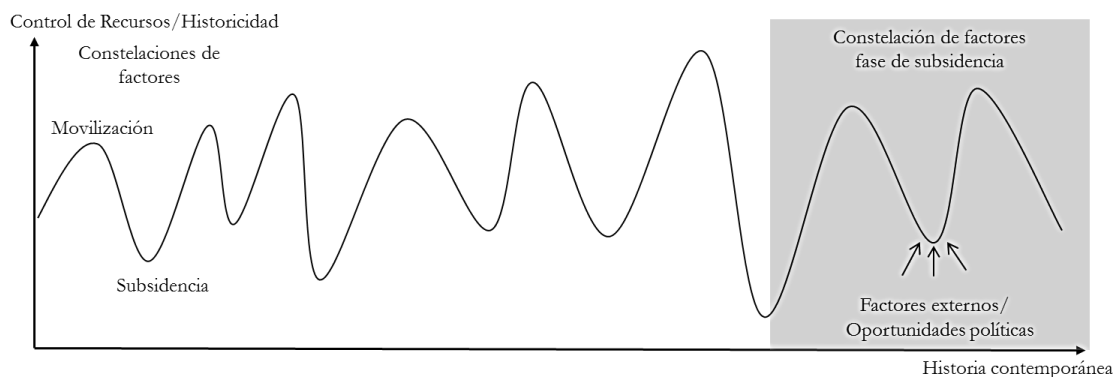
²⁸ Para Melucci (1994: 158), el sistema de acción multipolar de un actor colectivo se organiza a lo largo de tres ejes (fines, medios y ambiente) similares a un “conjunto de vectores interdependientes en estado de tensión”.

sociológico tiende generalmente a la producción de modelos generales, transhistóricos e invariables para la explicación de un amplio rango de fenómenos sociales.²⁹ Para el autor, sin embargo, emprender un análisis válido y profundo sobre fenómenos de naturaleza social, implica justamente tomar en consideración dicha naturaleza: variables plásticas, complejas, determinadas por una constelación de particularidades definidas por el tiempo y el espacio en que tienen lugar. Más aún, McAdam *et al.* (1996), señalan que tanto las escuelas europeas como norteamericanas de estudio de los movimientos sociales han analizado la importancia de los cambios en la estructura institucional o las relaciones de poder en un determinado sistema político nacional así como las diferencias en las características políticas de los Estado-nación en los que se encuentran contenidos. En ambos casos, el investigador es guiado por la convicción de que los movimientos sociales son moldeados por un amplio *set* de restricciones y oportunidades únicas en el contexto nacional en que están insertas.

Se consideran así los procesos de activación y desactivación social como fenómenos que, en términos generales, comparten ciertas características, son coherentes entre sí y poseen cierta continuidad, que no implica que su repetición a través del tiempo se presente de manera uniforme sino, al contrario, condicionados por el cruce las variables temporales y contextuales específicas. Esto supone justamente desmembrar grandes eventos o fenómenos en secuencias de eventos conectados causalmente y examinar cada eslabón de la cadena reconociendo en cada uno de ellos sus particularidades y la constelación de factores que le determinan.

²⁹ Para Tilly (1995: 1596), la estructura de esta lógica de análisis deductivo se remite a: todos los fenómenos A tiene características X, Y y Z. El caso α es un A, por lo tanto, α tiene características X, Y y Z. El fenómeno A, advierte el autor, puede ser una guerra, una revolución o, para efectos de este trabajo, una forma de acción colectiva mientras X, Y y Z constituyen las condiciones necesarias o suficientes para que el fenómeno ocurra así como secuencias estándar, correlaciones o consecuencias. A continuación, cuando nuevos hallazgos guiados por dicho modelo son generados, las conclusiones tienden a un 'mejoramiento del modelo' cuando los nuevos hallazgos no se ajustan perfectamente al modelo en cuestión.

Figura 1.2. Esquema explicativo de las trayectorias de (des) activación social



Fuente: Elaboración propia.

Al referirse a ‘trayectorias de (des) movilización social’ este trabajo recoge la tesis del proceso político y la movilización como un proceso constante, sin pretensiones de hacer uniforme y homogénea la acción colectiva, sino más bien dar continuidad a un proceso que generalmente se ha estudiado de forma parcelada o aislada en el caso chileno, poniendo atención a cada oleada de movilización de manera independiente. La revisión de la literatura sobre movimientos sociales y sociedad civil hasta este punto permite tener elementos que definan generalidades y herramientas de análisis sobre la acción colectiva. El trabajo que comienza a continuación es identificar las particularidades y los hechos específicos que, para el caso chileno confluyen en el período post-dictatorial definiendo un momento de desactivación social.

En las siguientes secciones se presentan las trayectorias de activación y desactivación de forma específica para la región latinoamericana, con un foco especial sobre el período de redemocratización. Asimismo, estas trayectorias son analizadas en función de los factores que más adelante estarán en el centro de la discusión sobre la desmovilización en Chile y la manera en que éstos influyeron dando forma a la acción colectiva de dicho período, esto es, el trauma instalado en la memoria colectiva, el paradigma de gobernabilidad y el modelo económico neoliberal.³⁰

³⁰ El esquema presentado en la Figura 1.2 tendrá, por tanto, diferentes resultados dependiendo del contexto en que se analice. El efecto del eje *historia contemporánea* por ejemplo, será diferente si se trata de un país europeo o latinoamericano y la forma que tome cada momento de movilización o desmovilización será única y estará definida por una constelación de factores específica, además de las características propias de la acción colectiva tales como (i) los recursos simbólicos que se encuentran disponibles y que se reclaman en cada momento, (ii) una determinada identidad que cohesiona un grupo social y las estrategias que desarrollan (iii) el repertorio de acción que despliega y los liderazgos que se observan y (iv) los factores (externos) que definieron la transición de movilización a desmovilización (y viceversa).

1.2 Trayectorias de (des) movilización y reconfiguración de identidades en América Latina³¹

Tal como fuera adelantado en la sección anterior, diversos esfuerzos analíticos se han consagrado al estudio de la desmovilización y especialmente de la movilización social en América Latina. Esto, se ha realizado principalmente a partir de las características de las estructuras sociales en que se han desencadenado, así como los principales factores que han influido en dichas trayectorias de efervescencia o invisibilización social de la región.

La estructura política y social que tuvo lugar aproximadamente entre la década del treinta y el sesenta bajo los llamados populismos o Estados desarrollistas - la también llamada matriz socio-política clásica (Garretón, 1996, 2002) o matriz Estadocéntrica (Cavarozzi, 1992a) - fue definida por las transformaciones económicas y sociales acontecidas durante ese período. De forma específica, luego de la crisis mundial del año 1929 y la desarticulación del sistema exportador oligárquico, se inaugura en el continente un esfuerzo por un tipo de industrialización endógena a la región mediante el conocido proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). En paralelo, tuvieron lugar profundos procesos de transformación económica y social impulsados por la urbanización y las migraciones internas, el desarrollo de un mercado local, la modernización y una gradual movilidad social.

Para Calderón y Jelin (1987), los procesos de transformación de la estructura social fueron producto, y al mismo tiempo germen, de enfrentamientos y conflictos sociales y políticos de importancia.³² La masiva migración desde las zonas rurales hacia las nacientes ciudades implicó la complejización de las sociedades en un proceso de urbanización que diversificó las demandas, aceleró la búsqueda de espacios de expresión y la participación política de las mayorías (Calderón *et al.*, 1992). Dada la diversificación social durante la época de la matriz clásica, la sociedad civil expandió su presencia y necesidad de incorporación en la esfera política a la vez que se desplegó un creciente proceso de movilización de masas. Por lo anterior, este período es considerado relevante para los movimientos sociales en América Latina (Foweraker, 1995, 2001).

El advenimiento de los estados burocrático-autoritarios (O'Donnell, 1973), implicó la supresión de las formas de organización activadas en las décadas anteriores y tuvo profundas consecuencias para el devenir de la sociedad civil, sus movimientos sociales, los partidos políticos y los mecanismos de representación en todo espectro. El

³¹ Una versión de esta sección fue publicada como '(Des) movilización de la sociedad civil en América Latina: factores tras las trayectorias de participación social'. *Polis, Revista Latinoamericana* (36).

³² Para una historia de los movimientos sociales latinoamericanos ver Bruckmann y Dos Santos (2005).

autoritarismo transformó la inclusión en eliminación política a través de la represión y la violencia extrema mientras los procesos burócratas y tecnócratas fueron insumos para la nueva definición de la cultura política de la época (Alvarez *et al.*, 1998). El Estado desarrollista o de compromiso, característico de la matriz clásica, fue desarticulado por los regímenes militares así como por las transformaciones institucionales y estructurales de los años ochenta. En términos de la sociedad civil, los aparatos represores redujeron las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y, suprimiendo la libertad de asociación, de expresión y de prensa, la sociedad fue desmovilizada (Foweraker, 1995). En el período de los autoritarismos tardíos, sin embargo y tal como señala Pearce (1997), amplios sectores se movilaron en una insurgencia popular que tomaba ventaja de los quiebres internos y las crisis latentes de legitimidad que estos sistemas presentaban.

Luego del fin de los regímenes autoritarios, los procesos de redemocratización³³ se caracterizaron por una redefinición de la relación entre la sociedad civil y el Estado derivada de dos procesos paralelos: el desafío de las reconstrucciones de las frágiles democracias latinoamericanas, por una parte, y la estabilización económica luego del ciclo recesivo iniciado en los setenta y exacerbado a principios de los ochenta, por otra (Garretón, 1996). Frente a estos desafíos, los gobiernos latinoamericanos optaron por una fórmula de gobernabilidad que tomaba en consideración tanto las lecciones políticas y sociales dejadas por la historia reciente, así como por una firme adhesión a las medidas de corte neoliberal basadas en la apertura económica y la desregulación. Estos procesos tendrían profundas repercusiones para el quehacer de la sociedad civil en un momento en que el Estado se reduce, desarticula y deja de ser el referente para acción social.

La llamada ‘década perdida’ en América Latina se caracterizó por una serie de procesos desencadenados a partir de la aguda crisis económica que afectó a la región. Las políticas neoliberales y de libre mercado con medidas de ajuste y estrategias de austeridad, implicaron la transformación de los sistemas laborales y la estructura social, y un primer impacto de precarización de los niveles de vida de las clases medias y populares con el aumento de la pobreza, las desigualdades y la marginalidad (Archila, 2011; Slater, 1994). En este contexto y contrariando lo esperado, Escobar y Alvarez (1992) señalan que no se presenció en la región un nivel importante de movilización y organización social, lo que probablemente se debió a la exclusión, represión y

³³ Fundación democrática especialmente en Centro América, extensiones o profundizaciones en México y Colombia, y múltiples transiciones desde el autoritarismo en el caso de la mayoría de los países del Cono Sur (Garretón, 1996).

precariedad de los años ochenta que forzó a los latinoamericanos a volcarse hacia la esfera privada y las tareas cotidianas de la supervivencia.

Dicha tendencia a la movilización latente presenciada durante los años ochenta se extendería hasta principios de la década del noventa. Como señala Archila (2011), la disminución de la agitación social en América Latina se debió, por una parte, a la pérdida de dinamismo de alguna organizaciones de derechos humanos una vez que se restablecieron las democracias, al debilitamiento de los horizontes utópicos contenidos en los socialismos reales, pero especialmente debido al impacto del neoliberalismo que produjo una fragmentación en las luchas y una orientación localista. En este período de latencia o subsidencia, se produciría por tanto un lento proceso de reconstrucción identitaria desde los desarticulados modelos tradicionales de acción social hacia la emergencia de una serie de formas de acción colectiva correspondiente a los ‘nuevos’ movimientos sociales, como ya se adelantara en la sección anterior. Para Modonesi (2012), a mediados de los años noventa se produce la emergencia de masivas movilizaciones de tipo anti-neoliberal, que no sólo provocaron crisis políticas y destituyeron gobernantes, sino que ocuparon un lugar importante en la disputa hegemónica en el contexto de la sociedad civil.

A partir de los años ochenta quedó claro que la matriz tradicional era reemplazada por una nueva estructura y con ello nuevas expresiones de acción colectiva (Salazar, 2013). Por tratarse de fenómenos recientes, es difícil evaluar las características generales de la matriz de la transición latinoamericana así como se ha hecho respecto a la estructura socio-política estadocéntrica. Sin embargo es posible afirmar, tal como lo hace Calderón (2007), que los cambios asociados a la globalización, las reformas económicas estructurales y los proceso de democratización han impactado en la región latinoamericana en los últimos treinta años estructurando un nuevo tipo societal. Tomando en cuenta estas variables, en las siguientes secciones se considerarán las reformas estructurales y los factores asociados a la democratización para ser analizados en referencia constante al quehacer de la sociedad civil del continente. En primer lugar, el proceso de democratización es examinado, desde la perspectiva de este trabajo, a partir del legado de los autoritarismos en la forma de trauma y memorias de la represión institucional, polarización y conflicto social. Asimismo, se consideran las estrategias de gobernabilidad puestas en práctica por los gobiernos de las transiciones democráticas. Finalmente se analiza la implementación de las reformas estructurales de la mano del recetario neoliberal. De esta manera, los tres grandes factores que han sido sindicados como agentes desmovilizadores en la redemocratización chilena son observados en esta sección en función de su impacto a nivel de la sociedad civil del continente.

1.2.1 La influencia del trauma, el miedo y la reflexión

El terrorismo de Estado junto a los altos niveles de polarización y conflicto social que de forma transversal inundaron la región en durante el siglo XX, alteraron profundamente la institucionalidad política, cultural y social teniendo, por tanto, importantes efectos en el quehacer y en las formas de organización de la sociedad civil del continente.

La memoria colectiva ligada al trauma social - o la cultura del miedo (Koonings y Kruijt, 1999; Procupez y Obarrio, 2006) - heredados de décadas pasadas en América Latina, son relevantes en la medida que “el trauma social y la memoria colectiva, o memorias colectivas, están de la mano en la América latina post-dictatorial” (Iglesias, 2005: 169). El trauma se refiere a la exposición a al menos un hecho de violencia o de amenaza a la propia supervivencia (Bonanno, 2004), que en el caso del período de los autoritarismos latinoamericanos tomó la forma de violencia concreta (tortura, desaparición masiva y sistemática de personas, exilio, enfrentamientos) y también simbólica (censura, toques de queda) por parte tanto del Estado como de grupos de oposición. Al tratarse de terrorismo de Estado, Benegas advierte que se relaciona con el poder ejemplificador y disciplinador descrito por Foucault y la forma en que las prácticas de violencia pública dejan marcas indelebles en la memoria colectiva y “en el corazón de los hombres” (Foucault, 2002 citado por Benegas (2011: 4).

Asimismo, y respecto a la relación entre memoria colectiva y trauma social que se analiza en detalle en el tercer capítulo, Kovalskys (2006) señala que las sociedades optan por el olvido para enterrar los recuerdos que agreden el sentimiento nacional, proceso psicoafectivo que incluye las biografías, los trauma familiares y sociales articulados con otras historias y otras significaciones. El acto de olvidar o rememorar como respuesta al trauma social también ha sido analizado por Jelin (2003: 14) quien sugiere que el olvido y el silencio responden tanto a un proceso selectivo necesario para la supervivencia, como al producto de una voluntad política como estrategia para impedir la recuperación (o creación) de la memorias sociales. El acto de la rememoración, por otra parte, también responde a voluntades políticas y sociales diferentes tales como recordar en pos de la búsqueda de verdad y justicia o hacerlo por la reconciliación. De igual forma, el objetivo de traer el pasado al presente puede responder a una estrategia cultural específica de incorporación del pasado en las perspectivas sobre el presente y el futuro (Jelin, 2001). La forma en que se incorporó el pasado y se le intentó dar un sentido para la construcción del futuro, las luchas por la rememoración, así como aquellas por la búsqueda de la verdad y la justicia dieron pie a un campo acción dentro del escenario de los nuevos movimientos sociales,

siendo la temática de los derechos humanos un insumo relevante para las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana en la redemocratización (Calderón, 1986b).

En el contexto autoritario, el principio aglutinador de la acción colectiva fue la recuperación de la democracia y fueron específicamente los movimientos contra la tortura y de familiares de detenidos y desaparecidos y otras diversas asociaciones de derechos humanos, las que no sólo denunciaron las violaciones a aquellos derechos, sino que encabezaron la resistencia y las protestas contra las dictaduras militares (Bobes, 2010). Una vez recuperada la democracia en el continente, el quehacer de estos movimientos y organizaciones continuó centrándose en la búsqueda de la verdad y la justicia en un primer momento, para luego reestructurarse y diversificarse derivando en temas tales como la rememoración, el olvido y la lucha sobre la reconstrucción del pasado. Más adelante, las demandas se centrarían en darle contenido a la democracia, es decir, generar una nueva concepción de derechos humanos relacionada con la profundización democrática, la inclusión y la equidad. Esto, pues la evolución de las ideas-fuerza de los movimientos de defensa de los derechos humanos, tiene que ver con los cambios y reestructuraciones que sufre - y sigue sufriendo - la memoria colectiva.

Como se mencionara, durante los autoritarismos los movimientos de derechos humanos jugaron un rol relevante, lucha que se transformaría más tarde en una demanda motorizada por la verdad y la justicia respecto a los abusos y violaciones perpetradas durante dichos regímenes. Las luchas por la memoria y por el sentido del pasado se convirtieron en un campo para la acción social en la región, estimulando un activismo diverso y sin precedentes en torno a la temática de los derechos humanos y civiles tanto individuales como colectivos (Jelin y Hershberg, 1996). Como señalan Procupez y Obarrio (2006), una vez recuperada las democracias en el continente, las consignas de la verdad y la justicia enraizadas en dictadura fueron tomadas o retomadas por los movimientos de derechos humanos, encontrando un campo de acción más amplio que incluía la investigación y el acceso a documentación y archivos. Esto derivó en la creación de las ‘comisiones de verdad y justicia’ observadas en el Cono Sur así como el intento de enjuiciamiento de los responsables de los crímenes contra la humanidad.³⁴

Las comisiones de la verdad germinarían en el continente ya sea como resultado de un proceso formal-estatal derivado de la presión del activismo de los grupos de derechos humanos como el caso de Argentina, Chile y El Salvador, o a partir del

³⁴ Para un análisis detallado de los movimientos sociales por país durante este período ver Albuquerque (2004).

trabajo de organizaciones de la sociedad civil como en el caso de Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia (Cuya, 1996). La consigna ‘nunca más’ estaría presente de manera transversal (Jelin, 2003). En el contexto de demanda de verdad y justicia surgen las ‘funas’ en Chile (Stern, 2010) y los ‘escarches’ en Argentina y Uruguay, denunciando a aquellos casos donde estas organizaciones consideraban que la justicia no había actuado y como una forma de “intervención política en relación al terrorismo de Estado” (Benegas, 2011: 21).

El problema del trauma colectivo instalado en la memoria social y materializado en las demandas por la verdad y la justicia durante la redemocratización latinoamericana temprana, evoluciona pronto hacia batallas sociales por la rememoración, la reconstrucción del pasado y la tensión entre la memoria oficial y la memoria social. Tal como señala Lifschitz (2012), las disputas por la memoria en los países del Cono Sur no representan un conflicto únicamente por la significación del pasado sino por las formas de pensar el mundo y la sociedad. En ese sentido, priorizar el olvido, silenciar el pasado, la determinación de lo que resulta decible o indecible (Lechner y Güell, 1998) o la invisibilización del conflicto, responden a una determinada visión del mundo, que en el caso latinoamericano tal como se verá más adelante, fue parte de la estrategia de gobernabilidad utilizada por los Estados. Pese a la lógica de olvido y la impunidad o ‘silenciamiento oficial’ - o quizás motivado por el mismo -, Lifchitz señala que en las últimas décadas surgieron nuevos agentes sociales vinculados a la memoria sobre el terrorismo de Estado dispuestos a hablar del tema y a disputar la construcción del pasado de las naciones.

Como afirma Jelin (2003), los diferentes actores de la sociedad civil se embarcaron en una lucha política activa acerca del sentido del pasado, del sentido de lo ocurrido y de la memoria misma. Utilizando el ejemplo de la memoria de los miembros de la Fundación Pinochet versus la de los movimientos de familiares de detenidos desaparecidos en Chile, la autora señala que el escenario de las luchas políticas por la memoria no se dio únicamente por la tensión entre memoria y olvido, sino por la confrontación de distintas memorias. Dado que el trauma colectivo no fue consecuencia exclusiva del terrorismo ejercido por los Estados latinoamericanos, sino también derivado del clima general de violencia y polarización alimentado por grupos de oposición y resistencia, el balance sobre el pasado devino en diferentes experiencias y versiones sobre el mismo.

Las disputas sociales sobre el sentido del pasado dieron lugar a movilizaciones que incorporaban estrategias culturales como el intento de materialización de la memoria y los recuerdos en sitios físicos (Jelin y Langland, 2003) como monumentos, museos y memoriales, o ‘sitios testimoniales’ como formas performativas de marcación de la

memoria en el espacio (Schindel, 2009). Los ‘lugares de la memoria’ así como las múltiples interpretaciones e (inter) subjetividades asociadas a ellos, evidenciaban un pasado que busca ser reivindicado e incorporado en el presente y con ello en el futuro de los pueblos. La tensión entre la memoria oficial y la social constituyeron un campo de batalla importante y un insumo para el quehacer de la sociedad civil en los procesos de democratización dado que “la memoria-olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a experiencias traumáticas colectivas de represión y aniquilación, cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo” (Jelin, 2001: 98).

Así, la dicotomía entre la justicia y la impunidad, entre el recuerdo y el olvido, gatillaron el despliegue de movimientos y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana. Para Archila (2011), la redemocratización significó una pérdida de dinamismo para muchas de las organizaciones de derechos humanos en la medida que sus luchas se fragmentaron, se focalizaron o simplemente dejaron de tener sentido en un contexto democrático. Sin embargo, el llamado Movimiento Democrático que jugara un rol central en la lucha contra los regímenes autoritarios, pareció no ser desmantelado, sino que resignificado en el marco de la redemocratización de la región, expandiendo e incorporando pronto nuevos elementos su campo de acción (Garretón, 1996). Como señala el mismo Garretón (2001), el movimiento se vio ampliado hacia la demanda democrática en el marco de los nuevos movimientos sociales.

Lo anterior, pues otra consecuencia del trauma de la violencia política y las dictaduras del pasado fue la (re) valorización de la democracia (Calderón, 1986a; Jelin, 2003; Jelin y Langland, 2003). La experiencia dictatorial grabó en la memoria social el mensaje que los derechos humanos y cívicos básicos, así como la democracia misma no podían ser dados por supuestos y garantizados. Por ello, durante la transición “la incorporación de la clave ‘violaciones a los derechos humanos’ fue, en ese marco, una verdadera revolución paradigmática. Esta definición implica concebir al ser humano como portador de derechos inalienables” (Jelin, 2003: 5). En un contexto en que los mecanismos democráticos ya han sido formalizados, “el desafío se traslada a su desarrollo y profundización. Las confrontaciones comienzan a darse entonces con relación al contenido de la democracia” (Jelin, 2001: 98).

Cuando los derechos humanos y su defensa se instalan como pilar de la democracia, las demandas sociales ya no sólo se concentran en los reclamos por los crímenes del pasado aún no resueltos, sino que también en articulaciones en torno a la denuncia de formas de violencia arbitraria o manifestaciones del autoritarismo residual (Procupez y Obarrio, 2006). Asimismo, y tal como lo indican Kooning y Kruijt (1999: 3), los problemas de la violencia y el miedo que plagaron las sociedades

latinoamericanas en el pasado parecieron continuar en el escenario democrático, aunque esta vez no en la forma de guerras civiles y dictaduras, sino en la persistencia de los problemas de la inequidad, la pobreza y la exclusión social y política. En este contexto, la defensa de los derechos humanos como campo de acción para los movimientos de la sociedad civil no desaparece sino que cambia su definición, ampliando e integrando los derechos económicos, sociales, culturales así como a los recursos naturales como nuevos componentes (Albuquerque, 2004; Alvarez *et al.*, 1998; Jelin, 2003; Seoane, 2003).

1.2.2 La gobernabilidad democrática y la búsqueda de estabilidad institucional

En el apartado anterior se presentan las implicancias y el impacto del trauma colectivo contenido en la memoria social sobre los campos de acción y los discursos de la sociedad civil latinoamericana. La historia de polarización y conflicto de las décadas pasadas, sin embargo, no sólo se alojó en la memoria social produciendo efectos para las dinámicas de la sociedad civil, sino también se instaló en la memoria de las elites y de las dirigencias con consecuencias para la cultura política y las formas de hacer gobierno en la transición latinoamericana. El aprendizaje político derivado del período anterior así como las exigencias propias de las transiciones sobrevivieron en un paradigma de gobernabilidad relativamente transversal a la región con su consecuente correlato en el quehacer de la sociedad civil. Este fenómeno se aborda con mayor detalle en el cuarto capítulo de este trabajo

En la década de los sesenta y setenta se experimentó una crisis económica, política e ideológica cristalizada en la erosión del Estado de Bienestar y en una ola de movilizaciones y conflicto social que sacudió tanto a Europa como a Estados Unidos. Este momento no sólo sirvió de punto de inflexión para la investigación sobre los nuevos movimientos sociales, sino que también gatilló una discusión teórica que confluyó en el término '(in)gobernabilidad' como búsqueda de una explicación a la crisis que se verificaba en esos momentos en los países desarrollados. Tal como lo han descrito diversos autores (Camou, 2001b, 2001c; Monedero, 2009; Moreno, 2006; Torres-Rivas, 1993), la discusión respecto a la (in)gobernabilidad se sostuvo principalmente desde una corriente de corte conservador y otra neomarxista.

La primera, resumida en la creación de la Comisión Trilateral y el trabajo de Huntington y Crozier (1975), establecieron que las causas de la crisis estaban en la sobrecarga de demandas y expectativas que debe enfrentar el Estado en el contexto de la profundización de la democracia de masas. De esta manera, cuando la democracia se expande - esto es, se produce un exceso de participación social - resulta en una

sobrecarga e hiperbolización de las funciones del Estado con el consecuente rebase de su capacidad de respuesta a las demandas sociales, así como en la efervescencia y conflicto social que vuelve ingobernable la sociedad. El análisis neo-marxista concentrado en el trabajo de Habermas (1988) y Offe (1990), sindicaba la tensión y contradicciones irresolubles entre el sistema político-administrativo y el capitalismo avanzado como las causas de la conflictividad social y a la crisis de gobernabilidad del período.

Dada las diferencias en términos de las variables para explicar la crisis, así como las receta que ambas posturas platearon para restaurar la erosionada gobernabilidad del primer mundo, la visión conservadora y la neomarxista alimentaron diferentes paradigmas de gobernabilidad, entendidos como “el conjunto de respuestas institucionalizadas (ideas, valores, normas, prácticas) que una comunidad política sustenta en post de resolver (y aceptar) ciertas soluciones a sus problemas de gobierno” (Camou, 2001c: 11). Sin embargo, las recetas de gobernabilidad propuestas por los trilateristas basadas en el control social, la estabilidad, el pragmatismo y la tecnocracia, fueron las que finalmente se pusieron en práctica no sólo en Europa, Estados Unidos y Japón, sino pronto extrapoladas a otras regiones del mundo incluyendo América Latina (Rodríguez, 2008).

De esta forma, las tendencias de gobernabilidad en Latinoamérica fueron fuertemente influenciadas por el paradigma conservador enarbolado en el primer mundo, mandatado por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y condensadas en el Consenso de Washington de 1982. El recetario trilateral, sin embargo, se vio enfrentado a la realidad socio-histórica latinoamericana donde, a diferencia de lo ocurrido en el primer mundo, los problemas de gobernabilidad de aquellos años no habían sido gatillados por un exceso de democracia sino justamente por la endémica falta de ésta (Camou, 2001a; Moreno, 2006). Las débiles democracias latinas habían sido afectadas por profundos desajustes económicos e inestabilidad política, en una región donde “las cicatrices de los autoritarismos aún estaban frescas” (Torres-Rivas, 1993: 99). Tal como lo señala Camou (2001b), la discusión respecto a la gobernabilidad en la región estuvo marcada por los desafíos de tres procesos que se desarrollaron en la década del ochenta en América Latina: la crisis, ajuste y reestructuración económica, el agotamiento del modelo del Estado interventor y las transiciones y la consolidación de las jóvenes y frágiles democracias.

Para Silva (1997), la hegemonía de la ideología neoliberal junto a la presión de los organismos internacionales, la falta de proyectos políticos y económicos considerados viables y el pasado político reciente del continente confabularon en la adopción de un

paradigma de gobernabilidad basado en el pragmatismo político. El ideal de democracia schumpeteriana que privilegia el control elitista sobre la toma de decisiones y que limita la participación ciudadana en los asuntos políticos (Costa Bonino, 2000; Ducatenzeiler y Oxhorn, 1994; Silva, 1997), se impuso en el continente. Las tareas priorizadas en ese contexto fueron evitar la regresión autoritaria (O'Donnell y Schmitter, 1986), la descompresión del Estado, la tecnificación de la política, la vigorización del crecimiento económico, así como la estabilidad política y el control social de la acción colectiva (Garretón, 1993), lo que impactó en las dinámicas de la sociedad civil de la región.

Si bien la democracia como valor cobró especial relevancia luego del fin de los autoritarismos para la sociedad civil y sus movimientos sociales, el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica concluía, por su parte, que el exceso de democracia en términos de participación social había provocado los conflictos del período anterior. Mientras los movimientos sociales buscaban la participación para la profundización de la democracia, las elites dirigentes buscarían limitarla y controlarla por “el temor de que se produjeran desbordes y demandas de la población que no se pudieran satisfacer” (Salazar, 1998: 18). Esta visión impacta sobre la sociedad civil en dos dimensiones: por una parte, la participación social por los canales institucionales es propiciada en desmedro aquella que emerge desde la informalidad. Por otra, se asume que la participación por vías informales pondría en peligro la democracia, lo que implicó un discurso de deslegitimización de la protesta social.

Y, siguiendo el paradigma de gobernabilidad antes descrito, el tema de la participación de la sociedad civil en el contexto de las redemocratizaciones latinoamericanas estuvo definido por una ‘inclusión controlada’ (Pearce, 1997: 66) por un lado, y la descompresión del poder y responsabilidades del Estado, por otro. En medio de visiones más tecnócratas, la emergencia del concepto del tercer sector resultó conveniente para la descompresión del poder y deberes del Estado neoliberal traspasando la responsabilidad de la superación de los problemas residuales del sistema de mercado hacia los municipios y, con ello, hacia los propios individuos. Así, la sociedad civil a través de los individuos estaría encargada de generar las plataformas necesarias para su integración al desarrollo, solucionando, al mismo tiempo, el problema de los déficit de participación ciudadana y la profundización de la democracia (Dagnino *et al.*, 2006b; Salazar, 1998). Esta premisa se encuentra principalmente en los planteamientos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de autores como Putnam (1994) y Diamond (1997).³⁵ Es la lógica tras la

³⁵ Para Edwards y Foley (1998), Putnam, Diamond y aquellos que han continuado las tesis de su trabajo arguyen que el asociacionismo *per se* produce los hábitos de cooperación y confianza, las redes sociales y

diversificación y masificación de políticas públicas, especialmente en países en vías de desarrollo que, incorporando los mandatos del BID, se enfocan en la participación y fortalecimiento ciudadano. Para Lechner (1994), esta orientación liberal en realidad apela a la iniciativa individual como el motor del desarrollo.

El costo de dicha participación limitada o inclusión controlada por las elites (Cammack, 1985), que tomó la forma de la promoción de ONGs en desmedro de los movimientos sociales, fue muchas veces la cooptación de la organizaciones por parte del Estado así como su volatilidad, en la medida que éstas debían cambiar sus objetivos de modo de ajustarse a los requerimientos de los fondos disponibles para su funcionamiento. Para Foweraker,

Durante el período de las transiciones democráticas en América Latina, las ONGs se volvieron protagonistas del tema del desarrollo, y participaron de reuniones y foros financiados por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el BID (...) Éstas, recibieron fondos, créditos, capacitaciones y asistencia técnica, al costo de sus propias voces y visiones. La consecuencia fue menos movilización de organizaciones de base y una menor capacidad de criticar políticas gubernamentales o buscar soluciones alternativas (2001: 851–852).

La crítica a este tipo de participación plantea que las políticas públicas de promoción de la sociedad civil son estrategias *top down* que constituyen una ‘retórica’ de la sociedad civil (White, 1996). En este sentido, la participación sería más bien un mecanismo para alcanzar la legitimidad y la eficiencia propias de la gobernabilidad. Para Hevia (2006), mientras la legitimidad se refiere a la capacidad de ejercer la soberanía y validar las acciones de gobierno que se mueven en la arena de la política y el conflicto, la eficacia apela al mejoramiento de la gestión y las políticas públicas específicas. Para el autor, cuando prima una sobre otra, es decir, cuando el objetivo de la participación es únicamente lograr legitimidad entre la sociedad o la eficacia en la aplicación de una política pública, ésta corre el riesgo de la despolitización en el sentido de eliminar la capacidad de disenso y conflicto.

Mientras la participación social por vías institucionales fue defendida como parte de la estrategia de gobernabilidad durante las democratizaciones en América Latina, la participación informal o no institucionalizada - las movilizaciones sociales - sufrieron un tratamiento diametralmente diferente. Durante la época de los populismos, las movilizaciones sociales - los movimientos de masas - gozaron de cierta legitimidad en un contexto de relación de dependencia y clientelismo con el Estado. Durante las

transiciones, en cambio, con Estados más reducidos y movimientos sociales más autónomos y fragmentados, la forma de control que se adoptó fue la deslegitimización de la protesta al ser considerada fuente de conflicto y de riesgo para la gobernabilidad y la consolidación democrática.

El sistema político de las transiciones se estructuró de manera de facilitar la implementación de los ajustes económicos por lo que se buscó que los representantes no sufrieran presiones desde abajo, a la vez que se aisló a los grupo de tecnócratas para que pudieran implementar los ajustes sin obstáculos (Silva, 1997). En este contexto, Ducatzenzeiler y Oxhorn (1994) observaron que la primera mitad de la década de los noventa se dio un giro hacia soluciones autoritarias como forma de enfrentar los problemas de gobernabilidad en los regímenes democráticos.

En este contexto, y a medida que las transiciones de desenvolvían, las dinámicas de los movimientos sociales de la región se vieron confrontadas en muchos casos a un endurecimiento general de las respuesta represivas por parte de los gobiernos y a políticas tendientes a la criminalización la protesta y de la organización informal de la sociedad civil (Algranati *et al.*, 2004; Figueroa, 2008; López Maya, 1999; Seoane y Taddei, 2005; Svampa y Pandolfi, 2004).³⁶ Se ha utilizado incluso el término “judialización de la protesta” (Algranati *et al.*, 2004: 246) para referirse a dicho crecimiento de la represión no sólo estatal sino también paraestatal, así como a la intervención de las fuerzas armadas en los conflictos sociales internos.

La relación entre las medidas represivas, el desarrollo de los nuevos movimientos sociales y las estrategias de gobernabilidad es difícil de evaluar. La protesta a nivel latinoamericano fue intensa durante los años noventa y principios del nuevo milenio y la respuesta de los gobiernos generó enfrentamientos que más que proteger la gobernabilidad devino en serias crisis que concluyeron incluso en el derrocamiento de presidentes constitucionales en manos de la presión popular. Para Alda Mejías (2007: 56), las deficiencias en el proceso de democratización y los problemas de gobernabilidad son los factores que explican que 14 presidentes constitucionales no hayan terminado su mandato en América Latina en las últimas décadas, donde “el motivo para abandonar el poder ha estado directamente asociado con la protesta social organizada para este fin”.

³⁶ Más aún, Svampa (2007) propone que la gobernabilidad neoliberal consta en este sentido de tres ejes principales: la criminalización de la protesta social, la doctrina de seguridad ciudadana y tendencia a la militarización.

1.2.3 El impacto de la modernización neoliberal sobre la (des)movilización social

A diferencia de los dos puntos anteriores, a nivel latinoamericano la influencia del trauma de las décadas pasadas en la memoria colectiva y el paradigma de gobernabilidad, es este tercer punto analizado el que generaría el mayor impacto en términos de la acción colectiva en la región.³⁷ Si bien se puede hablar del desarrollo de un cierto tejido social a partir de la imposición del neoliberalismo, como por ejemplo el caso de las asociaciones de consumidores (De Sousa Santos, 2001), su presencia es muy marginal respecto al tipo de acción colectiva que tuvo lugar mayoritariamente a partir de la aplicación de dicho modelo: los movimientos de oposición o resistencia.

El recetario de gobernabilidad conservadora, contenido y promulgado por los organismos internacionales y las propuestas de la Trilateral, designó no sólo la pauta política para la transición democrática de América Latina luego del colapso del modelo de ‘desarrollo hacia adentro’, sino que entregó la fórmula para la estabilización y el ajuste económico resumidas en el modelo neoliberal y en el Consenso de Washington. Impactados por la Crisis del Petróleo de 1973, el déficit fiscal de los Estados Desarrollistas y el endeudamiento externo, por una parte, así como influidos por la presión internacional de organismos como el FMI y el Banco Mundial,³⁸ las políticas de ajuste y estabilización neoliberales fueron transversalmente aplicadas en el continente.

El modelo neoliberal, heredero aunque renovado y ampliado desde los métodos y contenidos de la teoría neoclásica, fue desarrollado principalmente en las escuelas de Stanford y Chicago, siendo los teóricos de esta última institución quienes tuvieron mayor influencia en los programas económicos de los países latinoamericanos (Talavera, 1985). Tal como se analiza pormenorizadamente en el quinto capítulo, el debate y la aplicación de este modelo económico tuvo su origen en las medidas puestas en marcha durante el régimen de Augusto Pinochet, siendo Chile un país pionero en el empleo de este tipo de modelos de estabilización y ajuste, al que seguirían Bolivia y México en 1982; Costa Rica, Jamaica y Uruguay en 1985; y

³⁷ Para Zibechi (2003: 185) la serie de reformas neoliberales impuestas durante la década del ochenta y el noventa provocaron un “terremoto social” que impactó las formas de vida de la sociedad civil y especialmente de los sectores populares al descomponer y reconfigurar las formas de producción territoriales y simbólicas que configuraban el mundo de la vida cotidiana.

³⁸ Como señalan Acuña *et al.* (1996), a diferencia de la Gran Depresión de la década del treinta, la crisis de la deuda externa de los años ochenta tuvo lugar en un contexto de una dependencia cada vez mayor de los países latinoamericanos con las instituciones financieras internacionales por lo que finalmente primó la imposición de los criterios mandados por dichos organismos.

Argentina, Brasil, Colombia, el Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela en 1997 (Gigli, 1999).

Como señalan ciertos autores (Acuña *et al.*, 1996; Gigli, 1999; Monedero, 2009), el programa de ajuste estructural se planteó, en términos generales, para reducir las funciones del aparato estatal remitiéndolas a tareas subsidiarias o a aquellas que no resultaran rentables para el sector privado, produciéndose con ello reformas presupuestarias, masivas privatizaciones de empresas públicas, políticas sociales compensatorias y focalizadas, y una fuerte contención del gasto público. Asimismo, se buscó la desregularización financiera y comercial para asegurar una asignación correcta de recursos por parte del mercado, mientras el Estado reforzaba su condición de garante del orden legal en términos de la economía de mercado y la propiedad privada. Se promulgó la desnacionalización y ampliación del alcance de los mercados nacionales e internacionales, la reinserción competitiva de las economías a nivel mundial y el incentivo a la inversión extranjera. Finalmente, se favoreció un funcionamiento de la economía basado en el libre actuar de la oferta y la demanda para la satisfacción de necesidades como la salud, la educación y la fuerza de trabajo, que perdieron las garantías y protección del período anterior.

Si bien la aplicación de las políticas propugnadas por el Consenso de Washington lograron un mejoramiento general de los indicadores macroeconómicos - específicamente sobre la hiperinflación, el equilibrio de las cuentas externas así como una mayor disciplina para la contención del déficit fiscal del sector público - también supusieron costos sociales (Acuña *et al.*, 1996; Gigli, 1999). Las políticas de fomento a la productividad y al libre mercado redundaron en un mundo del trabajo flexibilizado que elevó los índices de desempleo a la vez que profundizó el proceso de concentración de la riqueza, aumentaron los índices de pobreza en la región y se produjo una precarización de los niveles de vida de las clases medias y populares durante los años ochenta (Archila, 2011; Giarracca, 2004; Slater, 1994). Asimismo, se produjo un debilitamiento del sindicalismo (Garcés, 2004b) y transformaciones estructurales tanto en el terreno económico como en el social, político y cultural (Seoane, 2003). Durante los años noventa, en tanto, según datos de Banco Interamericano de Desarrollo, el número de pobres se incrementó en cierta medida mientras la distribución del ingreso no mostró mejoras (BID, 1997).

Tal como se había adelantado, el impacto inicial de las medidas de ajuste estructural sobre las dinámicas de la sociedad civil se tradujo en una relativa desmovilización social en la medida que las condiciones de precariedad generaron un repliegue de la ciudadanía hacia las tareas y la urgencia de la supervivencia (Escobar y Alvarez, 1992). A partir de la década del noventa, sin embargo, esta tendencia parece

revertirse inaugurándose un nuevo ciclo de movilizaciones, de carácter defensivo y motivado especialmente por las amenazas contenidas en los programas de ajuste estructural sobre los derechos sociales. Para Almeida (2007), el paso de los estados desarrollistas a estados neoliberales gatilló un contra-movimiento de fuerzas sociales que se movilizó especialmente a mediados de los años noventa cuando la crisis de la deuda y las reformas económicas de recortes público y privatización se vieron profundizadas. Utilizando un registro del número de protestas, el autor constató una curva ascendente de eventos para el período 1995-2001 en el continente y especialmente activas en Argentina, Bolivia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala.

La crisis económica que se buscaba superar con la aplicación del paquete de medidas de ajuste estructural neoliberal fue acompañado por una crisis de legitimidad y de representatividad tanto de ciertos estados como de los partidos políticos tradicionales, que se expresó en una oleada movilizadora en la región (López Maya, 1999). El nuevo ciclo de protestas de mediados de la década del noventa fue protagonizado por los movimientos y organizaciones sociales que, promoviendo demandas que surgieron o que fueron refundadas luego de la disolución de la matriz clásica y la imposición de las reformas neoliberales, reconfiguraron el mapa de la conflictividad social de las décadas anteriores. Dentro de la activación de este ciclo de movilización social, se ha señalado como punto de inflexión el levantamiento zapatista de principios de 1994 que dio por iniciado esta serie de protestas y movimientos que han sido clasificadas como anti-neoliberales (Svampa, 2010).

Para Giarracca (2004), junto a la aparición del movimiento zapatista en México, un segundo acontecimiento importante para esta serie de protestas anti-neoliberales ocurre en la Argentina de forma casi simultánea. Bajo el gobierno de Carlos Menem, en Santiago del Estero se desataría una rebelión contra las autoridades del Estado provincial traducido en la quema de edificios y la persecución de políticos en un episodio denominado el ‘santiagoueñazo’ que resultó un antecedente para la posterior crisis de 2001. Unos meses después de lo ocurrido en México y Argentina, indígenas de Ecuador convocan a una movilización que paralizó el país durante dos semanas. A estos sucesos se suma la emergencia del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) quienes, pese a constituirse con anterioridad, comienzan ganar visibilidad a partir de la década del noventa, mientras en Bolivia se iniciaba la articulación de movimientos indígenas y cocaleros. De esta forma, emergen nuevos tipos de movimientos sociales de base territorial tanto en el mundo rural como en el espacio urbano, articulados en torno a su identidad étnico-cultural, como el caso de los movimientos indígenas, o en referencia a sus carencias, como en el caso de los

llamados movimientos ‘sin’ como los sin tierra, sin techo o sin trabajo (Seoane *et al.*, 2006).

De acuerdo con Figueroa (2008), el alzamiento zapatista en el caso mexicano desencadenó un ciclo de protesta popular que, entre los años 1994 y 1999, incluyó más de 82 mil acciones de protesta. En Argentina, en tanto, el corolario de las movilizaciones iniciadas en Santiago del Estero se daría en el denominado ‘Argentinazo’ del año 2001 en el que las clases medias, trabajadores desocupados y del sector público se unieron en una protesta no sólo por la retención de sus ahorros - el conocido corralito - sino también como respuesta a años de alzas de precios, contenciones salariales y privatizaciones. La crisis de gobernabilidad derivada de la movilización desencadenó la renuncia del gobierno del presidente de la Rúa a los finales de 2001.

En Ecuador, destacaron las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y por el movimiento Pachakutik aglutinados originalmente en torno a la temática indígena. Los movimientos terminan por abarcar amplios sectores sociales afectados por las políticas neoliberales y culmina con la caída del gobierno de Jamil Mahuad (Seoane *et al.*, 2006). Para estos últimos autores, Bolivia también es un caso destacado dentro de este ciclo de movilización social. Comenzando en abril de 2000 con la llamada ‘Guerra del Agua’ que provocó la anulación del proyecto para privatizar dicho recurso, se vivió luego un proceso de ascenso en las movilizaciones que culmina en la ‘Guerra del Gas’ y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La movilización popular emerge luego en junio de 2005 provocando la crisis y posterior derrocamiento del gobierno de Carlos Mesa en protestas que incluyeron al movimiento cocalero de la región del Chapare y del movimiento indígena en el Altiplano.

Otros autores también han retratado el ciclo de movilizaciones latinoamericanas de resistencia a la aplicación de políticas neoliberales (Archila, 2011; Bruckmann y Dos Santos, 2005; Garcés, 2003b; Procupez y Obarrio, 2006; Seoane, 2003; Seoane y Taddei, 2004; Svampa, 2010; Urrutia, 2006; Vanden, 2007; Zibechi, 2003). Junto a los movimientos ya mencionados, luego de la caída de Collor de Mello en Brasil (1994) y producto del malestar y repudio social, serán la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) los grupos que protagonizarán la contestación a las políticas neoliberales. Las movilizaciones campesinas en Paraguay, fueron pieza clave en la caída del presidente Cubas Grau (1999) y confrontarán pronto las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos posteriores. Asimismo, el anuncio de que Fujimori sería reelecto por tercera vez, inició una activación de la protesta popular en Perú que provocó su destitución en el 2000 y

que seguirían luego activas en las resistencias a las políticas de privatización impulsadas por el gobierno Toledo. Asimismo, para Archila (2011) Venezuela representa un caso paradigmático. Ya en 1989 vivió el levantamiento masivo conocido como ‘Caracazo’ cuya crisis dejaría en difíciles condiciones de gobernabilidad al país. Para el autor, a partir de ese momento la sociedad venezolana inicia un proceso de claro carácter anti-neoliberal con miras a la tenencia de la tierra, la nacionalización de los recursos naturales y la recuperación de las empresas privatizadas.

Como consecuencia de este período de activación social, se produjo una oleada de victorias electorales de candidatos, partidos y coaliciones denominados ‘progresistas’ como en el caso de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y El Salvador. Para Modonesi (2012), el hasta el 2011 fue posible observar dos tendencias de movilización social en el marco de la consolidación de las experiencias de los gobiernos progresistas: la disminución de la conflictividad social y de desmovilización, por una parte, y una simultánea reactivación del conflicto y de re-movilización cuyas características son aún incipientes, por otra.

De esta manera, la influencia del trauma colectivo, el paradigma de gobernabilidad y la modernización neoliberal dieron forma no sólo a una nueva estructura política, sino que tuvieron una fuerte influencia sobre el quehacer y las dinámicas de la sociedad civil del continente. El trauma generado en las décadas anteriores e instalado en la memoria colectiva, así como la imposición de las políticas de ajuste neoliberal, dibujaron campos de conflicto y fueron insumo para las trayectorias del (des)movilización de la sociedad civil. Las tensiones generadas por estos factores forzaron una definición social identitaria en términos del ‘nosotros’ y ‘los otros’ que aglutinó la acción de organizaciones sociales. Estas acciones y campos de conflicto estuvieron mediados e influidos por el paradigma de gobernabilidad de los gobiernos definido por la contención y el control de la sociedad civil.

Dichos factores se han desenvuelto produciendo diferentes resultados dependiendo de las realidades locales, cuya especificidad escapa del foco y las pretensiones de este trabajo. Sin embargo, es posible constatar una fase de desmovilización, latencia o reconfiguración identitaria relativamente común y general al continente a partir de los años ochenta. Un nuevo ciclo de movilizaciones es inaugurado a mediados de los años noventa, que se extendería hasta entrada la década del 2000. Mientras en América Latina los procesos de participación, movilización y desmovilización se desenvolvían siguiendo estas trayectorias, en Chile estos factores impactarían a la sociedad civil de una manera diferente.

1.3 Movilización y desmovilización en Chile: la fase de subsidencia de la era concertacionista y sus factores determinantes

Al finalizar el apartado anterior, es posible observar que el caso chileno no es mencionado por los autores que analizan las dinámicas de la sociedad civil del continente. Esta omisión se debe al hecho que al mismo tiempo que finaliza la dictadura y se funda el proceso de redemocratización a principios de los años noventa en el país, se observa, en términos generales, una desmovilización transversal de la sociedad civil chilena.

De acuerdo con diversos diagnósticos, el retorno a la democracia en Chile se caracterizó por la fragmentación, debilitamiento y crisis de los movimientos sociales (De la Maza, 2003; Garcés y Rodríguez, 2004), por la desmovilización y desactivación de la sociedad civil (Silva, 2001), el decline de los movimientos sociales urbanos y populares (Oxhorn, 1995; Roberts, 1998; Taylor, 1998), por una sociedad ampliamente despolitizada (Gómez Leyton, 2008), por una retracción ciudadana (Moreno, 2006), por un desarrollo sin ciudadanos (Márquez y Moreno, 2007) o, inclusive, por una ausencia civil (Otano, 2006). Joignant (2003) retrata este proceso como un período de despolitización, lo que califica como una “democracia de la indiferencia”.

Diferentes adjetivos han sido utilizados para retratar el fenómeno de la migración de la ciudadanía desde la esfera pública hacia el mundo privado luego del fin del autoritarismo, así como su escasa presencia en la toma de decisiones y en la definición de la agenda política nacional en la fase post-dictatorial. Lo anterior se opondría tanto a la ya mencionada y analizada efervescencia social en el resto de Latinoamérica durante el mismo período, como al supuesto de que la reconstrucción democrática se desplegaría inserta en un escenario de posicionamiento ciudadano, revitalización y articulación de la sociedad civil.³⁹

La afirmación respecto a una desmovilización en el período 1990-2010 o era concertacionista,⁴⁰ se puede constatar en base a diferentes hechos, entre ellos, en comparación con la efervescencia y las dinámicas sociales de las etapas precedentes y subsecuentes, analizando las características de la sociedad civil del período como un ‘tipo ideal’ en función de los planteamientos teóricos expuestos en la primera sección de este capítulo, desde el fenómeno de la desafección política o, de igual forma, desde

³⁹ La hipótesis respecto a los efectos de los cambios de régimen y los procesos de democratización como factor impulsor de la actividad e incidencia de los movimientos sociales es analizado más adelante en esta sección.

⁴⁰ La Coalición de Partidos por la Democracia (Concertación) es el bloque partidos de centro-izquierda fundado el año 1988 como oposición al régimen militar de Augusto Pinochet. Esta coalición gobierna Chile por cuatro períodos consecutivos entre 1990 y 2010.

una mirada a la trayectoria la participación social de dichos veinte años. En esta sección se desarrollan cada uno de estos puntos para luego presentar, de manera general, los principales factores que han sido propuestos para dar explicación a la desactivación social de la redemocratización. Asimismo, se propone un replanteamiento de la lógica de la retracción o ausencia civil en pos de una fase de movilización latente, donde nuevas identidades y estructuras de la sociedad civil son reconstruidas y regeneradas.

1.3.1 Desmovilización de la sociedad civil chilena en la era concertacionista

La (des) activación de la sociedad civil bajo el régimen autoritario

En la historia política reciente del país se observa una fase de fuerte irrupción ciudadana en la esfera pública entre los años 1964-1973 cuando la sociedad chilena llegó a ser señalada como una de las más politizadas de Latinoamérica (Silva, 2004), siendo el período del gobierno de la Unidad Popular definido incluso como un momento de hipermovilización civil (Landsberger y McDaniel, 1976). Para Garcés y Rodríguez (2004), hasta la década del setenta y, en especial, durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular, Chile había sido un país abundante en tradiciones de organización y participación social que sufrieron un fuerte embate luego de 1973. La acometida del golpe y dictadura militar desencadenaría un proceso de desmovilización y desarticulación ciudadana explícito y forzado por los aparatos de represión de los servicios de inteligencia,⁴¹ que se materializaría con éxito especialmente durante la etapa más temprana del régimen cuando el tejido social fuera prácticamente destruido (Hipscher, 1996; Remmer, 1980).

A partir del año 1983, sin embargo y pese a la magnitud de la represión, se inicia un nuevo ciclo de agitación social bajo la forma de las *jornadas de protesta nacional* ⁴² que logran desestabilizar la dictadura militar. Antecedida por la crisis económica del año 1982, una gran movilización de la sociedad civil emerge en oposición directa al régimen de Augusto Pinochet. Pese a la represión política del Estado, los sectores

⁴¹ Como señala Stern (2009: 24), el nivel de represión durante la dictadura de Pinochet “fue a gran escala y su implementación tuvo distintos niveles. En un país de sólo diez millones de personas en 1973, los casos probados de muerte o desaparición por agentes del Estado (o por personas bajo su mando) ascienden a unos 3.000, las víctimas de la tortura llegan a decenas de miles, los arrestos políticos documentados exceden los 82.000 y el flujo de exiliados alcanza unos 200.000. Se trata de las estimaciones más bajas posibles. Aun utilizando una metodología conservadora, una cifra razonable para los muertos y desaparecidos por los agentes del Estado oscila entre 3.500 y 4.500, y para las detenciones políticas, entre 150.000 y 200.000. Algunos cálculos creíbles sobre torturas sobrepasan los 100.000 y sobre exiliados alcanzan los 400.000”.

⁴² Es el nombre con que se conocieron los días de manifestaciones civiles realizadas para protestar contra el régimen de Augusto Pinochet. Una revisión de este proceso es desarrollada en el capítulo 2.

populares tuvieron la capacidad de lentamente recomponer el quebrantado tejido social desde el que emergieron nuevas redes y organizaciones que a partir del año 1983 desplegaron el mayor movimiento de resistencia observado durante la dictadura (Garcés y Rodríguez, 2004). Con un desarrollo mayor en los barrios populares y especialmente en Santiago, durante aproximadamente tres años y de forma periódica, las jornadas incluyeron huelgas y paros en empresas y escuelas así como protestas en avenidas céntricas de la ciudad, mientras por las noches barricadas y enfrentamientos con la policía tuvieron lugar en las periferia.⁴³ Esta movilización es liderada, siguiendo a De la Maza (2010a), primeramente por el núcleo más poderoso del sindicalismo nacional (las empresas estatales) y sustentada luego por amplias masa urbanas de pobladores, estudiantes e, intermitentemente, por los sectores medios. El autor señala que las jornadas de protesta,

fueron organizadas a través de una red de grupos contruidos pacientemente durante diez años por activistas políticos, defensores de los derechos humanos, agentes pastorales de las iglesias y mujeres incorporadas a la lucha de la subsistencia, en la práctica movilizó masivamente también a los “no organizados” (2010a: 85).

Así, en 1983 se produciría lo que Garcés y De la Maza (1985) llamarán ‘la explosión de las mayorías’ en un ciclo de protestas que representaron una rearticulación de expresiones sociales y políticas que se desarrollaron al margen del Estado aunque en referencia y oposición al mismo. Para los autores, a partir de esta explosión “se trata de que la sociedad civil - dispersa y despolitizada - se reencuentra en un accionar eminentemente político por cuanto refiere al poder del Estado y a un nuevo orden democrático” (1985: 19). El movimiento antidictatorial - o también llamado movimiento democrático (Garretón, 2002)⁴⁴ - permitió la convergencia de jóvenes, mujeres, sectores de la Iglesia Cristiana, organizaciones no gubernamentales y partidos populares en una acción colectiva que modificó el escenario político de la dictadura y allanó el camino para la transición hacia la democracia. Durante esos años se produce un fuerte crecimiento de las organizaciones no gubernamentales en el país ya sea en forma de oposición o en su labor paliativa de los efectos más nocivos de la dictadura, sobre todo en los sectores populares (Loveman, 1994).

El 5 de octubre de 1988 se lleva a cabo el plebiscito en que la opción *No* pone fin al régimen de Pinochet a la vez que establece la elección democrática del presidente de la República para el año siguiente. El triunfo del *No* fue considerado como el resultado

⁴³ Ver más detalles en el segundo capítulo.

⁴⁴ Actor o movimiento central orientado hacia el cambio de régimen político.

de un trabajo en conjunto de la elite política que había sido capaz de organizarse y crear alianzas funcionales al proceso, y de una sociedad civil activa en la forma de organización y grandes movilizaciones callejeras. Sin embargo, y pese a la articulación, el entramado social y la efervescencia que se forjara en el proceso de término de la dictadura militar, Otaño (2006: 79) señala que,

más allá del alboroto, se estaba produciendo un suceso invisible, pero decisivo. Las casas de *no*, capilarizadas por todo el país, cerraban aquella noche sus puertas para no volverlas a abrir. Aquellos lugares donde se había nutrido la esperanza democrática y la participación de los jóvenes, pobladores, profesionales, mujeres, artistas, militantes, independientes, diversas minorías, echaban el telón. Se clausuraba un espacio que, con ilusión multitudinaria y anónima, se había conquistado contra la dictadura y contra el miedo. (...) Ahí quedó decretada una transición construida para la gente, pero evitando a la gente. Aquella maravillosa fiesta democrática terminó en un *coitus interruptus*, en el inicio de una ausencia civil.

De esta manera, una vez recuperada la democracia se produjo un eclipse progresivo de las organizaciones de la sociedad civil surgidas durante la dictadura como ciertas ONGs, grupos de lucha armada, redes de educación popular, la iglesia de los pobres, etc. (Salazar, 2013: 45). El movimiento social antidictadura se vio desactivado, pero no fue reemplazado por nuevas formas de participación social (De la Maza, 2003). Como advierte Silva (2004: 64), contrariando las expectativas, a partir de 1990 no se presenció una revitalización de la sociedad civil, sino al contrario “una de las características más llamativas de la nueva democracia chilena ha sido la creciente despolitización de la sociedad civil y la ausencia de grandes debates políticos nacionales”. Así, Oxhorn afirmaba el año 2003 que la sociedad civil en Chile “permanece débil y fragmentada, incapaz de retomar la iniciativa que demostró durante los años ochenta bajo el régimen militar (...) la transición dio como resultado un marco político que no estimula la participación y que es crecientemente elitista” (Oxhorn, 2003: 162). De la misma manera, en la sociedad civil chilena a partir de 1990 se observó un doble fenómeno: por una parte se produjo la desmovilización de los actores tradicionales y de aquellos que se habían articulado para protestar contra la dictadura y, por otra, se produjo una organización en torno a temas específicos, y por tanto funcionales, transitorios y fragmentados, que no tuvieron impacto sobre las líneas programáticas nacionales (Márquez y Moreno, 2007).

Año 2011: nuevo ciclo de movilización social

Las dinámicas y las características, así como el nivel de activación o movilización de la sociedad civil del período post-dictadura presentan, por tanto, un fuerte contraste al ser comparadas con aquellas observadas durante las décadas anteriores. Asimismo, la afirmación respecto a una desmovilización en el período de la redemocratización chilena no sólo puede realizarse en base a una comparación con las dinámicas sociales de etapas precedentes, sino también al observar el período subsecuente.

Aun cuando existieron episodios de movilización durante los veinte años de gobierno de la Concertación (1990-2010),⁴⁵ el ciclo que emergería a partir del año 2011 resultó ser diferente en escala e impacto, con miles de personas marchando de forma regular en Santiago y otras ciudades del país, ya sea demandando el fin al sistema de educación con fines de lucro, una mejor política energética y medioambiental, o un mejoramiento en las condiciones de vida en las regiones del país.⁴⁶ Para Mayol y Azócar (2011: 3), entre 1990 y 2011 la sociedad civil chilena privatizó los problemas públicos asumiéndolos a un nivel individual, tendencia que sería revertida durante 2011 a partir de un proceso de movilización de extensa envergadura que logró “politizar la sociedad chilena, modificando el escenario valorativo y la visión hegemónica de la sociedad”. Respecto a este fenómeno Segovia y Gamboa (2012) advierten que durante el año 2011 se observó un aumento sustantivo de la movilización con 240 marchas autorizadas (versus 134 en 2010) lo que implicó un promedio de 20 marchas mensuales en la Región Metropolitana. A nivel nacional en tanto, se estiman 6000 manifestaciones públicas y dos millones de participantes

⁴⁵ La más importante fue la llamada ‘revolución de los pingüinos’ que resultaría ser el antecedente del ciclo de protestas inauguradas por los estudiantes a partir de 2011. Este movimiento, sin embargo y en palabras de Mayol y Azócar (2011: 2), representó más bien un “espasmo expresivo”, pues pese a su intensidad no logró traducirse en una modificación de las formas de la política chilena o en una movilización transversal como la observada el año 2011.

⁴⁶ Al comienzo de 2011, grandes marchas y protestas en contra del proyecto de mega-represas ‘HidroAysén’ surge en el centro y sur de Chile, concitando un gran apoyo de la ciudadanía a través de las encuestas de opinión. Liderada por el grupo ‘Patagonia sin Represas’, las protestas se aglutinaron bajo el discurso de que el daño al ecosistema sería mayor que el beneficio económico y la provisión de energía que supondría el proyecto. A las protestas medioambientales le siguieron las más masivas y extendidas movilizaciones nacionales dentro de este ciclo de protestas: la movilización estudiantil. A partir de mayo de 2011 en adelante, constantes manifestaciones concentraron a estudiantes de escuelas y universidades y grandes grupos de clase media que demandaban el fin al modelo de educación con fines de lucro y un mejoramiento de la calidad de la educación pública. En 2012, mientras el movimiento estudiantil sufría una temporal desactivación, nuevas movilizaciones surgieron en la región patagónica de Aysén. Con un alto grado de adhesión, los habitantes de la región se embarcaron en huelgas, protestas y violentos enfrentamientos con la policía demandando mayores recursos para la región, tales como subsidios para el gas, la electricidad y el agua potable. Asimismo, en la nortina ciudad de Calama, grandes grupos protestaron por tener un mayor acceso a los beneficios económicos derivados de la minería en la zona. El reclamo implícito de las manifestaciones tanto de Calama como de Aysén fue un llamado a una mayor descentralización del país. Este ciclo de activación es tratado en extenso en el capítulo 6.

durante el año. Para los autores, “estos son los niveles de movilización social más altos vistos desde 1990. Ahora bien, más allá de la cantidad y masividad de las manifestaciones públicas, estos procesos sociales definieron la agenda política del año” (2012: 67).⁴⁷

Arrué (2013: 3) extrema aún más el argumento señalando que el movimiento estudiantil de 2011 y 2012 es “el primer gran movimiento de masa desde el golpe de Estado de 1973” y destaca su magnitud, su duración y su capacidad para desafiar el accionar del gobierno. A las multitudinarias marchas en Santiago y en todo el país se sumaron muchas veces los padres y los profesores de los estudiantes a la vez que se realizaron tomas de cientos de establecimientos educacionales, paros e incluso huelgas de hambre.

De esta manera, el ciclo de movilizaciones inaugurado el año 2011 fue entonces definido como un “estallido social” (Mira, 2011), “el resplandor de las mayorías” (Vera, 2012), o “el despertar de la sociedad” (Garcés, 2012) como una forma de retratar la emergencia de las masivas movilizaciones.⁴⁸ Para este último autor, en el período 1990-2010 “no se constituyeron movimientos sociales significativos, salvo el movimiento mapuche y, de manera más episódica, el movimiento de los secundarios a principios del 2000 y el “movimiento pingüino” del 2006. Algo cambió, sin embargo, el 2011” (Garcés, 2012: 10). La utilización de términos como ‘estallido’ o ‘despertar’ no sólo describen la emergencia de este ciclo de movilizaciones, sino que al mismo tiempo define, por oposición, el escenario previo a 2011: un momento de silencio o adormecimiento social que refleja una limitada presencia de la sociedad civil en espacios de debate público.

Desmovilización en Chile desde el marco conceptual

De esta manera, tanto en contraste con la ebullición social de las décadas del setenta y ochenta así como en comparación con movilización iniciada el año 2011, el diagnóstico respecto a una fase de desmovilización de las organizaciones y movimientos sociales de la sociedad civil durante la redemocratización en Chile cobra mayor sentido. Asimismo y tomando en consideración las definiciones planteadas en la primera sección de este capítulo, la acción colectiva observada tanto durante el régimen militar así como aquella a partir del año 2011 corresponde con lo que ha sido definido como movilización. Asimismo, es posible identificar los elementos constitutivos de la acción colectiva planteados con anterioridad. Esto es, en ambos

⁴⁷ Ver más detalles de este proceso en Reporte PNUD (2015).

⁴⁸ En palabras de Vera (2012), en junio de 2011 se hablaba de las marchas más multitudinarias en 21 años con convocatorias que excedían las 100 mil personas llegando a cifras cercanas a los 180 mil asistentes para la marcha del 22 de septiembre de 2011 sólo en la ciudad de Santiago.

ciclos de efervescencia social la sociedad civil toma el control de los recursos simbólicos o sobre una cierta historicidad, definiendo un discurso aglutinador y, con ello, una determinada identidad colectiva. De forma específica, en ambos períodos es la sociedad civil - la *social unit* de Etzioni (1968) - la que toma un control acelerado sobre la agenda política nacional, los temas y problemáticas prioritarias, las líneas programáticas, el contenido de los medios de comunicación, etc. En ambos momentos es posible identificar liderazgos o agentes movilizadores, realizar un análisis de las oportunidades políticas y los factores externos presentes (Tarrow, 2011) así como el despliegue de un determinado repertorio de acción (Tilly, 1979).

En el período 1990-2010, al contrario, los elementos constitutivos de la acción colectiva parecen estar sumergidos e invisibles, al mismo tiempo que el control y definición de la agenda, el debate público, y en definitiva, el devenir nacional - los recursos simbólicos y la historicidad - no fueron entonces definidos por la sociedad civil, sino por un actor o *social unit* diferente. Al respecto, diversos autores tienden a coincidir en que la transición democrática chilena se caracterizó por el fuerte manejo y control político de las elites - la llamada democracia de los consensos - y por la prescindencia de la participación de los ciudadanos en la construcción de la democracia (De la Maza, 2013a; Márquez y Moreno, 2007; Moreno, 2006; Rovira, 2007). Asimismo, se ha señalado que el control de la agenda política y las líneas programáticas en dicho período estuvieron dominadas y supeditadas a las lógicas del mercado. Díaz (1995) plantea que si bien el autoritarismo de Pinochet y la implementación de las políticas neoliberales tuvieron como consecuencia el aplastamiento o desarticulación de la sociedad civil, advierte que dicha desarticulación corresponde únicamente al mundo popular⁴⁹ pues, en paralelo, se reconstruyó y se potenció el mundo de los negocios.

Desactivación social y desafección política

El fenómeno de la desactivación social en Chile durante el período de la redemocratización también puede ser leído en clave de despolitización de la sociedad civil. Siguiendo a Joignant (2003), la despolitización se entiende como el desinterés por el quehacer político y la falta de involucramiento cotidiano por los asuntos públicos. La distancia entre el mundo social y el mundo político puede reflejarse tanto en el abandono de prácticas asociadas a la participación política (siendo las elecciones

⁴⁹ El autor se refiere también a los empleados públicos y el empleo industrial no asociado al procesamiento de recursos naturales así como todas las formas de trabajo que comenzaron a ser reemplazadas especialmente por empleo primario y terciario moderno.

locales y nacionales sus manifestaciones más comunes) como a acciones colectivas a nivel de reivindicación de derechos.

Hasta el año 2012 el sistema electoral chileno, diseñado durante la dictadura militar, consistía en inscripción voluntaria en los registros electorales y voto obligatorio. A partir de los datos, se observa una tendencia decreciente tanto del registro en el padrón electoral así como en el voto para el período 1990-2010, cuando luego de alcanzar su nivel más alto en las elecciones nacionales de 1989, ya en 2009 sólo 6 de cada 10 chilenos (66,4%) estaban dispuestos a participar en una elección de nivel local o nacional.⁵⁰ Más aún, entre aquellos participantes de los procesos eleccionarios, el número de abstenciones, votos nulos y blancos ha mostrado una curva ascendente luego de recuperada la democracia aumentando desde 2,7% a 13,7%, de 0,9% a 4,4% y de 1,3% a 13,5% respectivamente entre 1988 y 1997 (PNUD, 1998). Carlin (2006) señala que los analistas generalmente han asociado dicha tendencia a una pérdida de apoyo popular hacia el sistema político chileno, a la despolitización de los ciudadanos y a un cambio generacional en la cultura política en la que pierde énfasis la participación cívica y política. La no participación se observó principalmente entre los más jóvenes quienes fueron el grupo que mostró una mayor distancia, falta de disposición a participar en los comicios y, en definitiva, una tendencia apática y despolitización.⁵¹ Se trata de un proceso de desideologización, pérdida de interés y de desconfianza hacia las formas de representación y ejercicio de la política (Garcés y Valdés, 1999; Parker, 2000).

De igual manera y reportando los datos del Centro de Estudios Públicos, Joignant (2003) demuestra una tendencia positiva en la evolución del autopoicionamiento político en la categoría ‘independiente, ninguna o no sabe o no contesta’ desde un 19% en marzo de 1993 a un 37% en 1999. Asimismo, el porcentaje de la categoría ‘ninguno o no contesta’ respecto a la identificación partidista aumenta desde un 20% a un 40% en el mismo período. A la baja identificación política se suma un desarraigo social respecto a la institucionalidad democrática, con un bajo grado de confianza en instancias tales como el Congreso, los partidos políticos y la Constitución (PNUD, 2000). Según este último informe, la valoración de la democracia disminuye entre 1989 y 1999 desde un 64% a un 45% mientras sólo uno de cada cinco chilenos mostraba algún interés en temas políticos. Asimismo, Madrid (2005) analiza los patrones de

⁵⁰ Número de declarados inscritos en los registros electorales entre los entrevistados de la Encuesta Nacional UDP 2005-2009. Esta tendencia se acentúa entre los jóvenes entre 18 y 29 años cuya inscripción en los registros electorales disminuye de un 35,99% en 1988 a un 19,88% en 1997 (PNUD, 2000).

⁵¹ Esta apatía se calificó como el fenómeno ‘no estoy ni ahí’ o ‘nihismo’ que implicaba un extendido rechazo o ruptura entre los más jóvenes y la esfera política.

politización generacional en términos de interés en política e identificación ideológica, y advierte que la juventud chilena en el año 2005 era más apolítica que los cohortes de 1961 y 1969, que los adultos eran menos politizados que lo que fueron en su juventud y, aun cuando son los jóvenes los más reticentes a participar en los procesos electorarios, no son éstos más apolíticos que el resto de la sociedad.

La desactivación como participación social decreciente

La desactivación de la sociedad civil chilena durante la redemocratización no sólo puede ser analizada respecto a la baja participación de los ciudadanos en los procesos electorarios, sino también como una relación a participación en organizaciones de la sociedad civil. Esto no implica que durante el período 1990-2010 no existiera un entramado asociativo en Chile. Por el contrario y tal como lo advierte el Informe del (PNUD, 2000), dentro de la sociedad civil chilena se observa una articulación social a nivel de bases que da cuenta de una “importante densidad asociativa” que constituye una “capacidad instalada” en la sociedad chilena” (2000: 132). En el Informe se realiza un detallado catastro en el que se contabilizan 56,3 organizaciones por cada diez mil habitantes del país (cifra más alta que en países como Argentina y Francia por ejemplo). Este tipo de asociatividad, sin embargo, y tal como señala el mismo Informe, se caracterizaría por vínculos sociales más bien tenues y flexibles, instrumentales y dirigidos básicamente a la consecución de beneficios de tipo individual. La mayoría de estas asociaciones están orientadas a la sociabilidad, a fines específicos relacionados con la mejora del entorno, a la expresividad artístico-espiritual, a la información o difusión y administración o gestión. De los objetivos perseguidos por las organizaciones, el único tipo de asociatividad con un eventual potencial movilizador, dinamizador o “cuya acción es similar a las características de los llamados “movimientos sociales”” (2000: 128) son aquellas cuyo objetivo es la búsqueda de reconocimiento social y el ejercicio o defensa de derechos ciudadanos. Este último tipo, representa el 0,3% del total de organizaciones catastradas en el año 2000.⁵²

Durante la redemocratización chilena también se observaron cambios en la configuración y las dinámicas de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Tal como se planteara, durante la década del ochenta dichas organizaciones experimentan un florecimiento de cara a las políticas de la dictadura y al complejo momento que vive parte de la población. Este dinamismo, potenciado por el financiamiento de la

⁵² Como señala De la Maza (2013b), en Chile existe un alta tasa de asociatividad especialmente de base o de primer grado y con mayor densidad en las zonas rurales del país. Este tipo de asociatividad, sin embargo señala el autor, presenta una escasa interlocución y un bajo nivel de incidencia en políticas y orientaciones de gestión pública.

cooperación internacional, se caracterizó por una fuerte oposición y autonomía respecto al régimen militar. A partir de la década del noventa, en cambio, datos tanto de MIDEPLAN como de ACCIÓN constatan una disminución de este tipo de organizaciones en un contexto de crisis para las ONGs chilenas, calificando incluso el período como una “década perdida” para este sector (Gruninger, 2003: 104). El fin de la dictadura implicó una pérdida del sentido y los objetivos de trabajo de muchas de las organizaciones de este sector al mismo tiempo que se produjo el paulatino retiro de la cooperación financiera internacional. Dado este escenario, los objetivos de muchas organizaciones debieron ser replanteados y ajustados a los requerimientos programáticos y la disponibilidad de fondos en este nuevo contexto.

La creciente volatilidad y vulnerabilidad devino en problemas de legitimación e identidad, variables que también colaboraron en el debilitamiento general del sector durante la recuperación democrática. Dicha crisis identitaria surge apalancada por un cambio estructural en la relación de este sector con el Estado: mientras durante el régimen militar las ONGs se expresaron y se definieron como instituciones anti-gubernamentales, a partir de la década del noventa se constituye una nueva relación con el Estado, abriéndose un espacio para la colaboración que devino también en dependencia, cooptación, la pérdida del rol fiscalizador y la capacidad crítica ciudadana hacia las política estatales (Cancino y Vergara, 1996; González, 1999).⁵³ Para Loveman (1994), la relación del Estado con las ONGs durante la transición democrática tuvo rasgos instrumentales en la medida que las necesidades de reducción y descomprensión del primero implicaron la terciarización de muchas de sus otrora funciones a través del mundo de las ONGs. Estas últimas en tanto proveedoras de servicios, se vieron forzadas a entrar en la lógica de la competencia por licitaciones de fondos públicos.

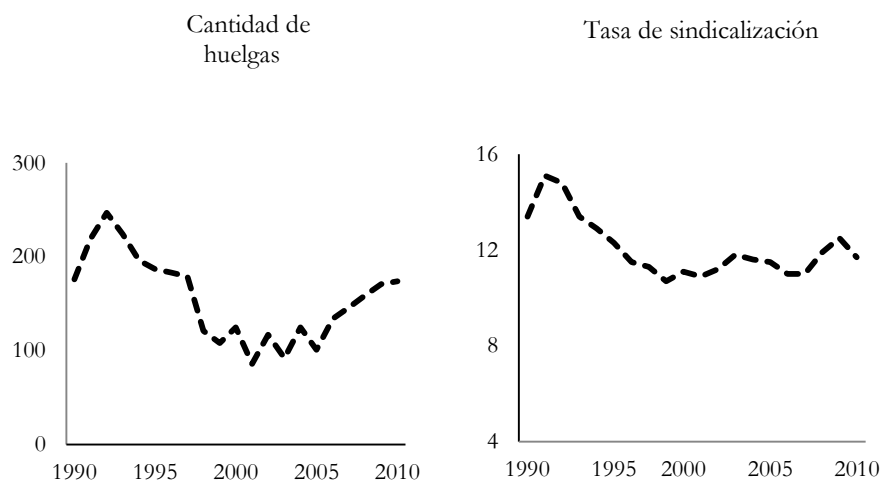
Asimismo, al constituirse las ONGs como un espacio laboral de oposición durante la dictadura, una vez retornada la democracia los profesionales de este sector, o bien mantuvieron estrechos lazos, o se transformaron directamente en funcionarios públicos del nuevo gobierno de la Concertación. Para Gruninger (2003), la mayoría de las ONGs que lograron mantenerse activas lo hicieron, ya sea por convicción o por necesidad de sobrevivencia, ajustándose dentro del marco de actividad designado por el Estado. En definitiva y como señala González (1999: 20) respecto a las ONGs,

⁵³ Para Cancino y Vergara (1996: 27), “esta nueva relación es uno de los principales cambios que se observan en el sector, generándose una vinculación de contratista-ejecutor, donde el Estado, a partir de su política social de “crecimiento con equidad”, define los sectores y territorios sobre los cuales intervenir y las ONG postulan, a través de licitaciones públicas y privadas, a la realización de proyectos y programas”.

el todavía bajo reconocimiento institucional, los modos de financiamiento que los hacen vulnerables, las relaciones extendidas y diversificadas pero controladas en los distintos temas, y la falta de espacios ideológicos, son características de la relación con el Estado durante este decenio. Ello ha contribuido a una baja del rol que ellas esperaban cumplir durante los años 90' como instituciones de fomento de la sociedad civil, las organizaciones populares y los movimientos sociales.

Finalmente, el argumento respecto a una trayectoria de desmovilización social durante el período de la redemocratización en Chile puede ser constatado desde el análisis de lo ocurrido con algunas de los repertorios acción tradicionalmente observados en Chile tales como huelgas y protestas en el período 1990-2010. Al observar las estadísticas de la Dirección de Trabajo (2013), se identifica una tendencia decreciente en términos del número de huelgas realizadas entre 1990 y 2010 cuando en 1992 se alcanzara un *peak* de 247 acciones de este tipo. El año 2001 se registra el número más bajo de huelgas efectuadas en el período lo que representa un punto de inflexión a partir del cual la tendencia comienza a revertirse y evolucionar de manera creciente. Por otra parte, la huelga como repertorio de acción está estrechamente ligada al fenómeno del sindicalismo. El sindicato, como espacio de activismo laboral y expresión de actividad política colectiva, fue tradicionalmente un actor relevante y muchas veces un agente movilizador en ciclos de movilizaciones observadas en el siglo XX en Chile tal como aquella fase de activación inaugurada en 1983 durante la dictadura (ver Garcés y De la Maza (1985) y Miller (1997)). Al igual que la trayectoria de la actividad huelguística, la tasa de sindicalización, es decir el ratio de población afiliada a sindicatos versus la fuerza de trabajo ocupada, alcanza su punto máximo en 1991 con una tasa de 15,1 y alrededor de 700 mil afiliados a sindicatos activos, cifra que desciende a 10,7 en 1999 con unos 580 mil trabajadores involucrados en este tipo de organización (Dirección del Trabajo, 2013) (ver Figura 1.3).

Figura 1.3. Número de huelgas y tasa de sindicalización para el período 1990-2010



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección del Trabajo (2013: 22,23,56).

Si bien no existe una estadística equivalente respecto a la evolución en términos cuantitativos de protestas, marchas o movilizaciones a nivel más general para el período de la redemocratización, el Observatorio Social de América Latina (OSAL)⁵⁴ realiza desde el año 2000 un seguimiento, cronología y síntesis de las principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo en América Latina que puede revelar una cierta tendencia. Según este registro, el promedio de acciones de protesta fue igual a 252 eventos por año para la década 2000-2010 con una participación baja y circunscrita a grupos específicos, cifra que prácticamente se duplica en 2011 cuando se contabilizan un total de 548 acciones, mayores además en impacto y escala.⁵⁵ Respecto a la participación de la sociedad civil en manifestaciones políticas, los datos de la Encuesta Mundial de Valores (2009) revelan una tendencia negativa en términos de la categoría ‘he participado’ en manifestaciones a medida que la redemocratización fue desenvolviéndose. Según dicho estudio, en 1990 un 30,1% de los encuestados declaraba haber participado en una manifestación (pacífica/legal), mientras en 1996 esta misma categoría se reduce a 14,8%, vuelve a incrementarse el año 2000 a 15,7 para el 2005 igualar un 18,2%.

⁵⁴ Ver <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=>

⁵⁵ Se trata de un registro cualitativo realizado a partir de la revisión de prensa y es usado acá sólo a modo de referencia. La afirmación respecto a un mayor alcance y escala de los eventos, es propia y en base a la revisión a la información presentada en dichos informes.

1.3.2 Desactivación social en la redemocratización: diversidad de factores

Una vez identificado el repliegue de la sociedad civil chilena, el ejercicio que generalmente sucede es un análisis sobre los factores que contribuyeron a dar forma a esta transformación “desde la efervescencia [de décadas anteriores] a la desactivación” (Silva, 2001). Este proceder es reconocible en parte de la extensa literatura sobre la transitología chilena que, abordando el fenómeno desde los procesos micro, meso o macrosociales dependiendo del autor, permite obtener una amplia constelación de factores que revelan la complejidad del problema de la desmovilización durante la era de la Concertación.

Tal como se mencionara con anterioridad, una primera explicación tiene que ver con la tesis del cambio en las condiciones políticas para explicar tránsitos de pasividad a actividad política o viceversa (Foweraker, 1995; McAdam *et al.* 2001; Remmer, 1980; Tarrow, 1996). Esta tesis está en línea con lo planteado por los teóricos del proceso político presentados en la primera sección de este capítulo. Para esta teoría, la actividad de los movimientos sociales es considerada un fenómeno cíclico, que surge y decae en función de factores externos o las oportunidades políticas cambiantes al movimiento tales como la apertura o clausura de un sistema, lo que genera cambios estructurales que impactan substancialmente en las estrategias y formas de la acción colectiva.

De manera más específica, Pickvance (1999) analiza las transiciones de regímenes autoritarios a sistemas democráticos y su impacto sobre la (des)activación de la sociedad civil, planteando dos diferentes hipótesis o escenarios. La primera asume que la democratización debería tener un efecto positivo sobre la actividad de los movimientos sociales en la medida que muchas de las limitaciones tales como obstáculos legales, la clausura de las instituciones del Estado y su respuesta represiva, son eliminadas una vez que la democracia retorna y se expanden con ello las oportunidades para la participación política. La hipótesis contraria plantea que la democratización obstaculizaría el desarrollo de la actividad movilizadora⁵⁶ dado que los movimientos sociales de oposición al autoritarismo pierden su sentido una vez recuperada la democracia. Asimismo, en tanto los partidos políticos son legalizados, los movimientos sociales dejan de ser el único espacio de canalización de demandas, la participación institucionalizada se vuelve más atractiva, mientras los activistas y los

⁵⁶ Esta última encontraría un mejor escenario hacia la etapa final de un sistema autoritario más que en uno democrático. Básicamente porque en este escenario es que surgen las ideas y las demandas que desafían el sistema. Al estar los partidos políticos y otras instituciones oficiales prohibidas, los movimientos sociales se transforman en el espacio para canalizar dichas demandas que pueden además estar apoyadas e incitadas por ciertas elites opositoras.

líderes más capacitados de los movimientos son absorbidos por los nuevos gobiernos. Esta última hipótesis junto a la teoría del proceso político es abordada en los trabajos de Hipsher (1996, 1998) para el caso chileno analizando el decline de la actividad de los movimiento sociales por efecto de la institucionalización.

La tesis del cambio de régimen y su efecto inhibitor sobre la movilización social entrega luces importantes para entender la desmovilización. Sin embargo, aun cuando la desmovilización chilena en 1990-2010 puede ser entendida desde esta hipótesis y así como desde el fenómeno de la institucionalización de los movimientos sociales ocurrida post dictadura, no puede ser reducida únicamente a ello. Más aun y para la misma Hipsher (1998), el impacto de la institucionalización en los movimientos e, incluso, el proceso político mayor varía de caso a caso y depende primordialmente del escenario político.

Junto a estos argumentos, se ha planteado que el repliegue de la sociedad civil luego del fin del régimen militar estuvo influenciada por un amplio abanico de variables que van desde el trauma de la dictadura hasta el proceso de individualización global post-moderno. Estas explicaciones incluyen la satisfacción del fin de la fase dictatorial y la espera paciente de una alegría que estaba por venir,⁵⁷ el boom consumista que produjo la inyección de capital extranjero en el modelo neoliberal instaurado por Pinochet, la ausencia de una alternativa viable al modelo neoliberal mundial luego del fin de los modelos populistas y socialistas y la caída del muro de Berlín (Salazar, 2013). Otra tesis plantea que la redemocratización chilena estuvo marcada por la instalación y expansión de un malestar social implícito derivado de la desigualdad socioeconómica y una percepción de abuso que fue procesado a través de la sublimación o la represión y con ello con una despolitización (Mayol y Azócar, 2011). Asimismo, el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica por los gobiernos de la concertación que tendió conscientemente a limitar la participación ciudadana, la política de los consensos, la naturaleza pactada de la transición chilena y el fuerte control y presencia de las elites han sido otro de los factores propuestos para explicar la retracción civil del período (De la Maza, 2013a; Garcés y Rodríguez, 2004; Hipsher, 1996; Márquez y Moreno, 2007; Moreno, 2006; Oxhorn, 1994b, 2003; Rovira, 2007). Por otra parte, ciertos autores señalarán que la presencia de enclaves autoritarios, la democracia tutelada y los resabios del régimen militar tuvieron un efecto negativo sobre la inclusión ciudadana (De la Cuadra, 2003; Vergara, 2003). Otros trabajos alertan sobre la importancia de la profunda y radical modernización neoliberal o la mantención y profundización de la inequidad social (De la Maza, 2003; Gómez Leyton, 2008; Roberts, 1998) así como el fortalecimiento de las posiciones tecnócratas

⁵⁷ 'La alegría ya viene' fue el slogan utilizado en la franja electoral de la opción No.

al interior de la democracia (Silva, 1997) para explicar la apatía y la ausencia civil en el dominio público. Otros autores se centran en el trauma colectivo generado por la represión y abusos de derechos humanos en dictadura (Barbera, 2009; Garretón, 1993; Lechner y Güell, 1998; Silva, 1999, 2004) como los grandes causantes de la desactivación social en Chile.

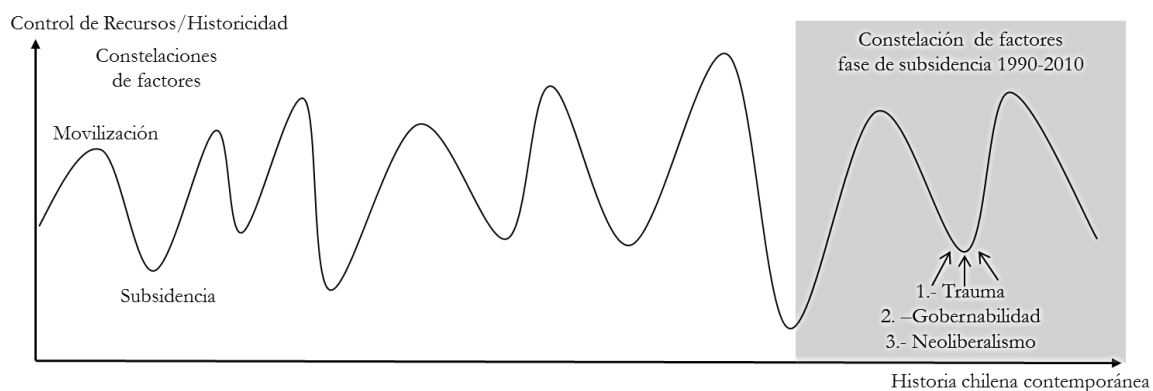
De acuerdo a lo anterior, este estudio propone que la desactivación política así como los intereses, objetivos y formas de asociación de la sociedad civil durante el período 1990-2010 - tal como ya se examinara para la sociedad civil latinoamericana - estuvieron fuertemente influenciados por el trauma colectivo heredado de la dictadura e instalado en la memoria colectiva, la relación de la sociedad civil con el Estado y su paradigma de gobernabilidad, y, finalmente por las lógicas de la modernidad neoliberal como grandes factores inhibidores del involucramiento público ciudadano. Así, el propósito de este estudio es retomar y ampliar el debate respecto a los procesos de activación y especialmente de desactivación política de la sociedad civil chilena, poniendo especial atención en el período de reconstrucción democrática llevado a cabo por los cuatro gobiernos de la Concertación como un momento de especial desactivación o desmovilización política.

Estos factores y la manera en que influenciaron las dinámicas de la sociedad civil, con mayor o menor fuerza dependiendo del momento analizado dentro de la época concertacionista, se alza como el principal argumento a desarrollar de lo largo de este trabajo. Así, se busca contribuir de forma teórica y empírica al entendimiento de esta fase de desmovilización social, al recoger y analizar de forma metódica el debate antes expuesto que, en ciertos casos de manera especulativa, se ha alzado para intentar explicar el fenómeno. A través de los tres grandes factores propuestos se busca sintetizar y sistematizar la discusión en torno a dicha desmovilización social.

Asimismo, la fase post-dictatorial se presenta como un terreno fecundo no sólo para analizar en profundidad los factores tras la desmovilización, sino también para examinar el proceso en términos de la reconstrucción identitaria que sentó las bases y generó las plataformas necesarias para la nueva fase de movilización inaugurada en 2011. Observada así, la premisa del debilitamiento o ausencia ciudadana en el período 1990-2010 hasta aquí expuesta, es cuestionada, replanteada y ampliada al ser considerada como un proceso de reestructuración de la sociedad civil donde nuevas identidades y estructuras sociales son generadas, representado así una fase de 'incubación' para el ciclo de activación venidero. Lo anterior, pues tal como fuera expuesto en la primera sección de este capítulo, los momentos de aparente desactivación política forman parte de un ciclo o trayectoria más amplia de actividad social, caracterizada por movimientos subterráneos e invisibles de (re)estructuración,

(re)construcción identitaria y acomodamiento social y no necesariamente un por una ausencia ciudadana. El período Concertacionista es considerado así como una fase de subsidencia (Salazar, 2001) o de movilización latente (Melucci, 1989) dentro de un proceso político mayor en la historia contemporánea del país. Abordado desde esta perspectiva analítica, el período posterior a la dictadura militar se ofrece como espacio inexplorado y fértil para el estudio de las dinámicas de la sociedad civil.

Figura 1.4. Esquema explicativo de las trayectorias de (des)activación social en Chile



Nota: las fases de movilización (*peaks* en esta curva) son entre 1819 y 1832, 1834 y 1837, 1846 y 1852, 1888 y 1890, 1900 y 1907, 1908 y 1925, 1931 y 1932, 1946 y 1955, 1967 y 1973 y 1982-1989 (Salazar, 2001), a lo que es posible agregar 2011-?.

Fuente: Elaboración propia.

Así, parte fundamental de la fase de subsidencia post-dictadura tiene que ver con los factores que la condicionaron, pues en ellos se encuentran también los insumos para el desarrollo de la sociedad civil y las características de una nueva fase de efervescencia. Lo anterior, pues es totalmente diferente pasar de activación a desactivación social por la influencia de dictaduras, masacres o guerras, que por la consecución parcial o triunfo en las demandas contenidas en una movilización. Por lo mismo, es diferente la fase de desmovilización iniciada en Chile tras el golpe militar y la feroz represión por parte del Estado (1973-1983) que aquella observada a partir de 1990 en un escenario democrático. Las constelaciones de factores específicas que determinan una fase de desactivación impactan en el desarrollo de la sociedad civil y con ello en las dinámicas que se incuban y que explotarán pronto en nuevas fases de activación.

De esta forma, este trabajo se enfoca en el análisis de aquellos factores que mayormente dieron pie a la etapa de latencia post-dictadura y que, al mismo tiempo, impactaron en la configuración de las dinámicas sociales y culturales - así como en los

elementos constitutivos de la acción colectiva presentados en la primera sección de este capítulo - de la sociedad civil del período. En el próximo capítulo, se analizan las trayectorias de movilización y especialmente de desmovilización en la historia chilena del siglo XX desde donde se puede deducir la influencia del trauma o memoria, gobernabilidad y modelo económico sobre tales procesos.

Capítulo 2

Trayectorias de movilización y desmovilización de la sociedad civil chilena

El arribo del siglo XX, y especialmente sus primeras décadas, sorprende a los chilenos en un escenario económico complejo, con una crisis del sector minero exportador y de la industria del salitre, la desnacionalización de la nueva minería del cobre, la desvalorización del peso chileno, una caída del precio mundial del trigo y el progresivo agotamiento del sistema de hacienda, entre otras problemáticas. Producto de este precario contexto económico, abunda la pobreza, la esperanza de vida no supera los 30 años y la mortalidad infantil es del 34,2%, hay escasez de luz eléctrica, agua potable, servicios sociales y antibióticos. Se observa una extensa población rural, analfabetismo - 57% y 60% respectivamente hacia 1907 - y hacinamiento, mientras la participación política es sumamente excluyente, con sólo un 6% de la población con derecho a votar (Braun-Llona *et al.*, 2000).

Dado este panorama, durante la llamada ‘cuestión social’ se vive uno de las etapas de mayor convulsión ciudadana - con un registro de más de 200 huelgas entre 1901 y 1908 - y la inminencia de una explosión revolucionaria (Salazar, 2013). El telón de fondo a las protestas en este período es la contracción económica y éstas se despliegan en función de la escasez de recursos, la relación precios-salarios y una exigencia por el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. Las acciones colectivas toman la forma preferente de desorden público y saqueos, con artesanos, obreros y mineros como sus principales protagonistas. Se dan especialmente en salitreras, puertos y ciudades, espacios que se convierten en centros neurálgicos para las nuevas organizaciones populares como mutuales y, más tarde, mancomunales o sociedades de resistencia.

Las movilizaciones fueron consideradas una amenaza al orden público y a la propiedad privada y tratadas, por tanto, con represión y violencia por parte de las autoridades policiales, o en casos más graves, por la Marina o el Ejército. Las respuestas del Estado sin embargo, lejos de aplacar el malestar social, provocaron una expansión de las demandas. En este contexto surgen movilizaciones icónicas como la huelga de la mancomunal de Iquique (1901), de la sociedad de resistencia de los tranviarios de Santiago (1902) y la huelga portuaria en Valparaíso que incluyó incendios, saqueos, un asalto al Mercurio de Valparaíso y alrededor de medio centenar de muertos (1903). La huelga por el alza de los precios de la carne en 1905 en Santiago contabilizó alrededor de 70 muertos y 300 heridos. En 1906, los trabajadores de Antofagasta se organizan para exigir una extensión de media hora para almorzar,

protesta que provocó serios disturbios, incendios y saqueos que le costaron la vida a alrededor de 150 personas (Garcés, 2003a).

En 1907 tiene lugar el movimiento más multitudinario e importante de la época y uno de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno. Más de dos mil trabajadores marcharon desde las salitreras hasta Iquique por la demanda de mejoras salariales y laborales, la adopción de medidas de seguridad industrial y el fin del monopolio de las pulperías, arribando a la ciudad con la firme decisión de permanecer allí hasta que las compañías salitreras respondieran a sus exigencias. Con el pasar de los días, el movimiento fue creciendo con nuevos contingentes de mineros adhiriendo diariamente al paro, alcanzando, según estimaciones de la época, cifras de huelguistas que oscilaban entre 15 mil a 23 mil personas, paralizando por completo las actividades del puerto y la producción minera de toda la región.¹

Las autoridades de las compañías se negaron a negociar mientras las labores no fueran reanudadas y la intervención del Estado se volvió confrontacional. El ministro del Interior Rafael Sotomayor y el intendente Carlos Eastman ordenaron diversas restricciones incluidas las libertades de reunión y de tránsito, ordenando a los huelguistas a abandonar la ciudad el 21 de diciembre. Luego de una semana agolpados en la Escuela Santa María y frente a la negativa de desalojar, el general Roberto Silva Renard ordenó a sus tropas abrir fuego en contra de los protestantes, con un trágico y aún indeterminado saldo de muertos que fluctúa entre los 500 y 2 mil personas. La versión del dirigente José Santos Morales desde su exilio en Bolivia el 20 de octubre de 1908, entrega pistas para entender la gravedad de lo ocurrido así como sus repercusiones a nivel de la memoria colectiva:

A la primera descarga se izó una gran bandera blanca, pero no se hizo caso de ella y vino la segunda descarga, cayendo algunos muertos y varios heridos (...) Siguieron a las descargas ya dichas, el funcionamiento de ametralladoras con puntería fija a la masa del pueblo agrupada detrás de la reja de la escuela, haciéndose una matanza horrorosa de obreros y cayendo también algunas mujeres y niños (...) Van ya diez meses transcurridos desde el término de la más injusta de las huelgas, y de la más infame carnicería, sólo porque pedíamos respetuosos un destello de justicia. Con pesadumbre veo todavía que la saña capitalista y oligarca de ese Chile, aún no se sacia, y se complace con mantenernos en la proscripción a unos, encarcelados a otros y en el otro mundo a un millar de víctimas sin

¹ Ver sección 'Masacre de la Escuela Santa María de Iquique' en el sitio www.memoriachilena.cl

que la justicia se pronuncie en ese eterno proceso que habrá de conservarse para vergüenza eterna de explotadores y tiranos (Bravo Elizondo, 1993: 181–187).²

La masacre de Santa María se convirtió en un símbolo de lucha social y en un hito de los movimientos de trabajadores que quedó enquistada en la memoria colectiva del país, sobreviviendo como uno de los grandes nudos convocantes de la memoria, incluso un centenar de años después (Artaza *et al.* 2009; Bravo Elizondo, 1993; Devés, 1997; González, 1998). Como señala González Miranda (1998), la huelga y posterior matanza tuvieron un gran impacto en la opinión pública de la época, con denuncias en el Congreso de la República y debates a nivel político e intelectual. Los hechos reflejaron una crisis profunda del modelo socio-político e instaron la necesidad de abrir una profunda reflexión sobre la ‘cuestión social’, emergieron líderes de opinión - entre ellos Luis Emilio Recabarren - y un consenso social y político respecto a los problemas de la explotación salitrera y al descontento generalizado al alero de dicha actividad.

Luego de la matanza de 1907, el movimiento de trabajadores sufre un duro embate y un consecuente repliegue, desmovilización o subsidencia donde los sectores populares organizados interpretaron, reformularon y se sumieron en un proceso reflexivo respecto a sus estrategias a la luz de las enseñanzas extraídas de la tragedia. Como señala Grez (2000), la masacre de Iquique cerró un ciclo de la historia del movimiento obrero y popular que provocó la desaparición del movimiento mancomunal y un marcado reflujo de las luchas reivindicativas. Revisando las dramáticas experiencias vividas desde fines del siglo XIX y principios del XX, Luis Emilio Recabarren señalaría:

Hasta hoy los obreros no han podido seguir un camino más seguro. Son en su mayor parte ignorantes, sin orientaciones científicas sobre la lucha de clases, sin métodos, sin una organización siquiera regular, son muy pocos realmente inteligentes y con una prensa aunque numerosa, pero falta de rumbos precisos en esta clase de luchas. Así se explica que

² Una versión diferente es la del periódico *El Chileno* del 3 de enero de 1908: “Como a las 1 ½ del día, el general señor Silva Renard, jefe de la Division, recibió el decreto por medio de un ayudante y en el acto se puso al frente de sus tropas, y las 2 de la tarde rodeaba el local de la Plaza Montt y la Escuela Santa María, en donde habían más de 10,000 huelguistas. (...) Los huelguistas exaltados y más que todo por los jefes y agitadores, resistieron a las llamadas amistosas de los jefes militares y llegaron hasta ofender con violencia y actitud agresiva el honor de esos jefes y la disciplina del Ejército. El señor jeneral se encontró por fin en la dolorosa pero impostergable necesidad de cumplir lo ordenado (...) acto continuo, se ordenó hacer fuego y en ese mismo momento, se sintieron disparos desde la carpa de la Plaza Montt” (*El Chileno*, 1908).

solo han pensado en la violencia, y cuyo método ensayado ya en repetidas ocasiones y estrellado contra las bayonetas y los cañones, debe señalar un cambio de táctica más inteligente, menos violenta, más eficaz, menos bulliciosa: la organización poderosa y perfecta del proletariado en el terreno económico, político y cooperativo para sustituir inteligentemente por estos tres caminos la actual sociedad. Lo demás sería abatir las energías obreras (Cruzat y Devés, 1985: 124).

Rápidamente, este proceso reflexivo comenzó a dar sus frutos en términos de reacción y rearticulación social. Los desacatos individuales o colectivos sin organización fueron en este período reemplazados por las huelgas y protestas organizadas, los sindicatos y partidos obreros cuando: “el populismo y las nuevas ideologías de redención social - socialismo y anarquismo - contribuyeron a la morigeración de las pasiones populares, conduciendo a los trabajadores por la senda de la ilustración y el clasismo organizado” (Grez, 2000). Así, este período se vuelve clave para entender el germen y formación de las formas de organización y movimientos sociales que serán protagonistas del siglo XX, así como de los repertorios de acción que les caracterizarán.

Bajo el espíritu de fortalecimiento del entramado social descrito por Recabarren, en 1909 se funda la Federación Obrera de Chile (FOCH) y en 1912 nace el Partido Obrero Socialista (POS) que, liderado por Recabarren, buscó que el movimiento social tuviera una mayor consistencia ideológica (ver Ortiz (2005)). Desde 1906, los estudiantes universitarios, a través Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), comienzan a asumir un rol cada vez más activo en las luchas reivindicativas de la clase trabajadora. Hacia 1910, se contabilizaban más de 400 organizaciones mutualistas y un número expansivo de sindicatos de trabajadores, consiguiendo entre sus primeras reivindicaciones el derecho a descanso dominical, mejoras en viviendas obreras y una ley de accidentes del trabajo. Los sindicatos obreros experimentaron de un rápido crecimiento durante aquellos años, registrándose unas 130 huelgas entre 1917 y 1920 a lo largo de todo Chile, con la huelga y masacre de Magallanes como uno de los hechos más relevantes del período (ver Delgado (1996)).

Las elecciones de 1920 se desatan en medio de un Chile convulsionado por años de efervescencia social, en un contexto mundial marcado por la Revolución Rusa y un clima revolucionario de poderosa influencia sobre las masas de trabajadores del mundo. Arturo Alessandri Palma accede al poder mediante promesas de una legislación social y leyes a favor de los sectores populares representando, al parecer, las ansias de justicia popular y el arribo de los intereses de los sectores medios a La Moneda. En estos años, los trabajadores entran en una fase activa de lucha social en

que se fueron perfeccionando y haciéndose más efectivas las armas políticas y sindicales que se forjaron en la postrimería del siglo XIX.

Se presentan a continuación las trayectorias de movilización y desmovilización de la sociedad civil chilena a partir de 1920, desde un ciclo político marcado por un intento de democratización del poder y un correlato de efervescencia social expansiva, hasta el período dictatorial, con nítidas fases de desmovilización y movilización definidas por la represión y el autoritarismo. Como se puede deducir del siguiente relato, las trayectorias de (des)activación social se han visto constantemente influidas y determinadas por factores internos a los movimientos sociales, tales como la acción de agentes movilizadores o convocantes, o la constitución de una determinada identidad social - compuesta muchas veces por una memoria traumática - que une, aglutina y explosiona. Asimismo, son trayectorias moldeadas por variables externas, un juego permanente entre el quehacer, los desafíos y necesidades políticas del Estado, los vaivenes del mercado y la economía, y una respuesta - ya sea de movilización o bien de repliegue - de la sociedad civil, tal como ocurrirá más adelante en el período de recuperación democrática.

2.1 Constelación histórica 1920-1938: la erosión del sistema oligárquico, la convergencia de los movimientos sociales y las clases medias

2.1.1 Década del veinte: la institucionalización de los movimientos sociales

El panorama económico nacional a principios de los años veinte padecía de una serie de dificultades y problemas que se prolongaron con breves períodos de recuperación hasta 1927. Tanto el modelo económico como un sistema político excluyente mostraban fisuras y señales de agotamiento, mientras los trabajadores y algunos sectores de las capas medias, tal como se adelantó, expresaban agitación, molestia y ansias de cambio social.

La agitada y larga fase de movilización iniciada a principios del siglo XX, que posiciona a la protesta social y a la huelga como herramienta de presión a las autoridades así como a los primeros movimientos sociales con una orgánica más establecida, redundó en la elección de Arturo Alessandri Palma. Su triunfo fue el resultado de una campaña que buscaba recoger, hacerse cargo y encausar las causas del descontento, de las luchas sociales y del fuerte espíritu reformista que recibía a la década de 1920, iniciando con ello un período de “reformismo mesocrático” (Gazmuri, 2014: 125). Como señala este autor, la Alianza Liberal de Alessandri, aun

cuando incluía a oligarcas, estaba compuesta mayoritariamente de sectores medios, pequeños comerciantes, medianos industriales y agricultores, artesanos y obreros.³

Trabajadores y estudiantes, actores nuevos en la vida política y social chilena, contribuyeron en gran medida a la efervescencia y agitación de aquellos años. Los dirigentes del Partido Obrero Socialista decidieron fijar objetivos más claros con el fin de “reforzar y definir su conducta revolucionaria no sólo en conformidad a los principios del marxismo, sino también teniendo en cuenta las enseñanzas que impartía Lenin, y las ricas y novedosas experiencias que entregaban la Revolución Rusa, el bullente movimiento obrero internacional y aun las nuevas características que empezaba a presentar el movimiento obrero chileno” (Ramírez, 1984: 78). El Partido Obrero Socialista de Recabarren decide así formar parte de la Internacional Comunista, transformándose en 1922 en el Partido Comunista de Chile, que defendía la toma de poder por parte del proletariado para instaurar un sistema socialista en el país.

Por su parte, los centros de estudiantes agrupados en la FECH reunían la avanzada anarquista, militantes socialistas, sindicalistas, artistas e intelectuales, representando a un sector medio ilustrado preocupado por la cuestión social, cercano al mundo obrero y que manifestaba desacuerdo y rechazo a la vieja república oligárquica. Y aunque en un primer momento los estudiantes apoyaron a Alessandri, se mostraron luego desconfiados de su programa de gobierno y sus promesas de favorecer verdaderamente al proletariado. Prontamente y dada una serie de eventos como el asalto de sectores conservadores a la sede de la FECH en julio de 1920, el encarcelamiento y persecución de algunos de sus miembros y la muerte de José Domingo Gómez Rojas en la cárcel, radicalizaron su posición y fortalecieron su alianza con los sectores revolucionarios, para definitivamente quitarle apoyo al nuevo presidente luego de la matanza de salitreros en San Gregorio en 1921.⁴

A las fluctuaciones del mercado internacional luego de la primera guerra, se añadió un decline en las exportaciones, un quiebre en la industria salitrera y, con ello, una merma en las rentas fiscales, la paralización de obras públicas y el establecimiento de

³ En el discurso de proclamación de su candidatura, Alessandri señala: “El país atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia. Vivimos desde hace años en medio de la anarquía y del desgobierno. Toda clase de angustias y de dificultades obstaculizan la marcha próspera de las actividades en esta patria tan cara a todos nosotros. El país desea, exige un gobierno sólido y fuerte, con rumbos definidos, orientados sobre la base de una política netamente nacional. (...) La solución de este gravísimo problema de nuestra vida nacional no admite ya espera. Quienes discuten su oportunidad, no aprecian debidamente las exigencias imperiosas del orden social y de progreso sólido y firme de nuestro país. Nadie puede desconocer la eficacia del proletariado como factor económico irremplazable, y el Estado, representado por el gobierno, debe tener los elementos necesarios para defenderlo, física, moral e intelectualmente” (Alessandri Palma, 1967, pp. 389–399).

⁴ Ver Recabarren (2003).

nuevos impuestos para reducir la magnitud de los déficits (Ramírez, 1984). Por otra parte, el Congreso, mayoritariamente opositor, rechazó las reformas propuestas por el Ejecutivo, incluidas las leyes sociales como la promulgación del Código del Trabajo y la Previsión Social. Asimismo, la post guerra inaugura un período global de transformación social que se traduciría en nuevos paradigmas e instituciones. Con el desafío de la reconstrucción de las naciones europeas, la noción de un Estado interventor comienza a volverse hegemónica en occidente. En Chile, Alessandri vuelve suya la idea de un ente estatal con mayores atribuciones en contraposición a un Estado que no toma parte en los asuntos económicos ni sociales, característico del parlamentarismo o la etapa previa a 1920.

Como señala Gazmuri (2014: 129), el Presidente Alessandri consideraba este conjunto de reformas como la manera de canalizar legalmente la protesta obrera y facilitar una evolución social más pacífica y alternativa frente a las fórmulas represivas que silenciaban sólo temporalmente a los movimientos sociales. Las ansias reformistas en torno a la legislación social y leyes a favor de los sectores populares se vieron, sin embargo, aplazadas o paralizadas, tanto por la estructura constitucional que favorecía al poder del Congreso en desmedro del ejecutivo, como por la crisis económica en que se encontraba sumido el país.

El malestar social continuó expandiéndose, mientras los sectores laborales encabezados por la FOCH arengaban nuevas huelgas y movilizaciones como medio de presión. En 1924 y haciendo sonar sus sables, oficiales militares de clase media demostraron su malestar por el quehacer del gobierno y el impacto de la situación financiera sobre su mundo e intereses. Bajo presión militar, el legislativo aprobó la realización del programa de Alessandri: proyectos referentes a cooperativas, contratos de trabajo, sindicatos, tribunales de conciliación y arbitraje, indemnización por accidentes de trabajo, caja de empleados particulares, caja de seguro obligatorio, derecho a huelga y leyes militares. Se concretaba así, parte de las demandas impuestas por los trabajadores a través de años de protesta y presión social.

En ese mismo período sin embargo y como contracara a este progresista proceso, se producen importantes huelgas en la pampa nortina en paralelo a la demanda de nacionalización de la industria salitrera por parte de la FOCH. La respuesta del gobierno a la presión obrera desembocó en la llamada Matanza de La Coruña, donde un número todavía indeterminado de trabajadores del salitre perdieron la vida producto de las acciones represivas (Álvarez, 1997). A esas alturas y frente a un Comité Militar que exige a Alessandri la disolución del Congreso, el presidente decide renunciar y autoexiliarse, dando paso a la formación de una Junta de Gobierno que

procedió a disolver el congreso y quebrantar con ello el régimen constitucional y el sistema parlamentario.

En 1925 y tras un golpe de Estado liderado por Carlos Ibáñez del Campo que derroca a la Junta de gobierno militar, se le pide a Alessandri que regrese de su exilio a cumplir con el resto de su mandato. La necesidad de una nueva constitución se vuelve explícita tanto para el presidente como por la ciudadanía. Y es este último actor, quien se organiza espontáneamente en la Asamblea Constituyente de Trabajadores e Intelectuales (ver Salazar (1992)). Para Salazar y Pinto (1999: 45), esta Asamblea “sistematizó el proyecto de Estado de los movimientos sociales, recogiendo demandas que se arrastraban desde el siglo anterior”. De acuerdo con los acuerdos de esta reunión, el deber del Estado sería coordinar y fomentar la producción económica, debía ser federal y colegiado y el poder legislativo debía estar compuesto de representantes elegidos por gremios organizados. El desarrollo social sería considerado un derecho, mientras la educación debía ser pública y gratuita, entre otras disposiciones.

La Constitución que prevaleció, sin embargo, fue aquella emanada de una Comisión Consultiva designada por Alessandri, que elaboró un proyecto de Constitución aprobado por medio de un plebiscito. El documento incluía, entre otras importantes medidas, una reafirmación del Poder Ejecutivo, una separación definitiva de la Iglesia y el Estado y el fin legal del régimen parlamentario. Con lo anterior, la acción colectiva de la sociedad civil sintetizada en la Asamblea Constituyente de 1925, sufre una derrota y un posterior repliegue y con ello, luego de una larga fase de activación y movilización - quizás las más larga que presenciara el siglo XX - se da paso a un período de latencia, subsidencia o desmovilización que duraría aproximadamente hasta 1932. Para Salazar y Pinto (1999: 46–47), la sociedad civil y los movimientos sociales eran, sin embargo a esas alturas y después de 1908, “muchísimo más fuertes que a comienzos de la República”; luego de un agitado proceso social, en 1925 “lo que se logró al final fue la *governabilidad* de la sociedad civil en los términos tradicionalmente requeridos por la clase política civil”. En aquellos años, el movimiento de trabajadores se caracterizaba por ser sumamente politizado, con divisiones sindicales que indicaban diferencias ideológicas o de partido, mientras el problema de la relación entre los partidos y los sindicatos ya se hacía evidente (Angell, 1974).

A partir del levantamiento militar en 1924, comienza un período de sumisión a las fuerzas armadas. La fase de latencia de los movimientos sociales se ve influida por la elección de Ibáñez en 1927 quien asume un autoritario gobierno con una fuerte represión a la oposición, censura a la prensa y subordinación del emergente

movimiento sindical. Bajo un decreto del Ministerio del Interior, se buscó asegurar el orden por todos los medios: “desde hoy, en consecuencia, no habrá en Chile ni comunismo ni anarquismo. El control del país no pueden tenerlo, justificadamente, desplazados de la cosa pública, como no lo tendrán tampoco los que han tenido la audacia de reemplazar nuestra bandera por el trapo rojo” (Rojas, 1993: 24). En la tabla 2.1 se puede apreciar la merma en la participación en organizaciones obreras tras el impacto de la dictadura de Ibañez.

Tabla 2.1. Asociación obrera 1911-1933.

Año	Socios				
	Sociedades	Otras	Socios	Total	Total
	Socorro	sociedades	Sindicatos	Sociedades	Socios
	Mutuo				
1911	-	68	-	433	65136
1913	69387	119	8222	547	77609
1923	98237	776	79474	1114	177711
1933	48615	549	68132	928	16747

Fuente: Adaptado de Fernández Darraz (2003: 130).

El régimen autoritario gozó, sin embargo, de aceptación popular dado un auge económico por alza del precio del salitre, la emergencia de la gran minería del cobre, una fuerte expansión del gasto público y la modernización de la infraestructura productiva del país (Errázuriz, 2014). Al mismo tiempo, los diez años posteriores a 1924 fueron de gran impacto para el movimiento obrero en Chile: se inició la formación de sindicatos legales y un sistema de relaciones industriales reglamentado por el Estado y a principio de la década del treinta el desempleo redujo el tamaño de los sindicatos y la industrialización los modificó. La dictadura de Ibañez proscribió al Partido Comunista y persiguió al FOCH, el anarquismo perdió fuerza mientras los comunistas dejaron de proclamar la guerra de clases para comenzar a promover la creación de un Frente Popular (Angell, 1974; Collier y Sater, 1998). En este contexto, los obreros sindicalizados fueron espectadores más que partícipes de los acontecimientos de estos años como la promulgación de la nueva constitución y el nuevo un código laboral (1931), reformas sociales que fueron aprobados sin la participación de los sindicatos (Angell, 1974).

La crisis mundial de 1929 remeció a la economía chilena que vio resentida todas las actividades productivas, los ingresos fiscales y las divisas. El alto endeudamiento

público y una errática política monetaria del gobierno volvieron inviable la situación económica y provocaron un colapso no sólo financiero, sino también productivo y fiscal. Las exportaciones de salitre y cobre se desplomaron con graves consecuencias sobre la economía interna, los ingresos y reservas fiscales. A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo:

La historia económica de Chile guardará del año 1931 el recuerdo de una de las crisis más graves porque ha tenido que atravesar el país (...) cuyos efectos se manifestaron en un progresivo decaimiento de todas las actividades de comercio, de las industrias y la agricultura. A esta crisis netamente económica vino a unirse, desde mediados del año pasado, una crisis no menos grave de carácter político financiero y monetario. Por primera vez en su historia, nuestro país se vio en la necesidad de declarar la suspensión del pago de sus deudas (Banco Central de Chile, 1931: 11).

Los primeros treinta años del siglo XX sorprendieron así a los chilenos con un proceso de expansión y maduración de los movimientos sociales y nuevas formas de organización de la sociedad civil, así como con la penetración de las ideologías comunistas y anarquistas. Desde la Cuestión Social y hasta el año 1925 se observa una de las fases de activación y movilización más importante del siglo XX, puesto que es ahí donde se comienzan a sentar las bases y urdir el entramado social que se vuelve clave durante los gobiernos del Frente Popular. Lo que describe Carlos Keller en 1931 bajo el encabezado “El proletariado en marcha” sobre los trabajadores mineros e industriales, resume la sensación y visión que definió el régimen de Ibañez hacia finales de la década del veinte,

No obstante la modestia y pequeñas exigencias del obrero chileno, la explotación del pueblo sin tasa ni medida, la falta de toda legislación social, el abandono en que se le dejaba, la imposibilidad de hacer vales sus derechos ante la justicia, sumisa al dinero; la tristeza de la vida de los campamentos en el norte y en los conventillos de las ciudades, produjeron en la masas obreras un movimientos de protestas que amenazaba constantemente la paz y el orden interior. Especialmente después de la guerra mundial el ejemplo ruso, divulgado por hábiles propagandistas, extendió en Chile el comunismo, que llegó a constituirse una amenaza gravísima (Keller, 1931: 25).

Desde 1925 se inicia así una etapa de desmovilización o subsidencia motivada en parte por la derrota de los movimientos sociales en la construcción de la nueva institucionalidad, así como por la represión y desactivación forzada por la dictadura de

Ibañez del Campo. Entre 1925 y 1931, la promulgación de leyes sociales y el Código del Trabajo cambiaron radicalmente la disposición del movimiento obrero y las organizaciones de trabajadores. Desde ese momento, los sindicatos y sus federaciones tuvieron que decidir entre aceptar la nueva legislación y sus reglas o perseverar con una postura centrada en la lucha de clases y de corte más revolucionario. Los obreros y empleados del sector estatal y las grandes empresas aceptaron el sometimiento a la nueva normativa, mientras el movimiento obrero se plegó a la línea más radical y se escinde entre la FOCH (comunista), la Confederación Nacional de Trabajadores (anarquista) y la Confederación Nacional de Sindicatos (socialista).

Las trayectorias de (des) activación de los años veinte se vieron influenciadas - ya sea para inhibir o desatar - por el trauma de la represión y las matanzas obreras ocurridas de forma sistemática en aquellos años así como por una represión perpetrada en nombre de la estabilidad y gobernabilidad de Estado. Asimismo, los golpes de una economía fluctuante y que sufriera entonces uno de los mayores embates con la crisis del salitre y luego con la crisis mundial de 1929, afectaron el quehacer de los movimientos y las organizaciones sociales.

2.1.2 Año 1931: una nueva fase de movilización

Las repercusiones a nivel social de la crisis de 1929 no tardaron en hacerse evidentes y, al llegar 1931, la combinación de represión con una aguda crisis fiscal volvió insostenible el mandato de Ibáñez. Provocada esta vez por los azotes de la crisis económica, se inicia un nuevo ciclo de movilización social. En Santiago se multiplican las manifestaciones y los disturbios y los estudiantes de las principales universidades suspenden las clases hasta conseguir la renuncia de Ibáñez, acción a la que adhieren profesionales, personal de servicio, profesores y el comercio de la capital. La efervescencia social provocó enfrentamientos y la muerte de al menos tres civiles y un policía (Gazmuri, 2014; Ochoa Mena, 1931; Parkman, 2011). En esos días, los partidos de oposición organizan y constituyen una Unión Civilista y convocan a una marcha por las calles del centro de Santiago que es acogida por ciudadanos de diversos sectores. Diputados de distintos partidos políticos le piden la renuncia al Presidente Ibáñez, las fuerzas armadas se muestran divididas y desmoralizadas. La presión del movimiento social se traduce en la dimisión de Ibáñez y, tras un breve lapso de acciones constitucionales, los militares regresan al poder, esta vez enarbolando una república socialista (Nunn, 1970).

Se produce en definitiva durante aquellos años la erosión del sistema oligárquico de la mano de la emergencia de un movimiento obrero de inspiración marxista, actor que

resultaría clave en el desarrollo socio-político del siglo XX. Como señala Fazio (1994), luego de la década del veinte y dado lo fallido de esa estrategia, la élite oligárquica comienza a dejar de recurrir al aparato represivo del Estado para contener a los movimientos sociales. Esto, pues el accion de los trabajadores no sólo no desapareció, sino que se radicalizó y consolidó además de expandir su influencia hacia los sectores medios. A partir de entonces, la contención popular comenzó a realizarse por medio de mecanismos legislativos, la nueva Constitución y la aprobación de un nuevo Código Laboral. Los sindicatos y las organizaciones obreras empezaron a integrarse así a la vida institucional del país. El período 1919-1925 presencié así una “arremetida sociocrática (...) y la constante presión reformista de las capas medias desde 1914” (Salazar, 2006: 73). Como señala este autor, la represión de principios del siglo XX dio paso a una metodología política más conciliadora y tendiente al consenso que coincidió y fue parte de un nuevo ciclo político que nace el año 1932. Desde entonces, se produce una etapa de mayor estabilidad política y económica y, en relación a la sociedad civil, una fase de desmovilización.

En términos políticos, el cuestionamiento al liberalismo y al parlamentarismo erigido tras la década del veinte y la crisis de 1929, implicó el surgimiento de nuevos paradigmas. El socialismo, el fascismo y el corporativismo compartían la necesidad de un Estado con mayor injerencia en la sociedad, donde modernizar comienza a ser sinónimo de estatizar y la correspondiente organización de un aparato estatal que respondiera a esas convicciones (Gazmuri, 2014). Como indica este autor, en el período posterior a 1932, el Partido Radical, representante de la nueva clase media chilena, se transformó en el eje principal de la política nacional. Por otra parte, el Partido Demócrata que había encarnado los intereses de artesanos y obreros desde el siglo XIX, desaparece y es reemplazado en la década del 1930 por los partidos Socialista y Comunista. Este último, sin embargo “fue el único verdadero partido proletario del Chile del siglo XX. El Partido Socialista, creado en 1933, fue dirigido por la clase media y media alta. El MIR y el MAPU, mucho después, estuvieron compuestos por descendientes de oligarcas” (Gazmuri, 2014: 170).

La elección de Alessandri en un segundo período presidencial (1932-1938) permitió restaurar la estabilidad de la democracia, impidiendo la intromisión de los militares en la política y desmovilizando a las llamadas milicias republicanas o unidades paramilitares organizadas a principios de los treinta (Collier y Sater, 1998). Asimismo señalan los autores, las políticas económicas facilitaron la recuperación tras el duro golpe de la crisis, mientras el alza de los precios de las materias primas a nivel mundial revitalizaron la industria del cobre. Los impuestos a este mineral aumentaron de un

12% a un 18% lo que, entre otras medidas, permitió aumentar en cinco veces los ingresos del gobierno provenientes de la extracción minera.

En términos de la sociedad civil, la disminución en la agitación y efervescencia social de los años 1931 y 1932 no implicó una desactivación social, sino que un período de latencia en que se fueron generando nuevas formas de organización y articulación, especialmente en torno al movimiento obrero, y más tarde el campesino. Por otra parte, Alessandri buscó la estabilidad política y la gobernabilidad a través de un gobierno fuerte, solicitando permanentemente al Congreso el otorgamiento de facultades extraordinarias que se usaron mayormente contra grupos de izquierda y los intentos de huelga.

En la segunda mitad de la década del treinta y dado el avance del fascismo, el Partido Comunista reorientó su política y, luego de diversos acercamientos tanto con radicales como socialistas, se acuerda unir las fuerzas democráticas y constituir un Frente Popular. Como señala Garcés (2004a), el movimiento de trabajadores desempeñó un papel fundamental en la constitución de esta alianza dado que en 1934 y consecuencia de la violenta represión del gobierno a una huelga ferroviaria de carácter nacional, las distintas organizaciones atomizadas que agrupaban a los trabajadores deciden unificarse. La acción colectiva que dio pie a la huelga se mantuvo durante varios días y logró la adherencia de todas las organizaciones sindicales más grandes del país, constituyéndose en un movimiento de características nacionales. Al mismo tiempo, el comercio amenazó con el cierre y los bancos con ir a huelga, las constructoras pararon sus obras y movimientos de apoyo se desataron entre obreros y empleados de diferentes ramas (Milos, 2008).

Así, el Comando Único emanado de la huelga evolucionó pronto al Frente de Unidad Sindical, organizó un Congreso de Unidad Sindical en diciembre de 1936 y permitió el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), la segunda central obrera más importante del siglo XX. Se desarrolla así una clase proletaria industrial, un nuevo actor social en el panorama socio-político del país. La unidad de los trabajadores bajo una única orgánica representó una pieza fundamental en la creación del Frente Popular, en un acuerdo y decisión resuelta en el Congreso Constituyente del CTCH en diciembre de 1936. Como indica la declaración de principios y estatutos de la CTCH de 1943:

Que, para derrotar al fascismo y llevar adelante el progreso económico y social del país, la clase obrera debe aliarse con otros sectores y encabezar la lucha de todas las fuerzas democráticas y progresistas, interesadas en la terminación de las supervivencias semi-feudales y en el desarrollo de una gran industria nacional para abrir el cause al

engrandecimiento de la patria y asegurar el bienestar de las masas trabajadoras (Confederación de Trabajadores de Chile, 1943: 4).

La fuerza adquirida por la nueva organización le permitió formar parte de la alianza política que apoyó e hizo ganar a la candidatura del radical Pedro Aguirre Cerda en la elección presidencial de 1938.⁵ Con Aguirre Cerda en el poder, la organización debió tomar decisiones clave respecto a la aceptación o rechazo de la legislación social de 1924 y reformulada en el Código del Trabajo de 1931. Esto implicaba aceptar la regulación estatal no sólo sobre las relaciones capital-trabajo, sino sobre la propia organización obrera.

2.2 Del Estado de Compromiso a la Unidad Popular 1938-1973

2.2.1 Inclusión política, estagnación económica

Los hechos ocurridos durante la década del treinta, y que convergen en la alianza entre la clase política y el movimiento de trabajadores así como en el triunfo del Frente Popular, definirán el talante de la esfera socio-política por las próximas décadas. La constitución del Frente viene a consolidar la inclusión de los sectores medios y de los trabajadores en la esfera política, producto de una mayor radicalización y autonomía de estos actores a principios de la década del treinta (Fazio Vengoa, 1994).⁶

Tal como señala Milos (2008), el período 1938-1973 estuvo marcado por las coordenadas políticas tras el triunfo de Pedro Aguirre Cerda en octubre de 1938 que, mucho más que una coalición electoral, compendia fuerzas progresistas que buscaban ampliar y profundizar la democracia del país, reorientar el modelo de desarrollo, así como representar el interés de las mayorías. Se apostó en general a la estabilidad y gobernabilidad y a que los cambios socio-políticos se enmarcaran en la institucionalidad, aun cuando las fuerzas progresistas evolucionaron desde las alianzas amplias a principios de los cuarenta, hacia proyectos cada vez más exclusivos políticamente como aquel encarnado por la Unidad Popular. Con ello, el escenario

⁵ El triunfo del Frente Popular fue facilitado además por la conmoción que provocó en la opinión pública el asesinato de 40 jóvenes pertenecientes al Movimiento Nacional Socialista en el edificio de la Caja del Seguro Obrero. Esto, luego de asesinar a un cabo de Carabineros, otro grupo se apoderó de la Casa Central de la Universidad de Chile con acciones tendientes a provocar un golpe de estado contra el gobierno de Arturo Alessandri para que Carlos Ibáñez del Campo se hiciese con el poder. El golpe fracasó y los nacionalsocialistas ya rendidos fueron muertos el 5 de septiembre de 1938. Para una revisión del fascismo en Chile ver Sznajder (1993).

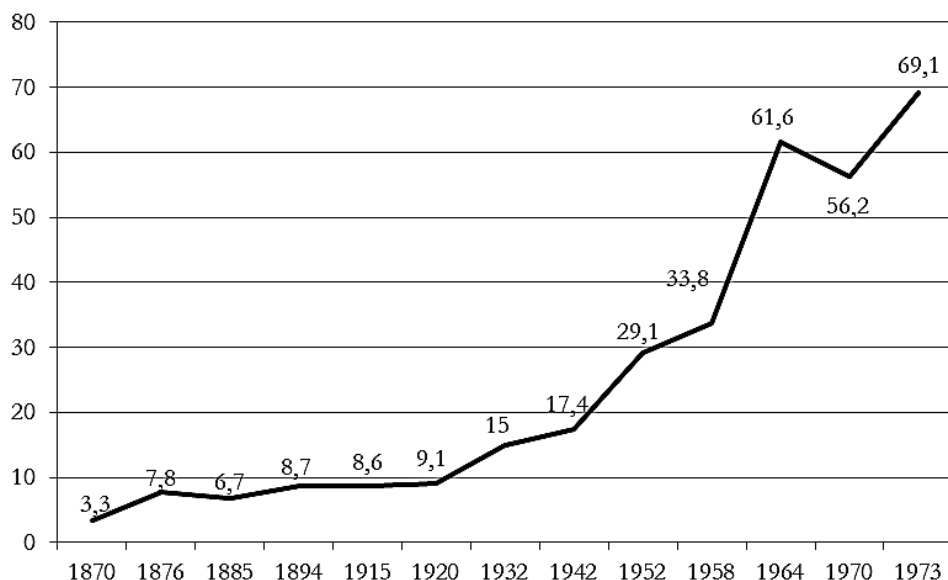
⁶ El autor conflictúa con aquella tesis que señala que el Frente Popular representó un dique de contención para los impulsos reformistas de los trabajadores, sino más que la conformación de este Frente consolidó la inclusión de las capas medias y de los trabajadores en la vida nacional.

histórico y la correlación de fenómenos en este período se caracterizó por un proceso de industrialización sustitutiva o ‘hacia adentro’ con una creciente intervención estatal en la esfera económica, simultáneo a un desarrollo democrático, la inclusión de diversos sectores a la vida política y un mejoramientos en sus niveles de vida (Garretón, 1983).

A nivel económico, el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) se erige como método para lograr independencia de los mercados internacionales y reducir la vulnerabilidad externa, con una serie de medidas económicas y múltiples mecanismos de protección de la industria nacional, incentivos y créditos accesibles. Se realizaron importantes inversiones para modernizar la infraestructura y se creó la CORFO (Corporación de Fomento a la Producción) en 1939, como una institución pública financiada con ingresos de las exportaciones del cobre para cumplir un rol activo en el proceso de industrialización del país.⁷ A nivel socio-político, el proceso de democratización implicó la apertura de espacios para la representación y satisfacción de los nuevos sectores medios incorporados (Fazio Vengoa, 1994). En términos concretos, la inclusión de nuevos grupos sociales a la arena política se vio reflejada en la participación política-electoral en Chile, que comienza a expandirse rápidamente en este período, progresando desde tasas que no superaban el 10% hasta un 60% de la PEV en 1964. El mayor impulso a esta trayectoria inclusiva fue la incorporación de la mujer en la vida política, con su reconocimiento como ciudadano en 1934 y la aprobación del voto femenino en 1935 para elecciones municipales y luego en 1949 para elecciones presidenciales y parlamentarias. Como se puede observar en la figura 2.1, el aumento del electorado tuvo desde entonces un crecimiento constante, alcanzando un 36,1% en las elecciones de 1973, uno de los niveles más altos en la historia de Chile (Boron, 1971; Cruz-Coke, 1984; Kirkwood, 1986).

⁷ Luego de CORFO y con la intencionalidad de promover la industria nacional se crean la Empresa Nacional de Electricidad S.A., ENDESA en 1944; la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP en 1946; la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP en 1950; la Industria Azucarera Nacional, IANSA en 1952 y la Empresa Nacional de Minería, ENAMI en 1960.

Figura 2.1. Participación electoral en Chile, 1870-1973. Votantes como % de población en edad de votar.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Navia (2004).

Luego del triunfo del Frente Popular, la CTCH pasó a tener una relación directa con el nuevo gobierno, lo que permitió su crecimiento y posicionamiento en la escena política. Vínculo que, sin embargo, sería motivo para su debilitamiento, división y pérdida de protagonismo en las décadas posteriores

Pese al proceso de democratización iniciado en este período y a la inclusión de grupos mesocráticos y de trabajadores a la vida política del país, esto no implicó que la represión y la exclusión no siguieran afectando tanto a diversos segmentos sociales, especialmente sectores marginales urbanos y campesinos, como a determinados partidos políticos (Garretón, 1983). Las demandas campesinas se postergaron a favor de la incipiente industrialización, mientras los partidos de izquierda sufrieron las tensiones y contradicciones de ser parte del Frente Popular y del gobierno y apoyar paralelamente las demandas populares, lo que supuso conflictos y divisiones tanto con los socialistas como con los radicales.

Enmarcado en las tensiones de la segunda guerra mundial, el país vivió las elecciones de 1942. El triunfo del radical Juan Antonio Ríos fue resultado del apoyo de demócratas, falangistas, socialistas y comunistas. En coincidencia con la muerte de

Ríos en 1946, se inaugura en el país un nuevo ciclo político, fuertes movilizaciones sociales y la radicalización del movimiento popular. Tal ciclo político se inicia de la mano del creciente tensionamiento producido por el estancamiento de la industrialización y las empresas del Estado, una expansiva curva precios-salario, junto a las tensiones y descomposiciones de las coaliciones políticas de gobierno (Salazar, 2006).

Las relaciones y vicisitudes entre la sociedad civil con el Estado y el mercado se manifiestan el año 1946, cuando los trabajadores de las oficinas salitreras Mapocho y Humberstone se declaran en huelga por el alza en precios en las pulperías. El gobierno interino de Alfredo Duhalde respalda a las compañías salitreras en desmedro de los trabajadores, anulando la personalidad jurídica de sus sindicatos. Frente a estas respuestas del gobierno, la CTCH convocó a una concentración en apoyo a los obreros el 28 de enero de ese año. Tras una marcha que movilizó a varios miles de obreros y trabajadores de empresas, los manifestantes se concentraron en la plaza Bulnes provocándose serios conflictos entre manifestantes y carabineros, resultando seis muertos y cincuenta heridos. Como señala Salgado (2014), luego de estas manifestaciones y su violento desenlace, el espectro político chileno se reconfiguró, se produjo un cambio de gabinete, los socialistas apoyaron al gobierno y entraron a la Moneda a formar parte de la nueva bancada, mientras los comunistas decidieron apoyar y prolongar la huelga de manera indefinida y estrechar vínculos con la oposición. La consecuencia más importante, sin embargo señala, fue la fracturación del movimiento obrero entre facciones comunistas y socialistas de la CTCH. Efectivamente y tal como señala Angell (1974), entre 1946 y 1948 el movimiento sindical se dividió, muchos sindicatos de obreros manuales se salieron de la CTCH y al mismo tiempo aumentó la militancia y unidad de los trabajadores de cuello blanco agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF formada en 1943.

González Videla asume la presidencia el 3 de Noviembre de 1946. En la conformación de su primer gabinete de ministros participan liberales, radicales y, por primera vez en cargos ministeriales, militantes comunistas. Sin embargo y junto a las tensiones locales e internas entre los partidos de gobierno así como el comienzo de la guerra fría, el gobierno muestra su apoyo a los Estados Unidos complicando aún más las relaciones con el Partido Comunista. La expulsión de los ministros comunistas del gabinete en 1947 motiva una fuerte movilización social que culmina con la promulgación de la Ley N° 8.987 de Defensa Permanente de la Democracia, conocida popularmente como la ley maldita. A partir de entonces, el ciclo de movilizaciones sociales continúa: en julio de 1947 se produce una huelga de la locomoción colectiva de Santiago, en agosto de 1947 se paralizaron las labores en los minerales de Lota,

Coronel, Curanilahue y Lirquén, mientras en enero de 1948 muchos dirigentes sindicales y comunistas fueron reprimidos y relegados a Pisagua, donde se estableció un campo de detenidos.

Al mismo tiempo, el impulso económico del proyecto de industrialización comenzó lentamente a agotarse y los rubros de sustitución más simples a colmarse, la industria manufacturera se estancó y las tasas anuales de crecimiento industrial cayeron entre los años 1946 y 1951 a un promedio de 1,8% (Barrera, 1980). Como señala Salazar (2006), desde entonces las movilizaciones sociales comenzaron a multiplicarse mientras las estrategias y repertorios de acción adoptaban un nuevo semblante. Esto es, se produce un cambio desde un tipo de movilización social de carácter reivindicativo y organizado, propio del período 1931-1945 y relativamente funcional a la institucionalidad, al Código del Trabajo de 1931 y a las bases del proyecto nacional-desarrollista. La crisis económica del proyecto desarrollista forzó sin embargo a los trabajadores a movilizarse de formas que excedieron los límites de esa orgánica obrera. Asimismo, la crisis política del proyecto afectó directamente a los dirigentes sindicales ligados a las cúpulas partidistas, y se generó desconfianza desde las bases laborales para con sus dirigente. Con todo lo anterior, las formas de acción colectiva reivindicativa dieron paso al desarrollo de acciones directas, movilizaciones espontáneas y mayores ‘reventones’ sociales. La respuesta de la clase política frente al desborde social, señala Salazar, sería ajustar programas y alianzas de gobierno, junto a una modernización y socialización del desarrollismo y una expansión de los canales de participación para la masa ciudadana, lo que significó “transitar desde el precientífico nacional-desarrollismo al planificado nacional-populismo” (2006: 190). La elección de Ibañez y su gobierno en 1953 fue una respuesta a esta sumatoria de fenómenos, la búsqueda de un estilo político diferente que aglutinó tanto a derechistas, radicales, socialistas, pro fascistas, civilistas y militaristas. Como indica Gazmuri (2014), la elección de Ibañez expresó la intención popular de reemplazar los acuerdos de los sectores sociales por la decisión de un caudillo carismático.

A fines de la década de 1940, el movimiento obrero fuertemente ligado al Partido Comunista a través de la CTCH, fue reprimido y debilitado por la ley maldita. Sin embargo y tal como señala Barrera (1980), las acciones huelguísticas se expandieron en paralelo a la legislación represiva, con protestas que llegaron hacia fines de enero de 1950 a desplegarse en jornadas que articularon a gremios de empleados, sindicatos obreros, estudiantes y sectores de la oposición política, surgiendo desde entonces múltiples voces que propugnaban la unidad sindical. Así, la conducción del movimiento de trabajadores fue asumida por organizaciones de empleados - especialmente del sector público con del liderazgo de Clotario Blest - y lograron con

la venia del flamante gobierno de Ibañez organizar la nueva confederación de trabajadores en 1953, la Central Única de Trabajadores (CUT), permitiendo a los trabajadores recuperar un rol protagónico en los años 50. El sindicalismo de la CUT se vinculó progresivamente a los partidos de izquierda y potenció la movilización sindical, llamando a un paro general de trabajadores a sólo meses de su creación en mayo de 1954. La emergencia de la sindicalización agrícola comienza, en tanto, en 1949 con una ley de sindicalización campesina promulgada en 1947.

En 1954 y 1955 la CUT convoca a huelgas generales con reivindicaciones y motivaciones económicas, políticas y laborales, como la exigencia de un salario vital obrero, el reclamo por el alza de precios de artículos de primera necesidad y la derogación de la Ley de Defensa Permanente del Estado (Barrera, 1980). Hacia 1956, y dada la pérdida de apoyo popular de Ibañez, éste envía al Congreso un proyecto de reforma electoral y otro para la derogación de la maldita que sería reemplazada por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ambos proyectos fueron aprobados lo que implicó, por una parte, la introducción del voto obligatorio y la ampliación de la participación electoral y, por otra, una legitimación del Partido Comunista, que ese año concreta una nueva alianza de izquierda con el Partido Socialista: el FRAP (Frente de Acción Popular).

En el plano económico, un espiral inflacionaria y de programas para combatirla tienen repercusiones en la industria nacional (mayor apertura de la economía, liberalización de las importaciones, reducción del gasto fiscal, etc.), mientras que en el plano político el centro representado por el pragmático Partido Radical comienza a ser desplazado por el recién formado Partido Demócrata Cristiano (1957), de la fusión de la Falange Nacional con el Partido Conservador Social Cristiano. En el mismo período y tal como se observa en la tabla 2.2, el número de huelgas y conflictos siguieron una trayectoria expansiva en el período 1956-1964.

Tabla 2.2. Sindicatos, conflictos económicos y huelgas, 1956-1964.

Año	Número de sindicatos	Número de conflictos	Número de huelgas legales e ilegales
1956	2382	1428	147
1957	2121	1066	80
1958	1594	1127	120
1959	1752	1134	174
1960	1770	1899	257
1961	1764	1874	262
1962	1774	1669	401
1963	1852	1495	413
1964	1863	1939	564

Fuente: Barrera (1980: 1286).

La revolución cubana en 1959 potenció la generación de diversos movimientos guerrilleros en América Latina. La respuesta estadounidense para detener el avance socialista se valió de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional así como de la Alianza para el Progreso con diversas reformas en la estructura social y económica de los países de la región. Estas políticas ejercieron una influencia clave en el gobierno del recién electo Jorge Alessandri Rodríguez y particularmente en el de Eduardo Frei Montalva, mientras el proceso cubano sirvió de inspiración y de móvil para la radicalización de la izquierda chilena.

En términos de la sociedad civil, todo el proceso desplegado desde 1925 redundó en una expansión de los grupos medios ligados a la burocracia estatal con sus correspondientes expresiones gremiales y políticas, tal como se ha descrito hasta este punto. Como señalan Garcés y Rodríguez (2004), el proceso socio-político de estas décadas permitió una diversificación de la sociedad civil de la época y constituyó diversos campos de conflicto social y político que alcanzan su punto más culminante en los años sesenta. Hacia esta década, el proyecto socio-político y económico del Estado de Compromiso comenzó a mostrar sus límites y deficiencias. El proceso de democratización e inclusión social provocó una expansión en las demandas y requerimientos de la sociedad civil, demandas que el Estado no fue capaz de atender dada la estagnación económica, la constante inflación y el desempleo, en un modelo que, en definitiva, no logró equiparar la inclusión política con la integración material. La respuesta de los partidos y del sistema político en general a la presión ciudadana se tradujo en una polarización política y en el incremento de la movilización social.

2.2.2 De la ‘revolución en libertad’ a la ‘vía chilena al socialismo’: hipermovilización social

En paralelo al aumento en las exigencias sociales, durante las décadas del cincuenta y sesenta se amplifica la presión por una reforma agraria, mientras la clase política, especialmente radicales y demócrata cristianos, comienzan a considerarla como una manera de capturar el voto rural y a un, ignorado hasta entonces, movimiento campesino. Como señalan Collier y Sater (1998), en agosto de 1962 el Congreso aprueba la ley de reforma agraria que autorizaba al Estado a comprar tierras o expropiar así como obligar a terratenientes a mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores en términos de vivienda, salarios y contratos. Se trataba al mismo tiempo de avanzar en transformaciones estructurales que permitieran al país salir de la dependencia económica al capital extranjero, dar solución a la concentración del poder económico y a la desigualdad y la pobreza, así como a la pauperización de amplios sectores de campesinos, obreros y pobladores, pero sin adoptar los modelos comunistas o socialistas, tan difundidos por la época. Se adhirió entonces a la llamada Revolución en Libertad liderada por el Partido Demócrata Cristiano, con el apoyo de Estados Unidos y de la Iglesia Católica. Con esto, el período 1964-1970 representa el último esfuerzo por mantener la lógica del sistema, pero profundizando en la industrialización y desarrollo local, expandiendo el mercado interno y eliminando las exclusiones estructurales de sectores marginales rurales y urbanos, siendo necesario para ello agudizar en las tendencias concentradoras y dependientes del modelo, en un clima de creciente movilización popular (Garretón, 1983).

Como indican Garcés y Rodríguez (2004), la década del sesenta estuvo marcada por el ascenso organizativo y la movilización del movimiento obrero, acompañado por campesinos y pobladores, nuevos actores sociales que hacen su irrupción en la vida nacional. Los campesinos, cuyos derechos de asociación no habían sido reconocidos durante el período del Frente Popular, hacen su entrada a la escena socio-política a través de la reforma agraria y una nueva ley de sindicalización campesina promulgada durante el gobierno de Eduardo Frei. Asimismo, los pobladores pusieron en marcha un movimiento social de envergadura para ejercer presión al Estado, especialmente en torno a la problemática de la vivienda en la ciudad. Tal como se observa en la tabla 2.3, la identidad y los actores protagonistas de los hechos de violencia política popular sufre reconfiguraciones en el período 1947-1987. Hasta 1973 se produce un aumento en la presencia y relevancia de los pobladores, incremento que es aún más agudo en militantes de partidos políticos. Lo anterior, viene a reflejar cambios en las dinámicas de competencia dentro de los partidos políticos en el período 1950-1973, con la

emergencia de una centro-izquierda en torno a la DC y la penetración de la izquierda y centro-izquierda en el mundo rural y de los pobres urbanos.

Tabla 2.3. Identidad de los protagonistas de movilizaciones y violencia política: Porcentajes promedio de participación por ciclo presidencial, 1947-1987

	González Videla (1947-52)	Ibáñez del Campo (1953-58)	Alessandri Rodríguez (1959-64)	Frei Montalva (1965-70)	Allende Gossens (1971-73)	Pinochet Ugarte (1974-79)	Pinochet Ugarte (1980-85)	Pinochet Ugarte (1986-87)
Actor								
Militantes	33,3	28,8	21,6	27,6	39,8	60,8	41,6	42,6
Pobladores	19,6	17,5	21,6	19,6	23,2	2,8	18,1	8,7
Estudiantes	4,9	18,8	16	27,2	12,4	10,9	18,9	22
Obreros	22,5	21,3	20,4	13,2	16,8	5,1	4,5	3,3
Empleados	6,9	11,2	16,7	10	6,1	2,8	4,3	10,7
Público	12,7	2,5	3,7	2,4	1,6	10,1	9,8	12,7
Religiosos	0	0	0	0	0	7,2	2,8	0

Fuente: Salazar (2006: 154).

Más allá de una evaluación de logros y deficiencias, lo cierto es que en términos de la sociedad civil, los programas y acciones puestas en marcha durante el gobierno de la DC fueron clave para el incremento en la movilización, legitimidad de demandas y visibilización de los actores populares como campesinos y pobladores (Garcés, 2004a). Como bien lo resume Barrera (1980), el ciclo que se inicia en 1964 con el gobierno demócrata cristiano destaca por la realización de reformas sociales y económicas en pos del control de la inflación, reparación de injusticias sociales y redistribución de poder político y económico. Ejemplos concretos para de esos objetivos fueron la reforma agraria, la chilenización del cobre, el aumento en la inversión estatal sobre la industria, la creación de nuevas organizaciones comunitarias - con la promulgación de una ley de Juntas de Vecinos en 1968 -, el ya mencionado fortalecimiento de la sindicalización campesina y una reforma educacional que acelera la ampliación de la cobertura escolar, entre otras medidas. Se buscaba así un desarrollo económico con mayor participación social, con un sindicalismo que se vio potenciado por medidas administrativas que facilitaron la creación de sindicatos, tal como queda reflejado en la tabla 2.4.

Tabla 2.4. Número de sindicatos y socios, 1964-1970.

	Agrícolas		Industriales		Profesionales	
	Sindicatos	Socios	Sindicatos	Socios	Sindicatos	Socios
1964	24	1.863	632	142.958	1051	109.542
1970	481	138.349	1437	197.651	2718	228.717

Fuente: Barrera (1980: 1291).

Con la incorporación de campesinos y pobladores a las filas de los partidos políticos, se genera un cambio en los lineamientos políticos y, al mismo tiempo, se constituye en catalizador para las movilizaciones masivas (Greaves, 2001). Lo anterior, pues la emergencia de nuevos actores sociales en el espectro público implicó una aumento exponencial en las demandas focalizadas en un Estado cada vez más desbordado e incapaz de contenerlas.

Dado el contexto político populista - populismo partidario más que personalizado como ocurría en el resto de América Latina -, el tipo de acción colectiva que se define en este período y en que se enmarcan las movilizaciones sociales tuvo un carácter clientelista, con movimientos de masas dependientes de los partidos políticos, una sociedad política más desarrollada que la sociedad civil (Oxhorn, 1995), y un espectro ideológico partidario completo que le dio a la política un carácter altamente ideológico y radicalizado en los años sesenta (Garretón, 2009). Las transformaciones emprendidas por el gobierno de Eduardo Frei no contaban con el apoyo de la derecha ni de la izquierda ya que, para los primeros, los cambios reflejaban objetivos socialistas, mientras para los segundos se trataba sólo de reformas y no de reales transformaciones. El conflicto entre la DC y la derecha terminó por declararse al aprobada la reforma agraria que, tal como se presenta en el siguiente capítulo, se trató de una experiencia traumática para los sectores terratenientes no sólo en términos emocionales en su vinculación con la tierra y la enquistada cultura y estructura sociológica de la hacienda, sino también en términos prácticos por el temor a la disminución de su poder económico y el vuelco masivo del campesinado en apoyo a la Democracia Cristiana. Los campesinos, por otra parte, sólo en los dos primeros años del gobierno de Frei, desarrollaron 508 huelgas que buscaron acelerar el proceso de expropiación recurriendo, en algunos casos, a la ocupación de terrenos y casas patronales (Izquierdo, 1990). La respuesta a estas acciones incluyó el despido e incluso el uso de la violencia por parte de los propietarios, en una escalada de conflictos que se agudizaba cada día. Así y con la puesta en marcha de la Reforma Agraria, la derecha tomó un nuevo ímpetu que se tradujo en su articulación y su resurrección, con apoyo

de importantes sectores de la clase media intimidados por el ambiente expansivo de agitación política y movilización de las masas.

En distancia tanto con la derecha política y económica como con la utopía socialista de la izquierda, la DC y su proyecto comunitarista se aisló políticamente, generándose tres tercios políticos en materia electoral y desarmándose la estrategia de alianzas y compromisos, así como la posibilidad de contención de los conflictos políticos.⁸ La oposición ejercida por la izquierda tuvo como herramienta importante la presión y movilización social: en 1966 los socialistas inician un paro ilegal en la mina de El Salvador en apoyo de mejoras salariales y luego, en 1967 proclaman la legitimidad de la violencia revolucionaria como única vía para alcanzar la revolución socialista; en 1968 se declararon en huelga los profesores, los portuarios, el personal de correos y telégrafos, los trabajadores de LAN Chile y los empleados de la Empresa Nacional de Petróleo; en 1969 los partidos de izquierda a través del Comando Nacional de Trabajadores convocan a un paro general de protesta el que logró ser parcial, pero provocar grandes disturbios en distintos puntos de la capital. Junto a estos tensos eventos, grupos de terratenientes bloquean la carretera del sur como una manera de presionar al gobierno a aumentar el precio del trigo (Garcés, 2004a; Gazmuri, 2014; Greaves, 2001; Izquierdo, 1990).

Como señala Garcés (2004a: 25), la DC finaliza su mandato dividida entre sus lealtades al gobierno y, por otro lado, a sus bases populares “que habían hecho rápidos aprendizajes de “movilización social” y que aspiraban a producir cambios más de fondo tanto en la justicia social como en la participación popular”. Frente a la imposibilidad de resolver sus conflictos y en la negativa a sacrificar su proyecto y establecer alianzas, la DC pierde la elección de 1970 en un clima político fuertemente marcado por la movilización popular, un aumento en las expectativas sociales y una izquierda que logró capitalizar el descontento de las bases de la DC, fenómenos que finalmente precipitaron el triunfo de Allende.

Entre 1965 y 1973 se despliegan y consolidan las tendencias reformistas con foco en la integración creciente de los sectores populares urbanos y rurales en los planos económico, político y social. El carácter reformista que bajo el gobierno de la Democracia Cristiana había adoptado un *tempo* gradualista, el ritmo bajo el gobierno del Salvador Allende se acelera y se intenta avanzar en cambios radicales y revolucionarios en términos de la organización económica y política (Garretón, 2009; Gazmuri, 2014). La llamada ‘vía chilena al socialismo’ entendía la revolución socialista

⁸ La crisis para la DC no sólo devino de su aislamiento y de una férrea oposición al gobierno, sino desde el propio partido, con la articulación de tres facciones internas - oficialistas, rebeldes y terceristas - dos de las cuales se desvinculan del partido en 1967.

como la sustitución de una sociedad capitalista, pero en el marco de un régimen democrático, a diferencia de la definición que se tenía en aquella época en la generalidad de los países latinoamericanos. El aspecto central en todo este período y que alcanza su *peak* durante el gobierno de la Unidad Popular, es la centralidad de la política y del Estado no sólo en el desarrollo económico, sino también y especialmente en las orientaciones culturales y la constitución de actores sociales con centralidad de valores asociados a la igualdad y la solidaridad así como a los proyectos nacionales colectivos y mesocráticos. Con esto, la política tuvo un rol central en la construcción de las identidades colectivas, “fue el modo particular de constituirse como sociedad, una forma de vida social. La política fue el principal lugar de respuesta a las preguntas por el sentido, y las instituciones el principal instrumento de esas respuestas” (Garretón, 2009: 52).

En esta línea, los movimientos sociales se articularon en torno a demandas estructurales y otras más específicas como el alza de salarios, la negociación por rama en producción, tierra y vivienda. Los repertorios de acción colectiva asociados a estas demandas comenzaron a incluir las formas de lucha y de presión institucionales y más tradicionales, con formas extra-institucionales que - toleradas o a veces instadas por el gobierno - incorporaban nuevas formas de participación en la empresa, en tierras expropiadas y en el poblamiento urbano. Con esto, los obreros iban a huelga a la vez que podían ocupar fábricas y centros laborales; los campesinos organizaban sus sindicatos y se beneficiaban por aspectos de la reforma agraria en paralelo a realizar tomas de fundos para acelerar la aplicación de la ley; los pobladores presionaban al Estado para la construcción de viviendas realizando cada vez más frecuentemente ocupaciones de terrenos en la ciudad; mientras se desplegaba la organización de milicias paramilitares y de ‘cordones industriales’ que articulaba a los obreros en una eventual defensa armada del régimen (Castells, 1973; Garcés, 2004a; Gazmuri, 2014).

Con el objetivo de desarrollar su proyecto político pero manteniendo el control general sobre el proceso, Allende profundizó el vínculo con la CUT a través de un convenio en diciembre de 1970 y la entrega de personalidad jurídica en mayo de 1971. El acuerdo, establecía cláusulas sobre el aumento salarial y reformas a la política laboral, así como alineaba las demandas de los trabajadores organizados con la estrategia política del gobierno (Llanos, 2012). Como señala este autor, al estrechar el vínculo con el gobierno, la CUT perdió su autonomía para pasar a transformarse en una extensión del Estado, consolidándose otra característica del tipo de acción colectiva propia de la época pre-dictatorial, esto es, prácticas y movimientos sociales subordinados y altamente dependientes de los liderazgos de un partido-vanguardia.

Hacia 1972, el apoyo político al gobierno continuaba fuerte aunque debilitándose producto del complejo panorama económico, con un aumento superlativo de la inflación que alcanza un 294% (Ffrench-Davis, 2003) y una creciente escasez de alimentos. Las necesidades insatisfechas junto a las altas expectativas generadas por el gobierno de la Unidad Popular redundaron en una intensificación del proceso de agitación social que se manifestó especialmente en pobladores y campesinos. Las crecientes movilizaciones estaban logrando desbordar las propias direcciones políticas de los partidos, tal como lo reconoce el Partido Socialista en su Congreso de 1971. El objetivo de profundizar en la movilización social y presión popular seguía, sin embargo, representando a esas alturas una herramienta fundamental para la concreción de los objetivos del partido,

La contradicción entre las fuerzas crecientes de las masas y el poder de la burguesía definen esta etapa como un período esencialmente transitorio. Nuestro objetivo, por lo tanto, debe ser el de afianzar el gobierno, dinamizar la acción de las masas, aplastar la resistencia de los enemigos y convertir el proceso actual en una marcha irreversible hacia el socialismo (...) Reconocemos autocríticamente que algunas de las acciones de los trabajadores han sobrepasado a las direcciones políticas de la Unidad Popular y están planteando, de hecho, la cuestión del poder (Partido Socialista de Chile, 1971).⁹

Junto al desborde de la acción colectiva ligada al gobierno, sectores de la clase media y popular como sindicatos de pequeños empresarios y gremios tradicionalmente favorecidos, fueron plegándose a la oposición pues vieron en la UP una amenaza para su estatus. Con una oposición cada vez más fortalecida y que incluía varios medios de comunicación, el camino institucional para el proyecto socialista comienza a ser cuestionado por facciones de la coalición de gobierno, mientras los segmentos partidarios de la vía armada toman fuerza dentro del conglomerado. A mediados de 1972, el país se encontraba dividido, hiperpolitizado (Gazmuri, 2014), hipermovilizado (Landsberger y McDaniel, 1976), enmarcado en un contexto de violencia transversal, llegando a ser señalado como una de las países más politizados de Latinoamérica (Silva, 2004). Como indica Remmer (1980), la organización sindical en los años de Allende era alta incluso en comparación con países como Argentina cuyo sindicalismo era tradicionalmente fuerte y, al complementar tal organización con los niveles de militancia y la proliferación de organizaciones sociales, la participación política del país en este período llegó a ser de las más activas del continente.

⁹ En http://www.socialismo-chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=9

Tabla 2.5. Participación en sindicatos como porcentaje de la población económicamente activa en América Latina.

País	Año	Participación en sindicatos como % PEA	País	Año	Participación en sindicatos como % PEA
Chile	1964	23,3	El Salvador	1964	3,3
	1969	30		1976	4
	1971	32,6	Guatemala	1964	1,3
	1972	41		1975	6,4
Argentina	1964	33,6	Haití	1964	1,3
	1977	25	Honduras	1964	4,8
Bolivia	1964	14,9	México	1964	21
Brasil	1964	9,1		1969	7,3
	1973	9,2	Nicaragua	1964	4,2
Colombia	1964	24,3	Panamá	1964	5,7
	1977	13		1977	8,4
Costa Rica	1964	3,7	Paraguay	1964	5,7
	1977	11,5	Perú	1964	19,4
Cuba	1964	7,7		1974	14,2
	1977	46	Uruguay	1964	18,9
República Dominicana	1964	8,3		1977	25
	1977	12	Venezuela	1964	67,6
Ecuador	1964	7,8		1967	45

Fuente: Adaptado de Remmer (1980: 278).

Desde 1972, los enfrentamientos entre grupos, posiciones e ideologías políticas se hicieron más fuertes, directos e incontrolables, con una oposición y oficialismo movilizadas de manera constante. Las elecciones de la CUT arrojan un 70% de apoyo para la UP que, si bien fue mayoritario, fue menor al apoyo esperado por el gobierno (Milos, 2013). Como indica este autor, los segmentos más extremos del espectro político e ideológico cobran creciente relevancia, lo que amplía los escenarios de conflicto más allá de los límites institucionales y las alternativas se vuelven cada vez más polares.

Tabla 2.6. Huelgas, 1959-1972.

Año	Huelgas	Trabajadores involucrados
1959	204	82.188
1960	245	88.518
1963	416	117.084
1965	723	182.359
1966	1073	195.435
1969	977	275.406
1971	2709	302.397
1972	3289	397.142

Fuente: Adaptado de Landsberger y McDaniel (1976: 520).

Tal como se puede observar, la movilización social ha sido protagónica durante todo el proceso socio-político del siglo XX en Chile, alcanzando su apogeo en el período de la UP. Allende desplegó una estrategia de gobernabilidad concentrada en la sociedad civil y su involucramiento en los procesos de toma de decisiones, en promover la movilización social y diferentes formas de acción colectiva para generar apoyo extra-institucional y soporte político frente a reformas, e intentar con ello evitar crisis políticas y asegurar su perdurabilidad en el poder. La movilización social será, sin embargo, la herramienta que precipitará la crisis y desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, cuando la oposición articulada en torno a gremios y sindicatos contrarios al régimen decide recurrir a la acción colectiva confrontacional.

Tabla 2.7. Tomas u ocupaciones, 1968-1971.

	1968	1969	1970	1971
Terreno urbano	8	73	220	175
Fábricas	5	24	133	339
Tierra	16	121	368	658

Fuente: Llanos (2012: 32).

El paro de transportistas de octubre 1972 se desata en medio de una grave situación económica marcada por la contracción, hiperinflación, devaluación de la moneda,

escasez de alimentos y un mercado negro con productos a precios multiplicados. Sin embargo y frente a los rumores de estatización de las empresas de transporte, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) con el apoyo de otros gremios convocaron a un paro nacional indefinido el 9 de octubre de ese año, agravándose la ya compleja situación de distribución de mercaderías.¹⁰ El gobierno respondió con la detención de los organizadores, hecho que provocó una escalada en el conflicto, una mayor adhesión de la oposición y otros gremios profesionales,¹¹ un el bloqueo de las principales carreteras del país el 12 de octubre y el correspondiente desabastecimiento de combustible y de otras mercaderías de carácter esencial. Allende declara estado de emergencia en medio de un país virtualmente paralizado.

Si bien la crisis provocada por esta movilización es parcialmente superada, la situación para el país y el gobierno seguían siendo sumamente complejas. Lo que sigue es una serie de hechos que serán el corolario del proyecto de la Unidad Popular: el 29 de junio de 1973 se produce un levantamiento militar que es contenido por el general Prats, ministro del interior y comandante en jefe del ejército; las movilizaciones sociales continúan y se reinicia en agosto de ese año la huelga de los camioneros; Eduardo Frei, presidente del Senado, declara al gobierno como inconstitucional, allanando así el camino para una salida golpista; el general Prats es obligado a renunciar siendo reemplazado por Augusto Pinochet. En medio de esta complicada situación, el 4 de septiembre de 1973 el gobierno celebra su tercer aniversario con la que sería la última gran movilización de un período marcado por la alta polarización política y la hipermovilización. Cerca de un millón de personas desfilan por última vez frente al presidente Allende, en la antesala del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que puso fin al gobierno de la Unidad Popular y a las formas de hacer política conocidas hasta entonces (Bitar, 1996; Boron, 1975; Collier y Sater, 1998; Fazio Vengoa, 1994; Garcés, 2004a; Garcés y Rodríguez, 2004; Garretón, 2009; Gazmuri, 2014; Greaves, 2001; Landsberger y McDaniel, 1976; Milos, 2013; Petras, 1970).

¹⁰ El descontento y las protestas en contra del gobierno ya había tenido distintas manifestaciones, entre ellas, la llamada 'marcha de las ollas vacías' que daría origen a la agrupación Poder Femenino y que fue respaldada por los partidos opositores el 1 de diciembre de 1971.

¹¹ Se sumaron los transportistas urbanos, la Confederación del Comercio Detallista (CONFEDech), la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado (CONUPIA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular. El 17 de octubre de 1972 adhirieron el Colegio Médico y la FESES, gremios de ingenieros, abogados, odontólogos, profesores, trabajadores portuarios, pilotos de LAN Chile y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC).

2.3 Represión, desmovilización y explosión social bajo la dictadura militar

2.3.1 La fase de subsidencia del autoritarismo neoliberal 1973-1982

El período dictatorial es analizado en extenso en los próximos capítulos desde las perspectivas del trauma, gobernabilidad y neoliberalismo así como sus consecuencias sobre la (des)mobilización de la sociedad civil. Esto, pues el régimen militar constituye un momento refundacional clave para entender el proceso socio-político posterior y con ello las dinámicas, complejidades y características de la redemocratización y del quehacer de la sociedad civil a partir de los años noventa.

La arremetida militar implicó un cambio radical en la estructura política, económica y social del país, provocando una transformación en la cultura política previa, las prácticas y las creencias que estaban internalizadas en la sociedad chilena luego, tal como se ha revisado, un largo desarrollo socio-político en el siglo XX. Con ello, el régimen militar podría ser definido como una ‘revolución desde arriba’ que, junto con eliminar el proyecto socialista de desarrollo, generó las condiciones necesarias para implantar y profundizar una modernización capitalista (Fazio Vengoa, 1994). Como describe este autor, el desarrollismo populista conocido hasta entonces - basado en la clase media y trabajadora como actores esenciales para el desarrollo político y económico -, fue rápidamente reemplazado por un sistema que redujo el tamaño y funciones del Estado, con capas medias que dejaron de depender del aparato estatal para su reproducción y que marginó a los trabajadores en desmedro de los sectores vinculados al comercio exterior y al mundo de las finanzas.

La movilización social de gran escala e impacto desplegada hasta entonces fue interrumpida, al menos de forma temporal, drástica y dramáticamente con el golpe de Estado de 1973. Desde entonces y especialmente durante los primeros diez años del régimen, el tejido social articulado durante décadas fue prácticamente destruido. Durante el período 1973-1976, la fuerza de la represión militar se concentró explícitamente en fábricas y campamentos, los dos espacios simbólicos más importantes para los movimientos populares urbanos: el movimiento obrero y el movimiento de pobladores (Garcés, 2004a), así como en los movimientos de izquierda, con cientos de arrestos en instalaciones militares y centros de detención secretos. Miles de personas fueron torturadas o desaparecieron en campos de concentración, proliferó la relegación y el exilio a la vez que se produjeron numerosas masacres y ejecuciones extra-judiciales.¹² El aumento del poder y las facultades

¹² En 2011, el Informe Valech reconoce oficialmente un total de 40.018 víctimas, cifrando en 3.065 los muertos y desaparecidos.

represivas del Estado se dieron en paralelo a una fuerte cohesión interna lo que hizo prácticamente imposible la organización de una oposición al régimen (Brito, 1997; Stepan, 1985), dando paso a una etapa de desmovilización forzada. Como agrega Remmer (1980), durante la primera etapa dictatorial se produjo asimismo la violación generalizada de todos los procedimientos legales, incluso aquellos correspondientes al ‘estado de sitio en tiempo de guerra’. Dichas violaciones incluyeron la negación de defensa legal, encarcelamiento sin juicio y castigo por delitos que no eran causa criminal. Las libertades constitucionales fueron suspendidas así como se impuso toque de queda y severas restricciones a toda reunión o concentración públicas, se disolvió el Congreso, se forzó el cierre de periódicos de oposición y se prohibieron los partidos políticos.¹³

Tal como se presentara, el movimiento de pobladores fue uno de los actores que cobró especial relevancia en las últimas décadas, hecho que le costó ser violentamente reprimido y desarticulado. El mundo poblador incluía un amplio entramado de organizaciones comunitarias, Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sociedades de Adelanto, Cooperativas de Vivienda así como organizaciones de abastecimiento, entre muchas otras (Garcés y De la Maza, 1985; Valdés, 1986). Como lo explican estos autores, luego del golpe militar, los alcaldes pasan a ser designados por la Junta Militar, quienes intervienen las Juntas de Vecinos y los Centros de Madres, designando como dirigentes a personas de su confianza y eliminando a quienes no cuenten con ella, en paralelo a la orden de un reempadronamiento de todas las organizaciones vecinales y el control militar de los locales comunitarios. Asimismo, se descompone la red de organizaciones surgidas al alero de la Unidad Popular¹⁴ y los dirigentes que no fueron detenidos o desaparecidos se vieron forzados a buscar asilo, escapar o cambiar de ciudades. Diversas organizaciones pierden su personalidad jurídica mientras todas las actividades y reuniones de las organizaciones restantes son controladas y se cambian los nombres de campamentos y organizaciones con significación política. El régimen mantiene la ley 16.880 promulgada en el gobierno de Frei y con ello la estructura y la organización comunitaria, pero aplicando sin embargo una lógica vertical que impidió las estrategias y acciones autónomas de los pobladores, reconociendo sólo aquellas organizaciones que podían estar bajo su control.

De igual forma, el foco de la represión se puso en las organizaciones sindicales, con una de las primeras acciones del régimen - el decreto de ley número 12 del 17 de septiembre de 1973 - que ilegaliza a la CUT. Un decreto posterior despoja a los

¹³ Más detalles sobre el clima de represión y violencia dictatorial en el capítulo 3.

¹⁴ Como las JAPs (Juntas de Abastecimiento y Control de Precios), comandos comunales y comités de defensa.

sindicatos del derecho a reunión, con excepción de la difusión de información previa autorización de las autoridades militares. Sus dirigentes pasan a ser designados por la Junta, al mismo tiempo que se suspenden los derechos a huelga, a negociación colectiva y al fuero sindical, se disuelven o se desconocen los sindicatos existentes, se congelan los fondos sindicales y, en algunos casos, se promueve el paralelismo sindical como una forma de quebrar o evitar la acción cohesionada de los trabajadores. Asimismo, el movimiento sindical se vio fuertemente afectado por la desarticulación del Código del Trabajo y la composición de una legislación de emergencia para regular el campo laboral (entre 1973 y 1979) que enmarcó al sindicalismo bajo una doctrina de seguridad nacional (Campero y Valenzuela, 1984; Cañas Kirby, 1997; Drake, 2003; Pinto y Salazar, 2010; Remmer, 1980). Tal como desarrolla en el capítulo 5 en los impactos del nuevo Plan Laboral de 1979, luego de 1973 la afiliación sindical cae 20 puntos porcentuales junto a una contracción del número total de huelgas, sin presentarse eventos en el período 1973-1979.

Otros actores protagonistas de las acciones colectivas características del período previo sufren las consecuencias del aparato represivo y desarticulador del régimen militar: las universidades son desmanteladas y pasan a ser controladas e intervenidas por militares, sus autoridades delegadas, miles de estudiantes expulsados, algunas carreras humanistas y de las ciencias sociales cerradas y las que quedan contarán a agentes infiltrados en sus aulas, se vive la censura y destrucción de libros y bibliotecas, entre otras medidas represivas. Por otra parte, no sólo se interrumpe el progreso de la Reforma Agraria, sino que los campesinos pasaron a engrosar las listas de detenidos y ejecutados, incluyendo un número importante de víctimas Mapuche. Finalmente y dada la prohibición de los partidos, la participación política es desde entonces transformada para cumplir los requerimientos y objetivos del régimen, esto es, es canalizada a través de un nuevo orden institucional – una “democracia autoritaria” – que implica amplias restricciones a la actividad política en pos de un sistema representativo despolitizado y una sociedad tecnocrática. En definitiva y como señala Gazmuri (2014: 368),

En la perspectiva de la doctrina de seguridad nacional, el golpe militar fue para una gran parte de los uniformados chilenos la gran ocasión “profiláctica” esperada por muchos de ellos (y esa fue el arma fundamental de Pinochet dentro de las Fuerzas Armadas) para que, contando ahora con el bisturí adecuado, pudieran practicar cirugía mayor contra los partidos y movimientos revolucionarios, y eso requería dureza y tiempo.

De esta forma, el período comprendido entre los años 1973-1982 se produce el cierre de los espacios de participación y de articulación de identidades populares a través tanto de reformas legales como del ejercicio de la represión, promoviendo con bastante éxito la atomización de las organizaciones sociales. Al mismo tiempo, se concretó la estrategia política del régimen, que no se trataba única y simplemente de una reacción contra la movilización previa, sino que necesitaba de la desmovilización para evitar la resistencia de los grupos que podrían poner en peligro o amenazar la implementación de su proyecto político que, a esa altura, ya se definía y se proponía ser refundacional. Como señala Garretón (2009), el proyecto contrarrevolucionario de la dictadura militar en este período se caracterizó por la represión y desactivación de los actores previamente constituidos, así como por revertir las relaciones entre la economía y el Estado, reduciendo sus tareas integrativas y redistributivas así como su rol referente para la acción colectiva. Asimismo, en estos años se desarrolló el proceso de organización y definición del modelo político que culmina en septiembre de 1980, con un plebiscito que aprueba la nueva Constitución redactada por el régimen y promulgada en 1981 y que viene a consolidar e institucionalizar el modelo de sociedad que se perseguía (Garretón, 1983).

En paralelo a estas macro transformaciones y a pesar de la enérgica represión estatal, los movimientos sociales en fase de desmovilización comienzan a reagruparse y rearticularse. El trabajo de Garcés y De la Maza (1985) describe las distintas etapas en que durante la desmovilización se produce una reconstitución y reconstrucción de los movimientos sociales. En un primer momento, predominó una tendencia a la defensa y rearme de lo que quedó de los partidos políticos de izquierda, en que se definieron y plantearon sus posiciones *vis-à-vis* el nuevo escenario socio-político. Luego, en 1975-1976 comienzan a emerger las primeras expresiones de organización social, especialmente impulsadas desde las iglesias - nace la Vicaría de la Solidaridad -, con objetivos de asistencia y solidaridad frente a los efectos de la política económica, así como de denuncia a la represión y defensa de derechos humanos. Como señalan los autores, entre 1978 y 1979 se empieza a poner fin al reflujo social, con expresiones tales como algunas movilizaciones a favor de la defensa de los derechos humanos, una reorganización sindical reactiva al Plan Laboral de 1979, así como la reaparición de las primeras luchas poblacionales reivindicativas y demandantes de necesidades básicas. En las universidades se asiste a una reconstrucción de la acción colectiva y de oposición al régimen desde 1977 con la formación de comités de participación.

En relación al mundo poblacional, las primeras formas de organización se desarrollaron en torno a los comedores infantiles, con la apertura del primero en noviembre de 1973 y ya hacia 1974 se contabilizaban 22 comedores en Santiago.

Asimismo y como una manera de paliar la falta de ingreso de las familias, se organizaron ‘bolsas de cesantes’ y talleres productivos. Más adelante y luego de la aplicación de las primeras medidas económicas del régimen, el número de comedores aumenta y comienzan a aglutinar diversas formas de organización productivas, culturales, educativas, de salud y de vivienda. En 1980 se llevan a cabo los primeros intentos de tomas de terreno en Pudahuel y La Bandera al mismo tiempo que surgen nuevas organizaciones de subsistencia como los Comités de Abastecimiento o ‘Comprando Juntos’, se crean bodegas populares y los talleres productivos amplían los alcances de su acción (Valdés, 1986). Como señala González (2003), estas redes fueron articulando nuevos espacios de socialización e identidad, posibilitando la formación de prácticas cooperativas y solidarias que sirvieron de base para agrupaciones futuras.

A nivel de los trabajadores, como consecuencia de la feroz represión, el movimiento obrero se repliega entre 1973 y 1976 para comenzar a reactivarse, recomponerse y reconstruir el tejido social que había logrado sobrevivir entre 1976 y 1979, aunque sin llegar recuperar el poder y fuerza del pasado. En mayo de 1976, cuando el régimen adopta la estrategia económica de las ‘siete modernizaciones’,¹⁵ diez dirigentes sindicales se manifiestan públicamente en oposición, lo que dio origen al llamado ‘Grupo de los 10’, la primera expresión confrontacional de la DC contra el régimen. A partir de 1978 y luego de la arremetida de la nueva legislación laboral, distintas agrupaciones se unen para dar forma a una oposición sindical que reunió primeramente a la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Empleados Públicos (CEPCH) y el Comando de Trabajadores del Cobre (CTC), instancia que facilitaría más tarde la constitución de la nueva Central de Trabajadores. Estas organizaciones serán las responsables de convocar a ‘las marchas del hambre’ y organizar las primeras protestas nacionales con cacerolazos a través de todo el país (Cañas Kirby, 1997; Drake, 2003; Frías, 2008; Miller, 1997; Trafílaf y Montero, 2001).

Como señalan Pinto y Salazar (2010), pese a las dificultades, divisiones y debilidad interna, el rol del movimiento sindical fue relevante en los primeros años de la dictadura, encarnando un conciencia anti-autoritaria más simbólica que movilizadora pero que vino a sintetizar, junto a la Iglesia Católica, un espacio de resistencia en este período. Tal como indica Garretón (1983), frente al vacío de organizaciones y la atomización que intentó forzar el régimen, el Iglesia vino a proveer un espacio organizacional e ideológico de canalización de intereses y demandas generales, en una

¹⁵ Ver más detalles de estos procesos en el capítulo 5.

forma análoga al previsto por el sistema político previo a 1973, constituyéndose en un actor político relevante bajo la dictadura.

De igual manera y por estos años, los académicos y pensadores ligados al centro y la izquierda política que se ven obligados a abandonar las universidades e imposibilitados de acceder a otros espacios oficiales, comienzan a levantar sus propios espacios de pensamiento y centros de estudio. Estas iniciativas y la progresiva consolidación de estas organizaciones permiten a la oposición generar un marco alternativo de pensamiento social y político, con orientaciones teóricas y también prácticas. Como lo describe Cañas Kirby (1997: 126–127),

Los centros académicos sirvieron de base para constituir una plataforma subterránea de reflexión de variados temas ligados a la sociedad chilena: derechos humanos, salud, educación, instituciones políticas, desarrollo, etc. así como instancias de comunicación y contactos con diversas asociaciones y actores sociales, lo que dio lugar a la producción de una cultura y un conocimiento social alternativo, estrechamente vinculado con la oposición al régimen, y cuya penetración en la esfera pública fue bastante restringida y censurada, situación que comenzará a cambiar a partir de los años 80, cuando los espacios públicos se van poblando de voces cada vez más explícitamente disidentes.

Todos estos procesos se despliegan en medio de grandes dificultades para convocar así como para movilizar a los sectores involucrados. Lentamente se fueron constituyendo sindicatos y las redes clandestinas de oposición, los partidos políticos comenzaron a organizar protestas, abriéndose los espacios para una demanda nacional de retorno a la democracia y el fin de las estrictas restricciones del régimen.

Con todo y a pesar de la cruda represión, durante esta época se produce la reemergencia de antiguos y el surgimiento de nuevos movimientos sociales como el de derechos humanos, de mujeres y una serie de ONGs.¹⁶ Luego de un largo proceso de recomposición del entramado social que contó con el soporte de la Iglesia, la Cooperación Internacional y los partidos políticos en la clandestinidad, éste se volverá protagonista en un nuevo ciclo de movilización, el más importante de las últimas décadas en Chile y que pavimentará el camino para el fin dictatorial y la recuperación de la democracia.

¹⁶ Para una revisión pormenorizada de este período ver Alburquerque (1990).

2.3.2 Explosión social y transición a la movilización latente de la era democrática

A principios de la década del ochenta, la trayectoria socio-político de la dictadura militar comienza a tomar un rumbo diferente. La institucionalización del régimen se produce con la redacción de un nuevo documento constitucional, que al mismo tiempo establecía las condiciones, mecanismos e itinerario de salida a la democracia. A partir de este marco legal, Pinochet permanecería como Presidente, con un parlamento designado y con facultades dictatoriales hasta 1989 cuando se realizaría la primera elección presidencial competitiva. El texto constitucional debía ser aprobado en un plebiscito convocado para 1980, cuya coyuntura permitió una cierta articulación de la oposición con motivo de la campaña a decir *No*. La verdadera reorganización de la oposición, sin embargo, no vendría antes sino luego de la aprobación de la nueva Constitución y una vez producida la institucionalización del régimen.

Como explica Garretón (1983), el plebiscito de 1980 marca la extenuación de la estrategia política que intentaba la revitalización y concertación de estructuras partidarias, formas de acción y los referentes políticos heredados del período democrático. El problema de cómo enfrentar el término del régimen así como encontrar la forma de reconstruir el tejido social transformado por la acción desarticuladora del mismo, fueron preguntas que aglutinaron, alimentaron los debates y esbozaron los reordenamientos internos de la oposición. Entre las líneas de acción a seguir para derrocar al régimen, existía consenso entre la incipiente oposición sobre una estrategia de ‘movilización social’ que contemplaba acciones comunes de sectores de izquierda. Estos debates se producen en un momento en que el régimen gozaba de cierta estabilidad y crecientes cuotas de legitimidad gracias al buen desempeño económico de las recién implementadas reformas neoliberales.

La ‘boom’ económico junto a la aprobación de la Constitución de 1980 contribuyó a un mayor grado de auto-confianza por parte del régimen y a que éste iniciara un proceso de cierta liberalización política, ampliado algunos derechos individuales y grupales que habían sido dramáticamente restringidos desde 1973. Con ello, se autorizó el derecho la negociación colectiva, aunque bajo condiciones aún muy restringidas, se limitó el uso de la tortura y el exilio, se eliminaron algunas restricciones a la libertad de expresión e información y se expandió el grado de tolerancia en relación a las actividades de los partidos políticos y las organizaciones sociales (Campero y Cortázar, 1988). Como explican estos autores, aun cuando estas medidas no supusieron un proceso de democratización, esta ‘liberalización’ política implicó que los actores sociales y políticos percibieran una reducción de los costos de la acción colectiva y mayores espacios para la misma, clima que se vio posteriormente

potenciado por el advenimiento de la crisis económica de 1982, donde los espacios que se habían abierto para la acción opositora fueron activamente ocupados.

La crisis económica de 1982 resultó ser la más severa desde la gran depresión de 1929, con una contracción del PIB de dos dígitos, una tasa de desempleo que alcanza a un tercio de la población y niveles de pobreza que aumentaron desde un 30% en 1981 a un 55% en el año 1983 (Barandiarán y Hernández, 1999). Asimismo, la inflación se duplicó, el sector industrial y de construcción se mostraron contractivos en paralelo a la quiebra de muchas empresas y bancos del país que debieron luego ser intervenidos y su control traspasado a al Estado. La deuda externa del país llegó a los 17 mil millones de dólares (Salazar y Pinto, 1999b) lo que obligó a Chile a no cumplir con los acuerdos definidos con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto redundó en una explosión generalizada de malestar social, un quiebre en la confianza en las reformas neoliberales y, con ello, en la legitimidad, eficacia y capacidad de la burocracia militar para administrar el país.

Con ello y en paralelo al complejo panorama económico, se produce una crisis del régimen y su institucionalidad reinante. El aparato estatal comenzó a debilitarse: ciertas instituciones manifestaron sus diferencias con la posición oficialista, el Poder Judicial así como los jefes de las otras ramas de las fuerzas armadas se distanciaron de Pinochet. A los causes ya abiertos para la posición, el régimen se ve forzado a ampliar aún más los espacios de negociación e impedir que el descontento social desbordara la capacidad de acción del Estado (Fazio Vengoa, 1994), abriendo el sistema político y generando nuevas oportunidades para la acción colectiva.

Sin embargo y pese a una cierta apertura del régimen, los canales de expresión siguen siendo muy limitados. El año 1982 bajo el fuerte impacto de la crisis, la presión social comienza a aumentar y a manifestarse. Como señalan Garcés y De la Maza (1985), las presiones laborales sin respuesta por parte de las autoridades aumentan hacia finales del año 1982, en el mundo poblador proliferan las tomas de terreno como una manera de protestar ante el déficit de viviendas que por la fecha alcanzaba el millón, mientras una rearticulada oposición comienza a expandir su poder de convocatoria. En el centro de Santiago se producen las primeras protestas de mayor masividad denominadas ‘marchas de hambre’ que, aun cuando son acciones y presiones todavía limitadas y que no logran canalizar el descontento de las mayorías, resultarían ser el precedente inmediato de las jornadas de protesta nacionales.

El año 1983, trabajadores del cobre concertados la Confederación de Trabajadores del Cobre convocan a un ‘día nacional de protesta’ contra el régimen militar y sus políticas. Se trató de una acción muy limitada y poco clara en su objetivo, pero sus efectos y consecuencias resultaron ser sorprendentes pues no sólo se plegaron los

mineros, sino amplios sectores de la sociedad civil que ese día manifestaron de forma fuerte y clara su oposición al régimen (Campero y Cortázar, 1988; Gazmuri, 2014). Este hecho tiene lugar el 11 de mayo de 1983 y representa un punto de inflexión en el quehacer colectivo, dando paso al nuevo y último gran ciclo de movilizaciones de la historia chilena del siglo XX. Con esto, el malestar social generado y acumulado durante diez años de régimen autoritario se haría finalmente visible en el espacio público en la protestas nacionales entre 1983 y 1986, pues como señala Stern (2009: 23) “los momentos de protesta hacen visibles la frustración, la desesperación, la organización y la resistencia, que a menudo tienen un aspecto subterráneo o marginado en condiciones de dictadura represiva o de democracia restringida”.

En este contexto, la institucionalización e intento de legitimización del régimen con la apertura de ciertos canales de participación socio-política, el proyecto modernizador con la aplicación de un recetario neoliberal radical y reformas de carácter estructural, la precarización social resultante de la crisis económica junto a un escenario restrictivo y represivo, constituyeron una serie de oportunidades políticas para el despliegue de la acción colectiva. Y aunque el objetivo inicial fue un reclamo contra la situación económica, pronto las exigencias sociales se concentraron en lograr la renuncia inmediata de Pinochet y la convocatoria a elecciones generales. Con esto, las protestas se volverían constantes y amenazarían la estabilidad y los fundamentos de un - hasta entonces - sólido régimen autoritario, allanando el camino para el futuro restablecimiento democrático.

Con motivo de la primera jornada de protesta, los trabajadores del cobre agrupados en la CTC crearon un Comité de Trabajadores que daría origen al CNT, Comando Nacional de Trabajadores conformado por la Confederación del Cobre y los cuatro grupos sindicales existentes (CNS, UDT, FUT y CEPCH). Tal como se señalara, el resultado de esta primera jornada provocó el asombro tanto de los organizadores y la ciudadanía como de la oposición y las autoridades, dada la adhesión no sólo de trabajadores sino de diversos grupos sociales incluidas las clases medias y medias altas, con pequeños y medianos empresarios del transporte y comercio. Durante el día se produce una merma importante de la asistencia a clases, disminuyen las ventas del comercio minorista, hubo manifestaciones estudiantiles y de trabajadores, mientras por la noche al ruido de cacerolas en los hogares y bocinas de los autos en la calles, se suman barricadas y desmanes, se movilizan caravanas de autos y marchas locales, en una acción social masiva por primera vez después de diez años (Campero y Cortázar, 1988; Frías, 2008; Gazmuri, 2014; González, 2003).

El régimen reaccionó con represión y masivas represalias con allanamientos en las poblaciones como La Victoria, Yungay y Villa O'Higgins, resultando en violentos

enfrentamientos que dejaban como saldo dos muertos, un número indeterminado de heridos y 350 detenidos. En los barrios de clases medias y altas, carabineros reaccionó quebrando los parabrisas de los autos que paralizaban el tráfico en tanto escuadrones de las Fuerzas Especiales de Carabineros intentaron silenciar a los manifestantes arrojando gases lacrimógenos y disparando en el aire. Las características de esta jornada en términos de protesta y represión se replicarán de forma periódica hasta 1986, primero en Santiago y luego en regiones.

La segunda jornada de protesta, el 14 de junio de ese año, la participación de los pobladores resultó mucho más activa. El 12 de julio y el 11 de agosto se produce la tercera y cuarta jornada de protesta a las que el régimen respondió con brutalidad: se impuso un toque de queda desde las seis de la tarde a la vez que 18 mil soldados salieron a las controlar las calles dejando un saldo de 28 muertos y 100 heridos (Campero y Cortázar, 1988). La presión contestataria, sin embargo, no disminuyó pese a los allanamientos masivos, los muertos y heridos luego de cada protesta y la represión brutal contra dirigentes sindicales, poblacionales y políticos. Las jornadas de protesta masiva representaron un salto cuantitativo y cualitativo en la línea de resistencia al régimen y marcaron un hito en las trayectorias de movilización de la sociedad civil chilena (Frías, 2008). Tal como se observa en la tabla 2.8, los hechos de violencia política perpetrados por el movimiento popular alcanzan su máximo valor durante el gobierno de la UP, se contraen dramáticamente luego en la primera etapa dictatorial y el período de desmovilización, para volver a expandirse a partir de la década del ochenta de la mano del estallido social contenido en las jornadas de protesta.

Tabla 2.8. Hechos de violencia política, 1947-1987.

Ciclo presidencial	Promedio hechos de violencia política
G. González Videla (1947-52)	12,5
C. Ibáñez del Campo (1953-58)	10,6
J. Alessandri Rodríguez (1959-1964)	18,6
E. Frei Montalva (1965-70)	31,5
S. Allende Gossens (1971-1973)	63
A. Pinochet Ugarte (1974-79)	17,5
A. Pinochet Ugarte (1980-85)	41
A. Pinochet Ugarte (1986-87)	48,5

Fuente: Salazar (2006: 113).

A partir de la tercera jornada, los sectores medios y medios-altos comienzan a reducir su participación en las protestas, transformándose en movilizaciones más populares y de carácter más radical. Al mismo tiempo, el sindicalismo como agente movilizador y actor convocante pronto demostró sus límites para sostener y liderar la movilización popular en el tiempo, volviéndose más visibles y relevantes los pobladores, especialmente militantes, jóvenes y mujeres (Garcés y De la Maza, 1985). Las movilizaciones continuaron en 1984 con un paro convocado para el mes de octubre y una concentración en el Parque O'Higgins a la que régimen respondió ofreciendo instancias de diálogo encabezados el Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa. La concreción y ejecución del paro redundó en la ruptura de estos diálogos, estableciéndose con ello un Estado de Sitio que regiría desde el 5 de noviembre de 1984 hasta el 14 de junio de 1985 (Frías, 2008).

El ciclo de movilizaciones comprendido en estas jornadas ha sido definido como una “resurrección de la sociedad civil” (O'Donnell y Schmitter, 1986; Oxhorn, 1995), acción que asimismo inaugura una nueva etapa, hace resurgir y dinamizar a los partidos políticos, provoca la constitución de alianzas y movimientos políticos así como la consolidación de la fuerza del bloque opositor al régimen. Como señalan Campero y Cortázar (1988), la movilización social tuvo un rol de suma importancia en la medida que logró cuestionar la legitimidad del régimen, estimulando al debate público y una mayor liberalización del espacio político en paralelo a una extensión y

redefinición de los derechos individuales y grupales. Como describe Gazmuri (2014: 445–446),

Las “protestas” constituyeron, en lo fundamental, un acto de rabia, y su protagonista fue el pueblo de Chile. (...) fueron actos de florecimiento de una rebeldía largamente reprimida (...) la “protesta” se transformaba en una “fiesta” (en el sentido historiográfico del concepto) de alegría y violencia, aunque de baja intensidad: destrucción de algunas instalaciones públicas o municipales, apedreos, quemas de neumáticos, etc. Eran, por otra parte, un arma que la dictadura parecía no tener cómo contener, excepción hecha de la represión directa sobre pequeños sectores de participantes y la persecución a los dirigentes sindicales y los jefes de los partidos políticos de oposición que no estaban en la clandestinidad, los que debieron conocer la cárcel (...) Pero en las “protestas” la mayoría de los chilenos podía expresar su repudio al régimen en el anonimato y a resguardo de venganzas.

Las protestas nacionales permitieron la convergencia de diversos actores sociales y políticos, tuvieron su mayor desarrollo en las poblaciones, donde la acción colectiva fue causa y consecuencia de la emergencia de una identidad pobladora y popular que sirvió de insumo movilizador. El mundo obrero, actor relevante especialmente en el origen de las movilizaciones, consecuencia de la articulación del período logra reestablecer su confederación nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1988 (Drake, 2003), aunque sin recuperar el poder e influencia del pasado. Sin embargo y pese a la emergencia de movilización social, en este período no se reprodujo el esquema ni las estructuras de relación de los actores socio-políticos previas a 1973 en que las organizaciones y las bases sociales fueran fuertemente dependientes de los partidos políticos. Desde entonces ambos mundos (político y social) comienzan a coexistir paralelamente para converger sólo en determinadas oportunidades (Fazio Vengoa, 1994).

En el apogeo del ciclo de manifestaciones, los partidos políticos de oposición defendieron y apoyaron una estrategia basada en la movilización social como la gran posibilidad de derrocamiento del régimen. No obstante y tal como se desarrolla en extenso en los siguientes capítulos, tal estrategia no perduró ni rindió los frutos esperados. Hacia 1986 y dada la escalada de violencia - incluido un atentado a Pinochet - y la evidencia de que aquella no provocaría el fin del régimen, la estrategia movilizadoría comienza a ser descartada, deslegitimada y derrotada. Los partidos asumen la conducción de la transición hacia la democracia, el mundo social es reemplazado por la arena política y la movilización social por la movilización electoral,

que es la que finalmente permite poner un fin constitucional a 17 años de dictadura militar (Hipsler, 1996; Oxhorn, 1989, 1995; Roberts, 1998). Se cierra así un ciclo político que al mismo tiempo determina el perfil del proceso de retorno a la democracia así como el rol y características que en esa transición definirán a la sociedad civil.

Capítulo 3

Desmovilización social: violencia política, memoria emblemática y post-trauma colectivo

El vínculo entre memoria post-traumática y desmovilización se vuelve de especial relevancia al observar el proceso socio-político de los últimos años en Chile. De entre los muchos legados que la dictadura militar dejó sobre la redemocratización y que se analizan en extenso a través de este trabajo, el miedo a los conflictos del pasado y las consecuencias del trauma que afectó a la sociedad durante la década del setenta y el ochenta, emergen como herencias psicológicas de fuertes implicancias para el potencial de participación social y de movilización ciudadana a partir de los años noventa.

Como se desarrolla a continuación, el trauma colectivo en la sociedad civil en Chile surge luego de la exposición directa o indirecta durante décadas a diferentes situaciones de violencia y recursos de dominación social observados especialmente durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. A través de estos hechos y actuando en diferentes niveles, se intenta demostrar que el impacto de este trauma fue multidimensional y se tradujo luego de cesado el régimen en un clima de silencio, olvido, negación, desarticulación social, anomia y retracción ciudadana, todos ingredientes necesarios para la fase de subsidencia o movilización latente de la sociedad civil post-dictadura.

En la primera sección de este capítulo se exponen los principales conceptos necesarios y que permiten entender la relación entre memoria colectiva, trauma social así como las consecuencias de éste último fenómeno sobre los procesos posteriores o sobre las dinámicas sociales una vez producida la experiencia traumática. Luego, se presenta el escenario socio-político del Chile de las últimas décadas desde una descripción de los principales elementos constitutivos de la experiencia traumática y la forma en que éstos van determinando un clima de silencio, negación y repliegue ciudadano hacia la esfera privada, relevando con ello las primeras pistas para entender la desmovilización del período 1990-2010. Dicha exposición se vuelve necesaria para entender por qué se define como trauma a aquello ocurrido en Chile en las décadas del setenta y ochenta así como las múltiples dimensiones que constituyeron esta dramática experiencia.

En la segunda parte, se analiza de forma más específica lo ocurrido con la sociedad civil y sus movimientos sociales a partir de 1990 como consecuencia del post-trauma colectivo. Dichas repercusiones se relacionan con mecanismos de supervivencia y reacción al trauma colectivo, la influencia de la desconfianza, desarticulación y deslegitimación de la organización social y, finalmente, como un efecto de la

transmisión social, re-traumatización o cronificación del trauma. De esta manera, en este capítulo se busca retomar y ampliar el debate respecto al proceso de desactivación social o movilización latente en el período de reconstrucción democrática como resultado específico del impacto del trauma instalado en la sociedad chilena.¹

3.1. Memoria, trauma y violencia política

La relación entre memoria, trauma, violencia política y desmovilización cobra especial sentido cuando se trata del proceso socio-político chileno de las últimas décadas. En esta sección se emprende un recorrido teórico que comienza con descripciones del concepto de memoria colectiva, pasa por el trauma a nivel social, para luego detenerse en el trauma colectivo producido específicamente por violencia política. Por tratarse de un trauma derivado del accionar y el terror ejercidos entre y por integrantes de un sistema social, el trauma colectivo producto de violencia política tiene sus propias especificidades y consecuencias. En la segunda sección se aterriza concretamente en el escenario socio-político chileno para desarrollar los principales hechos que fueron configurando una experiencia traumática y constituyendo finalmente un trauma en la sociedad civil chilena hacia finales de la dictadura militar y que marcaría el comienzo de la recuperación democrática. Un análisis sobre las características del trauma permite relevar las primeras pistas para entender la desmovilización del período 1990-2010 en la medida que éstas determinan un clima de silencio, negación y repliegue ciudadano hacia la esfera privada.

3.1.1 Memoria colectiva y trauma social: algunas precisiones teóricas

Memoria colectiva y trauma social

La noción de memoria colectiva fue incorporada en el reportorio de conceptos sociológicos por Maurice Halbwachs quien, recogiendo planteamientos durkheimianos, propone que ésta se define y se estructura a través de arreglos sociales. Junto con definir la memoria colectiva como un hecho social y destacar con ello su rol para la cohesión societal, el aporte de Halbwachs fue establecer la conexión entre un grupo y la memoria colectiva así como la forma en que éstos desarrollan una memoria de su propio pasado que se materializa en una identidad única (Misztal, 2003; Olick, 2008). Para Halbwachs (1980), la memoria individual depende de la membresías

¹ Una versión acotada de este capítulo y de la primera sección del sexto capítulo será publicada como '(Des) movilización de la sociedad civil: impacto de la memoria post-traumática en la reconstrucción de la democracia chilena' en el próximo número ('The Resurgence of Collective Memory, Truth, and Justice Mobilizations in Latin America', primer semestre 2016) de la revista *Latin American Perspectives*.

colectivas y no puede existir fuera de este contexto, se encuentra siempre enmarcada socialmente pues es el propio grupo el que determina lo que es memorable y la forma en que debe ser recordado. Los recuerdos individuales se encuentran así circunscritos a narrativas colectivas que, al ser reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales, permiten la creación de vínculos sociales (Ricoeur, 1999). La relevancia de los símbolos conmemorativos, los rituales y las representaciones son también analizados por Nora (1989: 7) y las formas en que la memoria “se cristaliza y se secreta a sí misma” a través de diferentes espacios e instancias. En suma, dado que el acto de recordar es una acción social, la recolección de recuerdos y la memorialización tienen la capacidad de constituir identidad grupal y comunidad en un proceso dinámico en que el pasado es resignificado en el presente (Arias y Del Campo, 2009) .

La forma en que los eventos pasados son significados en el presente ha sido analizado por autores como Hobsbawm y Ranger (1992) quienes plantean que la recolección del pasado se realiza estratégica e instrumentalmente para satisfacer las necesidades e intereses dominantes del presente. A partir de la observación de narrativas e ideologías oficiales sobre cohesión social y nacionalidad, los autores destacan la utilización del pasado como una forma de establecer o simbolizar cohesión social o la membresía a comunidades reales o artificiales; como una manera de legitimar instituciones, poderes o relaciones con la autoridad; y finalmente, como una estrategia de socialización e inculcación de creencias, sistemas de valores y formas de comportamiento. De esta manera, la administración oficial de la memoria colectiva estaría en función de la legitimación del poder, moviéndose entre los polos de la censura y la celebración, o el olvido y el recuerdo socialmente organizado.

La memoria como un dispositivo social y la recolección del pasado como un ejercicio instrumental e influenciado por los intereses del presente, ha sido abordada también por ciertas corrientes intelectuales que reconocen la conflictividad de las políticas de la memoria. Sin embargo, estas perspectivas relativizan un control y manipulación únicamente desde las instituciones oficiales y proponen una relación compleja y una tensión constante entre una memoria oficial o dominante constituida desde arriba y una memoria popular construida desde la base social (Popular Memory Group, 2007). Utilizando conceptos como memoria pública, memoria opuesta, memoria no oficial o la contra-memoria de Foucault, el enfoque de la memoria popular desafía la hegemonía de las elites políticas en la construcción de los recuerdos y la define como un terreno en disputa en que distintos grupos y visiones sobre el pasado se ven enfrentadas (Zerubavel, 1999). Con ello, estas corrientes no reducen la memoria necesariamente a un proceso de manipulación elitaria, sino que amplía el espacio entre una ideología impuesta y la posibilidad de formas alternativas de

compresión del pasado, otorgando protagonismo a la agencia y a la dimensión temporal así como a la historicidad de las identidades sociales (Misztal, 2003). En esta línea, Jelin (2002a: 5) advierte que la noción de memoria colectiva basada en la interpretación durkheimiana extrema que considera los hechos sociales como cosas, presenta problemas si se la entiende como algo con entidad propia o que existe por encima y separada de los individuos. Para la autora, la memoria social debe ser interpretada como “memorias compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y en relaciones de poder”.² Más aun, la denominada memoria colectiva o “emblemática” es más que un recuerdo particular que posee un contenido específico, sino que es además el marco organizativo o contexto que organiza el significado, la selectividad y la contramemoria (Stern, 2009: 146).

El análisis que vincula la memoria colectiva con el trauma cobra relevancia en la medida que los eventos traumáticos corresponden a experiencias humanas extremas y, de producirse, las identidades y memorias colectivas se ven intensamente comprometidas (Misztal, 2003). Asimismo, dado que la evaluación y definición que se realice sobre el trauma serán producto de una interpretación sobre el pasado y los acontecimientos que afectaron la vida de una persona o un grupo social, el trauma y la memoria están profundamente interrelacionados (Vergara y Tocornal, 1998). Según estas últimas autoras, el trauma es un constructo teórico propuesto por la psicología para explicar el impacto de vivencias negativas que producen un efecto desestructurante de la personalidad, que pueden fluctuar entre dificultades para integrar la experiencia traumática, alteraciones emocionales y psicosomáticas, hasta complicaciones en la convivencia y problemas en el orden social.

Uno de los primeros acercamientos al estudio del trauma proviene del psicoanálisis en el momento en que Freud plantea que el trauma psíquico es la consecuencia de un gran evento traumático, o bien, de una secuencia de traumas más pequeños que impactan en el aparato psíquico sobrepasando la barrera protectora del individuo (Freud, 2001a, 2001b).³ El trauma ha sido utilizado para explicar los trastornos generados tanto a nivel individual como social luego de experiencias que van desde abusos sexuales hasta desastres naturales y todo tipo de eventos que “provoquen miedo, impotencia o horror en respuesta a una amenaza de daño o muerte” (Yehuda,

² Para un análisis más extenso sobre el tema de la memoria colectiva ver Goff (1991); Lavabre (2007) y Ricoeur (2007), para una crítica al concepto revisar Gedi y Elam (1996).

³ A partir de los postulados freudianos se ha desarrollado toda una línea de análisis del trauma a nivel social y la forma en que las marca psíquicas o huellas mnémicas a nivel individual tienen también una expresión a nivel social. Asimismo, y tal como se podrá ver más adelante, la perspectiva freudiana entregó los antecedentes fundantes de lo que más tarde fue denominado la transmisión transgeneracional del trauma (Lagos *et al.*, 2009).

2002: 108). Si bien el concepto ha sido utilizado por el psicoanálisis y los estudios culturales, éste también se relaciona con la sintomatología del estrés post-traumático en el campo de la psiquiatría. Se ha observado a nivel de las huellas o residuos que se imprimen de forma permanente tanto a nivel individual como social y que dificultan un proceso o desarrollo normal, siendo posible diferenciar el trauma psíquico como la herida o marca en un individuo particular, del trauma social en referencia al impacto de un hecho histórico y que afecta a toda una población.

El trauma a nivel societal puede estar ligado a catástrofes naturales como inundaciones, incendios o terremotos, dado que éstas generan pérdidas de vidas humanas, la sensación de amenaza, la destrucción de hogares y diversas pérdidas materiales. Una experiencia de este tipo provoca traumas individuales y sociales, procesos que pueden verse agravados dependiendo de las dificultades encontradas en las etapas de reconstrucción y recuperación posteriores. Este tipo de experiencias negativas o que implican una fuerte demanda de adaptación psicológica por parte de los individuos, impactan más fuertemente en la memoria que aquellos eventos donde los sujetos o las instituciones no se ven obligado a tal esfuerzo adaptativo (Pennebaker *et al.*, 1997). En el estudio realizado por Guichard y Henríquez (2011), se indaga en la memoria colectiva de chilenos de la ciudad de Concepción a partir de los principales cambios y eventos políticos y sociales mencionados por las personas como relevantes dentro de su experiencia personal. Los resultados del estudio revelan que dentro del total de la muestra, los acontecimientos relacionados con catástrofes naturales como terremotos, maremotos, inundaciones, aluviones y erupciones volcánicas reciben la segunda mayor cantidad de menciones, presentado una importancia transversal a todos los cohortes observados. El acontecimiento que recibe un mayor número de menciones en el total de la muestra (51%) es el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura, que constituyen posiblemente y a juicio de los autores, el evento socio-histórico más relevante del último siglo. Esto, pues “no es solamente que éste sea mencionado por todas los cohortes que lo vivieron, sino también porque sus consecuencias y vestigios constituyen una referencia necesaria para eventos posteriores como el plebiscito de 1988, la vuelta a la democracia y la muerte de Pinochet” (2011: 20).

Tanto las catástrofes naturales como los conflictos socio-políticos como guerras, golpes de Estado o dictaduras se caracterizan por tener un origen excéntrico, externo o que escapa muchas veces a la voluntad de las personas expuestas (Vidal, 1993). Ambos tipos de eventos exigen un intenso esfuerzo adaptativo por parte de individuos y sociedades e impactan generando un trauma psicosocial. Sin embargo y pese a estas similitudes, el trauma originado a partir de los conflictos socio-políticos

tiene características distintivas y, por tanto, se instalará de una manera diferente en la memoria colectiva así como generará efectos particulares sobre la población afectada. Se ha señalado que las consecuencias y las dificultades experimentadas luego de eventos traumáticos causados por catástrofes provocadas por el hombre son más persistentes en el tiempo que aquellas provocadas por efecto de la naturaleza (Páez *et al.*, 2001).

Trauma colectivo producto de violencia política

El estudio del trauma colectivo - o memoria herida (Ricoeur, 1999) - comienza a cobrar relevancia a mediados del siglo XX luego de la Segunda Guerra Mundial, los horrores de Holocausto y la necesidad de explicar el pasado para entender la forma en que éstos y otros trágicos eventos se instalaron y las consecuencias que tuvieron en la memoria de las sociedades. Bettelheim (1943) fue uno de los primeros en analizar el trauma psicosocial experimentado durante la segunda guerra mundial en los campos de concentración, advirtiendo que una experiencia de este tipo representa una situación límite o extrema por ser ineludible y no depender del individuo, tener una duración incierta e impredecible y que supone, por tanto, no una amenaza puntual sino permanente. De la misma manera y a partir de las experiencias represivas de esta guerra, Keilson (1992) sugiere que la traumatización causada por dichos eventos se constituye en un proceso de continuas situaciones traumáticas que se intensifican en el tiempo dada la permanencia de la represión, el posterior período de post-guerra y las dificultades de reinserción social de la víctimas directas, en lo que define como un proceso de traumatización secuencial. En referencia a la dimensión temporal del trauma, Khan (2005) también sugiere la existencia de un trauma acumulativo.

En el contexto latinoamericano, el aporte de Martín-Baró (1990) permitió la emergencia del concepto de trauma psicosocial para definir una herida causada por la vivencia prolongada de una situación de violencia política. El autor sugiere que las particularidades del trauma psicosocial están en que, si bien es un trauma que afecta a las personas, éste ha sido producido socialmente, es decir, sus raíces no se encuentran en los individuos sino en la sociedad. Así, la importancia del contexto social se vuelve así crucial no sólo en términos del marco en que se analiza el trauma, sino también como un elemento fundamental que permite modificar el curso posterior del evento traumático (Lagos *et al.*, 2009). Lo anterior, pues estos últimos autores advierten que tanto los aportes de autores europeos como los de Martín-Baró ayudan a entender las especificidades del trauma psicosocial como un fenómeno que opera en capas tanto individuales como sociales. Éste, no sería originado por un evento único o aislado sino por una sucesión de eventos traumáticos que actúan a nivel biográfico individual, pero

que están estrechamente ligados al contexto político y social en que los individuos se insertan, donde el entorno “se convierte, por tanto, en factor gravitante en relación con la posibilidad de elaboración y reparación del daño o, por el contrario, en su cronificación” (2009: 37–38).

De igual forma y recogiendo el aporte de Bettelheim, Lira, Becker y Castillo (1989: 21) plantean que las experiencias traumáticas que son producto de la represión política son “traumatizaciones extremas”. Lo traumático de la represión estaría dado por dos fenómenos que se producen de manera simultánea: el impacto sorpresivo de amenazas vitales múltiples, difíciles de evitar o enfrentar, y la desorganización experimentada por los sujetos y los grupos sociales que redundan en respuestas caóticas e inefectivas que pueden incluso potenciar lo traumático de la experiencia. Para los autores, dichas situaciones transforman el entorno social “haciéndolo amenazador y traumatizante, con un gran potencial destructivo. Incidiendo en las condiciones materiales de la vida concreta, en la sobrevivencia psíquica y en los significados y valores que se constituyen en el sentido de la vida de los sujetos” (1989: 23).

El trauma psicosocial deriva del enfrentamiento entre las personas a causa de razones ideológicas, situación que es llevada al paroxismo cuando se trata de terrorismo de Estado. Este último, es entendido como una acción planificada sistemáticamente por el aparato estatal con el fin de ocasionar daños físicos y psicológicos en ciertos individuos y, con ello, inocular horror a la sociedad en su conjunto, lo que produce un menoscabo tanto a las personas como a la trama social que los soporta (Scapusio, 2006). Las llamadas “políticas de la atrocidad” (Humphrey, 2003) son diseñadas para engendrar horror y alterar la confianza en la realidad normativa de las víctimas y también de los testigos de la violencia cuando la noción de seguridad nacional se vuelve inversamente proporcional a la de seguridad individual. Las situaciones de represión han sido descritas como verdaderas catástrofes sociales en la medida que es el propio Estado quien deja de ser el garante de seguridad y bienestar y, en paralelo, impone e intenta legitimar un discurso en que se representa a sí mismo como el único ente responsable de dicha seguridad. Todo esto genera confusión, una sensación generalizada de indefensión, desestructuración cultural, inversión de valores, negación, silencio y parálisis social (Openhaym y Vergara en (Lira y Castillo, 1991: 38).

Tal como se adelantara en el Capítulo 1, en contextos de alta conflictividad social como la observada en Chile y en el resto de América Latina a partir de los años sesenta, la violencia política, la polarización social y el terrorismo originado por el Estado, fueron naturalizados creando “culturas del miedo” (Koonings y Kruijt, 1999;

Procupez y Obarrio, 2006).⁴ En el ya mencionado trabajo de Martín-Baró (1990), desde un análisis centrado en la guerra civil salvadoreña el autor advierte que un conflicto de esta naturaleza se caracteriza por la polarización social buscada intencionalmente por grupos rivales, la mentira institucionalizada y la violencia con una consiguiente militarización de la sociedad. El trauma psicosocial derivado de esta experiencia se traduce en relaciones sociales deshumanizadas y la cristalización traumática en las personas. Mientras que la polarización comienza a ser somatizada, la mentira institucionalizada genera graves problemas identitarios y la violencia provoca la militarización incluso de las lógicas individuales.

Las estrategias de violencia directa e indirecta puestas en práctica en estos escenarios, producen un impacto tanto en el momento en que estas situaciones son vividas como cuando la violencia cotidiana cesa y se produce el espacio para la elaboración y procesamiento del trauma. Asimismo, las estrategias represivas generan un impacto a nivel social cuando a través de las víctimas se envía un mensaje de advertencia a la población y se propicia un ambiente de temor y amenaza permanente como forma de consolidación de poder (Deutsch, 2007; Munczek, 2007). Como señala Scapusio (2006) para el caso uruguayo, las marcas de este tipo de experiencias así como los signos de la violencia pueden permanecer no sólo en el cuerpo y el psiquismo de las víctimas directas, sino que en el tejido social en su totalidad, agregando que

sabemos que esa diferenciación entre afectados y otros que (aparentemente) no lo fueron es engañosa, que los períodos de terror político, de violencia desatada por el Estado tienen efectos sobre toda la sociedad. Es cierto que hubo miles de directamente afectados, pero el dantesco ejercicio de fuerza y brutalidad que se hizo sobre ellos persiguió que los demás integrantes de la sociedad fueran también afectados (2006: 15).

Dada la complejidad del fenómeno, el impacto y especialmente el legado del trauma psicosocial tanto a nivel individual como social, se ha transformado en foco de estudio tanto en Europa y Norteamérica luego de las guerras del siglo XX, como en América Latina luego de los regímenes autoritarios y las problemáticas enfrentadas por este trauma en las transiciones (Bar-On, 1999; Brito *et al.*, 2001; Corradi *et al.*, 1992; Crenzel, 2011; Danieli, 1998a; Hunt, 2010; Jelin, 2002b; Pennebaker *et al.*, 1997; Pridham, 2000; Roniger y Sznajder, 1999; Withuis y Mooij, 2010). Las experiencias de violencia vividas en el pasado, la herencia de dolor y conflictividad

⁴ El término fue acuñado por Guillermo O'Donnell en su análisis sobre la dictadura en Argentina para definir la experiencia cotidiana y completa de abuso a los derechos humanos (Lechner, 1992: 26).

social, las huellas de la represión y los fantasmas de los muertos y desaparecidos, pasaron a ser uno de los mayores desafíos de las transiciones en la región latinoamericana. Tal como lo adelantara Martín-Baró (1989: 10–11), las secuelas de la violencia política se tornaban un problema crítico en el continente dado que:

Resulta necesario recordar la magnitud, cuantitativa y cualitativa del daño producido por las campañas de contrainsurgencia o de represión estatal, para comprender el engaño de querer hacer borrón y cuenta nueva de esa historia; el pasado que tan festinadamente se quiere cerrar no sólo está vivo en personas y grupos -víctimas y victimarios-, sino que sigue operando en las mismas estructuras sociales (...) Todo este daño es de tal magnitud que resulta casi ingenuo o cínico pretender que se olvide de la noche a la mañana. Porque, en el fondo, no se trata de un problema de individuos aislados, pocos o muchos; se trata de un problema estrictamente social. El daño producido no es simplemente el de la vida personal que se destruye; el daño se ha causado a las estructuras sociales mismas, a las normas que rigen la convivencia, a las instituciones que regulan la vida de los ciudadanos, a los valores y principios con los que se ha educado y en función de los cuales se ha pretendido justificar la represión.

3.1.2 Características globales del trauma colectivo y su impacto sobre la sociedad civil en Chile

Aun cuando las premisas y conceptos respecto a la memoria, las situaciones traumáticas continuas que operan tanto a nivel individual como social, la inversión de valores, la alteración de la realidad normativa y la permanencia del trauma producto de la violencia política descritas por los autores son aplicables y observables curso socio-político de las últimas décadas en Chile, el caso chileno tiene sus propias especificidades que exigen un análisis que permita revelarlas. Esta exposición se vuelve necesaria para entender por qué se define como trauma a aquello ocurrido en Chile en las décadas del setenta y ochenta así como las múltiples dimensiones que constituyeron esta dramática experiencia

Tal como se presentó detalladamente en el capítulo 2, los niveles de conflictividad social en Chile fueron aumentando exponencialmente a través del siglo XX en un proceso de profunda ideologización de las élites, de alta polarización política, de reformas de gran alcance y tensiones sociales que alcanzan niveles superlativos en el escenario previo a 1973. La reforma agraria había sido puesta en marcha a finales de los sesenta implicando la expropiación de más de tres millones de hectáreas (Henríquez, 1987), mientras que los grupos más radicales habían comenzado a

implementar una políticas de ocupación de tierras.⁵ Para Collins, Hite y Joignant (2013), la reforma agraria y las tomas de terreno previas y durante el período de la Unidad Popular representan una memoria traumática persistente para los grupos más ligados a la derecha y a las clases más acomodadas. Más aún, la reforma agraria fue vivida como una verdadera catástrofe para la elite latifundista y oligarca pues vino a alterar bases sociológicas de la sociedad chilena hasta entonces basada en la estructura social y política de la hacienda.⁶ La nacionalización de la banca y empresas y la propuesta de una nueva Constitución exacerbaban la radicalidad de los cambios que se buscaban implementar y, con ello, la sensación de incertidumbre, caos y muchas veces miedo.⁷ Como describe Hite (2013), estos años representaron una pesadilla para la elite económica del país en la medida que proliferaron nuevos partidos políticos de espíritu revolucionario, la teología de la liberación, y las ideologías comunista y socialista ganaron mayor adherencia.

Tal como señalan Lira y Castillo (1991), la elección de Allende significó al mismo tiempo la esperanza de ciertos sectores más vulnerables de recibir soluciones concretas e inmediatas a sus necesidades, pero también implicó una rápida gestión opositora que articuló a grupos populares y de clase media que se sintieron amenazados por la Unidad Popular, mientras al mismo tiempo segmentos tanto de izquierda como de derecha se comenzaron a radicalizar. Los primeros se acercan a la opción socialista revolucionaria,⁸ constituyéndose el MIR y el MAPU que, junto a la posterior visita de Fidel Castro a Chile el año 1971, amplificarían los miedos de sectores de la población respecto a replicar el modelo cubano y la vía armada en el país. Asimismo, en esos años se constituye el grupo paramilitar de extrema derecha

⁵ Más tarde, durante el gobierno de Allende la política de expropiación de tierras se intensificó alcanzando los 5.7 millones de hectáreas expropiadas.

⁶ Apuntes de clases, curso “la desigualdad en Chile: modelo para armar” del Profesor visitante Carlos Peña, febrero-marzo 2015, Universidad de Leiden.

⁷ Para Collins, Hite y Joignant (2013), la memoria traumática de este período explica que cuando se anunciara la creación del Museo de Memoria y los Derechos Humanos, estos grupos hicieron un llamado para que la narrativa del museo comenzara en 1964 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y no en 1973 como en la actualidad relata el museo.

⁸ La radicalización de los grupos de izquierda queda de manifiesto en la declaración del Partido Socialista en su Congreso General en Chillán el año 1967: “El PS como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo (...) La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico. Sólo destruyendo el aparato burocrático militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista (...) Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El PS las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada.” (Boeninger, 1997: 135)

Patria y Libertad que, profesando una ideología nacionalista, optaba por las armas para derrocar al gobierno de la Unidad Popular.

En paralelo a esta radicalización tanto de grupos de izquierda como de derecha, se producen una serie de actos violentistas como la matanza de Puerto Montt (1969), el asesinato de René Schneider (1970) y Pérez Zujovic (1971) e incluso el intento de golpe de Estado conocido como ‘tanquetazo’ en junio de 1973. La convulsión del período estuvo gatillada también por un fuerte aumento de la inflación y la escasez de alimentos, el crecimiento exponencial de huelgas, tomas y el enfrentamiento de los grupos oficialistas y de oposición al gobierno de Salvador Allende. Como señala Valenzuela (2013: 160) “tanto el gobierno como la oposición estaban sujetos a los virulentos ataques de la extrema derecha y la extrema izquierda”, mientras el grado de confianza mutua y la capacidad de diálogo entre diferentes grupos cae a exigüos niveles. La hipermovilización social tanto en el campo como en las ciudades se vio marcada por el enfrentamiento de campesinos y obreros con los dueños de las tierras y los jefes de las fábricas (Wright, 2007).

En paralelo, la campaña de prensa de oposición se centró básicamente en una retórica aterradoradora sobre la amenaza de la Unidad Popular y el eventual descalabro económico, el fantasma del hambre y del desabastecimiento en Chile como proyección de un futuro socialista, el quiebre de la convivencia democrática y la libertad de expresión. La prensa oficialista, por su parte, se caracterizó por el maniqueísmo y la retórica belicista, así como por utilizar la sátira y la descalificación para agredir y producir estereotipos negativos sobre personas y grupos opositores como políticos y empresarios (Lira, 1991). La exposición a este tipo de mensajes e información se hace cotidiana y evoluciona desde la difusión de información propagandística y falsa, hacia la amenaza del uso de la violencia directa descrita en clave de guerra civil (Bernedo, 2003), conformando una campaña mediática general que “despertó ansiedad, frustración, miedo y la incertidumbre en muchas personas” (Lira, 2011: 111).

De esta manera, el período comprendido entre los años sesenta y principio de los setenta dejó huellas en la memoria colectiva de los chilenos en forma de imágenes e información marcada por la alta polarización, por el enfrentamiento de proyectos y creencias políticas irreconciliables así como por convicciones antagónicas sobre la sociedad y el futuro, etapa cuyo corolario sería la violenta imagen de un presidente muerto, el palacio de La Moneda bombardeado y el quiebre del sistema democrático.⁹

⁹ Como describe el Informe Rettig, los acontecimientos de violencia, polarización, huelgas, paros, tomas de terreno, movilización, etc.: “se multiplicaron progresivamente, al avanzar la fase 1970-1973, creando un cuadro global de desorden y de desconocimiento de los derechos de los particulares y de la función

Es posible así afirmar que el fin del gobierno de la Unidad Popular representa el primer hecho traumático para la sociedad civil chilena.

La violencia del impacto de un golpe de Estado y la incertidumbre generada con este acto, sin embargo, no habrían de finalizar el 11 de septiembre de 1973, sino muy por el contrario. Tal como señala el Informe Rettig:

La intervención militar del 11 de septiembre de 1973 configuró en el país, de inmediato y durante todo el período, un cuadro permanente de violaciones a los derechos humanos esenciales (principalmente al derecho a la libertad personal, a un juicio justo, a la integridad física y a la vida) de muchas personas pertenecientes o simpatizantes, real o supuestamente al régimen depuesto. (1996: 441).

Pero más allá de las víctimas directas del terrorismo de Estado, a lo largo de este capítulo se intentará probar que los hechos previos al golpe militar, pero especialmente aquellos experimentados luego de éste, derivaron en un trauma tanto a nivel individual como para la sociedad en su conjunto, que provocó un repliegue hacia la esfera privada y una desmovilización de la sociedad civil una vez producido el retorno democrático. Como señala Barbera (2009), la problemática de los individuos y las familias que sufrieron la violencia política y violaciones a los derechos humanos ha sido extensamente documentada,¹⁰ mientras poca atención se ha destinado a la influencia de las violaciones a los derechos humanos a nivel comunitario, a lo que es posible agregar a la sociedad en su conjunto o a las redes sociales en que dichos individuos y familias se insertan.

Como se expone a continuación, el trauma colectivo en la sociedad civil en Chile emerge luego de la exposición directa o indirecta durante décadas a diferentes situaciones de violencia y recursos de dominación social observados especialmente durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Las características del trauma colectivo provocado por los hechos socio-políticos de las décadas previas a 1990 derivan de sociedad chilena que se vio enfrentada a una fuerte represión tanto directa como indirecta, a una guerra psicológica o dominación ideológica, al miedo generalizado y a un proyecto refundacional en términos económicos y políticos. A través de estos hechos y actuando en diferentes niveles, se intenta demostrar que el impacto de este trauma multidimensional se tradujo luego de cesado el régimen en

propia de la policía. A menudo esos acontecimientos tuvieron, para ambos bandos, consecuencias de sangre: muertes homicidas, lesiones graves, suicidios; también hubo secuestros y vejaciones.” (1996:30)

¹⁰ Ver, entre otros, Amorós (2004); Barudy (1990); Becker *et al.* (1990); Bergehezan (1997); CODEPU (1989); Espinoza *et al.* (1999); Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2007); Lira (2010); Munczek (2007); Reszczyński *et al.* (1991); Rojas (1988) y Weinstein y Lira (1987).

silencio, olvido, negación, desarticulación social, anomia y retracción ciudadana, todos ingredientes necesarios para la fase de subsidencia o movilización latente de la sociedad civil post-dictadura. Asimismo y como se profundiza en el capítulo 6, los componentes del trauma colectivo permiten una comprensión de la identidad colectiva que se volverá visible luego en el ciclo de movilizaciones 2011.

Características del trauma colectivo y su impacto sobre el conjunto social

Sólo durante las primeras semanas posteriores al golpe de Estado, miles de personas se escondieron, buscaron asilo en embajadas o intentaron huir del país, muchos fueron asesinados en el momento de resistirse a un arresto, cuyos cuerpos fueron dejados en las calles, lanzados al río Mapocho o enterrados en tumbas secretas, en una forma de represión y terrorismo de Estado que se impuso desde el mismo 11 de septiembre (Wright, 2007). Con el aparato conceptual y práctico de una campaña contrasubversiva y políticas represivas sistemáticas y masivas, la Junta Militar se propuso establecer un control rápido y total sobre la población con el fin de exterminar al denominado ‘enemigo interno’, que implicó declarar al país en estado de guerra (Cavallo *et al.*, 1997; Valdivia, 2010). La perspectiva bélica marcaría la tónica de la represión ejercida por un régimen que, mostrando su faceta más letal en los primeros años posteriores al golpe, evoluciona más tarde hacia políticas de terrorismo institucionalizado.¹¹ El sistema de represión fundado en la Doctrina de Seguridad Nacional buscó destruir la organización y el tejido social, anular la movilización, inhibir respuestas contestatarias al régimen y mantener un clima generalizado de temor y desorganización (Hipsher, 1996; Orellana, 1989; Remmer, 1980).

La represión militar fue posible gracias a un marco legal coercitivo que eliminó la protección judicial, las garantías de un debido proceso y estableció una jurisdicción militar sobre asuntos civiles que sería pronto amparada por la ley de amnistía de 1978 y la Constitución de 1981. A través de este último documento, se permite la continua aplicación de los estados de excepción, amplios poderes de detención y la reducción de las facultades de las cortes, impulsando un proceso general de desprotección de los derechos de la ciudadanía (Brito, 1997). Invocando a leyes de seguridad nacional, la

¹¹ Según Brito (1997), en el período 1973-1976 el terror se expandió cuando el servicio de inteligencia DINA arrestara a miles en estadios y centros de detención secretos, instalaciones militares. En campos de concentración miles fueron torturados o desaparecieron, la relegación y el exilio por esos años proliferó a la vez que hubo numerosas masacres en las provincias y ejecuciones extra-judiciales. Especialmente durante los primeros años del régimen, el aumento del poder y las facultades del Estado se da en paralelo a una fuerte cohesión interna lo que hizo prácticamente imposible la organización de una oposición al régimen (Stepan, 1985), situación que comenzaría a mutar a partir de la crisis económica y las movilizaciones del año 1983. Para más una revisión pormenorizada de este período ver Cavallo *et al.* (1997) y Huneeus (2000).

policía y la armada desplegaron una fuerte represión a huelguistas, manifestantes y todo quien se opusiera al régimen, quienes pasaron a ser definidos como subversivos a la vez que la violación de los derechos humanos fue justificada en el nombre del bien común, la paz social y la estabilidad política (Lira, 2011). Con este acto y el mensaje contenido en él, se pone en práctica una estrategia de criminalización de la protesta y deslegitimación de la política cuando su ejercicio se relegó prácticas propias de terroristas o de chilenos anti-patriotas que buscaban desestabilizar un régimen que había salvado al país.

En términos de la práctica represiva, el estudio de CODEPU (1989) distingue entre represión directa e indirecta en el caso de la dictadura chilena. La represión directa se refiere a aquella que incluyó asesinatos, detenciones ilegales, tortura, relegación, exilio, secuestro, detención, desaparición de detenidos, allanamiento, encarcelamiento, amenazas y amedrentamiento, cuyas descripciones y consecuencias, tal como se mencionara, han sido analizados (y denunciados) a nivel de las víctimas y sus familiares. Por otra parte, los mecanismos de represión indirecta incluyeron los despidos masivos (exoneración), la privación y carencia de alimentos, vivienda y salud, disgregación de las políticas sociales, distorsión de los hechos, manipulación de la información, censura y autocensura, pérdida parcial o total de la libertad de expresión colectiva, a lo que es posible agregar el prolongado estado de excepción,¹² toques de queda, prohibición del derecho de reunión y organización, estado de guerra interno, la dominación ideológica y el amedrentamiento colectivo.

Pese a esta diferenciación respecto a las distintas formas de represión, es necesario agregar que tanto los mecanismos de represión directa como indirecta tienen finalmente repercusiones en la sociedad en su conjunto. Esto, tal como ha sido adelantado, pues la represión directa no sólo provoca un impacto en las víctimas sino también en el sistema social en que éstas se insertan. La tortura por ejemplo, tiene importantes secuelas en el tejido social dado que su ejercicio no sólo tiene una función desestructurante sobre el torturado, y con ello sobre su rol como sujeto social activo, sino que al mismo tiempo tal objetivo se proyecta hacia sus grupos y redes sociales de pertenencia con una finalidad implícita ejemplarizante (Lagos *et al.*, 2009; Physicians for Human Rights, 1988). Como describe Stern (2009: 24), “la represión en el Chile de Pinochet fue a gran escala y su implementación tuvo distintos niveles”, lo que para una sociedad pequeña como la chilena en esos años implicó la omnipresencia de la misma cuando “la mayoría de las familias, incluyendo las partidarias y simpatizantes

¹² Durante quince de los diecisiete años de régimen dictatorial, Chile estuvo bajo alguna forma de Estado de Excepción (Brito, 1997)

del régimen militar, tenían un pariente, un amigo o una persona conocida afectada por una u otra forma de represión”.¹³

De esta manera la tortura, así como todas las formas de violencia política, cumplen una función individual, pero también social al constituirse en mensajes de advertencia e intimidación hacia el entorno del torturado (familiares, colegas, amigos y vecinos), infundiendo miedo, desconfianza, temor a la libre expresión y una atmosfera de amenaza permanente que tendrá implicancias en el corto y largo plazo para las comunidades, sus organizaciones y la sociedad (Barbera, 2009; Castillo y Lira, 1993; Deutsch, 2007; Faúndez y Cornejo, 2010; Giorgi, 1995). Más aún, es posible afirmar que la violencia política en forma de desapariciones de detenidos representan una forma de “tortura social” dada la inmensidad de sus repercusiones en este nivel (Deutsch, 2007: 111). Al mismo tiempo, Crenzel (2011: 1) plantea que el terrorismo de Estado y la feroz represión que le caracterizó afectó a no sólo a las víctimas sino que a todos los ciudadanos por igual en la medida que “todos los ciudadanos fueron privados por igual de sus derechos civiles y políticos, mientras el terror se propagó en todas las esferas de la vida pública y privada”.

En paralelo a una fuerte represión que se mantendría de manera más evidente o más solapada durante los 17 años del régimen, aquellos años predominó una dominación ideológica y una guerra psicológica. Ambas estrategias buscaron provocar un estado de ánimo de miedo colectivo con el objeto de inmovilizar, silenciar y someter, en que las personas finalmente pidieran o exigieran al poder alguna forma de protección (CODEPU, 1996). Según este estudio, la guerra psicológica y el amedrentamiento fueron un recurso esencial y una táctica permanente de la dictadura, con la entrega constante de mensajes cargados de información falsa, confusa, amenazante o tranquilizadora según el objetivo perseguido. Siguiendo esta idea, Isla Monsalve (2012: 274) señala que las estrategias del régimen militar no sólo fueron represivas y disuasivas, sino también persuasivas en la medida que se orientaron a la legitimación y adhesión al proyecto autoritario. El trauma de la Unidad Popular fue utilizado comunicacionalmente en este contexto “tanto para mantener y sacar partido del entusiasmo de sus originarios partidarios, como para administrar el miedo a sus adversarios”. Para ello, junto a la represión a opositores al régimen, se utilizó el montaje, los rumores, la elección de víctimas al azar o víctimas específicas cuya pertenencia permitiera una identificación con sectores políticos, falsos accidentes, falsos suicidios, falsos enfrentamientos, infiltrados, difusión de listas de amenazados,

¹³ Como indica Winn (2007), si bien en Argentina hubo un número mayor de desaparecidos y en Uruguay un porcentaje más elevado de presos políticos, Chile presentó el número más alto y el mayor porcentaje de casos de tortura dentro del Cono Sur.

censura, desinformación o derechamente el ocultamiento de la verdad así como la propaganda reiterada en torno al discurso de la salvación y la restauración nacional (Almarza, 1994; Isla Monsalve, 2012; Munczek, 2007; Orellana, 1989; Winn, 2007). Al mismo tiempo, se buscó traspasar la responsabilidad de los actos represivos a los propias víctimas y a sus familias con mensajes del tipo ‘algo habrán hecho’, en una construcción social de significado que justifica los hechos traumáticos (Páez y Basabe, 1993).

De esta manera, Almarza (1994) plantea que se desarrolló un aparato de penetración a nivel de las creencias que buscaba un cambio en el horizonte normativo y la inducción de nuevos valores mediante el control de la información y los medios de comunicación. Dentro de estas creencias estuvo la justificación de la violencia, la descalificación de los opositores al régimen así como la socialización de la culpa al comprometer al conjunto social a un silencio cómplice respecto a la represión. Los mensajes contradictorios y enajenantes facilitaron la confusión y la imposibilidad de realizar un análisis y un juicio de la realidad, introduciendo inseguridad, desconfianza, dudas y vulnerabilidad que, sin la necesidad de la fuerza sino que a través de la persuasión de amenazas explícitas o implícitas, permitieron un adoctrinamiento político de amplios sectores de la sociedad. En definitiva, se produce la inducción a guardar silencio, al olvido, a los sentimientos de culpa, a la dilución de responsabilidades y a considerar la participación y la disidencia política como una falta contra el conjunto social (Kordon y Edelman, 1986).

En este escenario y a nivel social, la sobrecarga de información y mensajes pronto comienza a comprometer lo que se define como justo o injusto, bueno o malo. Tal como señala Wright (2007), las creencias políticas y las organizaciones que habían sido perfectamente legales hasta el 11 de septiembre, pasaron desde entonces a ser consideradas criminales. Las fronteras entre lo que es considerado seguro y peligroso pierde nitidez impactando en el sentido de pertenencia y los grupos de referencia de las personas (Domínguez y Weinstein, 1987 en Barbera (2009)). De la misma manera, cuando es el Estado - el supuesto ente responsable de garantizar la seguridad de las personas - el que perpetra los crímenes y actúa en base a la represión y a la violencia, el trauma a nivel social se ve intensificado (Deutsch, 2007; Lira *et al.*, 2001), a la vez que el significado de justicia y de sus instituciones, así como la propia definición de Estado, se ven tergiversadas. Tal como explica Stern (2009: 24), esta alteración de la noción de legalidad y justicia afectó a los chilenos en forma de *shock*:

Relevante también fue el impacto cultural. Muchos chilenos creían que ese tipo de violencia de Estado —al otro lado de la frontera establecida por el procedimiento legal y

la decencia humana- era un imposible. Fundamentalmente, su sociedad era demasiado civilizada, demasiado obediente de la ley, demasiado democrática para eso. En 1973, muchas de las víctimas se entregaron voluntariamente cuando aparecieron en las listas de personas buscadas por el nuevo gobierno.

La inversión y subversión de lo que fueran otrora considerado derechos y valores dados por sentado dentro del imaginario chileno, fue originado en gran medida por el efecto del poder omnímodo del Estado y la impunidad en que los hechos de violencia se desencadenaron. Para Baeza (2000), junto a las agresiones propias del terrorismo de Estado y sus traumáticas consecuencias de dolor, sufrimiento, pérdida y luto, la impunidad equivale a un crimen adicional en la medida que amenaza los valores, destruye las creencias y altera las normas y reglas que una sociedad ha construido durante años. Al demoler los pilares fundamentales y el marco normativo de una sociedad, la impunidad crea una disonancia cognitiva y la ambivalencia de buscar la verdad y la justicia en un contexto donde ambas premisas se vuelven difusas (Genevieve, 2004). Esto genera la necesidad de esconder y olvidar los crímenes, aun cuando eso no es posible. Por ello, el olvido será sólo superficial y los recuerdos se mantendrán no únicamente en la persona afectada, sino también en la sociedad y el imaginario colectivo al mismo tiempo que se transmitirá a las próximas generaciones (Rojas Baeza, 2000).

A la larga, el uso de aparatos represivos y de propaganda constituyeron lo que Garretón (1988: 6) definió como “sistemas institucionalizados de producción y difusión de miedo”, que facilitaron la transmisión del mismo tanto por la certeza (represión física, la amenaza, el control de la población, la propaganda, el poder del Estado), como por la incertidumbre (desinformación, ausencia de reglas, falta de espacios de encuentro y reconocimiento, exacerbación de la irracionalidad) del peligro. El miedo fue asimismo deliberadamente explotado por el régimen para justificar el golpe, enfrentar el criticismo extranjero y promover la aceptación al prolongado control militar (Constable y Valenzuela, 1991). Como indica Garretón en el mencionado trabajo, el miedo provocado intencionalmente tuvo consecuencias indirectas sobre los vencedores al endosarles responsabilidad y complicidad de los crímenes, a la vez que directas e indirectas en toda la sociedad por el efecto combinado de la represión, la falta de protección institucional y las transformaciones sociales impuestas de forma autoritaria. La “cultura del miedo” en este contexto fue construida a través de la experiencia personal y, como señala (Lira, 2011: 115),

fue reconstruido en las narrativas de terror, en la falta de información, en la imaginación, en el silencio de la noche, intensificado en toques de queda (...) en sujetos silenciados y en la auto-censura. Miedo aumentado en la percepción de que el poder para matar no estaba bajo el control de la ley y que por tanto no tenía límites.

Los toques de queda y las noches de tensión se ven exacerbadas a partir de las crecientes y masivas movilizaciones y protestas nacionales en contra de la dictadura militar. En dicho contexto, se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la llamada Operación Retorno de los integrantes del MIR que estaban en exilio,¹⁴ ambos grupos enfocados en estrategias clandestinas y acciones militares de desestabilización del régimen militar reforzando así el clima conflictual luego de la crisis económica de 1982 (Pérez, 2008; Pinto, 2006). A partir de entonces, la resistencia se radicaliza y se producen una serie de hechos de violencia que impactan a la sociedad chilena tales como el descubrimiento de la internación de armas de Carrizal Bajo y el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. Las represalias luego de estos hechos provocaron un recrudecimiento de las medidas represivas especialmente entre los sectores más populares.¹⁵ Asimismo y como indica Oxhorn (1995), el miedo frente a estos hechos ayudó a generar un clima entre las clases altas y medias de la población así como en ciertos sectores populares que contribuyó al aislamiento de pobladores que fueron quedando como los únicos actores disponibles para participar en las protestas contra el régimen. De esta manera y pese a su papel fundamental en el ciclo de protestas 1983-1986, los pobladores jugaron un rol muy minoritario en la formación de iniciativas posteriores de oposición al régimen y, con ello, en la transición hacia la democracia chilena.

De esta manera, la sociedad chilena, incluidos aquellos sectores que no fueran víctimas del régimen, fue expuesta a todo tipo de actos de violencia en un proceso que permitió la internalización transversal del miedo (Barbera, 2009). Tal como describiera Tironi, el miedo era uno de los sentimientos que dominaba las conductas de los

¹⁴ El FPMR fue una facción político-militar del Partido Comunista. La estrategia de fuerza que definiría la política de resistencia a la dictadura del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) queda de manifiesto ya en la declaración pública de Miguel Enríquez el 11 de septiembre de 1974: “La Resistencia es un hecho irreversible. La dictadura no tiene más alternativa que la represión. El pueblo no tiene más alternativa que derrocarla por la fuerza” (Pinto, 2006: 153).

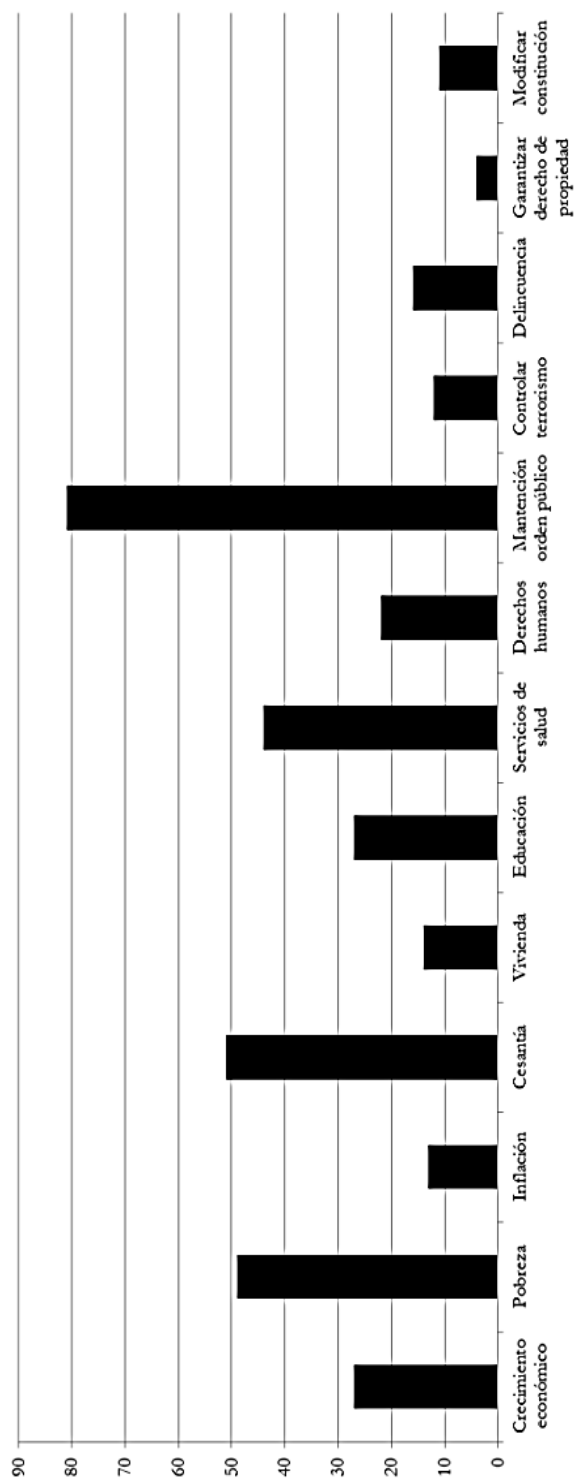
¹⁵ Castillo y Lira (1993) señalan que entre 1987 y 1988 la represión política recrudeció principalmente a través de amenazas de muerte con 1088 denuncias el año 1987, situación que se mantuvo durante el entre el plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989. Como indica Hipsher (1996), Pinochet sobrevivió al ataque, pero cinco de sus guardaespaldas fueron asesinados. Luego de este hecho, cientos de activistas políticos sospechosos de estar conectado el evento fueron arrestados y veinte y cinco fueron condenados a muerte. Y aun enojados por el exceso de represión que siguió al intento de asesinato, los chilenos más activos políticamente se vieron horrorizados por el crimen mismo.

chilenos al final de la década del ochenta, un miedo que “tiene orígenes múltiples y se expresa de maneras diferentes según las personas y su grupo social de pertenencia, pero nadie se escapa de su influjo” (1988a: 12). El miedo más directo estaba dado tanto por la omnipresencia de la represión como por la inestabilidad, especialmente de tipo económica.¹⁶ En esa línea, Lechner (1992) señala que los miedos del autoritarismo vienen de la percepción de amenazas mortales, tanto físicas como a las bases materiales que sustentan la vida, que se traslapan con la ansiedad colectiva o un miedo difuso y sin razón aparente que se mantiene implícito y oculto en la cotidianeidad. Y aun cuando en la memoria colectiva de la sociedad chilena de la época no existía consenso respecto a las causas o motivos del golpe de Estado (ya sea para justificar o repudiar), las consecuencias y significados de este hecho se hicieron parte y componentes transversales de la normalidad de la vida cotidiana (García, 2006; Stern, 2009).

Hacia el final del régimen dictatorial, las campañas del plebiscito fueron diseñadas y difundidas en torno al miedo que reinaba en la sociedad chilena. La campaña por la opción Sí, utilizó el miedo y el trauma del pasado para propagar el temor al caos, al desorden y a la inestabilidad que implicaría el fin de régimen de Pinochet, mientras que la oposición los usó para concluir con una distancia con la Unidad Popular y la dictadura en pos de generar confianza, unidad y orden para un eventual retorno democrático (García, 2006). Tal como se puede observar en la figura 3.1, las principales preocupaciones de los chilenos respecto al futuro gobierno democrático era que éste, incluso más que reducir la pobreza, la cesantía o mejorar los servicios de salud, tuviera la capacidad de controlar el orden público.

¹⁶ La crisis del año 1982 con la consiguiente explosión de los niveles de cesantía (alrededor del 40%), facilita la construcción de un contexto de vulnerabilidad y fragilidad social. Ver capítulo 5 para más detalles de esta crisis.

Figura 3.1. Problemas que causan mayor preocupación respecto al próximo periodo presidencial, 1988.



Fuente: Elaborado en base a datos de Centro de Estudios Públicos (1988).

Luego del plebiscito y de la derrota de Pinochet, Politzer bien describe,

Chile todavía tiene miedo. Mirando una vez más, veo que la dictadura fue mucho más que una represión brutal o una falta de libertad política (...) Sigue presente día tras día, año tras año, invadiendo incluso nuestros momentos más íntimos. Afecta no sólo a quienes sufrieron la crueldad o la censura directa, sino también a aquellos que fueron indiferentes a la dictadura, e incluso a quienes la apoyaban y justificaban; porque ellos, también, están atrapados en un sistema que determina lo que se puede y no se puede hacer, lo que se piensa, lo que se crea, lo que se sueña y lo que se reprime (1989: xiii).

El trauma colectivo de las décadas precedentes a 1990 deriva así de la represión y la violencia, la guerra psicológica y la difusión del miedo, en un proceso global que también incluyó un fuerte cambio en la estructura política, económica y, con ello, socio-cultural. Tal como lo afirman ciertos autores, la junta militar desde un principio tuvo claridad respecto al objetivo de eliminar la cultura política previa, las prácticas y las creencias que estaban internalizadas en la sociedad chilena en esos años y que, para ello, se necesitaría un régimen extenso y mecanismos de represión y adoctrinamiento que impusieran el nuevo sistema normativo al conjunto social (Huneus, 2000; Stern, 2013b; Valdivia, 2010).

La tesis restauradora del régimen militar pronto evolucionó hacia el espíritu fundacional (García, 2006; Guerrero, 2006; Isla Monsalve, 2012). Para García, el objetivo fue construir una nueva institucionalidad que impidiera que el país cayera nuevamente en una amenaza marxista y, para ello, fue necesario cambiar la concepción de democracia y definir una nueva relación del Estado con la sociedad. Todo lo anterior constituyó y dio forma a un proceso refundacional en términos políticos que Stern ha denominado policidio o el asesinato de la forma de gobierno precedente, la aniquilación de la cultura política de los grupos de izquierda y centro-izquierda y la reprogramación o el reentrenamiento de los ciudadanos “a través de una determinación violenta y temible para erradicar de manera definitiva un imaginario y una manera de hacer política basada de la acción directa movilización y la democrática” (2013a: viii). En este contexto, se promueve una privatización social, la distancia con la participación política, el cierre y atomización de las formas asociativas tradicionales incluidos los partidos políticos y las organizaciones sociales populares así como las instancias de representación generadas por elección directa (De la Maza, 2003). De esta manera, el régimen se propuso destruir las identidades colectivas pre-existentes en la sociedad chilena tales como la membresía a partidos, la organización y solidaridad social que fueron considerados por el oficialismo como “legados no

deseados de un pasado socialista” (Silva, 2004: 69). La refundación en términos políticos y sociales fue complementada con la imposición del modelo económico neoliberal, la tecnocracia y el principio de subsidiariedad que vendrían a consolidar el desmantelamiento del modelo estatista sobre el bienestar social y el desarrollo económico. Para Almarza (1994), la radicalidad con que se aplica el modelo económico neoliberal aporta en la generación del trauma en la medida que impone y exige de forma drástica una nueva relación de los individuos con el mercado, con el mundo del trabajo y con la concepción de los derechos y servicios sociales.¹⁷

De esta manera, durante las últimas décadas la sociedad civil chilena sufrió una brusca transformación estructural inducida, por una parte, por las relaciones sociales autoritarias y los efectos disciplinadores de la cultura del miedo dictatorial, el temor y desconfianza recíproca que define la relación con los otros y, por otro, por la expansión de la economía de mercado y la privatización de los servicios públicos (Garretón, 2003; Lechner y Guell, 1998). Para Lechner y Güell, este conjunto de cambios provocaron un proceso de privatización, retracción y una individualización de las conductas en los chilenos durante el período de transición democrática.

Estas últimas ideas remiten a las consecuencias o al impacto que los cambios implantados en Chile han significado para el quehacer y los mecanismos de participación de la sociedad civil, lo que entrega las primeras pistas para entender la desmovilización social en la transición democrática. Mientras que los efectos de la privatización y la modernización neoliberal sobre dicha arena son analizados en el capítulo 5, a continuación se desarrolla un análisis sobre la influencia del trauma colectivo y la cultura del miedo generado en las décadas precedentes al retorno democrático sobre la desmovilización de la sociedad civil en dicho período. De forma específica, se presenta la forma o consecuencias en que la memoria traumática a nivel colectivo generó un estado de silencio, olvido, negación, desarticulación, anomia y retracción social que, en conjunto, facilitaron la subsidencia o invisibilización de la acción colectiva de la sociedad civil.

3.2 Consecuencias del trauma: post-trauma colectivo y desmovilización de la sociedad civil

La radicalidad y el carácter estructural de los cambios puestos en marcha durante el período de la dictadura militar tendrán profundas implicancias en términos sociales. En primer lugar, dicha radicalidad demandó, como ya se adelantara, una capacidad

¹⁷ Sobre el impacto de modelo económico neoliberal sobre la sociedad civil chilena y, en específico, sobre su desmovilización ver capítulo 5.

adaptativa por parte de los chilenos a nuevas estructuras políticas, económicas y sociales y su consecuente nueva matriz de valores. Para Pennebaker y Banasik (1997), esta importancia adaptativa es crucial para entender por qué no todos los eventos que afectan a una nación son considerados experiencias traumáticas o significativas en términos de la memoria colectiva. Según estos autores, sólo aquellos hechos que implican una demanda de adaptación a nuevas condiciones sociales son considerados relevantes para la memoria traumática en la medida que suponen *turning points* o situaciones que cambian radicalmente el curso de las historias individuales y nacionales. En segundo lugar, el carácter refundacional del régimen y la modernización neoliberal supusieron una acelerada yuxtaposición de nuevas y antiguas matrices culturales y la generación de un nuevo marco normativo. Esto, tal como se mencionara en el primer capítulo, tiende a provocar anomia y retracción ciudadana en la medida que, para hacer frente a esta transición societal y su correspondiente incertidumbre, los individuos se inclinan a buscar refugio en sus grupos de pertenencia y referencia más próximos en términos identitarios. Asimismo, se vuelve necesario acá recordar el vínculo entre memoria e identidades colectivas - como ideologías que mantienen la cohesión de un grupo - y la movilización, en la medida que el desenvolvimiento de los movimientos sociales se fortalece o se debilita en función de los cambios experimentados a nivel de esta identidad. Y con memorias e identidades basadas en el miedo a la participación política y caracterizadas por el silencio, el potencial de movilización social se ve altamente limitado.

Antes que poner foco en los elementos traumáticos para ciertos grupos específicos de la sociedad (elites, víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares, grupos de oposición, etc.), los factores antes descritos fueron aquellos experimentados de manera transversal por la sociedad y que tienen, por tanto, implicancias a nivel colectivo. Los efectos del trauma sobre el conjunto social se vuelven componentes fundamentales para entender las prácticas y dinámicas de la sociedad civil luego de la recuperación democrática en Chile. Más aun, este trabajo parte de la premisa que décadas de conflicto, violencia, polarización, represión, campañas de insurgencia y contrainsurgencia, muertos y desaparecidos, dolor y conflictividad social, amenazas físicas y materiales, la guerra psicológica y propagandística, la incapacidad de elaborar un relato sobre los hechos y la radicalidad de la imposición de un nuevo modelo político y económico en medio de un contexto represivo, impactaron en la sociedad civil chilena generando un trauma a nivel colectivo (Castillo y Lira, 1993; García, 2006; Iglesias, 2005; Kovalskys, 2006; Lechner, 2002; Páez *et al.*, 1997; Piper Shafir, 2005; Stern, 2009; Vergara y Tocornal, 1998). Esto, pues independiente de la manera en que dichas situaciones hayan sido vivenciadas (con mayor o menor intensidad), procesadas

o elaboradas por distintos individuos, fueron experimentados de una u otra manera por la totalidad de la sociedad chilena.

Asimismo y tal como se ha expuesto hasta este punto, el trauma colectivo instalado en la memoria de las personas no sólo tiene implicancias que van más allá de las víctimas directas de la represión, sino que de la misma manera, sus efectos, secuelas y legado perduran más allá del período dictatorial o al cese de la amenaza directa para incidir luego en el proceso político, el comportamiento de los actores sociales y en las formas de participación posteriores al régimen (Agger y Jensen, 1996; Barbera, 2008, 2009; Faúndez y Cornejo, 2010; Genevieve, 2004; ILAS, 1989; Kovalskys, 2006; Lira, 2011; Lira *et al.*, 2001; Manzi *et al.*, 2003; Martín-Baró, 1989; Munczek, 2007; Roniger y Sznajder, 1999; Salimovich *et al.*, 1992; Scapusio, 2006; Vergara y Tocornal, 1998). Como señalan Páez *et al.*, “los impactos directos de las catástrofes sociopolíticas sobre las víctimas no son los únicos, ni los más importantes desde el punto de vista psicosocial (...) se tortura o mata decenas o centenas para paralizar y disgregar a cientos o miles”, lo que a la larga afecta la visión general de la sociedad, su clima social, sus instituciones y su futuro (2001: 104). Con ello, las consecuencias o dimensiones del trauma instalado en la sociedad chilena hacia finales de la década del ochenta, sus elementos constitutivos así como la manera en que estos se entremezclan, juegan un rol fundamental en el análisis de las dinámicas sociales en la redemocratización chilena.

En un análisis centrado en el silencio de la elites y su deseo de evitar el conflicto durante la redemocratización chilena, Hite (2007: 4) sostiene que

ha habido una subestimación de los efectos del trauma como explicación de los silencios de la elite pública durante la década de 1990 con respecto a las tres décadas y media pasadas. Los recuerdos traumáticos evocan momentos de resistencia y sacrificio y también generan profundos sentimientos de culpa y derrota, impotencia y temor. A su vez, esos sentimientos contribuyen a acentuar el deseo de evitar el conflicto y, por lo tanto, son una causa de los silencios públicos relacionados con los enfrentamientos y el dolor del pasado.

Junto a esta idea,¹⁸ es posible agregar que no sólo ha habido una subestimación del impacto del trauma a nivel de las elites, sino también a nivel de la sociedad civil, en las dinámicas culturales, en los silencios y olvidos, en la desarticulación social y, con ello, en los mecanismos de participación y activación social. Al respecto, la autora agrega

¹⁸ El tema del trauma a nivel de las elites y cómo impactó en el paradigma de gobernabilidad y una estrategia de desmovilización social durante los gobiernos de la Concertación es abordado en extenso en el capítulo 4.

que en gran parte de la sociedad, la brutalidad del régimen de Pinochet “instiló temores arraigados y duraderos con respecto a la seguridad individual, las identidades colectivas y la participación en la esfera pública” (2007: 9).

Es importante en este punto destacar que muy a pesar del panorama descrito hasta acá, es decir, una sociedad expuesta a una fuerte represión tanto directa como indirecta, a una guerra psicológica y a un miedo generalizado, durante la dictadura militar de Pinochet se produce un fuerte y vigoroso ciclo de movilizaciones ciudadanas, se constituye una extensa red de solidaridad en el mundo poblacional y un macizo movimiento de defensa de los derechos humanos, especialmente en la década del ochenta. Este tipo de “acción colectiva de alto riesgo” (Loveman, 1998) vino a desafiar y hacer frente al peligro e incluso a la muerte, lo que permite enarbolar una gruesa afirmación: en el momento en que el trauma colectivo se estaba produciendo, la sociedad civil reaccionó a través de la organización y la movilización social como herramienta de presión política. Como explica esta autora, este fenómeno se vuelve en cierta forma paradójico dado que frente a episodios de represión estatal la expectativa pasaría más bien por una desmovilización generalizada y una retracción social, lo que resultó cierto sólo para la primera etapa del régimen (1973-1982). A partir de los años ochenta sin embargo, una acción colectiva sostenida se manifestó pese y desafiando a la represión y a las condiciones de violencia dictatorial.

Al vincular esta observación con el fenómeno traumático, es posible afirmar que en el sujeto, ya sea un sujeto individual o colectivo, una acción o reacción en forma de defensa se produce de manera instintiva o primaria en el momento en que la experiencia traumática está teniendo lugar, actuando como un mecanismo de defensa que permite hacer frente a las amenazas y asegurar la supervivencia. En el caso chileno, en tanto, dicha reacción a nivel societal tomó en diversos grupos la forma específica de organización y protesta, acciones colectivas de alto riesgo que buscaron oponerse e intentar una salida a un contexto opresivo y asfixiante. Por ello, el destacar las características o elementos del trauma que se instala en la sociedad chilena como se ha hecho hasta este punto, sólo tiene sentido en la medida que permite entender o explicar los fenómenos que ocurren una vez que el trauma ha cesado y se ha dado espacio para su elaboración - y eventual superación - como ocurrió en el proceso de retorno democrático en el Chile de los noventa. Son, por tanto, las consecuencias de este trauma o la experiencia posterior al mismo las que se vuelven relevantes en el contexto de este trabajo, pues la tesis que acá se plantea es que mientras la experiencia traumática facilitó la activación de un ciclo de movilizaciones sociales, fue la experiencia post-traumática la que la desactivó dicho ciclo transformándolo en retracción, apatía y desmovilización hacia el fin de la dictadura.

La violencia cotidiana y la violación sistemática de los derechos humanos derivaron en un sentimiento de amenaza permanente y, con ello, en la estructuración de defensas psicológicas para enfrentarla. Para Almarza (1994), los mecanismos de defensa luego de una experiencia traumática van desde la negación de los hechos, al silencio, el olvido, la desconfianza crónica y la aversión al conflicto. En el contexto de este trabajo, se afirma que el trauma colectivo instalado en Chile a la llegada de la democracia así como las reacciones sociales frente al mismo, impactaron generando desmovilización y retracción social durante el período.

En las secciones previas se exponen los elementos del trauma que tuvieron implicancias transversales en la sociedad chilena y que entregan las primeras pistas para entender el fenómeno de la desmovilización. En este apartado se persigue analizar de forma específica lo que ocurrió con la sociedad civil y sus movimientos sociales a partir de 1990 como consecuencia del post-trauma colectivo. Para ello, se plantea que la presencia de un post-trauma a nivel social aportó a la desmovilización de la sociedad civil a través de tres grandes dimensiones o consecuencias que fueron viabilizando un clima de silencio, olvido, desarticulación y repliegue ciudadano. Dichas consecuencias se relacionan con reacciones o con dinámicas inherentes a la sociedad civil, pero que fueron de alguna manera utilizadas, promovidas o potenciadas por la dirigencia política y el contexto institucional en que éstas tuvieron lugar.¹⁹ De forma concreta, se argumenta que esta desmovilización o fase de subsidencia se produce a través de los mecanismos de supervivencia y reacción al trauma colectivo; por la influencia de la desconfianza, la desarticulación y la deslegitimación de la organización social y; finalmente, como efecto de la transmisión social, re-traumatización o cronificación del trauma. Esto, pues tal como explica Barbera (2008: 70) “dado que los humanos son seres sociales, el trauma puede ser entendido no sólo como un ataque a la persona individual, sino como una agresión a los vínculos y conexiones entre las personas y los patrones de relación mediante los cuales las personas se definen a sí mismas” lo que tendrá “claras implicancias para el involucramiento comunitario”.

3.2.1 Silencio, negación y olvido como reacción al trauma colectivo

Desde la psicología se ha observado que luego de una experiencia traumática surgen mecanismos de procesamiento y reacción como estrategias instintivas para enfrentar las consecuencias del trauma sobre el individuo. A partir de esta idea, ciertos autores han reflexionado sobre los efectos psicosociales de las dictaduras militares en el cono

¹⁹ Para un análisis extenso sobre la influencia de la dirigencia política y el contexto institucional en la desmovilización ver capítulo 4.

sur, sugiriendo que la represión política constituye un trauma tanto para las víctimas directas como para la nación y que, por lo tanto, las reacciones, el duelo o las formas de enfrentar el trauma podrán esperarse en ambos niveles (Vergara y Tocornal, 1998). Como señalan Páez *et al.* (1997), la memoria colectiva posee una naturaleza normativa que se centra en defender la identidad social y, por ello, una respuesta común y una estrategia efectiva para sobrellevar eventos pasados de carácter traumático son el silencio, el olvido y la inhibición. En otras palabras, un grupo social despliega un olvido informal como una manera de proteger los valores grupales y la auto-imagen.

Freud (1931) advirtió que las experiencias traumáticas tienden a derivar en el olvido cuando los pueblos no son capaces de procesar los aspectos ominosos de su propia historia. Autores que han observado el trauma colectivo en otras realidades plantean que las consecuencias de eventos de violencia política se traducen en evitación a través de la negación o el olvido (Bettelheim, 1943; Martín-Baró, 1990). El silencio también ha sido sindicado como un elemento reactivo al trauma colectivo por autores como Danieli (1998b), quien incluso ha utilizado el concepto “conspiración del silencio” para describir una reacción societal generalizada consistente en indiferencia, evitación, represión y negación de las experiencias traumáticas. La autora explica que luego de la segunda guerra mundial, muchas de las verdades, los hechos y los testimonios resultaron ser demasiado impactantes y difíciles de creer o escuchar para extensos grupos sociales quienes reaccionaron ignorándolos o negándolos. Al respecto y a propósito del caso chileno, Genevieve (2004) presenta el término “psychic numbing” para describir un mecanismo de defensa útil de prevención del agobio o incluso de la destrucción del individuo por imágenes terribles o inimaginables que debe confrontar luego de eventos catastróficos.²⁰ En esta línea, existe evidencia empírica que sugiere que luego de experiencias traumáticas a nivel social, se tienden a generar ciclos de “amnesia colectiva” caracterizados por silencio o aversión a elaborar narrativas respecto al pasado (Pennebaker y Banasik, 1997).

Para Becker y Díaz (1998), detrás de la explicación de la falta de participación política y social en el Chile post-dictatorial, se encuentra la internalización de las amenazas políticas, el miedo y mecanismos de auto-represión y auto-censura que desatan un estado generalizado de alienación social. Como complemento a esta idea, Paéz *et al.* (2001) señalan que los traumas sociopolíticos y los estados prolongados de represión se traducen en climas emocionales de miedo, ansiedad e inseguridad, así como en la inhibición de conductas de afrontamiento, en aislamiento social y descohesión grupal. Asimismo, se ha advertido sobre una amnesia colectiva en los procesos de transitología en que la posibilidad de reconciliación se vuelve dificultosa

²⁰ Toma el término desde el trabajo del siquiatra Rober Jay Lifton.

(Aguilar, 2002). En este sentido, el chileno ha sido definido como un retorno democrático caracterizado por una “hiper-amnesia” (Gaudichaud y Breña, 2009: 69) y, dado que, tal como se desarrollara en el primer capítulo, la memoria es un componente esencial de la identidad grupal y ésta de la acción colectiva, al no existir memoria se limita dramáticamente la posibilidad de acción en este nivel.

Lo conflictivo del pasado y la tendencia a no confrontar las experiencias traumáticas imposibilitó la capacidad de confluir en una verdad o versión oficial sobre los hechos o la distinción entre víctimas y victimarios, lo que contribuyó al silencio y a la necesidad de olvido en una recuperación democrática caracterizada por una memoria silenciosa (Lechner, 2002) o de caja cerrada (Stern, 2009).²¹ Este tipo de memoria, que Stern también ha definido como una “memoria indiferente” (2009: 127), sugiere que frente a un pasado difícil, controversial y divisorio, la mejor opción es el olvido. Dicha memoria está marcada por el traumatismo, pero adopta una conducta pragmática o realista dado que, independiente de las vivencias y versiones de lo ocurrido, el traer los quiebres y los hechos del pasado es considerado una maniobra problemática, desestabilizadora o incluso peligrosa para el presente, el futuro, la reconstrucción social y la paz psicológica a nivel individual y colectiva. En este sentido, “la memoria como olvido no es como una amnesia involuntaria (...) se trata, más bien, de pegarse a una especie de amnesia voluntaria, una voluntad más o menos consciente de poner al lado ciertos recuerdos tachados como insuperables y peligrosos” (Stern, 2000: 7). Tras esta memoria se pueden articular un conjunto de personas y perspectivas heterogéneas en términos del marco de significación de sus memorias sueltas o personales y, por ello, se plantea aquí que este tipo de memoria predominó durante la reconstrucción democrática influyendo fuertemente en la desactivación social del período. Como indica Gloria Cruz, profesional del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS),²²

El tema del silencio en la sociedad es muy fundamental y que si bien nosotros nos sentimos muy orgullosos de que hayan habido avances y comparativamente se ha avanzado más que en otros lugares, ha sido muy lento y con penas muy silenciosas. En la Comisión Valech apareció todo esto de la represión sexual de las mujeres con mucha fuerza en términos de contenido, o sea, apareció mucha mujer que no había hablado nunca ni con su marido ni

²¹ Frente a los diferentes relatos sobre el pasado, Stern plantea que luego de la dictadura se constituyeron en Chile cuatro tipos de memorias emblemáticas: salvación, ruptura, persecución y despertar y caja cerrada.

²² El Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) es un Organismo No Gubernamental que da atención en salud mental y médica a personas que fueron afectadas directamente por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar en Chile, 1973-1990.

con sus hijos y que cuando apareció esta posibilidad de ir a decir que habían estado detenidas empezaron ahí a “acordarse” que habían sido violadas. O sea, esta necesidad de silenciar el horror, acompañado de una sociedad que trata de decir reconciliémonos y cuenta nueva, mantenía lo encapsulado, y lo encapsulado es siempre lo peor, el dolor encapsulado es como una bombita que va creciendo pero que no tiene para donde escapar y que es muy desmovilizador, desmovilizador del alma y por lo tanto también de las acciones (comunicación personal, 17 de diciembre de 2014).

Estas respuestas o formas de enfrentar el trauma son comúnmente observadas en casos tanto individuales como sociales. Sin embargo, junto con constituirse en un mecanismo generalizado de la sociedad civil, el silencio, el olvido y la evasión se ven potenciados en el caso de la transitología chilena cuando toman la forma concreta de políticas y mandatos de Estado. En este sentido, el acto de olvidar, el silencio y la tendencia casi obsesiva a mirar hacia el futuro como respuesta al trauma social, responden tanto a un proceso selectivo necesario para la supervivencia, como al producto de una voluntad política e ideológica (Jelin, 2003; Páez *et al.*, 2001).

Luego de rupturas institucionales y eventos sociopolíticos de carácter traumático, se ha observado en Chile una política estatal deliberada para promover la reconciliación nacional a través del olvido de la violencia de Estado (Loveman y Lira, 2000, 2002). Así, en la dirigencia política del Chile post-dictadura primó un “pacto de silencio” (Hite, 2007: 8), la idea de la amnesia como política terapéutica, una referencia implícita y explícita al olvido y el perdón como ingredientes de la reconciliación, mientras que la memoria del pasado traumático fue considerada fuente y detonador de fragmentación social (Arias y Del Campo, 2009; Kovalskys, 2006; Lira, 2011). La forma de elaborar el trauma a nivel colectivo no depende sólo de la sociedad misma sino también y fuertemente de la capacidad que tenga el Estado de reconocer y subsanar el trauma a través de la verdad, la justicia y las correspondientes medidas de reparación (Sharim *et al.*, 2011). Cuando estas medidas no tienen lugar, el trauma colectivo se invisibiliza, pero sigue actuando en la sociedad de manera latente.

El primer gobierno democrático creó en 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación con el fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El 8 de febrero de 1991, la Comisión entregó el Informe que estableció que un total de 2.279 personas perdieron la vida en este período, además de proponer una serie de medidas compensatorias para los familiares de las víctimas. Con ello, hubo un intento significativo por exponer los hechos e instalar el tema de la

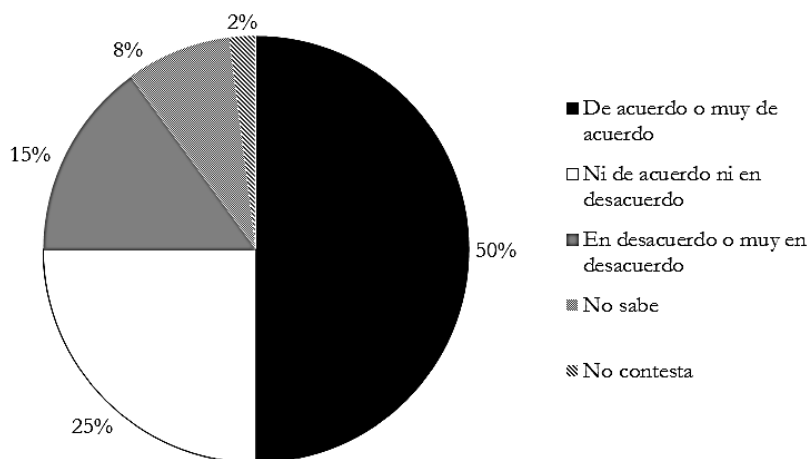
violencia política en la agenda pública.²³ Sin embargo y tal como lo señala Ricardo Brodsky, Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos:

El Gobierno de Aylwin trabajó con un paradigma que era la verdad y el perdón, y trató de saltarse la justicia. Y el gobierno de Frei profundizó mucho más eso, y efectivamente yo creo que el Gobierno de Frei trató de silenciar. De hecho, Frei nunca recibió a los familiares de los detenidos desaparecidos por ejemplo, le pidió al Consejo de Defensa del Estado que no siguiera el juicio a Pinochet por el tema de los cheques, o sea, el buscó activamente una política de superación sobre la base del silencio (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).

Como indica Stern (2000), especialmente con la transición al gobierno de Eduardo Frei Ruíz-Tagle, “se va cerrando la caja de la memoria” frente a problemas políticos y culturales que parecen imposible de superar, transitando “poco a poco, a la memoria como una caja casi-cerrada y a una situación paradójica. Desde el Estado, se trata de reglamentar cuándo y cómo se abrirá esta caja casi-cerrada, cuya peligrosidad parece exigir cada vez más la prudencia y el control desde arriba”. Este paradigma estatal, basado en la distinción weberiana de la ética de la responsabilidad por sobre la ética de las convicciones, incluye de esta manera la evasión de la justicia y una impunidad tácita hacia los responsables de los delitos de violencia política. Siendo especialmente cierto en la primera etapa de la transición donde el riesgo de una regresión autoritaria era una amenaza constante, la perspectiva de moderación, responsabilidad y consenso propuesta por las elites es transmitida y compartida por la sociedad civil tal como se observa en la figura 3.2.

²³ Más adelante, durante el Gobierno de Ricardo Lagos se crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) para aclarar la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura militar. En 2011, la Comisión presentó un segundo informe en el que Chile reconoce oficialmente un total de 40.018 víctimas, cifrando en 3.065 los muertos y desaparecidos.

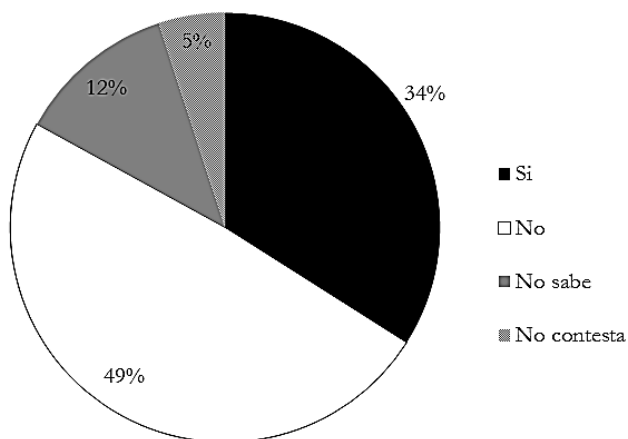
Figura 3.2. Cuán de acuerdo está con la postura del Gobierno de Patricio Aylwin de hacer justicia ‘en la medida de lo posible’, 1999.



Fuente: Elaborado en base a datos de Centro de Estudios Públicos (1999).

Aun cuando y según la misma encuesta del año 1999, un 69% de los chilenos pensaba que Pinochet debía ser sometido a juicio, esta opción mayoritaria se reducía si dicho juicio implicaría poner en riesgo la paz y la democracia o generar polarización y confrontación en el país.

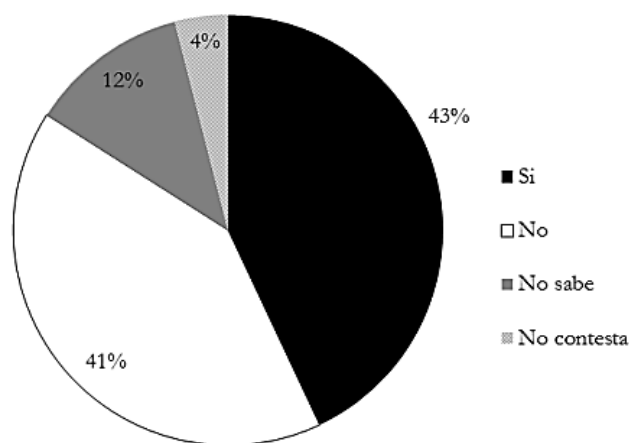
Figura 3.3. Si el juicio implicara poner en peligro la paz y democracia en Chile, ¿usted cree que se debe someter a juicio a Augusto Pinochet?



Fuente: Elaborado en base a datos de Centro de Estudios Públicos (1999).

La visión traumática producto de la polarización y la confrontación que dominó la transición chilena, llevó la necesidad de consenso – “la etapa superior del olvido” (Moulian, 2002: 37) - al paroxismo. Aun cuando, como señala Garretón (1993), el conflicto es una parte esencial de la vida social y el rol de las instituciones es propiciar su adecuada canalización, otro de los efectos del trauma colectivo en Chile fue la inducción a una patologización del conflicto y a la utilización del consenso como un mecanismo permanente.

Figura 3.4. Si el juicio implicara generar un clima de polarización y confrontación en el país, ¿usted cree que se debe someter a juicio a Augusto Pinochet?



Fuente: Elaborado en base a datos de Centro de Estudios Públicos (1999).

A nivel social, esto implicó el no debatir temas que pudieran dar espacio a dicha confrontación, que van desde la interpretación del pasado hasta demandas sociales que implicaran una interpelación o un enfrentamiento con el Estado. Tal como agrega Ricardo Brodsky:

La sociedad chilena sufrió un trauma en su conjunto, obviamente hay una parte de la sociedad que es la parte de las víctimas y de sus cercanos, su mundo político, que es el que sufrió más directamente, pero es toda la sociedad chilena la que sufrió el conflicto, es la que sufrió la fractura y esa fue una fractura que dividió profundamente a toda la familia chilena y, por lo tanto, hay un trauma. Yo creo que ese trauma está presente, hay un miedo al conflicto, a que las cosas “se salgan de madre”, hay un miedo y un rechazo a la violencia muy fuerte en la sociedad chilena, eso estuvo presente durante toda la transición y sigue estando presente (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).

Hacia finales de la década del noventa, Moulian (2002) sugería que un elemento fundamental del Chile de la redemocratización fue la compulsión al olvido. Frente a un pasado divisorio, una realidad difícil de definir y comunicar, la falta de acuerdo para definir los hechos (golpe versus pronunciamiento, gobierno militar versus dictadura, etc.), se produjo una negación socialmente determinada, que si bien se genera a nivel individual y particular, proviene de resonancias de experiencias colectivas. El olvido en este contexto, señala el autor, es vivido como un descanso, una tregua después de tantos años de incertidumbre, mientras reinstalar el tema parece un sin sentido cuando éste divide, produce hastío y dolor en personas sobresaturadas. De igual forma, el consenso apareció como el resultante de un conjunto social atemorizado “donde la simulación de acuerdos es una condición de sobrevivencia en un mundo de divisiones reales, vivas, activas” y, donde ya existe una sociedad traumada, el miedo y el temor fueron raíces del olvido y la desmovilización (Moulian, 2002: 39). Así, y dada la dificultad de manejar el pasado y enfrentar los conflictos del presente, a lo que es posible agregar cuotas de cansancio y desgaste propios de períodos prolongados de confrontación, la acción política en Chile se vio volcada hacia el consenso y hacia el futuro que

más que un consenso en torno a un futuro compartido es un miedo compartido a revivir los conflictos pasados (...) La gente no encuentra en el ámbito político las representaciones simbólicas que pudieran servirle de espejo para dar nombre al pasado y con ello apropiarse de él. A falta de palabras y símbolos para dar cuenta del pasado, ella opta por el silencio (...) El silencio no equivale a un olvido. El pasado está presente, aunque callado. No habla, no tiene palabra. Se trataría, en el fondo, de memorias colectivas que no logran reflexionar y nombrar los procesos en marcha (Lechner y Güell, 1998: 6–12).

Gloria Cruz agrega que el post-trauma en la sociedad chilena se expresó de distintas maneras,

uno, tiene que ver con el temor natural a no querer mover las cosas para que no se vaya a “quebrar la loza” (...) había toda una ideología de “no nos movamos mucho porque esto se puede quebrar”, eso fue una cosa que estuvo muy presente. Después lo otro es que hubo un cansancio, un cansancio natural de muchos dirigentes que sostuvieron una lucha con mucho costo de distinto tipo y, de alguna manera, ya no quisieron más. Y otra cosa es el miedo, el miedo personal, el miedo a que esto vuelva a pasar (comunicación personal, 17 de diciembre de 2014).

De esta manera, el “silencio transicional” (Olavarría, 2003) a nivel de la sociedad civil puede ser entendido como un condicionante y sustancia de la desactivación social. La experiencia traumática es obstáculo para una eventual actividad movilizadora en un contexto donde se evita procesar y elaborar el pasado, donde se promueve el silencio y el olvido tanto a nivel social como desde las políticas de Estado, generándose un déficit de discurso común, de verdad compartida, identidad colectiva y, con ello, de movilización.

3.2.2 La imposibilidad de la organización: desconfianza, desarticulación y deslegitimación

Los movimientos sociales vieron afectada su orgánica producto de las medidas represivas directas de la dictadura con foco en las organizaciones, tales como el exilio, la relegación, la infiltración, la prohibición de reunión, así como de las medidas indirectas como la deslegitimación de la protesta y del ejercicio de la política.

En otras palabras, producto de la represión dictatorial se produce una desarticulación social y, más tarde, la imposibilidad de reconstruir dicho tejido en un contexto de desconfianza y deslegitimación del ejercicio de la política.

Luego del golpe militar de 1973, los grandes movimientos sociales, sindicatos, organizaciones, grupos de pobladores, obreros, campesinos, estudiantes y la gran mayoría de las diversas formas del quehacer colectivo, fueron descabezados y desintegrados, generándose una despolitización de la sociedad a través de la eliminación de la fuerza colectiva constituida en las décadas anteriores (De la Maza, 2003; Garcés y Valdés, 1999). Lo anterior, pues el miedo prolongado y la eliminación de los espacios seguros de reunión y solidaridad se tradujo en una marca de temor, incertidumbre, inseguridad y desconfianza que se materializó en las relaciones sociales (Corradi *et al.*, 1992; Koonings y Kruijt, 1999). La inseguridad y el miedo jugó así un rol en los intentos de actuar colectivamente.²⁴ Luis Melián, ex dirigente de pescadores artesanales de Aysén²⁵ indica: “todos los dirigentes se fueron para la casa cuando volvió la democracia porque pensaban que podía venir un nuevo golpe, muchos tenían miedo, eso fue así” (comunicación personal, 20 de noviembre de 2014). Para Lechner y Güell (1998), la herencia de temor hacia los otros facilitó la retracción de los individuos a la seguridad del hogar limitando la memoria social a la historia familiar.

²⁴ A partir de las entrevistas realizadas, si bien jugó un rol en la dificultad de actuar de manera colectiva, el miedo a partir de los noventa no fue un factor tan decisivo como la desarticulación y la auto-limitación, variable analizadas en esta sección.

²⁵ Durante la década del ochenta y noventa.

Como lo ha analizado Barbera (2008, 2009: 74) en sus trabajos, el impacto de la dictadura militar fue el “desmantelamiento” de las organizaciones y movimientos a través de acciones represivas concretas como la tortura, la relegación y el amedrentamiento. El resultado de estas operaciones fue una profunda la ruptura de códigos sociales, desconfianza y aprensión respecto a la participación social, la pérdida de la identidad grupal y el profundo menoscabo de las organizaciones sociales y la acción colectiva, que a principios de la década del noventa fue prácticamente inexistente en las esferas del movimiento estudiantil, de trabajadores, regionalistas y de derechos humanos. Tal como señala Manuel Cancino, ex Presidente de la CUT El Loa,

a partir de los años noventa con la vuelta a la democracia nos encontramos con un movimiento social y en particular el movimiento de los trabajadores prácticamente desarticulado (...) en ese minuto [durante la dictadura] habían tres o cuatro sindicatos de Chuquicamata, que eran los sindicatos históricos en Chuqui, que eran los que se llevaron el peso de la organización y las protestas en contra de la dictadura y producto de ello hubo trabajadores que fueron relegados, exonerados. El año 1988, para el plebiscito, la gran movilización que se hizo aquí fue convocada por los sindicatos del cobre (...) pero con el advenimiento de los gobiernos de la Concertación se produce dentro de los trabajadores del cobre como una suerte de baja en su lucha social (...) ahí lo que se viene entonces es un proceso de organizar a los trabajadores, en ese minuto deben haber habido unos 13 mil trabajadores de CODELCO y unos 23 o 25 mil trabajadores contratistas que no estaban organizados (...) ahí se inició este proceso de organización que duró aproximadamente 5 años y en paralelo aquí en Calama no habían otras expresiones de lucha social poblacional, de los estudiantes o de trabajadores de otros sectores, no había (comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).²⁶

Asimismo, durante el régimen militar se produce un disciplinamiento social con un correlato en las organizaciones. En paralelo al desmantelamiento de las organizaciones y movimientos reivindicativos, las instituciones intermedias como juntas de vecinos, centros de madres, organizaciones deportivas y de voluntariado femenino fueron promovidas. Si bien dichas organizaciones existían en décadas anteriores, desde entonces dejan de ser actores de una sociedad diversificada para convertirse más bien en proyecciones o representaciones del Estado en la sociedad civil (Isla Monsalve,

²⁶ Los movimientos de trabajadores subcontratistas, en primer lugar, y luego los de estudiantes y de sociedad civil Calameña en general se vuelven protagonistas de grandes movilizaciones a partir del año 2006 y especialmente desde el año 2010.

2012). El problema de la reorganización de los actores sociales a partir de la transición es, para Bastias (2010), uno de los grandes factores esclarecidos tras la desmovilización del período cuando a partir de 1990 actores como la Iglesia, los sindicatos, los partidos políticos y las organizaciones sociales ven alterada la relación que hasta entonces habían establecido. Para Garcés (2004a), la dictadura militar representó la mayor operación represiva y disciplinadora de la historia chilena del siglo XX, afectando especialmente a los movimientos sociales tradicionales que, si bien lograron rearticularse durante la etapa autoritaria, no lograron proyectarse políticamente ni elevar sus demandas y aprendizajes durante la transición. Este es el caso de las organizaciones de defensa de derechos humanos quienes, habiendo articulado organización social en medio del apogeo de la represión autoritaria, no sólo se ven en la obligación de replantear su agenda y sus objetivos al retornada la democracia, sino que muchas de ellas vieron desarticuladas las redes institucionales más amplias a las que hasta entonces pertenecían - Iglesia y ONGs transnacionales - que les proveían apoyo, financiamiento y legitimidad.

De igual manera, las reformas legales y el ejercicio de la represión incentivaron la atomización de las organizaciones sociales populares. Las esferas de conflicto social son privatizadas a través de los procesos de descentralización y transferencia, las reformas de salud, previsión, educación y legislación laboral o a través del control e intervención gubernamental directo o indirecto de dichas organizaciones (De la Maza, 2003).²⁷ Tal como agrega Manuel Cancino, “el año 1991 se constituye el primer sindicato de trabajadores contratistas y posteriormente comienzan a organizarse otros, pero dada las características de los contratos de CODELCO, eran sindicatos que nacían y morían cuando las empresas contratistas perdían los proyectos”. Como señala Barbera (2009), el régimen militar destruyó los lazos comunitarios en la sociedad chilena cuando la satisfacción de necesidades y servicios sociales fueron traspasadas directamente a los individuos, las relaciones se instrumentalizaron mientras los hábitos de solidaridad y acción colectiva se fueron desvaneciendo.

La desconfianza y la desarticulación de las organizaciones y movimientos sociales se dan en paralelo a una deslegitimación del ejercicio de la política. Los mensajes traspasados hacia la ciudadanía durante el régimen dictatorial contenían implícita y explícitamente la idea de que la acción colectiva, fuertemente arraigada en la cultura chilena hasta ese entonces, representaba una fuente de conflicto, desorden y desestabilización. Al retorno democrático, a la desconfianza hacia la acción colectiva

²⁷ Ver más detalles sobre el impacto de las reformas estructurales neoliberales sobre la sociedad civil en capítulo 5.

se suma la deslegitimidad y el descrédito hacia la actividad política que se traduce en un cuadro general de despolitización de la sociedad (Garcés y Rodríguez, 2004).

Otra fuente de desmovilización post-dictatorial la constituyeron el cansancio, el abatimiento y la percibida derrota de la estrategia movilizadora. Durante la dictadura y en las jornadas de protesta nacional, la movilización fue considerada como una herramienta válida como estrategia de acción y presión política. Hacia el fin de la década de los ochenta, sin embargo, se comienza instalar un imaginario colectivo respecto al fracaso de la movilización social como acción política en desmedro de la negociación elitista y la estrategia electoral como vías de escape a la dictadura. Se concluye que dicho repertorio de acción colectiva no había sido suficiente ni logrado derrocar al régimen de Pinochet al mismo tiempo que comienza a perder legitimidad para quedar luego desestimada. Esto, desde de la visión de los propios activistas e integrantes de movimientos y especialmente a partir de 1986, en lo que puede ser considerado como el ‘trauma de la derrota’ del movimiento social.²⁸ Rodrigo Rocco dirigente de la FECH 1996-1997 señala,

Había mucha dificultad para armar algo, era algo que se veía en la gente, yo recuerdo a militantes o luchadores contra la dictadura que el año 90, 91 te decían: esto no vale la pena, vámonos *pa* la casa, qué vamos a estar armando centros de alumnos, chao... entonces eso, que se veía en las poblaciones también muy fuerte, yo trabajé mucho tiempo a nivel territorial y armar una actividad en el mundo poblacional en esos años era toda una proeza porque no había ánimo, había poco espacio para eso (...) había miedo, cansancio, sentimientos de frustración (comunicación personal, 13 de enero de 2015).

Así y para Roberts (1998: 161), la desmovilización en Chile debe ser rastreada a la derrota política de los movimientos sociales y de protesta de mediados de los ochenta, “una derrota que determinó el carácter pactado de la transición al régimen de Chile, selló en el “código genético” del nuevo régimen civil, y consolidó la revolución socioeconómica impuesta por la dictadura”. De igual manera, Oxhorn (1995) señala que luego del período 1983-1986, las movilizaciones cesaron por cansancio o abatimiento dado que los movimientos carecían de recursos para concretar la gran tarea de derrotar al régimen militar que le había asignada por todos los actores políticos de la oposición. Asimismo, los líderes de los movimientos sociales no tuvieron objetivos intermedios ni idearon una estrategia de transición, lo que terminó por excluirlos de tal proceso e imprimir un sello de derrota sobre la acción colectiva.

²⁸ Para más detalles de la estrategia de movilización social versus la de movilización electoralista ver capítulo 4.

Los movimientos tuvieron así dificultades para preservar su identidad, liderazgo y establecer alianzas, todos elementos constitutivos de los movimientos sociales activos como se planteara en el primer capítulo de este trabajo.

Ligado a la tesis de la derrota y aprendizaje de los movimientos sociales, se vuelve necesario regresar al proceso experimentado por las bases militantes de los partidos políticos y la manera en que dichos sectores vivenciaron la transición y redemocratización a principios de los noventa. El Partido Socialista y, especialmente, el Partido Comunista, que contaban con un nexo y una amplia base a nivel de las organizaciones sociales, sufrieron un importante proceso de renovación ideológica durante la década del ochenta. Los comunistas evolucionan desde una posición más moderada hacia una más radical hacia el final de la dictadura, mientras que los socialistas transitan desde la insurrección hacia la moderación, en una estrategia general en que se consolidó la participación electoralista en desmedro de la participación a través de métodos como la protesta o la movilización.

Estos procesos de aprendizaje y renovación política a nivel de las elites, que son abordados en extenso en el próximo capítulo, fueron experimentados especialmente por las cúpulas partidistas, quienes pudieron documentar y tuvieron tribuna pública para manifestar sus procesos de cambio y sus posiciones políticas, mientras los cambios o tendencias a nivel de los militantes de estos partidos no han sido igualmente expuestos (Roberts, 1998). Para el autor, la perspectiva de las bases partidistas es fundamental en la medida que los partidos políticos en Chile han representado tradicionalmente mucho más que una cultura de votantes - a lo que es posible agregar que han actuado como importantes agentes movilizadores de la sociedad civil - transformándose en verdaderas subculturas políticas donde identidades colectivas son creadas y recreadas así como transmitidas de una generación a otra. En este sentido, las tradiciones y las prácticas políticas ligadas a la identidad colectiva de un partido no son fácilmente modificables, incluso cuando las elites y la dirigencia de los mismos estén firmemente comprometidas con los cambios. De esta forma, los procesos vividos a nivel de las bases partidistas se vuelven relevantes en el marco de este trabajo dado que fue dicho segmento, fundido dentro de las redes sociales de pobladores, estudiantes y trabajadores, el que jugó un rol clave en el liderazgo y organización de la fuerza opositora al régimen militar en la década del ochenta. Las transformaciones experimentadas a este nivel resultan significativas, por tanto, para entender la desmovilización post-dictatorial.

Para Oxhorn (1994b), la confusión entre los sectores populares contribuyó mayormente a su subordinación a los requerimientos de la transición y la pérdida de su autonomía respecto a los partidos políticos. Esto, pues la política electoral resultó

una experiencia nueva para muchos de los líderes de organizaciones,²⁹ no habían precedentes de participación política autónoma en los procesos democráticos del país y el movimiento de protesta en el que dichas organizaciones se involucraran a principios de los ochenta era ahora considerado un fracaso. En este contexto, los líderes de las organizaciones populares no estuvieron en condiciones de innovar formas alternativas de participación política en un cuadro dominado además por los partidos políticos. La confusión se vio agravada por los errores tácticos del partido comunista quienes luego de apoyar vigorosamente al movimiento social de protesta, avalar operaciones paramilitares contra el régimen y la vía insurreccional para poner fin a la dictadura, súbitamente anuncia su adhesión a la estrategia electoral y a la campaña del *No* a pesar de que no se integraría a ella. Frente a la ambigüedad de la posición del Partido Comunista dentro de la oposición, un segmento significativo de sectores populares ligados al partido no supo cómo actuar en un presente y futuro ahora inciertos.

En este sentido, señala Roberts, los cambios padecidos por la élites así como las transformaciones nacionales y globales que afectaron a las ideologías socialistas y comunistas a finales de los ochenta y principios de los noventa,³⁰ fueron hechos turbulentos para los militantes de los partidos de oposición a la dictadura y sus reacciones pueden ser agrupadas en torno a tendencias o síndromes. El primero, ligado a la confusión ya planteada, se refiere a la desorientación en el sentido de la anomia social que acompaña los quiebres de las identidades colectivas tradicionales a un partido y la inhabilidad de construir o aceptar nuevos sistemas identitarios, de creencias y nuevos roles políticos. Al haber perdido su sentido de domicilio o pertenencia política, estos militantes se mostraron desconfiados y rechazaron todo tipo de proyectos colectivos, fenómeno muy ligado al trauma de la derrota. Una segunda tendencia fue el fundamentalismo, culpando a factores externos por la derrota política, haciéndolos defender la validez del cuerpo de creencias de la tradición marxista. Este tipo de militantes, indica Roberts, rechazaron los intentos reformistas o de renovación política al considerarlos como una traición a la ideología del partido. Una tercera tendencia fue la lealtad organizacional, esto es, militantes cuya prioridad fue la fidelidad hacia el partido más que hacia un determinado edificio ideológico siendo, por tanto, los más proclives a seguir y apoyar los cambios iniciados por las

²⁹ Ya sea porque eran muy jóvenes para haber participado del sistema anterior al régimen o porque habían evitado involucrarse en actividades políticas en el período previo al régimen.

³⁰ La caída de la URSS, el colapso de los regímenes comunistas de Europa del Este, la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua, las reformas económicas en Cuba a partir de 1990, la derrota general de la teleología socialista. Asimismo, los cambios experimentados por la Izquierda en Chile, expuesta a una fuerte represión, la clandestinidad y su nueva emergencia pero con renovadas posturas políticas.

elites del partido. Otra tendencia fue la de la renovación, es decir, militantes que presentaron una postura compleja y flexible entre el cambio y la continuidad de sus orientaciones políticas, fueron agentes de cambio pero en resistencia a transformaciones dramáticas en la identidad tradicional del partido. Finalmente, los militantes pragmáticos fueron aquellos que, al haber abandonado la idea de las transformaciones radicales, tendieron hacia objetivos como el éxito electoral, enfatizando en el realismo y la acción política volcada al acceso al gobierno más que en los cambios profundos al sistema.

Excepto por la tendencia fundamentalista, que podría haber redundado en actores políticamente activos o que se embarcaran en una oposición vigorosa, firme y movilizadora frente a los gobiernos de la Concertación dada la ‘traición’ percibida, el resto de las posturas - ya sea por desorientación como por lealtad organizacional, renovación o pragmatismo - facilitaron un estado de anomia social y de despolitización: la anomia, derivada de la confusión frente a nuevas ideologías o sistemas de creencias con una consecuente retracción de la esfera pública, y la despolitización originada en el acople a las tendencias pragmáticas de las elites partidistas al iniciada la redemocratización. De cualquier manera, a principios de los años noventa y aun cuando militantes del partido comunista se resistieran a abandonar la ideología de la vía insurreccional y los del partido socialista se mostraran en favor los mecanismos de consenso y contrarios a actividades desestabilizadoras, los militantes de ambos partidos apoyaban el proceso de democratización y la incorporación de sus partidos en el nuevo juego institucional (Roberts, 1998). La tendencia despolitizante, alejada de las grandes utopías movilizadoras, basadas en el pragmatismo político y el triunfo de la participación electoralista versus la participación en movimientos sociales dominaron de esta manera el escenario social de la redemocratización.

Desde el mundo estudiantil, Manuel Inostroza dirigente de la primera FECH una vez recuperada la democracia, señala que las dinámicas de esta organización de estudiantes en la redemocratización deben ser rastreadas a lo ocurrido hacia finales de los ochenta, donde aún en esos años se confiaba en la estrategia de la movilización social para derrocar al régimen:

Para nosotros el 86 era el año decisivo, el año en que echábamos a Pinochet producto de la movilización social y de una sociedad que se iba a sumar a un ambiente de efervescencia y protesta (...) y eso no ocurrió. Entonces a partir de esa fecha se empieza a perfilar una estrategia política distinta, que es la político electoral, meterse en institucionalidad y derrotarlo en el plebiscito del 88. Esos años ya empiezan a ser los primeros períodos de

desmovilización en términos que la estrategia de agitación social queda atrás para movilizarnos para el plebiscito (...) en la FECH había mucha división y por cierto que habían fuerzas políticas más del MDP [Movimiento Democrático Popular], del PS Almeydista, el partido comunista para qué hablar, que para nada estaban de acuerdo con la estrategia electoral y lo manifestaban claramente. Pero el eje democratacristiano, el PS más renovado, el PS de Nuñez, varias facciones más renovadas que también adhieren a la estrategia político-electoral y se impone a la del MDP (...) desde entonces se legitima el triunfo de la estrategia electoral y toda la FECH se movilizó para llamar a votar *No* (...) ya con ese *leitmotiv*, la FECH orienta todo su capital social en tareas político electorales con lo cual muchos estudiantes empiezan a ver una suerte de instrumentalización de la Federación (...) y empieza a caer en un descrédito de baja participación de poca representación, desmovilizadas de la estrategia anterior (comunicación personal, 11 de noviembre de 2014).

El ex dirigente señala que es ese contexto de desmovilización y apatía el que enfrenta como dirigente post-dictadura y el objetivo fue entonces intentar reconstruir y convocar a los estudiantes en la primera FECH democrática, esta vez sin embargo, en una línea de acción política diferente. Señala que se produce una desmovilización en el sentido tradicional a la tarea histórica de la Federación, más política y centrada en la transformación social, para cambiar la lógica y transformar dicha organización en un espacio de participación centrado ahora en el enfoque de la solidaridad y los trabajos voluntarios.

El clima de despolitización fue acompañado en paralelo, tal como señala Hipsher (1996), por una tendencia o voluntad de los movimientos sociales a moderar sus demandas y a desmovilizarse como consecuencia de las lecciones de sus propias experiencias durante la dictadura. El trauma provocado por la represión dictatorial habría generado una constricción en las expectativas de al menos ciertos sectores sociales y sus dirigentes políticos, lo que habría producido una flexibilización y disposición a auto-limitar sus acciones en el marco de la transición. Para la autora, una reducción en la oportunidades políticas luego de la recuperación democrática sumado a un proceso de reflexión y aprendizaje son factores relevantes para la explicación del decline de la acción colectiva de los movimientos urbanos en el Chile transicional:

La voluntad de los movimientos sociales a moderar sus demandas y para desmovilizarse fue parcialmente una consecuencia de aprender de sus propias experiencias bajo la dictadura. (...) Los sectores populares sufrieron tremendamente a manos de los dictadores (...) Fueron sometidos a la tortura, al secuestro y a la ejecución; sus barrios y casas fueron invadidas por las fuerzas armadas y sus derechos como ciudadanos (por no hablar de los

derechos laborales) les fueron despojados. Ellos, al igual que las élites, llegaron a estimar a la democracia, la paciencia y la moderación como prácticas para preservarla (Hipsher, 1996: 279–280).

Francis Valverde, integrante del directorio de la Asociación Chilena de ONGs ACCION, indica

Una vez que volvimos a la democracia, pasaron varias cosas, una de ellas tiene que ver con el nivel de expectativas que teníamos todos los ciudadanos y ciudadanas con respecto al nuevo gobierno, en especial los movimientos sociales que fueron parte fundamental de la caída de la dictadura que, si lo ponemos con nombre, yo diría que es el movimiento poblacional, el de mujeres, el estudiantil en alguna medida, y como la ciudadanía toda con las marchas (...) y a la base de todo eso, el movimiento de derechos humanos (...) las expectativas eran de todo tipo: justicia penal, justicia social, recuperación de derechos que se habían perdido (...) [a partir del retorno democrático] empieza a haber por parte de los dirigentes un necesario repliegue para descansar y esperar, no “hacerle olitas al gobierno”, teníamos que tener cuidado porque no fuera a ser que los militares se enojaran y de nuevo hicieran un golpe (comunicación personal, 7 de noviembre de 2014).

En este sentido, la experiencia histórica de los últimos treinta años dejó un legado de aprendizaje político que, tal como lo indican Garretón y Espinosa (2000), no sólo afectó a la clase o elite política,³¹ sino a que a la sociedad de manera integral. El compromiso con la democracia y la mantención del orden se vio en la disposición de los movimientos y sus líderes a llegar a acuerdos, incluso a posponer demandas, enviar mensajes de no confrontación y consenso, así como evitar las protestas y todo tipo de estrategias contenciosas (Garretón y Espinosa, 2000; Hipsher, 1996). Según la información recabada por Oxhorn (1995) sobre las lecciones aprendidas luego del golpe militar por parte de dirigentes de organizaciones populares, éste señala que una respuesta mayoritaria fue la de apoyar al gobierno electo de Patricio Aylwin. En ese sentido, Manuel Inostroza agrega:

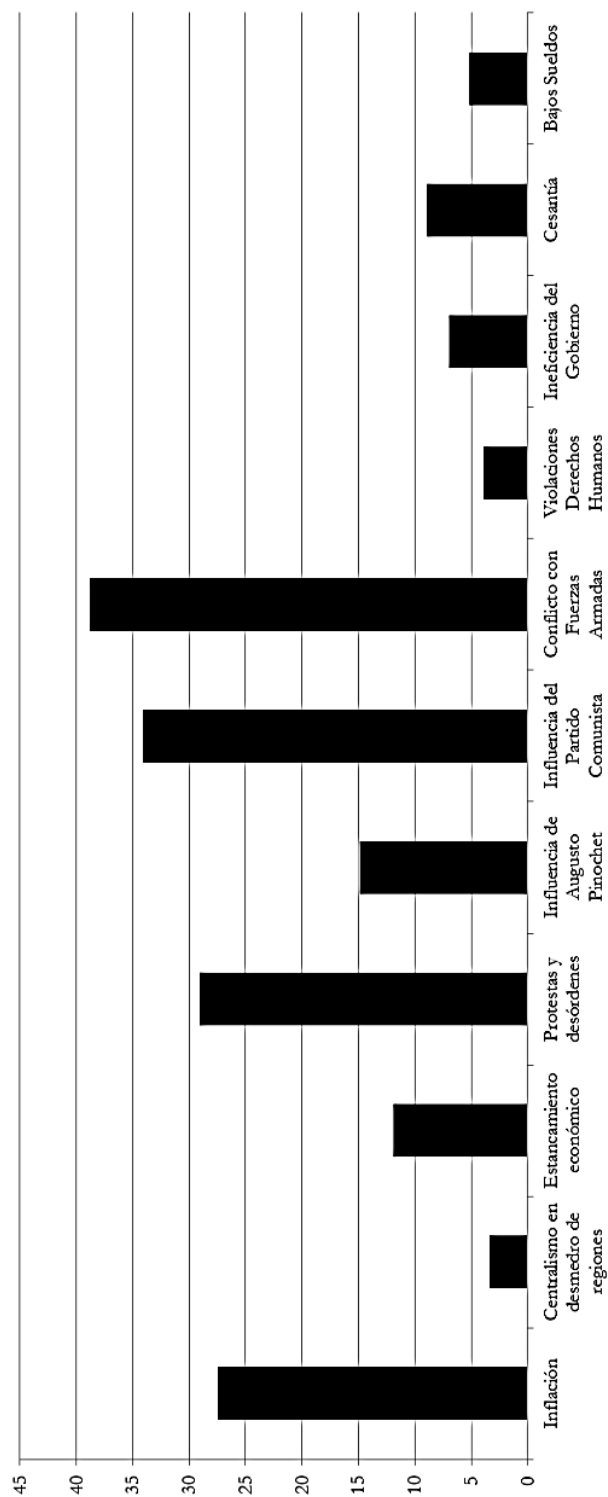
aunque nosotros protestáramos y reivindicáramos nuestros planteamientos, que siempre estuvimos en desacuerdo con las respuestas que nos daba el gobierno y por eso que en algunos casos hicimos movilizaciones, nunca fueron movilizaciones que intentaran poner en riesgo el desarrollo institucional, era un implícito en el imaginario colectivo de la época la idea que había que cuidar esta democracia, que era feble porque había mucha expectativa

³¹ Ver capítulo 4.

negativa en contra: estos gallos no van a saber gobernar, va a quedar la embarrada en el país, por lo tanto en cualquier momento Pinochet puede aburrirse de estar jugando a la democracia y volver a tomar el poder y, por lo tanto, era una cosa muy autorregulada, de exigir y protestar, pero nunca al punto que se pudiera poner en riesgo esta incipiente recuperación de la democracia (comunicación personal, 11 de noviembre de 2014).

En este sentido, el apoyo a los gobiernos de la Concertación, especialmente en la década del noventa, fue considerado unívocamente por parte de los líderes de los movimientos sociales como apoyo a la democracia, en una estrategia general que incluyó la desmovilización social (Donoso y Gómez Bruera, 2014). De igual manera y de acuerdo a Roberts (1998), las bases militante de los partidos también se mostraron tendientes al rechazo a formas radicales de movilización social como huelgas y tomas de terreno, en la medida que podían representar una amenaza y desestabilización para el nuevo régimen democrático. Estos actores manifestaron un alto valor por la recuperada democracia y, por tanto, la paciencia y la moderación frente a grandes reformas fue la tónica en los años noventa en un contexto de constricciones políticas. De acuerdo a un militante del PS Nuñez: “no podemos pedir más de lo que el gobierno puede hacer. Hemos esperado durante dieciséis años, ahora tenemos que ser pacientes porque hay muchas restricciones a este gobierno (...) no podemos ser irresponsables, tenemos que ser prudentes o habrá problemas” (citado en Roberts (1998: 183–184).

Figura 3.5. Principales riesgos o temores sobre el Gobierno de Patricio Aylwin, 1989.



Fuente: Elaborado a partir de datos de Centro de Estudios Públicos (1990).

Así, la sociedad civil chilena, y en especial los sectores medios, tendieron hacia procesos graduales y rechazaron fuertemente las expresiones de radicalidad política hacia el comienzo de la nueva era democrática (Mella, 2014). Como se observa en la figura 3.5, al inicio de la redemocratización los principales temores de los chilenos eran más bien riesgos políticos y resultaba fundamental, en este contexto, que en el nuevo gobierno se evitaran el desorden y las protestas así como demasiada influencia del Partido Comunista o tensión con las Fuerzas Armadas, las grandes fuentes de conflicto y polarización hasta entonces.

3.2.3 Transmisión social, re-traumatización o cronificación del trauma

Finalmente y en base a la extensa literatura que existe sobre la transmisión del trauma inter o transgeneracional, es posible argumentar que éste tuvo un impacto en la desmovilización en la medida que afectó pero también se traspasó a las generaciones protagonistas de la transición. Esto, pues recogiendo la idea antes planteada, el trauma colectivo no finaliza en el año 1990 al retornar la democracia, sino que a partir de entonces se da un proceso de post-trauma, retraumatización y cronificación debido al silencio, la falta de consenso, la justicia en la medida de lo posible y el clima de impunidad, así como por la ‘irrupción de la memoria’ en la forma de la coyuntura transicional.

Diferentes conceptos y definiciones se han utilizado para retratar el fenómeno de la transmisión y legado del trauma intra, inter y transgeneracionalmente entre víctimas directas de la represión y el terrorismo de Estado y sus círculos más cercanos como amigos, parientes y especialmente hacia sus propios descendientes (Agger y Jensen, 1994; Becker y Díaz, 1998; Deutsch, 2007; Faúndez y Cornejo, 2010; Hirsch, 2008; Hite, 2013; Kellermann, 2001; Lagos *et al.*, 2009; Scapusio, 2006; Serpente, 2011).³² Autores como Danieli (1998b) destacan la importancia de incorporar la perspectiva intergeneracional para entender el real impacto, la transmisión y el grado de contagio del trauma, así como la repetición de patrones de acción dentro de diferentes círculos sociales.

La premisa tras estos estudios es que el trauma producto de situaciones de violencia experimentadas por los padres, especialmente cuando se trata de situaciones no elaboradas, pueden ser transmitidos transgeneracionalmente y su efecto puede perdurar no sólo en dos sino en varias generaciones (Faúndez y Cornejo, 2010). Cuando el trauma no ha sido elaborado y se ha optado por el desinterés, la

³² Estos autores se han referido al fenómeno como traumatización vicaria, contratransferencia traumática, daño transgeneracional o post-memoria.

indiferencia y la negación de los hechos como mecanismos para su procesamiento, lo que se transmite directamente a la segunda generación toma el aspecto de un secreto cargado de miedo, culpa, vaguedad y que resulta de difícil comprensión, frente a lo cual se reacciona perpetuando el silencio. Respecto a la transmisión de la memoria traumática, Hite (2013) señala que existe una tensión entre lo que se recibe, lo que se transmite, lo que es silenciado y lo que está obsesivamente presente, mientras plantea que, tanto en el caso europeo como en el chileno, la tercera generación parece ser recién la más activa en la recuperación o preservación de la memoria tras producido el trauma. En esa línea, autores como Páez *et al.* (2001) señalan que los hechos traumáticos se transmitirán de generación en generación bajo un clima dominante que, tal como la evidencia empírica tiende a confirmar, se mantiene en la memoria activa de al menos tres generaciones y en forma de silencio por ciclos de 40 años.

Si bien estos estudios se han enfocado básicamente en analizar las consecuencias del trauma sobre la segunda o incluso la tercera generación de descendientes de víctimas, es posible extrapolar este examen al conjunto de la sociedad. La idea de un legado generacional y la forma en que éste permea a la sociedad cobra mayor relevancia cuando se considera lo planteado por Hite (2013) respecto a la localidad chilena de Paine. Esto, pues al año 2000 se determinó que entre la primera y la tercera generación habían más de mil descendientes directos de las originalmente casi 200 personas asesinadas o desaparecidas durante el período dictatorial. Respecto al efecto y el alcance del daño producido por el trauma de la dictadura en Chile, se plantea que éste “fue multigeneracional, al ser afectadas simultáneamente varias generaciones; intergeneracional, en tanto se tradujo en conflictos entre generaciones, y transgeneracional, pues sus efectos reaparecen de diversos modos en las generaciones siguientes” (Lagos *et al.*, 2009: 51). Asimismo y a nivel de los sectores de centro y centro-izquierda, Hite (2007) señala que el trauma en las últimas décadas en Chile se produce en tres momentos diferentes, primero en 1970 en lo que denomina el trauma de la victoria, luego en el período de la dictadura como el trauma de la resistencia, para luego y a partir de 1990 producirse la resurrección del trauma.

A través de su trabajo en el Instituto no sólo en contacto con víctimas del régimen, sino también con sus hijos, Gloria Cruz al respecto comenta,

Muchos niños que habían vivido cosas muy fuertes, que lo papás tenían que seguir para adelante como si no hubiese pasado nada, quedan con todo eso, y viene esta democracia y no tienen espacio para contar lo que ellos vivieron, lo que a ellos les pasó y nadie les preguntó tampoco. Entonces cuando se habla de esa generación de los que “no están ni

ahí”³³ que es distinta a la de ahora, tiene mucho que ver con eso yo creo, con niños que tuvieron mucho miedo y que los padres no se pudieron dedicar a calmar esos miedos (...) esa generación que no estaba ni ahí, muchos hijos de padres activos políticamente, que vieron tantas cosas y luego fueron tan pasivos (comunicación personal, 17 de diciembre de 2014).

Para Faúndez y Cornejo (2010), entre los factores que facilitan la transmisión transgeneracional del trauma se encuentran, por una parte, la dificultad de elaboración del mismo en la primera generación, y por otro, los procesos sociales, político-ideológicos, jurídicos, morales y comunicacionales propios del contexto en que las víctimas y sus descendientes se insertan. Así, la importancia del contexto en que se produce la elaboración y procesamiento del trauma, como ya había sido adelantado, resulta crucial para su superación o, al contrario, para la persistencia, re-traumatización o cronificación del daño. La retraumatización puede ser entendida como el “fenómeno psicosocial que hace referencia a la aparición de nuevos procesos disruptivos sobre el psiquismo individual, que son desencadenados a partir de hechos contextuales nuevos y que se relacionan con la experiencia traumática primaria” (Lagos *et al.*, 2009: 27). Según estos autores, la persistencia del daño se vio favorecida en la transición chilena por un entorno político, institucional y social en que no se crearon las instancias apropiadas para que el sistema en su conjunto enfrentara y elaborara los eventos pasados, dado el clima de silencio, negación, falta de consenso respecto al pasado, estigmatización de las víctimas, la ausencia o insuficiencia de investigación sobre los delitos y una justicia que actuó “en la medida de lo posible”. Este argumento es extremado al afirmar que “el período post dictadura, lejos de favorecer la rehabilitación y reintegración social, ha constituido una secuencia traumática más, que se suma a las vivenciadas durante la dictadura”. A propósito de la impunidad, Ricardo Brodsky señala,

La impunidad está íntimamente asociada al trauma, al deseo de no provocar conflictos que pusieran en riesgo la transición. Yo creo que había un acuerdo tácito con Pinochet de que iba a haber impunidad, o sea, que él y los suyos no iban a ser juzgados y eso fue un acuerdo que operó hasta su arresto. El único que fue juzgado antes fue Manuel Contreras, por el crimen de Letelier, pero eso fue porque fue un crimen cometido en el exterior y donde hubo una presión norteamericana muy fuerte, pero con Pinochet no, porque todo lo que se

³³ En referencia a la apatía de la relación entre los más jóvenes y la esfera política durante los años noventa.

hizo en Chile, se aplicó el decreto ley de Amnistía, no se investigó y obviamente no se sancionó nada (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).

De la misma manera, la retraumatización o la reactivación cíclica y recurrente del trauma desencadenada por hechos contextuales nuevos, no sólo está dado por el entorno político-institucional en que se inserta la sociedad traumatizada, sino que también por los eventos o la coyuntura específica que se relaciona con dicha experiencia traumática original. En este sentido, es posible afirmar que el trauma podría haberse visto reactivado por lo que Stern y Wilde (2000, 2009; 1999) han denominado “nudos convocantes” o “irrupciones de la memoria”, respectivamente. Ambos conceptos se utilizan para describir las circunstancias sociales, personajes, fechas o eventos públicos que exigen la construcción de puentes entre la memoria individual y la colectiva, que evocan un pasado político que aún se encuentra en el imaginario de gran parte de la población y que exponen a los individuos a enfrentarse con el trauma nuevamente. Entre los más importantes de estos nudos convocantes, se encuentran ciertos hitos de la transición democrática como la investigación sobre la violación a los derechos humanos y la publicación del informe Rettig, el Boinazo y el asesinato de Jaime Guzmán como recordatorios de un pasado posible de retornar y la detención y el juicio a Pinochet con una (re)polarización de la sociedad civil.

Mientras la Comisión Verdad y Reconciliación trabajaba para redactar el informe sobre violaciones a derechos humanos durante la dictadura, dramáticos hechos comenzaron a hacerse públicos. En 1990, se encuentran osamentas en cementerios clandestinos - Chihuío, Colina y Tocopilla -, además de 17 cuerpos de campesinos en El Escorial. Asimismo, el hallazgo de una fosa clandestina en Pisagua, sin duda el hecho que causó mayor impacto, lograron conmocionar tanto a la ciudadanía como a la clase política (Loveman y Lira, 2000). Durante los años posteriores se revelan osamentas en diferentes partes del país lográndose identificar a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos enterrados ilegalmente: eventos trágicos, nudos que convocan a la memoria y que exigen que se construyan puentes entre el imaginario personal y sus memorias colectivas, hechos que requieren pensar, sentir y atender un pasado que irrumpe (Stern, 2000).

Para Loveman y Lira (2000), la investigación de la Comisión Verdad y Reconciliación y la posibilidad de enfrentar de manera pública los crímenes del pasado se vio forzosamente interrumpida por el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán - figura emblemática del régimen militar -. En este contexto, señalan los autores, la problemática de los derechos humanos y el terrorismo de Estado fueron canceladas mientras el terrorismo de grupos pequeños así como la violencia y la

inseguridad ciudadana se vuelven los temas prioritarios.³⁴ Las eventos públicos considerados “irrupciones de la memoria”, rompen sobre la conciencia nacional para evocar asociaciones con símbolos, figuras y causas asociados con un pasado político que todavía está presente en la experiencia vivida de una parte importante de la población (Wilde, 1999).

Una serie de tensiones siguieron acompañando el desarrollo de la redemocratización. En el año 1993, comandos del Ejército de Chile liderados por Augusto Pinochet se manifestaron en las cercanías del Palacio de la Moneda armados y con vestiduras militares de combate, como una manera de hacer presión para que no se siguiera investigando el caso de corrupción que tenía como protagonistas al mismo Pinochet y a su hijo mayor Augusto Pinochet Hiriart. Desde su visión como actor de Estado y encargado de la relación de éste con la sociedad civil en el primer gobierno de la redemocratización, Enzo Pistacchio, ex Director de la División de Organizaciones Sociales, relata su experiencia durante el “boinazo”³⁵ y la manera en que la amenaza autoritaria seguía vigente y constante a principios de la década:

Yo estaba en La Moneda y Marcelo Zapata, el secretario de Don Patricio [Aylwin], me fue a decir: Enzo, hay golpe de Estado.. yo le dije: ¿qué?.. y me responde, sí, ya se fueron todos los ministros, aquí no queda nadie y yo te venía a avisar, le estamos avisando a todos para que se vayan.. yo dije: no puede ser. Me dijo, Belisario [Velasco, Subsecretario del Interior] es el último que queda, vamos para allá. Y Belisario me dijo: sí, acabo de comunicarme con el último intendente para darle instrucciones y ahora yo me voy a la casa de Don Patricio porque ahí están Correa [Ministro secretario general de Gobierno], Krauss [Ministro del Interior], Boeninger [Ministro secretario general de la Presidencia] y otros ministros (...) estuvimos hasta la una de la mañana y ahí se calmó la cosa, pero fue un momento muy tenso, o sea nosotros pensamos que sí, que los tipos iban a ir a La Moneda, que iban a llegar los tanques y todo (comunicación personal, 6 de noviembre de 2014).

De esta manera, tal como agrega Stern (2000: 16), en esos años se podía percibir desde la cultura y la sociedad un agotamiento frente a estos hechos políticos. El llamado de la memoria fue tan fuerte que la sociedad pareció vivir choques cada cierto tiempo, pasando de la prudencia a la convulsión y vice-versa, en un proceso permanente y sin resolución, en que “se dan virajes bruscos y chocantes de un olvido más o menos consciente a la memoria convulsiva, en un proceso sin fin”.

³⁴ Se crea entonces por decreto ‘la oficina’ (actual Agencia Nacional de Inteligencia), cuya tarea fue neutralizar y desarticular a organizaciones revolucionarias de izquierda. Funcionó bajo la autoridad del Ministro del Interior Enrique Krauss.

³⁵ Denominado ‘boinazo’ por las boinas negras de los soldados reunidos.

Las dinámicas de oscilación entre el olvido y el agotamiento y la necesidad de recordar y hacer un juicio respecto a los hechos del pasado (aun cuando esto sea para poder volver a la tranquilidad de la vida cotidiana), se ven definitivamente interrumpidas con la detención de Pinochet en Londres. Este evento marcaría un punto de inflexión en la evolución de la memoria post-traumática y en el desarrollo de la movilización social, en la medida que este hecho, en palabras de Winn (2007: 38), “rompe con el silencio histórico” y permite desatar el estancamiento de la memoria. Para Rodrigo Rocco, dirigente de la FECH 1996-1997, el miedo seguía siendo un tema relevante durante la redemocratización,

El miedo era un tema, y si tú me preguntas a mi cuándo la sociedad chilena empezó a despercudirse fue cuando Pinochet fue tomado preso en Londres, nosotros lo palpamos, de repente Pinochet preso en Londres y dejó en evidencia que habíamos estado viviendo “enclaustrados en la caverna” y de ahí en adelante la cosa se destapa y se produce este fenómeno (...) para los treinta años del golpe se empezó a redescubrir todo un pasado que había sido negado. En los noventa hubo una fuerte negación de lo que había sido el pasado político previo a la dictadura, no se hablaba de eso (comunicación personal, 13 de enero de 2015).

Ricardo Brodsky señala que hasta 1998, Pinochet había logrado reposicionarse como un actor político en el sistema democrático, hasta el momento en que se produce su arresto,

El arresto fue un hito fundamental porque quebró esa estrategia hasta la fecha exitosa de Pinochet y pasó a ser el dictador juzgado por la humanidad y la sociedad chilena, el poder judicial, el gobierno tuvo que hacerse cargo de esa demanda que había en el planeta porque se juzgara. Entonces fue un hito muy relevante que permitió que emergieran con mayor fuerza todas las reivindicaciones y las demandas de las víctimas (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).

A propósito de este hecho, tuvieron lugar las primeras manifestaciones de mayor envergadura hasta entonces en la era concertacionista. Miles de personas se reunieron ya sea para celebrar el arresto de Pinochet y exigir que se le lleve a juicio, así como en contra del procesamiento del ex dictador. El camino hacia el cierre del ciclo de amnesia, la pulsión y el brote de la necesidad de hablar y elaborar un juicio sobre el pasado, tal como se analiza en el capítulo 6, sería más tarde allanado por los escándalos financieros y la posterior muerte del General. Con todo lo anterior, se

sugiere que tanto a través de la transmisión del trauma como con los procesos de re-traumatización, durante el período transicional chileno la sociedad civil continuaba en un estado de traumatización secuencial, acumulativa o post-trauma que inhibió la acción colectiva y la movilización social como forma de participación política. Como bien lo resume Oppenheim (2007: 212),

Aunque hubo legados concretos del régimen de Pinochet, uno de los más difíciles de superar fue el psicológico. Fue el legado del miedo al pasado (...) el país sufrió un trauma colectivo. Como resultado, los chilenos fueron extremadamente sensibles a situaciones que consideraban podían recrear crisis anteriores (...) el miedo al pasado también estuvo entre aquellos que evitaron las acciones políticas pues éstas podrían despertar previas formas de extremismo político o represión militar. Los represivos años de Pinochet también dejaron un pesado legado de aprehensiones psicológicas. Muchos chilenos desarrollaron comportamientos de protección como estrategias de supervivencia (...) La gente tuvo miedo de hablar y aprendieron a practicar un alto grado de auto-censura (...) También son más reacios a participar en las organizaciones existentes como juntas de vecinos o sindicatos de trabajadores. Este miedo tuvo el efecto de limitar la participación popular y, con ello, el potencial para una democracia floreciente.

De esta manera, el trauma colectivo en la sociedad civil en Chile surge luego de la exposición directa o indirecta durante años a violencia y dominación social. A través de estos hechos y actuando en diferentes niveles, se afirma que el impacto de este trauma fue multidimensional y se tradujo en un clima de silencio, olvido, negación, desarticulación social, anomia y retracción ciudadana, todos elementos necesarios para una subsidencia o movilización latente de la sociedad civil post-dictadura. Sin embargo y tal como se analiza en los próximos capítulos, no sólo la variable psicológica tuvo una repercusión importante en dicha desmovilización, sino que contribuyeron a este fenómeno de igual manera la variable política y la socio-económica como queda en evidencia a continuación. De igual forma, y a medida que la transición avanzaba, la memoria colectiva comienza a evolucionar y a originar nuevas interpretaciones sobre el pasado, dando paso a nuevos discursos e identidades colectivas con implicancias para la acción de los movimientos sociales que se hacen visibles el año 2011, tal como se desarrolla en el sexto capítulo de esta investigación.

Capítulo 4

El paradigma de gobernabilidad como factor desmovilizador de la reconstrucción democrática

Al finalizar el capítulo anterior es posible entender y dimensionar el impacto del trauma colectivo instalado en la memoria de la sociedad civil chilena y la manera en que estas experiencias traumáticas influyeron - y lo siguen haciendo - sobre la identidad y las formas de acción colectiva de este sector luego del fin de la dictadura. Sin embargo, la polarización, el conflicto, la represión y la violencia de la historia reciente del país no sólo marcarían el devenir de las dinámicas de la sociedad civil, sino que ineludiblemente definieron un determinando proceso de reflexión y aprendizaje en las elites políticas y un quiebre con las formas de hacer gobierno previas a 1973. Los cambios en el escenario político global y el fin de la guerra fría, las lecciones extraídas de la fase política precedente así como las exigencias y constricciones propias de la transitología chilena, fueron dando forma a un paradigma de gobernabilidad específico y a profundas consecuencias sobre la visión y la relación de los partidos de la Concertación con la sociedad civil. Así, si en el capítulo anterior se analiza la (des)mobilización social en el Chile post-dictatorial desde el impacto del trauma colectivo, en este capítulo, en cambio, se examina la influencia del quehacer estatal y el de los partidos políticos de la coalición de gobierno sobre dicha desmovilización, cobrando una mayor relevancia la variable política, los factores externos a los movimientos y el rol de los agentes movilizadores como elementos desactivadores.

En la primera sección se presentan algunas precisiones teóricas, el origen y características del paradigma de gobernabilidad para el caso chileno y las implicancias de dicha visión sobre la relación del Estado y sus partidos políticos con la sociedad civil. Se desarrollan las principales lecciones del aprendizaje político de las elites respecto a la democracia y la manera en que ésta debe ser entendida, para luego presentar los aprendizajes y conclusiones específicas respecto a la sociedad civil y a sus movimientos sociales. Se argumenta que dicha lección produjo un quiebre y distanciamiento entre el Estado y los partidos político para con la sociedad civil, entregando así las primeras luces respecto al fenómeno de la desmovilización hacia el fin de la dictadura militar.

La segunda sección se enfoca de manera más analítica en la influencia de las estrategias de gobernabilidad puestas en práctica por los gobiernos de la Concertación sobre la desmovilización observada en el período. De forma concreta, se propone que esta desactivación social estuvo influida por las características de la transición y el rol preponderante de las elites, por el control ejercido por el Gobierno y los partidos políticos sobre las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, y finalmente por

el *set* de políticas públicas centradas en el tercer sector. De esta manera, en este capítulo se busca recoger y expandir el debate respecto al proceso de desactivación política en el período de reconstrucción democrática como resultado específico del impacto de las estrategias de gobernabilidad sobre el quehacer de la sociedad civil chilena.

4.1 Gobernabilidad democrática en la transición chilena

Mientras en el primer capítulo de este libro se detalla tanto el tiempo y el espacio en que surge el paradigma de gobernabilidad que dominó las redemocratizaciones en América Latina así como sus implicancias en términos generales para las dinámicas colectivas de la región, en esta sección se retrata dicho proceso con las especificidades del caso chileno. La definición de la cultura política, la visión de la democracia y la gobernabilidad así como la manera en que la sociedad civil y sus expresiones son definidas, son producto y resultado de las experiencias y el aprendizaje de la clase política luego de los procesos traumáticos vividos en las décadas del setenta y ochenta, temas que son abordados en la siguiente sección. Más adelante, se describe la manera en que este aprendizaje político deriva en un tipo de relación o estrategia concreta de vínculo entre el Estado, sus partidos políticos y la sociedad civil.

4.1.1 Gobernabilidad en Chile: ¿de qué estamos hablando?

Gobernabilidad: una mirada conceptual

Tal como se adelantara en el primer capítulo, luego del impacto de los regímenes dictatoriales en América Latina, la hegemonía de la ideología neoliberal junto a la presión de los organismos internacionales y la escasez de proyectos políticos y económicos considerados viables, durante la ola democratizadora de la región se urdió un paradigma de gobernabilidad basado en el pragmatismo político. Por gobernabilidad se entiende normalmente un “estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (Estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou, 2001a: 36), como “la capacidad de conducción de una sociedad” (Monedero, 2009: 2), o asimismo como “la capacidad que tiene un régimen determinado de cumplir con las funciones típicas de todo régimen. Estas son: la definición de las relaciones entre individuo y Estado, la forma de gobierno de la sociedad y la canalización institucional de demandas y conflictos sociales” (Garretón, 1993: 148). Para Gómez Bruera (2013: 15), la noción de gobernabilidad puede ser considerada tanto una herramienta analítica como una estrategia derivada de una cierta batería de valores y creencias. Para este autor,

gobernabilidad es un concepto amplio que remite a la capacidad de un partido de gobierno de “hacer que las cosas se hagan” (“*get things done*”), lo que supone no sólo lograr que la agenda programática se concrete, sino también tener la habilidad de evitar consecuencias negativas como inestabilidad en las esferas económica, política y social.

De esta manera, los elementos que generalmente destacan en las definiciones de gobernabilidad tienen que ver con la eficiencia y la efectividad o la capacidad de la instituciones para conducir los procesos políticos, y con la legitimidad de dichas instituciones para procesar, aplicar las decisiones políticas y ejercer el poder (Moreno, 2006). Para este último autor, la gobernabilidad además implica una estructura socio-política en que todos los actores estratégicos se interrelacionan, toman decisiones y resuelven los conflictos dentro de un determinado marco de reglas y procedimientos democráticos. Asimismo, se considera que la gobernabilidad existe cuando los intereses de grupos diferentes están adecuada y proporcionalmente representados, mientras una crisis de gobernabilidad tendría lugar cuando diferentes actores no reciben las garantías de que sus intereses serán representados o respetados (Donoso y Gómez Bruera, 2014). La noción de actores estratégicos en el análisis de gobernabilidad también es destacada por Coppedge (2001), quien los define como aquellos personajes con la capacidad potencial para quebrantar la gobernabilidad al interferir en la economía o en el orden público. Para el autor, cualquier grupo que controle cargos públicos, ideas e información, factores de producción y el capital, fuerza violenta, grupos de activistas o autoridad moral, es potencialmente un actor estratégico. Éstos, por tanto, pueden cambiar a través del tiempo y el espacio, haciendo variar con ello las condiciones de gobernabilidad de un espacio nacional.

Así, la gobernabilidad describe la manera en que los objetivos o la agenda programática de un gobierno intentarán ser concretados al mismo tiempo que se procura lograr equilibrios entre los intereses de los actores estratégicos, cumplir con las expectativas de redistribución económica y mantener las movilizaciones a niveles bajos o manejables (Donoso y Gómez Bruera, 2014; Gómez Bruera, 2013). Para ello, estos autores plantean la existencia de dos estrategias de gobernabilidad: una estrategia o paradigma centrado en las élites (*elite-centred*) y otra denominada contra-hegemónico social¹ (*social counter-hegemonic*), que reseñan básicamente la visión conservadora del trabajo de Huntington y Crozier (1975), y la neomarxista de Habermas (1988) y Offe (1990) respectivamente y ya planteadas en el primer capítulo de este libro.

Una estrategia de gobernabilidad centrada en las elites es aquella que acepta la distribución de poder y los arreglos institucionales como dados, busca consensuar los

¹ Los autores toman el concepto de la noción gramsciana de poder contra-hegemónico.

intereses de los actores estratégicos del mundo del empresariado y los partidos de oposición (actores estratégicos dominantes), enfatizando en la necesidad de llegar a acuerdos y consensos en una forma de dirección política *top-down* y basada en soluciones tecnócratas. Para este paradigma, la sociedad civil no debe necesariamente ser excluida, aunque los mecanismos de participación no juegan un rol central dado que la vía electoral debe ser la forma de participación principal. Esta estrategia, rescata el ideal de democracia schumpeteriana que privilegia el control elitista sobre la toma de decisiones y que limita la participación ciudadana en los asuntos políticos (Costa Bonino, 2000; Ducatenzeiler y Oxhorn, 1994; Silva, 1997). Así, en las democracias elitistas, la sociedad civil tiene participación muy limitada en la definición de la agenda política, en las decisiones o en la elección de políticas públicas (Avritzer, 2002; Cohen y Arato, 1992). Por otra parte, la estrategia de gobernabilidad denominada social contra-hegemónica, se concentra en los ciudadanos y en la sociedad civil para movilizar apoyo extra-institucional, se funda en un compromiso con la participación social y busca involucrar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Los partidos de gobierno que basan su gobernabilidad en esta estrategia, promueven la movilización social y diferentes formas de acción colectiva para generar soporte político frente a ciertas reformas o a actores estratégicos dominantes de oposición, intentado con ello buscar apoyo, evitar crisis políticas y asegurar su perdurabilidad en el poder.

Por ello, la manera en que la gobernabilidad es definida y, en especial, las vías o recetas para alcanzarla, llevar adelante la agenda de gobierno y propiciar un ambiente de estabilidad política y legitimidad, varía de acuerdo a la perspectiva teleológica o paradigmática desde donde surge. De igual forma, está directamente definida por la visión de la democracia, la política y la relación del Estado con la sociedad civil de quienes la definen. En el caso chileno, la definición de gobernabilidad así como el recetario para alcanzarla, fue moldeado y sólo puede ser entendido a partir de los hechos ocurridos en la década del setenta y ochenta y las experiencias vividas por la clase política chilena durante aquellos años. Como señala Roberts (1998: 20), la democracia sería definida desde entonces como un régimen político limitado y que contiene una serie de mecanismos de regulación de conflicto que permiten la convivencia pacífica de proyectos contendores. Para el autor, y tal como se revisará a continuación, estas definiciones fueron fuertemente influenciadas por el trauma de la represión autoritaria, por el agotamiento de los modelos socialistas revolucionarios y por un retorno a las raíces democráticas de la tradición socialista. Todo esto es de suma relevancia pues representa la piedra angular de la relación y la visión que se establecerá luego entre el Estado (gobiernos de la Concertación) y la sociedad civil,

permitiendo relevar las primeras explicaciones sobre la manera en que se constituye el fenómeno de la desmovilización social a partir de 1990.

Contexto y orígenes del paradigma de gobernabilidad de la Concertación

La noción de gobernabilidad aparece en la escena política en Chile hacia finales de la década del ochenta con el trabajo de Flisfisch (1989) y luego con los de Boeninger (1993, 1997) que se transformarían en documentos de referencia en esta materia. Tal como lo ha planteado Baeza-Rodríguez (2008), ambos autores tenían estudios y estaban familiarizados con los debates de la ciencia política norteamericana, mientras que la tesis de Huntington formaba parte innegable de las ideas que influenciaron sus reflexiones. Para la autora, en el pensamiento de Boeninger destaca la noción de los acuerdos y los consensos como un eje clave en los procesos de democratización que deben aflorar, no de una deliberación política amplia, sino de una negociación entre las cúpulas de los partidos, las elites políticas y los consensos tecnocráticos. Estas premisas se volverían el pensamiento hegemónico a partir de los años noventa cuando todos los mecanismos institucionales capaces de forzar o fustigar el consenso serían privilegiados, mientras los desacuerdos o el conflicto serían evitados y descartados en la medida que podían suscitar la polarización del pasado o poner en evidencia una falta de liderazgo de un novato ejecutivo.

Sin embargo, y aun cuando estas ideas comenzaron a ser parte del repertorio de conceptos de la ciencia política en Chile hacia finales de los años ochenta, las reflexiones y procesos que alimentarían su definición deben ser rastreados en los hechos ocurridos en las década del setenta y mediados de los ochenta, en el aprendizaje político y las lecciones y conclusiones desde ahí extraídas. Luego de lo que Hite (2007) ha denominado el “trauma de la victoria” en referencia a la experiencia de la izquierda chilena al llegar al gobierno de la Unidad Popular, su ulterior derrota y la acometida de represión militar - o “trauma de la resistencia” -, una serie de eventos tuvieron lugar transformando el escenario y la cultura política previa a 1973 y marcando los prospectos de la redemocratización.

A comienzos de la década del ochenta, la redacción y aprobación de un nuevo marco constitucional, la crisis económica y las protestas sociales serían hechos clave y que comienzan a pavimentar la salida al régimen militar.² Luego que se declarara una

² Como señala Ensalaco (2000), a partir de la crisis económica y la emergencia de la resistencia social, el régimen de Pinochet se ve enfrentado a tres fuentes de presión que comenzarían a dibujar la hoja de ruta para la salida al régimen: los Estado Unidos, las Naciones Unidas y la oposición a nivel local.

de las peores crisis económicas de las últimas décadas en el país,³ el ciclo de protestas masivas y constantes que emergen a partir de 1983 vinieron a remecer y generar fisuras tanto en la relativa y superficial calma social, como en la estructura, solidez y cohesión institucional que el régimen militar ostentó durante sus primeros 10 años. Asimismo, y tal como lo señalan Oxhorn (1995) y Roberts (1998), la institucionalización del régimen autoritario provocó la desesperación y la necesidad de tomar una decisión estratégica por parte de los partidos de oposición. Los líderes del Partido Comunista concluyeron que la insurrección y la vía armada debían ser las herramientas para darle salida al régimen y, creando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y movilizándolo a nuevos actores sociales a partir de la contingencia de la ebullición social de 1983,⁴ pusieron en marcha esta estrategia. Para Oxhorn (1995: 222), el objetivo de la “rebelión popular” era la de generar un estado de ingobernabilidad en Chile que forzaría al régimen militar a dar paso a un gobierno provisional de la oposición, el llamado a una asamblea constituyente y, más tarde, a las elecciones democráticas.

Como describe Fuentes (2012), junto a la insurrección, movilización de masas y exacerbación de los conflictos, al interior de la oposición también se barajaban las alternativas de la desobediencia civil o generar condiciones de ingobernabilidad pero sin formas violentas o radicales de confrontación con el régimen. Al mismo tiempo, un sector más moderado representado especialmente por la Democracia Cristiana, proponía una estrategia que combinara la presión social con la posibilidad de diálogo con los militares para lograr una salida pacífica a la dictadura. A partir de 1983, se enciende el debate sobre la aceptación o no del marco legal impuesto por el régimen militar como itinerario de salida, al mismo tiempo que la protesta social se vuelve multitudinaria y sistemática.⁵

En 1986 sin embargo, se produce un punto de inflexión o *turning point* en el proceso que hasta entonces tomaba forma, para definir y cuajar de manera definitiva la hoja de ruta hacia la redemocratización y, con ello, lo que sería el carácter o naturaleza de la transición. El atentado al General Pinochet, el descubrimiento del arsenal de armas en Carrizal Bajo y la violencia de la detención de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, fueron hechos que conmocionaron tanto a la opinión pública como a las dirigencias políticas. Estos sucesos causarían polarización dentro

³ Los niveles de pobreza alcanzaban el 50%, las tasas de desempleo por sobre el 30%. De una tasa de crecimiento del producto interno bruto de 10% en 1977 se desploma a un -13% en 1982 haciendo colapsar el sistema bancario (Fuentes, 2012). Ver más detalles en capítulo 5.

⁴ Especialmente a los pobres urbanos quienes habían sufrido mayormente durante las transformaciones socio económicas puestas en marcha por el régimen de Pinochet.

⁵ Las llamadas Jornadas de Protesta Nacional son analizadas con mayor detalle en el segundo capítulo de este libro.

de la oposición en torno a las posturas del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana, debate que finalmente haría converger a gran parte de la oposición en torno a una postura más moderada y el rechazo a cualquier forma de violencia (Fuentes, 2012; Hite, 2000; Oxhorn, 1995; Petras y Leiva, 1988; Posner, 2008; Yocelvezky, 1999).⁶ De esta manera, después de 1986 el contexto político muta y la oposición transita desde una postura inicial de cuestionamiento radical a la legitimidad de la Constitución de Pinochet hacia una de aceptación de dicho marco institucional y el plebiscito de 1988 como posibilidad del fin dictatorial.

El Partido Comunista, siendo uno de los más importantes, con mayor presencia en el mundo social y con mayor potencial como agente movilizador, se resistió al cambio en las condiciones políticas, pero no tuvo la fuerza ni una estrategia para bloquearlo. No pudiendo adaptarse al nuevo escenario de negociación y alianza entre los Partido Socialista y la Democracia Cristiana, los comunistas fueron excluidos de la negociación política que hizo restablecer la democracia, lo que redundó en una crisis del partido y sepultó su protagonismo político en la era democrática (Corvalán, 2002; Motta, 2008). El Partido Socialista en cambio, especialmente el PS - Nuñez,⁷ fue capaz de adaptarse al nuevo escenario y desarrollar dos importantes habilidades: la capacidad para movilizar un electorado y la habilidad en el arte del consenso y la negociación. Este aprendizaje y la voluntad de poner en práctica dichas estrategias, hicieron disminuir la brecha ideológica entre éstos últimos y la DC y finalmente permitió la constitución de un bloque opositor entre ambos partidos cuyo norte fue la salida pacífica y constitucional a la dictadura (Ortega, 1992; Oxhorn, 1994b, 1995; Roberts, 1998; Taylor, 1998).⁸

Political learning: renovación, elites y aprecio por la democracia

El proceso socio-político por el que transitaron las cúpulas partidistas y que explican el prisma de gobernabilidad así como la racionalidad de la redemocratización chilena, sólo puede entenderse por el impacto de la dictadura y la manera en que esta experiencia forzó una reflexión en que se evaluaron y reformularon las ideologías, las metas, las instituciones, sus estrategias así como sus adversarios y desafíos políticos.

⁶ Como señala Hipsher (1996), resultado de los incidente de 1986 y la campaña de descrédito de la izquierda marxista por parte de los militares, la Democracia Cristiana rechazó cualquier tipo de alianza con los Comunistas. Al mismo tiempo, las dos facciones del Partido Socialista fueron desde entonces resolviendo sus diferencias y comenzaron a trabajar en conjunto con los demócrata cristianos para el retorno de la democracia y la consolidación de una alianza entre ambos partidos

⁷ La facción PS Almeyda perseveraba en la vía insurreccional como salida al régimen, mientras que el PS Núñez concluía que la moderación y la salida institucional debían ser las estrategias para ello.

⁸ Con la creación de la Alianza Democrática en 1983, en oposición al Movimiento Democrático Popular conformado por el PC y el PS Almeyda, y la posterior Concertación de Partidos por la Democracia.

Este cambio cognitivo es lo que ha sido definido por Bermeo (1992: 274) como aprendizaje político, o el proceso mediante el cual ciertos grupos modifican sus creencias políticas y sus estrategias como resultado de crisis severas, frustraciones o cambios radicales en el ambiente. Complementando esta idea, Garretón (1993: 149) señala que el “aprendizaje político es el proceso consciente por el cual un actor político internaliza teórica y prácticamente tanto los fines como los medios de su acción, ya sea por incorporación de nuevos, o por modificación, sustitución, redefinición o reafirmación de antiguos”. Para este autor, un análisis de aprendizaje político comienza por determinar quién aprende, y luego identificar qué se aprende, cuál es la manera de hacerlo y cuál es el grado de profundidad de tal aprendizaje. En la línea de estas preguntas, Roberts (1998: 169) plantea que el caso de izquierda chilena “provee un ejemplo “catastrófico” de aprendizaje político que tiene muy pocos paralelos en el mundo moderno. Las lecciones derivadas de esta experiencia de perder, ganar y tratar de retomar el poder influenciaron profundamente la evolución de los roles políticos y las estrategias en el período post 1973”.

El régimen militar se irguió para aplastar las instituciones políticas y las redes sociales que habían nutrido el crecimiento de la izquierda en el país. Y aun cuando los partidos de centro e izquierda fueron capaces de sobrevivir a la derrota y a la represión militar, la fuerza política que surgiría a mediados de la década del ochenta sería muy distinta a aquella que gobernó con Allende, en un contexto socio-político totalmente diferente a aquel previo a 1973. Las lecciones aprendidas por la dirigencia política chilena, tal como se adelantara, definieron las posiciones de los principales partidos de centro-izquierda durante la transición. Basados en lecciones e interpretaciones casi opuestas de lo que había ocurrido, el Partido Comunista y Socialista mostraron patrones divergentes de aprendizaje político durante la década del ochenta. La evolución de ambos partidos los hace prácticamente rechazar sus propias posiciones previas al golpe militar y generar replanteamientos políticos y estratégicos contrarios, así como la manera de hacer oposición al régimen militar y su relación con la sociedad civil (Oxhorn, 1995; Posner, 2008; Roberts, 1998).

El Partido Socialista, hasta entonces el más radical, con ideario en el modelo cubano y en la vía armada para imponer un régimen socialista, realiza, al igual que lo hiciera de la DC, una evaluación autocrítica de la experiencia de la Unidad Popular en que se reconocen los propios errores, deficiencias y responsabilidades así como el rol de la radicalización, la polarización y el estancamiento político en el quiebre democrático. En paralelo, elucubra una reconceptualización del socialismo y una renovación ideológica que redundará en una (re) valoración de la democracia. Este proceso de reflexión, aprendizaje y cambio estratégico de los socialistas chilenos es lo

que ha sido normalmente denominado “renovación” (Funk, 2004; Garretón y Espinosa, 2000; Hite, 2000; Motta, 2005, 2008; Silva, 1992, 1999; Walker, 1990). En contraste con el Partido Comunista, el Partido Socialista era más flexible y descentralizado en términos organizacionales, tenía menor rigidez jerárquica, menor disciplina interna y un mayor pluralismo ideológico, lo que facilitó una serie de aprendizajes y conclusiones diversas respecto a lo ocurrido pre y post 1973, lecciones que serían vehiculizadas por liderazgos fragmentados y dispersos luego del golpe militar.

El Partido Comunista en cambio, mantuvo una estructura jerarquizada y una gran disciplina lo que propició una cohesión interna y una coherencia organizacional que le hizo menos permeable que el Partido Socialista al aprendizaje desde fuentes externas.⁹ Para ellos, más que errores tácticos o responsabilidades de partido, la caída del Gobierno de la Unidad Popular tuvo que ver tanto con la influencia norteamericana como con la fuerza de las oposiciones políticas y militares que finalmente complotaron y provocaron el derrumbe de Allende y su proyecto socialista. Así, se concluye que la forma de proceder sin repetir los errores del pasado, debía ser en base a una estrategia eminentemente reactiva y defensiva de los objetivos del partido (Roberts, 1992, 1994, 1998).

De esta manera, el trauma de la represión militar tuvo múltiples consecuencias para la centro-izquierda que vio a una generación completa de activistas presos, torturados, asesinados, desaparecidos o exiliados. Las lecciones extraídas por este sector fueron moldeadas por un aprendizaje traumático: una reflexión que enfrentó el pasado, el presente y el futuro, las experiencias personales de los líderes y militantes de los partidos así como los cambios a nivel local e internacional del escenario político (Cleuren, 2007; De la Cuadra, 2003; Garretón, 1993; Garretón y Espinosa, 2000; Siavelis, 2002; Silva, 1999).¹⁰

Una importante lección extraída por la DC y el PS vendría de la constatación de que los gobiernos minoritarios (la experiencias de Frei Montalva y Allende) y el aislamiento o los proyectos políticos excluyentes de grandes sectores de la población, habrían provocado la polarización y la sobre-representación de los intereses de un solo segmento de la sociedad, facilitando el quiebre democrático (Cavarozzi, 1992b). Para

⁹ Para más detalles de la trayectoria política del PC y del cambio de proyectos y visiones de los partidos ver Corvalán (2002).

¹⁰ Entre estas fuentes de aprendizaje destacan la experiencia en el exilio y el contacto con la social democracia europea (Hite, 2000; Perry, Próximo; Walker, 1990), los procesos políticos en Cuba, Nicaragua, el colapso de la Unión Soviética y del socialismo real, las transiciones recientes en Argentina, Uruguay y España (Garretón, 1993; Roberts, 1998) y la creciente hegemonía del paradigma tecnócrata-neoliberal.

Oxhorn (1995), el régimen dictatorial fue visto en este sentido por sectores de la Democracia Cristiana y el Socialismo Renovado como la culminación de un proceso en que el poder es ejercido por minorías políticas y que el futuro gobierno democrático debería apoyarse en una gran coalición, la búsqueda de unidad nacional y el consenso político. Una segunda lección deriva de la reflexión de los partidos respecto a la necesidad de mayor pragmatismo y menos ideología en sus líneas de acción, elemento también considerado fundamental para concretar la estrategia de coaliciones políticas. Esto, pues la excesiva ideologización de las posturas previas a 1973 habrían transformado el escenario político en uno de visiones irreconciliables respecto a lo que la sociedad chilena debía aspirar. El realismo y el pragmatismo político coincidieron con las tendencias de los partidos de derecha y con los esfuerzos del régimen militar por deslegitimar a la política y a sus partidos, las ideologías y los metarelatos, en favor de soluciones tecnócratas a las problemáticas sociales.

Otra de las grandes lecciones de la experiencia dictatorial para las cúpulas partidistas de la época fue el aprecio por la democracia, los derechos humanos y las libertades personales. Especialmente el Partido Socialista, quienes otrora consideraran tales temas como preocupaciones burguesas, comienzan a valorar las instituciones de la democracia formal que, incluso con restricciones, eran preferibles *vis-à-vis* un régimen represivo. La importancia del retorno y la posterior sustentabilidad de la democracia provocó una serie de concesiones políticas por parte de la centro-izquierda chilena así como la moderación, la cautela y la búsqueda de la estabilidad (Fuentes, 2012; Jocelyn-Holt, 1998; Lechner y Güell, 1998). Las lecciones resueltas por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana convergieron, así como estuvieron en línea con las conclusiones extraídas por los movimientos sociales en torno a la moderación y el valor de la democracia, desarrolladas en el capítulo anterior. Como señala Silva (2004: 65), todo lo anterior fue producto “de los recuerdos traumáticos para el conjunto de la población chilena de la hiper-polarización y la radicalización experimentada a principios de 1970 y el posterior colapso de la democracia”.

Para Roberts (1994, 1998), el trauma de la experiencia militar no sólo permitió que la democracia fuera apreciada como garantía de derechos y libertades individuales, sino como un marco institucional en el que era posible la coexistencia de diferentes proyectos de sociedad. Sin embargo y tal como señala este autor, dentro de la urgencia y necesidad de replanteamiento ideológico o renovación, no quedó del todo claro qué era exactamente eso que estaba siendo revaluado. Para De la Maza (2010b), la experiencia vivida por la elite política les haría concluir que la redemocratización en el país no se forjaría en base a cualquier democracia, sino a partir de la socialdemocracia de los países del primer mundo descubierta por actores clave de la izquierda chilena

durante su experiencia en el exilio. Al mismo tiempo y tal como afirma este último autor, la adaptación chilena de la democracia consociativa estuvo aparejada con una consolidación de un principio elitista sobre la conducción política que marcaría la redemocratización,

En el caso chileno, la concepción elitista se profundizó con la adopción de una particular versión de la democracia consociativa, que había sido propuesta por los teóricos de la gobernabilidad para escenarios de alta polarización (...) Ello no fue sólo una astucia de la estrategia de transición, sino que responde a razones más de fondo: se hizo para evitar el que en ella se produjera el desborde de la participación que habría dado origen y habría sido el causante del golpe militar del 1973 (De la Maza, 2010b: 279).

Los pactos inter-elites, la democracia de la elites o la partidocracia, quedarían aquí consolidadas (Cavarozzi, 1992b; Godoy, 1999; Huneeus, 1999; Portales, 2000; Rovira, 2007; Siavelis, 2009a)

De esta manera, la noción de gobernabilidad centrada en las elites (*elite-centred*) se transformó en un pilar fundamental del proyecto político de la Concertación y del carácter de la transición democrática, con fuertes implicancias sobre el período post-dictatorial (Donoso y Gómez Bruera, 2014) (ver también Higley y Gunther (1992)). Estas posturas se refuerzan una vez ganado el plebiscito y explican la posterior adopción del pragmatismo y una visión instrumentalista como estrategia para superar el trauma y la desconfianza entre los miembros de nueva Concertación (Garretón y Espinosa, 2000). Asimismo, en la nueva coalición se interiorizó la idea de que el día que la dictadura militar llegara a su fin “la repetición de los errores que habían provocado el fracaso colectivo debían ser evitados a toda costa” (Silva, 1999: 175). Las lecciones del pasado definieron así un paradigma de gobernabilidad, una estrategia política y con ello, como se verá a continuación, la relación que se establecerá desde entonces entre los gobiernos democráticos de la Concertación y sus partidos políticos con la sociedad civil, hecho que tendrá importantes repercusiones sobre el potencial de movilización de éste último actor.

4.1.2 Gobernabilidad, partidos políticos y sociedad civil en Chile

Modelos de relación Estado y partidos políticos con la sociedad civil

Lo presentado hasta este punto adquiere un mayor sentido si se asume que las sociedades definen sus problemáticas de gobernabilidad de acuerdo a los procesos de

aprendizaje que en ella tienen lugar (Garretón, 1993). Al mismo tiempo, la gobernabilidad define el tipo de relaciones que se establece entre el Estado, los sistemas de representación y la base social. Por ello, el definir o adherir a un determinado paradigma de gobernabilidad implica una particular forma de gobernar la sociedad así como una manera de canalizar las demandas y los conflictos sociales.

Para Gómez Bruera (2013: 21–23), la definición de gobernabilidad es clave para entender la relación entre los partidos políticos de gobierno y la sociedad civil, pues a partir de dicho paradigma se definirá limitar el potencial disruptivo de las movilizaciones y conflictos sociales (ya sea anteponiéndose a las demandas o por medio de la represión) o, al contrario, integrar a los grupos movilizados a través de canales políticos establecidos. Al respecto, plantea tres tipos de relaciones entre los partidos políticos y la sociedad civil: vínculos programático, basados en la recompensa, o interpersonales. En el primer caso, la gobernabilidad se busca a través de la promoción de una agenda surgida desde la base social y el establecimiento de pactos y alianzas con actores de la sociedad civil que permitan hacer frente a actores estratégicos dominantes. Los vínculos basados en recompensa son aquellos en que los partidos intercambian favores específicos con sectores de la sociedad civil de acuerdo a su potencial de votos. Este tipo de vínculo toma la forma de repartición de trabajos o la provisión de subsidios para grupos sociales específicos y permite a los partidos maximizar su electorado pero también asegurar un cierto grado de legitimidad y gobernabilidad. Finalmente, los vínculos interpersonales pueden darse en un contexto de relaciones programáticas o basadas en la recompensa y se sustentan en la relación directa entre partidos y líderes de la sociedad civil para restringir posibles efectos disruptivos mediante la cooptación y la desmovilización, o a través del fomento de movilización social basada en motivaciones programáticas comunes.¹¹

Siguiendo esta línea, aunque sin plantearlo necesariamente en torno a problemáticas de gobernabilidad sino como estrategias que median la relación entre los actores políticos y la sociedad civil, Roberts (1998: 74–76) y Posner (2004: 58) describen los distintos tipo de relación que pueden establecer los partidos políticos y los movimientos de la sociedad civil. Es posible sintetizarlos como: un modelo de vanguardia o directivo/clientelista que funciona con partidos altamente jerarquizados y disciplinados, con militantes insertos en una base social que es considerada por el partido como una extensión del mismo - sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones populares, etc., - y que buscará su control político y su acción colectiva

¹¹ Los vínculos que establezcan los partidos de gobierno con la sociedad civil pueden actuar como instrumentos que garanticen la gobernabilidad social sin que ello implique que las organizaciones de la sociedad civil sean actores pasivos.

en concomitancia con sus objetivos; un segundo modelo es el orgánico o participativo, representado por partidos que emergen como expresión política de grupos organizados de la sociedad civil, donde las fronteras entre el partido y las organizaciones sociales es difuso. En contraste con el modelo de vanguardia, en el modelo orgánico el partido tiene una estructura más flexible y pluralista y evitará subordinar su trabajo y sus redes sociales a las lógicas del poder político; finalmente, el modelo electoralista es aquel en que los partidos priorizan la movilización del electorado en oposición a la construcción de actores colectivos en la sociedad civil. En este modelo, los partidos respetan la autonomía de las organizaciones sociales en parte porque su proyecto político es menos dependiente del apoyo de este sector. En cambio, concentran su acción política en conseguir y ampliar una base electoral que, más que ciudadanos organizados, son individuos desorganizados, dispersos e independientes. Los partidos electoralistas tienden a diluir sus objetivos ideológicos, optan por el pragmatismo y la moderación en la conducción política así como por líderes fuertes que permanecen en el ojo público mientras las estructuras a nivel de las bases sociales son activadas sólo durante las campañas electorales. Por lo mismo, tienden a combinar el quehacer político tecnócrata y a veces clientelista cuando asumen la administración de un país.

En una propuesta analítica similar, pero con foco en las organizaciones populares, Oxhorn (1994b: 60–61) señala que las relaciones entre los partidos políticos y las organizaciones sociales pueden ser también entendidas en términos de dos dimensiones: la identidad colectiva y los niveles de acción colectiva. Para el autor, cuando se observa tanto una identidad colectiva débil y bajos niveles de acción colectiva, las organizaciones populares tienden a ser atomizadas, tener una corta duración y relaciones clientelistas con los partidos políticos y el Estado. Cuando la identidad colectiva es débil pero los niveles de acción colectiva son altos - las movilizaciones son motivadas por una variedad de razones y demandas generales -, la tendencia será hacia el populismo. Cuando existe una identidad colectiva fuerte, ésta puede generar su intento de absorción ya sea por parte de un partido o de un movimiento popular capaz de actuar como interlocutor entre los actores sociales y políticos. Cuando son absorbidos por los partidos políticos, la acción colectiva autónoma es inexistente, las organizaciones son fragmentadas a lo largo de las líneas del partido o amalgamadas dentro de un solo partido o coalición. Finalmente, una identidad colectiva fuerte puede servir de base para la emergencia de un movimiento social y se caracterizará por la existencia de una serie de órganos coordinados en una variedad de niveles que mantienen su autonomía de cualquier partido político.

Para Posner (2004), estos vínculos entre partidos políticos de gobierno y sociedad civil son determinantes fundamentales de las posibilidades de acción o movilización de este último sector. Por ello, y de acuerdo a lo expuesto, el modelo de gobernabilidad definido para la conducción política de un país también actuará como determinante para dichas posibilidades de acción colectiva. Si una democracia es entendida como representación - la visión schumpeteriana antes descrita - y se opta por un paradigma de gobernabilidad centrado en las elites, de relaciones basadas en la recompensa y un modelo electoralista, se aspirará entonces a una sociedad sin conflictos o con conflictos absolutamente “neutralizados” (Camou, 2001a: 39). Bajo esta concepción de gobernabilidad, por tanto y tal como señala Revilla Blanco (1994: 23), el surgimiento de la movilización implica necesariamente “ingobernabilidad” en la medida que los movimientos sociales por esencia “cuestionan la capacidad de representación de las identidades políticas preexistentes y, por tanto, su legitimidad (su autoridad para ejercer el gobierno) y su eficacia (su capacidad para atender determinadas necesidades)”. Para la autora, la naturaleza de los movimientos sociales es, tal como se presentara en el primer capítulo, la de generar una lucha por el control de recursos sociales, lo que normalmente implica la presión o la sobre-demanda hacia el Estado. En otras palabras, bajo el paradigma de gobernabilidad centrado en las elites, el surgimiento de movilización y conflicto social es necesariamente sinónimo de amenazas para la gobernabilidad y estas manifestaciones deben, por tanto, ser anticipadas, evitadas, neutralizadas, controladas o reprimidas.¹² Este último paradigma, se plantea en este trabajo, fue el que dominó la transitología chilena favoreciendo, por tanto, el escenario de desmovilización post-dictatorial.

Aprendizajes políticos y (des)movilización: el quiebre entre los partidos y la sociedad civil

Tal como se ha presentado, a medida que la transición a la democracia chilena fue tomando forma, los miembros de la futura coalición de gobierno se alinearon en torno a una definición de gobernabilidad entendida como la capacidad de evitar episodios de crisis que pudieran poner en riesgo la sustentabilidad del gobierno. Un modelo de evasión de conflictos que en el caso chileno es llevado al extremo deviniendo incluso, como lo describe De la Maza (2010a), en una hipergobernabilidad. Junto a lo planteado en las secciones previas, la dirigencia de los partidos de oposición a la dictadura militar experimentaron también un proceso de aprendizaje específico en torno a su visión sobre las movilizaciones y las dinámicas de la sociedad civil,

¹² Por otra parte, y desde el punto de vista de la democracia como participación, esta autora sugiere que la emergencia de un movimiento social siempre contribuye a la gobernabilidad política retomando con ello los planteamientos de Offe (1990) sobre la inclusión de los ‘nuevos’ movimientos sociales como vía de salida a las crisis de gobernabilidad.

aprendizajes que convergen para empezar a definir un clima de desmovilización al retornada la democracia.

Los partidos de centro y de izquierda fueron moldeando y adaptando sus formas de relacionarse con su base social de acuerdo con los cambios en las condiciones políticas y estructurales, las variaciones de sus agendas y sus percepciones y definiciones de democracia. Hasta el golpe militar de 1973 y en un contexto de Estado desarrollista, los partidos desplegaron un vínculo eminentemente directivo/clientelista o de vanguardia con sus militantes y electorado, modelo de relación que sería alterado dramáticamente a mediados de la década del ochenta. Como señala Garretón (2007: 97), hasta la década del setenta la política era sinónimo de partidos políticos y movilización social, lo que implicaba que en Chile,

no hubo sociedad civil separada de los partidos políticos, sino que ella se construyó a través de estos y viceversa, como imbricación entre liderazgo partidario y organización social en relación permanente hacia el Estado como principal referente de la acción colectiva. De ahí provinieron todas las identidades sociales. Es sólo con la dictadura militar y la represión que desencadenó contra toda la vida y organización política y con las transformaciones estructurales que desarticularon las formas clásicas de acción colectiva y su relación con la política, con lo que le quitaron al Estado su rol dirigente y protector, que esta columna vertebral partido-sociedad civil se quebró (...) Tanto los movimientos sociales, los clásicos y los nuevos, como la clase política, quedaron en parte referidos a sí mismos.

A excepción del Partido Comunista, en este período y producto de la experiencia dictatorial y los cambios ideológicos a nivel global, se produce un aprendizaje político y un cambio de paradigma en los partidos de centro izquierda que resulta en el abandono de la lógica de la participación social entendida como movilización de masas hacia una visión en que la participación es entendida y restringida a la movilización electoral (Oppenheim, 2007; Posner, 2004, 2008; Roberts, 1998; Yoclevzky, 1999). Como señala Paley (2001: 93), luego de 1986 no sólo se abandona la vía violenta para la recuperación democrática, sino también la estrategia de la movilización que es reemplazada por un enfoque donde la protesta y la manifestación social serían altamente criticadas.¹³ En otras palabras y desde entonces, el régimen de Pinochet así como parte importante de la elite opositora al régimen se acoplarían en el rechazo transversal a la movilización social y en la renuncia a la acción colectiva, a la

¹³ Se refiere a palabras de José Joaquín Brunner registradas en un memo de 1986 citado por Puryear (1994: 107)

protesta y a la violencia por ser consideradas herramientas inherentemente antidemocráticas y contra productivas.¹⁴

Una vez pactada y comprometida la vía electoral al interior de los partidos de oposición como salida al régimen dictatorial, la relación de los partidos políticos y la base social se transforma. Como señala Hipsher (1996), un elemento fundamental del pacto político fue el compromiso a la desmovilización de sus partidarios, ya sean los militares en el caso del oficialismo dictatorial, o de los movimientos sociales en el caso de la oposición, para evitar incidentes de polarización y la violencia. Así, los movimientos y la movilización social que se erigiera contra de la dictadura debía transformarse en un movimiento y movilización electoralista - amplio, disperso, basado en individuos y no en colectividades - para el proceso de recuperación y posterior consolidación democrática. Este cambio de lógica implicó el repliegue de la presencia de los partidos políticos en la organización y movilización de la sociedad civil, así como la fractura de su papel de agente y promotor principal de cambios transformadores. Como lo plantea Posner (2004: 66) respecto a la figura y rol como agente movilizador de los partidos en los sectores populares, “los líderes de los partidos disolvieron las grandes organizaciones articuladoras que se habían construido para aglutinar en una base amplia o una oposición unificada a los grupos de oposición en las poblaciones. Sin un liderazgo político global, estos grupos atomizados perdieron su capacidad de influir en la transición democrática”.

En esta línea, Oxhorn (1995) y Posner (2008) señalan que una de las grandes áreas significativas de aprendizaje y de consenso de la clase política en Chile hacia finales de los ochenta giraba en torno a la importancia de la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. En el análisis del período previo al golpe se determinó una debilidad, dependencia y un excesivo control por parte de los partidos políticos hacia las organizaciones sociales. Sectores tanto de derecha como de centro consideraban que si el mundo de la sociedad civil estaba cohesionado y concentrado en torno a una o pocas organizaciones sociales, las posibilidades de que un partido político (teniendo a la izquierda tradicional en mente) tomara su control o pudiera ser objeto de manipulación partidista, se acrecentarían. Rechazaron así el modelo de partido de vanguardia y una relación partidos políticos-sociedad civil basada en el patronazgo y el clientelismo, planteando en paralelo la necesidad de una multiplicidad de organizaciones intermedias, idealmente de carácter apolítico y autónomas de los partidos. Al mismo tiempo y luego de su propia experiencia política, el Partido Socialista concluiría que las presiones populares habían precipitado la caída de Allende

¹⁴ Para Paley (2001), esta decisión también sería fruto de presiones desde Washington cuando secretarios de Estado de este país declaran que el gobierno de Reagan no estaba a favor de la movilización social.

y decidieron, por tanto, mantener distancia entre el partido y las organizaciones, transfiriendo la negociación para el retorno democrático a manos exclusivas de las élites partidistas (Huber *et al.*, 2010).

En la misma lógica de razonamiento político, otra de las lecciones relevantes para los miembros de la futura coalición de gobierno a partir de 1990, fue la necesidad de continuar con el plan de descentralización del Estado puesto en práctica por el régimen de Pinochet. Para la dictadura, un Estado centralizado implicaba un Estado vulnerable al control de un grupo político particular y lo óptimo, por tanto, sería establecer diferentes niveles de decisión y control. Esta visión fue pronto compartida por sectores de la centro-izquierda que estimaron la existencia de diversas instituciones capaces de canalizar y diseminar el conflicto como un elemento positivo para la estabilidad política. Las consecuencias para la sociedad civil serían relevantes en la medida que el *target* de la acción colectiva y las demandas sociales desde entonces dejaría de ser el Estado, para apuntar a diferentes y dispersas instituciones estatales intermedias (Oxhorn, 1995).

Asimismo, durante la década del ochenta se produce un cambio en la correlación de fuerzas políticas de la oposición que tendría repercusiones en el quehacer de los movimientos sociales, especialmente sobre los movimientos populares. El Partido Comunista era hasta entonces una de las fuerzas políticas más importantes, con una extensa red en las bases y la disciplina de sus militantes a su favor, así como la capacidad de generar discursos aglutinadores o identidades colectivas en torno a *lo popular* (Oxhorn, 1995; Paley, 2001; Roberts, 1998; Schneider, 1995; Schuurman y Heer, 1992).¹⁵ Como se adelantara, hacia el fin de la dictadura el partido observa la pérdida de su protagonismo político y su marginación de la alianza líder de la transición que, junto al tardío y dividido apoyo al plebiscito de 1988 y a la coalición opositora, provoca la pérdida de su poder de convocatoria y la confusión entre sus militantes. Habiendo sido agentes movilizadores históricos junto al MIR -liderando las tomas de terreno de los años sesenta y la recomposición del tejido social de trabajadores, estudiantes y organizaciones populares desarticuladas durante los primeros años dictatoriales -, la crisis y decadencia del partido a mediados de los

¹⁵ Para Oxhorn (1995), la identidad de lo popular viene a reemplazar la identidad en torno a la clase trabajadora del período previo a 1973. Luego del golpe militar surgirían las primeras organizaciones autónomas que vendrían a cambiar el estilo de articulación social que existía hasta entonces. En este contexto se produce la emergencia de una identidad colectiva centrada en lo popular y la capacidad de los de los partidos de transformar esta identidad en acción colectiva. El Partido Comunista supo administrar el discurso en torno a esta identidad y tener una fuerte presencia en las organizaciones populares siendo la población La Victoria, por ejemplo y tal como lo afirma este autor, prácticamente un enclave del partido. Al respecto y en base a un encuesta realizada a dirigentes de organizaciones populares, este autor señala que los partidos con mayor presencia e importancia en este sector eran el PC en primer lugar, seguido del PS y el MIR.

ochenta se proyecta y redonda también en su debilitamiento como agente movilizador y, con ello, en la desmovilización de sus bases.¹⁶ Muchos militantes desilusionados o desorientados optaron por el repliegue, no sólo del partido, sino de la política en general como campo de acción.

La desactivación de los movimientos sociales en Chile ha sido atribuida en parte a su reemplazo por la acción política de los partidos que remergieron hacia el final de la dictadura. Sin embargo, el caso chileno indica que el decline de los movimientos sociales también es impactado por el fuerte vínculo entre éstos y los partidos que hicieron crisis y vieron diezmada su acción política durante la redemocratización (Roberts, 1998; Taylor, 1998). Asimismo y tal como señala Oxhorn (1994b), la confusión, y más tarde la subordinación de los movimientos populares, fue resultado de la falta de precedentes de participación autónoma de las organizaciones y la inexperiencia de muchos de sus líderes en la política electoral, al mismo tiempo que el movimiento de protesta en el que dichas organizaciones se involucraran a principios de los ochenta, era ahora considerado un fracaso. Así, y tal como se expusiera en el capítulo anterior, estos procesos son lo que Taylor (1998: 110) ha definido como una “crisis de identidad” en el mundo social al finalizar el régimen dictatorial.

Complementando esta idea, Oxhorn (1995) señala que durante la dictadura se produce una desilusión de los sectores populares con los partidos políticos activado por una lectura de las causas del quiebre democrático en que éstos los culparon directamente por golpe militar de 1973. Asimismo y en base a sus propias experiencias, algunas organizaciones manifestaban que la política partidista podía representar una fuente de cooptación o manipulación que atentaba contra su autonomía. Finalmente, y como se desarrolla más adelante, la desilusión de las organizaciones populares estaría dada por la distancia percibida por los pobladores con los partidos políticos cuando, para ellos, las elites no compartían y ni tendrían conocimientos de las necesidades del sector popular. Al respecto y a partir de entrevistas a dirigentes de movimientos populares, Paley (2001) señala que durante la transición, éstos se sintieron “abandonados por los partidos políticos, desconectados de los movimientos sociales más amplios, y aislados de sus vecinos”.

El conjunto de aprendizajes políticos respecto a la relación que desde entonces debían establecer los partidos políticos con la sociedad civil deriva en una estructura y un vínculo diferente al establecido hasta entonces, marcando el carácter y naturaleza de la transición chilena. Esta nueva matriz socio-política basada en un modelo de

¹⁶ A partir de 1990 el MIR casi no existía, el ala más de izquierda del Partido Socialista estaba dividida y el Partido Comunista, aun excluido de la Concertación, entró al terreno de la elite política alejándose de su base poblacional.

relación electoralista entre los partidos de gobierno y la sociedad civil junto a una estrategia de gobernabilidad *top-down*, cristalizaría en una visión y un quehacer de la Concertación caracterizado, tal como se describe a continuación, por diferentes dispositivos para la desmovilización social. Asimismo y como se ahonda en el capítulo 6, la evolución en las estrategias de gobernabilidad, que fueran elementos para la desmovilización social durante las primeras etapas de la transición, comienzan a favorecer la acción colectiva y una apertura del sistema político que permitió dar pie a la ola de movilizaciones del año 2011.

4.2 Influencia de las estrategias de gobernabilidad en la desmovilización de la sociedad civil

A través de la distancia y autonomía con el mundo social y el control elitista de los procesos políticos, la recién formada Concertación concluye que podría llevar adelante la tesis del gradualismo sin que se repitiera el desborde de las presiones sociales del período pre-golpe militar (Hipsher, 1996; Paley, 2001; Posner, 2008; Silva, 2004; Taylor, 1998). Para Schneider (1995), esto da pie a una de las paradojas de la transición: habiendo catapultado y posibilitado la reemergencia de los partidos políticos en la arena pública y pavimentado con ello el camino hacia la transición democrática, los movimientos sociales, las organizaciones de base y la red de activistas que se hicieran visibles en la década del ochenta, ya no serían necesarios ni visibles en un contexto democrático. Por lo mismo, señala Posner (2008: 76–77), la incidencia de la izquierda renovada es un factor clave para entender la desmovilización social desde finales de la década del ochenta.

Las palabras de un actor clave de la transición bien resumen el proceso del aprendizaje y la visión sobre la movilización social de gran parte de la clase política que lideraría la redemocratización,

nosotros también estuvimos mucho en las calles, mucho, mucho (...) una de las mayores contribuciones al golpe militar de la Democracia Cristiana y de la Izquierda fue la hipermovilización social. Sacamos a todo el mundo a las calles, yo me acuerdo en los años 70, 71 y 72 había una marcha de 400 mil personas a favor de Allende y de 400 mil personas en contra de Salvador Allende. (...) nosotros nos creíamos los reyes de universo, íbamos a hacer unas revoluciones inéditas, fantásticas, la revolución en libertad, después la revolución de Salvador Allende.. ¿qué es lo que nos pasó? que vino el golpe militar y empezamos a aprender un conjunto de cosas que son muy valiosas, el sentido de la tolerancia, del respeto, la idea de la gradualidad, la idea de que la política

no es el lugar para la épica, es el lugar para la negociación (Genaro Arriagada, entrevista Radio Zero, 20 de julio de 2014).

De esta manera, el carácter elitista y los objetivos planteados por la transición, junto a la confusión y desilusión por parte de las bases, organizaciones y militantes, determinarían una nueva relación entre los partidos políticos de la Concertación y la sociedad civil. Por ello, se plantea que la desmovilización definida a finales de los años ochenta habría sido un objetivo buscado por la transición así como un mecanismo puesto en práctica por los partidos de la Concertación para evitar los temidos desequilibrios y asegurar la estabilidad política tras la restauración democrática (Boeninger, 1997; Cleuren, 2007; De la Maza, 2013a; Donoso, 2013a, 2013b; Garcés y Rodríguez, 2004; Garretón, 1993; Garretón y Espinosa, 2000; Hipsher, 1996; Huber *et al.*, 2010; Márquez y Moreno, 2007, 2007; Moreno, 2006; Paley, 2001; Posner, 1999, 2008; Rovira, 2007; Silva, 1999, 2004).

Así y hasta este punto, se han expuesto los principales procesos y eventos socio-políticos que dieron forma a una reflexión, un aprendizaje y a la definición de un paradigma de gobernabilidad a nivel de las elites hacia el final del régimen dictatorial. Estas lecciones y sus conclusiones, junto a la constricciones propias del sistema político al iniciada la década del noventa, devinieron en una visión sobre la relación así como unas líneas de acción específicas desde el Estado hacia la sociedad civil que, como se propone en este capítulo, contribuyeron a una desmovilización social durante los veinte años de gobiernos de la Concertación.

Tal como plantea el enfoque del proceso político revisado en el primer capítulo, los movimientos sociales se hacen más o menos visibles no sólo a partir de las demandas específicas y una identidad que convoca y aglutina a sus participantes en un determinado momento, sino también influidos por los cambios en las configuraciones de poder, los recursos y los elementos institucionales. De esta manera, los movimientos sociales ajustarían y reajustarían sus estrategias movilizadoras y sus recursos a partir del contexto político, esto es, por la apertura o cierre del sistema político, la presencia de posibles aliados o coaliciones y redes de apoyo, la disponibilidad de puntos de acceso efectivos al sistema político, la capacidad y propensión de los Estados hacia la represión, así como el nivel de fragmentación o cohesión de la clase política. La estructura de oportunidades políticas se basa así en el análisis de las coyunturas y las variables externas e institucionales sobre las posibilidades de acción colectiva, considerando este tipo de acción como un proceso constante o un fenómeno cíclico que surge o decae en función justamente de los cambios políticos y las oportunidades externas al movimiento. En esta línea y de

manera más específica para el caso chileno, se plantea que la desactivación social del período 1990-2010 estuvo facilitada y catalizada por un tipo de administración altamente cohesionada, elitista y *top-down*, por mecanismos como la anticipación a las demandas, la cooptación y las operaciones políticas, así como por una retórica del fortalecimiento y la participación ciudadana.

Como señala Hipsher (1996), lo anterior no implica atribuir toda la responsabilidad por la desmovilización a las élites políticas, pues esto supondría que quienes participan en movimientos sociales se insertan ciegamente y sin ninguna comprensión del entorno político en el que operan, lo que ciertamente no es preciso. De igual manera, no se busca afirmar que la acción de las dirigencias políticas sea un factor que explique e influya de manera exhaustiva y decisiva en las posibilidades de (des) movilización social ya que, de producirse un fuerte conflicto y movilización inminente, es probable que ninguna estrategia desarticuladora tendría la capacidad para inhibirlo. Lo que se señala más bien es que la relación entre el Estado y la sociedad civil a partir de 1990 se desplegó en un escenario socio-político particular, de una determinada manera y con ciertas características muy concretas que habrían facilitado un proceso de desactivación social, tema que se busca profundizar y analizar en las siguientes secciones. Asimismo, y tal como lo indican Márquez y Moreno (2007: 278), la relación y las líneas de acción que establecieron los gobiernos de la Concertación con la ciudadanía no deben ser interpretadas como una ‘conspiración de los poderosos’, sino más bien como el resultado de los desafíos de la difícil tarea de la transición y de la forma en que la sociedad civil chilena debió ser incorporada en la gestión de los asuntos públicos y en la definición de la agenda política a partir de 1990.

4.2.1 Despolitización: democracia de las elites, ascenso tecnocrático y política instrumental

Tal como se adelantara, la apertura de oportunidades políticas apoya el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales. Asimismo y como señala Hipsher (1996), parece lógico suponer que una contracción de las oportunidades conduciría a la disminución en la posibilidades de un movimiento para emerger o desenvolverse. En este sentido, la reducción de oportunidades políticas para la visibilización y emergencia de movilización social en la redemocratización chilena habría estado determinada por las condiciones políticas y las relaciones de poder del período, marcados por la institucionalización de la negociación inter-elites, las restricciones de la democracia de la transición y por una instrumentalización de la política.

Para el enfoque del proceso político, los movimientos sociales serían propensos a movilizarse en protesta cuando las instituciones políticas están divididas, débiles y

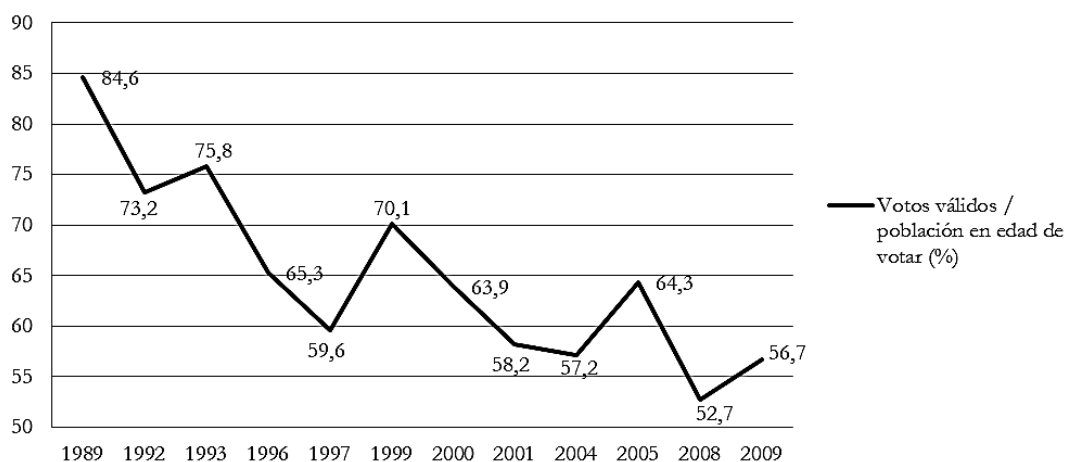
vulnerables a las demandas o cuando los grupos tienen suficientes recursos políticos y apoyo para presionar por sus exigencias. En el Chile de los noventa, al contrario, y como resultado de las condiciones institucionales que produjeron el pacto de transición y la evolución de los partidos políticos en los años ochenta, hacia finales de la dictadura se habría generado una “monopolización del espacio político” (Roberts, 1998: 196) por parte de las elites partidistas y la posterior consolidación de la Concertación como un bloque sólido y profesional difícil de vulnerar. Para Rovira (2007: 356), los pactos de la transición generaron la institucionalización de las negociaciones a puertas cerradas como herramienta efectiva para la resolución de las problemáticas nacionales. Como señala el autor, “las negociaciones inter-elites que posibilitaron el cambio de régimen político incluyeron componentes explícitos e implícitos en relación con un tipo de orden social que coarta la expansión de la autodeterminación colectiva de la sociedad”. Una de las consecuencias de esta institucionalización de pactos de elite habría sido el gradual establecimiento de un tipo de democracia fuertemente dirigida desde arriba y una forma de conducción social cerrada, donde se restringe la participación popular y se aleja a los ciudadanos de los lugares de decisión.

Una vez recuperada la democracia, la Concertación podría haber optado por un tipo de gobernabilidad social contra-hegemónica, es decir, agenciar movilización y protesta social como una manera de presionar a los actores estratégicos dominantes como las fuerzas militares y la derecha. De esta manera, podría haber enfrentado el desafío de impulsar reformas o avanzar en su agenda programática, afrontar la restricciones impuestas por la Constitución de 1980, la minoría en el Congreso o incluso redactar un nuevo documento constitucional democrático. Sin embargo y dadas las conclusiones respecto al pasado, una sociedad civil activa y organizada en contra de los enclaves y los legados autoritarios habría tensionado y polarizado fuertemente el clima político. Por ello, la nueva alianza dio prioridad a la consolidación democrática, a la estabilidad macro económica y buscó evitar presiones populares o cualquier expresión de confrontación y conflicto, limitando con ello las oportunidades para la movilización de manera considerable. Como señala Silva (2004), los debates políticos durante la redemocratización se dieron a nivel casi exclusivo de la clase política en desmedro de los niveles societales inferiores. Para Oppenheim (2007), el foco en la política formal e institucional, reforzado por el estilo concertacionista de negociación con los actores políticos y económicos, significó que la decisión política se diera casi exclusivamente en dicho nivel en un contexto de desmovilización social generalizada. Con el tiempo, señala el autor, este estilo de gobernabilidad devino en una falta de conexión entre las organizaciones de base y las elites partidistas y de

gobierno. Así y dado el impacto de la dictadura, su estrategia de despolitización y el rol dominante ejercido por los partidos políticos en la transición, hacia finales de la década del ochenta se define una brecha entre el mundo político y la arena de las organizaciones sociales. Desde entonces, se popularizó el concepto “clase política” en oposición a la sociedad civil, se consolida la idea del poder ejercido por una minoría de manera autónoma (dirigentes políticos y cuadros tecnocráticos) y la separación entre gobernantes y gobernados (Vergara, 2003: 10).

Esta distancia entre el mundo social y político se comienza a hacer evidente en los años noventa a partir de diferentes tendencias empíricas tales como la trayectoria descendente en la participación en los procesos electorarios (ver figura 4.1) y, entre aquellos participantes, una curva ascendente en el número de abstenciones, votos nulos y blancos luego de recuperada la democracia (PNUD, 1998). Al respecto, en la encuesta CEP de diciembre 1997 - enero 1998 se consultó sobre la razón para no votar a aquellos que no ejercían este derecho, argumentando prioritariamente “porque en general los políticos no se hacen cargo de los problemas de la gente” (44,8%) y “porque la política no me interesa: me interesan otras cosas” (42,7%) (Centro de Estudios Públicos, 1998).

Figura 4.1. Participación electoral en Chile, 1989-2009.

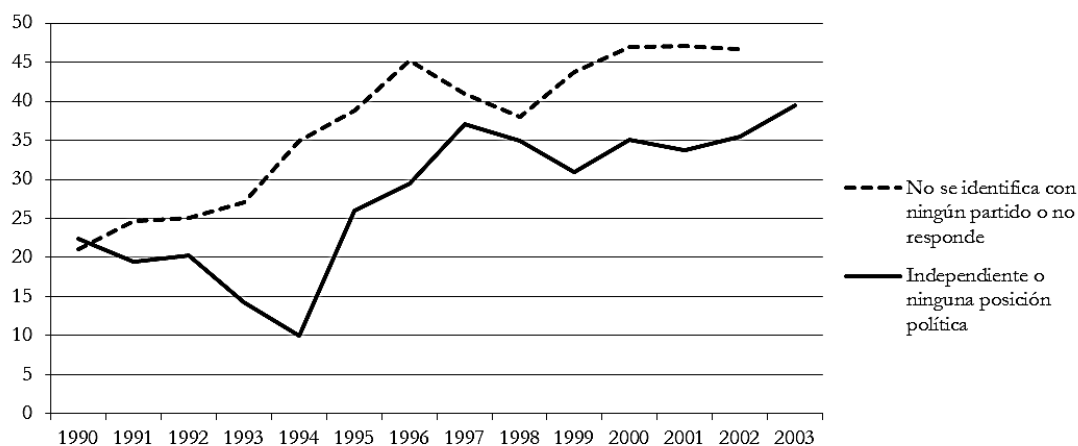


Fuente: Elaborado a partir de datos de Contreras y Navia (2013).

Asimismo, la no identificación con ningún partido político o la tendencia a declararse independiente políticamente (en desmedro de las opciones izquierda o derecha) aumenta sostenidamente (figura 4. 2), mientras los partidos políticos y diputados y senadores muestran el menor nivel de confianza por parte de la ciudadanía entre las

instituciones chilenas. Según las encuestas LAPOP del año 2006, un 53,4% de los chilenos piensa que en Chile los partidos políticos son grupos cerrados a los que es difícil tener acceso, mientras los datos del mismo estudio del año 2008, señalan que un 42,2% considera que los partidos políticos chilenos no representan nada o muy poco a sus votantes, y un 50,3% estima que los partidos políticos no escuchan nada o muy poco a la gente.¹⁷

Figura 4.2. Identificación con partidos políticos y auto-posicionamiento político, 1990-2003.



Fuente: Elaborado a partir de datos de Posner (2008).

Como es evidente, estas tendencias no pueden ser atribuidas únicamente a las estrategias de gobernabilidad concertacionistas. Lo cierto y lo que se busca aquí es presentar los datos concretos respecto a la participación, involucramiento y percepción de la clase política por parte de la ciudadanía una vez que la democracia de corte elitista o de visión schumpeteriana es puesta en práctica en el país, y la manera en que dichas tendencias coinciden con la escisión del mundo social con el mundo político.¹⁸ Más aun, la responsabilidad por esta brecha, señala Francisco Estévez, ex director del Instituto Nacional de la Juventud y de la División de Organizaciones Sociales del Estado,¹⁹ no recae exclusivamente en la arena política:

¹⁷ En base a los porcentajes acumulados de las opciones 1 (nada), 2 y 3 de la escala 1 (nada) - 6 (mucho).

¹⁸ La explicación a esta tendencia a la desafección política es en realidad lo que se intenta resolver en esta investigación y pasa más bien por la convergencia de los factores desarrollados a lo largo del estudio.

¹⁹ Director de la DOS durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2000-2006) y Director del Instituto Nacional de la Juventud durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994).

Los movimientos sociales o la movilización social le delegó muy fácilmente la responsabilidad de la dirección del desarrollo del país al Estado, porque hay una cosa cultural y faltó una discusión y pensar desde el comienzo [al retorno democrático] de cuál iba a ser el rol de la sociedad civil en el desarrollo, y esa es una pregunta fundamental, una pregunta estratégica y la sociedad civil fue a mi juicio minimizada, postergada, se convirtió en una prestadora de servicios y no participó de las decisiones estratégicas, esa conversación estuvo situada en otra parte: en el mundo empresarial y en el mundo político (comunicación personal, 25 de noviembre de 2014).

Por otra parte, la democracia a partir de 1990 estuvo anclada al legado del régimen militar lo que constituyó una serie de restricciones para el quehacer de la sociedad civil. Como lo señalan diversos autores, un crecimiento económico sostenido durante los últimos años del régimen militar junto a un apoyo de prácticamente la mitad de la población al General Pinochet en el plebiscito de 1988, fueron fuertes herencias de la dictadura y frenaron la puesta en marcha de grandes planes de ajuste económico y político. Asimismo, estas restricciones estuvieron en la aceptación del marco institucional definido por la Constitución de 1980, redactada para resolver y evitar los problemas de un pasado reciente politizado así como para establecer los pilares del futuro institucional: un presidencialismo fiscalizado, una des-partidización y un inmovilismo institucional (Fuentes, 2010). Estos objetivos se lograron mediante la reducción del poder del Congreso mientras se aumentó el de la figura del presidente aunque contrarrestado por el poder de las Fuerzas Armadas. Según Pastor (2004), el documento fue creado generar una democracia “protegida” a través de los llamados enclaves autoritarios como una serie de amarres que establecieron limitaciones considerables para las reformas en las áreas de la economía, la salud, la educación y, de igual forma, de la participación social (Donoso y Gómez Bruera, 2014; Drake y Jaksic, 1999; Fuentes, 2012; Garretón, 2007; 1993; Portales, 2000).²⁰ La misión de la institucionalidad política así como la noción de democracia y participación estarían desde entonces enraizadas a una cosmovisión en que dicha institucionalidad era definida como,

²⁰ Entre los enclaves autoritarios más importantes estuvieron (i) La falta de control civil y la imposibilidad de eliminar (inamovilidad) de los comandantes militares, hecho que permitió a Pinochet continuar como Comandante del Ejército, incluso después del fin de la dictadura en 1990, (ii) La creación del Consejo de Seguridad Nacional, así como el Tribunal Constitucional como instituciones semi-autónomas con autoridad para tomar decisiones vinculantes sobre leyes, decretos presidenciales, reformas constitucionales e iniciativas políticas, (iii) El mecanismo de senadores vitalicios y designados y la designación de autoridades locales (iv) El sistema binominal establecido para favorecer a los candidatos de las coaliciones con el fin de evitar que el sistema multipartidista, así como reducir y limitar la diversidad de ideologías de los tres bloques políticos tradicionales, y (v) Las leyes orgánicas constitucionales, que requieren de quórum especiales para su modificación (Pastor, 2004).

el medio más eficaz para constituir en Chile una sociedad tecnificada, en que la palabra de los que saben prevalezca por sobre las consignas, y de una sociedad de verdadera participación, en que la voz del pueblo organizado emerja sin desfiguraciones partidistas y sin mezquindades que la empobrezcan. Nuestra democracia será entonces orgánica, social y de participación (Gobierno de Chile, 1974: 9).

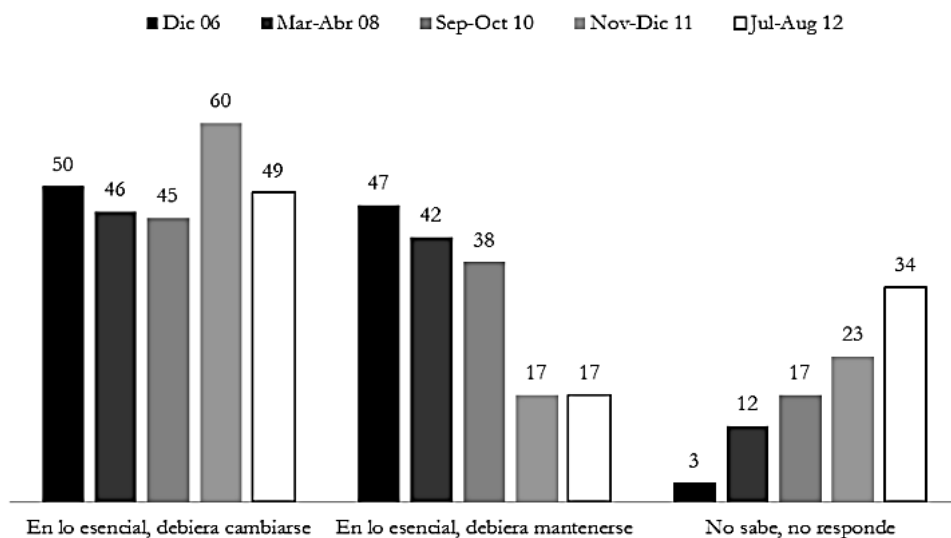
En términos de la sociedad civil y sus potencialidades, tanto el documento constitucional como el sistema electoral implicaban trabas para su desarrollo. Para ciertos autores, la contradicción entre la participación y una Constitución escrita bajo un régimen dictatorial está en que ésta última fue el resultado directo de una filosofía política que buscaba una democracia protegida y se basada en una profunda desconfianza respecto de la capacidad de la población de autodeterminarse políticamente (Couso y Coddou, 2010). La Constitución de Pinochet fue diseñada así para evitar cualquier forma de participación política dado que una ciudadanía activa fue percibida como una amenaza para la gobernabilidad (Lovera, 2010). Según Garretón y Garretón (2010), el chileno es el único caso en el mundo en que una constitución aprobada bajo una dictadura militar sigue guiando un régimen democrático. Atria (2010) señala incluso que la Constitución no es sólo un texto, sino una decisión fundamental sobre la forma y manera de existencia de una comunidad política, agregando que el documento constitucional de 1980 fracasa en su intento democrático pues no fue escrita con fines pluralistas, democráticos ni con el fin de propiciar o potenciar una participación social transversal.

Como señala Siavelis (2009b), los enclaves de la transición originados en la dictadura continuaron operando durante la redemocratización constituyendo instituciones, creencias y prácticas difíciles de desarraigar. Dichos enclaves fueron, por una parte, funcionales y contribuyeron al éxito del modelo de la transición democrática, pero por otra, interactuaron y se combinaron para ofrecer fuertes limitaciones en la representación y *accountability*. Para el autor, el modelo de la transición concertacionista se basó en un complejo acuerdo de repartición que fue incrementando el poder de nominación de la elite y de un sistema electoral que proporcionó fuertes incentivos para la formación de coaliciones, donde las preferencias de los ciudadanos fueron perdiendo relevancia. En otras palabras, el marco constitucional promulgado por Pinochet en 1980, no solamente impuso restricciones en el plano de la institucionalidad política y la democracia, sino que también estableció límites estrictos en cuanto a la autonomía, a la estructuración de los

movimientos sociales y a los mecanismos de participación con el fin de reducir las presiones sociales, los conflictos y la movilización (De la Maza, 2010a).²¹

Luego de veinte años desde su establecimiento, en el año 2000 un 65,1% de los ciudadanos declaraba tener poca o ninguna confianza en la Constitución de 1980 (PNUD, 2000: 295), mientras hacia finales de la era concertacionista quienes pensaban que el sistema electoral binominal - otro de los legados dictatoriales - debía mantenerse, comienza a ser la tendencia minoritaria (figura 4.3).

Figura 4.3. Opinión respecto al sistema electoral binominal, 2006-2012.



Fuente: Centro de Estudios Públicos (2012: 17).

Para Posner (2008), las reformas electorales impuestas bajo el régimen militar complementadas con el proceso de renovación de los partidos de centro-izquierda fueron creando desincentivos para la participación popular y contribuyeron a un clima de desencanto con los partidos y con las instituciones políticas.

Como señala Fuentes (2012), las estrategias de gobernabilidad así como los mecanismos antes descritos para garantizar el fortalecimiento de las minorías en un sistema de balances y contrabalances, fueron justamente diseñados para evitar la politización. Para Silva (2004), el régimen de Pinochet logró instaurar “las políticas de la anti-política” donde, luego de 17 años de régimen represivo, campaña ideológica y

²¹ Para un análisis detallado de la manera en que la Constitución de 1980 limitó las posibilidades y debilitó el desarrollo político durante el período 1990-2010 ver Huneus (2014).

los efectos de la modernización neoliberal, esta arena quedó relegada a anti-patriotas, anarquistas y corruptos. Esta tendencia, sin embargo, no sería revertida al retorno democrático donde “una de las características más llamativas de la nueva democracia chilena ha sido la creciente despolitización de la sociedad civil y la ausencia de grandes debates políticos a nivel nacional” (Silva, 2004: 64). Los líderes de los partidos políticos de centro-izquierda concluyeron que la polarización y la sobre ideologización política habían sido las causas del quiebre democrático en el pasado y que la solución y la manera de asegurar la estabilidad democrática pasaba, por tanto, por un Estado y una sociedad despolitizadas. Como resultado y tal como se adelantara en la sección anterior, los gobiernos de la Concertación desplegaron la estrategia erigida hacia fines de los ochenta en que renunciaban a su rol tradicional de organización y movilización de la sociedad civil, para privilegiar un enfoque de desmovilización y despolitización, limitando con ello las posibilidades de participación de la sociedad civil. Como señala Gonzalo de la Maza, académico experto en movimientos sociales y gestión pública participativa, en las posibilidades de movilización de los actores que respondían a la matriz clásica chilena, la variable política²² juega un factor decisivo para entender su desmovilización durante la redemocratización:

Lo que hacía fuerte a la política y al movimiento social en Chile en el pasado es lo mismo que lo hizo débil después: el vínculo. Los dirigentes sociales pertenecían a los partidos políticos, tenían llegada, no eran señores de club, era gente que estaba metida en los sindicatos, que conocían, tenían redes (...) con contención, con subordinación, con clientelismo, etc., pero con un grado importantísimo y una capacidad de saber organizar, eso hacía muy fuerte la dinámica social. Cuando cambió el contexto, vuelven los partidos, pero a otro estado, un estado “impotente”, un sistema político que ya no media y esto se traduce en subordinación y desmovilización (...) los partidos prácticamente desaparecieron del imaginario de las personas, cuando antes la gente se definía a sí misma en función de la ideología política, las reglas del nuevo juego impiden que así sea (comunicación personal, 5 de noviembre de 2014).

La crítica al ideologismo y el temor a la política como proyecto transmutó así en un pragmatismo, instrumentalismo, un minimalismo ideológico y en la patologización del conflicto (Garretón, 1993). Junto a este escenario de vaciamiento político, los objetivos netamente económicos, el fortalecimiento de las posiciones tecnócratas y una ingeniería institucional basada en el aislamiento de la clase política, dominaron el

²² La variable psicológica es analizada en el capítulo anterior mientras la variable socio-económica en abordada en el siguiente capítulo.

paradigma de gobernabilidad democrática en Chile y habrían contribuido con la despolitización, desmovilización o la desarticulación de las respuestas colectivas desde la ciudadanía (Roberts, 1998; Silva, 1997, 2008).

Como indica Silva (1997: 73), “las dictaduras militares inauguradas en los 70 asestaron un fuerte golpe (a veces mortal, como en el caso de Chile) a las políticas populistas en muchos países de América Latina, basadas en relaciones clientelares entre el Estado y la sociedad civil”. Lo anterior redundó en que la nueva realidad tecnocrática y neoliberal fuera aceptada por importantes segmentos de la sociedad, conduciendo al abandono definitivo de la política en su versión tradicional. Para Huneeus (2014) uno de los factores que incidió mayormente en el debilitamiento del desarrollo político fue el paradigma de gobernabilidad que dominó la redemocratización que - siguiendo las recomendaciones de Boeninger - dependió fundamentalmente, fue definido en base y priorizó el desempeño económico en desmedro del fortalecimientos de los partidos o de una cultura de participación política. Es desde esa visión que se entiende la emergencia de la tecnocracia, de la cultura de los expertos, de la eficiencia y la efectividad, visión es que probada, comprobada y consolidada a partir de los años noventa en Chile.

4.2.2 Desmovilización como anticipación, cooptación y operaciones políticas

Como se expusiera anteriormente, las trágicas experiencias del pasado cristalizarían en una visión y un quehacer de la Concertación cuyo objetivo era asegurar la gobernabilidad democrática iniciada la década del noventa. Dicho quehacer se habría caracterizado por la anticipación y neutralización de los posibles focos de conflicto y demandas sociales, por un fuerte proceso de institucionalización de los movimientos y organizaciones, y por la cooptación y las operaciones políticas para contener la presión social. Con ello, se habría buscado limitar la movilización social o canalizarla a través de conductos institucionales, constituyéndose en un obstáculo importante para la auto-constitución de acción colectiva luego de finalizado el régimen militar (Oxhorn, 1995).

Una de las primeras medidas democratizadoras de los gobiernos de la transición resultó ser, en paralelo, una forma de anticipación de las demandas ciudadanas que ya habían sido o que podían constituirse en fuentes de conflicto, movilización, presión social y desestabilización de la nueva democracia (De la Maza, 2010a; Foweraker, 2001). Como lo describe Taylor (1998), los denominados nuevos movimientos sociales surgidos durante la dictadura militar - especialmente los de defensa de derechos humanos, de mujeres y de pobladores - vinieron a visibilizar y poner en

primera línea y de una manera ofensiva y proactiva a segmentos importantes de la sociedad civil en torno a nuevas demandas y derechos en la arena política. En la visión del Estado sobre estas nuevas formas de movilización se las definió más bien como una de las problemáticas heredadas del régimen militar. El primer presidente de la era concertacionista se refiere a la manera en que dichas demandas fueron enfrentadas:

Yo pensaba con fundamentos que al día siguiente o la noche en que asumía el mando, se iban a iniciar tomas de terrenos eriazos en Santiago, Valparaíso, Concepción. (...) Había unas organizaciones de pobladores sin casa, todas capitaneadas por dirigentes comunistas, que tenían coordinado un programa. Y se lo confesaron a Alberto Etchegaray, quien, inmediatamente de nombrado, en enero, comenzó a tomar contacto con el mundo poblacional. Y él les dijo que se calmaran: vamos a hacer tales y tales cosas, y con ustedes. Pero yo, de todas maneras, tenía mis miedos (Serrano y Cavallo, 2006, citado en Mella (2014: 36)).

Así, junto a un espíritu democratizador, a comienzos de 1990 estas demandas o potenciales focos de conflicto fueron canalizados a través de la creación de instituciones e instancias gubernamentales como el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), la División de Organizaciones Sociales (DOS), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la comisión de redacción del Informe Rettig para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Para Taylor (1998), esta institucionalización generó confusión y una crisis de identidad de los movimientos sociales con foco en estas temáticas así como una invisibilización y un proceso introspectivo de los mismos. La relocalización de estas causas, desde el mundo social hacia el mundo político, habría tenido un efecto limitante sobre los movimientos sociales en la medida que las demandas corresponderían desde entonces a asuntos estatales y no al quehacer de los propios movimientos. Por otra parte, los movimientos sociales urbanos habrían sido institucionalizados en cierta medida a través de la creación de la División de Organizaciones Sociales, lo que facilitó su transformación en organizaciones de auto-ayuda sin mayor participación en el proceso de toma de decisiones del gobierno (Hipsher, 1998; Oxhorn, 1994b). Para Tarrow (2011: 115), la institucionalización de los movimientos sociales frecuentemente resulta en un “desplazamiento de los objetivos” con la supresión de las metas más radicales planteadas originalmente por un movimiento, hacia unas más moderadas.

Junto a la anticipación de posibles focos de conflicto y la institucionalización de los movimientos sociales, hacia el fin de dictadura se habría observado la cooptación y la

marcha de líderes desde el mundo social hacia las estructuras del Estado. Como sugiere Mella (2014: 37), en una estrategia de integración selectiva, el gobierno de Aylwin incorporó sólo a aquellas demandas que fueron afines a la transición, legitimando de esta manera a ciertos actores previamente articulados y provistos de cierta capacidad de presión. En la medida que la validación gubernamental de intereses definía la existencia política de dichos sujetos, la integración de los mismos suponía, por tanto, una cierta cooptación ‘desde arriba’, una fuerza desmovilizadora y el despliegue de mecanismos clientelares. El repliegue de los dirigentes de organizaciones y movimientos sociales y su incorporación a los nuevos ministerios afectó gravemente la capacidad de la sociedad civil para regenerar liderazgos y recursos humanos así como formular sus objetivos y mantenerse en el tiempo (Donoso y Gómez Bruera, 2014; Silva, 2004). Como lo resumen las palabras de un dirigente sindical entrevistado por Huber *et al.*,

En la década de 1980 Chile estaba lleno de grupos fuertes y organizados... A partir de 1990, sin embargo, todo eso cambió porque la Concertación trabajó para desmovilizar y desarticular a estos grupos. Este proceso de desmovilización se logró al llevar la gente al aparato público, pero también cuando los partidos políticos cortaron todas las relaciones con los grupos sociales y no ayudaron a dichas organizaciones a extender su poder (Huber *et al.*, 2010: 95).

De igual forma y para Vergara (2003), a partir de los años noventa se produce una externalización de las funciones estatales en organizaciones de la sociedad civil a través de la licitación pública. Esto implicó que mantenían su carácter de no gubernativas, pero dependían del Estado “no sólo económicamente, sino que su funcionamiento se rige por las normas, objetivos y criterios determinados por éste. Carecen por ello de la autonomía mínima de una organización que pertenezca propiamente a la sociedad civil” (Vergara, 2003: 12). En esta perspectiva, Francis Valverde, integrante del directorio de la Asociación Chilena de ONGs ACCION, señala que la influencia de los gobiernos de la transición democrática sobre la desmovilización se vio favorecida por

La cooptación de todos los cuadros de las ONGs para el Estado, el Estado no tenía cuadros, estaba toda la dictadura inserta, y se genera esta migración masiva de cuadros de derechos humanos, de las organizaciones comunitarias y de profesionales hacia el Estado, en diferentes áreas, mujeres.. en mujeres es muy evidente porque se coopta todo el movimiento de mujeres y se mete en el Servicio Nacional de la Mujer, eso es muy notorio.

Pero se dio en educación, en el área de economía, iban todas para allá (comunicación personal, 7 de noviembre de 2014).

Para Mella (2014), asimismo, la cooptación no fue sólo a través de la incorporación de dirigentes y la institucionalización de las demandas, sino que también hubo una cooptación emocional o el uso de la persuasión frente a grupos disfuncionales o potencialmente contenciosos a través de mensajes como el pronunciado por el Presidente Aylwin en el estadio nacional al asumir su mandato: “Bien sé que son muchos los chilenos maltratados y postergados durante estos largos años, que están cansados de esperar y visualizan en el retorno a la democracia la pronta solución de sus problemas, muchas veces angustiosos”, continuando más adelante “si han soportado tantos años de espera forzada, les pido ahora un poco de paciencia voluntaria y racional” (Mella, 2014: 37). Francis Valverde coincide en la invitación a la moderación en la relación que estableciera el Gobierno a principios de los noventa con el mundo de las ONGs: “cuando hablábamos con los ministerios te decían eso, dennos tiempo, esto no es rápido y es imprescindible que sea de esta manera”.²³

Finalmente, una vez recuperada la democracia se habría observado la actuación de operadores y operaciones políticas desarticuladoras, lo que podría haber afectado de igual manera a una eventual emergencia de acción colectiva. Siguiendo la línea de las prácticas de los años ochenta,²⁴ los partidos de la Concertación habrían desplegado una estrategia para desmovilizar y generar un escenario político estable a través de una fuerte disciplina y control de sus militantes. Los partidos de gobierno contaban con una influencia importante en organizaciones clave como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y, utilizando esta presencia, se instó a la moderación de las demandas sectoriales y a limitar su influencia sobre las autoridades (Weyland, 1999).

Pese a la distancia que se erige entre los partidos políticos y la sociedad civil a partir de los años noventa, hasta el 2010 aún existía una estrecha relación entre los gobiernos de la Concertación y los líderes sociales a través no sólo de operadores políticos sino

²³ En comunicación personal, 7 de noviembre de 2014.

²⁴ Como ejemplo de estas prácticas durante la dictadura, Oxhorn (1994b, 1995) y Roberts (1998) plantean lo ocurrido con el Congreso Unitario de Trabajadores creado en 1986 y cuyo fin era coordinar y unificar una serie de líderes de organizaciones populares. La relativa libertad de acción con que esta organización operaba sería restringida a medida que se afianzó la estrategia electoralista para impugnar a Pinochet. Las tensiones entre el movimiento popular emergente y los partidos políticos alcanzaron su clímax en junio de 1988, cuando los líderes del CUP organizaron una segunda marcha contra el hambre, contrariando y desobedeciendo las instrucciones de los partidos políticos. Desde entonces, la estrategia partidista fue poner a líderes políticos leales a sus partidos en los lugares de liderazgo de la CUP y la exclusión sistemática de la gran mayoría de los pobladores que no eran miembros de ningún partido político. La acción colectiva de la CUP quedó así reducida y dominada cada vez más por los partidos políticos hasta que desapareciera a finales de los ochenta.

de los mismos dirigentes, muchos de los cuales seguían siendo parte de los partidos socialistas o demócratacristianos. Esto permitió alinear las cúpulas de los partidos con sus dirigentes en las organizaciones de base que estuvieran a la vanguardia de las protestas populares durante los años ochenta. Asimismo, a principios de los noventa, por ejemplo, los líderes de la FECH, de la FEUC y de la CUT eran militantes del partido Demócrata Cristiano, lo que facilitó el diálogo entre el gobierno y estas y otras organizaciones. Como describe Luis Meilán, militante del partido socialista y dirigente de los pescadores artesanales de la ciudad de Aysén, durante la década del noventa: “para nosotros era muy importante dialogar, durante el gobierno de Frei nosotros quisimos movilizarnos por las bajas cuotas de pesca, pero lo arreglamos, lo arreglamos *altiro*, antes de cualquier cosa, no fue necesario movilizarse (...) teníamos muy buen diálogo con el gobierno”.²⁵ De igual forma, Camilo Ballesteros, dirigente y actor del movimiento estudiantil del año 2006 indica que “con la Concertación había una relación de mucha confianza, no en el sentido del hacerles caso, sino que se entendía que si ellos te decían algo era porque era así, entonces existía esa relación”.²⁶ A principio de los años noventa, Enzo Pistacchio ex Director de la División de Organizaciones Sociales, coincide en que en el fenómeno de la desmovilización influyeron los estrechos lazos de los primeros gobiernos concertacionistas con el mundo social,

el movimiento más organizado y con mayor conducción y potencia era la CUT. En ese tiempo estaba de Ministro del Trabajo René Cortázar que había trabajado por mucho tiempo con el movimiento sindical durante la dictadura, conocía a todos los dirigentes y ahí hubo un primer esbozo de reforma laboral donde participaron los dirigentes (...) en la conducción económica estaba Foxley [Alejandro] que también, era un tipo que tenía mucha llegada con el mundo sindical, y el resto de la sociedad civil no estaba organizada (...) la CUT celebró el primero de mayo muy en la dinámica del gobierno, de cooperar y fortalecer las instituciones democráticas (comunicación personal, 6 de noviembre de 2014).

Así, la tendencia a la moderación y a la auto-limitación por parte de ciertas organizaciones y movimientos impulsada por un compromiso con la democracia - como se presentó en el tercer capítulo -, se vio también condicionada y potenciada por la estrecha relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales. La marcha organizada por la CUT en julio de 1994 representa, para Roberts (1998), un claro ejemplo de una operación política de la Concertación para disolver focos de conflicto

²⁵ En comunicación personal, 20 de noviembre de 2014.

²⁶ En comunicación personal, 5 de diciembre de 2014.

dirigidos hacia el Estado. La protesta se alzó en torno al derecho a la negociación colectiva y la expansión de la seguridad y la indemnización laboral, todas demandas que debían ser indudablemente dirigidas hacia el Gobierno. Sin embargo y mediante los vínculos y presión de operadores políticos de la Concertación, la CUT declaró que las protestas estaban enfocadas directamente contra el capitalismo más que hacia la flamante administración de Eduardo Frei, dispersando y fragmentado la demanda original. Así y para este autor, la arena política del Chile de los noventa estuvo dominada por políticos profesionales que controlaron el proceso de decisión a través de la negociación con las elites económicas y con los representantes del mundo del trabajo. De esta forma, se plantea que la Concertación, especialmente los durante sus primeras administraciones, habría desplegado una estrategia desmovilizadora deliberada para generar señales de prudencia para la tranquilidad en las cúpulas militares y la derecha económica, y enfrentar los desafíos de la transición (Guzmán-Concha, 2014; Hipsher, 1996; Oxhorn, 1994b, 1995; Roberts, 1998).

Esta última tesis es discutida por ciertos actores quienes señalan que por parte de los gobiernos concertacionistas no existieron tales acciones o instrucciones explícitas para la desmovilización de los diferentes movimientos sociales. Según lo planteado por los ex directores de la División de Organizaciones Sociales Enzo Pistacchio (comunicación personal, 6 de noviembre de 2014) y Francisco Estévez (comunicación personal, 25 de noviembre de 2014) de los gobiernos de Aylwin y Bachelet respectivamente, en su experiencia como figuras de Estado nunca recibieron instrucciones tendientes a desmovilizar a los movimientos sociales del período, sugiriendo además que de haber existido un movimiento social fuerte, no habría sido posible detenerlo a través de políticas u operaciones estatales. Otras voces, en tanto, como la de Iván Mlynarz, dirigente de la FECH entre 1998 y 2001, señalan que,

El año 97 el quiebre de la CONFECH es un quiebre producido desde el ministerio para debilitar y terminar matando las movilizaciones (...) los operadores del ministerio actuaban directamente a través de las presidencias que tenían en algunos lugares y la mayoría de esos pasaron a tener cargos después en el gobierno (...) en el movimiento estudiantil había una oficina, que además después se fue perfeccionando en el tiempo, donde lo que tenían eran operadores, tenían un PPD, un socialista y un demócrata cristiano, la estrategia era producir quiebre (...) y el gran problema que hubo durante todo el período que nos tocó a nosotros fue lograr unidad del movimiento estudiantil (comunicación personal, 16 de diciembre de 2014).²⁷

²⁷ El ex dirigente se refiere a las movilizaciones estudiantiles del año 1997 en el contexto de la discusión del proyecto de la ley marco de la educación superior. Dicho debate generó importantes movilizaciones

Asimismo y como indica Gonzalo de la Maza, “le doy importancia a la gestión, a las operaciones políticas que se hicieron para eso [para desmovilizar], pero no lo veo de una manera conspirativa (...) las reglas en la cuales se dio la transición hicieron que el conjunto de los actores que participaban de eso no podían meterse en el tema de la movilización”.²⁸ Al respecto Rodrigo Rocco dirigente de la FECH 1996-1997, complementa,

La transición chilena fue una transición pactada, conservadora desde el punto de vista político y social y yo creo que hubo una cierta intencionalidad [por desmovilizar a la sociedad civil], pero que encontró también un espacio, no es que habían unos *gallos* con lentes oscuros, operadores moviendo la cuestión, es que también había mucha dificultad para armar algo (comunicación personal, 13 de enero de 2015).

De esta manera, no se buscar endosar o atribuir la responsabilidad por la desmovilización exclusivamente a las élites ni afirmar que la acción de las dirigencias políticas sea un factor que explique e influya de manera exhaustiva y decisiva en las posibilidades de (des) movilización social. Lo que se plantea más bien es que la relación entre el Estado y la sociedad civil a partir de 1990 se desplegó en un escenario socio-político específico y con un tipo de procesos hasta aquí descritos que habrían facilitado y complementado una desactivación social.

4.2.3 El discurso del protagonismo ciudadano y las políticas públicas participativas como factor desmovilizador

La forma en que la variable política o las estrategias *top-down* influyeron sobre el paso de movilización a una desmovilización o movilización latente también pasó por el proceso de descentralización iniciando durante el régimen militar, complementado con una retórica de la participación, y la elaboración de políticas públicas con foco en fortalecimiento ciudadano desplegadas hacia el retorno democrático. Estás mediadas, se afirma, no lograron redundar en un real empoderamiento o en una influencia de la sociedad civil en términos de la esfera pública, sino, al contrario, permitieron limitar su

universitarias en contra de la propuesta del gobierno, manifestaciones que finalizan cuando Rodrigo Peñailillo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío-Bío y primer Ministro del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Michelle Bachelet II, llega a un acuerdo con el gobierno. Este acuerdo es desconocido por Rodrigo Roco, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en aquel año, provocando el quiebre de la CONFECH al que se refiere Mlynarz.

²⁸ En comunicación personal, 5 de noviembre de 2014.

capacidad de incidencia en los debates nacionales, generar competitividad en el mundo social y contribuir a la consolidación del proceso de despolitización.

Primeramente y en el centro de las medidas implantadas durante el régimen dictatorial e inalteradas durante la redemocratización estuvo la estrategia de descentralización que, descomprimiendo y transfiriendo responsabilidades estatales hacia los municipios y, con ello, hacia los propios individuos, auxilió la dinámica de atomización y fragmentación social observada a partir de 1990. Para Boisier (2004), la descentralización societal representa la aplicación en la práctica del principio político de subsidiaridad, de acuerdo al cual cada organización social es competente y responsable de intervenir sobre su propio ámbito funcional o territorial, con la transferencia ‘hacia arriba’ sólo de aquello que el bien común, la tecnología o el mercado pueda establecer como responsabilidad de un ente mayor como el Estado. Para Larrañaga (1995), la descentralización fue clave en la política dictatorial porque, por una parte, resultó funcional a una mayor eficiencia económica, tanto en la esfera productiva con en la minimización de los costos de los productos, como en el ámbito asignativo, con la provisión de servicios de acuerdo a las preferencias de los demandantes. En otras palabras, la descentralización, proyectando en la esfera estatal una lógica de mercado, permitiría asistir de forma diferenciada a las necesidades y preferencias de las comunidades, acercar a demandantes y oferentes a nivel local, promover la responsabilidad fiscal a través de la participación social en el financiamiento de la labor pública, e introducir competencia en los bienes y servicios provistos por los gobiernos locales.

Por otra parte, la descentralización consolidada a partir de 1990 sería consistente con la profundización de la democracia en la medida que acercaría a las personas a los niveles de decisión. Con ello y a la par del redescubrimiento y potenciación del concepto de sociedad civil,²⁹ se produciría una “devolución de poder” a la base social, tanto ciudadana como productiva (Salazar, 1998: 3). Con ello, la emergencia de las políticas participativas y la noción de fortalecimiento de la sociedad civil fueron los grandes conceptos políticos de las últimas décadas y permitieron el traspaso de la responsabilidad de la satisfacción de necesidades sociales hacia el tercer sector y el mercado, descomprimiendo con ello el poder y tareas del Estado. Sin embargo y como señala Salazar, más que un proceso de descentralización con diseminación del poder a nivel local, lo ocurrido a partir de la década del noventa en realidad puede ser definido como una desconcentración del poder del Estado, con la municipalización de los servicios estatales, programas focales de desarrollo con participación vecinal

²⁹ Ver más detalles de este proceso en capítulo 1.

beneficiaria, y el desplazamiento de las exigencias de eficacia, responsabilidad o rendimiento burocrático desde el Estado hacia los gobiernos locales.

Desde esta perspectiva, la participación sería por tanto la combinación de una descentralización administrativa del Estado, complementada con la acción de las comunidades organizadas en la solución de sus propios problemas. En otras palabras, transfiriendo responsabilidades hacia los municipios y la sociedad civil, ésta última sería la encargada de compensar los efectos indeseados del neoliberalismo al generar sus propias plataformas para la integración al desarrollo, solucionando, en paralelo, el problema de la participación ciudadana deficitaria en los procesos de redemocratización (Dagnino *et al.*, 2006b; Hevia, 2006; Salazar, 1998). Para este último autor, esta lógica produce una individuación de la masa electoral y del ciudadano participativo, mientras la participación no logra potenciar el poder ni la acción ciudadana, sino más bien repotenciar la influencia de los políticos y de un estilo de hacer política basado en la representación en formato plebiscitario y en las encuestas de opinión. En este sentido y para Leiva (2005: 73), los gobiernos de la Concertación desplegaron una retórica o un léxico político basado en los conceptos de ‘sociedad civil’, ‘participación ciudadana’ y ‘capital social’ que resultaron instrumentales a la necesidad de estabilidad política, los desafíos de la redemocratización y la consolidación del modelo neoliberal. (Salazar, 1998). Para Lechner (1994), esta orientación liberal apela a la iniciativa individual como el motor del desarrollo, reforzando la búsqueda de soluciones individuales a problemas colectivos y generando, con esto, dinámicas de competencia y atomización social.

Así y desde una visión crítica de las políticas públicas participativas, ciertos autores señalan que mediante la creación de instancias de financiamiento concursable, el Estado incitó la creación de pequeños grupos organizados para la realización de proyectos elegibles de recibir subvención pública, lo que en paralelo generó formas de clientelismo, la pérdida de autonomía social y el fortalecimiento del control estatal (Foweraker, 2001; Posner, 2004; Vergara, 2003). De forma específica, los gobiernos de la Concertación entregaron apoyo económico a organizaciones de economía popular que fueran relevantes durante la década del ochenta, hecho que implicó una redefinición de las mismas desde el trabajo cooperativo y de consumo colectivo hacia el microemprendimiento y la competitividad entrados los noventa. Con ello, el carácter de estas organizaciones se habría volcado hacia intereses locales y particulares, menos inclinados hacia la movilización y prácticamente aislados de la actividad sindical. Extremando el argumento, Hipsher (1996: 286) señala que este tipo de políticas “fueron conscientemente desarrolladas para canalizar y controlar el

movimiento [de pobladores]”. Como lo señala Raúl Puelle, jefe del Departamento de Pobladores de la Democracia Cristiana, entrevistado por Hipsher en 1992,

Si la gente se comienza a movilizar, no va a haber nada que pueda detenerlos, y durante la transición esto no se puede dar. No veo una verdadera participación de los movimientos sociales todavía, pero creo que esto es bueno porque la participación real puede ser peligrosa en la situación política actual. Hay que crear canales organizados en el marco institucional y político para que las personas puedan participar, pero en una forma controlada (1996: 286).

En este sentido, el programa de vivienda de los primeros gobiernos de la Concertación representa un buen ejemplo de medidas de canalización de demandas sociales a través de proyectos privados concursables (Hipsher, 1996; Roberts, 1998). A través de dicha política pública, se proveería a los sectores populares con subsidios en respuesta a solicitudes de pequeños grupos o individuos particulares a través de vías institucionales, lo que permitiría buscar soluciones privadas a una demanda de potencial contencioso como, por ejemplo, las tomas de terreno observadas durante las décadas precedentes.

Las políticas de los años noventa se centraron básicamente así en la recuperación del valor de los subsidios monetarios con foco en los sectores pobres y de extrema pobreza, con el desarrollo de programas orientados a fortalecer las capacidades sociales, productivas y de ciudadanía de los grupos más vulnerables. Entre otras iniciativas, se creó el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y luego el Consejo Nacional de Superación de la Pobreza conformado por personeros del sector privado emplazados por el ejecutivo para asesorar e intermediar con la sociedad civil en materia de pobreza. El FOSIS buscaba generar acceso a programas regulares del Estado y a circuitos formales de la economía para hogares pobres, zonas postergadas y actividades productivas marginales a través de la participación directa de los mismos grupos y su capacidad de solucionar problemas con proyectos de emprendimiento, trabajo y habilitación social. El FOSIS así financiaba actividades que contribuyeran a la superación de la pobreza en base a concursos o licitaciones que, dependiendo del programa,³⁰ hacían competir entre sí a distintas organizaciones sociales (ONGs, fundaciones sin fines de lucro, municipalidades, el sector privado comercial) para la adjudicación de recursos según criterios de calidad y costo (Raczynski, 1999). A nivel

³⁰ Pueden ser proyectos autogestionados, presentados y gestionados directamente por personas, grupos u organizaciones sociales, formales e informales, pertenecientes al territorio o sector social beneficiado; o de servicios adjudicados por organismos no gubernamentales, universidades u otros, que otorgan a la población beneficiaria un bien o servicio.

de las organizaciones de base, esto generó una restructuración hacia grupos más acotados y particularistas, aislados de otro tipo de organizaciones y orientados a la búsqueda de soluciones individuales. Y aun cuando los gobiernos de la Concertación promovieron en paralelo incentivos para la creación de organizaciones barriales y juntas de vecinos, sus niveles de organización y coordinación resultarían ser bajos y el alcance de la participación limitado.

De esta manera, la diversificación y masificación de políticas públicas observadas en Chile a partir de la década del noventa se basaron en el tipo de participación hasta aquí descrita y que, incorporando los mandatos del BID, se enfocaron en esta forma y discurso sobre el fortalecimiento ciudadano. Además de la creación de la División de Organizaciones Sociales a comienzos de la década del noventa, desde 1992 la estructura de participación en Chile se centró en los municipios a través de los Consejos Económicos y Sociales (CESCO), organismos conformados por dirigentes de organizaciones territoriales, funcionales y otras relevantes para la comuna, y que se caracterizaron por su carácter consultivo. Por otra parte y para el procesamiento de demandas de la población organizada, el municipio contó con la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Para De la Maza (2010a), el CESCO fue una adaptación de los Consejos de Desarrollo Comunal (CODECO) diseñados por el gobierno militar de acuerdo con un modelo de participación corporativa y despolitizada, mientras que ambos organismos carecieron de formas de vinculación con la comunidad, no contaban con la suficiente legitimidad ante la población ni ante la autoridad y sus atribuciones eran muy reducidas. Al respecto, Enzo Pistacchio, director de la División de Organizaciones Sociales en el período 1990-1994 señala que, una vez retornada la democracia, se produce una discusión sobre la orientación que debía tener dicha organización y la forma que el Estado definiría su relación con la sociedad civil,

Nosotros discutimos mucho este tema y en realidad perdimos la pelea, perdimos la pelea con Tironi [director de comunicación y cultura del gobierno de Aylwin]. O sea, efectivamente lo que el gobierno de Aylwin hizo fue entender que la relación con la sociedad civil era más bien a través de las comunicaciones, es decir, a través de los medios, a través de la acción política comunicacional, de imágenes, y fundó un poco esa manera de hacer las cosas, es decir, lo que el Estado tiene que hacer es proveer a la sociedad civil con el SERNAC y las distintas superintendencias para que la sociedad denuncie o se relacione con lo privado o con otros grupos, pero a través de las comunicaciones, mientras nosotros insistimos en que la participación era una elemento central por el que la Concertación podía distinguirse de la derecha (comunicación personal, 6 de noviembre de 2014).

Más tarde y con la reforma de 1999, se reestructuraron los mecanismos de participación estableciendo el requerimiento de dictar Ordenanzas Municipales de Participación, se otorgó mayor flexibilidad y autonomía para la creación de los Consejos Económicos y Sociales, se estableció la obligatoriedad de las audiencias públicas y se regularon los plebiscitos y consultas comunales, aunque manteniendo un ámbito bastante acotado de aplicación (Montecinos, 2007). El año 2002 durante el gobierno de Ricardo Lagos, se anuncia un Compromiso para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y, dictando un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana, se buscó comprometer a los diferentes ministerios con metas específicas respecto a la incorporación de la sociedad civil en la elaboración de políticas y programas que se impulsaban. Como analiza De la Maza (2010a: 188), en una evaluación del impacto de dicho instructivo, un 37% de lo que se informa como participación por parte de los ministerios y servicios, no correspondía a participación propiamente tal. De igual forma, los instrumentos participativos ejecutados estarían concentrados en la modalidad instrumental (44%), principalmente en la modalidad más básica, es decir, la participación informativa que alcanza un 26% del total de los mecanismos. La participación ‘empoderadora’, esto es, que tiene consecuencias para el fortalecimiento tanto de la gestión estatal como de los participantes de la sociedad civil, sólo alcanzaría un 19% de dichos instrumentos.

En esa misma lógica, Michelle Bachelet lanzó al inicio de su primer gobierno una Agenda Pro Participación Ciudadana 2006-2010 que, de igual manera, buscaba entregar más protagonismo a los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. En dicha agenda se planteó la formación de consejos de la sociedad civil de carácter consultivo, fondos concursables para el apoyo de las organizaciones sociales, proyectos de infraestructura regional para organizaciones, mejorar el acceso a la información sobre políticas públicas y medidas contra la discriminación y en pro de la tolerancia. Con todo lo anterior, se intentaba incluir a la sociedad civil en la democracia en cuanto la participación constituiría un aspecto fundamental para el desarrollo económico y social del país (PNUD, 2000; Raczynski, 1999).

En una línea crítica, De la Maza (2010a) señala que la política explícita del Estado orientada al fortalecimiento así como al fomento de la participación ciudadana - instancia donde se manifiestan los marcos conceptuales y políticos de los gobiernos de la Concertación y que median la relación entre la sociedad civil y el Estado - han sido relativamente débiles respecto a la orientación de las políticas y a la institucionalización de la participación. Esto, debido principalmente a las debilidades

de estructura de la propia sociedad civil, así como a la naturaleza de los espacios que ocupa en el ciclo de las políticas públicas, que se refieren principalmente a la creación de instrumentos no vinculantes y limitados a ámbitos programáticos específicos. Tal como afirma Francisco Estévez, ex director del Instituto Nacional de la Juventud y de la División de Organizaciones Sociales del Estado durante el Gobierno de Bachelet, los mecanismos de participación de los gobiernos democráticos no han sido profundos ni han brotado de una discusión de fondo respecto al rol que debía jugar la sociedad civil en el desarrollo del país,

No hay una política pública que apueste por las organizaciones de la sociedad civil (...) y lo que hubo a partir de la transición se ha mantenido, como una especie de una “no política permanente” de invertir en el desarrollo institucional de la sociedad civil, lo que hace que se produzca un desequilibrio entre el poder del mercado y la fuerza débil o precaria de la sociedad civil, donde este sector no participa de la definición estratégica y viene a ser un lugar al que se recurre para que las acciones del Estado tengan una connotación social más efectiva, pero que no implica un desarrollo más global o más estructural (comunicación personal, 25 de noviembre de 2014).

El 16 de febrero de 2011 se publica la ley 20.500 que establece la institucionalización de la participación ciudadana en la gestión pública, modificando y dando mayores facilidades para la obtención de la personalidad jurídica a asociaciones y fundaciones, determinando con ello el actual marco referencial de la asociatividad en Chile. Dentro de sus principales modificaciones respecto a las leyes anteriores fue la de otorgar mayores facultades a los CESCO y cambiar su denominación por Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y, si bien mantienen su carácter consultivo, incrementan sus funciones y aumentan las instancias de pronunciamiento frente a alcaldes y consejos municipales,³¹ mientras sus integrantes deben informar y dar cuenta a sus organizaciones sobre las acciones llevadas a cabo en estas materias. Asimismo y a partir de esta ley, se traspasa el registro de organizaciones desde los municipios hacia el Registro Civil, junto a una simplificación del procedimiento de obtención de la personalidad jurídica de las corporaciones y fundaciones (en la categoría de organizaciones de interés público). En tercer término, se plantea la posibilidad de realizar plebiscitos comunales con mayores facilidades respecto a la ley de 1999, rebajando los *quórum*s y el número de firmas necesarias. Finalmente, se crea un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional

³¹ El consejo debe entregar su opinión sobre aspectos como el presupuesto anual o el plan de inversiones.

y regional para costear incitativas surgidas desde las propias organizaciones y no desde el Estado.

Sin embargo y como señala Camilo Ballesteros, actual Director de la División de Organizaciones Sociales del Estado,³² aun cuando Chile es un país que ha avanzado y se encuentra en una posición adelantada respecto a la región latinoamericana en términos de participación a través de mecanismos institucionales,

Yo siento que al Estado Chileno no le interesa la participación ciudadana y no le interesa la relación con la sociedad civil y lo digo porque es cosa de ver la DOS, que está a cargo de la participación ciudadana, tiene un presupuesto de dos millones de dólares, que es muy marginal. Segundo, si ves los mecanismos, se está en el estado de participación más básico, que son, el acceso a la información y el escuchar, por lo tanto, puede que se transfiera poder, pero es muy poco, y existe participación ciudadana sólo cuando se transfiere poder y el Estado chileno transfiere muy poco. Por ejemplo la ley 20.500, se pueden utilizar todos los mecanismos de participación y todos los mecanismos pueden arrojar que la gente quiere agua, pero yo al final puedo igual servirles jugo, porque soy yo quien sigue tomando la decisión como Gobierno (comunicación personal, 5 de diciembre de 2014).

De esta manera, se plantea que la retórica del protagonismo ciudadano y las políticas públicas participativas concertacionistas habrían acompañado la consolidación de un proceso de despolitización inaugurado durante la dictadura. Tal como los conceptos de Estado y mercado se vieron divorciados a mediados del siglo XVIII de la mano del liberalismo, el concepto mismo de sociedad civil tiene en sus orígenes teóricos en la separación de la dimensión ‘civil’ de la ‘política’, como espacios diferentes y racionalidades independientes. El discurso de la sociedad civil, hegemónico dentro de las políticas públicas durante la redemocratización, habría estado orientada así hacia una sola matriz de cooperación y despolitización (Hevia, 2006). Lo anterior, pues para este autor las idea-fuerza tras el fomento a la participación en Chile pasaron por entregar protagonismo a individuos más que a ciudadanos, y por crear una integración limitada al flujo de información para mejorar la eficacia de las políticas públicas. Las leyes de participación se restringieron así, para este autor, a la provisión de información y herramientas de colaboración, lo que al mismo tiempo limitó su capacidad de disenso o de disputa por proyectos sociales alternativos. Como señala De la Maza (2010a: 133), mientras el movimiento social popular se desactivaba a principios de los noventa, la iniciativa gubernamental tomaba fuerza, con estrategias que fragmentaban aún más a dicho movimiento. En definitiva, sería posible

³² Segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

argumentar, que más que generar empoderamiento, influencia o articulación de la sociedad civil en el proceso de decisión política, las modalidades de participación puestas en práctica a partir de los años noventa resultaron ser mayormente instrumentales, consultivas y dedicadas a la diseminación de información (Aguilera, 2007; Baeza-Rodríguez, 2008; Checa *et al.*, 2011; Cleuren, 2007; De la Maza, 2010a, 2010b, 2013a; Donoso y Gómez Bruera, 2014; Espinoza, 2004; Hevia, 2006; Leiva, 2005; Serrano, 1998; Vergara, 2003).

De esta manera, a principios de la redemocratización el énfasis se puso en conjugar una democracia representativa con una economía de mercado a través de una fuerte conducción de las elites. Los beneficios de esa triada fueron indudables para el desarrollo del país, aunque los costos fueron una desconexión de la clase política con la base social, un aumento en la desafección y una disminución de la confianza en las instituciones. Todos estos fenómenos alimentaron y contribuyendo a la desmovilización durante el período de la reconstrucción democrática, y al mismo tiempo posibilitaron la incubación de un malestar social que se hizo evidente en las movilizaciones del año 2011, tal como se desarrolla en el capítulo 6.

Capítulo 5

Impacto de la modernización neoliberal sobre la desmovilización de la sociedad civil

El trauma colectivo y el aprendizaje experimentado por la clase política chilena tuvo un correlato en acciones políticas pero también en acciones económicas. Muy al comienzo del régimen dictatorial, las lecciones extraídas por las autoridades militares respecto al proceso político previo indicarán que un aparato estatal centralizado y una economía burocratizada e intervenida por el Estado habrían provocado una escalada de politización de las relaciones sociales y a un conflicto de clases que llevó al país al caos y la ingobernabilidad. Las instituciones y el modelo de desarrollo nacional forjados durante medio siglo en el país serían responsables de dicho proceso y debían, por tanto, ser desintegradas. En 1973, comienza así un ambicioso proyecto para reestructurar y redefinir a la sociedad chilena mediante mecanismos de despolitización de la vida social a través de, entre otras medidas, el fortalecimiento del rol regulatorio de los mercados, la reducción de la intervención estatal, el ascenso tecnocrático, el reforzamiento del individualismo, la despolitización y la erradicación de los fundamentos institucionales que facilitaban la formación de sujetos colectivos. Al mantenerse las bases y las grandes reformas del modelo neoliberal, una vez retornada la democracia se asentó un proceso en que mutaron las condiciones materiales, se vio alterada la esfera socio-cultural y se vivieron profundas transformaciones en el campo intelectual.

Se desarrollan a continuación el origen y las principales características del modelo económico neoliberal impuesto en Chile durante la dictadura, la manera en que supuso una redefinición de la concepción del Estado y del bienestar social, el trabajo como espacio de socialización y los servicios sociales como sistemas de capitalización, aportes, responsabilidades y pagos individuales. Esta primera sección de naturaleza más bien descriptiva, se vuelve fundamental para comprender la estructura del nuevo modelo de bienestar neoliberal, el tipo de matriz económica desarrollista y estadocéntrico que vino a reemplazar, y la forma en que supuso la alteración de la estratificación tradicional. Se genera con ello una mayor segmentación en términos de las capacidades de pago individuales con la consecuente complejización de las categorías de clase y estatus social hasta entonces conocidas. Lo anterior redundó en un sistema social centrado en la provisión individual y en la atomización de los servicios sociales, lo que permite comenzar a rastrear y entender el clima de privatización, individuación y repliegue ciudadano de la esfera pública observados a partir de 1990 en el país.

La llamada revolución capitalista induce cambios profundos en las condiciones materiales y de existencia de la vida de los chilenos, con implicancias a nivel ideológico y cultural que, tal como se desarrolla y se profundiza en este capítulo, facilitan una desmovilización y despolitización de la sociedad chilena hacia la redemocratización a través de diferentes mecanismos. En primer lugar, una desestructuración identitaria y de los marcos normativos tradicionales se produce cuando los chilenos se vieron enfrentados en un breve período de tiempo a un nuevo sistema de estratificación acompañado de una enérgica movilidad social ascendente. Asimismo, el acceso al crédito, la transversalización del consumo y un vigoroso crecimiento económico facilitaron un clima de fascinación y euforia *vis-à-vis* las posibilidades ofrecidas por el mercado, mientras los espacios de debate y deliberación política propios de las décadas precedentes perdían relevancia e interés en la esfera ciudadana. Finalmente, la celeridad del crecimiento económico y el acceso generalizado a una educación y a un consumo antes restringidos a ciertos grupos sociales, generalizó un cierto imaginario respecto a las posibilidades entregadas por el modelo a la par de la emergencia de nuevas cosmovisiones como la meritocracia y el emprendimiento, ambas formuladas en clave individual. Estas grandes transformaciones sociales y su impacto sobre las identidades colectivas, se argumenta, contribuyeron a un cuadro general de desmovilización de la sociedad civil una vez inaugurada la redemocratización en el país.

5.1 Modernización neoliberal: ideas, orígenes y reestructuración social

5.1.1 Precisiones teóricas, desarrollo e imposición del modelo neoliberal

Algunas precisiones teóricas

Tal como se presentara en el capítulo anterior, una definición de gobernabilidad retrata un tipo de relación entre los individuos y el Estado y varía de acuerdo a la batería de valores y creencias desde donde dicha definición emerge. Lo anterior tiene implicancias significativas sobre la manera en que el rol del Estado y de la sociedad civil son concebidas y, por tanto, sobre las posibilidades de participación de este último actor. De la misma manera, el modelo económico por el cual una sociedad decide enfrentar y resolver sus problemáticas económicas, de desarrollo y de provisión de bienes y servicios a sus ciudadanos, tiene profundas consecuencias sobre la definición, la proyección y la inclusión de la sociedad civil. Esto, pues un determinado modelo económico proviene a su vez de una perspectiva teleológica específica respecto del rol del Estado, de la definición de derechos y de la función asignada a los mercados para alcanzar el bienestar del conjunto social. Así y en un sentido amplio, el

tipo de Estado benefactor se refiere a una forma particular de Estado, de sociedad y de estructura capitalista que define la acumulación de riqueza, regula y disciplina la fuerza laboral y el poder de la clase trabajadora (Greve, 2014: 30).

En el conocido trabajo de Esping-Andersen (1990), los modelos para alcanzar el bienestar social varían de acuerdo a los niveles de de-comodificación, de estratificación social y protección del mercado que promueven los diferentes tipos de estados.¹ Para el autor, dichos modelos pueden tener pretensiones universalistas, es decir, disposiciones y beneficios que buscan cubrir a toda la población, o selectivas, esto es, abarcar sólo a los que se consideran más necesitados. En la práctica, estos modelos oscilan básicamente entre la social-democracia, el modelo demócrata cristiano y el modelo liberal. El modelo de Estado de bienestar socialdemócrata se basa en el principio de universalismo, con amplio acceso a prestaciones y servicios sociales y un grado relativamente alto de autonomía e independencia individual frente a la familia y el mercado. El modelo demócrata-cristiano descansa en el principio de subsidiariedad o descentralización, es corporativista y los beneficios se organizan en torno a estatus y clases sociales, ofrece un nivel medio de de-comodificación y genera un alto grado de estratificación social. Finalmente, el modelo liberal se funda en el mercado y la provisión privada, donde el Estado sólo interviene para aliviar la pobreza y satisfacer las necesidades básicas a un cierto grupo de la población más vulnerable (sujeto a medios comprobatorios), con un potencial de de-comodificación bajo y una estratificación aguda.²

Los tipos ideales de estados propuestos difieren respecto a la forma en que proveen a sus ciudadanos con derechos, en el nivel de beneficios que otorgan y el acceso y la cobertura de aquellos beneficios, en un péndulo que fluctúa entre un mayor o menor centralismo del Estado. Asimismo, los tipos de Estado divergen respecto al nivel de estratificación - o desigualdad - que se busca promover o evitar, debate que, como se verá más adelante, se vuelve central en las sociedades modernas y en Chile en particular luego de 25 años de retorno democrático. Asimismo, estas

¹ Para Esping-Andersen (1990), a medida que las sociedades fueron evolucionando hacia el capitalismo, esto es, los mercados se volvieron más universales y hegemónicos, el bienestar de los individuos comenzó a depender en mayor medida en lazos basados en el dinero. Los individuos sufrieron así un proceso de comodificación que fue, sin embargo, en mayor o menor medida contrarrestado con el desarrollo e introducción de los derechos sociales modernos. Para este autor, la de-comodificación ocurre cuando un bien o servicio es considerado como un asunto de derecho y cuando una persona puede llevar su vida sin una dependencia en el mercado.

² Los países escandinavos son típicos ejemplos de modelos social-demócratas, mientras los anglo-sajones tienden a organizarse en torno a modelos liberales. Autores como Korpi y Palme (1998) también han propuesto una tipología de tipos de estado en base a su forma de proveer y promover bienestar para la sociedades occidentales que, dependiendo del nivel de beneficios, estratificación y elegibilidad, generan un modelo dirigido, uno voluntario subvencionado por el Estado, uno corporativista, uno de seguridad social básica y un modelo incluyente.

tipologías describen y caracterizan la compleja relación que se establece entre el Estado, el mercado y la sociedad civil dependiendo del modelo benefactor al que una sociedad adhiere. Para Greve (2014: 118–119), cada sociedad tiene un “mix de bienestar” que se refiere a la forma en que la provisión del mismo es balanceada entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, equilibrio que varía tanto entre sociedades como dentro de una sociedad misma a través del tiempo. De esta forma, el rol que se le otorga y la manera en que debe ser integrada la sociedad civil variará de acuerdo a la perspectiva teleológica o las distintas ideologías de bienestar dominantes en el cruce tiempo y espacio de una sociedad determinada.

En una línea similar, Dagnino *et al.* (2006a: 43) se refieren a la heterogeneidad de la sociedad civil y del Estado en América Latina, con un mapa complejo de posibilidades de colaboración y confrontación que es definido, y a la vez mediado, por el juego de fuerzas del proyecto político en que esta disputa tiene lugar. Para ello, identifican un proyecto político como “el conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en la sociedad, las cuales orientan la acción política de los diferentes sujetos”. Cada proyecto posee una dimensión estatal diferente y con ello distintas funciones del mismo en el aseguramiento de la acumulación capitalista, la producción de legitimidad y la preservación de la gobernabilidad. En este sentido, los autores identifican tres grandes proyectos políticos en la región, los cuales se disputan y buscan definir la construcción democrática de las naciones latinoamericanas, estos son, el proyecto autoritario, el democrático-participativo y el neoliberal.³ Este último aboga por la primacía del mercado como eje organizador de la economía y de la vida social, mientras la participación de la sociedad civil se entiende como suministro de información sobre demandas sociales o como organizaciones con capacidad para asumir con eficiencia la ejecución de políticas públicas orientadas a esas demandas. Para los autores y tal como se detallara en el capítulo 1, a medida que el proyecto neoliberal avanzaba, esta nueva concepción de sociedad civil tuvo un fuerte impacto en la reconfiguración de este actor en la mayor parte de los países latinoamericanos. El crecimiento y el nuevo papel desempeñado por las ONGs, la emergencia del llamado ‘tercer sector’ y de las fundaciones

³ El primer proyecto, aunque en estado de latencia en la actualidad de la región, amenaza con una posibilidad de restitución. Este, anula el principio de ciudadanía y cancela *de facto* los derechos políticos, lo cual no implica que no haya otros derechos al alcance de la población. La relación entre la sociedad civil y el Estado se caracteriza por el verticalismo, la represión y la cooptación, mientras la política pública es clientelar, particularista y la influencia de la sociedad civil sobre el Estado es mínima. El proyecto democrático-participativo se anida en la noción de profundización democrática por medio de la extensión de la participación social que es considerada como instrumento para la construcción de mayor igualdad, e incluye mecanismos de control y rendición de cuentas (*accountability*), y seguimiento y monitoreo por parte de la sociedad civil hacia el quehacer del Estado.

empresariales, una filantropía redefinida y la marginalización de los movimientos sociales fueron características de este proceso. El neoliberalismo, por otra parte, incorpora una nueva noción de ciudadanía reformulada en torno a la disolución de derechos universales “que habían conseguido consolidarse en el precario Estado de bienestar latinoamericano” en pos de la libre acción modernizadora del mercado (Dagnino *et al.*, 2006a: 62).

Siguiendo esta lógica y en un análisis en función de los modelos de ciudadanía y participación que derivan de los distintos tipos de Estado y acceso al bienestar social, Taylor (1998) señala que el rol de los ciudadanos en una sociedad determinada está condicionado no sólo por las estructuras políticas en que su participación tiene lugar, sino también y especialmente, por la matriz ideológica dominante y los modelos de participación que cada sistema social plantea. Para la autora, en la región latinoamericana se pueden identificar cuatro modelos dependiendo de los derechos, la participación y el nivel de soberanía que tengan los ciudadanos: modelos benefactor, elitista, participatorio y neoliberal.⁴ El primero, es un modelo que busca acortar la distancia entre el capitalismo y la democracia - o entre la desigualdad y los derechos sociales - por medio de la provisión de beneficios, que son considerados derechos, a una extensa parte de la población. El modelo elitista sugiere por su parte que el poder y la soberanía ciudadana deben ser delegados a un gobierno de políticos expertos, mientras la participación de la sociedad civil es disuadida y sólo limitada a los procesos eleccionarios. En el modelo participativo, la sociedad civil es protagonista y cumple un rol clave en el juego político. Para la autora, pese a la impracticabilidad de la democracia directa basada en comunidades políticas pequeñas y autónomas, este modelo representa una teoría de la soberanía, de la voluntad colectiva y una crítica a los modelos representativos. Finalmente, el modelo neoliberal de ciudadanía supone al individuo como el actor clave en una sociedad donde esta última no es otra cosa que un conglomerado de unidades y voluntades individuales, el derecho fundamental es a la libertad individual y es desde ahí que las interacciones económicas, políticas y sociales deben ser definidas. La soberanía en este modelo es transportada desde el poder político hacia el poder socio-económico y la política se vuelve, por tanto, un espacio redundante y estrecho.

Tal como se presenta a continuación, la sociedad chilena ha transitado por diferentes matrices de Estado benefactor y, con ello, por diferentes modelos de ciudadanía, participación e incentivos para la organización y movilización de la sociedad civil en torno a los beneficios y derechos *vis-à-vis* el poder estatal. Como se

⁴ Para la autora, los cuatro modelos se basan en el pensamiento de Marshall, Schumpeter, Rousseau y Hayek respectivamente.

detalla, en la historia chilena del último siglo se observa el auge, desarrollo y decadencia de modelos populistas y socialistas con pretensiones universalistas en los servicios sociales, un modelo autoritario neoliberal durante la dictadura y un sistema neoliberal corregido durante el retorno democrático. Cada fase tiene implicancias sobre la naturaleza y el grado de definición y participación de la sociedad civil.

Modelos de desarrollo y génesis del neoliberalismo en Chile

Luego de la Gran Depresión del capitalismo mundial en 1929, la idea de un Estado interventor se naturalizó en el mundo y en Chile, uno de los países más afectados por aquella gran crisis, esta noción comienza a tornarse hegemónica, consolidándose con ello y tal como se desarrolla a continuación, una matriz económica y socio-política que favorecería la politización y la constitución de sujetos colectivos. El manejo de la crisis y el proyecto de modernización es asociado desde entonces a un Estado desarrollista que debe desempeñar un rol de control sobre los mercados financieros, de fomento a la infraestructura nacional y al mismo tiempo proteger y estimular la producción doméstica. La creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939 viene a sintetizar dichos objetivos mientras su establecimiento posibilitó un cierto desarrollo de la industria del país, área que llegó a tener una participación importante en los ingresos nacionales.⁵

Se desarrolla así a partir de los años treinta un paradigma de modernización - el conocido modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) - en que el Estado asume un rol activo en la economía, no sólo a través de la asignación de recursos e intervenciones de mercado, sino también mediante nuevas políticas sociales y transferencias hacia los ciudadanos. En este sentido, el caso chileno representó un extremo del modelo, con aranceles elevados, altas cuotas a bienes importados, flujos de capital extranjero restringidos y un Estado que controlaba de manera directa o indirecta la mayor parte de la actividad económica (Stallings, 2001). En términos de derechos laborales, en 1931 se redacta el Código del Trabajo y en 1953 se forma la Central Única de Trabajadores (CUT), otorgándose mayor relevancia a los sindicatos urbanos en el país. Asimismo, se produce una expansión en términos de derechos sociales y un aumento de las instituciones y el gasto público en áreas como seguridad social, educación, salud y vivienda (Taylor, 2006), así como la emergencia de un tipo de Estado con aspiraciones más inclusivas y mesocráticas. De igual forma y como

⁵ La creación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y la explotación de petróleo en Magallanes son algunos ejemplos de estas políticas intervencionistas.

consecuencia sociológica de este modelo de desarrollo, se erige una nueva clase social, la clase proletaria surge como un actor político de relevancia y que viene lentamente a reemplazar al campesino, grupo social base del modelo oligárquico y del sistema de hacienda preponderante hasta entonces.

Sin embargo y hacia la segunda mitad del siglo XX y luego de la segunda guerra mundial, el modelo ISI así como el keynesianismo del primer mundo comienzan a mostrar sus límites en términos de desarrollo económico. Como lo indica Montecinos (1998), hacia la década del cincuenta el criticismo apuntó hacia la ineficiencia del modelo desarrollista por sus bajas tasas de productividad, inflación recurrente y déficit fiscales. En ese contexto, los intelectuales chilenos y una novel elite tecnocrática buscan dar solución a estas problemáticas generándose básicamente dos modelos o corrientes de pensamiento. En pleno contexto de guerra fría y la urgencia norteamericana de hacer frente y buscar alternativas a la amenaza comunista, intelectuales de derecha comienzan a cavilar un modelo económico que pudiera reemplazar al socialismo y al pensamiento keynesiano hegemónico de la época. En 1955, las escuelas de economía de la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile firman un convenio para estudios de postgrado para estudiantes chilenos. El propósito sería entrenar a estos últimos en una doctrina que fuera capaz de revertir la estricta intervención y planificación del Estado que sería, en la visión de los economistas de Chicago, la razón del estancamiento económico y el subdesarrollo de las naciones.⁶ Así, una generación de economistas chilenos fueron formados bajo el paradigma neoliberal de la escuela de Chicago que, llevando al extremo la teoría liberal clásica, defendían el libre mercado como el organizador más eficiente y racional de la actividad económica así como de la distribución del capital y del trabajo (Délano y Traslaviña, 1989; Ree, 2007; Silva, 1991). De esta manera y para esta doctrina, el papel del Estado era esencial, pero sólo en ciertas tareas específicas y cumpliendo un rol subsidiario, pues gran parte de sus funciones podían ser llevadas a cabo de una manera más eficiente por el mercado y por grupos intermedios.

Al mismo tiempo, por esos años se socializa, se vuelve dominante y son puestos en práctica los supuestos del pensamiento Cepalino y de Prebisch, Faletto y Henrique Cardoso que, planteando un *set* de principios para el desarrollo en América Latina, abogaban por la necesidad de superar diferencias estructurales de la división y la dependencia de los países centrales y los de la periferia, así como el sustrato primario exportador, raíz de los problemas de subdesarrollo de la región. Estas teorías vienen a dar estatuto científico al modelo ISI, proponiendo que la solución a las problemáticas

⁶ Para mayores detalles sobre la historia y desarrollo del neoliberalismo a nivel global ver Anderson (2003); Chorev (2010) y Harvey (2005).

económicas y sociales del país (y de la región) estaría en profundizar la industrialización junto a medidas de protección y control a la importación impulsadas desde los gobiernos como promotores y líderes de las políticas de desarrollo, así como instaurar un sistema socialista como vía de escape a las dinámicas al capitalismo global (Larraín, 1989; Perry, Próximo).⁷ La necesidad de reformas de carácter estructural - estructuralismo - se principia y materializa con una profunda y ambiciosa reforma agraria iniciada en el año 1964 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.⁸

El país comienza a experimentar así un irreversible proceso ideológico y legal hacia la izquierda, hacia la política de masas y hacia una profundización y consolidación de un Estado centralizado y regulador. El electo gobierno de Salvador Allende se comprometió con una transición al socialismo y buscó profundizar en el camino de las reformas estructurales. Para ello, completó la nacionalización de la industria del cobre, intensificó la reforma agraria y unos 500 bancos e industrias del país que pasaron a ser administrados por trabajadores o experimentado con la inclusión de trabajadores en su administración. En términos de los derechos sociales, Winn (2004) explica que bajo el régimen de Allende, la clase trabajadora - como el gran referente de acción colectiva - alcanzó niveles históricos de estatus y organización. El 'gobierno de los trabajadores' los situaba justamente en el centro del proyecto revolucionario que conduciría al país a un sistema socialista democrático. En este período, los sindicatos alcanzan una elevada membresía llegando a representar a un tercio de la fuerza de trabajo, y sus líderes a ser considerados para la definición de políticas laborales a nivel nacional. Tal como señala Winn, aun cuando el antiguo Código Laboral de 1931 se mantuvo vigente, éste fue interpretado por el gobierno de la Unidad Popular de una manera en que el poder fue equilibrado en favor de los trabajadores y sus sindicatos de forma inédita hasta entonces. Así, el Estado de Compromiso fue simbólicamente inclusivo y expansivo, con una ampliación de los derechos y servicios sociales así como con una mayor integración y altos grados de politización. Sin embargo, y al encontrarse enmarcado en una estructura productiva incapaz de hacerse cargo de dicha expansión, este modelo resultó excluyente en términos prácticos, produciéndose una asincronía entre el desarrollo político y el económico (Pinto, 1959), una participación subordinada a lógicas clientelistas a la par de una tendencia a la captura del Estado por parte de grupos intermedios.

⁷ Para más detalles sobre el pensamiento Cepalino ver Devés, (2004); Hirschman (1960) y Larraín (1989).

⁸ Estas ideas y reformas también son influenciadas por el proyecto de la Alianza para el Progreso que, actuando de manera reactiva a la Revolución Cubana, propone que la superación de la hacienda como unidad política, productiva y social en América Latina debe ser a través de la vía reformista para alcanzar el desarrollo y modernización del continente.

Por otra parte y a diferencia del gobierno predecesor, la Unidad Popular no pudo mantener el control de la macroeconomía. Esto se debió en parte a las actividades desestabilizadoras de la oposición tanto internas como externas, pero también a la inviabilidad de ciertas políticas impulsadas por el gobierno (Stallings, 2001). Durante el período, la demanda doméstica se expandió de la mano de un aumento del gasto público, los incrementos salariales estuvieron por sobre la capacidad de las empresas para solventarlos, mientras las exportaciones cayeron y el capital extranjero cesó de arribar. En la tabla 5.1 se puede observar el panorama macroeconómico en el período 1965-1973 y la manera en que durante el gobierno de la Unidad Popular se contraen las exportaciones, aumenta el empleo a la vez que la inflación llega a niveles superlativos.

Tabla 5.1. Chile 1965-1973, indicadores macroeconómicos (porcentajes)

	Alessandri	Frei	Allende
	1958-1964	1964-1970	1970-1973
Crecimiento PIB	3,7	4,0	1,2
Crecimiento exportaciones	6,2	2,3	-4,2
Tasa de inflación	26,6	26,3	293,8
Tasa de desempleo	5,2	5,9	4,7
Salario real (1970=100)	62,2	84,2	89,7
Superávit del gobierno general	-4,7	-2,5	-11,5

Fuente: Adaptado de Ffrench-Davis (2003: 74).

Pese al imaginario de integración, al progreso en términos de inclusión política y de derechos ciudadanos y a la participación social activa, la situación de la economía y el bienestar general de la población durante los años del Estado de Compromiso era precaria, con grandes masas de pobres urbanos, bajos niveles en los principales indicadores sociales y un alto grado de desigualdad, condiciones que constituyeron el escenario previo a las grandes reformas estructurales que estaban por suceder.

Neoliberalismo en el Chile autoritario

De esta manera, al comienzo de la dictadura militar Pinochet enfrentó un país inmerso en una profunda crisis económica, con tasas de hiperinflación superiores al 200%, escasez de bienes y alimentos y un hondo déficit en el presupuesto fiscal.

En un primer momento, Pinochet barajó distintas alternativas y estrategias económicas para manejar la crisis en un contexto global en que, tal como se

adelantara, las recetas keynesianas imperaban mientras en Chile la visión cepalina y la teoría de la dependencia hegemonizaban el discurso público. Más aun y en un primer momento, el apoyo de la elite y los grupos económicos a la Junta se dio al considerarse la intervención militar como una etapa necesaria para reestablecer el modelo y las trayectorias económicas desplegadas desde mediados del siglo e interrumpidas por el gobierno de la Unidad Popular (Fernández, 2004; Gárate, 2012). Al mismo tiempo, uno de los grupos de civiles más cercanos a la Junta, los *gremialistas* liderados por Jaime Guzmán, persuadían a los militares sobre el modelo económico a implementar como uno redujera la preponderancia del Estado pero a la vez aumentara la relevancia de los grupos intermedios, en un enfoque más corporativista que aquel propuesto por los economistas herederos de las doctrinas de Chicago (Ree, 2007).

Sin embargo, la opción por el - entonces heterodoxo - recetario neoliberal propuesto por los denominados Chicago Boys, sedujo al dictador por diversas razones. En primer lugar, la Junta militar se había propuesto llevar a cabo un modelo socio-político que buscara justamente alejarse de esta última dimensión. El exceso de política - o politiquería - habría sido, según las conclusiones de los militares, el factor que mayormente influyó en la crisis del período anterior. Tal como lo indica la declaración de principios de la Junta publicada a mediados del año 1974, para lograr un perfeccionamiento y desarrollo social era necesario:

Asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de éstas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles. (...) Quedará, por tanto, expresamente prohibida toda intervención partidista, directa o indirecta, en la generación y actividad de las directivas gremiales, cualquiera que sea su naturaleza. Resulta vital comprender que la mencionada despolitización es el único camino posible para que los gremios y demás organizaciones intermedias sean auténticos vehículos de participación social, cumpliendo así con un anhelo que puede ser señalado como verdadero signo de nuestro tiempo (Gobierno de Chile, 1974: 9-10).

Los Chicago Boys en este contexto aparecían y se definían a ellos mismos como un grupo de economistas técnicos y apolíticos, una elite tecnocrática que parecía estar en línea con los objetivos y la imagen que el nuevo régimen buscaba proyectar. De igual forma y tal como lo indica Winn (2004), la Junta estaba decidida a revertir el proceso socio-político predecesor de reformas sociales y política de masas, cuya base social protagónica era la clase trabajadora. El modelo propuesto por los Chicago Boys argumentaba que la eficiencia y la modernización del país debían estar aparejadas con

una reducción del papel interventor del Estado y una desindustrialización implícita, una apertura del mercado interno, aranceles bajos y uniformes, el fin de los controles de precios y de los subsidios. Como consecuencia y en línea con las pretensiones militares, este proyecto inhibiría una eventual captura del Estado por parte de grupos intermedios y, al mismo tiempo, contendría el poder de la clase trabajadora industrial, una de las responsables, a juicio de los intelectuales neoliberales, de la crisis en que se encontraba el país. El rechazo a la política, la crisis de los partidos y la preocupación por - tal como lo indican sus primeros documentos - encontrar una vía de desarrollo que pudiera “restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas” así como “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas”, definían no sólo un afán de recuperación macroeconómica, sino un proyecto societal de mayor ambición (Valdivia, 2001).

Se dio rienda suelta entonces a la implementación de las reformas neoliberales y a la transformación del rol del Estado desde la intervención hacia la subsidiaridad. La visita de Milton Friedman en 1975 representa en este contexto una clara señal del rumbo por el que el país comenzaría a transitar. Tal como lo retrata el discurso público que ofreció en el edificio Diego Portales, las reformas debían comenzar por una reducción del gasto fiscal de un 20% a 25% en el corto plazo, la expansión de las empresas privadas, la flexibilización de la normativa laboral y el fin de los controles a precios y salarios. Se sugería así reducir el tamaño y funciones del Estado a la vez que aumentar, fortalecer y transferir actividades a la empresa privada y a la economía de libre mercado, revirtiendo así una economía centralizada,

No creo que para Chile una política de gradualismo tenga sentido. Temo que el “paciente” puede llegar a morir antes que el “tratamiento” surta efecto. Creo que Chile puede ganar mucho si examina los ejemplos relacionados con el tratamiento de “shock” para el problema de la inflación y de la desorganización (...) El hecho simple es que Chile es un “hombre muy enfermo”. Un hombre enfermo no puede esperar recuperarse sin costo. Terminar con la inflación será costoso, pero será aún más costoso es continuar la inflación (Friedman, 1975: 26, 36).

De esta manera y a partir de entonces, los Chicago Boys pasaron a ocupar posiciones clave en la formulación de las políticas públicas y en las organizaciones encargadas de las empresas estatales y el gasto fiscal, CORFO y ODEPLAN. En esta primera etapa de implementación de las reformas estructurales (1975-1982) denominada neoliberalismo radical por el carácter de ‘shock’ ya anunciado por Friedman, se implementarían las más importantes reformas respecto al período predecesor. El gasto

y el tamaño del sector público fue reducido severamente, los precios liberados, el sistema bancario y el mercado financiero desregulados, empresas y tierras expropiadas devueltas a sus antiguos propietarios y se dio pie a una ronda de privatizaciones (Winn, 2004). La reducción o el rol minimalista del Estado en términos económicos debía combinarse al mismo tiempo con un papel ‘maximalista’ en términos políticos, aplicando una fuerte represión a todos los actores y condiciones que se opusieran a la implementación de dichas reformas (Paus, 1994).⁹ En estos primeros años, se produce la transferencia de 259 compañías y bancos que habían sido nacionalizados bajo el gobierno de Allende hacia el sector privado, número que llegó a 325 en 1982 (Fernández, 2004). Según este último autor, las consecuencias de esta etapa de privatizaciones implicó una alta concentración económica de grupos específicos sobre el mercado de capitales y el sistema financiero, con cinco grandes conglomerados que llegaron a controlar dos tercios de los activos totales de las 250 mayores empresas privadas del país.¹⁰

Este ambicioso proyecto de reformas estructurales denominado las ‘siete modernizaciones’, incluyó asimismo reformas al conjunto de los servicios sociales con su privatización total o parcialmente subsidiaria, una reforma al sistema judicial y al aparato burocrático-administrativo con la regionalización y descentralización del país.¹¹ De igual forma, se impulsó una desregulación del trabajo, la modificación de sus formas organizativas y la redacción de un nuevo código laboral en 1978 que relajaba las restricciones a la contratación por parte de las empresas y suprimía la mayoría de los derechos sindicales existentes al inicio del régimen (Ffrench-Davis, 2003; Gárate, 2012; Martínez y Díaz, 1996; Ruiz y Boccardo, 2014; Silva, 1996). La nueva normativa laboral restringía fuertemente la influencia de los trabajadores sobre el mercado del trabajo y las condiciones dentro de las empresas, con un carácter “anti-colectivista” que privilegiaba el poder del empresariado sobre los trabajadores (M. Taylor, 2006: 67). De esta forma, los principios ordenadores de las reformas fueron los elementos de mercado (competencia, elección); la subsidiaridad estatal (focalización, privatización); y la descentralización territorial (Larrañaga, 1995).

Programas de empleo e inversión pública combinada con un aumento impositivo lograron convertir el déficit fiscal en superávit hacia el año 1979. Asimismo, el aumento de las exportaciones como frutas, pescados y materias primas forestales implicó un nuevo e inédito espacio de crecimiento para el país. Todo lo anterior

⁹ Revisar capítulo 3 para más detalles.

¹⁰ En el año 1978 el grupo Matte controlaba 46 compañías, el grupo Vial 66, el grupo Cruzat-Larraín poseía 109 compañías, el grupo Angelini 21 compañías y el grupo Luksic 31 empresas (Fernández, 2004).

¹¹ En el centro de las medidas implantadas para concretar la pretensión refundacional en términos políticos y económicos del régimen estuvo la estrategia de la descentralización.

redundó en un crecimiento económico anual a una tasa del 8%, mientras que la inflación se contrajo desde un crítico 370% a un 9,5% hacia el año 1981, fenómenos que hicieron definir al proceso chileno de aquellos años como un ‘milagro económico’ (Winn, 2004). La confianza en las reformas neoliberales se afianzaba mientras el ministro de economía Sergio de Castro y los Chicago Boys se posicionaban y aseguraban su influencia dentro del régimen militar.

Tabla 5.2. Chile 1974-1982, indicadores macroeconómicos (porcentajes)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Crecimiento PIB	1,0	-13,3	3,2	8,3	7,8	7,1	7,7	6,7	-13,4
Tasa de desempleo		18,8	19,3	17,5	17,7	18	16,1	16	28,2
Tasa de inflación	369,2	343,3	197,9	84,2	37,2	38,9	31,2	9,5	20,7
Cambios salariales	-16,3	-3,2	2,9	10,3	6,4	8,2	8,6	9	0,3

Fuente: Adaptado de Fernández (2004: 192).

Un mercado de capitales totalmente desregulado y sin supervisión, altamente concentrado y que dependía del consumo de bienes y servicios y la capacidad de endeudamiento nacional e internacional, así como un crecimiento empujado por sectores como el financiero que no generaron empleo ni crecimiento sostenible, confabularon para generar una serie de contradicciones y desequilibrios macroeconómicos. A esto se sumó la sobrevaluación del peso, las altas tasas de interés y la crisis financiera transversal a América Latina. La crisis de 1982, la más severa desde 1929, surgió como el golpe más duro para el hasta entonces exitoso y radical recetario neoliberal.¹² Las razones que precipitaron la crisis económica de 1982 son múltiples y multidimensionales,¹³ sin embargo, en ese momento el régimen militar se vio interpelado a revisar las medidas económicas implementadas hasta entonces y hacer cambios clave en gabinetes y espacios de decisión, lo que hace evolucionar la

¹² Tal como se observa en la tabla 5.2, en 1982 la contracción del PIB llegó a los dos dígitos, el desempleo alcanzó prácticamente un 30%, la inflación se duplicó, mientras los niveles de pobreza aumentaron desde un 30% en 1981 a un 55% en el año 1983 (Barandiarán y Hernández, 1999). De la misma manera, el sector industrial se contrajo en más de un 21% y la construcción un 23% al mismo tiempo que muchas empresas y dos grandes bancos del país - Banco de Talca y el Banco Español-Chile - se declaraban la quiebra y debieron luego ser intervenidos y su control devuelto a manos del Estado. Desde 3500 millones en 1973, en 1982 la deuda externa del país llegó a los 17 mil millones de dólares (Salazar y Pinto, 1999b) lo que eventualmente forzó a Chile a no cumplir con los acuerdos definidos con el Fondo Monetario Internacional. Todo lo anterior se tradujo en una pérdida del poder de negociación no sólo en los mercados financieros internacionales, sino también en un quiebre en la confianza en las reformas neoliberales y, con ello, en la eficacia y capacidad de la burocracia militar y su forma de administrar el país.

¹³ Para una revisión pormenorizada ver Barandiarán y Hernández (1999); Paus (1994) y Silva (1996).

implementación de las políticas neoliberales hacia una segunda etapa definida como una fase de neoliberalismo pragmático.

A partir de 1984, las medidas correctivas aplicadas comienzan a dar frutos y la economía logra crecer a altas tasas. Tal como lo indica Paus (1994), a diferencia de lo que ocurrió a mediados de los setenta, la expansión y el crecimiento económico de la segunda mitad de la década del ochenta se fundó sobre la corrección de los errores cometidos en el pasado y sobre una base más sólida. El crecimiento fue impulsado básicamente por un incremento en las exportaciones que aumentaron su participación en el PIB desde un 25% en 1982 a un 33% en 1991, y luego por un aumento en la inversión. Al mismo tiempo, en aquellos años se da paso a una segunda ola de privatizaciones ideada para compensar la falta de créditos nacionales e internacionales a raíz de la crisis. Los grupos económicos nacionales, debilitados tras la recesión, no fueron capaces de aprovechar cabalmente las nuevas privatizaciones facilitando la inserción de grandes compañías transnacionales y acelerando el proceso de globalización de la economía chilena, traspasando unos 1200 millones de dólares de entradas fiscales a manos privadas (Fernández, 2004). De esta manera, los grupos económicos multinacionales jugaron un rol clave en la recuperación de la economía nacional, moldeando con ello la nueva cara global y transnacional de la economía chilena. Y hacia la segunda mitad de la década del ochenta se legitima y se consolida el neoliberalismo como modelo económico y como la opción hegemónica y que dominaría la transición a la democracia.

A partir de la mitad de la década del ochenta el PIB creció en un promedio del 6,6%, entre 1984 y 1990 y el desempleo se redujo de un 13,9% a un 7,8% en 1990. En materia social, la esperanza de vida aumentó en 10 años desde 1973 a 1990, la mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos bajó de 65,7 a 15,9 y el analfabetismo de un 12,8% de la población adulta en 1970 a un 8,8% en 1992 (Braun-Llona *et al.*, 2000; Larraín y Vergara, 2000). Pero más allá de las cifras económicas, el mayor logro del régimen militar fue la reestructuración de la economía chilena y, al mismo tiempo, la imposición de un proyecto modernizador y un modelo socio-político con profundas consecuencias para la sociedad chilena en su conjunto. La matriz neoliberal y el nuevo patrón de acumulación de riqueza se basa desde entonces en la especialización de la economía local en la exportación de recursos primario. A la minería del cobre, se sumaron las explotaciones forestales, la agroindustria y la pesca (Goicovic, 2006), mientras la manufactura y el empleo público reducen su participación y relevancia en la estructura productiva.

De esta manera, la denominada “revolución silenciosa” (Lavín, 1987; Tironi, 1988b) acometida por el régimen militar y la implementación del modelo económico

neoliberal fue un ambicioso proyecto de carácter refundacional. Como señala Ree (2007), tal como el estructuralismo y la teoría de la dependencia lo intentaron en el pasado, el neoliberalismo no buscaba únicamente proveer de herramientas para la solución de problemáticas económicas, sino ser un proyecto original que definiera las relaciones sociales y económicas e implicara un orden para resolver los problemas propios del desarrollo basado en el libre mercado y la subsidiaridad. El paradigma neoliberal y su definición de la economía, la política y la sociedad supusieron un cambio radical respecto a la trayectoria de desarrollo experimentada por el país durante décadas. Las reformas estructurales aplicadas cabalmente en medio de represión y de nula oposición política y social, permitieron la imposición de un nuevo proyecto societal donde el Estado y el vínculo del Estado con la sociedad civil es redefinido, modificando las relaciones sociales, la matriz socio-política conocida hasta entonces y, con ello, las posibilidades y potencialidades de participación de la sociedad civil.

5.1.2 Neoliberalismo, reestructuración y sociedad civil en Chile

Tal como se presentara, para el régimen militar y los reformistas neoliberales las instituciones y el proyecto del Estado nacional-desarrollista (1930-1973) representaban la gran fuente de problemas enfrentados por Chile en las últimas décadas. Esto, pues la intervención del Estado fue vista como un obstáculo para las operaciones del mercado y la eficiencia del mismo y, al mismo tiempo, fue concebida como una fuente de politización y movilización de la sociedad chilena. La solución al problema creado por un “estatismo exagerado”, su consecuente extensión a todos los niveles de la vida social y la excesiva politización (Castro, 1992: 29–30) debían ser solucionados mediante la descentralización de los aparatos productivos y estatales y una mayor responsabilidad de los individuos y los grupos intermedios,

El proceso de descentralización debería abarcar actividades como educación, salud, sistemas asistenciales, etc., permitiendo una participación efectiva de los usuarios lo que facilita el control y promueve una mayor eficiencia en estos sectores. La política de descentralización diseminaría y repartiría el poder político derivado del estatismo pasado; abrirá caminos a una efectiva participación de la comunidad y contribuiría a igualar las oportunidades y posibilidades de acceso de los ciudadanos a las diversas actividades de la vida nacional (Castro, 1992: 53–54).

Por ello, la tecnocracia neoliberal defendía la remodelación de las instituciones del Estado desarrollista mediante un proyecto de ingeniería social basado en la expansión de la lógica de mercado al conjunto de las relaciones sociales, la reducción del Estado y la atomización de la sociedad civil. Lo que Taylor (2006: 77) ha denominado “la gran transformación de las instituciones de bienestar” estuvo motivado, a su juicio, por la redefinición de la naturaleza de las relaciones Estado-sociedad a través de la individualización, privatización y descentralización. Esto, se lograría inhibiendo la generación de sujetos colectivos y la remoción del Estado como *target* principal de las demandas de los movimientos sociales.

De igual manera, el régimen buscó diseñar un modelo que maximizara los beneficios y oportunidades para la empresa privada así como acoplara las formas de política social, el mercado del trabajo y las nuevas estructuras productivas a los requerimientos del proceso de reestructuración. Para Díaz (1994), lo que ocurrió entre 1973 y 1992 permite ser definido como un proceso de desestructuración y reestructuración, tal como se puede observar en la tabla 5.3.

Tabla 5.3. Desestructuración/reestructuración social en Chile, 1976-1992.

Transformaciones en la estructura ocupaciones (como % de la PEA)	Desestructuración		Estructuración
	1972	1982	1992
Desempleo	4,3	19,6	4,4
Asalarización	60,2	39,2	60,4
Terciarización	50,9	61,8	51,5
Informalización	22,9	32,7	22,1
Empleo de emergencia	0,0	11,0	0,0
Empleo público	12,0	8,0	6,0

Fuente: Díaz (1994: 9).

En términos ideológicos, Vergara (1984) explica que la visión del régimen estuvo determinada por la búsqueda de la libertad económica o aquella que se desenvuelve en el mercado y cuya realización permite el acceso a la libertad política. De igual forma, el mercado debía ser la expresión de un mando impersonal que somete a las decisiones individuales y que asegura la igualdad. Las desigualdades y la jerarquización que se generan por la acción del mercado serían el resultado de un ordenamiento externo,

neutro y, por tanto, justo. El énfasis en lo social fue reemplazado por una prioridad en lo individual, mientras la democracia resultó instrumental a la igualdad económica y a la de los individuos en el mercado. Finalmente, la política económica del régimen se fundó en un saber racional, científico, técnico y moderno, distinto, por tanto, a las políticas económicas ideológicas del pasado. Como explicaba el discurso oficialista, el proyecto modernizador del régimen militar buscaba entregar a los individuos la facultad de elegir en relación al suministro y acceso a los servicios sociales básicos. Las relaciones de trabajo serían transferidas desde el Estado “un administrador costoso e irresponsable” hacia el sector privado sometido a mayores exigencias de productividad. La eficiencia también estaría estimulada por la desarticulación de los poderes de las organizaciones laborales y gremiales que distorsionaban el funcionamiento de los mercados (Vergara, 1984: 303–304).¹⁴

Así y como se señalara, un modelo económico no sólo constituye una forma de resolver las problemáticas puntuales respecto al manejo del mercado y la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos, sino que implica una definición del rol del Estado, la preponderancia del mercado y la relación que ambas esferas establecen con la sociedad civil. Describir entonces las principales reformas socio-económicas desarrolladas e impuestas durante la dictadura se vuelve así fundamental para entender las características de este nuevo modelo de bienestar y la manera en que viene a alterar la estructura de estratificación tradicional, generándose una mayor segmentación en términos de las capacidades de pago individuales, con la consecuente complejización de las categorías de clase y estatus social hasta entonces conocidas.

La radicalidad con que se impuso el nuevo modelo económico en Chile, implicó un rápido reordenamiento y reestructuración social de la mano de reformas estructurales de la economía y sus instituciones. Un nuevo código laboral así como fuertes modificaciones al sistema educacional, de pensiones y de salud con transferencias desde la esfera pública a la privada provocó una redefinición de valores, derechos y la relación de los ciudadanos con ellos mismo y con el Estado. La definición de bienestar se modifica así como la provisión de servicios sociales que desde entonces se localizan en el mercado y se basan en la capitalización, capacidad de pago y responsabilidades individuales. Con ello, la estructura de estratificación tradicional sufre un cambio profundo, esto es, se genera diversas capas o una mayor segmentación de la sociedad en términos del poder adquisitivo personal, revolucionando y complejizando las categorías de clase e identidad hasta entonces conocidas. Todo lo anterior redundaba en un sistema social centrado en la provisión individual y en la atomización de los servicios sociales, lo que permite relevar las primeras pistas para entender el clima de

¹⁴ La autora se basa en declaraciones de José Piñera a la revista *Qué Pasa* de 1979.

privatización, individuación y repliegue ciudadano de la esfera pública observados a partir de 1990 en el país.

Reestructuración social: reformas a los servicios sociales

A través de las llamadas reformas de segunda generación, es decir, reformas a los servicios de educación, salud, previsión social, sistema judicial, aparato burocrático-administrativo y la desregulación del trabajo, la dictadura,

buscó transformar las instituciones de bienestar de forma que pudieran lograr una reestructuración de las expectativas y los comportamientos de los individuos y de las familias a través de medios de reproducción social (...) los servicios sociales ya no estarían condicionados a la movilización y articulación de los diversos sujetos sociales colectivos que dirigen demandas al aparato central del Estado. En cambio, esas relaciones debían ser recompuestas en lo posible por vínculos de mercado entre los individuos y las empresas. Esta atomización de las relaciones sociales se lograría a través de los procesos de descentralización y privatización que transformarían las instituciones que regulan la prestación de servicios sociales (Taylor, 2006: 86).

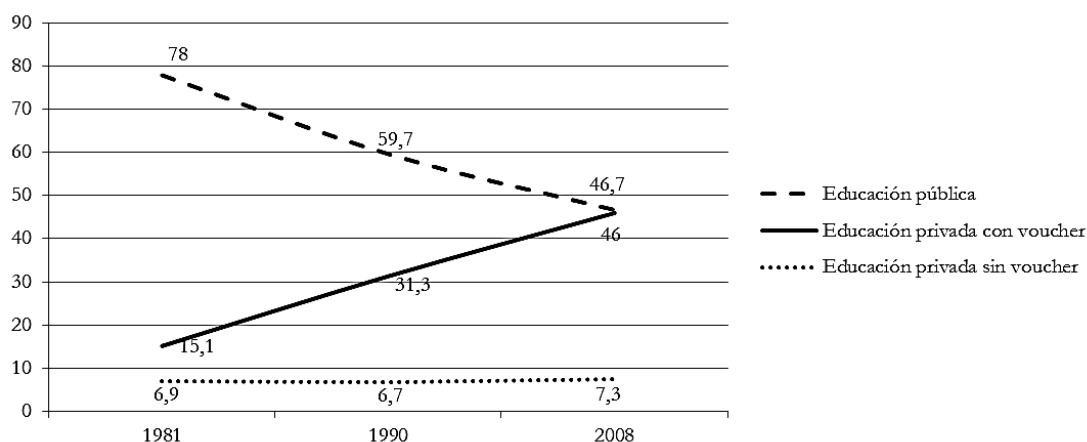
Con la reforma de 1980, el sistema de educación chileno redujo el rol y el gasto público del Estado en pos del sector privado, generando un sistema dual público-privado que continúa en las bases del sistema educacional del Chile actual. La descentralización fue el mecanismo principal de la reforma con la transferencia de la administración de la educación desde el Estado hacia los municipios, lo que fue complementado con el traspaso a organizaciones privadas con fines de lucro que desde entonces podían competir por la matrícula de los estudiantes y recibir financiamiento público.¹⁵

Asimismo, otro cambio fundamental fue la introducción del subsidio a la demanda por el cual las escuelas dejaron de percibir financiamiento directo, sino que implícito e indirecto a través de los estudiantes y el sistema de *voucher* propuesto por Friedman. Mediante este modelo se buscaría aumentar las oportunidades de elección de las familias en materia educativa y las escuelas recibirían financiamiento estatal en base al número de estudiantes que fueran capaces de atraer, obligándolas a estar en

¹⁵ Como señala El Ladrillo, “Se estima que la forma más adecuada de abaratar el costo y mejorar la calidad de la educación es una drástica descentralización de la actual estructura, de manera que sea la comunidad local quien pase directamente a administrar la unidad escolar respectiva. (...) El Estado, a través del Ministerio de Educación, sólo tendría a su cargo la formulación de la política general, el control de los requisitos mínimos de promoción y currículum y la obligación de financiar el costo mínimo de cada uno que se estuviere educando” (Castro, 1992, pp. 148–149)

competencia directa con la educación de iniciativa privada (Aedo y Sapelli, 2001; González *et al.*, 2004; Larrañaga, 2009). Las reformas educacionales son consolidadas el último día del período dictatorial con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) que fija la estructura del sistema y los deberes y rol del Estado. Como señala Taylor (2006), a partir de 1990 los gobiernos de la Concertación extienden y profundizan estas medidas resultando en una progresiva disminución de la matrícula en la educación estatal y un aumento en la educación privada subvencionada como puede observarse en la figura 5.1.

Figura 5.1. Matrícula en educación primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas, 1981-2008. Porcentaje total



Fuente: Elacqua (2009: 35).

En términos de educación superior, y tal como señalan Bernasconi y Rojas (2004), hasta 1973 las universidades fueron centro de debate, formas de organización y gobierno, aglutinando manifestaciones, tomas de edificios, huelgas, asambleas y enfrentamientos con la policía, en una versión concentrada de los conflictos políticos y sociales del país. A partir del régimen dictatorial, se buscó reducir y controlar el potencial de activismo y movilización dentro de las universidades mediante la transformación de las sedes regionales de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado en 14 universidades públicas independientes, mientras todas las casas universitarias fueron dotadas de nuevos estatutos y sujetas a las restricciones *de facto* impuestas por el régimen. Asimismo y dado que el gasto público se redujo entre un 15% y un 35% entre 1974 y 1980, las universidades se vieron forzadas a abandonar la gratuidad y comenzar a cobrar aranceles y buscar otras fuentes de recursos en un

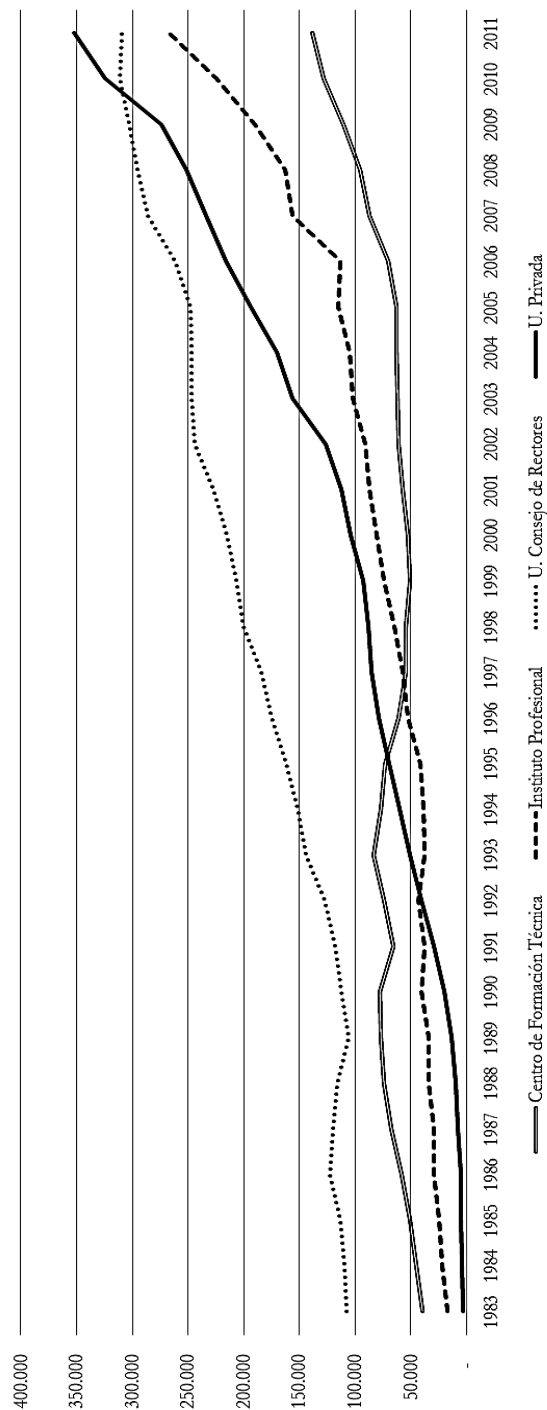
proceso de autofinanciamiento que aumentó de un 13,5% a un 26,9% promedio entre 1965 y 1980.

Con el objetivo de expandir la matrícula, diversificar el sistema y estimular la competencia entre instituciones, en 1981 se permitió la creación de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, lo que modificó la composición y el panorama de educación superior conocido hasta entonces. Además de una diversificación de la estructura de la matrícula, las reformas implicaron una fuerte expansión de la cobertura de la educación superior, fenómenos que en treinta años han hecho transitar al país desde un sistema estatal, de elite y mayormente homogéneo a un sistema de educación superior de mercado, masificado y diverso (Bernasconi y Rojas, 2004).

Sin embargo y desde una mirada más crítica, Améstica y sus colegas (2014) señalan que aun cuando se ha alcanzado una amplia cobertura, la calidad de las universidades es heterogénea y tienden a una muy marcada estratificación, con universidades de élite asociada a la estructura de precios o aranceles que refuerzan la segmentación social y restringen las posibilidades de acceso de los que tienen menores recursos. Asimismo y en términos de la educación escolar, el estudio realizado por Puga (2011) señala que el sistema de escuelas subvencionadas o con *voucher* aportan en a la segregación de redes y capital social, la distribución diferenciada de expectativas, y el establecimiento de credenciales simbólicas diferenciadas que son reconocidas como tales en el mercado laboral.¹⁶

¹⁶ Para los autores, la educación subvencionada no influye necesariamente en el aumento de la competencia y la calidad respecto a las escuelas públicas, señalando que los datos empíricos sugieren que la educación privada subvencionada no proporciona mejores resultados pedagógicos que su contraparte una vez controlado el origen social de los estudiantes.

Figura 5.2. Evolución de la matrícula de Educación Superior por tipo específico de IES, 1983-2011.



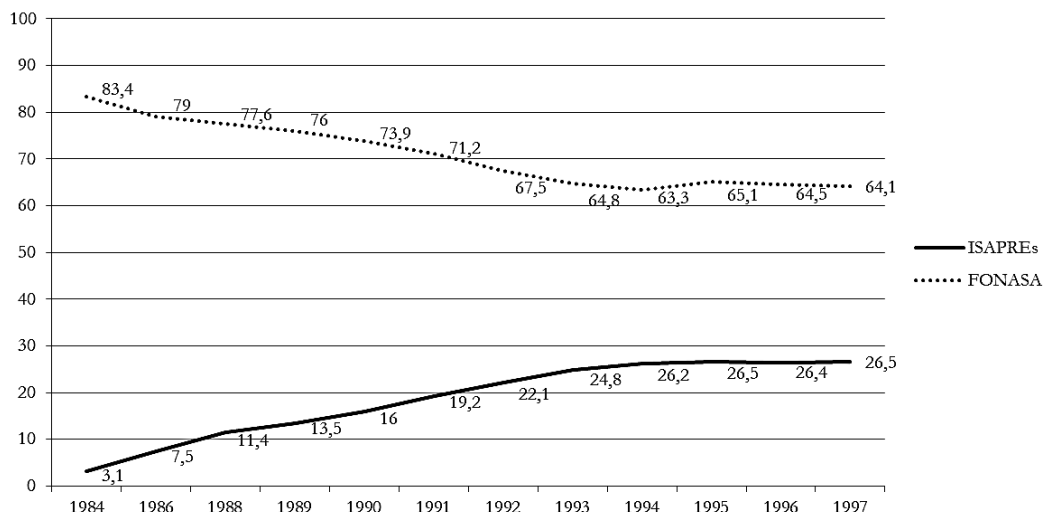
Fuente: Elaboración propia desde Compendio Histórico de Educación Superior (Ministerio de Educación, 2015).

Por otra parte, el régimen militar llevó a cabo una contundente reforma al sistema de salud con el objetivo de incrementar su eficiencia y eficacia. Los cambios incluyeron la descentralización y municipalización de la atención primaria y la participación del sector privado en las áreas de financiamiento y prestación de atención médica. En este período se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA), institución financiera encargada de recopilar, administrar y distribuir los recursos del Estado para la salud. Al mismo tiempo que se crean las Instituciones de Salud Previsional (ISAPREs) que actúan como compañías de seguros que ofrecen servicios de salud bajo contratos que definen el grado de cobertura y tipos de beneficios para el suscriptor individual en base a su capacidad de pago (Titelman, 1999). A comienzos de los años ochenta, la participación fiscal correspondía al 38% de los recursos destinados al sistema de salud, cifra que cayó a un 21% en 1989 (Stallings, 2001).¹⁷

Otro cambio sustancial fue la eliminación de las contribuciones de los empleadores en tanto que el nuevo sistema debía ser financiado principalmente por las contribuciones obligatorias de los empleados. En un comienzo, la contribución se fijó en un 3% que luego debió aumentar a un 7% como respuesta al déficit del sistema público, déficit que resultó tanto de la reducción del gasto público en salud como de la migración de los grupos de mayores ingresos hacia las ISAPREs (Posner, 2008). Al igual que en educación, se escindió al sistema de salud en una estructura dual pública y privada así como se generó múltiples capas o estratos de usuarios dependiendo de sus salarios y capacidad de pago. Como señala Titelman (1999), en términos de distribución de ingresos de la población entre los subsectores público y privado, los primeros cuatro quintiles participan, en su mayoría del sistema público, mientras el quinto quintil (el 20% más rico de la población) concentra a la mayoría de los afiliados de las ISAPREs, tendencia que se ha mantenido estable en los últimos años.

¹⁷ De esta manera y luego de las reformas, el sector público de salud pasó financiarse a través de las cotizaciones de los afiliados al FONASA y el aporte fiscal directo, mientras una tercera fuente menor de financiamiento la constituye el copago de sus afiliados para acceder a la modalidad de libre elección y a las prestaciones institucionales. En el sistema ISAPRE en tanto, el afiliado accede a un plan de salud dependiendo del monto de su cotización y del número, edad y sexo de sus beneficiarios, quienes reciben una bonificación por un porcentaje de las prestaciones médicas dependiendo del plan de salud.

Figura 5.3. Cobertura del sistema de salud, 1984, 1986 y 1988-1997



Fuente: Elaborado en base a datos de Titelman (1999).

En términos de la previsión social, la gran reforma se concretó en 1980 como una manera de corregir lo que se consideró como graves defectos del sistema previo.¹⁸ Como explica Stallings (2001), la reformas perseguían incrementar las pensiones en base a los retornos de mercado, eliminar la concesión de pensiones por antigüedad y por grupos privilegiados, establecer contribuciones en función de las remuneraciones reales durante toda la vida laboral del individuo y no en función de los últimos años, establecer ajustes automáticos a partir de los cambios demográficos, minimizar las presiones políticas para el uso de los fondos, a la vez que mejorar la eficiencia y reducir la burocracia del sistema. Para alcanzar estos objetivos, se reemplazó el sistema de reparto o de contribuciones combinadas entre trabajadores, empleadores y el Estado (un tercio del aporte total) concentradas en las Cajas de Previsión, por un sistema de capitalización individual de pensiones basado en contribuciones personales que conformaban un fondo para la jubilación a ser administrado por instituciones

¹⁸ Como señaló José Piñera, entonces Ministro del Trabajo y Previsión Social con motivo de la celebración del 1° de mayo de 1980: “Tras décadas de desaciertos, el actual sistema previsional está técnicamente quebrado (...) La mala atención, la burocracia y la complejidad del sistema hacen que incluso obtener estos exiguos beneficios sea para muchos una tarea ardua, difícil y a veces humillante. El régimen de reparto promueve fuertemente la evasión, y la facilidad para engañar al sistema ha quedado demostrada con el descubrimiento de los últimos fraudes previsionales” (Piñera, 1980).

privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).¹⁹ El nuevo sistema previsional entregaría pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, con un Estado que garantizaría pensiones mínimas sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos del afiliado. La reforma también beneficiaba a las empresas empleadoras quienes redujeron los costos de inversión por empleado al no verse en la obligación de cotizar un monto por cada uno de sus trabajadores (Diamond y Valdés-Prieto, 1993; Elter, 1999).

La eliminación de los aportes estatales se realizó, al igual que las otras medidas establecidas en el período, con el fin de reducir el déficit fiscal y la participación del Estado en la provisión de servicios. Como señalan Délano y Traslavina (1989), pese a la ineficiencia del antiguo sistema de reparto, éste implicaba un concepto de solidaridad y redistribución en la medida que las cotizaciones de los trabajadores activos y de los empresarios financiaban las pensiones de las personas mayores. Para estos autores, la reforma previsional fomentó el individualismo en la medida que la pensión personal pasó a depender del ahorro privado de cada ciudadano.

Para Taylor (2006), un aspecto importante de esta reforma en particular, problema que es posible extrapolar a las grandes transformaciones de la salud y la educación presentadas hasta ahora, está en que la modificación del sistema de pensiones representó una herramienta más en la estrategia despolitizadora que se había propuesto el régimen. Esto, pues al remover la provisión del ámbito del Estado hacia manos de técnicos en compañías privadas, la presencia estatal se reduce y se limita exclusivamente a regular la inversión privada, asegurando una pensión o un servicio mínimo si esto llegara a ser necesario. La responsabilidad por este servicio así ya no correspondería al Estado ni a un colectivo y, en lugar de una seguridad social surtida por el Estado, los chilenos fueron motivados a crear una sociedad de “trabajadores-propietarios” (Piñera, 1980).

Reestructuración social: reforma laboral

Una de las reformas sociales más significativas del período tuvo que ver con el cambio en la legislación laboral. Refiriéndose tanto a la reforma previsional como a la laboral, en la década del ochenta José Piñera indicaba que mediante ambas reformas “tenemos la certeza de estar asestando otro golpe mortal a la politización de la vida social y al marxismo, y sobre todo, a la pobreza y la injusticia” (citado en Elter (1999: 109)). Así, las siete modernizaciones implementadas por la dictadura militar buscaban dar

¹⁹ Estas últimas instituciones son empresas de servicios con fines de lucro que invierten los fondos de los trabajadores en distintas actividades financieras con el objeto de incrementar ganancias en el tiempo (Délano y Traslavina, 1989).

solución a las problemáticas socioeconómicas como la inflación y la pobreza, al mismo tiempo se resolverían el problema de la politización, ideologización e hipermovilización de las décadas precedentes.

La legislación laboral experimentó de esta manera cambios significativos durante las últimas décadas. Hasta 1973, la normativa laboral se caracterizaba por ser proteccionista al considerar al trabajador como un actor débil frente al empleador. El Estado debía, por tanto, intervenir y asegurar que los derechos del trabajador se impusieran por sobre el mercado. Producto de este enfoque, los despidos de los trabajadores suponían costos elevados, las huelgas podían ser indefinidas, se prohibía el reemplazo de los trabajadores y, mediante incrementos salariales en el sector público y una intervención en los conflictos, el Estado desempeñaba un papel importante en términos de las relaciones laborales. Con el advenimiento militar, en una primera etapa (1973-1978) la legislación *de facto* fue restrictiva y anuladora de derechos y, junto a la represión de los sindicatos, se suspendieron y prohibieron la negociación colectiva y la actividad sindical, se facilitó el despido y el reajuste de remuneraciones obligatorios para los sectores público y privado. Finalmente, a partir de 1979 y mediante la normativa laboral sintetizada en el nuevo Plan Laboral, el mundo del trabajo es desregulado y se reduce el poder sindical (Barrera, 1994; Mizala y Romaguera, 2001; Stallings, 2001).

Con el Plan Laboral se restablecen la negociación colectiva, la actividad sindical y la huelga, pero en condiciones muy diferentes a las existentes hasta 1973, con un mercado laboral más flexible que queda de manifiesto. A diferencia de la normativa anterior, la afiliación sindical pasó a ser voluntaria, la duración de la huelga se limitó a 60 días al fin de los cuales los contratos de los trabajadores caducaban automáticamente, se permitió la contratación de personal de reemplazo durante la huelga así como el *lockout* empresarial o la posibilidad de cierre por parte del empleador de la unidad productiva durante el conflicto. Asimismo, el Estado dejó de actuar como mediador de conflictos a través de comisiones tripartitas, las negociaciones se difirieron en el tiempo con el fin de evitar el conflicto concentrado en un período breve. Como medida destacada, se estableció la facultad de despido por parte de los empleadores sin expresión de causa, condicionada al pago de un desahucio y con una indemnización limitada a un mes hasta por 5 años de trabajo (Coloma y Rojas, 2000; Délano y Traslaviña, 1989; Mizala y Romaguera, 2001; Rojas, 2007; Stallings, 2001).

De igual manera, las dos formas principales de organización sindical (de industriales y profesionales) fueron sustituidos por un número mayor de organizaciones: sindicato de empresa, sindicato inter-empresa, sindicato de

trabajadores independientes y sindicato de trabajadores transitorios. En este sentido, y tal como señala Narbona (2014), para el pensamiento económico liberal de Friedman y Hayek era importante promover el individualismo laboral y la desintermediación social por lo que era importante reducir la injerencia sindical a su expresión más mínima. Esta reforma fue, por tanto, un pivote, un mecanismo fundamental y un prerequisite para el desenvolvimiento de la gran revolución capitalista y el plan desmovilizador llevada a cabo por la dictadura militar. Para Vergara (1984), el principio de autonomía y despolitización de los cuerpos intermedios y la necesidad de excluir de ellos toda injerencia político-partidista, se expresó en una normativa que se vio cada vez más impregnada por los criterios de seguridad interna y por los requerimientos que imponía la política anti-inflacionaria. Así, el Ministro del Interior planteaba la necesidad de superar la huelga, la que considera una “expresión de fuerza” utilizada en el pasado como “instrumento de la lucha de clases” y que era, por tanto, perentorio sustituirla por un sistema de conciliación y arbitraje obligatorio (1984: 188). Como lo resume Álvaro Díaz, académico y ex Subsecretario de Economía,²⁰ a partir de los años ochenta,

las estrategias de negociación que impulsaron las empresas grandes fue la de fragmentación sindical, entonces empezaron a existir 20 sindicatos en una empresa (...) quien ejercía el rol mediador eran los partidos, entonces había una CUT muy fuerte y los sindicatos, que eran de empresa (...) quien jugaba el eslabón intermedio eran los partidos de izquierdas y la DC, eso en la década del cincuenta y del sesenta, ese era el sistema del movimiento sindical en Chile (...) eso se rompe durante la dictadura y no se logra reconstituir ese vínculo orgánico que había en el pasado, los sindicatos quedan a la deriva... y hay un cierre completo del mundo empresarial a cualquier libertad de sindicalización, con mucho control, el resultado fue un debilitamiento de la sindicalización y una mantención de conflictos, pero de baja intensidad (comunicación personal, 3 de noviembre de 2014).

Luego de implementadas las reformas y superada la crisis de 1982, las cifras de desempleo comienza a caer significativamente, mostrándose especialmente reducidas durante los años noventa. Así, la implementación de esta reforma fue clave para la puesta en marcha de las políticas neoliberales, mientras la desregulación y flexibilización del mercado del trabajo fueron piezas fundamentales para un modelo de desarrollo que buscaba promover la eficiencia económica y fortalecer la inversión privada e individual.

²⁰ Período 2000-2005.

Revolución capitalista y reestructuración social: primeras pistas para entender la desmovilización post-dictatorial

Hacia el final de la dictadura militar, la Concertación de Partidos por la Democracia tuvo que decidir entre un cambio radical al modelo económico y retornar al Estado intervencionista de ataño, o aceptar las nuevas regulaciones políticas y económicas aunque con ajustes en términos de equidad social y eficiencia económica (Muñoz, 2007). Al asumir el gobierno en 1990, la alianza concertacionista consideró que no era posible experimentar con un nuevo modelo socio-económico tal como había sido sometido, y con alto costo, el país en las últimas décadas. De esta manera y dado el crecimiento económico generado en los últimos años dictatoriales, la Concertación optó por la profundización del modelo de libre mercado aunque imponiendo un sello social y foco en una democracia inclusiva. Como señala Muñoz, los resultados apoyaron esta decisión, ya que al final de la tercera administración de la Concertación (Ricardo Lagos), el apoyo al gobierno llegó al 70%, uno de los más altos alcanzado por un presidente chileno, sólo superado por Michelle Bachelet, con un 80% de aprobación hacia el final de su primera administración.

En términos socio-económicos, la revolución capitalista puesta en marcha por Pinochet supuso un cambio radical en el país que experimentaría un acelerado proceso de modernización desde mediados de la década del ochenta. Sólo durante los primeros dos gobiernos democráticos, el crecimiento económico del país dobló el promedio de crecimiento de América Latina con el mejor desempeño de los países de la región (Raczynski, 1999). El crecimiento se dio en paralelo a indicadores financieros y macroeconómicos positivos tales como ahorro y tasas de inversión, un balance fiscal consolidado, un alto grado de apertura económica y desarrollo de los mercados de capitales. Asimismo, el país redujo sustancialmente sus niveles de pobreza y desempleo, e incrementó su índice de desarrollo humano, la cobertura educacional, indicadores de salud e ingreso *per cápita*. Más aún, Chile ha sido definido como el mejor país para nacer en dentro de América Latina basado en calidad de vida y libertad personal.²¹ Dado el positivo rendimiento, en 2010 Chile se convirtió en el primer miembro sudamericano de la OCDE, reflejando el reconocimiento internacional de las políticas económicas y sociales del país, un modelo que ha sido bautizado como “the Chilean way” (Jara, 2014).²²

²¹ De acuerdo con el Economist Intelligence Unit Index 2013, http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0814

²² Los cambios estructurales hasta aquí detallados e impuestos en Chile durante la dictadura son los que permiten entender el proceso de desmovilización. Esto pues dichas reformas generan una refundación capitalista en la sociedad, lo que se define por bienestar y por derechos, el tipo de Estado y la relación que desde entonces establece con la sociedad civil. Estos cambios también definen un nuevo modelo de participación y una nueva definición de lo que implica ser ciudadano, dónde deben ser canalizadas sus

Tabla 5.4. Indicadores socio-económicos, 1990-2011

Indicador	1990	1996	2000	2003	2006	2009	2011
PIB <i>per capita</i> , PPP (actual internacional \$)	4,270	7,770	8,910	9,820	12,080	14,200	16,330
Crecimiento PIB (anual %)	3,70	7,41	4,49	3,92	5,69	-1,04	5,99
Expectativa de vida al nacer, total (años)	73,6	75,3	76,8	77,9	78,4	78,8	79,0
Tasa de mortalidad (por 1,000 nacidos vivos)	15,7	10,8	9,1	8,2	7,9	7,7	7,7
Índice de pobreza a nivel nacional (% de la población)	38,6	23,2	20,2	18,7	13,7	15,1	14,4
Índice de desarrollo Humano***	0,702		0,759	0,789	0,791	0,808	0,817

Fuente: Jara (2014: 31).

Esta modernización acelerada de la mano de una revolución capitalista con cambios en los principios que rigen la vida social tuvo como correlato una transformación sociológica, una mutación en los valores y actitudes de los individuos hacia la vida social. Así como a mediados del siglo XX el modelo de industrialización hacia adentro y un Estado promotor de los cambios generaron el desarrollo de una clase trabajadora y un sector industrial - encarnado en organizaciones gremiales y sindicatos - que vino a alterar las bases sociológicas de la sociedad chilena, hacia mediados de la década del ochenta las reformas estructurales vienen a remover los cimientos sociales tal como se conocían.

Tal como se ha presentado hasta este punto, el modelo neoliberal supuso una redefinición de la manera en que el Estado concibe el bienestar social, el trabajo como espacio de socialización y la manera en que los servicios sociales deben ser puestos a disposición a la sociedad, virando desde un paradigma centrado en lo colectivo hacia uno enfocado en el individuo. Luego del fin de la dictadura, se mantuvo dicha estructura de bienestar y de provisión de servicios sociales impuesta bajo el régimen, basada en sistemas de capitalización, aportes, responsabilidades y pagos individuales, y donde dichos servicios dejan de ser derechos para convertirse en mercancías a transar en un mercado en que el individuo se desenvuelve, se inserta, es definido y situado dependiendo de su poder adquisitivo. Con ello, la estructura de estratificación conocida hasta entonces sufre un cambio profundo, esto es, se genera una segmentación espontánea de la sociedad en términos de las capacidades de pago

demandas, etc. No es, por tanto, foco de esta investigación un análisis de las políticas económicas y sociales de la Concertación, para ello ver Drake y Jaksic (1999) y Schnbruch y Siavelis (2014).

individuales, revolucionando y complejizando las categorías de clase y estatus social hasta entonces conocidas. La pérdida de referentes identitarios de la mano de la erosión de las clases tradicionales, junto a un sistema que promueve y se basa en las acciones individuales en desmedro de los sujetos colectivos, entregan un retrato del escenario donde se enmarcan las posibilidades y el potencial de movilización de la sociedad civil de la transición democrática. Una de las consecuencias de esa alteración del paradigma de sociedad, se argumenta en este trabajo y se profundiza a continuación, fue la desmovilización y despolitización de la sociedad chilena una vez inaugurada la nueva democracia. Asimismo y como se profundiza en el próximo capítulo, los principales impactos de la imposición neoliberal permiten un acercamiento a la identidad colectiva que se volverá visible luego en el ciclo de movilizaciones 2011.

5.2 Influencia de la imposición del modelo neoliberal en la desmovilización de la sociedad civil

La radicalidad y el carácter estructural de los cambios impuestos en esos años tendrán profundas implicancias en términos sociales. Para Díaz y Martínez (1996), lo que ocurrió entre 1973 y 1992 es un proceso de desestructuración y reestructuración similar a lo ocurrido en Chile alrededor de la década del veinte con la crisis del salitre, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y la depresión de 1929. Sin embargo, apuntan los autores, el ciclo de transformaciones impulsados por la revolución capitalista tiene un impacto espacial mayor, una dirección estructural diferente y una mayor susceptibilidad dado que se transformó a la economía chilena en una más abierta y expuesta a situaciones de expansión o decline más rápidas e intensas que aquellas experimentadas a principios del siglo XX.

Los cambios que hasta entonces habían tomado dos o tres generaciones en producirse, tuvieron entonces lugar sobre una única generación de chilenos que se vio enfrentada de forma acelerada a una nueva realidad social. La llamada revolución capitalista, revolución pues implicó un cambio radical, profundo y refundacional que invirtió las bases de las relaciones sociales y de producción conocidas hasta entonces, asentó un proceso en que mutaron las condiciones materiales, se vio alterada la esfera socio-cultural y se vivieron profundas transformaciones en el campo intelectual. La modernización neoliberal trajo la génesis de una nueva matriz socio-política y con ello un nuevo sujeto social. Las relaciones preexistentes entre el Estado y la sociedad se vieron desarticuladas, la cosmovisión neoliberal se erigió y se enquistó en la sociedad y en la cultura, y los chilenos se vieron forzados a desplegar una capacidad adaptativa a las nuevas estructuras políticas, económicas y sociales en un nuevo contexto.

El carácter refundacional del régimen y la modernización neoliberal supusieron una acelerada yuxtaposición de nuevas y antiguas matrices culturales, una pérdida de valores y reglas de conducta tradicionales y su posterior reemplazo por nuevos componentes normativos. Este fenómeno, tal como se mencionara en el capítulo 1, tiende a provocar un reflujo ciudadano y anomia en la medida que para hacer frente a esta transición social y su correspondiente incertidumbre (percibida o no), los individuos se inclinan a buscar refugio en sus grupos de pertenencia y referencia más próximos en términos identitarios. El conflicto que sufre el individuo ante la contradicción de identidades, entre los fines o las metas que se ha propuesto y los medios existentes para alcanzarlos en función del lugar que ocupa en la estratificación social, genera momentos de confusión y desorganización, con actores tratando de entender los nuevos códigos culturales de una sociedad aún en formación.

La retracción se produciría por la ausencia de o por un conjunto normativo confuso derivado del debilitamiento de las principales instituciones sociales y bajos grado de integración social. Esto es, los cambio de estructuras, el paso a una sociedad industrializada, moderna o globalizada incide en las posibilidades de observar anomia dado que en dichas transiciones los vínculos que unen a los individuos con los grupos sociales o colectividades no son fuertes ni constantes. La pérdida de identidades sociales y la necesidad de asimilación de nuevos patrones culturales de una sociedad en crisis que da lugar a otra sociedad todavía no establecida, implica una situación heteróclita donde se mezclan las formas nuevas y antiguas de ordenamiento social. En estos contextos, la sociedad se fragiliza y los fines comunes o colectivos son prácticamente inexistentes, produciéndose un distanciamiento generalizado de los individuos respecto del orden establecido y el involucramiento público.²³

De esta manera, en períodos donde los referentes identitarios y culturales se diluyen, tiende a aumentar la importancia del dominio privado así como los procesos de particularización, atomización, apatía y desinterés individual respecto al curso que sigue la sociedad. En el caso chileno, estos procesos se ven potenciados por una cultura capitalista neoliberal que se enraíza, con la consecución de bienestar individual como premisa principal y la autorrealización de los individuos que se transporta desde la esfera pública hacia la vida privada. Y si bien, tal como se indicara en la sección anterior, durante los cuatro gobiernos de la Concertación (1990-2010) se desarrollaron una serie de exitosas modificaciones que buscaban mayor acceso y beneficios para un grupo más extenso de la población (tercera vía o neo-estructuralismo),²⁴ la matriz ideológica-cultural central impuesta durante la dictadura se

²³ Ver más detalles de esta teoría en capítulo 1.

²⁴ Al respecto ver, por ejemplo, Guillén (2007).

mantuvo. Como señala Ffrench-Davis (2003: 78), los gobiernos de la Concertación decidieron evitar los cambios radicales en el modelo económico y buscaron “un cambio en continuidad”, realizar reformas a las reformas, rompiendo con la naturaleza y tradición refundacional de los gobiernos precedentes y dando pie a un modelo neoliberal “corregido” (Garretón, 2012) o “bien temperado” (De la Maza, 2003), es decir, un modelo de libre mercado con necesarios correctivos de política social. Con ello, las consecuencias y efectos de la revolución capitalista son las que se vuelven relevantes en el marco de este trabajo para entender el panorama de desmovilización de la sociedad civil al retorno democrático.

En definitiva, los momentos de rápida modernización y transformación cultural, la generación de nuevos valores y sistemas normativos así como la yuxtaposición de claves culturales nuevas y tradicionales son fenómenos e ingredientes fundamentales para los períodos de reflujo, por tanto, de desmovilización social como aquel observado en Chile al retorno democrático. Dicho fenómeno socio-cultural estudiado por la sociología clásica se ve complementado y potenciado en el caso chileno con la imposición de un modelo que perseguía precisamente una privatización, individuación, exacerbación y el culto al placer personal, la desarticulación de sujetos colectivos y el fin de las grandes epopeyas o meta-discursos aglutinadores característicos de la fase que finalizara en 1973.

Los procesos de anomia, la pérdida de referentes identitarios así como el proceso de individuación se pueden desprender del hecho que los chilenos, en el curso de una sola vida, se vieron enfrentados en un breve período de tiempo a un nuevo sistema de estratificación acompañado de una enérgica movilidad social ascendente, que permitió el desplazamiento de grupos y actores sociales desde una determinada posición o un mundo social hacia nuevos espacios socio-culturales en el sistema de composición de clases. De la misma manera, el acceso al crédito y la transversalización del consumo, el crecimiento económico y el aumento exponencial del ingreso *per capita*, facilitaron un clima de fascinación y euforia por las posibilidades ofrecidas por el mercado, mientras los espacios de debate y deliberación política propios de las décadas precedentes perdían relevancia e interés ciudadano. Finalmente, la celeridad del crecimiento económico y el acceso generalizado a servicios y a un consumo antes restringidos a ciertos grupos sociales, masificó un imaginario respecto a las posibilidades entregadas por el modelo a la par de la emergencia de nuevas cosmovisiones como la meritocracia y el emprendimiento, ambas formuladas en clave individual. Estas grandes transformaciones sociales y la manera en que influyeron derivando en un cuadro general de desmovilización o subsidencia de la sociedad civil hacia la redemocratización, son desarrollados a continuación.

5.2.1 Reformas estructurales y nueva estratificación social: hacia un país de propietarios y no de proletarios²⁵

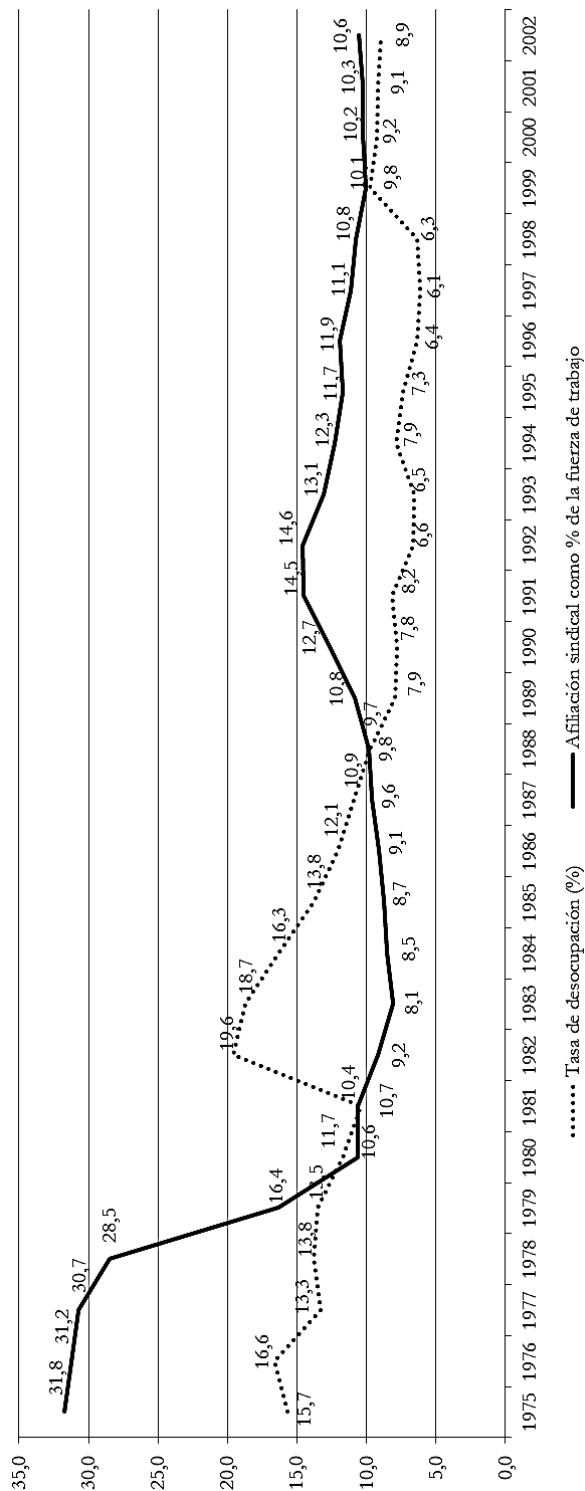
Tal como se ha podido comprobar en secciones y capítulos anteriores, los ciclos de movilización de las décadas del setenta y ochenta en Chile tuvieron claros protagonistas. Por una parte, el movimiento de trabajadores, obreros o proletarios, figura central del período del ‘gobierno de los trabajadores’ de la Unidad Popular, formado por un incipiente modelo de industrialización y el desarrollo urbano característico de mediados del siglo XX; el movimiento campesino que, entre 1970 y 1973 desplegó iniciativas desafiantes a la estructura de la hacienda y acciones directas para acelerar la expropiación de fundos una vez impulsada la reforma agraria (Salazar y Pinto, 1999a); y finalmente, el movimiento y organizaciones populares, principales actores de las jornadas de protesta y oposición al régimen militar. La irrupción de la modernización neoliberal,²⁶ la influencia de las reformas estructurales y el cambio en el modelo de acumulación, tuvieron un fuerte impacto social y político y facilitaron un proceso de desarticulación de dichos movimientos y la imposibilidad de reconstruirlos una vez retornada la democracia por una multiplicidad de razones.

El nuevo plan laboral introducido en 1979 y los cambios a la estructura productiva provocaron un profundo cambio en la fisonomía de la clase trabajadora tradicional o conocida hasta entonces. Tal como se observa en las figuras 5.4 y 5.5, una vez dictado el nuevo Plan Laboral de 1979, la tasa de afiliación sindical respecto a la fuerza de trabajo cae prácticamente 20 puntos porcentuales entre los años 1979 y 1980, para lograr aumentar sólo hacia finales de los ochenta y mantenerse en torno al 10% durante período post-dictadura.

²⁵ Pinochet, entrevista en *El Mercurio* - 24 de abril 1987 y en franja televisiva del SI (ver película NO 1:03:00).

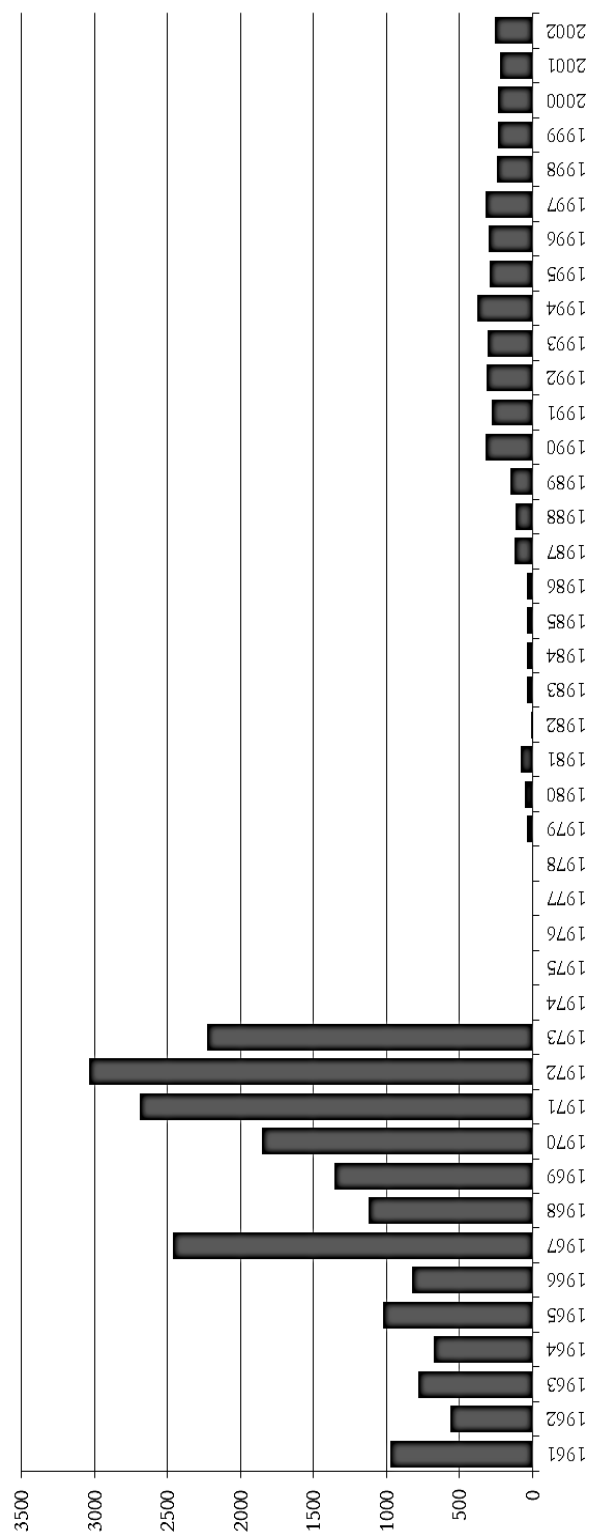
²⁶ A lo que es necesario agregar la fuerte represión a la que se sometió a estos movimientos, para ello ver capítulo 3.

Figura 5.4. Evolución tasa de desocupación y afiliación sindical 1975-2002



Fuente: Cifras de desocupación: Instituto Nacional de Estadísticas y Mizala y Romaguera (2001);
Cifras de afiliación sindical: Armstrong y Águila (2006: 373–374).

Figura 5.5. Número total de huelgas en el país 1961-2002



Fuente: Cifras de Armstrong y Águila (2006: 373-374)

Asimismo, luego del efecto de la reforma laboral y en línea con el propósito desmovilizador del régimen, se observa una fuerte caída en el número total de huelgas para cada año a partir de 1973 - sin registros de huelgas para el período de represión más severa, 1973-1979 - y un modesto recuento desde 1979, tendencia que se mantiene durante la democratización con una evidente ‘fractura’ o ‘descomposición’ del movimiento sindical tradicional (Véjar, 2012).

Además de la contracción del poder de huelga y organización, Martínez y Díaz (1996) señalan que a partir de la década del ochenta la fuerza de trabajo chilena sufre una serie de alteraciones: junto a cambios en la estructura sectorial, destaca el proceso de desindustrialización y el aumento del trabajo asalariado en general, pero especialmente en el sector terciario pese al decline pronunciado del empleo público. Entre 1976 y 1992 se originan cambios sustanciales en la distribución espacial de los trabajadores asalariados con un crecimiento mayor del empleo urbano sobre el empleo rural así como un cambio en la composición de género con un aumento en la participación laboral de la mujer especialmente en los sectores primarios y terciarios de la economía nacional. De igual forma y aun cuando la mayor expansión de la fuerza laboral se concentró en las tres principales ciudades del país (Santiago, Valparaíso y Concepción), se observó una descentralización laboral al aumentar la importancia relativa de las ciudades más pequeñas. Los procesos de privatización estimularon asimismo el tamaño de la clase empresarial que se triplicó incrementando la dispersión, desconcentración y atomización de los trabajadores asalariados en unidades productivas como firmas y empresas de pequeños y mediano tamaño.

El análisis de la evolución de la estructura ocupacional realizado por ciertos autores (Martínez y León, 2001; Ruiz y Boccardo, 2014; Wormald y Torche, 2004) coinciden al retratar estas tendencias, esto es, una disminución de los segmentos sociales vinculados con actividades agrícolas, transformaciones significativas en el ámbito urbano relacionadas con una caída en la significación de la clase obrera productiva, la terciarización de la fuerza laboral y una burocratización del trabajo asalariado bajo la organización privada. La caída sostenida de la población económicamente activa (PEA) en el área agrícola y campesina así como en la clase obrera industrial contrasta con el fuerte aumento en los sectores medios asalariados y de los trabajadores del comercio y los servicios, lo que permite apreciar la transformación de la estructura laboral de las clases sociales más relevantes durante el período previo a la revolución capitalista (ver tabla 5.5).

Tabla 5.5. Significación numérica de categorías sociales, 1971-2009. Porcentajes de la PEA nacional.

Categorías sociales	1971	1980	1986	1990	1995	2000	2005	2009
<i>En agricultura, silvicultura, caza y pesca</i>								
Empresarios agrícolas	0,3	0,4	0,9	0,9	0,6	0,5	0,4	0,4
Asalariados agrícolas	10,1	6,5	9,8	9,5	7,7	7,2	6,6	5,9
Campesinado y colonos pobres	8,3	7,5	8,1	7,9	6,6	5,6	5,3	4,2
Resto PEA agrícola no clasificada en otro grupo		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Subtotal	18,7	14,6	18,9	18,4	15	13,4	12,5	10,6
<i>Fuera de la agricultura, silvicultura, caza y pesca</i>								
Empresarios no agrícolas	1,3	1,4	2,2	3,2	2,6	2,4	2,4	2,2
Sectores medios asalariados	18,4	20,3	21	23,6	26,4	26,5	28,9	29,7
Sectores medios independientes	7,8	9,2	5,7	6,2	8,1	8	7,9	7,4
Artesanado tradicional	6,2	5,2	4,8	5,1	5,3	5,3	4,9	4,9
Clase obrera minera	1,3	1,3	0,7	1,0	0,8	0,5	0,4	0,5
Clase obrera industrial y de la construcción	25,8	11,1	10,0	12,1	13,2	10,4	10,9	10,1
Clase obrera del comercio y los servicios	7,4	12,0	11,9	12,7	13,1	14,6	14,7	15,9
Grupos marginales	9,6	10,4	11,9	12,0	10,8	10,6	10,4	10,1
PEM y POJH	0,0	3,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cesantes y BTPV	3,1	10,4	8,8	5,7	4,7	8,3	6,9	8,6
Resto	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Subtotal	81,7	85,4	81,1	81,6	85,0	86,7	87,5	89,5
Total categorías sociales	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Ruiz y Boccardo (2014: 47).

Tal como señalan Ruiz y Boccardo (2014), el fenómeno de la modernización del mercado laboral se ve reflejado en el proceso de asalarización, terciarización de la estructura productiva, pero también en la introducción de nuevas formas de contratación. Con ello, las reformas laborales de la época dictatorial facilitaron un mayor dinamismo y un aumento significativo en las oportunidades de empleo, especialmente el calificado, pero en un contexto sumamente flexible caracterizado por una fuerte rotación, inestabilidad y movilidad laboral. Se advierte una preponderancia de posiciones dependientes o asalariadas en condiciones contractuales flexibles, esto es, subcontratados, con contratos parciales o en ausencia de relación contractual, así como trabajadores autónomos prestadores de servicios o de tiempo parcial. Con ello, los lazos de pertenencia del trabajador tanto con la empresa así entre los propios trabajadores se erosionan y se vuelven flexibles al igual que el mercado laboral que los contiene, mientras las posibilidades de acción y generación de identidad colectiva se encuentran con impedimentos tanto legales - el detrimento de la negociación colectiva y el derecho a huelga - como estructurales (PNUD, 1998; Roberts, 1998). Esta serie de fenómenos está lejos de generar un proceso de homogeneización de la clase

trabajadora, volviendo más difusos los límites o categorías de la fisonomía del trabajo tradicional y la distinción entre trabajadores dependiente e independientes, afectando con ello tanto a la identidad por oficio como a la identidad colectiva (Ruiz y Boccardo, 2014).

De esta forma, a medida que la estructura ocupacional se transformó y la relación asalariada tradicional - empleador, vínculo de subordinación, dependencia relativamente estable y estipulada a través de un contrato - fue perdiendo presencia. Fue reemplazada luego por formas asalariadas más flexibles, variadas y atomizadas, las relaciones comenzaron a ser marcadas por un proceso de individuación y detrimento de un ‘interés’ o ‘conciencia’ de clase definida, sin que ello implicara la rearticulación de un agente clasista con un proyecto y discurso común (Wormald y Torche, 2004). Como señala Roberts (1998), trabajadores diferenciados por estatus legal, por condiciones de empleo y salario, han optado por estrategias individualistas para la consecución de movilidad económica, erosionando la capacidad de construcción de una identidad colectiva. Por lo tanto y más allá del impacto del Plan Laboral de 1979 y del significado económico de los cambios en la matriz productiva-laboral, la ‘desobrerización’, la terciarización y la burocratización del trabajo asalariado bajo la organización privada generaron un enorme impacto sobre el sindicalismo, actor que históricamente constituyó sus formas de acción a partir de la alianza entre burócratas públicos y obreros industriales (Martínez y León, 2001: 16).

Así, los cambios iniciados durante la dictadura y consolidados luego al retorno democrático facilitaron la desintegración de una clase obrera tradicional, es decir, masculina, industrial y/o agrícola, con trabajadores concentrados en empresas mayoritariamente propiedad del Estado, con vínculos laborales de subordinación y mayor estabilidad. El cambio en el aspecto de lo que tradicionalmente se denominó ‘clase trabajadora’ permite que, hasta la actualidad, el movimiento de trabajadores en Chile permanezca disperso, fragmentado y difuso, con una CUT que logra una baja adherencia, poder de convocatoria y negociación con el Estado, aglomerando a cerca de un 10% de los trabajadores, lejos del 32% registrado previo a 1973 (Roberts, 1998). Así y sin exagerar, es posible señalar que los cambios y la nueva fisonomía de la clase trabajadora implicó la desintegración del movimiento trabajador, protagonista de los ciclos de movilización de décadas precedentes.

Los fenómenos hasta aquí descritos han permitido sin duda una modernización de la arena laboral chilena, un aumento en las posibilidades para la clase trabajadora junto a una mayor oferta de empleos,²⁷ al mismo tiempo que se generaran “las paradojas de la modernización del trabajo asalariado: más oportunidades y más incertidumbres”

²⁷ El desempleo representa sólo un 6% al año 2015.

(Ruiz y Boccardo, 2014: 51). Tal como lo señalara el informe del PNUD (1998), mientras las oportunidades laborales habían aumentado de modo sostenido, la flexibilización del empleo incrementó de igual modo los riesgos. Se erigía entonces en este período una preocupación central no tanto la estabilidad del empleo actual, sino por el proceso potencial y permanente de reinserción laboral en un mercado extraordinariamente móvil y un futuro incierto que exigía la capacidad de adaptación de las personas a una fuerte rotación del empleo.

La pérdida de certezas y seguridad en un ambiente cambiante, así como la exigencia de una capacidad adaptativa, tal como se planteara, son ingredientes constitutivos de períodos de retracción y privatización social. Y si bien estas transformaciones pueden reconocerse a nivel global - tendencia a la flexibilización, alta rotación laboral y una gran incertidumbre - en Chile estos fenómenos se dieron de manera acelerada, marcando los procesos de pérdida de identidad y organización colectiva con gran celeridad. La clase trabajadora incrementa su complejidad y su heterogeneidad, encontrándose aún en un temprano estadio en la configuración de una matriz de categorías sociales más definitiva o consolidada que pudiera dar paso, si es que alguna vez vuelve a producirse, a un nuevo tipo de orgánica capaz de movilizar a los trabajadores chilenos a la usanza del pasado (ver Becerra (1998) y Frank (2005)).

Otro cambio fundamental introducido por la modernización neoliberal, aparejado con el dinamismo laboral y que permite entender el fenómeno de la desmovilización, fue la vigorosa reducción de los índices de pobreza a partir de los años noventa. Tal como se adelantara en la sección anterior, en un breve período de tiempo, los niveles de pobreza²⁸ disminuyeron desde 5,5 millones de personas en 1987, a 5,2 en 1990, a 4,3 millones en 1992, a 3,9 en 1994 y a 3,3 millones en 1996 (Raczynski, 1999), que en términos porcentuales implica que el número de pobres en Chile decreció desde un 45,1% en 1987 a 23,2% en 1996. Dentro de este célebre resultado en la evolución de su magnitud absoluta y relativa, Meller (1999) destaca la velocidad de la misma ubicando a Chile con la reducción más acelerada entre países con experiencias exitosas de disminución de pobreza en la década del noventa en el mundo (Indonesia, Malasia, Brasil, Pakistán, Costa Rica y Colombia).²⁹

Respecto a las causas de dicha contracción, los estudios de Larrañaga (1994) y Meller (1999) debaten respecto a la preponderancia de factores puramente macroeconómicos y la influencia de las políticas de reducción de pobreza impulsadas por los gobiernos de la Concertación a partir de 1990. Para el primer autor, la

²⁸ Medidos con indicadores de ingreso *per capita* de los hogares y el costo de una canasta básica de alimentos.

²⁹ El autor se refiere al estudio de Cowan y De Gregorio (1996) "Distribución y pobreza en Chile: ¿Estamos mal?, ¿ha habido programas?, ¿hemos retrocedido?", *Estudios Públicos* N° 64, pp. 27-56.

maximización del crecimiento económico (a tasas promedio de 7% hacia el final de la dictadura y la primera etapa de la transición) habría redundado en la pujante generación de fuentes de empleo, por una parte, y por otra, en el aumento de las remuneraciones reales, ambos mecanismos que explicarían mayormente la merma de la pobreza en Chile. Esto es, los sectores populares se beneficiaron ampliamente de una economía expansiva, con más de 560.000 empleos creados y un aumento en los salarios de un 10,5% entre 1989 y 1993, mientras el sueldo mínimo se amplió en más de un 33% en ese período (Roberts, 1998). Para Meller, en cambio, el alto ritmo de crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para disminuir y erradicar exitosamente los índices de pobreza. Para este autor, la incidencia del alto ritmo de crecimiento económico es sin duda un factor explicativo, pero que en el caso Chileno se complementó con la eficiencia de las políticas sociales para este fin llevadas a cabo por la Concertación.³⁰

Sin embargo y más allá de la influencia del modelo económico o el impacto de las políticas públicas como explicaciones atribuidas al fenómeno del descenso de la pobreza, lo cierto es que en el Chile de la transición este índice se reduce a la mitad, implicando que 2,2 millones de personas dejaron de ser pobres o vulnerables sólo en la primera mitad del retorno democrático, en un lapso de únicamente 10 años. En términos de la desmovilización social luego del fin de la dictadura, este hecho es de crucial relevancia. Tal como se ha mencionado en otros momentos en este trabajo, así como el movimiento obrero y campesino - de carácter orgánico y fuertemente ligado a los partidos políticos - cobraron protagonismo asumiendo el liderazgo de la movilización social de las décadas del sesenta y setenta, el movimiento popular vino a reemplazar este centralismo en las movilizaciones de los años ochenta en oposición al régimen militar,³¹ como un movimiento más autónomo y distanciado del modelo vanguardista conocido hasta entonces. Si bien es necesario reconocer la heterogeneidad de los sectores pobres, sus diferentes orígenes, aspiraciones, expectativas y las tendencias políticas que constituían la existencia de grupos y subgrupos dentro de este mundo, en términos generales y asumiendo el riesgo de simplificar la compleja realidad social, es posible realizar una gruesa afirmación lineal: en el Chile de la redemocratización, gran parte de los pobres dejaron de ser pobres, desintegrándose con ello lo que había fundado el movimiento popular protagónico de

³⁰ Para Meller, el crecimiento económico explica la reducción de la pobreza en un 60% mientras las políticas sociales concertacionistas un 40%.

³¹ La emergencia de este sector como un segmento importante durante los años ochenta estuvo fuertemente influenciado por las primeras consecuencias de las reformas neoliberales, la crisis del año 1982, el aumento del desempleo y del trabajo precario o informal, engrosando con ello las filas del mundo popular.

los episodios de movilización precedentes.³² La fuerte movilidad social ascendente de los sectores populares, con todas las implicancias positivas para aquel segmento y para el desarrollo del país, tuvo como externalidad la disolución de la clase popular y, con ello, de una cierta identidad - la identidad *popular* - y de una fuerza colectiva potencial que representaba cerca de la mitad del país durante la década del ochenta. Las organizaciones que lograron sobreponerse, debieron adoptar nuevas líneas de acción o redefinir sus objetivos de acuerdo con las nuevas y cambiantes necesidades de sus miembros, abrazando muchas de ellas un importante nivel de institucionalización. Como señala Oxhorn (1994a: 752), luego de estas transformaciones del mundo popular, éste grupo se desmovilizó políticamente. Con ello, el escenario social del Chile de la redemocratización se mantendría despolitizado, fragmentado y con un déficit de participación social.³³

Asimismo y dada la naturaleza de las políticas sociales concertacionistas para la superación de la pobreza antes descritas, se situó a la competencia y el micro-emprendimiento personal como mecanismos principales para el mejoramiento de la vida de los pobladores. Con esto, las prácticas y hábitos colectivos característicos del contexto de precariedad material de los años ochenta, fue reemplazado por las lógicas individuales en el escenario de abundancia de los años noventa. Como lo constatan distintos autores (Hipsher, 1996; Posner, 2008; Roberts, 1998), las políticas de la Concertación se basaron en subsidios para la solución individual de problemas sociales y fomento a la producción microempresaria privada para actividades de cooperación colectiva en un contexto de necesidades apremiantes (como talleres de trabajo comunitario y ollas comunes).³⁴ Lo anterior, entrañó una inmersión del mundo popular en lógicas “altamente localizadas y particularistas, menos inclinadas a la movilización política, prácticamente aisladas de la actividad sindical u otras redes horizontales, y más orientadas a encontrar soluciones privadas en los nichos existentes en el mercado y en los programas de gobierno que a articular demandas sectoriales de base amplia”(Roberts, 1998: 156). Para Posner (2008), los grupos e individuos que en el pasado reciente se habrían reunido para hacer presión al Estado por sus necesidades comunes, dichas demandas en el nuevo contexto serían reclamadas a través de elegibilidad y competencia por la adquisición de recursos públicos, lo que fue acentuando el proceso de estratificación e impidiendo la unidad inter e intra clase. De

³² Como señala Salazar (2006), entre 1983 y 1987 y pese a la fuerte represión del período, al menos 22 revueltas de pobladores estallaron que se diferenciaban marcadamente de las movilizaciones colectivo-reivindicativas del período previo a 1973.

³³ Para mayor detalles sobre la desmovilización del mundo popular durante la transición a la democracia ver Oxhorn (1989, 1994a, 1995).

³⁴ Ver Campero (1987); Hardy (1987) y Razeto *et al.* (1990).

esta manera, la fragmentación del movimiento obrero durante la dictadura fue complementada con la atomización de un movimiento poblador que prácticamente desaparece de la escena social hacia principios de los noventa (Barrera, 1998).

El fenómeno de la movilidad ascendente de un grupo importante de chilenos entrada la democracia influye en la desmovilización y reflujo social del período no sólo porque origina la disolución del movimiento popular y del movimiento tradicional de trabajadores, sino también por la constitución de una nueva clase media emergente amplia, heterogénea y difusa, con acceso a un nuevo bienestar material y nuevos estilos de vida. Así, el “estilo de vida obrero” predominante en las décadas previas, es reemplazado por un estilo de vida mesocrático ampliamente hegemónico en el Chile post-dictadura (Martínez y León, 2001:16). Como señalan Ruiz y Boccardo (2014), los procesos de movilidad social implican la extensa incorporación de nuevos contingentes a nuevas posiciones sociales en un proceso de mesocratización en que se constituye una nueva clase media. Este nuevo segmento poseería escasos elementos de cohesión en su interior y alta heterogeneidad, constituido en su mayoría por grupos provenientes de otras clases de que se desestructuran. Para los autores, entender este fenómeno resulta crucial para analizar la constitución de condiciones que hacen posible la formación de clase y con ello las bases de la acción colectiva. En este sentido, una movilidad social y una rotación laboral aceleradas tienen importantes consecuencias en la manera en que los individuos (ya sea en su generación o intergeneracionalmente) se definen a sí mismos, pues se produce al mismo tiempo una celeridad pérdida de referentes identitarios sin un reemplazo en el corto plazo. En términos de acción colectiva, se vuelve más difícil encontrar un discurso aglutinador que sea capaz de interpelar, de agrupar y de generar una especie de compromiso o una demanda común entre grupos altamente heterogéneos. La constitución de las bases para la acción colectiva se ve así obstaculizada.

Una mayor diferenciación productiva y social de la matriz de clases y con ello una mayor distinción social y cultural al interior de los distintos segmentos sociales redundan en que, aun cuando se mantengan niveles de organicidad, se generen fundamentos de clase relativamente débiles, esto es, adhesión a intereses y a un proyecto común (Wormald y Torche, 2004). Sin embargo y pese a la gran diferenciación que se produce al inicio de la década del noventa como producto de los cambios estructurales y económicos, la adhesión subjetiva de clase a la que se circunscriben la gran mayoría de chilenos era la clase media. Los datos describen un porcentaje de identificación con el nivel socioeconómico medio de los chilenos en

cifras en torno al 80% (Alvarado, 2010),³⁵ dando pie a una amplia discusión y línea investigativa respecto a qué es lo que se entiende y se define como clase media.³⁶ Como señalan Barozet y Fierro (2011), las identidades de dicho segmento en Chile se estructuran en negativo, es decir, en función de un recuerdo de un grupo social que existió y se benefició del apoyo del Estado en décadas anteriores, pero que ya no es posible reconocer. En los grupos focales analizados, muchos experimentan grandes dificultades para definir lo que son en el marco de una sociedad que ha sufrido una amplia movilidad social y en que los hijos e hijas no comparten la identidad de clase de los padres. Para los autores, las recomposiciones identitarias y de clase son mucho más fluctuantes cuando las generaciones no poseen una identidad común y, al no existir identidades de clase media fuertes, se dificulta precisar si éstas entran en contradicción con atributos externos o políticos. Para Martínez y León (2001), hacia finales de la dictadura el panorama general estuvo marcado por la tendencia a la desestructuración, donde los actores sociales no mostraban probabilidades nítidas de constitución sino, al contrario, las perspectivas apuntaban a la disyuntiva de una revuelta de masas contra el poder político, o a una atomización de la sociedad civil y la consecuente sumisión individualista. La segunda opción pareció haber tomado el protagonismo pese a que este árido panorama fue evolucionando y dando pie a la conformación de una gran clase media orientada por las pautas de mercado.

El fuerte cambio en la matriz social de Chile y un nuevo sistema de estratificación acompañado de una enérgica movilidad social ascendente, permitió el desplazamiento de grupos y actores sociales desde una determinada posición o un mundo social hacia nuevos espacios socio-culturales en el sistema de composición de clases. Se complejizó así el proceso de estratificación, se generaron múltiples capas y con ello, se propone en este trabajo, se diluyó un sentido de pertenencia y de identidad colectiva durante la década del noventa. Este fenómeno se desplegó de la mano de un deterioro de la sociabilidad, un alto grado de desconfianza, una asociatividad precaria, la descomposición de las identidades colectivas tradicionales, e incluso cierto debilitamiento de la cohesión intergeneracional de la familia (PNUD, 1998).

La lógica desestructurante de una modernización acelerada y un cambio de régimen político a principios de los años noventa involucró a los trabajadores, grupos populares, clases medias y también a las organizaciones sociales que habían nacido al alero y en oposición al régimen militar. Durante la dictadura, floreció un entramado de organizaciones de la sociedad civil - organizaciones de Iglesia, organismos no

³⁵ De la encuestas Encuesta de Cohesión Social en América Latina 2007 y la Encuesta Nacional de Opinión Pública, ICSO-UDP 2008.

³⁶ Ver por ejemplo Alvarado (2010); Barozet y Fierro (2011) y Espinoza y Barozet (2008).

gubernamentales (ONGs), asociaciones políticas, etc. - en apoyo a los sectores afectados por el régimen político, por las reformas económicas y por la reducción del gasto social, que se constituyeron en oposición y lograron levantar un proyecto de participación popular y desarrollo de pensamiento crítico y de solidaridad (Raczynski, 1999). Para Bastías (2013), una de las explicaciones para el auge de esta sociedad civil en el período post-dictatorial se debe en parte al gran flujo de dinero proveniente desde los países desarrollados (iglesias cristianas extranjeras, agencias de desarrollo y gobiernos de países europeos), mientras que su declive lo atribuye al cambio de régimen y a la suspensión de recursos en la coyuntura transicional.

Sin embargo y ya sea por el cambio en las condiciones de financiamiento, como por el fin del discurso, agenda o razón de ser de las organizaciones una vez depuesta la dictadura, lo cierto es que muchas entraron en crisis, debiendo replantear su identidad y objetivos una vez iniciada la democracia. Este período de transición implicó la disolución de diversas organizaciones, mientras supuso un esfuerzo adaptativo importante para las que lograron sobrevivir, con un repliegue de muchas de ellas a un proceso reflexivo y de adopción de nuevas estrategias dentro de un contexto de libre mercado. Con ello, muchas de las organizaciones se redefinen y se transforman en pequeñas empresas, organismos consultores o ejecutores de proyectos de un Estado que comenzó a externalizar sus funciones, irrumpiendo la lógica de la auto-generación de recursos para su funcionamiento y la competencia por fondos para asegurar su sostenibilidad. Como señala Francis Valverde, integrante del directorio de la Asociación Chilena de ONGs ACCION, a principio de los noventa,

en el mundo de la sociedad civil organizado en instituciones como ONGs empezó el tema de la *projectitis* como fundamento de relación, se acaba toda la cooperación internacional para las ONGs en Chile o se vehiculiza a través de la AGCI, la Agencia Internacional de Cooperación del gobierno, y ellos canalizan todos los recursos que no llegan a las ONGs, por un parte. Y por otra parte, también hay un tema, y ahí muere un porcentaje enorme de instituciones: se exige profesionalización, tienen que saber hacer proyectos, tienen que saber hacerlos bien, tienen que tener indicadores, variables (comunicación personal, 7 de noviembre de 2014).

De esta manera, el mundo de las ONGs no escapó a las consecuencias del enérgico proceso de modernización del país, a la reestructuración social y a la descomposición de las identidades colectivas que se habían constituido bajo el régimen dictatorial. Frente a transformaciones estructurales, diversas organizaciones se centraron en la sobrevivencia a corto plazo y a todo costo, muchas se fueron transformando

paulatinamente en ejecutoras de políticas sociales de índole neoliberal a través los fondos gubernamentales destinados a la inversión social asignados por medios de concursos (Gruninger, 2003). La naturaleza y razón de ser de las organizaciones se transforma, así como su vínculo con el Estado, sus objetivos, líneas de acción, estrategias y grados de profesionalización, que en muchas ocasiones debieron ser planteados y replanteados para ajustarse a los requerimientos del nuevo contexto. Como otra expresión del mundo del laboral en Chile, las ONGs se vieron enfrentadas a un nuevo escenario definido por el dinamismo, la flexibilidad, la primacía de la eficiencia y la rotación, lo que implicó importantes trabas para el desarrollo de los movimientos y organizaciones sociales que no lograron ser funcionales a este escenario, contribuyendo a su decline al comienzo de la transición. Como señala González (1999: 20–21), las situaciones antes descritas estimularon en las organizaciones un replanteamiento de sus campos ideológicos, de su relación con el Estado, de sus planos temáticos, políticos e institucionales y de sus modalidades de financiamiento, proceso reconstructivo que contribuyó a “una baja del rol que ellas esperaban cumplir durante los años 90 como instituciones de fomento de la sociedad civil, las organizaciones populares y los movimientos sociales”.

La atomización, dispersión y confusión identitaria de los sectores populares, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil se vio apalancada así por un proceso de estratificación que vino a complejizar las categorías de la matriz social tradicional pre-dictatorial producto de la expansión económica, una fuerte movilidad social y el acceso a mejores condiciones materiales de vida una vez inaugurado el retorno democrático. Como señala el Informe PNUD (2002: 64), en este período se produce un “vaciamiento de la identidad colectiva” de los chilenos, con dificultades para definir las dinámicas, percepciones y valoraciones que determinan los sentidos de pertenencia de los ciudadanos, con identidades que dejan de ser obvias o se observan como categorías que corresponden a otras personas y a otros tiempos.

Y así como el Estado desarrollista generó la emergencia de una clase proletaria y el panorama social chileno de mediados del siglo XX se constituyó mayormente en torno a las clases altas y las clases trabajadoras y populares, la revolución neoliberal diversificó tales distinciones generando un nuevo sistema de clases para el Chile moderno. Autores como Posner (2008) indican que esta mayor estratificación es también resultado del tipo de Estado de Bienestar que se constituyó a partir de las reformas estructurales neoliberales. Para este autor y tal como se presentó en la sección anterior, la transferencia de los servicios sociales a un sistema de capitalización o de propiedad individual reforzó un modelo de estratificación y fragmentación entre

tipos de trabajadores, tipos de ingreso y género, obstaculizando la unidad entre diferentes segmentos en torno a temáticas comunes.

De esta manera, el neoliberalismo cambió la estructura productiva, el sistema de clases y las formas de integración social que hasta entonces se conocían, redundando en que hoy en día cada chileno es “dueño” de su propio capital individual, no sólo en términos de bienes materiales y de servicios que se ofertan en un amplio y diverso mercado laboral, sino también de su propio bienestar. Esto, en la medida que la educación, salud, previsión y, en definitiva, su presente y su futuro, dependen de igual forma de su capacidad adquisitiva en un libre mercado. Se cumple con ello los vaticinios y anhelos de Augusto Pinochet hacia mediados de la década del ochenta, donde aseguraba que Chile se transformaría “en un país de propietarios y nunca más de proletarios”.

5.2.2 La masificación del consumo y del endeudamiento como inhibidor del movimiento y organización colectiva

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos, y se participa en un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo (García Canclini, 1995: 42–43). Según este autor, el acto de consumir se ha definido también como un momento del ciclo de producción y reproducción social, esto es, como el espacio en que se completa el proceso iniciado al generar productos, donde se realiza la expansión del capital y se reproduce la fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva, no serían sólo las necesidades o los gustos individuales los que determinarían qué, cómo y quiénes consumen, sino que estas pautas estarían definidas también por las grandes estructuras de administración del capital y el modo en que se planifica la distribución de los bienes. Para Moulian (1998), consumir es una operación cotidiana e imprescindible ligada a la reproducción material pero también espiritual, es decir, cognitiva, emocional y sensorial de los individuos además de un acto ordinario ligado al desarrollo vital y el objetivo del intercambio incesante del trabajo humano.

Los cambios en la matriz socio-política que define la relación entre el Estado, actores políticos y sociedad civil van al mismo tiempo acompañados de un cambio en el sentido que se le da a la acción colectiva y a la acción política misma (Garretón, 1991). Como se ha insistido hasta este punto, los procesos descritos transformaron en pocos años la estructura productiva y social y dieron pie a la desmantelamiento de la matriz socio-política clásica, a la relación e interacción entre el Estado, las formas de representación y las bases sociales propias del período del Estado-desarrollista, alterando entonces las posibilidades y el potencial de la movilización social

posteriores. Para el caso chileno, se han descrito algunas de las formas o las características de la matriz social que vino a reemplazar a la estructura de relación clásica entre el Estado, la sociedad civil y el mercado y, con esto, los impactos o consecuencias para el desenvolvimiento de los actores sociales en ella imbuídos. Al haber mutado la gran estructura de administración del capital y el modo en que se organizaba la distribución de los bienes, se produce un acceso acelerado y masivo al consumo de bienes y servicios - incluidos los servicios sociales - antes restringidos a limitados sectores de la sociedad chilena, erigiéndose como elemento clave de una nueva matriz social y revolucionando con ello la relación y la experiencia integral de los chilenos con el mercado.

Para Moulian (2002), la matriz desarrollista o populista se caracterizó por generar patrones de consumo basado en economías de pequeña escala y condiciones cíclicas, con un mercado interno que dependía de los ingresos de la fuerza de trabajo urbana conectada de una u otra manera a la industrialización, donde la magnitud de la demanda dependía fundamentalmente de los niveles de ingreso de estos trabajadores.³⁷ Al mismo tiempo, las relaciones sociales en el campo eran precapitalistas o semi-monetarizadas, con salarios pagados en parte en especies, con débil acceso al mercado urbano de bienes. El aumento de la demanda apalancado por los ingresos en la matriz populista, señala el autor, fue sustituido en parte por una masificación del crédito cuya disposición aumentó más rápidamente que el crecimiento de la economía. De esta manera, la irrupción de la modernización neoliberal y su proceso refundacional en términos económicos implicó que el país mutó desde una matriz populista a una matriz productivista-consumista. Tal como se propone y desarrolla a continuación, la masificación del consumo, el acceso al crédito y al endeudamiento confluyeron y de cierta manera confabularon contra un eventual proceso de movilización social al retornada la democracia.

Como señala Tironi (2003: 19), durante el período de la década del noventa y de la redemocratización en Chile, el crecimiento y el progreso se transformó en “euforia”. El país crecía a tasas del 8%, la inflación se contrajo, las cuentas fiscales adquirieron solidez, el desempleo se estancó y el ingreso *per capita* se duplicó en sólo siete años desde 2.625 dólares en 1990 a 4.956 dólares en 1997. El crecimiento de la economía, de los salarios y del poder adquisitivo, junto con el amplio acceso al crédito para la compra de bienes y servicios, implicó una serie de cambios culturales. Esta nueva realidad material supuso el florecimiento de nuevos estilos de vida abiertamente orientados hacia el consumo, con el placer y el individualismo como características

³⁷ Es por eso que la salida a las crisis tendían en este período a ser resultas a través de un alza nominal en los salarios, lo que redundaba en altos niveles de inflación.

centrales (Oppenheim, 2007). Como señala este último autor, las reformas económicas transformaron tanto la apariencia física como la cultura del país: altos y modernos edificios en Santiago, la proliferación de restaurants como Burger King o McDonalds, música, cine, videos y vestuario del mundo occidental, así como shopping malls, grandes cadenas de supermercados y tecnología, productos, servicios e infraestructura del mercado de bienes extranjero que fueron incorporados en el curso de unos pocos años al paisaje habitual de los chilenos.³⁸

En la euforia de la nueva sociedad de consumo que emergió luego de las reformas neoliberales, la mayoría de la población comenzó a acceder crecientemente a “bienes de consumo modernos” (Raczynski, 1999: 125). Como lo indican datos del Censo 2002 en tabla 5.6, en un lapso de sólo 10 años hubo un significativo aumento en el equipamiento de los hogares en términos de bienes como televisores a color, refrigerador, horno microonda, teléfonos de red fija y celular. Asimismo, los hogares que contaban con vehículos motorizados para uso particular aumentaron en 88,6% respecto a 1992.

Tabla 5.6. Equipamiento de hogares, 1992-2002

Tipo de Equipamiento	Censo 1992	Censo 2002
TV color	52,6	87,0
Videgrabadora	17,9	35,7
Mini componente y/o equipo alta fidelidad	30,3	66,4
Lavadora (programable y otra)	48,2	78,8
Refrigerador	54,6	82,1
Horno microonda	4,2	30,0
Teléfono celular	1,0	51,0
Teléfono red fija	23,6	51,5
Computador	-	20,5
Conexión a Internet	-	10,2
Conexión TV Cable / Satélite	-	23,9
Sin equipamiento	6,2	5,2

Fuente: XVII Censo de Población y de Vivienda (2003).

Este significativo cambio en la realidad material de los chilenos y el incremento en el nivel de consumo de bienes se dio aparejado a un aumento en los niveles de sofisticación, asimilación de patrones modernos y un cambio cultural donde los

³⁸ Para estudios más pormenorizados sobre el consumo y el endeudamiento ver, por ejemplo, Ariztía (2002); Marambio (2011), PNUD (2002) y Torche (1998).

mecanismos de mercado colonizaron las normas, actitudes y expectativas de los ciudadanos. La democratización coincidió entonces con un fuerte proceso de integración social y construcción identitaria a través del consumo como mecanismo principal. Como señala el Informe PNUD (1998), en el Chile surgido en los años noventa, participar del consumo de bienes y servicios implicaba una de las mayores modalidades de participación en el proceso social. Con ello, el fenómeno del reconocimiento y de pertenencia social se desplazan desde el mundo del trabajo a la dimensión del consumo, es decir, es a través de la adquisición de objetos que el individuo adquiere la autoestima personal y el reconocimiento necesarios para desenvolverse en el mundo social. En este nuevo contexto, los sectores integrados mediante el consumo comienzan a ser mayoritarios, produciéndose un mejoramiento de la calidad de vida material y, como señala Moulian (2002: 99), permite a los chilenos ensayar diferentes modalidades de conquista de *confort*, con consecuencias simbólicas muy potentes, entre ellas, el acceso a la modernidad para una amplia mayoría de chilenos y participar del mercado de bienes globales, “lo que opera como un factor decisivo en la construcción de la subjetividad y en la relación con la sociedad”.

Como señala este último autor, el culto al placer a través del consumo se hizo carne a partir de los años ochenta con la introducción de los centros comerciales en el país, consolidando al consumo en el centro de la vida social y al shopping mall como el gran espacio de socialización de los chilenos a partir de la década del noventa. Con una concurrencia actual que en algunos casos supera los cuatro millones de visitantes al mes, los centros comerciales se constituyeron en espacios donde la ciudadanía se encuentra, socializa y genera identidad (Salcedo y Simone, 2012).

A diferencia de los centros comerciales de Estados Unidos, localizados en suburbios o periferias de las ciudades y accesibles a través de automóvil, los consumidores de los malls en Chile pueden llegar caminando o por medio del transporte público. Asimismo, los grandes centros comerciales en Chile coexisten con las ferias libres, el comercio informal, mercados de pulgas y pequeños negocios independientes de manera que los distintos espacios compiten entre sí, mientras los sectores más pobres circulan indistintamente entre ellos. Los centros comerciales, por tanto, sin ser espacios propiamente públicos dado que se rigen por reglas que no nacen del consenso cultural y político-social sino del objetivo de vender productos y servicios, pasaron a ser considerados y tratados como otros espacios urbanos (como calles, parques, casas y oficinas) pero con un contenido minimizado, seguro, controlado y donde muchas personas no sólo compran productos y servicios, sino que

buscan entretenimiento y socialización (Salcedo y Simone, 2012; Stillerman y Salcedo, 2012).³⁹

Para los grupos medios bajos los malls empezaron a representar verdaderos vehículos a la modernidad y a un bienestar inmediato que antes resultaba difícil de alcanzar. Las características de estos lugares es que son polivalentes (restaurants, grandes tiendas, tiendas individuales, salas de cine, teatro, peluquerías, etc.) y transclase, esto es, no son lugares exclusivos pero tampoco populares puesto que dada su ubicuidad y fácil acceso atraen a todo tipo de público con todo tipo de poder adquisitivo (Moulian, 2002).

Tabla 5.7. Número de Centros Comerciales por País

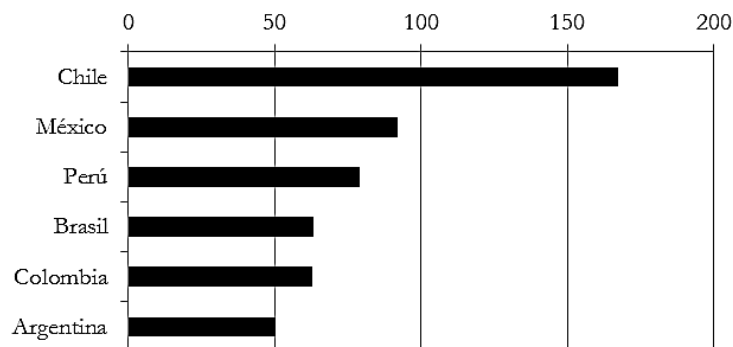
País	Número de Centros Comerciales*	Población estimada 2014**	Número de habitantes por Centro Comercial
México	584	123799215	211985
Chile	79	17772871	224973
Colombia	196	48929706	249641
Argentina	114	41803125	366694
Brasil	511	202033670	395369
Perú	71	30769077	433367

Fuente: Elaboración propia. Datos de *Meza (2015) y **Worldmeters (2014).

Esta última cualidad permite que la integración e inclusión a través del consumo haya logrado adquirir relevancia y tintes de democratización pues, tal como señala este último autor, en el centro comercial ricos y pobres pueden pasearse con igual derecho generando mayores espacios de libertad que los alcanzados en los espacios urbanos tradicionales como barrios y plazas públicas: “la libertad del consumidor alcanza en el mall su máximo carácter idealizado” donde éste se transforma en “un gran escenario de sublimación, de idealización del consumo” (2002: 114).

³⁹ Según datos de la Encuesta PNUD 2001, respecto a los motivos de la visita al mall o centro comercial, un 28% señaló que iba “sólo a comprar”, un 50% a “ver si hay ofertas y oportunidades interesantes”, y un 21% a “a pasear y encontrarse con amigos” (PNUD, 2002).

Figura 5.6. Metro cuadrado de espacio rentable en centros comerciales por cada 1000 hbts



Fuente: Cushman y Wakefield Research Publication (2014: 2).

En las secciones previas se analizó el impacto de las reformas estructurales sobre el sistema de estratificación social y el proceso de desarticulación de las identidades tradicionales ligadas a la clase social y al trabajo. Se planteó que, al debilitarse las identidades colectivas - insumo fundamental para la movilización -, el potencial de los movimientos sociales se ve restringido y estrechado. De la misma manera, en este punto se plantea que la emergencia y masificación de nuevas pautas de consumo también tuvieron un impacto importante en el detrimento identitario luego de la redemocratización, limitando con ello el potencial movilizador en dicho período. La temática del consumo ha sido abordada y estudiada por autores como Bourdieu (1991) y Ewen (1999) como espacios de diferenciación y distinción entre las clases y los grupos, poniendo atención en los aspectos simbólicos y estéticos de la racionalidad consumidora. Con ello, las sociedades contemporáneas construirían la racionalidad de las relaciones sociales en la apropiación de los medios de distinción simbólica más que en la lucha por los medios de producción y la satisfacción de necesidades materiales. Se da con ello una coherencia en los espacios donde los miembros de una clase consumen: las comidas, los estudios, los lugares de residencia, los viajes, las lecturas, la manera de informarse y transmitir información a otros (García Canclini, 1995).

La novedad y euforia a partir de los años noventa frente a la posibilidad de consumir bienes antes restringidos no se produce en cualquier sociedad, sino en una sociedad chilena donde las clases sociales se encuentran muy marcadas y el consumo opera como un potente mecanismo diferenciador. Como explica Moulian (2002), antes de 1973 el consumo resultaba inaccesible no únicamente por los controles a las

importaciones, sino también por las condenas morales que levantaba, esto es, existía una atmósfera de rechazo al despilfarro, la ostentación y el lujo innecesario, mientras primaba, entre los sectores más acomodados, una tendencia a la austeridad y la discreción respecto a sus recursos materiales. Esto, no era resultado de un ascetismo natural de las clases dominantes, sino más bien producto de una condena social frente al peso de una cultura de pretensiones más igualitarias, la prédica socialcristiana y la existencia de partidos clasistas. Estas pautas se ven alteradas luego de la introducción del libre mercado, y el vivir de manera lujosa pasa a constituir una señal de prestigio no sólo para los sectores más ricos, sino también dentro de grupos más vulnerables.

En el estudio realizado por Van Bavel y Sell-Trujillo (2003), se indica que para los grupos más pobres el salir de la pobreza es la aspiración principal y el consumo en este contexto se convierte en un arma efectiva e inmediata no sólo para las necesidades más urgentes, sino como un vehículo para transformar su realidad material y social. Si bien el consumo de bienes no implica necesariamente movilidad social ascendente, éste permite elevarse por encima de la condición de empobrecimiento, evitar ser destinatario de comentarios despectivos en el contexto de una sociedad de clases y ser parte de la historia de éxito de Chile.

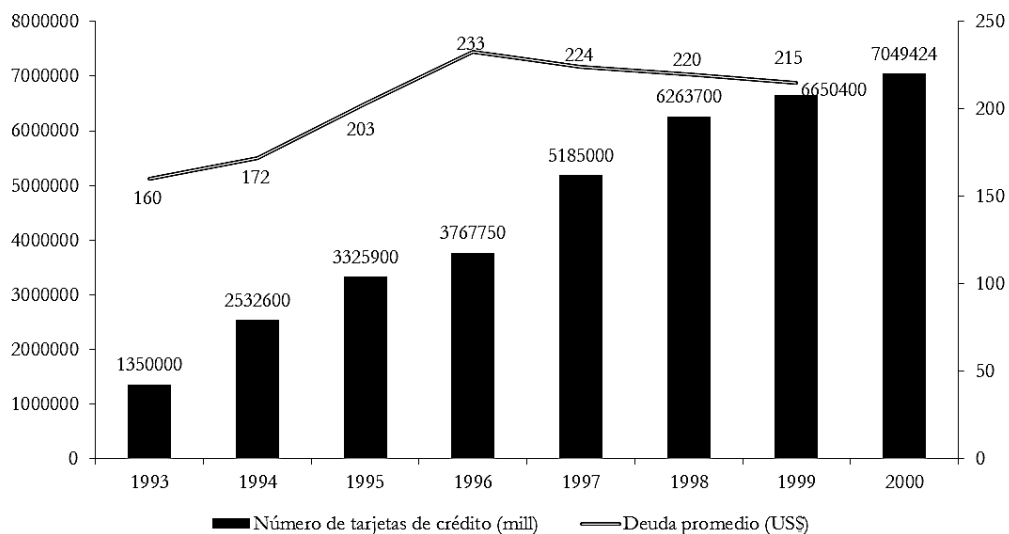
De esta manera, el incremento significativo del poder adquisitivo y del acceso al crédito detonó en un breve espacio en un acelerado cambio en los modos y estilos de vida de la población, instalando, como señalan Salcedo y Simone (2012), al consumo de bienes y servicios como una de las actividades constitutivas de la identidad de los chilenos, especialmente de la nueva clase media emergente que abandona la pobreza desde fines de los ochenta para alcanzar una nueva realidad material y cultural a partir de los años noventa. Dichas tendencias aparecieron primero entre los sectores de ingresos más altos, aquellos clientes habituales del primer mall, con una pronta difusión hacia otros grupos sociales coincidentemente con la dispersión y masificación de estos centros comerciales.

En definitiva, el consumo permitió un tipo de participación e integración a través de los mecanismos disponibles en el mercado que resultó novedosa y atractiva por las posibilidades ofrecidas para amplios sectores de la sociedad chilena, ejerciendo una enorme seducción sobre los individuos, la creación de un imaginario feliz, de realización de aspiraciones y de una zona de placer dentro de la vida cotidiana (Moulian, 1998). Para el Informe PNUD (2002), el consumo en la década del noventa y principios del 2000 se transformó en una forma de creación cultural relacionada con los símbolos y signos, donde la compra de bienes y servicios se vuelve un valor en sí mismo. La satisfacción ya no consistió sólo en saciar una carencia sino que en una manera de autorrealización personal, de enviar señales a otras personas y de simbolizar

las relaciones sociales, provocando una desmaterialización del consumo, es decir, el producto material cuenta menos que el significado. Así, el status de la antigua clase media y sus derechos sociales son reemplazados por el poder de compra, con una estructura social que se hace más heterogénea expresando la diferenciación de estratos y la diversificación del aparato productivo (Espinoza *et al.*, 2013).

La transversalización del consumo, la integración de sectores hasta entonces marginados así como la irrupción de nuevos valores y concepciones de bienestar, se produce tanto por un aumento en los salarios como también, y en parte importante, por la institucionalización del crédito. La masificación crediticia tiene su origen en la década del ochenta y está vinculada a la crisis bancaria de 1982 que permitió el ingreso al mercado de nuevas instituciones financieras que vinieron a complementar y diversificar la oferta de créditos a nivel nacional (Colodro *et al.*, 2009; Yopo, 2012). Desde finales de los años setenta y sobre todo a partir de la década del ochenta se produce en Chile, por tanto, un acceso al crédito que permite el aumento de los niveles de consumo y modifica considerablemente las condiciones de vida, lo que se manifiesta en los niveles de endeudamiento de las familias chilenas. El nivel de penetración del instrumento crediticio pasó en treinta años de prácticamente inexistente a ser una herramienta importante para el consumo de la mayoría de los chilenos.

Tabla 5.8. Tarjetas de crédito del sector comercio y deuda promedio, 1993-2000



Fuente: PNUD (2002: 99).

Según datos de la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central observados en la tabla 5.9, para el año 2012 prácticamente un 70% de los hogares chilenos tenía algún tipo de deuda, especialmente a través de tarjetas de crédito de casas comerciales. Esto difiere por estratos, donde el 61,7% de los hogares del estrato 1 tiene algún tipo de deuda (deciles 1 al 5 que representa el 50% de los hogares, aquellos con ingresos más bajos), siendo el 52,5% deudas de consumo, el 7,5% créditos hipotecarios, el 3,5% crédito educacional y el 0,6% crédito automotriz. Esto que implica que, a diferencia de los estratos más altos en que la deuda hipotecaria y el crédito educacional tienen mayor presencia, los hogares de los primeros deciles de ingreso contraen deudas para financiar principalmente su consumo de bienes (Echeverría, 2014).

Tabla 5.9. Tenencia de deuda por porcentaje de hogares, 2011-2012

	Estrato 1	Estrato 2	Estrato 3	Total
Tenencia de deuda	61,7	71,9	78	68
<i>Consumo</i>	52,5	63,4	65	58,3
Bancaria	15,1	25,7	40,1	23,3
Tarjetas de crédito	7,9	14,7	27,5	13,8
Crédito de consumo	8,7	15,3	22,6	13,5
Casas comerciales	42,2	50,5	43,1	44,9
Tarjetas de crédito	40,8	48,9	42,2	43,5
Avances en efectivo	5,4	7,5	3,5	5,6
Cajas de compensación, cooperativas u otros	11,6	14,8	10	12,2
<i>Hipotecaria</i>	7,5	17	31,8	15,2
<i>Crédito automotriz</i>	0,6	1,6	5,2	1,8
<i>Crédito educacional</i>	3,5	6,2	9,2	5,4
<i>Otras deudas</i>	12,7	9,6	5,6	10,3

Fuente: Banco Central de Chile (2013: 33).

Esta nueva herramienta logra potenciar la euforia por el consumo deviniendo en el extremo del consumismo, o el uso del crédito por encima de los ingresos del hogar destinados a deudas. Como señala el Informe PNUD (1998), hacia fines de 1995 los grupos medios tenían deudas de tres veces por encima de sus ingresos, con un sobreendeudamiento especialmente en la clase media (estrato C2), grupo que destinaba alrededor de un 39% de sus estradas al pago de créditos de consumo. Con ello, señala el informe, en aquel período parecía que una proporción importante de chilenos compraba su bienestar material e integración simbólica a la modernidad al precio de un desvelo financiero permanente.

Como señala Echeverría (2014), la carga financiera mensual que enfrentan los hogares chilenos es alta al comparación con el nivel de deuda en países desarrollados. Asimismo, la facilidad de acceso y la multiplicación del crédito constituyen una

oportunidad social, pero al mismo un riesgo para muchos grupos de más escasos recursos, que muchas veces se ven sumergidos en un círculo de deudas del que es difícil salir y que podría aumentar la vulnerabilidad de una familia.⁴⁰ En la misma línea, Alvarez y Opazo (2010) describen los beneficios, perjuicios y consecuencias del acceso al crédito y del endeudamiento para los hogares chilenos - cuyo incremento entre los años 2000 y 2009 fue a una tasa promedio de 12,8% real anual, con un relación deuda a ingreso de 35,4 a 59,9% en dicho período -. Para los autores, el mayor y mejor acceso al crédito permite a los hogares absorber fluctuaciones temporales de sus ingresos y de sus gastos. Al incrementar el bienestar de las familias, el crecimiento de la deuda podría indicar que el sistema financiero ha cumplido con uno de sus roles fundamentales, esto es, el de intermediar recursos económicos y facilitar el acceso de los hogares al financiamiento y al consumo. Por otra parte, el aumento del endeudamiento podría implicar riesgos y vulnerabilidad dependiendo de la capacidad de pago de los hogares y el incumplimiento de sus compromisos financieros, especialmente al verse expuestos a *shocks* de ingresos tanto de carácter macroeconómico (fluctuaciones imprevistas de los ingresos, es decir, cambios salariales y/o desempleo) como idiosincráticos (gastos imprevistos de salud, separación matrimonial y otros).

Es posible preguntarse en este punto cuál es la relación entre el endeudamiento y la desmovilización observada a partir de los años 90 en Chile. El crédito facilitó fuertemente el acceso a bienes y tecnología sin la necesidad de ahorro, lo que permitió a las familias de todos los estratos socioeconómicos aumentar sus niveles de consumo, disponer de una expansión del salario y modificar considerablemente las condiciones materiales de amplios grupos. Para Moulian (2002), la introducción del crédito junto a la reforma laboral provocaron cambios en los principios que regían la vida social, trasladándola hacia la esfera de la individuación. Esto es, el individuo asalariado, ya no mediado por el sindicato, se relaciona de forma individual en las relaciones laborales mientras el individuo-consumidor lo hace en las relaciones de mercado. De igual manera expresa, el mecanismo del consumo con pago diferido implica una subordinación de las estrategias de conflicto a sus estrategias de supervivencia como asalariado, es decir, el crédito permite realizar la consumación del deseo del consumo con un disciplinamiento y ordenamiento de las conductas *a posteriori*, actuando como un factor o forma de despolitización.⁴¹ A diferencia del período pre-dictatorial donde

⁴⁰ Para un estudio antropológico del impacto del endeudamiento en los sectores más pobres en Chile ver Han (2004, 2012).

⁴¹ Como se detallará en el siguiente capítulo, el factor endeudamiento como uno de los ingredientes explicativos para la desmovilización deviene hacia fines de la era concertacionista en *input* movilizador,

los trabajadores adquirirían bienes limitados en función de sus salarios reales y una espera asceta, a partir de la redemocratización la posibilidad del endeudamiento permite un mejoramiento material inmediata basado en una estrategia individual cuyo costo es una inmersión profunda en las lógicas del mercado. Esto, pues el trabajo ya no sólo resulta fundamental para costear las necesidades básicas, sino también para cumplir con los ineludibles compromisos financieros. Las exigencias del endeudamiento en las familias juegan un rol importante en el vuelco de los ciudadanos hacia sus esferas privadas, cuyos focos de interés se concentran en el círculo de consumo, mejoramiento de condiciones materiales, consecución de status, deuda.

Al ser consultado por la forma en que los trabajadores se relacionan con el consumo, el vínculo que él observara entre el acceso al crédito, el consumo y el endeudamiento al retorno democrático, Manuel Cancino, ex Presidente de la CUT El Loa señaló,

aquí entra a trabajar un trabajador a Codelco, al otro día le llegan ofrecimientos de tarjetas de todas las casas comerciales, de todos los bancos, ofreciéndoles créditos, a principios de los noventa esto era una novedad (...) si tú te das una vuelta por las villas de los trabajadores de Codelco, encuentras dos o tres autos último modelo, o con lo último de la tecnología, a veces son 6 hijos, son 6 televisores, el nuevo computador, el nuevo teléfono, la zapatilla de marca (...) y esto se fue transmitiendo a los trabajadores subcontratistas, como una aspiración propia, natural, pero eso los obliga.. y sin haber estudios, yo digo que el endeudamiento de los trabajadores subcontratistas es mayor por lo siguiente, aquí muchas de las financieras y los bancos le alteran al trabajador su remuneración para que saquen un crédito mayor y a veces, aun no teniendo capacidad, igual le sacan el crédito, entonces a veces te encuentras con trabajadores que gran parte de su remuneración se les va en el pago a los bancos (comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).

Mientras para Estados Unidos o Europa la transformación en ‘sociedades de mercado’ maduró a través del tiempo, en América Latina, y especialmente cierto en el caso chileno, este proceso tuvo lugar de una manera rápida y brutal, desarticulando una gran parte de las relaciones sociales existentes hasta entonces. La lógica que emergió fue la razón instrumental que modeló los patrones de sociabilidad, permeando y modificando la escena política mientras las personas internalizaron las exigencias de la eficiencia, productividad y la competencia. En las sociedades de mercado, los individuos comienzan a confiar y situar sus expectativas en el esfuerzo individual en

generando una especie de identidad colectiva en torno a la deuda, ‘los endeudados por la educación’ como un discurso aglutinador en torno a las movilizaciones 2011.

desmedro de los gobiernos, la política y de la acción colectiva organizada (Lechner, 1998; Silva, 2006b; Tironi, 2003). En este contexto, la estrategia individual basada en condiciones financieras se vuelve mucho más beneficiosa que la estrategia colectiva, con el crédito sobre el sindicato como instrumento de progreso y el individuo por encima del grupo (Moulian, 2002).

En línea y concordando con las grandes transformaciones aquí presentadas, Ariztía (2002) señala que los principales receptores de los cambios a partir de los años noventa fueron los sectores medios, quienes se vieron expuestos a tres transformaciones significativas: la inserción de los estratos medios al mercado a través del acceso a bienes y servicios de consumo masivo, la expansión y consolidación de los créditos de consumo y el crecimiento sostenido de los centros comerciales y su orientación preferente hacia la clase media. Como señala este autor, estas potentes transformaciones durante la década del noventa dieron pie a una serie de análisis académicos, a debate público y de los medios de comunicación ya sea celebrando - destacando la creciente irrupción, masificación e integración hacia formas de vida modernas - como criticando estos cambios - observando negativamente la emergencia de formas de vida disciplinadas y despolitizadas por el consumo y la nueva relación con el Estado -, pero convergiendo todos ellos en el aspecto novedoso y revolucionario de esta nueva realidad social.⁴²

No es objeto de este trabajo el seguir dichas líneas de análisis y adoptar una posición respecto a las transformaciones observadas desde finales de la dictadura y consolidadas a partir de los años noventa en el país. Lo que se busca más bien es señalar que, ya sea por la euforia por el crecimiento económico (la emergencia de nuevos valores asociados al placer del consumo, la inclusión de amplios sectores a un incipiente proceso de modernización, la ocurrencia de nuevos espacios y patrones para el consumo, las modificaciones en términos de diferenciación y estatus generado por la integración simbólica), o bien, debido al ordenamiento y disciplinamiento implícito del nuevo modelo (la exacerbación de los valores individualistas, la subordinación al endeudamiento, la pérdida de referentes y el proceso de despolitización suscitado por una sociedad de mercado), es la conjunción de estos procesos la que redundó, facilitó y consolidó una desafección política, un distanciamiento ciudadano de la esfera pública en favor de la privada, una cierta apatía por las problemáticas colectivas y una desmovilización al inaugurado el proceso de recuperación democrática en el país.

⁴² Ver por ejemplo Halpern (2002); Moulian (2002); Oppenheim (2007) y Tironi (1999, 2003).

5.2.3 Nuevas cosmovisiones: tecnocracia, meritocracia e individuocracia

El conjunto de reformas estructurales de la revolución capitalista promovió transformaciones sociales y culturales de gran relevancia para la sociedad chilena, un cambio refundacional con una nueva estructura productivista-consumista que hegemonizó los principios que regulan la vida económica, política y social del país. Tanto causa como consecuencia de los fenómenos hasta este punto descritos, se produce la emergencia de nuevos paradigmas o cosmovisiones que logran permear y enquistarse en la mentalidad los chilenos. Se constituye una ideología dominante y una perspectiva teleológica específica respecto al rol del Estado, la definición de derechos y el rol asignado a los mercados para alcanzar el bienestar del conjunto social.

Utilizando las tipologías de Estado y sociedad presentadas al comienzo de este capítulo, es posible afirmar que luego de la imposición del modelo neoliberal en Chile se consolida una tendencia hacia la comodificación y la estratificación aguda, la primacía del mercado como eje organizador de la vida social, que erige al individuo como un actor clave y donde la sociedad es entendida como un conglomerado de unidades y voluntades individuales. La soberanía en este modelo es así transportada desde el poder político hacia el poder socio-económico, la política se vuelve un espacio redundante y estrecho dado que es el mercado, no el Estado ni la política, el ámbito de regulación y ordenamiento de los individuos. La participación de la sociedad civil en tanto pasa a ser considerada de manera consultiva y funcional a los requerimientos del mercado.

En este contexto de mutación socio-cultural, se introduce y naturaliza la noción de servicios sociales como educación, salud y previsión no como derechos sino como bienes por los que se demanda un pago y cuya provisión depende de las reglas de oferta y demanda generadas por el mercado. Asimismo, se reconoce al lucro en estas áreas como necesario, legítimo y un mecanismo para incrementar el bienestar en la población. Como señala Taylor (1998), la búsqueda de bienestar individual o colectivo a través de la acción política en este nuevo escenario es desacreditada, mientras el ciudadano político es reemplazado por el ciudadano que lucha por el mejoramiento de sus condiciones sociales y materiales en el terreno de su economía privatizada. En el caso específico de la redemocratización en Chile, el cambio paradigmático cristalizó en la exacerbación del mérito propio, del individualismo y del emprendimiento personal como herramientas para la consecución de bienestar y autorrealización personal. El campo intelectual experimentó un viraje hacia la tecnocracia que pasó a dominar el mundo de las ideas y las prácticas a partir de los años noventa, mientras las nuevas cosmovisiones erigidas luego de la dictadura, contribuyeron a generar un clima de

desmovilización, inacción colectiva y apatía ciudadana respecto a los asuntos públicos en la transición democrática.

Dentro de los paradigmas de la arena intelectual y política en Chile, el rol de la emergencia de la tecnocracia ayuda a entender el escenario de vaciamiento político o despolitización de las ideas y prácticas del Chile post-dictatorial. En este sentido, González (2012) señala que a partir del golpe militar de 1973, se comenzó a abandonar el uso de conceptos como movimientos sociales que, habiendo dominado la discusión teórica en el país durante la segunda mitad del siglo XX, desaparecen del panorama epistemológico desde aquellos años.⁴³ Como señala este autor, a partir de 1974 se produce un cambio en la producción académica-intelectual siendo reorientada desde la sociología hacia la economía, mientras las principales problemáticas tratadas fueron producto de investigaciones en el campo de dicha disciplina en desmedro de temas como los movimientos sociales u otros problemas “socio-políticos” (2012: 264). Al modificarse las temáticas de los artículos e investigaciones, cambiaron también las redes intelectuales y las citas de autores que de cierta forma definían a la comunidad científica.

Efectivamente, al hacerse cargo de la planificación social y atender al espíritu y las temáticas del momento, durante la década del sesenta el sociólogo viene a reemplazar al abogado como el intelectual por antonomasia. Luego de la revolución capitalista, sin embargo, la figura del economista y del experto se erige con fuerza reflejando con ello las ideas que a partir de la modernización neoliberal habían colonizado el mundo de las ciencias y de la administración pública. Como señala Silva (2006a), con el advenimiento de las dictaduras militares y la fuerte represión en la década del setenta, el estamento intelectual tradicional - intelectuales humanistas y cientistas sociales con visión crítica de la realidad político-social - se habría visto fuertemente debilitado, reapareciendo una vez retornadas las democracias, pero adoptando esta vez actitudes tecnocratizantes y sin recuperar la fuerza que tuvieron en el pasado. Como extensamente lo ha analizado este autor, pese ser una tendencia antes del golpe militar, en el ascenso y posterior hegemonía de la tecnocratización de los procesos de toma de decisiones políticas jugó un rol central en la imposición del modelo neoliberal en el país. Asimismo, facilitó la preponderancia de los Chicago boys como intelectuales orgánicos de la dictadura y los objetivos del régimen militar de alcanzar un modelo económico racional inspirado en principios técnicos y científicos, alejado de los excesos políticos e ideológicos del pasado (Silva, 1991, 1997, 2008). En paralelo, los

⁴³ El autor se refiere de manera más específica al campo disciplinario de los estudios urbanos y del desarrollo regional, análisis que se utiliza acá para extrapolar a lo que ocurrió a nivel de las ciencias sociales en general a partir de entonces.

grupos de oposición al régimen experimentaron una profesionalización y una tecnocratización, constituyéndose en centros de investigación y organizaciones no gubernamentales de expertos en asuntos financieros y macroeconómicos. En la necesidad de “tecnificar” a la sociedad en su conjunto, el régimen militar intentó convencer a la población de la incapacidad de la “política” para resolver los problemas del país (Silva, 1991: 386).

Una vez recuperada la democracia, se mantuvieron la mayoría de las reformas introducidas por la tecnocracia neoliberal en el período 1975-1990, se consolidaron dichas ideas y dicho estilo en la toma de decisiones, mientras los gabinetes ministeriales de los gobiernos de la Concertación se vieron dominados por diversos tecnócratas, en su mayoría economistas altamente especializados (Montecinos, 1998, 2005; Silva, 1991). En este contexto, la tecnocracia se ha entendido como la utilización de criterios técnicos y expertos en las tareas de gobierno, argumentándose que éstos poseen una posición apolítica y que pueden proveer soluciones técnicas a los problemas, lo que resulta altamente funcional en un escenario transicional en que la despolitización en toda esfera fue altamente valorada y buscada.

Aunque la cualidad apolítica e independiente de los llamados *technopols* (Domínguez, 1997) ha sido cuestionada (Silva, 2006a) o definitivamente rechazada (Dávila, 2010), la cultura política durante la redemocratización fue conquistada por el discurso tecnocrático de la administración eficiente y el *cosismo* o la comodificación de los mensajes en la esfera política (Silva, 2004). De esta manera, el debilitamiento o desaparición de las fuerzas tradicionales como partidos de izquierda, organizaciones sindicales o movimientos estudiantiles, se observó en paralelo con el ascenso tecnocrático y la desafección y desmovilización política. Cuando se entroniza la figura y la cultura del experto en el ámbito de la toma de decisiones como aquel único capaz de intelegir el funcionamiento de las relaciones sociales, se produce un desplazamiento del político y un deterioro de esta arena. La participación deliberativa o los esfuerzos colectivos por el autogobierno se difuminan y se vuelven irrelevantes, con la consecuente privatización y ensimismamiento social tal como se observara en la redemocratización chilena.⁴⁴

Así, mientras en el pasado los partidos políticos constituían uno de los principales mecanismos de reclutamiento para el ascenso a altos puestos de gobierno, luego de la emergencia tecnocrática se abrió un espacio para el uso de criterios meritocráticos en la selección de miembros de gabinete y otros importantes puestos directivos (Silva, 1997, 2006a). Como señala este autor, los tecnócratas fueron considerados

⁴⁴ Apuntes de clases, curso ‘La desigualdad en Chile: modelo para armar’ del Profesor visitante Carlos Peña, febrero-marzo 2015, Universidad de Leiden.

intelectuales con méritos por sus credenciales académicas y su *expertise* en diversos temas. En el caso de la ideología tecnocrática levantada en Chile, ésta se ha constituido en torno a la clase media concordando, en teoría, con principios mesocráticos, antioligárquicos y meritocráticos, donde la educación y el conocimiento científico ocupan un sitio privilegiado en desmedro de la trayectoria y desempeño asociados a una carrera política.

El valor del esfuerzo y el mérito se instala así en una sociedad que se moderniza rápidamente y que comienza a abrir espacios de inclusión a la modernización. Con una expansión de las oportunidades, mayor acceso al progreso, una movilidad ascendente y una clase media que se amplía, los valores de los grupos medios se hacen más evidentes y extendidos. Como señalan Barozet y Fierro (2011), a partir de las reformas neoliberales impulsadas por el régimen militar se quiebran las posibilidades y los caminos estructurales para la movilidad social, estableciéndose desde entonces patrones individuales o familiares para dicha movilidad. Tal como se presentara, pese a ser sumamente heterogénea y por tanto portadora de distintos elementos valorativos, estos autores indican que entre los valores más transversales a este segmento se encuentran el esfuerzo, el mérito y las conductas individualistas que constituyen ejes importantes del discurso y de las prácticas de la clase media.⁴⁵ Mientras los segmentos altos cuentan con el suficiente patrimonio que les asegura bienestar y los segmentos populares pueden buscar y recibir ayuda por parte del Estado, los sectores medios, o bien no califican para este tipo de ayuda pues poseen más recursos, o no se sienten cómodos de solicitar ayuda al Estado.

Al no contar con el Estado ni con un patrimonio suficiente, estos grupos consideran que el esfuerzo es algo que los caracteriza y que los diferencia socialmente, con amplios segmentos de la clase media que se auto-identifican con la cultura de la meritocracia. En este contexto, se constituye la educación como una herramienta, aspiración fundamental y un vehículo privilegiado de la movilidad social, estando dispuestos a invertir gran parte del presupuesto familiar en colegios y estudios en función de esas expectativas. Como indicaba Tironi (2003: 19), en una sociedad de mercado, los individuos esperan poco del gobierno y de la acción colectiva organizada sino que confían sobre todo en el esfuerzo personal e invierten fuertemente en “capital humano”. Es en una sociedad meritocrática y que descansa en las iniciativas y trayectorias personales donde la educación se comienza a erigir como un bien y una demanda fundamental.

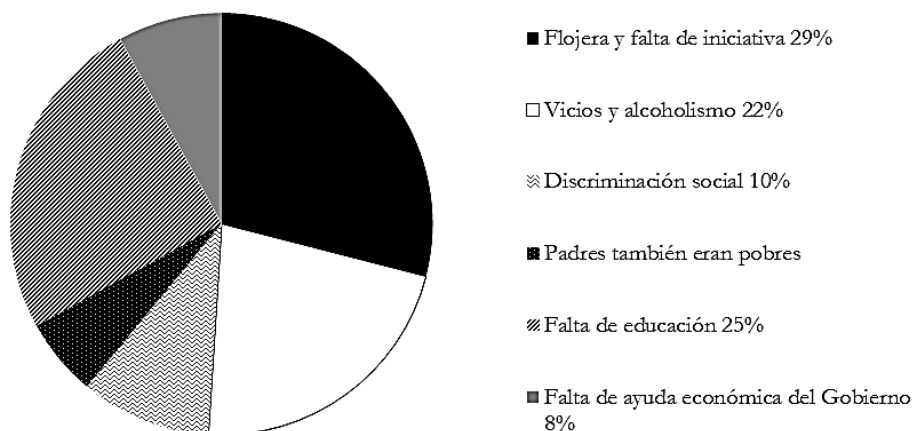
⁴⁵ En base a resultados de *focus groups* aplicados en 2006 y 2007 entre integrantes de los sectores medios en Santiago, Angol y La Serena.

La comprobación empírica de estas tendencias se observan en el estudio realizado por Landerretche y Lillo (2011) sobre la correlación entre movilidad social intergeneracional y la percepción de meritocracia en Chile.⁴⁶ Éste, indica que ambas están positiva y significativamente correlacionadas, esto es, si un individuo ha experimentado movilidad social esto influye positivamente en la probabilidad de que dicho individuo atribuya la pobreza o el éxito económico a características individuales de las personas. Asimismo, si un individuo espera tener un ascenso social en el futuro entonces creerá más en las características individuales como determinantes del porvenir económico, advirtiendo que los resultados del estudio revelan comportamientos y creencias individualistas de los chilenos.

Asimismo, y tal como lo indican los resultados de la Encuesta Percepciones sobre Relaciones Laborales y Equidad 2007 respecto a los factores considerados más importantes como determinantes de la pobreza y del éxito económico en las figuras 5.7 y 5.8, la mayoría de la población estimaba que las características personales son las más relevantes y las que más inciden en el destino de una persona. Esto es, el 50% o más de los encuestados considera que los factores o características individuales (flojera, vicios - iniciativa y responsabilidad) definen las posibilidades de mantenerse en la pobreza o alcanzar el éxito económico, los factores familiares o hereditarios son minimizados (padres pobres - discriminación social) mientras los factores externos o estructurales (educación – ayuda del Estado) se mantuvieron cercanos al 30%. De igual forma, El 58% estima que es responsabilidad individual el buscar oportunidades y sólo un 21% cree que es rol del Estado el generar oportunidades, prevaleciendo la estrategia individual por sobre la estatal. Para salir de la pobreza, en tanto, resultaba más necesario mejorar la movilidad social (47%) que generar mayor igualdad de ingresos (36%).

⁴⁶ Los autores se basan en análisis estadístico con datos de la Encuesta Percepciones sobre Relaciones Laborales y Equidad en Chile 2007.

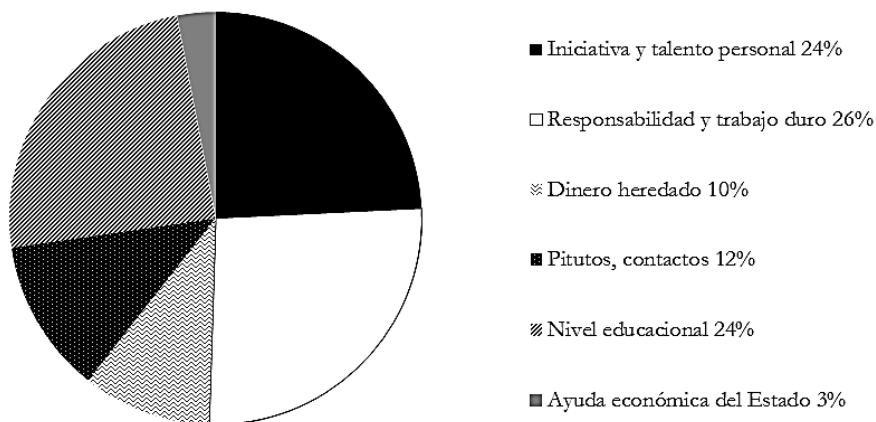
Figura 5.7. Percepción del factor más importante de la Pobreza



Fuente: Encuesta Percepciones sobre relaciones laborales y equidad en Chile (2008).

La relevancia del mérito, el esfuerzo y la educación parecen confluir en el Chile de la redemocratización, valores levantados por una realidad social coherente, esto es, una realidad donde la expansión educacional ha contribuido a reducir la determinación del origen social de los individuos, con una asociación entre origen y entrada al mercado laboral ha tendido a disminuir a través del tiempo (Wormald y Torche, 2004).

Figura 5.8. Percepción del factor más importante para el éxito económico



Fuente: Encuesta Percepciones sobre relaciones laborales y equidad en Chile (2008).

De la información presentada, se infiere que en el Chile de la era concertacionista predominaba una percepción mayoritaria respecto a que el presente y porvenir material de las personas, ya sea para bien o para mal, depende fundamentalmente de sus esfuerzos individuales o cualidades referidas al logro, minimizando el rol de las características adscritas o del entorno de donde proviene una persona.⁴⁷ Cuando emerge y se entroniza una matriz ideológica y cultural centrada en los logros, en la eficiencia, en la productividad y el crecimiento económico, el rol del emprendimiento personal, el mérito, el esfuerzo privado y la carrera individual se pone al centro de las aspiraciones de la sociedad, con la figura del emprendedor encarnando el metarelato y un imaginario de oportunidades.⁴⁸

Hacia finales de la década del noventa, en tanto, el Informe del PNUD (1998) alertaba sobre el malestar que parecía estar incubándose o corriendo en paralelo al crecimiento económico y la expansión de oportunidades. Dicho malestar estaba relacionado con la creciente inseguridad en diversos ámbitos de la vida social junto a grados significativos de desconfianza tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones de los sujetos con los sistemas sociales de salud, previsión, educación y trabajo. Respecto a este malestar fraguado durante los años noventa en Chile, Mayol y Azócar (2011) señalan que la forma de procesarlo o una vía para mitigarlo fue la sublimación o represión a través del consumo y la despolitización o la incapacidad de reconocer voluntad e intereses como partes constitutivas de la sociedad y su organización. Así, ya sea por euforia o encanto, o por decepción y malestar, la respuesta de los chilenos durante los gobiernos de la Concertación, especialmente en la década del noventa, fue una tendencia hacia una despolitización, privatización y un

⁴⁷ Esta percepción meritocrática y valor por el esfuerzo personal se observa aun cuando esta realidad sea cuestionada por estudios como el de Núñez y Gutiérrez (2004). Los autores señalan la clase social o el nivel socioeconómico de origen es un factor relevante que en Chile en la determinación de los ingresos en el mercado laboral, subrayando que la magnitud de la brecha de ingresos de clase es casi dos veces mayor que la brecha de género y cerca de tres veces mayor que las brechas étnicas y de apariencia física reportados en la literatura. Más aun, se sugiere que el efecto de la clase social es más importante que el rendimiento académico, lo que indica en la práctica y pese a la percepción de la población, en el mercado de trabajo chileno la meritocracia cumple un rol más modesto del que se piensa. Esta realidad, sin embargo, parece no afectar la emergencia y preponderancia de los valores individuales y meritocráticos enquistados en la sociedad chilena al retorno democrático.

⁴⁸ En 1998 fue popular un comercial de televisión donde el personaje principal Faúndez - un 'maestro chasquilla' o persona probablemente sin estudios que se dedica a pequeñas reparaciones (eléctricas, gasfitería, etc.), normalmente en el área del empleo informal - aborda un ascensor con lo que parecen ser altos ejecutivos de una empresa. Un teléfono celular comienza a sonar y tanto los telespectadores como los ejecutivos en el ascensor se sorprenden al percatarse que el teléfono que suena es del trabajador, sugiriendo que cualquier persona podía ahora tener un aparato móvil y poseer su propia pequeña empresa, fenómenos recientes y antes restringidos a una pequeña elite del país, ver en <https://www.youtube.com/watch?v=mgebE-GnfNY>

bajo involucramiento en los debates y en esfera pública, donde el escenario valorativo y la visión hegemónica de la sociedad tuvo al individuo como centro y protagonista.

En este panorama, el futuro comenzó a ser visualizado más como un horizonte personal que como uno compartido, donde las personas valoran y confían más en estrategias individuales de éxito que en el progreso generalizado de la nación (PNUD, 1998), con un acelerado proceso de individualización en que se tienden a romper los vínculos sociales y hábitos tradicionales que cobijaban a los individuos. Esto, tal como señala el informe del año 2002, se enmarca en una emancipación que permitiría al individuo ampliar su horizonte de experiencias y desarrollar su opción de autorrealización, con una consecuente reformulación de los vínculos sociales o bien con un giro asocial. De esta manera y luego de la consolidación del modelo neoliberal, prevalece la participación segmentada, el desinterés por las responsabilidades colectivas, las acciones con resultados autorreferentes, y un individualismo que colapsa los sentidos de pertenencia, erosiona las identidades sociales y deja a los individuos atrapados en lazos sociales fugaces (Dockendorff, 1993 citado en Arnold *et al.*, 2007).⁴⁹

En este contexto, la sociedad civil como actor colectivo pierde relevancia y la visión neoliberal del sistema social se convierte en un factor sumamente relevante para entender la desmovilización social luego del fin de la dictadura. Tal como lo explica Francisco Estévez, ex director de la División de Organizaciones Sociales: “si tú tienes una visión de mundo neoliberal, no necesitas sociedad civil, la sociedad civil sobra, porque hablar de sociedad civil implica un cuestionamiento a esa visión de mundo neoliberal, implica sacar las decisiones de lo individual, es construir decisiones asociativas” (comunicación personal, 25 noviembre, 2014).⁵⁰ Como indica Tironi (2003: 26), todo lo anterior redundaba en la indiferencia política, individuos socializados en la competencia que se ven realizados o compensados en el placer de consumir, en fuerte contraste con una sociedad centrada en la acción política y que hace de ella una dimensión privilegiada de la vida social, tal como en el Chile de décadas pasadas, al que se tiende a revestir de idealización y nostalgia. Como bien lo resume Silva (2004: 69),

Como sustituto para la búsqueda de objetivos colectivos, el gobierno militar ofreció una ideología neoliberal completamente centrada en la obtención de los logros individuales. De esta manera, la libertad individual se redefinió en función de representar el libre acceso a

⁴⁹ En este estudio de Arnold *et al.* (2007) señala que dentro de las paradojas que acompañan a la modernización es que se pueden encontrar nuevas formas de solidaridad y prácticas organizativas dentro de una sociedad individualista y donde prevalece el desinterés por los proyectos colectivos. Dentro de estas prácticas destacan la caridad, la filantropía, la responsabilidad social y los voluntariados.

⁵⁰ Director de la DOS durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2000-2006) y Director del Instituto Nacional de la Juventud durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994).

los mercados abiertos, mientras que el placer del consumo se alza como un instrumento que expresa diferenciación social y recompensas personales (...) la expansión del comportamiento consumista en Chile generó una especie de conformismo pasivo entre la población, que finalmente aceptó los principios individualistas del modelo económico neoliberal basado en la búsqueda de la satisfacción privada.

De esta manera y al constituirse el mercado en el principio organizativo de la vida social, no sólo se alteró la economía, sino que la adopción de sus lógicas implicó un proyecto cultural que transformó las prácticas y representaciones de la convivencia conocidas hasta entonces (PNUD, 2002: 88). Esto incluye, por cierto, los repertorios de acción colectiva y organización social observadas en las décadas precedentes y que habían hecho de Chile una de las sociedad más politizadas y movilizadas del continente. Con ello, la modernización neoliberal impuesta en dictadura y consolidada durante los gobiernos de la Concertación ejerce una importante influencia en el proceso de atomización y desmovilización de la sociedad civil en el Chile transicional.

En el próximo capítulo se presenta la manera en que la fase de subsidencia o desmovilización social 1990-2010, que fuera determinada en gran medida por el legado dictatorial, el modelo de gobernabilidad de la concertación y las reformas neoliberales, comienza a dar paso a la ola de movilizaciones del año 2011, influenciada por estos mismos factores, pero esta vez convertidos en insumos para la acción colectiva.

Capítulo 6

Movilizaciones sociales: reconstrucción identitaria y un nuevo ciclo político

Tal como se he podido examinar, luego de haber sido una de las sociedades más politizadas y movilizadas de América Latina, a partir de los años noventa y coincidiendo con el advenimiento democrático, la sociedad civil chilena experimenta un repliegue desde la arena pública hacia espacios privados, fenómeno que ha sido analizado desde diferentes perspectivas. Sin restar relevancia y capacidad explanatoria a tales argumentos, este trabajo ha buscado retomar y ampliar el debate respecto a la desmovilización de la sociedad chilena en la reconstrucción democrática como resultado específico del impacto de factores psicológicos, políticos y económicos, análisis que ha servido asimismo para retratar el proceso socio-político chileno reciente.

De acuerdo a lo planteado, el trauma colectivo generado previo a 1990, el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica por los gobiernos de la Concertación y una acelerada modernización neoliberal, viabilizaron un estado generalizado de silencio, olvido, apatía y desarticulación que, en el marco de este trabajo, son entendidos como factores constitutivos e ingredientes necesarios para la desmovilización o la invisibilización de la sociedad civil durante la redemocratización. Sin embargo y a medida que la transición avanzaba, dichos factores y su impacto sobre la sociedad civil comienzan a evolucionar, a transformarse y a originar nuevos discursos e identidades colectivas con implicancias para el quehacer de los movimientos sociales.

El año 2011, se produce la emergencia de un nuevo ciclo político inaugurado por las movilizaciones de mayor escala e impacto observadas en las últimas décadas.¹ Tal como se presentara en el capítulo 1, aun cuando existieron episodios de movilización durante los veinte años de gobierno de la Concertación (1990-2010),² el ciclo de movilizaciones del año 2011 resultó ser diferente, con marchas periódicas y multitudinarias - alcanzando las seis mil manifestaciones públicas y dos millones de participantes durante el año (Segovia y Gamboa, 2012) - tanto en Santiago como en otras ciudades del país, articulados en demandas en torno a la educación, a problemáticas medioambientales o al desarrollo regional. En este sentido y siguiendo

¹ Para una revisión pormenorizada del ciclo político inaugurado con las movilizaciones del año 2011 ver PNUD (2015).

² La más importante fue la ‘revolución de los pingüinos’ del año 2006 que resultaría ser el antecedente del ciclo de protestas inauguradas por los estudiantes a partir de 2011. Este movimiento, sin embargo no logró traducirse en una modificación del quehacer político o en una movilización transversal como la observada el año 2011.

el marco teórico de este trabajo, lo observado el año 2011 puede ser definido como un proceso de movilización en que los movimientos sociales, la ciudadanía o sociedad civil (*social unit*) tomó el control de forma acelerada de la agenda política y mediática³ que hasta entonces fuera controlada por otras unidades sociales como el Estado, la clase política o el mercado. Asimismo, en las movilizaciones del año 2011 fue posible observar los elementos constitutivos y propios de la acción colectiva cuando a través de una determinada identidad colectiva, la actuación de ciertos liderazgos o agentes movilizadores y el despliegue de repertorios de acción en respuesta a oportunidades políticas específicas, los movimientos buscaron recursos sociales (materiales y simbólicos) que permitieron la generación un terreno en disputa entre distintos actores de la sociedad.

A continuación, se analiza la manera en que los factores que indujeron la desmovilización a principios de los noventa, comenzaron pronto a evolucionar para influir y posibilitar una lenta (re)generación de identidades e ideas-fuerza para la acción colectiva del ciclo de protestas de 2011. Esto, pues como se anunciara, en los períodos de desmovilización o invisibilización de los movimientos sociales se produciría una lenta rearticulación de los sujetos colectivos en torno a núcleos culturales e identitarios que van nutriendo visiones y opiniones conjuntas, representando así un momento en el que se articulan las redes que serán la base de un futuro ciclo de movilización. Los períodos de emergencia ciudadana serían de esta forma el resultado de una cultura interna que se origina, se desarrolla y se potencia en los complejos procesos sociales, culturales e históricos que tienen lugar en los períodos de desmovilización o subsidencia (Salazar, 2013). No se pretende con ello proponer una relación lineal y forzada de causalidad entre trauma, gobernabilidad y neoliberalismo y la (des)movilización de la sociedad civil, sino más bien dar cuenta de las repercusiones que la evolución y transformaciones de tales factores y los cambios en contexto socio-político han tenido sobre el quehacer de los movimientos sociales de los últimas décadas en Chile.

En la primera sección se expone la forma en que la memoria colectiva evoluciona y comienza a originar nuevas interpretaciones sobre el pasado, al mismo tiempo que se empieza a producir el cierre del ciclo de la amnesia transicional con consecuentes implicancias para el quehacer de los movimientos sociales. En específico, se observa la memoria traumática desde las transformaciones que sufrió durante la transición y que hicieron posible que su efecto desmovilizador comenzara a devenir en factor

³ El control de la agenda política por parte de los movimientos estudiantiles, ambientalistas y regionalistas llegó al nivel de, en cierta medida, definir el programa del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

movilizador, cristalizado primero en las protestas estudiantiles de 2006 y especialmente luego en el ciclo de movilizaciones del año 2011.

A continuación, se realiza un ejercicio similar pero esta vez en función de la relación entre las estrategias de gobernabilidad y la (des) movilización de la sociedad civil chilena, buscando dar cuenta de las repercusiones que la evolución de lo que se define como gobernabilidad y los cambios en contexto socio-político han tenido sobre la acción de los movimientos sociales en Chile. Con ello, se observa la transformación de los paradigmas o estrategias de gobernabilidad en respuesta a los desafíos que se presentan en cada momento y contingencia histórica, provocando una transformación también en la relación que establecen los Estados con la sociedad civil y las posibilidades de movilización o desmovilización de este último sector.

Finalmente, el tercer apartado se concentra en la manera en que el modelo económico neoliberal, mediante el problema de la desigualdad y la concentración de poder junto a expectativas sociales y estándares más altos consecuencia de una modernización acelerada, dio paso a la emergencia a un nuevo *set* de valores, nuevas demandas y, con ello, *inputs* para la movilización social.

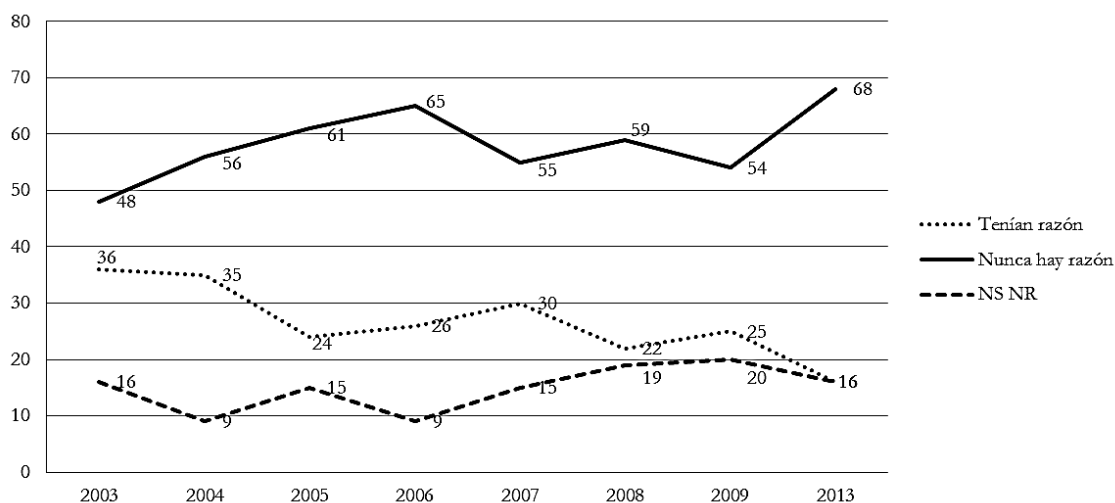
6.1 La memoria traumática como agente (des)movilizador

De acuerdo a lo planteado en el tercer capítulo, el trauma social generado previo a 1990 así como sus consecuencias al retorno democrático, viabilizaron un estado generalizado de silencio, olvido, negación, apatía, desarticulación, anomia y retracción que fueron entendidos como factores constitutivos e ingredientes necesarios para la desmovilización o la invisibilización de la sociedad civil durante la redemocratización. Sin embargo y a medida que la transición avanzaba, la memoria colectiva traumática - entendiendo memoria como un resumen interpretado de la experiencia empírica (Salazar, 2001: 16) - comienza a evolucionar y a originar nuevas interpretaciones sobre el pasado.

Los primeros años de la redemocratización y especialmente hasta 1998, la memoria que prevaleció entre la sociedad chilena fue una de caja cerrada o memoria como olvido, enmarcada en una democracia amnésica. Al respecto, autores como Ensalaco (2005) afirman que el miedo que reinaba en la sociedad chilena sobre una eventual regresión autoritaria llega a su fin el año 1998 cuando Pinochet deja la comandancia del ejército y es arrestado en Londres, hecho que lo despoja de su imagen de general intocable. En este contexto, la memoria que juzgaba al golpe militar como un hecho ‘salvador’ y especialmente la memoria como olvido, que fueran hegemónicas durante

la transición temprana con un correlato de desactivación social, comienzan a perder preponderancia, tal como se observa en la figura 6.1.

Figura 6.1. Evolución de la memoria como salvación. ¿Cree usted que los militares tenían razón para dar el golpe de Estado o cree usted que nunca hay razón para dar un golpe de Estado?, 2013.



Fuente: Barómetro CERC (2013: 7).

La detención de Pinochet - uno de los nudos convocantes o irrupción de memoria más importantes de la transición y hecho que, en palabras de Winn (2007), rompe el estancamiento de la memoria - permitió no sólo el retroceso del temor de la población frente al mundo militar, sino también respecto al miedo a la crítica, a la pluralidad y a la diversidad de opinión (Rovira, 2007). De acuerdo a la evidencia empírica, a medida que la transición progresaba, la ciudadanía chilena fue perdiendo el miedo a ejercer la libertad de opinión, fue expandiéndose el horizonte de discusión, así como la definición sobre lo que la sociedad consideraba deseable.⁴ De acuerdo a los datos del Barómetro CERC (2013), sólo en el transcurso de la última década y al cumplirse 30 años del golpe militar, el porcentaje de chilenos que lo rechaza aumenta en veinte puntos porcentuales alcanzando cerca de un 70 % de la población, mientras decae en la misma tasa la opinión que justificaba las razones tras la intervención militar. Asimismo, entre el año 2003 y el 2013, la responsabilidad del golpe atribuida a Augusto Pinochet aumenta de un 24% a un 41%. Sobre las características de Pinochet,

⁴ En 2001 tan sólo 28% de la sociedad opinaba que era mejor que se mostraran los conflictos de una comunidad, mientras el 2004 esta cifra aumenta a 42% (Rovira, 2007) en base a datos del PNUD 2004.

un 76% de los encuestados declara considerarlo un ‘dictador’, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la misma medición en 2009, en una fotografía general en que la imagen del régimen militar y la figura de Pinochet sufren un fuerte deterioro. Según la misma encuesta, sin embargo, es posible observar que el tema del pasado traumático no se encuentra resuelto cuando un 74% de los encuestados opina que las divisiones del pasado en Chile aún no están superadas y un 75% cree que las huellas dejadas por el régimen militar todavía se mantienen.

Lo anterior, es decir, una reinterpretación del pasado y una evolución de la memoria traumática, podría haber dado pie lentamente a lo que Salazar (2001: 18) ha denominado una “memoria volcada hacia la acción” o el tipo de memoria que, producto de un ejercicio interpretativo sobre los hechos del pasado, construye una verdad factual propia que no habita en el pasado sino que se proyecta al futuro y actúa como propulsor para la acción de un conjunto de actores. Es así relevante observar la forma en que el trauma - actuando a nivel de la identidad colectiva - facilita la desactivación social durante las primeras etapas de la transición, pero que comienza luego a generar nuevos discursos aglutinadores e ideas-fuerza, y con ello, insumos para la movilización, cristalizado primero en las protestas estudiantiles de 2006 y especialmente luego en el ciclo de movilizaciones del año 2011, tal como se presenta a continuación.

6.1.1 El trauma pasado como identidad presente: el fetichismo de la memoria

Para Volkan (2001), existe una relación directa entre trauma e identidad colectiva - componente fundamental de la acción social - en la medida que ésta última es definida como la experiencia subjetiva de un grupo extenso de personas que se encuentran vinculadas por una sentido persistente y semejante. Una de las tareas principales de un grupo sería mantener, proteger y reparar su identidad grupal, y dicha identidad estaría compuesta por lo que el autor define como un “trauma elegido” (*chosen trauma*) o una representación mental de un trauma masivo sufrido por un grupo de ancestros. En el caso chileno, esta noción se vuelve útil para describir una identidad que surge y resurge en torno a la experiencia de un trauma compartido, no sólo en la generación que vivió la dictadura, sino también en las generaciones posteriores. Este trauma elegido permite entonces elaborar un discurso y, con ello, una identidad común en torno a vivencias y juicios sobre el pasado.

De esta manera, la memoria post traumática tiene repercusiones a nivel de la identidad colectiva, esto es, atañe a un imaginario e identidad grupal y su evolución permite, por tanto, alimentar nuevos discursos compartidos con implicancias para el

quehacer de los movimientos sociales. Conviene en este espacio recordar lo planteado por Halbwachs (1980), quien define memoria colectiva como un hecho social cuyo rol es generar cohesión societal pues permite la conexión entre un grupo y su pasado que se materializa a través de una identidad común. Así, y dado que el acto de recordar es una acción social, la recolección de recuerdos y el proceso dinámico en que el pasado es resignificado en el presente, es decir, generar o producir memoria, tendrían la capacidad de constituir identidad grupal y comunidad (Arias y Del Campo, 2009).

Más aun, para Salazar (2000), existe una especie de acervo o capital mnémico que sirve para proporcionar bases identitarias y cognitivas para los movimientos sociales. En el Chile post dictatorial, estos estratos mnémicos surgen especialmente de las constelaciones históricas del Estado Benefactor y de la propia dictadura, con una memoria mitificada de dichos períodos, que alimentan las bases y la proyección de la acción colectiva. El pasado representaría un insumo identitario que, a través de una reinterpretación y resignificación del pasado, permitiría constituirse en un discurso que cohesiona y nutre la acción colectiva siendo, tal como se propone en este trabajo, uno de los factores que impulsó el ciclo de movilizaciones sociales iniciado el 2011.

Variada evidencia de la evolución de la memoria traumática y la resignificación del pasado como *inputs* movilizadores puede encontrarse en el ciclo de movilizaciones iniciado el año 2011. Desde que surgieron las movilizaciones, los estudiantes chilenos han protestado contra lo han que denominado el modelo educacional ‘de Pinochet’. Cantando ‘y va a caer, y va a caer...’ o golpeando cacerolas, han utilizado los mismos repertorios de acción colectiva de las marchas contra el régimen dictatorial en la década de 1980, pero esta vez contra el sistema educativo originado en aquellos años. Asimismo, emerge con ímpetu la discusión respecto a la legitimidad de una Constitución creada durante la dictadura militar así como el llamado de algunas organizaciones a la redacción de un nuevo documento constitucional, legados del pasado que se constituyen en material para demandas sociales del año 2011.

La idea de un pasado en que se tuvieron derechos que se perdieron con la arremetida de la dictadura, se vuelve relevante para comprender las motivaciones tras las movilizaciones del 2011. Como señala Giorgio Jackson, presidente de la FEUC 2011, el tema de la memoria fue importante para el movimiento estudiantil de ese año, especialmente aquellas memorias previas a 1973 o constelación histórica del Estado Benefactor,

fue sobre todo muy fuerte para las generaciones a las que nosotros queríamos convocar, que eran aquellos que lucharon contra la dictadura y que hoy día estaban sometidos al

sistema por las responsabilidades que tenían (...) Para esa generación sí fue muy importante porque ellos tuvieron la experiencia o de haber estudiado por nada o muy poco o que sus papás, nuestros abuelos, habían estudiado gratis, entonces dijeron sí, hoy estamos todos endeudados, generó mucha adhesión el recordar que algún día [la educación] fue gratuita, y si hoy día somos un país más rico ¿por qué no podemos hacer lo mismo?... el sueño era menos imposible porque había un antecedente (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).

En la misma línea, Camilo Ballesteros, presidente de la FEUSACH 2011 indica,

yo creo que el pasado pesa mucho, mucho... por ejemplo el grito de la USACH sigue siendo el grito de la UT⁵ y tiene que ver con una lógica muy nostálgica de los años setenta (...) nosotros el año 2011 pensamos en la reforma universitaria de fines de los sesenta, tiene mucho de eso (comunicación personal, 5 de diciembre de 2014).

Al respecto, Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH 2011, concuerda,

hay una memoria genética de ciertos actores sociales que estaban de alguna manera relacionadas con instituciones que vivieron ese Estado de Compromiso que tenía una educación pública gratuita, que se hacía cargo de un cobre nacionalizado, en fin, y que apelan a esa imagen como para intentar recuperarlo y yo creo que eso estaba muy presente en el movimiento estudiantil que se organiza en torno a las universidades tradicionales, apela al modelo del siglo XX de educación (comunicación personal, 12 de diciembre de 2014).

La memoria y el pasado como idea-fuerza para la acción social es algo a lo que Ricardo Brodsky, Director del Museo de la Memoria, también atribuye relevancia,

uno ve las manifestaciones estudiantiles y aparece la figura de Allende, aparecen muchas cosas del pasado, incluso van apareciendo los partidos del pasado, aparece la Izquierda Cristiana, el MIR, que no tienen ninguna relevancia hoy día, ni discurso, ni propuesta, ni nada, pero aparecen en estas manifestaciones como íconos (comunicación personal, 4 de diciembre de 2014).

⁵ La Universidad Técnica del Estado (UTE) fue la universidad pública creada en 1947 que durante la dictadura dio origen a la Universidad de Santiago de Chile y a varias universidades regionales.

Así, a medida que avanza el proceso de redemocratización en Chile, los legados del pasado traumático más que inhibir la acción colectiva, se van transformando lentamente en discursos y demandas vehiculizadas a través de la movilización social, con una firme expresión en septiembre del año 2013 en el marco de las conmemoraciones de los 40 años del golpe militar, fecha clave para la irrupción de memoria y el cierre del ciclo de amnesia transicional. El día 5 de septiembre se realiza una de las ya frecuentes movilizaciones estudiantiles, en cuya convocatoria la Confederación de Estudiantes de Chile utiliza el siguiente mensaje:

hace 40 años nuestro país vivió un quiebre, el 11 de septiembre de 1973 tuvimos un antes y un después, un antes de construcción de un modelo y proyecto de país que velaba por una sociedad para todos y todas (...) Durante veinte años se siguieron profundizando las injusticias y la segregación en vivienda, salud y educación, y la educación ya no fue más un derecho social sino un bien de mercado, y los ricos estudiaron con los ricos y los pobres con los pobres, y hubo lucro, estafa, negocio. Para que nunca más. Chile despertó (CONFECH, 2013).

Utilizando repertorios de acción del pasado, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, hizo un llamado a ocupar los establecimientos educacionales como una manera de conmemorar los 40 años del 11 de septiembre. A propósito, una de las voceras de la ACES, Isabel Salgado, señaló que “la consigna para conmemorar esta fecha es los 40 años resistiendo (...) es que los estudiantes nos hemos visto afectados por el sistema educativo que heredamos de la dictadura y que la Concertación y la Alianza perfeccionaron en los últimos años” (*El Mostrador*, 11/9/2013). En algunos colegios se realizaron velatones, se apostaron imágenes de víctimas de la violencia militar y actos en memoria de los estudiantes asesinados durante la dictadura. Para Eloisa González, otra de sus voceras, la idea tras la ocupación de los establecimientos fue reivindicar los proyectos educacionales que “fueron aplastados durante la dictadura” (*Bio Bio Chile*, 10/9/2013).

Ejemplos como los anteriores abundan al observar las manifestaciones y los repertorios de acción de los movimientos estudiantiles. Más aun, la imagen de Salvador Allende, omitida durante la transición temprana, comienza a emerger a medida que la redemocratización progresaba, siendo el año 2008 elegido como el chileno más importante de la historia en un polémico concurso de televisión.⁶ Su figura fue utilizada como signo de lucha y reivindicación por parte de los estudiantes. Como señala Giorgio Jackson,

⁶ Ver ‘Allende, el chileno “más grande”’, BBC.com, 18 de septiembre de 2008.

Allende es un símbolo, un símbolo de lucha de ideales, a pesar de que probablemente la mayoría de los que están marchando no conocen los pro y contras de lo que ocurrió en la Unidad Popular, hay una representación del sentido de justicia, de luchar por ideales, en este caso, la educación como un derecho que yo creo que están representados en su figura (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).

La referencia al pasado en una movilización del presente, sin embargo, trascendió al movimiento estudiantil para vehiculizar también demandas de los movimientos regionalistas y medioambientalistas que se hicieron visibles el año 2011. Una motivación fundamental para la emergencia del movimiento social de la ciudad de Aysén el año 2012 fue, a juicio tanto de Iván Fuentes como de Misael Ruiz,⁷ líderes del movimiento regionalista, el descubrimiento del petitorio de un movimiento ciudadano de características similares al que ellos lideraran, pero correspondiente al año 1942. En éste, se exigían básicamente las mismas demandas que, a juicio de los activistas, setenta años después seguían vigentes y aun sin resolver por parte del gobierno central.

De la misma manera, el movimiento social de la ciudad de Calama alzó como una de sus demandas principales la renacionalización del cobre, recurso de propiedad del Estado chileno hasta la irrupción de la dictadura. Esteban Velásquez, alcalde de Calama y líder de este movimiento regionalista del año 2012, señala que en dicha movilización:

se anhelaba mucho recuperar una ley parecida a la llamada “ley del nuevo trato” que en la década del cincuenta se instala (...) la ley del cobre 11.828 que dejaba un 5% de las utilidades del cobre en comunas y ciudades como Calama. Eso lo perdemos el año 1974 una vez que se instala la dictadura y eso es lo que nosotros decíamos: si hubo antes ¿por qué no ahora?, y a partir de eso levantamos una demanda (comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).

De esta forma, para el caso chileno parece cumplirse aquello planteado por Páez *et al.* (2001), quienes señalan que los hechos traumáticos se transmitirían y se mantendrían en la memoria activa de, al menos, tres generaciones, en forma de climas de silencio que parecen finalizar al cabo de 40 años. Esto, pues al conmemorarse las cuatro décadas del golpe, la memoria pareció brotar e irrumpir de manera impetuosa,

⁷ En entrevistas realizadas en la ciudad de Aysén en noviembre de 2014.

alimentando todo tipo de actos y, fundamental para el interés de este trabajo, el accionar colectivo de los movimientos estudiantiles, regionalistas y medioambientalistas.

El vínculo entre un pasado traumático y el presente se encontraría así mediado por una memoria común, presente en el que el pasado y la memoria se vuelven relevantes para la acción de los sujetos colectivos, y en el que las memorias sueltas y las memorias emblemáticas (Stern, 2000) se cohesionan para articularse en torno a causas comunes. El pasado se convierte en una especie de utopía, un *leitmotiv* que cohesiona, identifica y logra movilizar a ciertos segmentos sociales, generando la emergencia de nuevos terrenos en disputa dentro de una sociedad. Para Huyssen (2003), el colapso de las grandes utopías y meta relatos del siglo XX, que apelaban a la construcción del futuro (comunismo, fascismo, modernización, etc.), dio paso a la emergencia de los discursos en torno a la memoria. Esto es, mientras en el siglo XX en occidente se apeló a futuros utópicos, hacia finales de ese siglo la utopía se comenzó a construir en torno a una reivindicación del pasado.

Al respecto, Ricardo Brodsky, desde el Museo de la Memoria,⁸ señala que en las manifestaciones de 2011,

la gente se moviliza mirando el pasado, o sea, se movilizan en base a la memoria de un pasado, un poco idealizado, pero que sienten que era mejor... yo creo que hay mucho de eso, los movimientos sociales actuales reivindican lo que ellos creen que era el Chile del pasado, la educación pública y de calidad, el cobre renacionalizado, etc., incluso la idea de tener utopías, aunque no se precise cuál es la utopía, la idea de tener una utopía es algo que los moviliza (...) pero es un pasado idealizado porque si uno ve el caso específico se da cuenta que, es cierto, en Chile había una educación pública gratuita y de calidad, pero que abarcaba a un 20% de la población (...) hay una idealización de un pasado más elitista, porque el pueblo no era un actor ni de la educación, ni del consumo (comunicación personal, 04 diciembre, 2014).

Desde esta perspectiva, la memoria del pasado como un proyecto trágicamente interrumpido por 17 años de dictadura militar, se convierte en un horizonte utópico, un espacio pretérito que bordea la idealización y deriva en una especie de memoria fetichista o en un abuso de la mirada retrospectiva. El fetichismo de la memoria ha sido planteado en referencia a una narrativa del pasado en que se combinan abusos del

⁸ La creación misma del museo de la memoria habla de la necesidad de traer el pasado al presente y coincide con el cierre del ciclo de amnesia de 40 años. El Museo es un 'proyecto Bicentenario', inaugurado en enero del 2010.

recuerdo con recreación de olvidos, derivando en procesos de construcción de memoria en base al poder de cognición presente (Martínez de Bringas, 2006). Esto es, la recolección del pasado se realizaría estratégica e instrumentalmente para satisfacer las necesidades e intereses del presente, como una forma de establecer o simbolizar cohesión social o la membresía a comunidades reales o artificiales; como una manera de legitimar instituciones, poderes o relaciones con la autoridad; y finalmente, como una estrategia de socialización e inculcación de creencias, sistemas de valores y formas de comportamiento (Hobsbawm y Ranger, 1992). Resulta conveniente volver en este punto a aquello planteado por Halbwachs (1980), en el sentido que la memoria individual dependería de las membresías colectivas y se encontraría siempre enmarcada socialmente cuando es el propio grupo el que determina lo que es memorable y la forma en que debe ser recordado.

En este sentido, una mirada fetichista o idealizada sobre el pasado, en que se destacan ciertos elementos mientras otros son omitidos o silenciados, cumpliría, en el caso chileno, la función de dar un relato aglutinador o un discurso que cohesione a un grupo determinado de la sociedad y que permite su eventual movilización. Esto se relaciona con la idea de la ilusión retrospectiva que Lacan, a partir de Freud, utiliza para describir la manera en que los recuerdos o las experiencias vividas son reconstruidas desde la forma en que los deseos son modelados, en otras palabras, los recuerdos provendrían del futuro, en una realidad cuya envoltura sería siempre fantasiosa o ideológica (Althusser, 1996). Para Francisco Figueroa, la memoria idealizada del pasado previo a 1973,

lo veíamos, y de hecho, nosotros como Autónomos⁹ tratábamos de combatir un poco eso porque nos parecía que como discurso lo estrechaba mucho al imaginario de la izquierda tradicional y de los actores sociales tradicionales que tienen cada vez menos peso, que cada vez convocan menos. Además era un modelo que no resolvió nada, al revés, era educación pública gratuita efectivamente pero, exagerando, era para el 1% de la población, para muy poca gente. (...) Entonces yo creo que el 2011 fue una síntesis, una mezcla entre dos cosas, entre ese imaginario de izquierda de nostalgia del siglo XX y una cosa más nueva que es más negativa en el sentido de negación, porque no tiene un referente, que es más crítica de lo que hay que apelación a algo que hubo. Esa mezcla fue lo que hizo que el 2011 fuera tan transversal y tan explosiva, creo que lo primero le da mucho filo político, le permite ponerle un *set* de valores distinto a los valores del individualismo, de la competencia, en fin,

⁹ Izquierda Autónoma es movimiento político de izquierda de inspiración marxista y que recoge la herencia autonomista del Movimiento SurDa. Se encuentra presente en universidades. Entre sus miembros más reconocidos está Gabriel Boric, actualmente diputado de la República.

y lo segundo, esta cosa más crítica, más actual, más nueva, te da mucha más capacidad de interpretar a la gente que está fuera, que está viviendo el neoliberalismo como naturalizándolo, el problema de la deuda, el problema de la comunidad social, creo que esas dos cosas están en la base del 2011 (comunicación personal, 12 de diciembre de 2014).

Asimismo y desde una mirada crítica, Patricio Segura, vocero del Movimiento Patagonia sin Represas y actor del movimiento ciudadano de Aysén de 2012 señala,

yo pongo en duda esa noción de que en Chile tuvimos tantos derechos y los perdimos. Ahora, hubo un proceso en la historia chilena que fue la Unidad Popular donde la percepción ciudadana era que teníamos todos esos derechos, teníamos el cobre, teníamos la leche. Hay un imaginario respecto a lo que fue la Unidad Popular, el gobierno de Frei y los anteriores Radicales en que había una especie de Estado de Bienestar, pero sobre la base de la depredación de los recursos naturales. Recordemos que en los años treinta se formó la CORFO que, aunque eran otros tiempos, permitió la creación de las grandes industrias, de las grandes represas, las grandes madereras, las grandes forestales y todo lo grande, arrasando con los recursos naturales... no era un país al que a mí personalmente me gustaría retornar, pero esa percepción existe, en Aysén también, pero había gente como yo que estábamos movilizadas pero que no teníamos esa percepción (comunicación personal, 20 de noviembre de 2014).

De esta forma, el pasado en el presente y la memoria traumática cumplirían un rol como insumo para las movilizaciones al permitir la emergencia de una utopía que facilitaría la construcción de una identidad grupal. Memoria que, cayendo en una idealización o fetichismo del pasado, genera ideas-fuerza para el quehacer de los movimientos sociales que buscan reivindicar elementos de ese proyecto pasado que fuera, a su juicio, desmembrado con el advenimiento dictatorial.

6.1.2 Herencias de memoria y aprendizaje inter-generacional

La generación que comienza a salir a protestar a las calles, primero el 2006¹⁰ y luego masivamente el 2011, puede ser observada en relación a las generaciones precedentes,

¹⁰ Otra memoria que opera e incide en las movilizaciones 2011, es aquello que los estudiantes denominaran la traición de 2006. La llamada memoria de traición se refiere al acuerdo con que se zanjara la demanda estudiantil de las movilizaciones secundarias de aquel año que implicó una gran reforma a la educación que, a juicio de los estudiantes, se discutió y decidió sin su participación y que no modificó la realidad de la educación en términos reales y profundos. Esta memoria determinó que el año 2011 la movilización fuera mucho más intransigente y desconfiada a la hora de negociar con las elites políticas lo que facilitó una mayor radicalidad del movimiento del 2011 en comparación con el de 2006. Para

que vivieron el trauma de la dictadura militar y el post-trauma retornada la democracia. La(s) memoria(s) actuando como puente entre ambos grupos etarios o la herencia mnémica de las familias sobre la nueva generación de movilizados se manifiesta de diversas maneras. En el estudio realizado por Aguilera Ruiz (2014),¹¹ entre los estudiantes movilizados los años 2006 y 2012 destaca el peso de la dictadura al interior de los grupos familiares, con una influencia directa de dicha experiencia sobre las vivencias y compromisos políticos de los hijos. Existiría una herencia familiar de miedo sobre la participación en manifestaciones y debates políticos, pero al mismo tiempo un legado de sensibilidades y formas críticas de comprender la realidad social (desigualdad, injusticias, etc.). En coherencia con lo planteado en este trabajo, para el autor, la herencia de la dictadura como experiencia familiar estaría arraigada y actuaría de telón de fondo para los jóvenes que se involucran en las movilizaciones actuales, donde el miedo de los padres habría provocado que en el seno de aquellos grupos familiares el tema político se transformara en tabú.¹² El miedo, sin embargo, es entendido y asimilado por los jóvenes activistas de una manera distinta, es decir, reconocen un pasado de represión y trauma, pero se autodenominan una generación ‘sin miedo’, considerando que aquello le correspondió a los padres, quienes les transmitieron un temor y un cuidado en el actuar político que ellos han logrado franquear. En este sentido, ambas generaciones dialogan y se reencuentran políticamente y, pese al temor, los padres apoyan a los hijos en movilizaciones que han permitido incluso destapar y descubrir historias y trayectorias de movilización de familiares, más o menos directos, que se encontraban silenciadas.

Por otra parte, la herencia mnémica de las familias sobre los movilizados podría encontrar expresión en el llamado aprendizaje intergeneracional. Concretamente y respecto a la “revolución de los pingüinos”, Chovanec *et al.* (2008; 2010) han analizado y encontrado evidencia sobre el rol que cumplió el aprendizaje inter-generacional entre los movimientos sociales. Esto es, se analiza la transmisión de memorias colectivas y el activismo político de generaciones previas, especialmente de los movimientos anti-

Francisco Figueroa: “el cierre del 2006, la imagen de las manitos arriba provocó mucha desconfianza en el movimiento estudiantil posteriormente y eso se tradujo en que se empezaron a revisar mucho más las formas en que se relacionaba con el sistema político, pasó a ser mucho más evidente que era estéril un diálogo sin movilización”. Ver <http://www.adelantechile.cl/2013/12/18/la-estrategia-de-la-nueva-mayoria-para-el-movimiento-estudiantil/y>
<http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=5407>

¹¹ Voceros nacionales, participantes en Asambleas nacionales o Confederaciones, representantes regionales y militantes de base.

¹² Este hecho ayuda asimismo a comprender que, previo a 2006 y 2011, la escuela y la universidad tuvieran como única función el estudio y que el mandato familiar para los jóvenes no fuera otro que el ir a estudiar, distinto a lo ocurrido en Chile hasta 1990, donde dichos espacios representaron semilleros de acción de protesta

dictatoriales de la década del ochenta, hacia las nuevas generaciones que protagonizaron las movilizaciones del año 2006. En base a un trabajo cualitativo, se plantea que los grupos de movilizadores contra la dictadura desarrollaron un fuerte sentido crítico que no desapareció durante los años 1990 y 2000 en que la actividad movilizadora decayó y que, en muchos casos, fue traspasado hacia los hijos.

Todo lo anterior implica que, pese a que los movimientos sociales puedan aparentar encontrarse en un estado de ‘reposo’ o desmovilización, podrían estar actuando de manera latente a través de la transmisión de valores y un pensamiento crítico que vincula a diferentes generaciones en el traspaso de una memoria colectiva. Recordando el análisis de Lechner y Güell (1998), lo observado en el Chile transicional se trataría de una memoria silenciosa más que una memoria de olvido, donde el silencio no equivale al olvido, sino que las memorias colectivas más bien no logran reflexionar ni nombrar los procesos en marcha, lo que no implica que tales procesos estén instalados y sean relevantes para dichas memorias.

6.1.3 Memoria traumática y una nueva noción de derechos humanos

En Chile, la memoria traumática se encontró estrechamente ligada a la temática de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Durante los ochenta, dicha causa articuló y movilizó a segmentos importantes de la población bajo la consigna de la denuncia de la violencia política, la exigencia de verdad y de justicia y, por supuesto, la recuperación de la democracia. Con el advenimiento democrático, este móvil se desvanece y muchos de los grupos organizados pierden su sentido, con un consecuente repliegue de su acción de protesta y una pérdida de dinamismo de aquella lucha. A medida que la transición avanza, sin embargo, no sólo la memoria colectiva y las interpretaciones del pasado comienzan a sufrir modificaciones, sino que el tema de los derechos humanos asimismo empieza a transformarse dando pie a una nueva interpretación de lo que se entiende por estos derechos, lo que supone al mismo tiempo un nuevo relato aglutinador y un móvil para grupos de la sociedad civil.

Con esto, durante la redemocratización las demandas comienzan a centrarse en darle contenido a la democracia y permitir una nueva definición de derechos humanos relacionada con la profundización democrática, la inclusión y la equidad. De esta manera, la evolución de las ideas-fuerza de los movimientos de defensa de los derechos humanos está estrechamente ligada a los cambios y reestructuraciones que ha experimentado la memoria colectiva. En este contexto, el llamado Movimiento Democrático, que cumpliera un rol central en la lucha contra el régimen autoritario, parece ser resignificado en el marco de la redemocratización, expandiendo e

incorporando pronto nuevos elementos a su campo de acción (Garretón, 1996). Con ello, las demandas sociales ya no sólo se concentran en un reclamo sobre los crímenes del pasado aún no resueltos, sino también en torno a la denuncia de formas de violencia arbitraria, de manifestaciones de autoritarismo, así como en la lucha contra los problemas de inequidad, pobreza y exclusión social y política. Como señala Viviana Cáceres, profesional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante los últimos años se ha producido en Chile una nueva conciencia de lo que significan los derechos humanos, que trasciende al imaginario de los crímenes dictadura, para ampliarse y permitir un fortalecimiento ciudadano: “la noción que teníamos anclada de derechos humanos, que eran graves violaciones de la dictadura, tenían un poco amarrados a los movimientos porque, o eras de esa línea, o eras de otra línea”. Con ello, las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de género, discapacidad, migración, recursos naturales, etc. comienzan a considerar y a definirse a sí mismos como problemáticas de derecho humano, lo que implica una noción diferente y empoderadora,

el tema de derechos humanos ha sufrido una evolución en dos sentidos, primero sacar el tema de derechos humanos como algo [de la dictadura], porque nosotros cuando empezamos todo el mundo pensaba que éramos una especie de “peña”, era la noción que había del Instituto de Derechos Humanos, incluso en muchas partes, el imaginario respecto al Instituto sigue siendo “Villa Grimaldi”,¹³ entonces ha habido un cambio significativo en términos de superar este eje temporal de pasado, situarlo en el presente y proyectar hacia el futuro una cultura respetuosa de los derechos humanos en el que la sociedad civil es un actor fundamental (...) [en un segundo sentido] el enfoque de derechos humanos estaba ausente en temas como discapacidad, derecho al agua, derecho a la ciudad, derechos de la familia. Ha habido cambios en los últimos años en que las organizaciones han ido incorporando esos derechos (...) yo creo que el asumir la noción de derechos, que tienen derechos, en las distintas organizaciones ha hecho que se empoderen (...) hay organizaciones que logran en ese eje hacer el cambio, como por ejemplo Corporación Humanas, que lo que hacen es meterse en derecho internacional y decir “nosotros tenemos derecho”, en este caso, de las mujeres, y empiezan a hablar en esa clave. Y cuando se articulan y empiezan a hablar en esa clave, es distinto porque así le estás diciendo al Estado: “ojo, nosotros tenemos un derecho internacional de derechos humanos y a nivel nacional existen deudas”, y eso comienza de a poco a pasar en temas medioambientales, en temas de

¹³ Centro de secuestro y tortura vinculado a las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura de Augusto Pinochet.

migrantes, se empiezan a empoderar las organizaciones con contenido de derechos humanos (comunicación personal, 12 de noviembre de 2014).

En este contexto, la defensa y promoción de los derechos humanos como campo de acción para los movimientos de la sociedad civil, no desaparece sino que cambia su definición, proyectándose más allá de la lucha desplegada durante la dictadura para ampliarse e integrar nuevos elementos para acción colectiva relacionadas con la justicia social, la equidad y la calidad de vida.

Dado lo expuesto, es conveniente preguntarse en qué medida la evolución de la memoria traumática comienza a ser resignificada y empieza a nutrir una identidad colectiva que hace posible la acción de los movimientos sociales en el ciclo de movilizaciones 2011. Proyectando la evolución de la memoria traumática hacia el futuro, es conveniente destacar que el pasado traumático podría actuar en el presente en diferentes capas. Como se ha planteado hasta ahora, como insumo movilizador, la memoria sirve de motor para las demandas de los movimientos sociales contemporáneos. Sin embargo y al mismo tiempo, la memoria traumática podría representar una piedra de tope para los mismos cambios que las movilizaciones reclaman.

Con motivo de las grandes reformas estructurales anunciadas en el gobierno de Michelle Bachelet, Ricardo Brodsky señala,

surge el miedo a que se pierda el tono en el debate público y ese miedo cruza absolutamente, la sociedad chilena hoy día puede estar pidiendo reformas profundas, pero es una sociedad moderada políticamente, puede que esté pidiendo que haya una gran reforma en la educación, pero no está dispuesta a un conflicto político agudo... todavía está muy presente el trauma en una generación, yo aquí en el museo lo veo todos los días. La gente tiene miedo, ya no le tiene miedo a alguien, como a Pinochet por ejemplo, pero tiene miedo a que la sociedad chilena vuelva a polarizarse. (...) y los jóvenes puede que no tengan miedo o que no tengan el trauma, pero el resto de la sociedad sí lo tiene y las generaciones mayores siguen siendo mayoritarias, y cuando se impulsa una reforma que profundiza un debate, el resto de la sociedad “se echa para atrás” (comunicación personal, 04 diciembre, 2014).

En otras palabras, la memoria de un pasado traumático moviliza a ciertos sectores de la población, pero para otros grupos - o quizás para los mismos - reactiva miedos del pasado: el temor a la polarización, a la división, al conflicto, a cometer errores, elementos característicos de un pasado que aún se encuentra fresco en la memoria de

muchos chilenos. Así, la memoria de un pasado traumático como inhibidor de grandes cambios sociales opera en paralelo a una memoria volcada hacia la acción.

6.2 Paradigmas de gobernabilidad democrática y (des) movilización

Como se presentara en otros momentos en este trabajo, los movimientos sociales o una sociedad civil movilizada y que toma el control de la agenda política nacional, es un fenómeno que se hace latente o patente en función de los cambios en el contexto o el flujo de oportunidades políticas de un régimen determinado. En este sentido y tal como lo indica Tarrow (2011: 33), la acción social surge desde ciudadanos comunes que, muchas veces alentados por líderes o agentes movilizadores, perciben oportunidades que son mayores que los costos colectivos de acción. Estas oportunidades pueden relacionarse con posibles aliados, elites o autoridades que se muestran más vulnerables, o a cambios en el sistema político que permiten la activación de redes sociales e identidades colectivas en torno a temas comunes. Con ello, las oportunidades políticas están moldeadas por las características de los regímenes y pueden generar cambios en la interacción entre los movimientos y los partidos políticos, así como la apertura del sistema y posibilidades para la emergencia de movilización social.

Como se revisó en el cuarto capítulo, las estrategias de gobernabilidad puestas en práctica por los gobiernos de la Concertación contribuyeron a generar un clima de desactivación social, especialmente durante las primeras etapas de la transición. Sin embargo, los modelos de relación y la visión del Estado sobre la sociedad civil, así como las condiciones institucionales y estructurales que dieron forma a las posibilidades y a las limitaciones de una eventual movilización social durante la transición, comienzan a evolucionar a medida que se desenvuelve la democratización para permitir la generación de insumos para la protesta.

En primer lugar, los procesos antes descritos - la monopolización del espacio político por parte de una minoría de manera autónoma, los amarres o enclaves autoritarios, el vaciamiento ideológico, la deslegitimación de la protesta y la instrumentalización de la participación - habrían ido consolidando una distancia de la base social respecto a las instituciones políticas así como una sensación de inequidad en la distribución del poder. La concentración de poder tiene una faceta económica, pero también una faceta política en que éste converge en una elite en contraposición a la sociedad civil - con un consecuente “encapsulamiento de la clase política” (Vera, 2012: 290) -, y en un gobierno central en contraposición del poder regional o local. Dando prioridad y habiendo exitosamente alcanzado la estabilidad política, la

democratización como un proceso gradual, así como el crecimiento y el desarrollo económico,¹⁴ Barrett (1999: 24) señala que en las últimas décadas Chile “ha privilegiado la acumulación sobre la inclusión y la distribución”.

Junto a estos elementos y pese a lo simplista que sería atribuir la responsabilidad de la brecha entre la participación política y la sociedad únicamente al Estado, para Cleuren (2007), los canales de participación creados por los gobiernos de la Concertación no resultaron atractivos ni generaron oportunidades en el proceso de toma de decisiones, creando una apatía política generalizada. De igual forma, el problema de la concentración de poder también se observó en la relación asimétrica entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Como señala Flores (2014), los gobiernos de la Concertación recibieron un país regionalizado y desconcentrado, con alta desigualdad inter e intra-regional. A partir de 1990, se dieron importantes pasos para la democratización parcial de las regiones¹⁵ aunque, para el autor, todavía quedan deudas y déficits especialmente en el tema de la construcción de un sujeto político y de un espacio público regional.

La transformación de la relación entre la base social y los partidos políticos se manifestó, siguiendo a Siavelis (2002), en cinco fenómenos paralelos: un electorado menos ideológico, el aumento de los independientes, la expansión de las tasas de abstención y la anulación de votos, y una disminución del nivel de confianza en las instituciones políticas, con efectos para los prospectos democráticos del país. Siguiendo esta idea, Luna y Zechmeister (2010) indican que estos años se ha producido una desconexión entre el sistema de partidos chileno y la ciudadanía así como un debilitamiento de la movilización electoral - el tipo de movimiento central y que fuera privilegiado y potenciado por el paradigma de gobernabilidad de la Concertación -.

¹⁴ Especialmente durante los dos primeros gobiernos democráticos, el crecimiento económico de Chile fue el doble del promedio de América Latina, mostrando la mejor performance de todos los países de la región. Este incremento estuvo acompañado por un aumento en los indicadores macroeconómicos y financieros, tasas de ahorro e inversión, saldos fiscales, un grado de apertura y desarrollo del mercado de capitales. Asimismo, el país redujo sustancialmente su nivel de pobreza y obtuvo resultados positivos en los índices de desarrollo humano, en la expansión de la cobertura educativa, en indicadores de salud, ingreso *per cápita* a la vez que disminuyeron las tasas de inflación y desempleo, entre otros (Jara, 2014).

¹⁵ La elección de representantes comunales y regionales con elección de Consejeros regionales, así como el perfeccionamiento de la desconcentración administrativa fueron importantes avances.

6.2.1 Cambios en las estrategias de gobernabilidad: 1998 y 2006 como puntos de inflexión

La distancia entre la clase dirigente y la base social fue aumentando a medida que el proceso de recuperación democrática tuvo lugar, siendo especialmente evidente en los primeros años de la transición, en la década de 1990. En esos años, como señala De la Maza (2010a), la participación ciudadana formó parte del discurso político oficial, pero su significado y aplicación fue limitado y ambiguo sin implicar cambios concretos en las orientaciones y prácticas del proceso político e institucional. En este sentido, los primeros dos gobiernos de la Concertación (1990-1999) priorizaron la recuperación democrática así como el desarrollo y la modernización del país y, si bien se crearon espacios para la participación ciudadana, ésta estuvo lejos de estar en el centro del relato oficialista (Fuentes, 2012).

Sin embargo y a partir de 1998, la estrategia de gobernabilidad elitista y el tipo de relación establecida con la sociedad civil comienzan a sufrir las primeras fisuras cuando el dominio eleccionario de la Concertación se muestra por primera vez amenazado por la derecha en la elección parlamentaria de 1997. Esta tendencia se reproduciría en 1999 cuando Ricardo Lagos triunfa sobre el candidato de la oposición Joaquín Lavín por un escaso 2,62% de diferencia. Esta estrecha victoria electoral obligó a la Concertación a replantear sus ideas-fuerza y repensar su forma de relacionarse con la ciudadanía, introduciendo variaciones al, hasta entonces, sólido paradigma de gobernabilidad elitista y distanciado de la sociedad.

Así y nuevamente como resultado de una evaluación y un aprendizaje político, ya en el gobierno de Lagos (2000-2006) se pone en marcha un enfoque más inclusivo, con una reforma modernizadora y participativa de la gestión pública que, como describe Gentes (2006), se tradujo en una serie de proyectos que apuntaban a consolidar un Estado que fuera capaz de responder con eficiencia y eficacia a la ciudadanía.¹⁶ De forma concreta, el año 2000 el Presidente Lagos promulga el Instructivo Presidencial N° 030 en que recomendaba a todos los ministerios la incorporación de mecanismos para “garantizar a la población los medios para participar en las decisiones del sistema democrático del país”.¹⁷ Aun cuando no se trataba de un instructivo vinculante, éste operó como una fuerte recomendación hacia

¹⁶ Se trata de tres agendas distintas (modernización del Estado, transparencia y promoción del crecimiento) con 49 medidas que buscaban la modernización de la gestión pública, la descentralización del gobierno y una Agenda Pro Crecimiento en acuerdo con el sector empresarial (Gentes, 2006).

¹⁷ Ver la descripción de éste y otros Instructivos Presidenciales en: <http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/instructivos-presidenciales#ip030>

los ministerios y fue coordinado por la División de Organizaciones Sociales (Cleuren, 2007).

La nueva estrategia para estrechar vínculos entre el Estado y la arena política con la sociedad civil iniciada durante el gobierno de Lagos, es profundizada en el modelo de gobernabilidad desplegado a partir del 2006 por la Presidenta Bachelet. El objetivo de su modelo de gobierno sería, tal como lo indica Aguilera (2007), el cambiar la manera en que el Estado ejercía el poder, con la formulación de políticas públicas a través de mecanismos consultivos y participativos, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y un mejor acceso a la información emanada del Estado. Se intentaba con ello abrir espacios para la sociedad civil y democratizar la forma de gobernar. Al mostrar una voluntad política de inclusión ciudadana,¹⁸ el gobierno de Bachelet “buscó - al menos retóricamente - reorientar la estrategia de gobernabilidad elitista de la Concertación hacia un enfoque de mayor participación ciudadana” y, aunque dando continuidad al quehacer político de su coalición, también definía una receta de gobernabilidad *bottom-up* respecto a la implementada por sus predecesores (Donoso y Gómez Bruera, 2014: 25).

En términos del flujo de oportunidades, es posible afirmar que el cambio en las fórmulas de gobernabilidad desenvueltas hasta entonces por los gobiernos de la Concertación podría haber actuado generando variaciones en la relación entre la sociedad civil y la arena política, permitiendo la apertura de un sistema político hasta entonces hermético, y generando, con ello, posibilidades para la emergencia de movilización social. Para Donoso (2013a), las características del entorno pueden ser consideradas oportunidades políticas cuando éstas logran cambiar las expectativas de los movimientos sociales. Para esta autora, el estilo político de la presidencia de Bachelet indudablemente tuvo consecuencias para el desarrollo del movimiento de protesta estudiantil de 2006, por varias razones. En primer lugar, el nuevo gobierno señalaba, a nivel de discurso, su voluntad de abrir espacios para la participación ciudadana, lo que fue visto por los participantes del movimiento como una oportunidad para testear esta retórica en la práctica, así como comprobar en qué medida esta administración podría encontrar una solución que fuera coherente con un ‘gobierno de los ciudadanos’.¹⁹ Asimismo, la presencia de nuevas caras en el gobierno, que no pertenecían necesariamente a las élites partidistas tradicionales, implicó una

¹⁸ Otras propuestas del gobierno de Bachelet incluyeron los mecanismos de consulta (las comisiones presidenciales) para abordar temas críticos, incorporar una agenda de paridad de género, establecer prioridades en torno a la protección social en temas de cuidado infantil, salud y pensiones y, en definitiva, cambiar el paradigma de focalización propio de los años noventa por uno de mayor universalización de derechos sociales.

¹⁹ La autora realiza estas afirmaciones en base a entrevistas a dirigentes estudiantiles del movimiento pingüino.

serie de errores en el tratamiento a las movilizaciones y una débil coordinación entre ministerios, haciendo escalar el conflicto. Finalmente, la nueva administración también trajo importantes aliados políticos al movimiento estudiantil - incluso dentro del mismo gobierno - que apoyaron la necesidad de una mejora del sistema educativo.

La amplia movilización de estudiantes secundarios al comienzo de la gestión de Bachelet generó, sin embargo, un cuestionamiento a los cambios en la estrategia de gobernabilidad que se buscaba promover (Donoso y Gómez Bruera, 2014). Al respecto, De la Maza (2010a) indica que ciertos sectores del propio gobierno consideraron que la movilización estudiantil había sido estimulada por el enfoque de política participativa.²⁰ La movilización también reavivó en la elite política chilena los traumas y los temores al conflicto y al desborde social característicos de los primeros años de la transición. Con ello, señala este autor, el año 2006 se produce una apertura y luego una rápida clausura del sistema y del debate en torno al ‘gobierno ciudadano’, consigna que luego se dejaría de utilizar. Las demandas del movimiento estudiantil fueron institucionalizadas, una nueva ley de educación creada, y el conflicto temporalmente solucionado luego de un acuerdo inter-elites, a la tradicional usanza de los partidos de gobierno y de la oposición.

6.2.2 Las estrategias de gobernabilidad del gobierno de Piñera y nuevas oportunidades para la movilización

A principios del 2006, el entonces candidato a la presidencia Sebastián Piñera sostenía,

governabilidad significa resolver los problemas de los chilenos. Yo le pregunto a los 15 millones de chilenos: una Concertación que lleva 16 años en el Gobierno y que no ha sido capaz de crear empleos, que no ha sido capaz de darle seguridad a las familias ¿está dando muestras de gobernabilidad? (*El Mercurio*, 11/1/2006).

Si bien esta declaración fue vertida cuatro años antes de su llegada a La Moneda (2010-2014), ésta refleja en buena medida la definición de gobernabilidad que el gobierno de Piñera pondría en práctica una vez asumido su mandato: una estrategia centrada en criterios técnicos, en el crecimiento, la gestión y la resolución de problemas. Los conceptos de participación e inclusión ciudadana no serían esta vez parte del discurso gubernamental. Con este estilo de gobernar, se intentaba recoger y

²⁰ Para Arriagada (2007: 1), importante figura de la Concertación, “en los niveles intermedios de la administración no pocos de los mandos recién nombrados encontraron, en la idea del gobierno ciudadano, la excusa para abandonar el trabajo con los partidos y las autoridades por ellos elegidos en nombre del trato directo con las ONGs y la sociedad civil”.

dar continuidad a la manera de administrar el país desplegada por los primeros gobiernos de la Concertación, con un modelo de gobernabilidad conservador y centrado en las elites políticas y tecnócratas, aunque en un escenario socio-político donde las condiciones ya no eran las mismas que en los años noventa: esto es, una tendencia creciente a la desafección política y un movimiento electoralista que empezaba a mostrar signos de desgaste, un sistema que se había ‘abierto’ producto de la contingencia y los cambios en las estrategias de gobernabilidad de Lagos y Bachelet, un escenario donde las retóricas de la participación ciudadana empezaron a ocupar un rol central y un marco político que empezó a favorecer una politización social.

Al mismo tiempo, si la fórmula de gobernabilidad definida por el gobierno de Piñera se enfocaba en el pragmatismo, los criterios tecnocráticos y el control elitista de los procesos políticos, no se contó entonces con los dispositivos necesarios para aislar a los equipos económicos de las presiones sociales y generar un grado de “autonomía relativa” frente a grupos de empresarios, sindicatos y partidos políticos (Silva, 1997), como lo hicieron los gobiernos de la Concertación en el pasado. En otras palabras, para poner en práctica un modelo de gobernabilidad centrado en las elites, resulta fundamental contar con ciertas estrategias sobre el mundo social como los ya descritos en el caso de los gobiernos de la Concertación, es decir, la anticipación y la institucionalización de las demandas colectivas, la acción de operadores políticos o la relación directa con ciertos líderes de sectores sociales propensos a la movilización.

Se constituyeron así verdaderos flancos de vulnerabilidad en la nueva administración, una nueva apertura del sistema y la emergencia de nuevas oportunidades políticas para la acción colectiva que irrumpe el 2011 con las protestas medioambientalistas, el movimiento estudiantil y los movimientos regionalistas. Para Vera (2012), algunos de los incentivos y amenazas para las posibilidades del movimiento estudiantil, en específico, tuvieron que ver con el conocimiento público de la información respecto a los resultados de la educación chilena en términos de calidad y desigualdad social, el respaldo a la demanda estudiantil y a la educación pública como prioridad nacional,²¹ el antecedente de la movilización del 2006 y el quehacer político del nuevo gobierno. Asimismo y tal como señala Camilo Ballesteros, dirigente estudiantil del año 2011, la elección de un gobierno de derecha fue un elemento clave para la constitución de la movilización estudiantil: “yo creo que el 2011 todos eran oposición, el 2006 [durante la Revolución de los Pingüinos] las dos

²¹ De acuerdo a los datos entregados por la autora, la encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Nacional CERC de 2011 señalaba que el 89% de la población apoyaba las demandas planteadas por el movimiento estudiantil.

vocerías más importantes eran de gobierno, eso hace una diferencia grande.” Asimismo, señala el ex líder estudiantil,

el gobierno de Piñera no tenía experiencia en conflictos sociales, la Concertación sí tenía experiencia, más allá de quienes sean, los operadores del ministerio de educación del 2006 eran operadores con experiencia, en cambio la gente que se relacionaba con los estudiantes en el gobierno de Piñera no entendían. (...) En ese sentido, el 2006 tenías un gobierno más metido y tenías mayor experiencia y acá no tenías a nadie del gobierno adentro y no tenías experiencia en conflictos sociales (comunicación personal, 05 diciembre, 2014).

En la misma línea, Patricio Segura, vocero del movimiento Tu Problema es Mi Problema y Patagonia sin Represas, señala que la elección de un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera ayuda a entender la efervescencia social del año 2012 en la región de Aysén, ya que hasta el 2010 existía una fuerte relación entre los gobiernos de la Concertación y los líderes sociales de la región,

tenía la Concertación muchos vasos comunicantes, tenían mucha... no sé si inteligencia en el caso de la jerarquía de la Concertación, pero por lo menos tenían la relación, sabían, conocían a distintos actores, había un vínculo, en cambio [con el gobierno de Piñera] pusieron a gente que no tenía experiencia en el mundo social (...) no participaban en organizaciones, no participaban en asambleas, no conocían a nadie, entonces cómo se iban a acercar a mí, a Iván Fuentes o a otros si nunca habían tenido relación, para decir oye qué está pasando, veámoslo, conversemos (comunicación personal, 20 de noviembre de 2014).

Así, por parte de las líneas de acción de la administración de Piñera, los movimientos sociales encontraron oportunidades políticas en la inexperiencia del novel gobierno²² y de muchos de sus principales personeros que provenían en su mayoría del mundo privado, así como en sus reacciones y errores estratégicos. La primera protesta enfrentada por el presidente Piñera - una marcha medioambientalista en rechazo a la construcción de una termoeléctrica en la cuarta región del país -, se resolvió de forma privada cuando el mandatario se salta la institucionalidad y llega a un acuerdo con la dirigencia de la empresa Suez Energy para frenar el proyecto. Esto marcaría un hito en términos de la eficacia de la presión social a través de las manifestaciones, generando con ello una oportunidad para las movilizaciones ambientales, estudiantiles y regionales posteriores.

²² La derecha volvía por primera vez en la administración política desde la dictadura.

Tal como señala Francisco Figueroa, el gobierno de Piñera mostró disposición al diálogo, pero la forma de entablarlo fue, a su juicio, errática, lo que facilitó el incremento y radicalización de las protestas:

el gobierno fue muy torpe pero no fue cerrado al diálogo, desde el primer instante trató de ver como sentar a las dirigencias de la CONFECH a conversar, pero eran tan pobres sus propuestas que no generó piso político para poder hacer eso (...) pero sí intentaron y fracasaron, sentar a dialogar al movimiento estudiantil, porque sus respuestas era muy pobres y Lavín era poco creíble políticamente, era un tipo muy errático, o sea respuestas muy improvisadas a los dirigentes, en paralelo, a los cabros de la UTEM les dio una respuesta que fue muy criticada, cuando dijo que se iba a asegurar que esa universidad no se acreditara, esas cosas ayudaron (comunicación personal, 12 de diciembre de 2014).

Para Arenas (2014: 155), el gran error estratégico del gobierno de Sebastián Piñera frente a las movilizaciones 2011 fue actuar con “las herramientas y mentalidad propias de la centroderecha gerencial y que algunos autores llaman la estrategia de la lista de lavandería”. Para el ex diputado UDI, el problema en términos del quehacer gubernamental estuvo en responder a las movilizaciones con algunas soluciones prácticas, pero sin un relato o una épica que pudiera incluir a diversos sectores de la sociedad para poner fin al conflicto. El gobierno fue acusado por la oposición de no ser capaz de dar gobernabilidad al país.²³

Meses más tarde y en pleno auge de las movilizaciones que exigían el término a la educación con fines de lucro, el presidente Piñera declara en julio de 2011 que la educación debía ser un “bien de consumo”(Cooperativa, 19/7/2011) y, junto al Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, reaccionan descalificando o entregando señales ambiguas o mensajes contradictorios respecto a las movilizaciones a la vez que utilizando una fuerte represión a las marchas estudiantiles. En palabras del propio mandatario, durante las movilizaciones “protestaba sólo el 5% de los estudiantes de nivel secundario y universitario, pero hacían mucho ruido”(El Mercurio, 22/12/2011), mientras una cobertura mediática exagerada habría sido, a su juicio, la verdadera responsable de la importancia e influencia que el movimiento estudiantil llegó a tener durante el año 2011. Para Silva (2013), los errores del gobierno estuvieron en subestimar la fuerza del movimiento al considerar que sería un fenómeno relativamente temporal, sin sopesar desde un primer momento el potencial desestabilizador de las mismas.

²³ Ver ‘Por las protestas, acusan a Piñera de falta de gobernabilidad’ en *El Sol*, 8 de noviembre de 2011.

Para Giorgio Jackson, dirigente estudiantil del año 2011, el gobierno de Piñera, su quehacer político y su forma de reaccionar frente a las demandas estudiantiles, fueron factores decisivos para entender la emergencia y el desarrollo de la movilización social. Frente a la pregunta de si la protesta estudiantil habría tenido la misma intensidad independiente de si se trataba de un nuevo gobierno de la Concertación (Eduardo Frei) o el gobierno de Piñera, el ex dirigente señala,

yo creo que no hubiera sido lo mismo, hubiera existido esta demanda por supuesto, estas movilizaciones, algún tipo de movilización porque el tema de la educación superior está ahí, no depende de que estuviera Piñera, sino que dependía de las deudas que acarreaban todos los estudiantes (...) pero el tema más grave es que el gobierno apagaba el fuego con bencina, y yo creo que probablemente un gobierno de Frei o de cualquier otro más cercano al menos en su composición de gente, con más vínculos, hubiera tenido más tino, hubiera administrado políticamente mejor este conflicto de tal manera de apaciguar aguas, mandar ciertas reformas, incompletas o parciales, que nos habrían permitido a nosotros decir, antes de maximizar la demanda (...) quizás no habríamos llegado a ese nivel de crítica y de unidad de no haber sido por un gobierno como el de Piñera (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).

La subestimación de los movimientos sociales quedó también en evidencia en las primeras respuestas a las movilizaciones de la ciudad de Aysén cuando las autoridades intentaron ignorar las protestas, lo que fue interpretado por los activistas como un desaire y una provocación de parte de las autoridades, alimentando la necesidad de profundizar las manifestaciones. La tal como lo relata Iván Fuentes, vocero del movimiento,

la reacción fue mala (...) nosotros quemamos un bote como botón de muestra, para que supiera la autoridad, mediante la prensa, que nosotros queríamos dialogar. Resultado: el gobierno se retira, la intendenta se tomó unos días libres, la gobernadora se tomó unos días libres, la SEREMI de gobierno tomó días libres, fue como “a estos les vamos a apagar la luz”. Los invitamos públicamente a dialogar y los propios medios dijeron “pero cómo hacen eso, están desafiando”, y la propia gente de derecha decía “pero para qué desafían a esa gente, no ve que yo tengo una empresa y me va a quedar la escoba”. Entonces ellos desafiaron, y al desafiar, se sumó más gente y ahí viene la marcha, 500 personas, porque ellos nos apagaron la luz (comunicación personal, 21 de noviembre de 2014).

De esta manera, los errores de forma y de fondo del gobierno de Piñera frente a las movilizaciones así como las propias divisiones internas dentro de la coalición de derecha²⁴ supusieron oportunidades para la acción colectiva. Como se ha señalado, la política contenciosa depende de los cambios en las oportunidades políticas y las amenazas percibidas, la capacidad de aprovechar dichas posibilidades, la existencia de posibles aliados y la vulnerabilidad de los oponente, lo que motiva o desmotiva a un grupo de personas a involucrarse en acciones políticas (Tarrow, 2011). Como señala este autor, si la politización deriva o no en movilización, va a depender de la manera en que las personas actúen colectivamente, de las redes y conexiones disponibles, la habilidad de los actores de crear o apropiarse de estructuras de movilización, y la existencia de una identidad que soporte la acción colectiva, todos elementos que es posible identificar en el ciclo de movilizaciones 2011.

Siguiendo el mismo enfoque de oportunidades y amenazas de Tarrow, la presión del Estado sobre un movimiento, el cierre de los canales de acceso, la falta de voluntad al diálogo y el aumento en la represión, pueden derivar en la radicalización de un movimiento. La clausura de los canales de diálogo y acceso por parte del gobierno de Piñera, se comienza a dar en paralelo a un aumento de la convocatoria de las marchas y la radicalización de las demandas. Como indica Francisco Figueroa,

cuando la cosa en junio agarra mucho más vuelo y se empiezan a cuestionar cosas de fondo, la actitud del gobierno cambia, se pone mucho más duro, deja de haber disposición al diálogo y después, cuando aun así no lograr detener al movimiento estudiantil, se viene un cambio de ministro. Bulnes era un tipo mucho más liberal que Lavín, menos ligado a los grupos más conservadores de la derecha, pero, a pesar de esa condición suya, ya había habido un giro en el gobierno de ponerse mucho más duros, entonces cuando se produce el cambio de ministro, hay un giro también en el que se empieza a abordar no como un problema político sectorial, sino que como un problema de seguridad pública. Entonces empieza a ser el Ministro del Interior el interlocutor del movimiento estudiantil, para dar la señal que, en el fondo, éramos casi delincuentes y ahí ya no había ni una posibilidad de diálogo (comunicación personal, 11 de diciembre de 2014).

²⁴ Durante ese año, los conflictos internos de la derecha se comienzan a hacer evidentes. Parlamentarios UDI criticaron en duros términos la conducción política del gobierno concentrándose en el desempeño de Rodrigo Hinzpeter, así como en el proyecto oficialista de 'unión civil' entre personas del mismo sexo, entre otros temas que hicieron surgir presiones para cambiar el gabinete. Las filas oficialistas se mostraban desordenadas y vulnerables, abriendo flancos no sólo para la oposición sino también la acción de los movimientos sociales.

El aumento de las medidas represivas contra las movilizaciones fue utilizado por los líderes del movimiento estudiantil como una oportunidad, una herramienta de presión y de apelo al apoyo ciudadano. Lo anterior, pues en la medida que la represión se muestra como inconsistente y arbitraria, es probable que la movilización atraiga simpatizantes mientras va radicalizando sus metas y acciones (Tarrow, 2011). Apelando a una imagen autoritaria del gobierno, Camila Vallejo señaló,

hay una intransigencia absoluta por parte del gobierno que no tiene respaldo ciudadano y no puede insistir en una postura e imponerla de manera autoritaria, por tanto yo creo que el gobierno hoy día tiene que ceder de verdad porque no lo está haciendo, está engañando a la gente, no hay voluntad por hacer cambios profundos en la educación (*La Tercera*, 5/8/2011).

En el mes de septiembre, luego de una jornada que se caracterizó por la fuerte represión de Carabineros sobre una marcha del movimiento estudiantil, la presidenta de la FECH hizo un llamado a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia policial a través de un ‘cacerolazo’. Esa noche e inmediatamente después de que Fuerzas Especiales impidiera una manifestación de estudiantes universitarios en Plaza Italia, en muchos sectores de Santiago se escuchó el ruido de las cacerolas en respaldo de las demandas estudiantiles y en rechazo a la represión policial.²⁵

La represión es definida como por Stockdill (1996: 146) como “cualquier acción llevada a cabo por las autoridades para impedir la movilización, acosar e intimidar a los activistas, dividir a las organizaciones, ataques físicos, arresto, encarcelamiento y/o asesinato de los participantes de un movimiento”, mientras autores como Tilly entregan una definición más amplia como “cualquier acción de otro grupo que eleva el costo de la lucha de la acción colectiva” (Tilly, 1978: 100). De cualquier forma, tanto en el caso del movimiento estudiantil, como en los movimientos medioambientalistas y regionalistas de 2011, el uso de la represión pareció, al menos en un primer momento, tener el efecto de producir mayores niveles de protesta, en una reacción o resultado que ha sido definido por Earl (2011: 268) como escalada o intensificación (*escalation*). Como relatan Misael Ruiz e Iván Fuentes, en Aysén la represión tuvo como consecuencia un mayor apoyo ciudadano y una radicalización del movimiento,

llegamos, ellos nos saludaron [autoridades de gobierno] y se fueron, y nosotros quedamos con las mesas preparadas, la mesa de la salud, la mesa del sector público, la mesa de los

²⁵ Ver ‘Chilenos revivieron los cacerolazos en respaldo al movimiento estudiantil’ en *Cooperativa*, 8 de abril de 2011.

pescadores, todo, cada quien con su cartel, nosotros estábamos preparados, Patagonia sin Represas, temas energéticos, y se habían ido. Y mientras estábamos ahí, de repente nos llaman y nos dicen, les están pegando a las mujeres (...) fueron muy violentos y eligieron el momento que nosotros no estábamos, todos los dirigentes estábamos acá [Coyhaique], se suponía que en Aysén dejábamos todo tranquilo, pero no contaban con que cuando pasa eso, la comunidad que estaba mirando, que no se había sumado, salieron todos de sus casas, fue un mar de gente, por ratos más que en las propias movilizaciones, de ahí las cosas se pusieron muy difíciles y dijimos, todo lo que pase de ahora en adelante va a ser responsabilidad del gobierno (Iván Fuentes, comunicación personal, 21 de noviembre de 2014).

De igual forma, las denuncias contra la represión involucraron y convocaron la acción de otras organizaciones de la sociedad civil tales como Amnistía Internacional Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos que, rechazando públicamente la violencia, también vieron en este hecho un insumo u oportunidad de acción para su propia acción organizacional.²⁶

Además del apoyo de estas organizaciones y de la opinión pública a través de las encuestas, el movimiento estudiantil encontró aliados políticos a nivel local e internacional. En el país, los partidos de la Concertación utilizaron esta protesta como un instrumento para hacer oposición al gobierno de Piñera e intentar recrear con ello la entonces perdida sintonía y cercanía con la sociedad civil en vista de las próximas elecciones presidenciales.²⁷ De esta forma, figuras de la Concertación se vieron protestando con los estudiantes en las calles y planteando la necesidad de reformular la agenda política nacional para dar prioridad al tema de la educación. Siendo Ministro General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber criticó las movilizaciones estudiantiles en 2006 para luego, siendo senador de oposición, apoyarlas en uno de los momentos más álgidos de la movilizaciones 2011: “sólo la educación pública es la que va a permitir a los chilenos más modestos acceder a un nivel educacional que no tendrán jamás. Hay que terminar con la segmentación de Chile. Terminar con el lucro. Dar al menos cierta igualdad” (*El Mercurio*, 23/8/2011).²⁸ Al mismo tiempo, los dirigentes estudiantiles recibieron apoyo internacional y fueron invitados a compartir sus experiencias en

²⁶ También es el caso de la Casa Memoria José Domingo Cañas y otras organizaciones internacionales agrupadas en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), entre otros organismos. Ver ‘Amnistía Internacional insta a autoridades chilenas a investigar uso excesivo de la fuerza’, 5 de agosto de 2011.

²⁷ Siendo acusados por esto de oportunismo político por figuras de la propia Concertación. Ver, por ejemplo, la entrevista a José Joaquín Brunner ‘El movimiento estudiantil entró en un túnel del que no puede salir’ en *La Tercera*, 11 de agosto de 2012.

²⁸ Ver ‘Lagos Weber: no hay razones para esta nueva movilización’ en *El Mercurio*, 18 de octubre de 2006.

Europa y Estados Unidos, recibiendo incluso en este último país, un premio por la defensa a la educación.²⁹

De esta manera, los movimientos sociales que se visibilizaron el año 2011 encontraron oportunidades para la movilización así como aliados o respaldo político, en paralelo a un gobierno cuyo paradigma de gobernabilidad o relación Estado-sociedad civil no había sido elaborado ni fue producto de un ejercicio reflexivo o intelectual como aquel emprendido por la Concertación hacia finales de los años ochenta. Dicha gobernabilidad tampoco fue el resultado de un diseño gubernamental como el de los gobiernos de Lagos o de Bachelet en sus estrategias por estrechar lazos con la ciudadanía, sino más bien fue un intento de dar continuidad a un estilo político centrado en los resultados y en el crecimiento económico, pero en un escenario social donde la necesidad de mayor participación, así como las exigencias de mayor equidad y justicia social cobraban cada vez más relevancia.

Los paradigmas o estrategias de gobernabilidad evolucionan en respuesta a los desafíos que se presentan en cada momento y contingencia histórica, y hacen evolucionar también la relación que establecen los Estados con la sociedad civil y las posibilidades de movilización o desmovilización de este último sector. A principios de la redemocratización, el énfasis de gobernabilidad se puso en conjugar una democracia representativa con una economía de mercado mediante una fuerte conducción de las elites, un control de la arena social y la evasión del conflicto y la movilización social. Los beneficios de esta fórmula fueron indudables para el desarrollo del país, aunque los costos fueron una desconexión de la clase política con la base social, un aumento en la desafección y una disminución de la confianza en las instituciones. Estos fenómenos fueron alimentando y contribuyendo a la incubación de un malestar social que se hizo evidente en las movilizaciones del año 2011 y que serían catalizadas, en parte, por la ausencia de un paradigma de gobernabilidad que fuera capaz de contenerlas.

Luego de las movilizaciones 2011, los temas planteados por los movimientos sociales marcaron la agenda pública y los debates políticos a escala nacional. Prueba de ello fue la campaña presidencial de Michelle Bachelet para su nuevo mandato para el que definió un programa y una nueva estrategia de gobernabilidad que recogía las demandas de la calle, así como con una coalición política más amplia que, incluyendo al Partido Comunista, intentaba generar un bloque político con mayores vínculos con la sociedad civil, en la llamada 'Nueva Mayoría'. Con un enfoque de gobernabilidad centrado en las demandas ciudadanas, luego de las primeras grandes movilizaciones

²⁹ Ver 'Movimiento estudiantil chileno recibe premio a los derechos humanos en Estados Unidos', *Radio Universidad de Chile Online*, 14 de octubre de 2014.

enfrentadas por su nuevo gobierno y en un intento por generar una oportunidad política, la mandataria señaló “me imagino que la idea fundamental de esa marcha es apoyar los procesos reformadores que nosotros tenemos, porque la verdad es que entendí que lo que quieren decir es que cumplamos con nuestro programa de gobierno, y eso es lo que queremos hacer, ellos pueden estar tranquilos” (*El Mostrador*, 12/3/2014). El programa de Bachelet poseyó un carácter progresista y profundamente reformista con cambios a la estructura tributaria, educacional y constitucional, buscando con ello, en palabras de Alberto Arenas, jefe programático de su gobierno, dar “estabilidad y gobernabilidad al país” (*El Mercurio*, 27/10/2013). Los prospectos de esta fórmula están aún por desenvolverse.

De esta manera y en un contexto de desafección política y de desgaste del paradigma y movimiento electoralista, la participación por canales informales, no institucionales y los movimientos sociales de protesta han emergido con fuerza, obligando a la clase política a redefinir el concepto y las estrategias de gobernabilidad de acuerdo a este nuevo escenario y sus nuevos desafíos.

6.3 La modernización neoliberal como insumo para la movilización

Como se presentara en el apartado anterior, luego del fin de la dictadura, el proceso político chileno ha incluido definiciones, redefiniciones y ajustes de lo que se ha entendido por gobernabilidad y las estrategias para alcanzarla de acuerdo a los desafíos socio-políticos de la redemocratización. Con la emergencia de las movilizaciones de gran escala del año 2011, los partidos políticos tanto del gobierno de Sebastián Piñera como de la oposición, se vieron forzados a realizar un trabajo reflexivo con el fin de interpretar las motivaciones de los protestantes, intentar atraer apoyo popular y, al mismo tiempo, volver a definir la noción de gobernabilidad de cara al nuevo ciclo político inaugurado por dichas protestas.

Luego de entregar la banda presidencial a Michelle Bachelet para el comienzo de su segundo mandato (2014-2018), la presidente del Senado e integrante de la ahora coalición oficialista “Nueva Mayoría”, Isabel Allende, declara que “la desigualdad dificulta la gobernabilidad” (*El Nuevo Diario*, 17/3/2014). Asimismo, Camila Vallejo señala: “rechazamos la política de los consensos tal como se ha desarrollado durante los últimos veinte años. (...) consensos que sólo han profundizado o maquillado el modelo neoliberal que sustenta las grandes desigualdades en el país y que, por lo demás, hoy son responsables de la crisis que vive la educación” (PNUD, 2015: 38). De igual forma, la Presidenta Bachelet advierte que el objetivo de su gobierno será impulsar reformas que permitan enfrentar la desigualdad que vive el país: “espero que

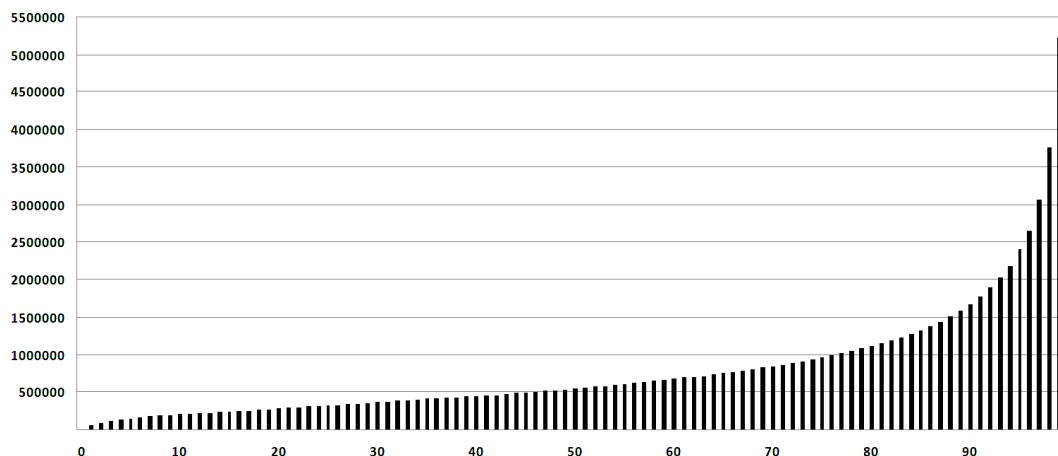
al concluir mi mandato, Chile sea un país más justo, más igual, más incluyente (...) Chile tiene sólo un gran enemigo, y su nombre es desigualdad. Sólo juntos podremos enfrentarla” (*El Semanario Voz*, 19/3/2014).

La ofensiva contra la desigualdad como principal eje programático y como manera de asegurar la gobernabilidad del país por parte del segundo gobierno de la electa Presidenta Bachelet, deriva de un diagnóstico por el cual las movilizaciones del año 2011 tendrían su origen y explicación en la problemática de la inequidad socio-económica que afecta al país.³⁰ Tal como se describiera en el quinto capítulo, la redemocratización chilena fue un exitoso proceso tanto en términos económicos como políticos. La modernización neoliberal logró la más rápida reducción de la pobreza en el mundo, siendo considerada un ejemplo paradigmático para los países en vías de desarrollo (Raczynski, 1999). Como señala Meller (1999), durante los gobiernos de la Concertación se insistió en que un crecimiento económico fuerte y sostenido generaría un mecanismo de ‘chorreo’ que resolvería los problemas de distribución de la riqueza. En este contexto y al perseguir la reducción de la pobreza, la mano invisible del mercado se encargaría de asignar adecuadamente los recursos para todos los chilenos, representando entonces una estrategia efectiva para lograr una sociedad más igualitaria. Los esfuerzos y las prioridades, por tanto, se concentraron en mantener una tasa de 7% de crecimiento económico anual como solución a los problemas de desigualdad.

La evidencia, sin embargo, señala que la desigualdad de ingresos en Chile se ha mantenido estable en los últimos años y alta en comparación con los estándares internacionales, poniendo en evidencia uno de los grandes problemas del modelo neoliberal. En 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) clasificó a Chile como el peor de sus 34 países miembros en términos de distribución de ingresos, con un coeficiente de Gini (0.50) mayor al promedio de todos países (0.31). Esto implica que en un país de la OCDE, el ingreso promedio del decil más rico de la población es aproximadamente nueve veces mayor que el ingreso del decil más pobre, mientras que en Chile esta misma relación es de 27 a 1 (OECD, 2011, 2012). Como se puede observar en la figura 6.2, el 50% de los hogares chilenos viven con un ingreso promedio menor a aproximadamente 1.000 dólares al mes.

³⁰ Para más detalles del problema de la distribución de ingresos y las movilizaciones, ver Espinoza (2012) y Rojas (2012). Asimismo, ver Vera (2012) para un análisis de las protestas del 2011 en base a la desigualdad y el origen del modelo socio-económico chileno.

Figura 6.2. Ingreso familiar total por centiles (pesos chilenos)



Nota: el ingreso familiar total es la suma de ingresos independientes y las subvenciones percibidas.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta CASEN 2011.

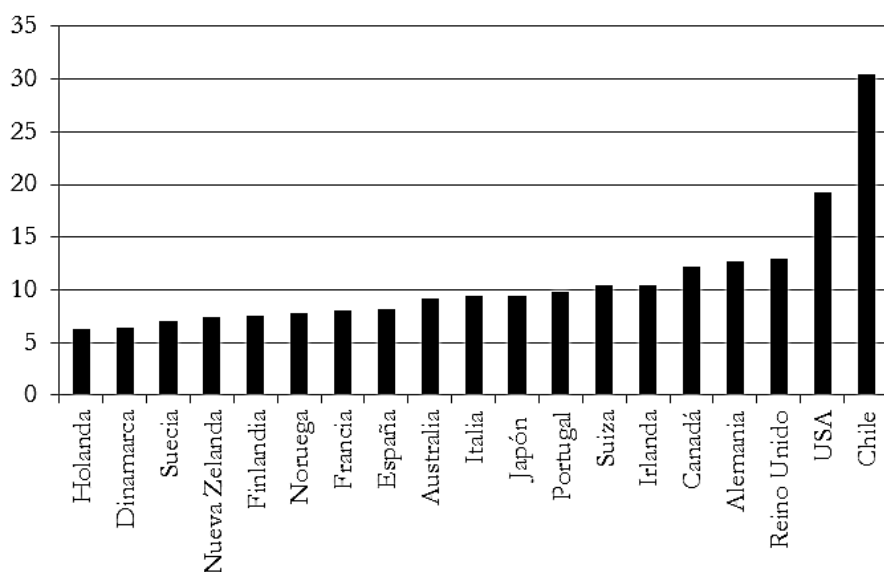
Para López, Figueroa y Gutiérrez (2013), el verdadero problema de la desigualdad en Chile no está en el grueso de la población, es decir en el 90% o aún en el 99% de ella, donde la distribución tiende a ser relativamente pareja, sino en el estrato más alto, esto es, en el 1% y sobretudo en el 0,1% y 0,01% más rico donde se produce una alta concentración de ingresos. De acuerdo a sus datos, la participación de este segmento en el ingreso total es extraordinariamente alta (el 30% para el 1% más rico, 17% para el 0,1% y más de 10% para el 0,01% más rico en promedio durante 2004-2010). Más aún, la participación del 1% de chilenos de mayores ingresos es la más alta registrada dentro de una lista de aproximadamente 25 países para los que existe dicha medición. Con ello, Chile es el país más concentrado entre todos los países para los cuales existen datos de las ganancias de los estratos más acomodados.³¹

Los datos respecto a la distribución del ingreso, señalan que la economía chilena presenta niveles elevados de desigualdad, persistentes en el tiempo y que dependen del efecto de factores estructurales de larga data. Para Solimano (2007), los factores tras la reproducción de los patrones de desigualdad que se observan en Chile serían de carácter institucional y político, asociados con una alta concentración de la riqueza y propiedad de activos (ver figura 6.3) y con grupos económicos e individuos que controlan una parte importante de la propiedad y gestión de grandes empresas,

³¹ En base a declaraciones tributarias oficiales y estimaciones de las ganancias de capital.

bancos, ISAPREs, AFPs y otras actividades. Asimismo señala este autor, la desigualdad se relaciona con la persistencia de heterogeneidades importantes en la estructura productiva chilena (caracterizada por un numeroso sector de micro, pequeñas y medianas empresas que tienen una productividad media muy inferior a las empresas grandes). Y finalmente, con una matriz institucional, en gran parte heredada del período autoritario, caracterizada por su inmovilidad y la dificultad de emprender reformas sistémicas que pudieran afectar el *status quo* de las elites políticas.

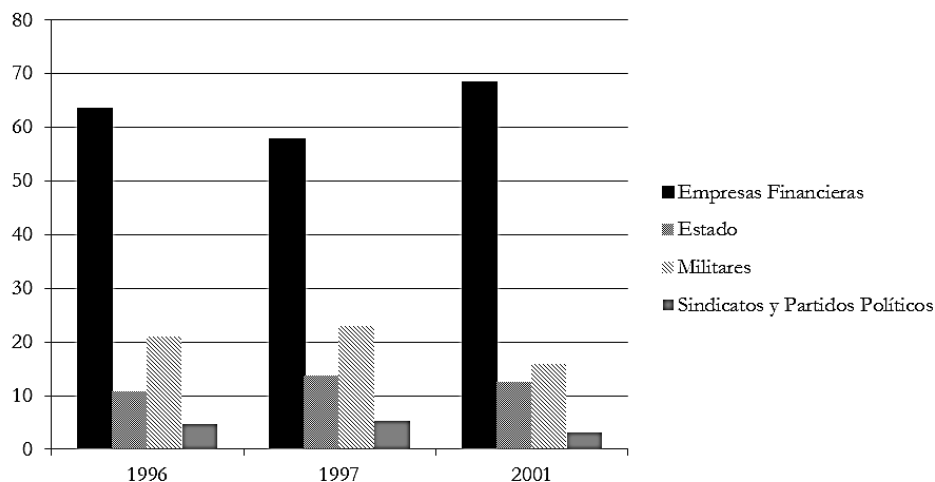
Figura 6.3. Porcentaje de ingresos que acumula el 1% más rico, participación en el ingreso total del país.



Fuente: Fundación Sol en base a datos de López *et al.* (2013) y World Top Income Database.

Esta concentración económica tiene un correlato en una percepción ciudadana de la concentración del poder, tal como puede observarse en la Figura 6.4.

Figura 6.4. Percepción de distribución del poder en Chile, 2002



Fuente: Elaborado en base a datos de Solimano (2007).

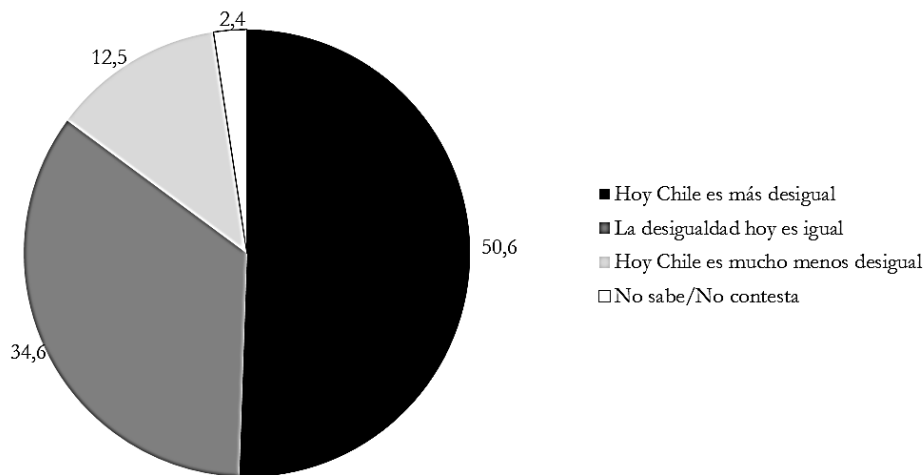
Aun cuando el índice de desigualdad aumenta durante el período dictatorial y luego tiende a contraerse al regreso de la democracia para retornar a sus niveles históricos,³² en el imaginario social actual el problema de la desigualdad se encuentra estrechamente ligado a la imposición de la economía neoliberal en las últimas décadas.

³² En los análisis realizados por ciertos autores se puede observar una trayectoria de inequidad para la últimas décadas y lo ocurrido durante el período dictatorial (Lambrecht, 2011; Larrañaga, 2001; Palma, 2008). Larrañaga (2001) señala que la desigualdad del ingreso *per cápita* de los hogares habría alcanzado un 0.41 en el índice GINI de 1958, un valor alto para los estándares internacionales de aquella época. Entre los años 1958 y 1966 la desigualdad de los ingresos se mantiene estable y en un nivel relativamente bajo respecto de los períodos venideros. Luego y a partir de 1967, los indicadores de desigualdad se muestran inestables posiblemente como reacción a las transformaciones estructurales así como a las diversas coyunturas macroeconómicas del período.

Durante el gobierno de la UP y en medio de la problemática económica que ya se ha esbozado, se produce una leve caída de los niveles de desigualdad probablemente apalancadas por políticas de expansión de la demanda agregada y de redistribución del ingreso impulsadas en la época. Finalmente, el período de reformas estructurales iniciado en 1974 está asociado a un incremento en los niveles de desigualdad llegando a altos índices hacia mediados de los ochenta. Para Larrañaga, el aumento de la desigualdad también puede relacionarse con las políticas de estabilización y ajuste que fueron introducidas a mediados de los años 70 y la crisis de 1982, las cuales tuvieron un fuerte componente recesivo. Una vez retornada la democracia, los gobiernos de la Concertación se han enfrentado al desafío de reducir los niveles de pobreza logrando una exitosa performance, pero sin alcanzar el mismo resultado positivo en términos de la merma de la desigualdad, aun cuando el tema se hizo patente incluso para inspirar el programa de gobierno del Presidente Lagos hacia finales de la década del noventa (Lagos, 1999).

De cualquier manera, tanto ayer como hoy el problema de la inequidad sigue siendo de compleja solución y, aun cuando el índice de desigualdad aumenta durante el período dictatorial Pinochet y luego tiende a contraerse al regreso de la democracia, Chile continua siendo uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo (Torche, 2007).

Figura 6.5. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la desigualdad en Chile en los últimos cinco años?, 2007



Fuente: Navia *et al.* (2008: 8)

La percepción de desigualdad vinculada al modelo neoliberal se encuentra probablemente influenciada por el hecho de tratarse este último de un modelo basado en la privatización y en el principio de subsidiaridad en desmedro del fortalecimiento de los sistemas públicos.

Tal como se revisó en el quinto capítulo, luego de la dictadura y las grandes reformas estructurales, el proceso de privatización definió el acceso a los servicios públicos de acuerdo a las distintas posibilidades de pago. Esto implicó un reordenamiento y una reestructuración social que vino a complejizar el sistema de clases sociales, generando diversas capas o una mayor segmentación en términos del poder adquisitivo, de préstamos y de las dinámicas de la oferta y la demanda. La población de mayores ingresos comienza a acceder desde entonces a los servicios sociales más caros y de mejor calidad en el mercado privado, el segmento de ingresos medios lo hace a través de fuentes públicas, aunque por lo general consigue servicios de mayor calidad a cambio de un copago, mientras la población de menores ingresos utiliza los servicios públicos de forma gratuita y de menor calidad (Larrañaga, 2009). Todo lo anterior define un modelo económico que, si bien no representa la génesis del problema de la desigualdad, no facilita su solución sino que, al contrario, permite la

reproducción y consolidación de una estructura de desigualdad económica y social de larga data.³³

6.3.1 Neoliberalismo: segregación y endeudamiento como insumos para la protesta social³⁴

A diferencia de los factores psicológicos y políticos - post-trauma y gobernabilidad - desarrollados en las secciones anteriores, la relación entre el modelo de libre mercado y las movilizaciones del año 2011 es observable con mayor claridad.

Para el modelo neoliberal, la educación es considerada un bien de consumo cuya oferta y demanda debe traducirse en beneficios económicos y ganancias para todos los individuos e instituciones involucradas (Friedman, 2002). A tres décadas de implantada la lógica neoliberal en la educación chilena, la gratuidad a nivel universitario ha desaparecido, mientras la cobertura se ha incrementado sustancialmente, permitiendo el tránsito desde un sistema estatal, elitista y mayormente homogéneo a un sistema de educación superior de mercado, masificado y diverso (ver capítulo 5). La reforma educacional de los años ochenta también impulsó la creación de escuelas privadas subvencionadas, lo que generó un éxodo de las clases medias desde los colegios públicos municipales, cuyas matrículas se redujeron de 63% en 1986 a un 43% en 2008 (Oyarzún, 2012).

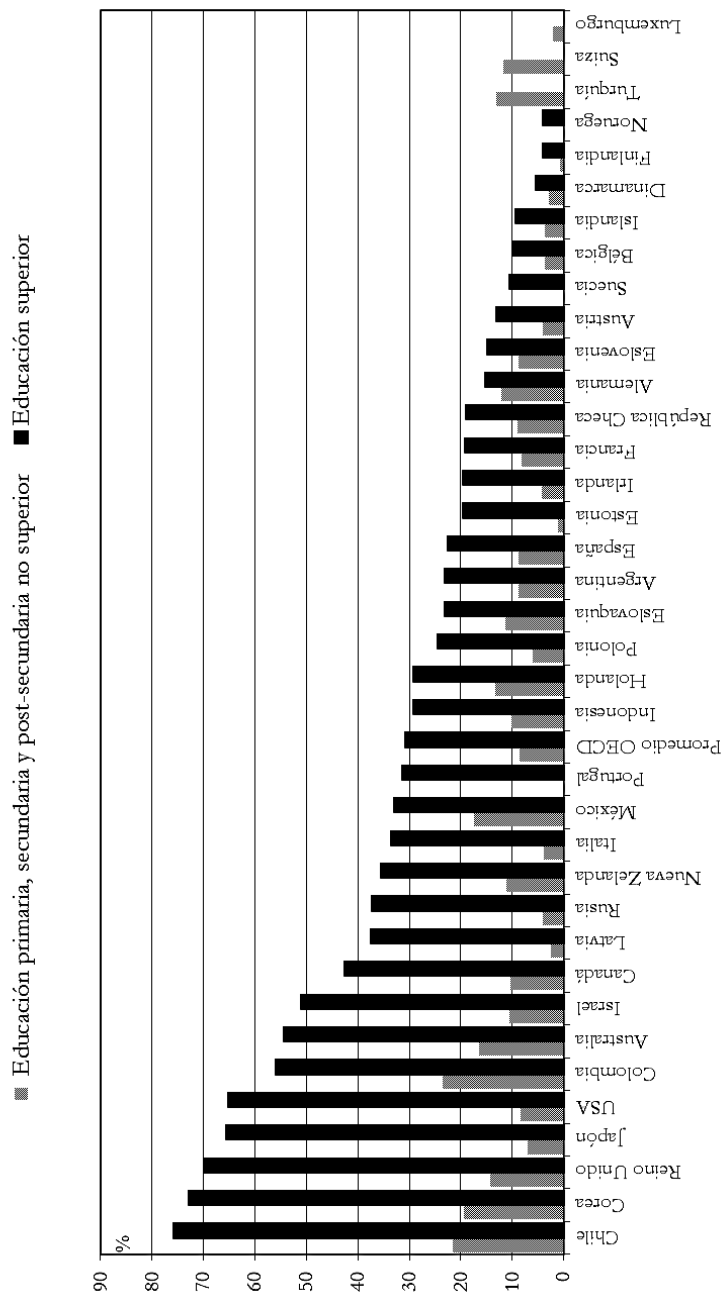
Al mismo tiempo, el modelo ha redundado en que el gasto privado como porcentaje del gasto total en educación tanto primaria como secundaria y superior, sea comparativamente el más elevado de los países de la OCDE, tal como se observa en la figura 6.6.³⁵

³³ La complejización y mayor segmentación social producida por el neoliberalismo permite que el acceso desigual a los servicios públicos y privados no se produzca únicamente entre las clases sociales tradicionales (ricos y pobres), sino que mecanismos como el copago crean diferencias muchas veces al interior grupos sociales relativamente homogéneos en términos socio-económicos.

³⁴ Parte de los argumentos presentados en esta sección en la siguiente fueron desarrollados en Jara (2014).

³⁵ Esto incluye todo el dinero transferido a las instituciones educativas de fuentes privadas, incluida la financiación pública a través de los subsidios a los hogares, los honorarios privados para los servicios de educación, u otro gasto privado (por ejemplo, en alojamiento y comida) que pasa por la institución educativa.

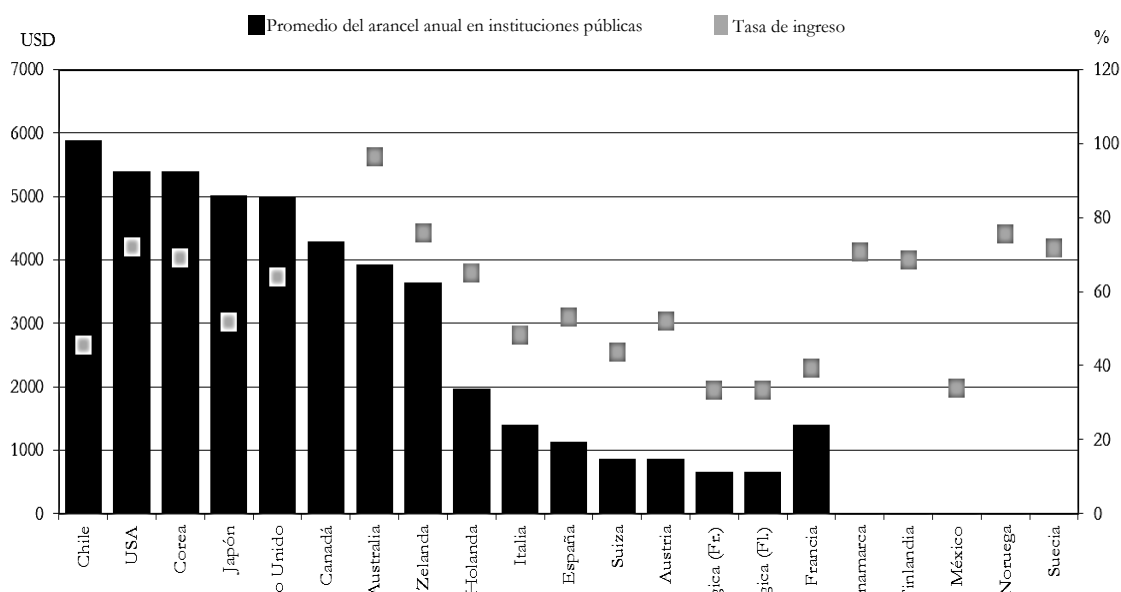
Figura 6.6. Porcentaje del gasto privado en instituciones educativas, 2011



Fuente: OECD (2014: 236).

Siguiendo la misma lógica, y dado el juego de la oferta y la demanda junto al objetivo lucrativo de diversas instituciones de educación, los aranceles chilenos han aumentado de manera exponencial llegando a ser, en términos comparados, los más altos del mundo tanto en términos reales como proporcionales (ver figura 6.7), con un promedio de 6000 dólares en un país donde el sueldo mínimo bordea los 350 dólares. Lo anterior implica que sólo un 20% de las familias puede hacerse cargo de los pagos sin recurrir al endeudamiento.

Figura 6.7. Promedio de los aranceles anuales en las instituciones públicas para estudiantes nacionales a tiempo completo y tasa de ingreso a la educación superior, 2011.



Fuente: OECD (2014: 263).

Contrariando esta realidad, una de las demandas articuladas por el movimiento estudiantil de 2011 señalaba que la educación debía ser un derecho y, por tanto, tratarse de un bien público al que todo ciudadano debe tener acceso independientemente del nivel de ingresos de las familias. Asimismo, el movimiento de estudiantes que se tomó las calles para protestar, lo hizo básicamente movilizad por un reclamo por la mercantilización de la educación, así como por el fin a las actividades lucrativas identificadas tanto en instituciones de educación secundaria como superior. De igual forma y dado el carácter privado del sistema y lo elevado de

los aranceles, se enarbola una queja por el mecanismo de endeudamiento asociado al acceso a la educación, especialmente superior.

Así, el problema del lucro en la educación se volvió fundamental el 2011, alimentando una identidad y un marco de sentido para los protestantes. Como señala Camila Vallejo,

el lucro fue el tema clave, porque tiene que ver con la concepción del derecho a la educación, era contrastar esta visión de lo público con lo privado; la educación como derecho o la educación como mercancía. Ese fue un debate que logró abrir todas las discusiones posteriores, incluso más allá de la educación; llevó a hablar de la visión del modelo de desarrollo, de cómo trata el Estado los derechos en general, y potenció el proceso de movilización (Mönckeberg, 2013: 66–67).

Según el reporte OCDE (2014), la equidad en la educación significa proporcionar a todos los estudiantes, independientemente de su situación socio-económica, con oportunidades para beneficiarse de la educación. Sin que esto implique que todos obtengan los mismos resultados, se trata de que la situación socioeconómica de los estudiantes tenga poco o ningún impacto en su desempeño, y que todos los estudiantes, independientemente de su origen, accedan a iguales recursos y oportunidades educativas (2014: 193). Más adelante en el reporte se indica que, en promedio para todos los países de la OCDE, el 15% de la variación en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas es atribuible a diferencias en el estatus socioeconómico. Entre los países y las economías de alto rendimiento, esta proporción oscila entre el 3% y el 20%. Por el contrario, en Bulgaria, Francia, Hungría, Perú y Uruguay más del 20% de la diferencia en el rendimiento de los estudiantes es endosable a la situación socioeconómica de los estudiantes, problema especialmente crítico en Chile y Eslovaquia donde esta correlación es aún más fuerte (23,1% y 24,6% respectivamente). Por tanto, señala el informe, en países como Chile, donde la proporción de varianza en el desempeño en matemáticas explicada por el nivel socio-económico es alta, los estudiantes de familias desfavorecidas tienen menos probabilidades de alcanzar altos niveles de rendimiento.

Aun cuando la educación neoliberal ha permitido ampliar la cobertura, las voces más críticas señalan que la calidad de las universidades resulta heterogénea y tiende a la estratificación, que en la dinámica de los aranceles se generan universidades de élite que refuerzan la segmentación social y restringen las posibilidades de acceso a los grupos de menores recursos (Améstica *et al.*, 2014). Asimismo y en términos de la educación primaria y secundaria, Puga (2011) indica que el sistema de escuelas

subvencionadas facilita la segregación de redes y capital social y el establecimiento de credenciales simbólicas diferenciadas y reconocidas como tales en el mercado laboral. En el caso chileno, la segregación parece estar fuertemente mediada por la presencia de escuelas privadas, pero especialmente por el efecto discriminador que ejerce el copago vía financiamiento compartido (Bellei, 2013). La segregación socio-económica a nivel educacional implica que la población escolar está desigualmente distribuida entre las escuelas de alumnos de diferentes condiciones sociales y económicas (Bellei *et al.*, 2010) o, en otras palabras, que los estudiantes que pertenecen a un determinado nivel socioeconómico no se mezclan ni relacionan con otros distintos a ellos.

De igual manera y tal como se presentó en el quinto capítulo, la transversalización del consumo con el endeudamiento como su principal mecanismo, logra modificar considerablemente las condiciones de vida material de los chilenos, permitiendo el acceso a bienes hasta entonces negados para la gran mayoría de la población. Tres décadas más tarde, el endeudamiento se ha consolidado en los hogares como una herramienta fundamental para el consumo de bienes no sólo suntuarios, sino para el acceso a servicios sociales, entre ellos, la educación. Con ello, la euforia del endeudamiento y el consumo como uno de los factores explicativos de la desmovilización post-dictatorial, deviene hacia fines de la era Concertacionista en *input* movilizador, generando una identidad colectiva en torno a la deuda – ‘los endeudados por la educación’ - y un pilar central de las demandas de los estudiantes y de los hogares chilenos. A propósito del movimiento estudiantil y del endeudamiento, Camila Vallejo señala,

es una demanda aparentemente gremial, ya que toca el bolsillo, pero es estructural y muy política. A la hora de empezar a abordar el endeudamiento, a plantear la sensación de que por la educación uno no tendría por qué estar acogotado, porque es un derecho, el asunto pegaba (...) hace mucho tiempo que los egresados no aparecían, y de repente dijimos “esto es un problema de la sociedad”, porque es la familia la que está endeudada. El egresado que acarrea la deuda por una carrera de no sé cuántos años y que, además, se dio cuenta de que la educación que recibió no le sirvió de mucho, hace un fuerte cuestionamiento. Se dice “estoy ahogado con una deuda maldita porque tengo que pagar a los bancos una suma de dinero mayor a la que hubiera pagado al contado y la educación que recibí es totalmente cuestionable (Mönckeberg, 2013: 67).

La deuda surge así como una idea-fuerza que logró apelar no sólo al apoyo de los estudiantes sino del gran número de familias chilenas afectadas por tal problemática.

En definitiva, altos niveles de segmentación social, elevados aranceles, gasto privado y nivel de endeudamiento junto a una concentración del poder económico y político, son ingredientes que fueron constituyendo un discurso aglutinador para la (re)construcción de la acción colectiva que se hizo patente el año 2011. Los estudiantes condensaron una crítica al diagnóstico antes esbozado en el petitorio de la CONFECH: “educación gratuita, fin al lucro, democratización, fin al endeudamiento y el autofinanciamiento y acceso equitativo”.³⁶

Por otra parte, la privatización de los servicios ha consolidado una estructura desigual y una alta segregación social, pero también territorial. Como se planteara con anterioridad, el *set* de reformas llevadas a cabo en la década de los ochenta incluyó cambios sustanciales a la estructura del aparato burocrático-administrativo con un proceso de regionalización y descentralización del país. Este último, fue el mecanismo principal de la reforma con la transferencia de la administración de los servicios públicos desde el Estado hacia los municipios. La descentralización implicó la concreción del principio de subsidiaridad, siendo pieza clave de la política dictatorial pues resultó funcional a una mayor eficiencia económica, tanto en la esfera productiva como en el ámbito asignativo (Boisier, 2004; Larrañaga, 1995). Décadas más tarde, Chile se erige como uno de los países más centralizados de América Latina (Veyl, 2015). Para este último autor, en el período post-dictatorial se desplegaron una serie de reformas institucionales de estímulo al desarrollo regional, pero la existencia de una antigua y fuerte tradición centralista ha imposibilitado un cambio en el eje de poder entre Santiago y las regiones, con estas últimas subordinadas a las decisiones y movimientos del centro.

Con esto, la descentralización tuvo un impacto en términos de la inequidad territorial en la medida que las diferencias en el nivel socioeconómico de las comunas generaron una distribución desigual de los bienes y servicios provistos por los gobiernos locales. Dada esta realidad, las protestas y demandas surgidas en las regiones se han alzado en torno al discurso de ‘abandono estatal’, el rezago económico-social de las regiones más extremas y la falta de voluntad política de las autoridades centrales para emprender transformaciones importantes (Veyl, 2015: 3). Tanto en Aysén como en Magallanes y Calama, los reclamos se concentraron en torno a un mayor reconocimiento por parte de las autoridades nacionales, mayor atención a las especificidades y necesidades especiales que poseen en tanto regiones extremas, e impulsar el desarrollo local. En definitiva, una distribución más justa de los recursos (económicos, humanos, infraestructurales, etc.) fue el móvil de los movimientos

³⁶ CONFECH. 2011. “Petitorio Confech”. Actualizado al 26 de junio. Disponible en: <http://fech.cl/blog/2011/07/28/compilado-documentos-de-interes-movilizaciones-2011-2/petitorio-confech/>

regionalistas observados con nitidez a partir de 2011. Como sintetiza uno de los líderes del movimiento y alcalde de Calama, Esteban Velásquez,

primera demanda: tiene que haber recursos del cobre, investigamos y en países vecinos tienen royalty, tienen un montón de regalías, tributo minero en razón de lo que se produce en esa zona. Segundo, somos una zona extrema, declaramos como zona extrema. Incluso aunque eso no signifique un peso, un beneficio en la planilla de sueldos, pero somos bastante distintos a Arica, a Iquique, a Tocopilla, Antofagasta y el resto de las ciudades que están pegadas al mar o en los valles, es la única que se encuentra en la cordillera, algo de extremo tenemos, temperaturas de 30 grados bajo cero en invierno, contaminación permanente (comunicación personal, 11 de noviembre de 2014).

Como se puede colegir, el modelo liberal fundado en el mercado, en la provisión privada y que se sustenta en un Estado subsidiario, repercute en un bajo potencial de de-comodificación y en una estratificación aguda (Esping-Andersen, 1990). Los movimientos sociales de 2011 explotan de la mano de demandas por mayor equidad, la condena al lucro en los servicios sociales así como la reducción del rol del mercado en servicios y derechos ahora supeditados al juego de la oferta y la demanda. Con esto, las manifestaciones fueron interpretadas por autores como Mayol (2012) como una crítica radical al modelo neoliberal, donde la dinámica del lucro generó una percepción social de la dimensión económica como un espacio donde prima el abuso. El modelo de desarrollo desplegado durante la redemocratización basado en un Estado subsidiario, la lógica política de los consensos y un espacio público apolítico estaría, a juicio del autor, sufriendo a partir de las movilizaciones un proceso de desplome.

6.3.2 Neoliberalismo avanzado: consumidores empoderados y cultura capitalista

La desigualdad en sus múltiples dimensiones es, sin embargo, un fenómeno propio no sólo de la sociedad chilena actual sino que es observable de forma constante y obstinada a través de la historia.³⁷ Esta problemática había sido, sin embargo, tolerada por la ciudadanía chilena, sin expresiones de protesta o movilización en los últimos años, lo que debilita la tesis de la desigualdad como única fuente para el descontento social observado en los últimos años en Chile.

³⁷ Ver nota al pie número 32.

América Latina y el Caribe son las regiones más desiguales del mundo, con 10 de los 15 países que presentan los niveles más altos de desigualdad (PNUD, 2010). A pesar de que la distribución de la riqueza representa un problema importante en muchos de los países de la región, ésta no da lugar necesariamente a movilizaciones ni a descontento social. Para Tilly (1999, citado en Espinoza (2012: 2)), la desigualdad no es una amenaza para la estabilidad democrática en sí misma, ya que países como Sudáfrica, India y Brasil han mantenido sus democracias en medio de profundas disparidades raciales, lingüísticas, regionales o materiales.

Por otra parte y aun con la concentración y la desigualdad observadas para el caso chileno, los quintiles inferiores de la población han experimentado un mejoramiento y un aumento general del nivel medio de bienestar. Si se compara el nivel relativo de ingresos del quintil inferior en relación al de otros países latinoamericanos, se observa que el chileno es prácticamente un 10% superior al ingreso de los quintiles inferiores de México y Venezuela, así como un 170%, 127% y 75% superior a aquellos de Brasil, Bolivia y Perú respectivamente (Raczynski, 1999).

Con ello, si bien el problema de la desigualdad reproducida y consolidada por el modelo económico neoliberal es un factor relevante, no resulta suficiente para explicación de las motivaciones tras el ciclo de manifestaciones observadas en los últimos años en el país. Tal como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el hecho de que un conflicto, demanda o descontento social permanezca latente o, por el contrario, se haga patente, depende no sólo de la demanda en sí, sino de la cantidad de recursos, oportunidades políticas y expectativas disponibles en un momento específico (McAdam *et al.*, 2001; Tarrow, 1996). En el caso de Chile, el crecimiento económico, el aumento en los niveles de desarrollo y recursos materiales de las últimas décadas, ha incitado paralelamente la emergencia de un nuevo *set* de valores simbólicos post-materiales (Inglehart, 2008) o post-industriales (Touraine, 1988). Según estos autores, los procesos de modernización occidental estimularon cambios en la matriz de valores o recursos simbólicos centrales, desde valores materiales como la necesidad de seguridad y estabilidad tanto económica como física, hacia valores post-materiales, relacionados con la necesidad de pertenencia, de autonomía y capacidad de expresión.

Extrapolando dicho análisis para el caso chileno, es posible afirmar que el proceso de modernización y democratización que ha sufrido el país en las últimas décadas ha tenido un correlato en la emergencia de una nueva estructura de valores y nuevas reivindicaciones políticas. Al respecto, Tironi y Carreras (2008) muestran una tendencia progresiva en las expectativas y demandas de equidad, justicia, derechos y protección social entre los chilenos. Los autores proponen que el acceso a la educación y a la salud, el derecho a la vida y a la igualdad jurídica, son algunos de los

derechos más importantes para la sociedad chilena, el segundo país de América Latina en que existe una mayor asociación de la democracia con la igualdad y la justicia. Esto representaría un cambio en el horizonte normativo que, trascendiendo la necesidad de integración material y la euforia por el consumo observadas en la transición temprana, se dirige hacia demandas más simbólicas de integración social. La aparición de un nuevo conjunto de valores implicaría, por tanto, nuevas luchas, reivindicaciones y el surgimiento de nuevos movimientos sociales.

Asimismo, indicadores de éxito en términos de crecimiento económico, así como la incorporación el año 2010 de Chile al reducido grupo de países de la OCDE, es decir, los países con mayor nivel de desarrollo económico y social, podría haber generado una percepción de mayor disponibilidad de la riqueza y recursos de todo tipo; el advenimiento del ansiado desarrollo, podría haber dado pie a diferentes y mayores expectativas y exigencias por parte de la sociedad. Desde entonces, la evaluación de la calidad y el acceso a los servicios sociales chilenos ya no se haría en base a la realidad latinoamericana, sino que en comparación a los países desarrollados, con un umbral de estándares y exigencias mucho más alto del que se había proyectado hasta ahora.³⁸ Junto a esto, el fin de los veinte años de la era concertacionista y el inicio de un gobierno de derecha que prometía diferentes estrategias de desarrollo, pudo haber influido en un aumento de las expectativas entre la población chilena. Con todo lo anterior, más que una demanda por el fin al modelo neoliberal, las protestas recientes podrían encarnar la búsqueda de una radicalización de la modernización capitalista que se iniciara en los años ochenta.

Así, el 2011 fue el año en que confluyeron las condiciones necesarias para exigir más recursos (materiales y simbólicos), con los frutos de la revolución capitalista expuestos en el quinto capítulo - un aumento en el ingreso *per cápita*, en la cobertura educacional y en la seguridad existencial - activando metas post-materialistas así como una mayor conciencia social sobre temas como equidad, sustentabilidad y justicia social. En esta línea, observadores como Navia (2012) señalan que el reciente ciclo de protestas se erigió para probar a la administración de Piñera en su capacidad para cumplir con las promesas de expansión de oportunidades para la clase media, en demandas transformadoras de la economía hacia un modelo de mercado más amigable e inclusivo. En línea con este argumento, Flores (2013) advierte que el movimiento estudiantil no es una expresión de la crisis del sistema, sino que es una reivindicación por el perfeccionamiento del mismo, un reclamo de consumidores. Más aún, el movimiento de los estudiantes habría producido repercusión en la opinión pública no

³⁸ Ver 'Camila Vallejo se suma al viaje a Europa de la CONFECH' en *El Mostrador*, 12 de octubre de 2011.

porque éste cuestionara el modelo, sino porque dirigió su demanda hacia el bolsillo de la gente a través de “una traducción elegante del bueno, bonito y barato: de calidad, pública y gratuita” (2013: 20). Al respecto, Giorgio Jackson señala,

en algún minuto uno se cuestionaba si es que este apoyo popular, de los sectores populares, de las clases medias también, era una demanda por pagar menos para ir a pagar al *retail* o por el entendimiento político de que la educación tenía que ser un derecho. Yo nunca lo tuve claro y yo creo que es difícil atreverse a pensar que la gente reflexionó al punto de decir: la educación es la forma en que nosotros podemos desenvolvernó y es un derecho social y, por lo tanto, no hay que pagar. Puede haber un componente grande, que yo no sé medir, pero que básicamente haya sido “no quiero quedar endeudado, no quiero pagar por esto” (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).

Si se observa al movimiento de estudiantes como un movimiento de consumidores que alza un reclamo por abaratar los costos de un servicio, más que demandas estructurales perseguiría entonces maximizar sus recursos en un contexto de libre mercado. El ex dirigente estudiantil señala - con preocupación desde su defensa a una crítica estructural al problema de la educación en Chile - al respecto,

eso es peligroso porque esa demanda es más fácil de resolver, es plata no más, en el fondo es decir: ya, el sistema sigue igual de neoliberal pero te paso un *voucher* para que estudies gratuitamente o más barato, vas a pagar, no sé, 50 o 30 lucas al mes. Y la gente quedaría feliz quizás, gran parte quedaría feliz, dirían: nos bajaron todo esto. Pero no había yo creo una densidad política en quizás gran parte de la gente que apoyó al movimiento estudiantil, o sea, se politizó más que nunca probablemente en los últimos años, pero aun así, yo creo que la gran mayoría de las personas que apoyaban el movimiento estudiantil no hacía esa vuelta de tuerca sino que era más por querer tener más plata y no tener que pagar por la educación (comunicación personal, 19 de diciembre de 2014).

Según lo anterior, sería posible afirmar que la revolución capitalista con génesis en la década del ochenta y descrita en extenso en el quinto capítulo, tres décadas más tarde ha redundando en una cultura capitalista donde la lógica mercantil ha permeado en el marco normativo de los chilenos. Desde el movimiento ciudadano de Calama, el dirigente José Mardones indica que, como consecuencia de la modernización capitalista, la lógica de mercado se instaló también en las dinámicas de acción colectiva de los trabajadores de la minería:

cambió todo, cambió el modelo y cambió el pensamiento de las personas, o sea, ya no tenías billetes, ahora tienes tarjetas y el cambio es radical, cambia todo y eso significa que si efectivamente no tienes un bono de término de conflicto en una negociación colectiva que no supere el millón de pesos, es malo (comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).

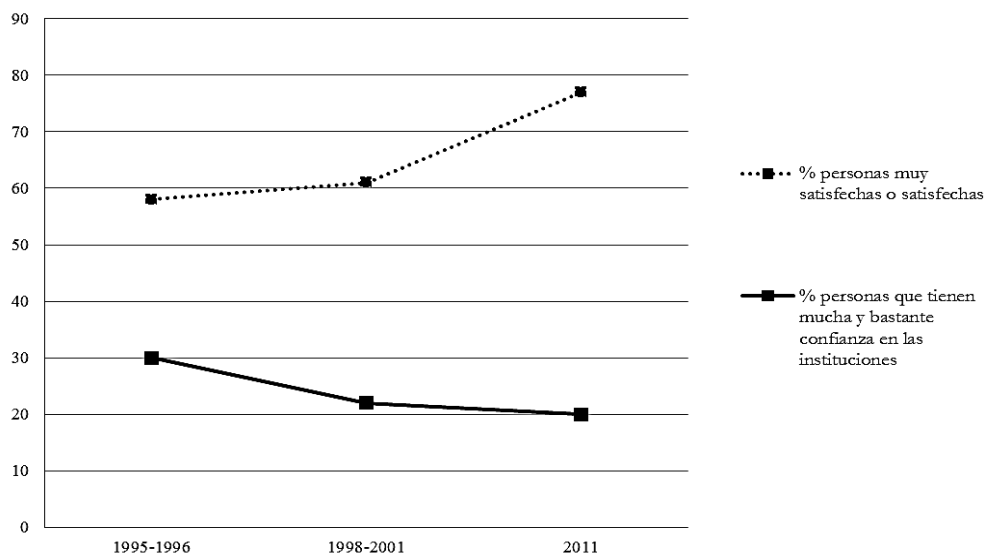
Con ello, más que una crítica a la esencia del modelo, se erigiría una demanda por el perfeccionamiento o profundización del mismo. Si bien está de acuerdo con esta mirada y coincide con que esta perspectiva facilitó una adherencia más transversal al movimiento estudiantil, Francisco Figueroa señala,

creo que lo que se termina imponiendo es una visión mucho más transformadora si no no se hubiera mantenido en el tiempo, no se habrían mantenido las demandas, no se habría interpelado a la Concertación al respecto, no estaríamos tres años después aun con un debate sobre el paradigma para organizar la educación, esto se habría acabado con un par de lucas sobre la mesa (...) pero creo que esa es la demostración de que esto es más que eso (comunicación personal, de 12 diciembre de 2014).

Para fortalecer el argumento de una demanda por la profundización del modelo como uno de los factores tras las recientes movilizaciones, resulta oportuno señalar que, de acuerdo a las cifras, los chilenos se encontrarían bastante satisfechos con sus trayectorias personales, lo que puede ser interpretado como satisfacción con el modelo que se ha instaurado en el país en las últimas décadas. Los datos presentados en la figura 6.8 dan cuenta de la evolución de los niveles de satisfacción tanto a nivel personal como institucional.

Como se observa, la satisfacción personal ha aumentado durante los últimos años y, hacia el 2011, 8 de cada 10 chilenos declara sentirse satisfecho o muy satisfecho, mientras que la confianza en las instituciones se ha reducido a un 20%.

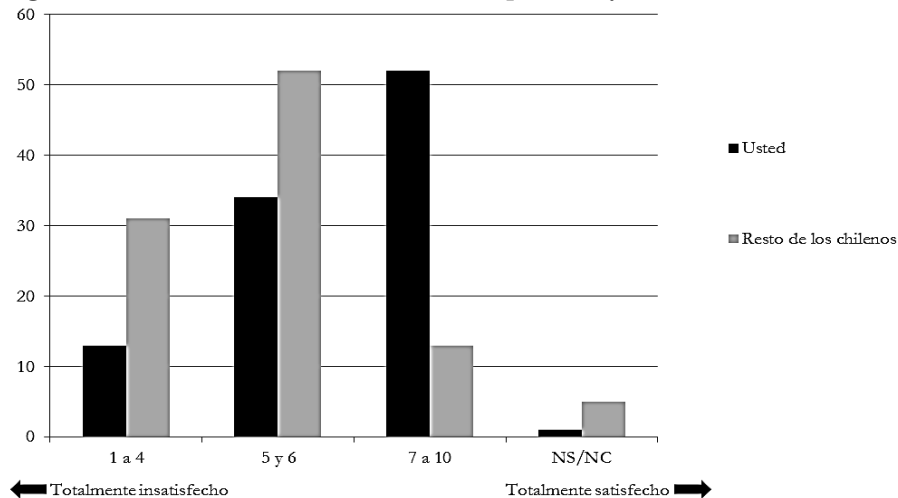
Figura 6.8. Evolución de la satisfacción vital y la confianza en instituciones, 2012.



Fuente: PNUD (2012: 21)

Asimismo, los datos en la figura 6.9 indican que los chilenos definen satisfactoriamente sus vidas, pero consideran que la vida del resto debe ser menos satisfactoria que la propia.

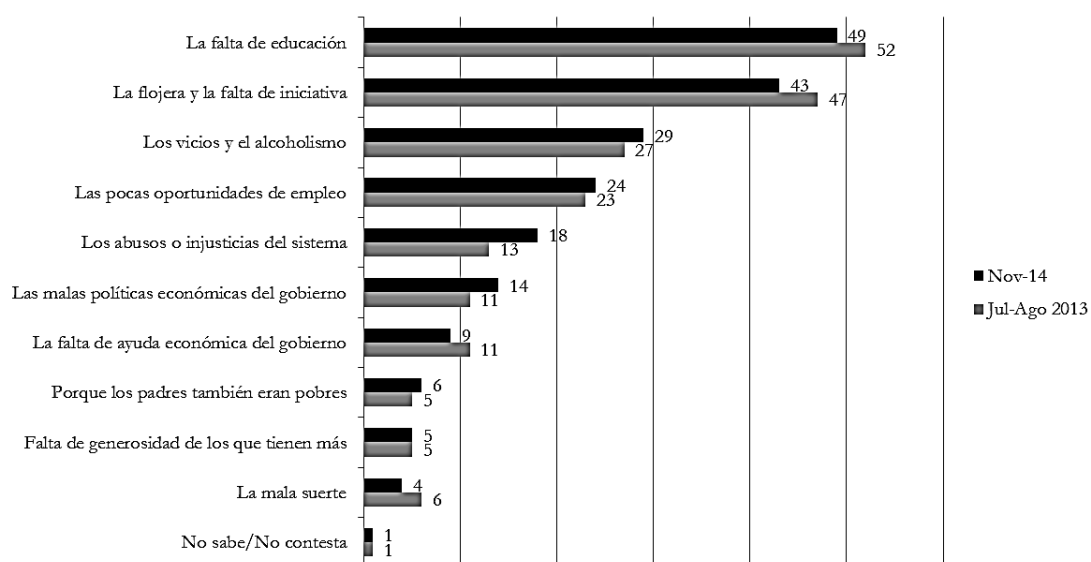
Figura 6.9. Nivel de satisfacción con la vida, personal y del resto de los chilenos.



Fuente: Centro de Estudios Públicos (2014: 32)

En este sentido y tal como se describiera en el quinto capítulo, en una sociedad que se moderniza rápidamente, el esfuerzo y el mérito se emplazan como valores clave, especialmente dentro de los grupos medios (Barozet y Fierro, 2011). Al no contar con el Estado ni con los recursos suficientes, estos grupos se auto-identifican con la cultura del esfuerzo y el mérito. Cuando emerge y se entroniza una matriz ideológica y cultural centrada en los logros, en la eficiencia y en la productividad, el rol del emprendimiento personal, el mérito, el esfuerzo privado y la carrera individual se ponen al centro de las aspiraciones de la sociedad.

Figura 6.10. Percepción de las causas más frecuentes de la pobreza, 2014.



Fuente: Centro de Estudios Públicos (2014: 35).

Con ello, en un sistema social meritocrático que descansa en el esfuerzo, iniciativas y trayectorias personales, la educación se erige como una demanda fundamental. Los chilenos habrían estado así dispuestos - al menos hasta ahora - a invertir gran parte del presupuesto familiar en colegios y estudios en función de esas expectativas. Según este argumento, la importancia de la demanda por la educación en desmedro de otras necesidades como la salud, salarios, protección social, etc. se explica entonces por la expresión de una matriz ideológica meritocrática que busca en la educación una plataforma de equidad que permita que tales ideales sean respetados y efectivamente desplegados. Francisco Figueroa, sin embargo, se muestra crítico ante esta tesis,

La gente hoy no puede optar entre ser un consumidor o ser un ciudadano, la forma de ciudadanía es a través del consumo y yo no creo que eso implique necesariamente como una suerte de alienación mental porque la gente no tiene opción de otra cosa, o sea, la relación que tiene con la educación está mediada por el dinero hoy día y no tiene otra esfera, no tiene un modelo distinto al que pueda optar, la gente hoy si actúa en tanto consumidor, no es por la fuerza de la ideología neoliberal, es por la fuerza, es por la fuerza de los hechos, es porque tiene que vérselas con el mercado para acceder a la salud, a la educación, a un montón de cosas, entonces hay de eso obvio, pero me parece que criticarlo como para mirar en menos lo que ha pasado es muy injusto y muy tramposo. Es como si le hicieras una zancadilla a alguien y se cayera y te empezaras a reír y dijeras: mira, se cayó, si era obvio que se iba a caer (comunicación personal, 11 de diciembre de 2014).

De esta forma, en el contexto socio-político del año 2011 vinieron a confluír una serie de factores que permiten explicar, desde la influencia de la modernización neoliberal, la evolución de una larga fase de desmovilización hacia una movilización que vuelve a emerger. Un modelo económico que no logra dar solución al enquistado problema de la desigualdad y la concentración, junto a expectativas sociales y estándares más altos consecuencia de una modernización acelerada, la consecución de un cierto umbral de desarrollo, el aumento de la cobertura educacional y del acceso a información permite una transformación valórica y la emergencia de una nueva cultura de corte post-materialista. En ella, la desigualdad, la injusticia social y la falta de oportunidades ya no son toleradas, generando nuevos marcos de sentido y alimentando demandas que serán canalizadas por medio de la acción colectiva. Por lo tanto, junto con y probablemente debido a, los acontecimientos políticos y económicos de las últimas décadas, los chilenos han adquirido una apreciación más crítica y, con ello, una comprensión y conciencia de las imperfecciones y fisuras del modelo económico hasta acá desplegado, dando paso a un nuevo ciclo político que implica nuevos cuestionamientos y desafíos para el proceso de profundización democrática del país.

Con todo lo anterior, el período de los veinte años de la era concertacionista se presenta como un terreno fecundo no sólo para analizar en profundidad el trauma colectivo, los paradigmas de gobernabilidad y la modernización neoliberal como factores para la desmovilización, sino también para examinar el proceso observando la manera en que dichas variables posibilitaron la reconstrucción identitaria que sentó las bases y generó las plataformas necesarias para la nueva fase de movilización inaugurada en 2011. Observada así, la premisa del debilitamiento o ausencia ciudadana en el período 1990-2010 hasta aquí expuesta, es replanteada y ampliada al ser

considerada más bien como un proceso de reestructuración de la sociedad civil donde nuevas identidades y estructuras sociales son generadas, representado así una fase de 'incubación' para el ciclo de activación venidero.

Conclusiones

A partir del examen a las trayectorias de movilización y, en especial a través del *zoom* sobre el cuadro general de desmovilización de la sociedad civil al retorno democrático, se ha realizado un profundo análisis sobre el proceso socio-político y las grandes transformaciones sociales experimentadas por la sociedad chilena en las últimas décadas. Se constata la erosión y ocaso de una matriz socio-política tradicional que definió la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil durante gran parte del siglo XX. Además se observa la constitución, todavía en proceso, de una nueva estructura social y política con un correlato de nuevas identidades colectivas, formas y posibilidades de acción y movilización social.

Los objetivos planteados al inicio de este estudio fueron, en gran medida, concretados y se espera den paso a nuevas preguntas y espacios de análisis sobre el conflicto social y político en Chile, sus movimientos sociales, el estudio de la sociedad civil así como las dinámicas asociadas a los procesos de redemocratización. El estudio se ha sumado a una cierta tradición de las ciencias sociales latinoamericanas basada en el análisis de casos y de las estructuras sociales y políticas que condicionan la emergencia de la movilización social, ampliando, en este caso, el examen a un momento de invisibilización de la acción del tercer sector. Asimismo, el análisis recoge la perspectiva explicativa del modelo y teoría europea de los ‘nuevos movimientos sociales’, en términos de buscar e indagar en las causas que empujan a los actores a la movilización y, en menor medida, del enfoque norteamericano estructural-funcionalista, tendiente a entender la manera en que los movimientos sociales son desplegados. En otras palabras, se analizó el caso chileno considerando elementos tanto estructurales como motivacionales y la forma en que ambos aspectos se combinaron para dar forma o facilitar el repliegue de los sujetos colectivos.

Bajo la opción analítica de este trabajo, con foco en la identidad colectiva pero, al mismo tiempo, en la importancia del contexto socio-político en que se enmarca la acción social, la sociedad civil se entendió como una red de movimientos sociales y asociaciones que son producto o resultado de una contingencia histórica. Tal contingencia involucra y fue analizada en función de variables como el modelo de acumulación de capital y las relaciones de producción, el tipo de régimen político con su sistema de partidos y modelos de intermediación, los patrones culturales dominantes y los imaginarios sociales contruidos en el proceso. Contempla asimismo una memoria colectiva aglutinadora y un marco jurídico que regula los tipos de asociación y la correlación de fuerzas entre las clases y diferentes grupos sociales.

Algunos de los objetivos de la investigación resultaron ser, no obstante, más esquivos. Es el caso lograr dar cuenta y hacerse cargo de la heterogeneidad y complejidad interna contenida en las (des)movilizaciones. Esto, pues aun cuando los movimientos y organizaciones de la sociedad civil puedan mostrarse como fenómenos homogéneos son, en realidad, heterogéneos y multiformes, con diversos objetivos y móviles, que pueden resultar equívocos, confusos o incluso contradictorios para los propios individuos involucrados en la acción colectiva. Se ha intentado sin embargo, el lector juzgará el resultado, dar un tratamiento que reconozca y considere dicha complejidad y no reduzca ni simplifique la sociedad civil a un actor unidimensional, aceptando que las demandas y reclamos encarnados por un movimiento social no representan exigencias transversales a la sociedad civil. Esto se volvió patente una vez que las movilizaciones sociales explotan en Chile el año 2011, pareciendo contener un sentir generalizado de la sociedad civil. Al poco andar, sin embargo, se hizo evidente todo tipo de complejidades, demandas diversas y muchas veces opuestas a los cambios y propuestas planteados por los movimientos sociales. Es el caso, por ejemplo, de las múltiples voces que reaccionaron oponiéndose a los cambios contenidos en la agenda reformista del segundo gobierno de Bachelet.

Se reconoce con ello que la sociedad civil posee una heterogeneidad intrínseca que lo vuelve un objeto de estudio elusivo y complejo, tal como ha dado cuenta la literatura especializada en su análisis. Se buscó asimismo mantener la coherencia de considerar a dicho actor como una arena compuesta por distintos actores colectivos con intereses y dinámicas que permiten avanzar, pero a momentos también retroceder respecto a la profundización democrática. La conversación con los líderes de los movimientos sociales ha entregado información relevante, pero en ningún caso conclusiva ni representativa de la totalidad de las motivaciones de quienes se involucran o deciden restarse de participar en movilizaciones: no ha sido el móvil de este trabajo un análisis generalizable ni unívoco sobre las dinámicas de la sociedad civil. De igual forma, se ha evitado caer en una visión apologética considerando a la sociedad civil como un representante de virtudes democratizantes, así como no se ha pretendido sugerir ni concluir que una democracia necesite - o no - de la acción de movimientos sociales, sino dar cuenta del fenómeno de la desmovilización post-dictatorial e intentar profundizar en su detalle y comprensión.

Se analizaron las trayectorias de (des)movilización de la sociedad civil como momentos en que este actor (tanto en sus dimensiones formales como informales) mostró mayores o escasos niveles de organización y densificación de redes, exposición y ocupación del espacio público. El chileno se presenta como un caso de estudio con nítidos períodos de (des)movilización, donde la acción colectiva se hace evidente y

explícita logrando un control acelerado de los recursos que persiguen (políticos, culturales, discursivos y mediáticos) y con ello de la agenda de prioridades nacionales y los contenidos del debate público, mientras en otros se observa un déficit, ausencia o desactivación de tal acción.

De igual manera, a lo largo del relato del libro fue posible identificar explícita o implícitamente, la presencia - o ausencia en el caso de la desmovilización -, de los elementos constitutivos de la acción colectiva presentados en el primer capítulo del libro. Tanto en términos históricos como contemporáneos, las movilizaciones en Chile se han visto influenciadas y potenciadas por la presencia de factores internos así como por la acción de un determinado *set* de oportunidades políticas o variables externas. En términos históricos, las fases de movilización han contado con la acción de agentes movilizadores que, ya sea como individuos (Luis Emilio Recabarren, Clotario Blest, Iván Fuentes o Camila Vallejo) o como sujetos colectivos (sindicatos y partidos políticos en el período previo a 1990 y más contemporáneamente la CONFECH), han servido para aglutinar, convocar y propiciar la acción colectiva. De la misma manera, la movilización se ha desplegado en base a una identidad colectiva, variable en el tiempo y compuesta por distintos elementos, entre ellos y de forma importante, de una memoria colectiva. Al desarrollarse, las movilizaciones han puesto en práctica un repertorio de acción que, en parte, recoge formas tradicionales de protesta, pero que en cada ciclo nuevas modalidades de acción colectiva son introducidas, mientras las antiguas son abandonadas o adaptadas: los motines y saqueos de principios de siglo evolucionan hacia formas más organizadas de protesta como las huelgas, se incorporan luego los cacerolazos a mediados de siglo o, a partir del año 2011, una serie de nuevos repertorios como besatones, maratones por la educación, bailes y el uso de las redes sociales para convocar las marchas, entre otras nuevas formas de acción social.

Los factores condicionantes de las movilizaciones así como del flujo y reflujo de la acción colectiva han sido diversos, pero normalmente se ha observado un juego entre las demandas de la sociedad civil y las dinámicas del Estado y del mercado, siendo mediadas por una memoria colectiva. Se constata así una relevancia sistemática de las hipótesis o factores explicativos utilizados para analizar la desmovilización post-dictatorial. Se ha comprobado, al mismo tiempo y en línea con los teóricos de los movimientos sociales, que las movilizaciones implican un proceso de relativa constancia que, en ciertos momentos se visibiliza, mientras en otros permanece oculto, determinado por las especificidades y particularidades de un determinado cruce tiempo-espacio. Con ello, en cada momento y coyuntura específica, los movimientos

sociales son moldeados por una amplia batería de restricciones y oportunidades únicas al contexto en que están insertas.

De forma específica, las trayectorias de (des) activación de la sociedad civil en Chile durante el siglo XX se vieron influenciadas - ya sea para inhibir o desatar - por el trauma de la represión y las matanzas obreras así como por una represión perpetrada en nombre de la estabilidad y gobernabilidad del Estado. Asimismo, los golpes de una economía fluctuante y de diferentes modelos y proyectos de desarrollo y modernización, afectaron el quehacer de los movimientos y las organizaciones sociales. El proceso socio-político desenvuelto a mediados del siglo pasado, permitió la diversificación de la sociedad civil de la época, constituyéndose múltiples campos de conflicto social y político que alcanzan su punto cúlmine en los años sesenta. Esta democratización e inclusión social provocó una expansión en las demandas y requerimientos de la sociedad civil que el Estado no fue capaz de atender dado un estancamiento económico y una inflación persistente, en un modelo que, en definitiva, no logró equiparar la inclusión política con la integración material. La reacción de los partidos y del sistema político a la presión ciudadana expansiva redundó en la polarización y en el incremento de la movilización social. Todo este proceso fue dramáticamente interrumpido por el régimen dictatorial, desatando una fase de desmovilización (1973-1982) forzada por la represión y los cambios estructurales al modelo político y económico impuestos por el régimen. Entre 1983 y 1990 se produce la última gran fase de movilización del siglo XX en las llamadas jornadas de protesta nacional, con un grueso entramado social así como nuevos tipos de movimientos sociales, más autónomos y diversos que aquellos observados en el período de la matriz clásica previa a 1973.

En el análisis de las trayectorias de (des)movilización se pudo asimismo comprobar la evolución desde un quehacer social enmarcado en una forma estadocéntrica de organización, con una clara división entre dirigentes y dirigidos y una disposición piramidal de la estructura de los movimientos, subordinados además a la acción de un partido-vanguardia como el gran conductor e intérprete de los intereses sociales. A partir de los años ochenta y especialmente visible en el ciclo de movilizaciones 2011, se da paso, en cambio, a nuevas formas de acción social marcadas por una mayor autonomía y un distanciamiento entre los movimientos sociales y los partidos políticos y el Estado.

De igual manera, su puede concluir que la acción colectiva en Chile se ha visto históricamente condicionada y ha tenido de forma, más o menos permanente, una respuesta represiva por parte del Estado. La acción represiva estatal ha permitido muchas veces, y tal como se presentara en el primer capítulo, precipitar el fin de un

movimiento social o el tránsito de una fase de movilización a una de desmovilización. El tratamiento represivo y autoritario a las movilizaciones y como fórmula para asegurar la gobernabilidad o el “hacer que las cosas se hagan”, se hizo especialmente evidente bajo la dictadura militar, donde la acción represiva fue utilizada tanto en la fase de desmovilización para desactivar a la sociedad civil a comienzos del régimen, como luego para contener la ola de movilizaciones de mediados de los años ochenta. La dura represión y, con ello, un alto costo de involucramiento en la acción colectiva para los participantes, limitó y restringió las posibilidades de la movilización de extenderse más allá en el tiempo. A esto, es necesario agregar el desgaste y la deslegitimización en que se sumió la acción de protesta como estrategia de salida al régimen dictatorial. El desgaste y derrota de la estrategia de movilización social junto a la consecución de sus objetivos - el retorno democrático -, entregan luces importantes para comprender el tránsito de una fase de movilización a una de desmovilización una vez recuperada la democracia. Estas representan, sin embargo, sólo algunas y las más inmediatas explicaciones del fenómeno de la desmovilización a partir de la década del noventa, tal como se ha buscado comprobar a lo largo del libro y en un hecho que se convierte en una de las principales conclusiones de esta investigación.

De esta manera, la tesis del cambio de régimen, el derrumbe de un enemigo común, el advenimiento democrático y, con ello, la consecución de los objetivos contenidos en las movilizaciones de los años ochenta, son los factores explicativos más evidentes y extensamente utilizados para comprender el tránsito desde la movilización de ese período a la desmovilización transicional. Estas certeras variables, sin embargo, explican sólo un aspecto y de manera superficial lo ocurrido en términos de la sociedad civil a partir de los años noventa y han facilitado asimismo que un análisis más exhaustivo y que considere tal complejidad haya sido más bien relegado, postergado y omitido. Desde la investigación contenida en estas páginas, queda en evidencia la complejidad y profundidad de los procesos socio-políticos acontecidos en la últimas décadas que, más allá del paso de una dictadura a un régimen democrático, la acción y desarrollo de la sociedad civil recibió el impacto de una constelación de factores psicológicos, políticos y económicos que dificultaron en gran medida la producción de movilización social.

Un aprendizaje político sobre las experiencias traumáticas del pasado que involucrara tanto a las elites como a la sociedad civil, junto a la imposición de un nuevo y radical modelo económico, se tradujo en un clima social de silencio y olvido, en prácticas políticas marcadas por la evasión del conflicto y la exacerbación del consenso, así como en la erosión y desarticulación de las subculturas partidarias, identidades y clases tradicionales asociadas al trabajo, al campesinado y a la pobreza

urbana. En otras palabras, no sólo se produce el término dictatorial y un retorno democrático, sino un proceso más profundo en que emerge una nueva cultura y prácticas políticas, donde la movilización de masas como herramienta de participación, ampliamente utilizada durante el siglo XX, es reemplazada desde finales de los años ochenta por la movilización electoral y una participación más privatizada, atomizada e individual.

Más aun, durante la fase de desmovilización en los gobiernos de la Concertación, se produce una transición, traslape o superposición de una sociedad antigua y una nueva. Con ello, en este período se observa una lenta pérdida de los valores y las reglas de conducta tradicionales y el posterior reemplazo por nuevos componentes normativos. Como se ha podido inferir para el caso chileno luego del fin de la dictadura, el régimen dictatorial supuso un ambicioso proyecto refundacional que implicó que se entremezclaran, de manera muy acelerada, formas nuevas y antiguas de ordenamiento social. La sociedad y las identidades que otrora generaban pertenencia y cohesión social, se vieron fragilizadas, los fines comunes o colectivos disueltos y se produjo un distanciamiento de los individuos respecto al grupo, en un contexto donde las normas, reglas de comportamiento y valores se volvieron ajenos o desconocidos.

En otras palabras, luego del fin de la dictadura en Chile tiene lugar una transición y mutación cultural, con una desintegración que forzó a los individuos, tal como lo describieran las teorías de desmovilización, a replegarse al ámbito privado como una forma de protección y preservación identitaria, donde cobra relevancia el dominio privado mientras surge una cierta apatía y desinterés individual respecto al curso que sigue la sociedad. Estos procesos, sindicados como necesarios y encargados de preservar la memoria colectiva y dar origen a las innovaciones que preceden siempre a los “renacimientos” de las culturas, parecen aplicar en su totalidad a lo ocurrido en la fase de desmovilización durante la redemocratización.

A la superposición de estructuras nuevas y tradicionales con un consecuente repliegue ciudadano, es necesario agregar la influencia de las tres grandes hipótesis desarrolladas en esta investigación como variables que facilitaron la desmovilización. La relación entre memoria post-traumática y la (des)movilización en el Chile post-dictatorial fue analizado en extenso como uno de los muchos legados de la dictadura militar sobre la redemocratización. El trauma instalado en la sociedad luego de la exposición directa o indirecta durante décadas a diferentes situaciones de violencia y recursos de dominación social, imprimió un miedo transversal a los conflictos del pasado en el presente. Se trató de una experiencia traumática dada la radicalidad de los cambios y el carácter refundacional de la dictadura, demandando una capacidad adaptativa por parte de los chilenos a las nuevas estructuras políticas, económicas y

sociales, y erigiéndose así en un punto de inflexión en el curso de las historias individuales y nacionales.

A lo largo del estudio se demostró que el impacto de este trauma fue multidimensional y se tradujo, luego de cesado el régimen, en un clima de silencio, olvido y negación que facilitó y tuvo fuertes implicancias sobre la fase de subsistencia de la sociedad civil post-dictadura. En específico, se analizó la forma en que la experiencia traumática se transformó en un impedimento para el desarrollo de una eventual acción colectiva en un contexto donde, como una reacción convertida en mecanismos de supervivencia, se evitó procesar y elaborar interpretaciones del pasado, mientras se promovió el silencio y el olvido a nivel individual y desde las políticas de Estado. De igual manera, los movimientos sociales vieron afectada su orgánica producto de la acción represiva dictatorial focalizada en las organizaciones, con recursos tales como el exilio, la relegación, la infiltración, la prohibición de reunión, así como otras medidas indirectas como la deslegitimación de la protesta y del ejercicio de la política. Al advenimiento democrático, dicha desarticulación social encontró dificultades para ser revertida y reconstruida en un contexto en que la desconfianza respecto a la acción colectiva se había enquistado en la sociedad.

Junto a lo anterior, se produjo una transmisión del trauma en paralelo a procesos de re-traumatización dada una contingencia transicional marcada por “irrupciones de la memoria” en la forma de atentados políticos o el arresto y posterior fallecimiento de Pinochet, hechos que forzaron un ejercicio reflexivo y una reinterpretación del pasado. Esto redundó en un proceso de redemocratización descrita como una democracia amnésica, donde la “caja de la memoria” estuvo cerrada tanto por la generación que vivió directamente el trauma como aquella generación más joven que lo experimentó de manera más indirecta, inhibiendo el desarrollo de una memoria común y un discurso colectivo aglutinador.

Sin embargo y a través del análisis y la información presentada, se puede inferir que a medida que la transición se fue desarrollando, la memoria colectiva traumática así como sus efectos comenzaron a evolucionar y a originar nuevas interpretaciones sobre el pasado y que permitieron nutrir ciertas demandas a partir del año 2011. El año 1998 con el arresto de Pinochet, se comienza a cerrar un ciclo definido por una memoria como olvido, hegemónica durante la transición temprana con un correlato de desactivación social. Este hecho, permitió desatar el nudo de la memoria y un cierto retroceso del temor de la población frente al mundo militar, así como respecto al miedo a la crítica, a la pluralidad y a la diversidad de opinión. Asimismo, los insumos para la acción colectiva se alimentaron de un pasado idealizado en torno a los derechos que se perdieron luego de la arremetida dictatorial, así como en una

transmisión de memorias de activismo, con la memoria o herencia mnémica como un puente inter-generacional en que se traspasaron identidades y formas de lucha del pasado. De igual forma, la noción de los derechos humanos se instaló dentro del repertorio de derechos básicos con demandas que comienzan a centrarse en darle contenido a la democracia y a permitir una nueva definición de derechos humanos relacionada con la profundización democrática, la inclusión y la equidad.

Y así como el trauma colectivo y la polarización, el conflicto, la represión y la violencia de la historia reciente del país marcaron el quehacer de la sociedad civil, tuvo al mismo tiempo un impacto en las elites políticas con un proceso de reflexión y aprendizaje que se tradujo en un quiebre con las formas de hacer gobierno previas a 1973. Las exigencias y constricciones propias de la transitología chilena, dieron forma a un paradigma de gobernabilidad específico así como a un tipo de relación de los partidos de la Concertación con la sociedad civil. La variable política, los factores externos a los movimientos y el rol de los agentes movilizadores como elementos desactivadores fueron analizados, demostrando que la desactivación social de 1990-2010 fue incitada por las características de la transición y el rol preponderante de las elites, las herencias dictatoriales en términos de rigidez institucional, así como por el control ejercido por el Gobierno y los partidos políticos sobre las organizaciones y movimientos de la sociedad civil. En específico, se comprobó que la movilización social fue inhibida por una contracción de oportunidades políticas tales como la consolidación de la negociación inter-elites en la toma de decisiones públicas, donde el rol de la sociedad civil quedó relegada frente a la conducción política de los partidos. De la misma manera, durante el período de los gobiernos de la Concertación y como una forma de dar estabilidad y controlar el restablecimiento de la democracia, se produjo una anticipación y neutralización de los posibles focos de conflicto y demandas sociales, un fuerte proceso de institucionalización de los movimientos así como la cooptación y las operaciones políticas para contener la presión social. Se buscó y se consiguió con ello limitar la movilización social o canalizarla a través de conductos institucionales, lo que se transformó en un obstáculo más para el desarrollo de acción colectiva luego de finalizado el régimen militar. Finalmente, la desmovilización fue propiciada por el despliegue de una serie de políticas públicas tendientes al fortalecimiento de la sociedad civil. Estas medidas, sin embargo, no se tradujeron en un empoderamiento de la sociedad civil, sino, al contrario y tal como se intentó demostrar, implicaron una redefinición del sentido de las organizaciones sociales desde prácticas solidarias hacia el microemprendimiento y la competitividad, limitando su capacidad de incidencia en los debates nacionales y contribuyendo a la atomización y la consolidación de un proceso global de despolitización.

Con ello, se mostró que las estrategias de gobernabilidad puestas en práctica por la Concertación contribuyeron a generar un clima de desactivación social, especialmente durante las primeras etapas de la transición. Los vínculos y modelos de relación del Estado con la sociedad civil, así como las condiciones institucionales y estructurales evolucionaron no obstante con el despliegue de la redemocratización y los desafíos de la transición, permitiendo la generación de insumos para la protesta de acuerdo a una nueva estructura de oportunidades políticas. Esto, se hizo especialmente evidente los años 1998 y 2006, cuando la fórmula de gobernabilidad elitista y la distante relación de la clase política con la sociedad civil comienza a quebrarse, poniéndose en marcha un enfoque con pretensiones más inclusivas que generó cambios en términos del flujo de oportunidades políticas, facilitó la apertura de un sistema político hasta entonces hermético y generó crecientes posibilidades para la emergencia de movilización social. Con un paradigma de gobernabilidad *elite-centred* con signos de desgaste y un sistema que se había “abierto” producto de las retóricas y las políticas de participación, la elección de Sebastián Piñera surge sin una clara estrategia de gobernabilidad, sin mecanismos de anticipación o canalización institucional de las demandas colectivas, una débil relación con el mundo social ni la acción de operadores políticos o vínculos directos con sectores sociales propensos a la movilización. Se constituyeron así verdaderos flancos de vulnerabilidad en la nueva administración, una nueva apertura del sistema y la emergencia de nuevas oportunidades políticas para la acción colectiva que irrumpe el 2011.

Finalmente, se demostró que el impacto de la revolución capitalista y la modernización neoliberal sobre la desmovilización hacia el fin de la dictadura fue múltiple. Los cambios que hasta entonces se habían desarrollado progresivamente e involucrado a dos o tres generaciones, se produjeron apresuradamente durante el régimen dictatorial impactando a una generación de chilenos que se vio enfrentada en un breve período a una nueva realidad social, con nuevas condiciones materiales y transformaciones ideológicas. La modernización neoliberal cambió la estructura productiva, el sistema de clases y las formas de integración social que hasta entonces se conocían, promovió la desarticulación de las relaciones preexistentes entre el Estado y la sociedad, así como la génesis de una nueva matriz socio-política centrada en la privatización de las prácticas ciudadanas. La irrupción de las reformas estructurales y el cambio en el modelo de acumulación, impactaron sobre el mundo del trabajo y la estratificación social, provocando la disolución de las categorías, organizaciones, movimientos, clases e identidades tradicionales tales como el movimiento obrero, campesino y poblador, protagonistas de las oleadas movilizadoras previas a 1973.

Emergió, al mismo tiempo, un fuerte proceso de mesocratización y movilidad ascendente con el surgimiento de una nueva clase media altamente heterogénea y con escasos elementos de cohesión en su interior, constituida en su mayoría por grupos provenientes de otras clases desestructuradas: se produce con ello un fuerte proceso de diferenciación social y fundamentos de clase relativamente débiles en términos de pertenencia, identidad colectiva y adhesión a intereses y proyectos colectivos.

Al mismo tiempo, la irrupción de la modernización neoliberal y su proceso refundacional en términos económicos, involucró el tránsito desde una matriz populista a una matriz productivista-consumista, con una consecuente masificación del consumo, acceso al crédito y al endeudamiento así como el florecimiento de nuevos estilos de vida orientados hacia el placer personal y el individualismo. Al constituirse el mercado en el principio organizativo de la vida social, no sólo se alteró la economía, sino que la adopción de sus lógicas definieron un proyecto cultural que transformó las prácticas y representaciones de la convivencia conocidas hasta entonces, favoreciendo una participación segmentada y el desinterés por las responsabilidades colectivas, confabulando contra un eventual proceso de movilización y expresión de demandas colectivas al retornada la democracia.

La modernización neoliberal contuvo así una serie de cambios y transformaciones que apalancaron una desmovilización, pero que al mismo tiempo permitieron un acelerado proceso de transformación sociales y el origen de una sociedad civil más crítica y exigente. En el contexto de un neoliberalismo avanzado, la sociedad chilena se enmarcó en un modelo económico que aún no logra solucionar el problema de la desigualdad y la concentración de la riqueza, pero que al mismo tiempo ha permitido la consecución de un cierto umbral de desarrollo y el mejoramiento en las condiciones materiales de gran parte de la población, con un aumento de la cobertura educacional y una democratización del consumo de bienes modernos y del acceso a la información. Todo ello redundó en una transformación valórica y normativa y la emergencia de una nueva cultura de carácter post-materialista en que la desigualdad, la injusticia social y la falta de oportunidades, problemáticas de larga data, ya no serán toleradas. El despliegue de la modernización neoliberal favoreció así un proceso de desmovilización, pero al mismo tiempo generó y alimentó nuevas demandas que fueron canalizadas por medio de la acción colectiva, dando paso a un nuevo ciclo político con diversos cuestionamientos y desafíos para el proceso de profundización democrática del país.

Se observó asimismo la movilización y la desmovilización de la sociedad civil como las dos caras de un mismo fenómeno. Se constató que en cada nueva oleada de activación y, en específico, en el período de desactivación transicional se redefinieron

las prácticas políticas, la cultura, los marcos normativos y valorativos en los que tales oleadas tuvieron lugar. El flujo y reflujo constante de la sociedad civil chilena ha tenido asimismo un correlato de consecución y ampliación de derechos civiles. Es posible así afirmar que el proceso político contenido en las trayectorias de (des)movilización en Chile está correlacionado con la ampliación derechos sociales, esto es, las (des)movilizaciones y la expansión de derechos se condicionan, son constitutivos y se potencian mutuamente. En otras palabras, a través de la movilización social se alcanzan y amplían ciertos derechos y, esta ampliación permite que se modifique el horizonte normativo así como la valoración y exigencia de nuevas demandas. En el caso chileno de los últimos años, el retorno democrático apalancado por la efervescencia social de los años ochenta, permitió el desarrollo y consolidación de una democracia que, a su vez, redundó en una transformación valórica y la emergencia de una nueva cultura de características post-materialistas con nuevos marcos de sentido y demandas sociales.

La influencia de factores políticos, psicológicos y económicos como grandes inhibidores de una eventual acción movilizadora en la transición, se constituyeron al mismo tiempo en componentes de una nueva matriz socio-política en la que se comienzan a sentar las bases y desarrollar—nuevas identidades que hicieron posible y, al mismo tiempo, se pusieron de manifiesto en el nuevo ciclo de movilizaciones de 2011.

Referencias

- Acuña, C., Smith, W., y Wolfson, L. (1996). La economía política del ajuste estructural: la lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales. *Desarrollo Económico*, 36(141), 355–389.
- Aedo, C., y Sapelli, C. (2001). El sistema de vouchers en educación : una revisión de la teoría y evidencia empírica para Chile. *Estudios públicos: revista de políticas públicas*, (82), 35–82.
- Agger, I., y Jensen, S. B. (1994). Determinant Factors for Countertransference Reactions under State Terrorism. En J. P. Wilson y J. Lindy (Eds.), *Countertransference in the Treatment of PTSD* (pp. 263–287). Nueva York: Guilford Press.
- Agger, I., y Jensen, S. B. (1996). *Trauma y cura en situaciones de terrorismo de Estado. Derechos humanos y salud mental en Chile bajo la dictadura militar*. Santiago: Ed. ChileAmérica CESOC.
- Aguilar, P. (2002). *Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy*. Oxford: Berghahn Books.
- Aguilera, C. (2007). Participación ciudadana en el gobierno de Bachelet: Consejos Asesores Presidenciales. *América latina hoy: Revista de ciencias sociales*, (46), 119–143.
- Aguilera Ruiz, O. (2014). *Generaciones : movimientos juveniles, políticas de la identidad y disputas por la visibilidad en el Chile neoliberal*. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO.
- Ajangiz, R. (2000). *Política militar y movimientos sociales: el fin de la conscripción en Europa* (Tesis doctoral). Universidad del País Vasco, Leioa.
- Alberoni, F. (1989). *Genesis*. Milano: Garzanti.
- Albuquerque, M. do C. (2004). *La construcción democrática desde abajo en el Cono Sur*. San Pablo: Instituto Polis.
- Albuquerque, M. (1990). *Reconstrucción del movimiento popular bajo dictadura militar, 1973-1983*. Santiago, Chile: ECO : Taller Nueva Historia : CETRA/CEAL.
- Alcántara, M., y Ruiz-Rodríguez, L. (2006). *Chile: política y modernización democrática*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Alda Mejías, S. (2007). La “Revolución democrática” de los nuevos movimientos sociales y de los populismos de izquierda ante la crisis de gobernabilidad en América Latina. En *Iberoamérica: Nuevas coordenadas, nuevas oportunidades, grandes desafíos* (53–88). Madrid: Instituto de Estudios Estratégicos (IEEE).

- Alessandri Palma, A. (1967). *Recuerdos de gobierno* (Vol. 1). Santiago: Editorial Nascimento. Recuperado a partir de <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0037023.pdf>
- Algranati, C., Seoane, J., y Taddei, E. (2004). Los movimientos sociales en América Latina frente al librecomercio y la criminalización de la protesta. En *OSAL, Observatorio Social de América Latina* (Vol. 5: 77–93). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Recuperado a partir de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110307062004/7Introcrono14.pdf>
- Almarza, M. T. (1994). Aspectos psicosociales de la represión durante la dictadura. *Reflexión*, (110), 15–20.
- Almeida: (2007). Defensive Mobilization: Popular Movements against Economic Adjustment Policies in Latin America. *Latin American Perspectives*, 34(3), 123–139.
- Almeyra, G. (2008). Los vaivenes de los movimientos sociales en México. *OSAL: Observatorio Social de América Latina*, 24, 87–101.
- Althusser, L. (1996). *Escritos sobre psicoanálisis: Freud y Lacan*. Siglo XXI.
- Alvarado, A. (2010). *Clases(s) media (s) en Santiago hoy: un análisis multivariable de su composición* (Tesis de licenciatura). Universidad de Chile, Santiago.
- Álvarez, R. (1997). La matanza de Coruña. *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, 116, 77–108.
- Alvarez, R., y Opazo, L. (2010). *Endeudamiento de los hogares en Chile: Análisis e implicancias para la estabilidad financiera*. Santiago: Grupo de Investigación Financiera del Banco Central de Chile.
- Alvarez, S. E., Dagnino, E., y Escobar, A. (Eds.). (1998). *Cultures of Politics Politics of Cultures: Re-Visioning Latin American Social Movements*. Boulder: Westview Press.
- Améstica, L., Gaete, H., y Llinas-Audet, X. (2014). Segmentación y clasificación de las universidades en Chile: desventajas de inicio y efectos de las políticas públicas de financiamiento. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 22(3), 384–397.
- Amorós, M. (2004). *Después de la lluvia: Chile, la memoria herida*. Editorial Cuarto Propio.
- Anderson: (2003). Neoliberalismo: un balance provisorio. En E. Sader y P. Gentili (Eds.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (2da ed.: 13–28). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Andrews, K. T. (1997). The Impacts of Social Movements on the Political Process: The Civil Rights Movement and Black Electoral Politics in Mississippi. *American Sociological Review*, 62(5), 800–819.

- Angell, A. (1974). *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. México DF: Ediciones Era.
- Archila, M. (2011). Los movimientos sociales latinoamericanos al inicio del siglo XXI. El caso colombiano. *SUR*, 177–206.
- Arditi, B. (2004). Trayectoria y potencial político de la idea de sociedad civil. *Revista Mexicana de Sociología*, 66(1), 1–21.
- Arenas, G. (2014). *Virar derecha*. Santiago: Planeta/Ariel.
- Arias, A., y Del Campo, A. (2009). Introduction: Memory and Popular Culture. *Latin American Perspectives*, 36(5), 3–20.
- Ariztía, T. (2002). *El consumo y los sectores medios en el Chile de los 90* (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. Recuperado a partir de https://www.academia.edu/3313015/_El_consumo_y_los_sectores_medios_en_el_chile_de_los_90_.Serie_Tesis_de_Mag%C3%ADster_en_Sociolog%C3%ADa._Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Chile
- Armony, A. C. (2004). *The dubious link: civic engagement and democratization*. Stanford University Press.
- Armstrong, A., y Águila, R. (2006). *Evolución Del Conflicto Laboral en Chile: 1961-2002*. Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Arnold, M., Thumala, D., y Urquiza, A. (2007). Colaboración, cultura y desarrollo; entre el individualismo y la solidaridad organizada. Recuperado a partir de <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/121676>
- Arriagada, G. (2007). A un año de Bachelet: ¿gobierno ciudadano? ¿qué pasó? *Asuntos Públicos*, 603. Recuperado a partir de <http://www.ced.cl/ap/2007/05/a-un-año-de-bachelet-%c2%bfgobierno-ciudadano-%c2%bfque-pasó/>
- Arrué, M. (2013). El movimiento estudiantil en Chile (2011-2012): Una lucha contra la discriminación. *Amérique Latine Histoire et Mémoire*, (24). Recuperado a partir de <http://alhim.revues.org/4388>
- Artaza, González, S., y Jiles, S. (Eds.). (2009). *A cien años de la masacre de Santa María de Iquique*. Lom Ediciones.
- Atria, F. (2010). Participación y alienación política: el problema constitucional. En C. Fuentes (Ed.), *En nombre del pueblo: Debate sobre el cambio constitucional en Chile* (163–190). Santiago: UDP, Fundación Böll.
- Avritzer, L. (2002). *Democracy and the public space in Latin America*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Baeza-Rodríguez, C. (2008). Los discursos públicos sobre la gobernabilidad en Chile como relatos de acción pública: un enfoque cognitivista sobre la importación

- de las ideas. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios*. Recuperado a partir de <http://nuevomundo.revues.org/11042>
- Banco Central de Chile. (1931). Sexta Memoria Anual presentada a la Superintendencia de Bancos. Memoria Chilena. Recuperado a partir de <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0016882.pdf>
- Banco Central de Chile. (2013). *Encuesta Financiera de Hogares: metodología y principales resultados EFH 2011-12*. Santiago.
- Barandiarán, E., y Hernández, L. (1999). Origins and Resolution of a Banking Crisis: Chile 1982-86. Banco Central de Chile. Recuperado a partir de <http://200.10.182.196/eng/studies/working-papers/pdf/dtbc57.pdf>
- Barbera, R. (2008). Internal Exile: Effects on Families and Communities. *Canada's Journal on Refugees*, 25(1).
- Barbera, R. (2009). Community Remembering Fear and Memory in a Chilean Shantytown. *Latin American Perspectives*, 36(5), 72–88.
- Bar-On, D. (1999). *The Indescribable and the Undiscussable: Reconstructing Human Discourse after Trauma*. Budapest: Central European Univ. Press.
- Barozet, E., y Fierro, J. (2011). Clase Media en Chile, 1990-2011: Algunas Implicancias Sociales y Políticas, Publicaciones, Oficina Chile. Fundación Konrad Adenauer. Recuperado a partir de <http://www.kas.de/chile/es/publications/29603/>
- Barrera, M. (1980). Desarrollo económico y sindicalismo en Chile: 1938-1970. *Revista Mexicana de Sociología*, 42(3), 1269–1296.
- Barrera, M. (1994). Política de ajuste y proceso de democratización en Chile: sus efectos sobre los trabajadores. *Revista Mexicana de Sociología*, 56(1), 105–129.
- Barrera, M. (1998). Las reformas económicas neoliberales y la representación de los sectores populares en Chile. *Revista Mexicana de Sociología*, 60(3), 3–20.
- Barrett: S. (1999). The Limits of Democracy: Socio-political Compromise and Regime Change in Post-Pinochet Chile. *Studies in Comparative International Development*, 34(3), 3–36.
- Bastías, M. (2013). *Sociedad civil en dictadura: Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Bastias Saavedra, M. (2010). Las paradojas de la transición. La conquista del sufragio y la desarticulación de la sociedad civil en Chile. Presentado en Independencias - Dependencias - Interdependencias VI Congreso CEISAL 2010. Recuperado a partir de <http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00503962>
- Bavel, R. van, y Sell-Trujillo, L. (2003). Understandings of Consumerism in Chile. *Journal of Consumer Culture*, 3(3), 343–362.

- Becerra, M. (1998). Macroeconomic Adjustment in Chile and the Politics of the Popular Sectors. En P. Oxhorn y G. Ducatenzeiler (Eds.), *What kind of democracy? What kind of market?: Latin America in the age of neoliberalism* (127–149). University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.
- Becker, D., y Díaz, M. (1998). The Social Process and the Transgenerational Transmission of Trauma in Chile. En Y. Danieli (Ed.), *International handbook of multigenerational legacies of trauma* (435–444). Nueva York: Plenum Press.
- Becker, D., Lira, E., Castillo, M. I., Gómez, E., y Kovalskys, J. (1990). Therapy with Victims of Political Repression in Chile: The Challenge of Social Reparation. *Journal of Social Issues*, 46(3), 133–149.
- Bellei, C. (2013). Study of socioeconomic and academic segregation in Chilean education. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 39(1), 325–345.
- Bellei, C., Valenzuela, J. P., y De los Ríos, D. (2010). Segregación Escolar en Chile. En S. Martinic y G. Elacqua (Eds.), *Fin de ciclo* (pp. 209–229). UNESCO y Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Benegas, D. (2011). Memoria del terrorismo de Estado: traumática y distribuida. Presentado en Encuentro Internacional Fecundidad de la Memoria: Desafíos del presente a los usos del pasado en América Latina, Academia Nacional de Ciencias, Universidad Nacional de Córdoba.
- Berghezan, M. C. (1997). *Experiencia desde la medicina general con familias y personas víctimas de violaciones de sus derechos humanos (1973-1990)*. Santiago: CODEPU.
- Bermeo, N. (1992). Democracy and the Lessons of Dictatorship. *Comparative Politics*, 24(3), 273–291.
- Bernasconi, A., y Rojas, F. (2004). *Informe sobre la educación superior en Chile, 1980-2003*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Bernedo, P. (2003). La prensa escrita durante la Unidad Popular y la destrucción del régimen democrático. En C. Rolle (Ed.), *1973: la vida cotidiana de un año crucial*. Santiago: Planeta.
- Berrió, A. (2006). La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. *Estudios Políticos*, 29, 219–236.
- Bettelheim, B. (1943). Individual and mass behavior in extreme situations. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 38(4), 417–452.
- Bhattacharjee, A. (2012). *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*. Createspace Independent Pub.

- BID. (1997). América Latina tras una década de reformas: Progreso económico y social. Recuperado 12 de agosto de 2013, a partir de <http://www.iadb.org/es/publicaciones/detalle,7101.html?id=38646>
- Bidaseca, K., y Giarracca, N. (2012). Ficha de Cátedra N° 10 Carrera de Sociología-UBA Cátedra Sociología Rural. Recuperado a partir de <http://www.ger-gemsa.org.ar/files/ficha%2010.pdf>
- Bitar, S. (1996). *Chile, 1970-1973: asumir la historia para construir el futuro*. Pehuén Editores Limitada.
- Blanco, M. R. (1996). El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido. *Ultima Década*, (5), 1–18.
- Bobes, V. (2002). Movimientos sociales y sociedad civil: una mirada desde América Latina. *Estudios Sociológicos*, (2), 371–386.
- Bobes, V. (2010). De la revolución a la movilización. Confluencias de la sociedad civil y la democracia en América Latina. *Nueva Sociedad*, 227, 32–50.
- Boeninger, E. (1993). La gobernabilidad: un concepto multidimensional. *Estudios Internacionales*, 27(105).
- Boeninger, E. (1997). *Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad*. Santiago: Andres Bello.
- Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización: El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. *EURE (Santiago)*, 30(90), 27–40.
- Bonanno, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive after Extremely Aversive Events? *The American Psychologist*, 59(1), 20–28.
- Boron, A. (1971). La evolución de régimen electoral y sus efectos en la representación de los intereses populares. *Revista Latinoamericana de Ciencia Política*, (3).
- Boron, A. (1975). Notas sobre las raíces históricas-estructurales de la movilización política en Chile. *Foro Internacional*, (61), 64–121.
- Bourdieu: (1991). *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- Braun-Llona, J., Braun-Llona, M., Briones, I., Díaz, J., Lüders, R., y Wagner, G. (2000). *Economía Chilena 1810-1995. Estadísticas Históricas* (Documentos de Trabajo No. 187) (p. 386). Santiago: Instituto de Economía. Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado a partir de <https://ideas.repec.org/p/ioe/doctr/187.html>
- Bravo Elizondo: (1993). *Santa María de Iquique 1907: documentos para su historia*. Santiago, Chile: Ediciones del Litoral : Distribuido por, Editorial Cuarto Propio.
- Brito, A. (1997). *Human Rights and Democratization in Latin America: Uruguay and Chile*. Oxford; Nueva York: Oxford University Press.

- Brito, A., González, C., y Aguilar: (2001). *The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Bruckmann, M., y Dos Santos, T. (2005). Movimientos sociales en América Latina: un balance histórico. En *Seminário Internacional REG GEN: Alternativas Globalizacão (8 al 13 de Octubre de 2005, Hotel Gloria, Río de Janeiro, Brasil)*. Río de Janeiro: UNESCO.
- Bultmann, I. (1995). *Democracia sin movimiento social?: sindicatos, organizaciones vecinales y movimientos de mujeres en Chile y México* (1ª ed.). Caracas: Editorial Nueva Sociedad.
- Calderón, F. (Ed.). (1986a). *Los movimientos sociales ante la crisis* (1ª ed.). Buenos Aires: Universidad de la Naciones Unidas.
- Calderón, F. (1986b). Los movimientos sociales frente a la crisis. En F. Calderón (Ed.), *Los movimientos sociales ante la crisis* (1ª ed.: 327–398). Buenos Aires: Universidad de la Naciones Unidas.
- Calderón, F. (2007). *Ciudadanía y desarrollo humano* (1ª ed.). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Calderón, F., y Jelin, E. (1987). Clases sociales y movimientos sociales en América Latina. Perspectivas y realidades. *Proposiciones, Ediciones SUR*, 14, 173–189.
- Calderón, F., Piscitelli, A., y Reyna, J. L. (1992). Social Movements: Actors, Theories, Expectations. En A. Escobar y S. Alvarez (Eds.), *The Making of New Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy*. Boulder: Westview Press.
- Camacho, D., y Menjívar, R. (1989). *Los Movimientos Populares en América Latina*. México DF: United Nations University: Siglo XXI.
- Cammack, P. (1985). Democratisation: A Review of the Issues. *Bulletin of Latin American Research*, 4(2), 39–46.
- Camou, A. (Ed.). (2001a). Estudio preliminar. En *Los desafíos de la gobernabilidad* (1ª ed.: 15–60). México DF: FLACSO.
- Camou, A. (2001b). *Gobernabilidad y democracia* (4ª ed.). México DF: Instituto Federal Electoral.
- Camou, A. (Ed.). (2001c). *Los Desafíos de la Gobernabilidad* (1ª ed.). México DF: FLACSO.
- Campero, G. (1987). *Entre la sobrevivencia y la acción política: las organizaciones de pobladores en Santiago*. Santiago, Chile: ILET.
- Campero, G., y Cortázar, R. (1988). Actores sociales y la transición a la democracia en Chile. Colección de Estudios CIEPLAN 25.

- Campero, G., y Valenzuela, J. A. (1984). *El movimiento sindical en el régimen militar chileno, 1973-1981*. Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales.
- Cancino, B., y Vergara, D. (1996). *La asociación de los privados. ONG y organismos privados de desarrollo. Santiago de Chile*. Recuperado a partir de <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=38>
- Cañas Kirby, E. (1997). *Proceso político en Chile: 1973-1990*. Andrés Bello.
- Carlin, R. E. (2006). The decline of citizen participation in electoral politics in post-authoritarian Chile. *Democratization*, 13(4), 632–651.
- Castells, M. (1973). Movimientos de pobladores y lucha de clases en Chile | Castells | Revista EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales. *Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales*, 3(7), 9–35.
- Castells, M. (1999). *La Era de la información: economía, sociedad y cultura*. Siglo XXI.
- Castillo, M. I., y Lira, E. (1993). Trauma político y memoria social. *Psicología Política*, (6), 95–116.
- Castro, S. de. (1992). *“El ladrillo”: bases de la política económica del gobierno militar chileno*. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- Cavallo, A., Salazar, M., y Sepúlveda, O. (1997). *La historia oculta del régimen militar: Chile: 1973-1988*. Santiago: Grupo Grijalbo-Mondadori.
- Cavarozzi, M. (1992a). Beyond Transitions to Democracy in Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 24(03), 665–684.
- Cavarozzi, M. (1992b). Patterns of elite negotiation and confrontation in Argentina and Chile. En J. Higley y R. Gunther (Eds.), *Elites and Democratic consolidation in Latin America and Southern Europe* (pp. 208–236). Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press.
- Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea. (2013). Barómetro CERC. A cuarenta años del golpe militar. Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea. Recuperado a partir de <http://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2013/09/Revise-el-Barometro-de-CERC-aqu%C3%AD.pdf>
- Centro de Estudios Públicos. (1988). Estudio social y de opinión pública, diciembre 1988. Centro de Estudios Públicos.
- Centro de Estudios Públicos. (1990). Estudio social y de opinión pública, diciembre 1989. Centro de Estudios Públicos.
- Centro de Estudios Públicos. (1998). Estudio social y de opinión pública, diciembre 1997 - enero 1998. Centro de Estudios Públicos.
- Centro de Estudios Públicos. (1999). Estudio social y de opinión pública, abril-mayo 1999. Centro de Estudios Públicos.

- Centro de Estudios Públicos. (2012). Estudio social y de opinión pública, julio-agosto 2012. Centro de Estudios Públicos.
- Centro de Estudios Públicos. (2014). Reporte Estudio Nacional de Opinión Pública. Noviembre 2014. Centro de Estudios Públicos Chile.
- Checa, L., Lagos Lira, C., y Cabalin, C. (2011). El caso de Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet: Participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia. *Argos*, 28(55), 13–47.
- Chorev, N. (2010). On the Origins of Neoliberalism: Political Shifts and Analytical Challenges. En K. T. Leicht y J. C. Jenkins (Eds.), *Handbook of Politics* (pp. 127–144). Springer Nueva York.
- Chovanec, D. M., y Benitez, A. (2008). The Penguin Revolution in Chile: Exploring Intergenerational Learning in Social Movements. *Journal of Contemporary Issues in Education*, 3(1).
- Chovanec, D., Smith, R., y Cooley, M. (2010). A Legacy of Women's Activism: Intergenerational Learning in the Chilean Student Movement. En D. Clover y V. Smith (Eds.), *Connected Understandings: Women, Gender and Education* (pp. 11–17). Montréal: Canadian Association for the Study of Women and Education.
- Cleuren, H. (2007). Local democracy and Participation in Post-Authoritarian Chile. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 83(83), 3–18.
- CODEPU. (1989). The effects of torture and political repression in a sample of Chilean families. *Social Science y Medicine*, 28(7), 735–740.
- CODEPU (Ed.). (1996). *Crímenes e Impunidad. La experiencia del trabajo médico, psicológico, social y jurídico en la violación del derecho a la vida. Chile 1973 -1996* (Vol. 6). Santiago: Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo.
- Cohen, J. (1985). Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements. *Social Research*, 52(4), 663–716.
- Cohen, J., y Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Massachusetts: MIT Press.
- Collier, S., y Sater, W. F. (1998). *Historia de Chile, 1808-1994*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collins, C., Hite, K., y Joignant, A. (2013). The Politics of Memory in Chile. En C. Collins, K. Hite, y A. Joignant (Eds.), *The politics of memory in Chile: from Pinochet to Bachelet* (pp. 1–30). Boulder, Colorado: First Forum Press.
- Colodro, D., Lewis, C., y Melnick, A. (2009). *Análisis del costo y características del crédito de consumo en Chile* (Tesis de licenciatura). Universidad de Chile, Santiago.
- Coloma, F., y Rojas: (2000). Evolución del mercado laboral en Chile: reformas y resultados. En F. Larraín y R. Vergara (Eds.), *La transformación económica de Chile* (492–541). Santiago: Centro de Estudios Públicos.

- Comisión Nacional del XVII Censo de Población y Vivienda. (2003). *Censo 2002. Síntesis de resultados* (p. 52). Santiago. Recuperado a partir de <http://www.ine.cl/cd2002/sintesisencensal.pdf>
- CONFECH. (2013). *#nosvemosel5 - Las imágenes prohibidas* [YouTube video]. Santiago. Recuperado a partir de http://www.youtube.com/watch?v=JRI8lhd0IMk&feature=youtube_gdata_player
- Confederación de Trabajadores de Chile. (1943). Declaración de principios y estatutos de la CTCH. Recuperado a partir de <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0023375.pdf>
- Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad (Ed.). (2008). *Encuesta percepciones sobre relaciones laborales y equidad*. Santiago: Comisión Trabajo y Equidad.
- Constable, y Valenzuela, A. (1991). *A nation of enemies: Chile under Pinochet*. Nueva York; Londres: Norton.
- Contreras, G., y Navia: (2013). Diferencias generacionales en la participación electoral en Chile, 1988-2010. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 33(2), 419–441.
- Coppedge, M. (2001). Instituciones y gobernabilidad democrática en América Latina. En A. Camou (Ed.), *Los Desafíos de la Gobernabilidad* (1ª ed.: 211–239). México DF: FLACSO.
- Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación. (1996). *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* (Vol. 1, Tomo 1). Santiago. Recuperado a partir de <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0053679.pdf>
- Corradi, J., Weiss, y Garretón, M. A. (Eds.). (1992). *Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Corvalán, L. (2002). *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile: izquierda, centro y derecha en la lucha entre los proyectos globales, 1950-2000*. Editorial Sudamericana S.A.
- Costa Bonino, L. (2000). Uruguay: Democratic Learning and Its Limits. En J. McCoy (Ed.), *Political learning and redemocratization in Latin America: do politicians learn from political crises?*. North-South Center Press [at] University of Miami.
- Couso, J., y Coddou, A. (2010). Las asignaturas pendientes de la reforma constitucional chilena. En C. Fuentes (Ed.), *En nombre del pueblo: Debate sobre el cambio constitucional en Chile* (191–215). Santiago: UDP, Fundación Böll.
- Crenzel, E. (2011). Introduction. En F. Lessa y V. Druliolle (Eds.), *The Memory of State Terrorism in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay* (1–15). Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Crozier, M., Huntington, S., y Watanuki, J. (1975). *The Crisis of Democracy*. Nueva York: Nueva York University Press.

- Cruzat, X., y Devés, E. (Eds.). (1985). *Recabarren. Escritos de Prensa* (Vol. 2). Santiago: Editorial Nuestra América y Terranova Ediciones.
- Cruz-Coke, R. (1984). *Historia electoral de Chile, 1925-1973*. Editorial Jurídica de Chile.
- Cushman y Wakefield Research Publication. (2014). *MarketBeat. Shopping Center Development Report Latin America*. Recuperado a partir de <http://www.cushmanwakefield.com/~media/global-reports/Latin%20America%20Shopping%20Center%20Development%20Report%20April%202014.pdf>
- Cuya, E. (1996). Las Comisiones de la Verdad en América Latina. Dokumentations und Informationszentrum Menschenrechte in Lateinamerika. Recuperado a partir de <http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html>
- Dagnino, E., Olvera, A., y Panfichi, A. (2006a). Introducción: Para otra lectura de la disputa por la construcción democrática en América Latina. En E. Dagnino, A. Olvera, y A. Panfichi (Eds.), *La disputa por la construcción democrática en América Latina*. México DF: CIESAS.
- Dagnino, E., Olvera, A., y Panfichi, A. (Eds.). (2006b). *La disputa por la construcción democrática en América Latina*. México DF: CIESAS.
- Danieli, Y. (Ed.). (1998a). *International handbook of multigenerational legacies of trauma*. Nueva York: Plenum Press.
- Danieli, Y. (1998b). Introduction. En Y. Danieli (Ed.), *International handbook of multigenerational legacies of trauma* (pp. 1–16). Nueva York: Plenum Press.
- Dávila, M. (2010). Tecnocracia y democracia en el Chile contemporáneo: el caso de los gobiernos de la Concertación (1990-2010). *Revista de Sociología Universidad de Chile*, (24), 199–217.
- De la Cuadra, F. (2003). Reestructuración capitalista, equidad y consolidación democrática en Chile. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 1(004).
- De la Maza, G. (2003). Sociedad civil y democracia en Chile. En A. Panfichi (Ed.), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur* (pp. 211–240). México DF: Fondo de Cultura Económica.
- De la Maza, G. (2010a). *Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas en Chile* (Tesis doctoral). Leiden University,
- De la Maza, G. (2010b). La disputa por la participación en la democracia elitista chilena. *Latin American Research Review*, 45(4), 274–297.
- De la Maza, G. (2013a). Chile: La participación restringida en una democracia elitista. Presentado en Novena Conferencia Regional de ISTR, Santiago, Chile: ISTR.
- De la Maza, G. (2013b). Participación ciudadana y construcción democrática en Chile. Balance de un cuarto de siglo. En G. De la Fuente y D. Mlynarz (Eds.), *El*

- pueblo unido... Mitos y realidades sobre la participación ciudadana en Chile* (pp. 39–63). Santiago: Ediciones Alberto Hurtado.
- Délano, M., y Traslaviña, H. (1989). *La herencia de los Chicago Boys*. Santiago: Ediciones Ornitorrinco.
- Delgado, C. V. (1996). *La masacre en la Federación Obrera de Magallanes: el movimiento obrero patagónico-fueguino hasta 1920*. Punta Arenas: Taller de Impresos Atelí.
- Della Porta, D., y Diani, M. (2006). *Social Movements: An Introduction*. Malden: Blackwell Pub.
- De Sousa Santos, B. (2001). Los nuevos movimientos sociales. *OSAL. Revista del Observatorio Social de América Latina*, (5), 177–184.
- Deutsch, A. (2007). Secuelas de la tortura en el individuo, la familia y la sociedad. En Inter-American Institute of Human Rights (Ed.), *Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio: aportes psicosociales*. (93–135). San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Deutsch, K. W. (1961). Social Mobilization and Political Development. *The American Political Science Review*, 55(3), 493–514.
- Devés, E. (1997). *Los que van a morir te saludan: historia de una masacre, Escuela Santa María, Iquique, 1907*. Lom Ediciones.
- Devés, E. (2004). La circulación de las ideas y la inserción de los cientistas económico-sociales chilenos en las redes conosureñas durante los largos 1960. *Historia (Santiago)*, 37(2), 337–366.
- Diamond, L. (1997). Repensar la Sociedad Civil. *Revista Metapolítica*, 1(2).
- Diamond, L., y Valdés-Prieto, S. (1993). Social Security Reforms in Chile. Instituto de Economía. Universidad Católica de Chile.
- Diani, M. (1992). The Concept of Social Movement. *The Sociological Review*, 40(1), 1–25.
- Díaz, A. (1994). Las transformaciones de la estructura social en Chile (apuntes para el proyecto socialista). Recuperado a partir de http://www.socialismo-chileno.org/apsjb/1994/alvaro_diaz_junio_1994.pdf
- Dirección del Trabajo. (2013). *Compendio de Series Estadísticas 1990-2012*. Santiago: Dirección del Trabajo.
- Domínguez, J. (Ed.). (1997). *Technopols: Freeing Politics and Markets in Latin America in The 1990s*. Penn State Press.
- Donoso, S. (2013a). Dynamics of Change in Chile: Explaining the Emergence of the 2006 Pingüino Movement. *Journal of Latin American Studies*, 45(01), 1–29.
- Donoso, S. (2013b). *Reconstructing collective action in the neoliberal era: The emergence and political impact of social movements in Chile since 1990* (Tesis doctoral). University of Oxford, Oxford.

- Donoso, S., y Gómez Bruera, H. F. (2014). Governability Strategies of the “Moderate” Left in Latin America: Comparing the PT in Brazil and the Concertación in Chile. Presentado en XXXII LASA Conference, Chicago.
- Drake: W. (2003). El movimiento obrero en Chile: de la Unidad Popular a la Concertación. *Revista de Ciencia Política*, XXIII(2), 148–158.
- Drake: W., y Jaksic, I. (1999). *El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa*. Lom Ediciones.
- Ducatenzeiler, G., y Oxhorn: (1994). Democracia, autoritarismo y el problema de la gobernabilidad en América Latina. *Desarrollo Económico*, 34(133), 31–52.
- Durkheim, É. (1987). *La división del trabajo social*. Ediciones AKAL.
- Duvignaud, J. (1969). Introduction. En *Journal sociologique*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Earl, J. (2011). Political Repression: Iron Fists, Velvet Gloves, and Diffuse Control. *Annual Review of Sociology*, 37(1), 261–284.
- Echeverría, F. (2014). *Endudamiento y pobreza en Chile*. Santiago: Idea País.
- Eckstein, S. (Ed.). (1989). *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*. Berkeley: University of California Press.
- Edwards, B., y Foley, M. (1998). Beyond Tocqueville: civil society and the social capital debate in comparative perspective: Editor’s introduction. *American Behavioral Scientist*, 42(5), 5–20.
- Elacqua, G. (2009). For-profit schooling and the politics of education reform in Chile: When ideology trumps evidence. Centro de Políticas Comparadas en Educación.
- El Chileno. (1908, enero). Los sucesos de Iquique. *El Chileno*. Santiago.
- Elter, D. (1999). *Sistema de A.F.P. chileno: injusticia de un modelo*. Lom Ediciones.
- Ensalaco, M. (2000). *Chile under Pinochet: recovering the truth*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Ensalaco, M. (2005). Pinochet: A Study in Impunity. En S. Nagy y F. I. Leiva (Eds.), *Democracy in Chile: The Legacy of September 11, 1973* (116–130). Sussex: Sussex Academic Press.
- Errázuriz, T. (2014). La administración de Ibáñez del Campo y el impulso a la circulación moderna (Santiago, 1927–1931). *Historia (Santiago)*, 47(2), 313–354.
- Escobar, A., y Alvarez, S. (1992). *The Making of New Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy*. Boulder: Westview Press.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

- Espinoza, V. (2004). De la política social a la participación ciudadana en un nuevo contrato de ciudadanía. *Política*, (043), 149–183.
- Espinoza, V. (2012). El reclamo chileno contra la desigualdad de ingresos. Explicaciones, justificaciones y relatos. *Izquierdas.cl*, 1–25.
- Espinoza, V., y Barozet, E. (2008). *¿De qué hablamos cuando decimos “clase media”? Perspectivas sobre el caso chileno*. Santiago: Expansiva.
- Espinoza, V., Barozet, E., y Méndez, M. L. (2013). Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal maduro: el caso de Chile. *Revista Laboratorio*, (25), 169–191.
- Espinoza, V., Rojas, y Ortiz, M. L. (1999). *Derechos humanos: sus huellas en el tiempo: una experiencia de trabajo en derechos humanos y salud mental en una zona rural del sur de Chile*. CODEPU.
- Esteve, M. (2010). Aportes para el estudio de los movimientos sociales en América Latina: un estado de la cuestión. *IDeAS*, 4(2), 1–35.
- Etzioni, A. (1968). Mobilization as a Macrosociological Conception. *The British Journal of Sociology*, 19(3), 243–253.
- Ewen, S. (1999). *All Consuming Images: The Politics of Style in Contemporary Culture*. Basic Books.
- Eyerman, R., y Jamison, A. (1991). *Social movements: a cognitive approach*. University Park, Pa: Pennsylvania State Univ. Press.
- Faúndez, X., y Cornejo, M. (2010). Aproximaciones al estudio de la transmisión transgeneracional del trauma psicosocial. *Revista de Psicología*, 19(2), 31–54.
- Fazio Vengoa, H. (1994). La democratización chilena en una perspectiva histórica. *Análisis Político*, (22).
- Fernández, A. (2004). Neoliberal Restructuring The Origin and Formation of Economic Groups in Chile. *Journal of Developing Societies*, 20(3-4), 189–206.
- Fernández Darraz, E. (2003). *Estado y sociedad en Chile, 1891-1931: el Estado excluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad*. Santiago: Lom Ediciones.
- Ffrench-Davis, R. (2003). Chile, entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. *Nueva Sociedad*, (183), 70–90.
- Figueroa, C. (2008). Protesta popular y procesos políticos en la América Latina actual. En M. López Maya, N. Iñigo, y P. Calveiro (Eds.), *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (1ª ed.: 109–126). Buenos Aires: Clacso.
- Flisfisch, Á. (1989). Gobernabilidad y consolidación democrática: sugerencias para la discusión. *Revista Mexicana de Sociología*, 51(3), 113–133.

- Flores, D. (2013). El modelo de representación en Chile: expectativas, realización y crisis. Presentado en Novena Conferencia Regional de ISTR para América Latina y el Caribe, Santiago: ISTR para América Latina y el Caribe.
- Flores, D. (2014). *Representación política y democracia en Chile, 2005-2013* (Tesis doctoral). Universidad de Leiden, Leiden.
- Foweraker, J. (1995). *Theorizing Social Movements*. Londres: Pluto Press.
- Foweraker, J. (2001). Grassroots Movements and Political Activism in Latin America: A Critical Comparison of Chile and Brazil. *Journal of Latin American Studies*, 33(04), 839–865.
- Foweraker, J., y Landman, T. (1999). Individual Rights and Social Movements: A Comparative and Statistical Inquiry. *British Journal of Political Science*, 29(2), 291–322.
- Frank, V. (2005). Integration without Real Participation. The Chilen Labour Movement. En S. Nagy y F. Leiva (Eds.), *Democracy in Chile: the legacy of September 11, 1973* (59–72). Brighton; Portland (Or.): Sussex Academic Press.
- Freeman, J., y Johnson, V. L. (1999). *Waves of protest: social movements since the sixties*. Rowman y Littlefield.
- Freud, S. (1931). *Obras Completas. Volumen 21*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (2001a). Estudios sobre la histeria (1893-1895). En *Obras Completas* (Vol. 2). Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Freud, S. (2001b). Presentación autobiográfica, inhibición, síntoma y angustia ¿pueden los legos ejercer el análisis? y otras obras (1925-1926). En *Obras Completas* (Vol. 20). Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Frías: (2008). *Los desafíos del sindicalismo en los inicios del siglo XXI*. Buenos Aires: CLACSO.
- Friedman, M. (1975). *Bases para un desarrollo económico*. Santiago de Chile: Fundación de Estudios Económicos BHC.
- Friedman, M. (2002). *Capitalism and Freedom: Fortieth Anniversary Edition*. University of Chicago Press.
- Fuentes, C. (2010). Elites, opinión pública y cambio constitucional. En C. Fuentes (Ed.), *En nombre del pueblo: Debate sobre el cambio constitucional en Chile* (45–84). Santiago: UDP, Fundación Böll.
- Fuentes, C. (2012). *El pacto: poder, constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010)*. Santiago: Ediciones UDP.
- Funk, R. (2004). *Renovation and Continuity: The Transition to Democracy in Chile Revised*. Londres: University of London.

- Gárate, M. (2012). *La revolución capitalista de Chile: 1973-2003*. Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Garcés, M. (2003a). *Crisis social y motines populares en el 1900*. LOM Ediciones.
- Garcés, M. (2003b). Los movimientos sociales en América Latina en el actual contexto. Escuela de Trabajo Social Universidad Nacional de Córdoba. Recuperado a partir de <http://www.flacsoandes.org/web/imagesFTP/1263400166.Garces.pdf>
- Garcés, M. (2004a). Los movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas. *Política*, 43, 13–33.
- Garcés, M. (2004b). Marco teórico: ciudadanía, participación, movimientos sociales y democracia. En M. do C. Albuquerque (Ed.), *La construcción democrática desde abajo en el Cono Sur* (9–42). São Paulo: Instituto Polis.
- Garcés, M. (2012). *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales de América Latina y Chile*. Santiago: Lom Ediciones.
- Garcés, M., y De la Maza, G. (1985). *La explosión de las mayorías: protesta nacional 1983-1984*. Santiago: Educación y Comunicación.
- Garcés, M., y Rodríguez, M. A. (2004). Participación social en Chile: Una visión histórica de la participación como conquista social y oferta estatal en Chile. En M. Albuquerque (Ed.), *La construcción democrática desde abajo en el Cono Sur* (pp. 115–134). São Paulo: Instituto Polis.
- Garcés, M., y Valdés, A. (1999). Estado del arte de la participación ciudadana en Chile. Recuperado a partir de <http://www.innosocialafta.cl/documentos/EstadodelartedelaparticipacionciudadanaenChile.pdf>
- García, C. (2006). El peso de la memoria en los inicios de la transición a la democracia en Chile (1987-1988). *Historia (Santiago)*, 39(2), 431–475.
- García Canclini, N. (1995). *Consumidores y Ciudadanos: Conflictos Multiculturales de la Globalización*. México, D.F.: Grijalbo.
- Garretón, M. A. (1983). *El proceso político chileno*. Santiago: FLACSO.
- Garretón, M. A. (1988). El miedo y las dictaduras militares. *Revista Mensaje*, (371).
- Garretón, M. A. (1991). Política, cultura y sociedad en la transición democrática. *Nueva sociedad*, (114), 43–49.
- Garretón, M. A. (1993). Aprendizaje y gobernabilidad en la redemocratización chilena. *Nueva Sociedad*, 128, 148–157.
- Garretón, M. A. (1996). Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico. *Excerpta*, (2), 1–17.

- Garretón, M. A. (2001). *Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina* (Vol. 56). Santiago.
- Garretón, M. A. (2002). La transformación de la acción colectiva en América Latina. *Revista CEPAL*, 76, 7–24.
- Garretón, M. A. (2003). Memoria y proyecto de país. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 23(2), 215–230.
- Garretón, M. A. (2007). *Del postpinochetismo a la sociedad democrática: Globalización y política en el bicentenario*. Santiago: Debate.
- Garretón, M. A. (2009). Transformación de la matriz sociopolítica y desarrollo en Chile. *Diplomacia, Estrategia y Política*, (9), 45–71.
- Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado*. Santiago: CLACSO. Editorial Arcis.
- Garretón, M. A., y Espinosa, M. (2000). Chile: Political Learning and the Reconstruction of Democracy. En J. McCoy (Ed.), *Political learning and redemocratization in Latin America: do politicians learn from political crises?* (pp. 73–98). Miami: North-South Center Press [at] University of Miami.
- Garretón, M. A., y Garretón, R. (2010). La Democracia incompleta en Chile: La realidad en tras los rankings internacionales. *Revista de Ciencia Política*, (1), 115–148.
- Gaudichaud, F., y Breña, M. O. (2009). Popular Power, Oral History, and Collective Memory in Contemporary Chile. *Latin American Perspectives*, 36(5), 58–71.
- Gazmuri, C. (2014). *Historia de Chile 1891-1994: política, economía, sociedad, cultura, vida privada, episodios*. Santiago: RIL Editores.
- Gedi, N., y Elam, Y. (1996). Collective Memory--What Is It? *History and Memory*, 8(1), 30.
- Genevieve, J. (2004). *If Memory Serves: Constructing the Democratic Project in Chile* (Tesis doctoral). Toronto: University of Toronto.
- Gentes, I. (2006). Modernización del Estado y gestión pública participativa en Chile: alcances, obstáculos y perspectivas. *América Latina Hoy*, 42, 61–91.
- Germani, G. (1981). *The Sociology of Modernization: Studies on Its Historical and Theoretical Aspects With Special Regard to the Latin American Case*. Transaction Publishers.
- Giarracca, N. (2004). Introducción. América Latina, nuevas ruralidades, viejas y nuevas acciones colectivas. En N. Giarraca y B. Levy (Eds.), *Ruralidades latinoamericanas. Identidades y luchas sociales* (pp. 13–39). Buenos Aires: Clacso.
- Gigli, J. M. (1999). Neoliberalismo y ajuste estructural en América Latina. *Revista del Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo*, 1(1).

- Gill, A. (1999). Government Regulation, Social Anomie and Protestant Growth in Latin America a Cross-National Analysis. *Rationality and Society*, 11(3), 287–316.
- Giménez, G. (1994). Los movimientos sociales. Problemas teórico-metodológicos. *Revista mexicana de sociología*, 3–14.
- Giorgi, V. (1995). Represión y olvido, el terrorismo de Estado dos décadas después. En M. del R. Arregui y Giorgi, Victor (Eds.), *Represión y olvido: efectos psicológicos y sociales de la violencia política dos décadas después* (53–66). Montevideo: Roca Viva Editorial : SERSOC.
- Gobierno de Chile. (1974). Declaración de principios del gobierno de Chile. Archivo Chile, Centro Estudios Miguel Enríquez. Recuperado a partir de http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdo_cjm0005.pdf
- Godoy, O. (1999). La transición chilena a la democracia: pactada. *Estudios Públicos*, (74), 80–106.
- Goff, J. L. (1991). *El origen de la memoria: el tiempo como imaginario*. Ediciones Paidós Iberica, S.A.
- Goicovic, I. (2006). La refundación del capitalismo y la transición democrática en Chile (1973-2004). *Historia Actual Online*, (10), 7–16.
- Gómez Bruera, H. F. (2013). *Lula, the Workers' Party and the Governability Dilemma in Brazil*. Nueva York: Routledge.
- Gómez Leyton, J. C. (2008). Política y ciudadanía en una sociedad neoliberal avanzada, Chile 1990-2007. *Cuadernos del CENDES*, Universidad Central de Venezuela, 25(067).
- González, M. (2003). Treinta años de movimientos sociales en Chile: revisión histórica y programa de investigación futura. *Persona y sociedad*, 17(3), 249–261.
- González, P., Mizala, A., y Romaguera: (2004). Vouchers, Inequalities and the Chilean Experience. Centro de Economía Aplicada Universidad de Chile. Recuperado a partir de https://www.academia.edu/3061326/Recursos_diferenciados_a_la_educaci%C3%B3n_subvencionada_en_Chile
- González, R. (1999). Relaciones ONGs-Estado en Chile: aportes para un balance de la década del 90 (una visión desde el mundo no gubernamental). Presentado en II Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de ISTR, Santiago: ISTR.
- González, S. (1998). Presentación. En P. Artaza (Ed.), *A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique* (pp. 7–10). Santiago: Lom Ediciones.

- González, S. (2012). Actores subnacionales en Chile: el caso de Arica y Parinacota ¿gobierno no central globalizado o región perdedora? En M. Artaza y C. Ross (Eds.), *La política exterior de Chile, 1990-2009. Del aislamiento a la integración global* (263–312). Santiago: RIL Editores.
- Gramsci, A. (1986). *Cuadernos de la cárcel*. México: Ediciones Era.
- Greaves, E. (2001). Political Parties and the Rise and Decline of Popular Civil Society (II): The Emergence of a Subaltern Counterpublic in Chile 1950-1973. Presentado en Latin American Studies Association, Washington D.C.
- Greve, B. (2014). *Welfare and the Welfare State: Present and Future*. Nueva York: Routledge.
- Grez, S. (2000). Transición en las formas de lucha: motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907). *Historia (Santiago)*, 33, 141–225.
- Gruninger, S. (2003). Las ONGs durante la transición chilena: Un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal. *Revista MAD*, (9).
- Guerrero, M. (2006). El conjuro de los movimientos sociales en el Chile neoliberal. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 12(2), 147–156.
- Guichard, E., y Henríquez, G. (2011). Memoria histórica en Chile: una perspectiva intergeneracional desde Concepción. *Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (135), 3–25.
- Guillén, H. (2007). De la orden cepalina del desarrollo al neoestructuralismo en América Latina. *Comercio exterior*, 57(4), 295–313.
- Guzmán-Concha, C. (2014). Explicando las movilizaciones estudiantiles de 2011. Una perspectiva desde la sociología política. Presentado en Congreso COES, Legitimidad y Acción Colectiva, Santiago.
- Habermas, J. (1988). *Ensayos políticos*. Barcelona: Península.
- Halbwachs, M. (1980). *The collective memory*. Nueva York: Harper & Row.
- Halpern, P (2002). *Los nuevos chilenos y la batalla por sus preferencias*. Santiago: Planeta.
- Han, C. (2004). The Work of Indebtedness: The Traumatic Present of Late Capitalist Chile. *Culture, Medicine and Psychiatry*, 28(2), 169–187.
- Han, C. (2012). *Life in Debt: Times of Care and Violence in Neoliberal Chile*. Berkeley: University of California Press.
- Hardy, C. (1987). *Organizarse para vivir: pobreza urbana y organización popular*. Santiago: Programa de Economía del Trabajo P.E.T.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Nueva York: Oxford University Press.

- Henríquez, M. E. (1987). Reforma Agraria en Chile. *Revista de Geografía Norte Grande*, (14), 61–65.
- Hevia, F. (2006). Participación ciudadana institucionalizada: análisis de los marcos legales de la participación en América Latina. En E. Dagnino, A. Olvera, y A. Panfichi (Eds.), *La disputa por la construcción democrática en América Latina* (pp. 367–392). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica; Universidad Veracruzana; CIESAS.
- Higley, J., y Gunther, R. (Eds.). (1992). *Elites and Democratic consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge; Nueva York: Cambridge University Press.
- Hipsher, P. (1996). Democratization and the Decline of Urban Social Movements in Chile and Spain. *Comparative Politics*, 28(3), 273–297.
- Hipsher, P. (1998). Democratic Transitions as Protest Cycles Social Movement Dynamics in Democratizing Latin America. En D. S. Meyer y S. G. Tarrow (Eds.), *The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century* (pp. 153–172). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Hirsch, M. (2008). The Generation of Postmemory. *Poetics Today*, 29(1), 103–128.
- Hirschman, A. (1960). *Ideologies of Economic Development in Latin America*. New York: Committee for Economic Development.
- Hite, K. (2000). *When the Romance Ended: Leaders of the Chilean Left, 1968-1998*. Nueva York: Columbia University Press.
- Hite, K. (2007). La superación de los silencios oficiales en el Chile posautoritario. *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Recuperado a partir de <http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/hite.pdf>
- Hite, K. (2013). *Politics and the Art of Commemoration: Memorials to Struggle in Latin America and Spain*. Nueva York: Routledge.
- Hobsbawm, E., y Ranger, T. O. (1992). *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Hodgkinson, V. A., y Foley, M. W. (Eds.) (2009). *The Civil Society Reader*. Hanover: University Press of New England.
- Huber, E., Pribble, J., y Stephens, J. (2010). The Chilean Left in Power: Achievements, Failures, and Omissions. En K. Weyland, R. L. Madrid, y W. Hunter (Eds.), *Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings* (77–97). Nueva York: Cambridge University Press.
- Humphrey, M. (2003). *The Politics of Atrocity and Reconciliation: From Terror to Trauma*. Londres: Routledge.
- Huneus, C. (1999). Problemas de institucionalización de los partidos políticos en una nueva democracia. *Revista Ciencia Política*, 20(1), 31–60.

- Huneus, C. (2000). *El régimen de Pinochet*. Santiago: Editorial Sudamericana S.A.
- Huneus, C. (2014). *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*. Santiago: Taurus
- Hunt, N. C. (2010). *Memory, War and Trauma*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huyssen, A. (2003). *Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Ibarra: (2000). Los estudios sobre los movimientos sociales: estado de la cuestión. *Revista Española de Ciencia Política*, 1(2), 271–290.
- Iglesias, M. (2005). Trauma social y memoria colectiva. *Historia Actual Online*, 0(6), 169–175.
- ILAS (Ed.). (1989). *Derechos Humanos: Todo es según el dolor con que se mira*. Santiago: Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.
- Inglehart, R. F. (2008). Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. *West European Politics*, 31(1-2), 130–146.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2007). *Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio: aportes psicosociales*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Isla Monsalve, P. (2012). *Orden y patria es nuestro lema: construcción de alteridad en la gramática del legalismo y del enemigo interno en Chile* (Tesis doctoral). Universidad de Leiden Leiden. Recuperado a partir de <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/19982>
- Izquierdo, G. (1990). *Historia de Chile* (Vol. 3). Santiago: Andres Bello.
- Jamison, A. (2006). Social movements and science: Cultural appropriations of cognitive praxis. *Science as Culture*, 15(1), 45–59.
- Jara, C. (2014). Democratic Legitimacy under Strain? Declining Political Support and Mass Demonstrations in Chile. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 97.
- Jelin, E. (1990). *Women and social change in Latin America*. United Nations Research Institute for Social Development.
- Jelin, E. (2001). Exclusión, memorias y luchas políticas. En *Estudios Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización* (91–110). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Jelin, E. (2002a). ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? En *Los trabajos de la memoria* (17–39). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.
- Jelin, E. (2002b). *State repression and the struggles for memory*. Londres: Latin America Bureau.

- Jelin, E. (2003). *Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales*. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social.
- Jelin, E., y Hershberg, E. (1996). Introduction. En E. Jelin y E. Hershberg (Eds.), *Constructing democracy: human rights, citizenship, and society in Latin America* (1–10). Boulder, Colorado: Westview Press.
- Jelin, E., y Langland, V. (2003). *Monumentos, memoriales y marcas territoriales*. Madrid: Siglo XXI de España : Social Science Research Council.
- Jocelyn-Holt, A. (1998). *El Chile perplejo: Del avanzar sin transar al transar sin parar*. Santiago: Debolsillo.
- Joignant, A. (2003). La democracia de la indiferencia. Despolitización, desencanto y malestar en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En Ó. Muñoz y C. Stefoni (Eds.), *El período del Presidente Frei Ruiz-Tagle: reflexiones sobre el segundo gobierno concertacionista* (89–106). Santiago: Editorial Universitaria.
- Keilson, H. (1992). *Sequential traumatization in children a clinical and statistical follow-up study on the fate of the Jewish war orphans in the Netherlands*. Jerusalem: Magnes Press.
- Keller, C. (1931). *La eterna crisis chilena*. Santiago: Editorial Nascimento.
- Kellermann, N. (2001). Transmission of Holocaust trauma. An integrative view. *Psychiatry*, 64(3), 256–267.
- Khan, M.R. (2005). El concepto de trauma acumulativo. *Revista de psicoanálisis*, (44), 117–137.
- Kirkwood, J. (1986). *Ser política en Chile: las feministas y los partidos*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Kooning, K., y Kruijt, D. (1999). Introduction: Violence and Fear in Latin America. En K. Koonings y D. Kruijt (Eds.), *Societies of Fear: the Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America* (1–30). Londres: Zed Books.
- Koonings, K., y Kruijt, D. (Eds.). (1999). *Societies of Fear: the Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America*. Londres: Zed Books.
- Kordon, D., y Edelman, L. (1986). *Efectos psicológicos de la represión política*. Buenos Aires: Sudamericana/Planeta.
- Korpi, W., y Palme, J. (1998). The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries. *American Sociological Review*, 63(5), 661–687.
- Kovalskys, J. (2006). Trauma social, modernidad e identidades sustraídas: nuevas formas de acción social. *Psyke (Santiago)*, 15(2), 13–24.

- Lagos, M., Vital, V., Brinkmann, B., y Scapucio, M. (Eds.). (2009). *Daño transgeneracional: Consecuencias de la represión política en el Cono Sur*. Santiago: LOM Ed.
- Lagos, R. (1999). Para crecer con igualdad: programa de gobierno. Editorial no identificada. Recuperado a partir de http://www.archivochile.com/Gobiernos/gob_rlagos/de/GOBdelagos0002.pdf
- Lambrecht, K. (2011). *La Distribución del Ingreso en Chile: 1960-2000 Análisis del entorno*. Universidad de Chile, Santiago. Recuperado a partir de www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/ec-lambrecht_p/pdfAmont/ec-lambrecht_p.pdf
- Landsberger, H. A., y McDaniel, T. (1976). Hypermobilization in Chile, 1970-1973. *World Politics*, 28(4), 502-541.
- Larraín, F., y Vergara, R. (2000). Chile en pos del desarrollo: veinticinco años de transformaciones económicas. En F. Larraín y R. Vergara (Eds.), *La transformación económica de Chile* (3-26). Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- Larraín, J. (1989). *Theories of Development: Capitalism, Colonialism, and Dependency*. Polity Press.
- Larrañaga, O. (1994). Pobreza, crecimiento y desigualdad: Chile 1987-1992. *Revista de Análisis Económico*, (2), 69-92.
- Larrañaga, O. (1995). Descentralización de la educación en Chile: una evaluación económica. *Estudios Públicos : revista de políticas públicas*, (60), 243-286.
- Larrañaga, O. (2001). Distribución de Ingresos en Chile: 1958-2001. Departamento de Economía Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad de Chile. Recuperado a partir de <http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/84039632-4684-4c2e-8a54-49475e2e3edb.pdf>
- Larrañaga, O. (2009). *Inequality, Poverty and Social Policy: Recent Trends in Chile* (OECD Social, Employment and Migration Working Papers). Chile: OECD, Employment, Labour and Social Affairs Committee.
- Lavabre, M.-C. (2007). Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria. *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Recuperado a partir de <http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/ricoeur.pdf>
- Lavín, J. (1987). *Chile : revolución silenciosa*. Santiago: Zig-Zag.
- Lechner, N. (1992). Some People Die of Fear: Fear as a Political Problem. En J. E. Corradi: Weiss, y M. A. Garretón (Eds.), *Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America* (14-26). Berkeley: University of California Press.

- Lechner, N. (1994). La (problemática) invocación de la sociedad civil. *Perfiles latinoamericanos: revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México*, (5), 131–144.
- Lechner, N. (1998). The Transformations of Politics. En F. Agüero y J. Stark (Eds.), *Fault Lines of Democracy in Post-transition Latin America* (21–39). Miami: North-South Center Press/University of Miami.
- Lechner, N. (2002). *Las sombras del mañana: la dimensión subjetiva de la política*. Santiago: Lom Ediciones.
- Lechner, N., y Güell: (1998). Construcción social de las memorias en la transición chilena. Presentado en Social Sciences Research Council: Memorias Colectivas de la represión en el Cono Sur, Montevideo.
- Lechner, N., y Güell: (1998). Construcción social de las memorias en la transición chilena. Presentado en Memorias colectivas de la represión en el Cono Sur, Montevideo.
- Leiva, F. (2005). From Pinochet's State Terrorism to the "Politics of Participation". En S. Nagy y F. Leiva (Eds.), *Democracy in Chile: the legacy of September 11, 1973* (73–87). Brighton; Portland (Or.): Sussex Academic Press.
- Lifschitz, J. (2012). La memoria social y la memoria política. *Aletheia*, 3(5), 1–24.
- Lillo, N., y Landerretche, O. (2011). Percepciones sobre movilidad social y meritocracia: un estudio para Chile usando la Encuesta de Trabajo y Equidad. *Serie Documentos de Trabajo*, (331), 1–37.
- Linz, J., y Stepan, A. (2011). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (2ª ed.). Baltimore: JHU Press.
- Lira, E. (2010). Trauma, duelo, reparación y memoria. *Revista de Estudios Sociales (Bogotá)*, (36), 14–28.
- Lira, E. (2011). Chile: Dilemmas of Memory. En F. Lessa y V. Druliolle (Eds.), *The Memory of State Terrorism in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay* (107–132). Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Lira, E., Becker, D., y Castillo, M. I. (1989). Psicoterapia de víctimas de represión política bajo dictadura: un desafío terapéutico, teórico y político. En ILAS (Ed.), *Derechos Humanos: Todo es según el dolor con que se mira* (18–41). Santiago: Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.
- Lira, E., y Castillo, M. I. (1991). *Psicología de la amenaza política y del miedo*. Santiago, Chile: Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.

- Lira, E., Loveman, B., y Mifsud, T. (2001). *Historia, política y ética de la verdad en Chile: 1891 - 2001. Reflexiones sobre la paz social y la impunidad*. Santiago: LOM Ediciones.
- Llanos, C. (2012). El gobierno de Allende y la UP frente al “Poder Popular” 1970-1972: Las bases radicalizadas y su dinámica. *História Unisinos*, 16(1), 28–42.
- López Maya, M. (1999). *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.
- López, R., Figueroa, E., y Gutiérrez: (2013). *La “parte del león”: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile* (Working Paper). Santiago: University of Chile, Department of Economics. Recuperado a partir de <http://econpapers.repec.org/paper/udcwpaper/wp379.htm>
- Loveman, B. (1994). Las ONG chilenas: Su papel en la transición a la democracia. En C. A. Reilly (Ed.), *Nuevas políticas urbanas las ONG y los gobiernos municipales en la democratización latinoamericana*. Arlington: Fundación Interamericana.
- Loveman, B., y Lira, E. (2000). *Las ardientes cenizas del olvido: vía chilena de reconciliación política 1932 - 1994*. Santiago: LOM Ediciones.
- Loveman, B., y Lira, E. (2002). *El espejismo de la reconciliación política: Chile 1990-2002*. Santiago: LOM Ediciones.
- Loveman, M. (1998). High-Risk Collective Action: Defending Human Rights in Chile, Uruguay, and Argentina. *American Journal of Sociology*, 104(2), 477–525.
- Lovera, D. (2010). Derechos sociales en la Constitución del 80 (y de 1989 y de 2005). En C. Fuentes (Ed.), *En nombre del pueblo: Debate sobre el cambio constitucional en Chile* (217–246). Santiago: UDP, Fundación Böll.
- Luna, J. P., y Zechmeister, E. (2010). Cultura política de la democracia en Chile, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles. Vanderbilt University. Recuperado a partir de <http://www.vanderbilt.edu/lapop/chile/Chile-2010-cultura-politica.pdf>
- Madrid, S. (2005). Políticos de ayer, apáticos de hoy? Generaciones, juventud y política en Chile. En C. Fuentes y A. Villar (Eds.), *Voto ciudadano. Debate sobre la inscripción electoral* (45–84). FLACSO-Chile.
- Manzi, J., Helsper, E., Ruiz, S., Krause, M., y Kronmüller, E. (2003). El pasado que nos pesa: La memoria colectiva del 11 de septiembre de 1973. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 23(2), 177–214.
- Marambio, A. (2011). Bancarización, crédito y endeudamiento en los sectores medios chilenos: Tácticas de acceso, diferenciación social y el espejismo de la modernidad. Recuperado a partir de <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112609>

- Marcel, M., y Solimano, A. (1994). The Distribution of Income and Economic Adjustment. En B. Bosworth, D. Rudiger, y R. Labán (Eds.), *The Chilean Economy, Policy Lessons and Challenges*. Washington, DC: The Brookings Institution.
- Márquez, R., y Moreno, C. (2007). Desarrollo sin ciudadanos: El “modelo” chileno de los últimos veinte años. En F. Calderón (Ed.), *Ciudadanía y desarrollo humano: cuadernos de gobernabilidad democrática 1* (275–298). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Martín-Baró, I. (1989). Democracia y reparación. En ILAS (Ed.), *Derechos Humanos: Todo es según el dolor con que se mira* (10–12). Santiago: Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.
- Martín-Baró, I. (1990). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador. En I. Martín-Baró (Ed.), *Psicología Social de la Guerra: Trauma y Terapia*. San Salvador: UCA Editores.
- Martínez de Bringas, A. (2006). De la ausencia de recuerdos y otros olvidos intencionados. Una lectura política de los secuestros de la memoria. En F. Gómez Isa (Ed.), *El derecho a la memoria* (pp. 267–294). Bilbao: Alberdania.
- Martínez, J., y Díaz, A. (1996). *Chile, the Great Transformation*. Geneva: Brookings Institution Press.
- Martínez, J., y León, A. (2001). *La estratificación social chilena hacia fines del siglo XX*. Santiago: CEPAL. División de Desarrollo Social.
- Mayol, A. (2012). *El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo*. Santiago: Lom Ediciones.
- Mayol, A., y Azócar, C. (2011). Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso “Chile 2011”. *Polis. Revista Latinoamericana*, (30). Recuperado a partir de <http://polis.revues.org/2218>
- McAdam, D., McCarthy, J. D., y Zald, M. N. (Eds.). (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McAdam, D., McCarthy, J., y Zald, M. (1988). Social Movements. En N. J. Smelser (Ed.), *Handbook of Sociology*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- McAdam, D., Tarrow, S., y Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mella, M. (2014). Transición y democratización durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1993): la estrategia de las cuerdas separadas. *Revista Enfoques*, 12(21), 11–44.

- Meller, P. (1999). Pobreza y distribución del ingreso en Chile (década del 90). En P. W. Drake y I. Jaksic (Eds.), *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa* (41–64). Santiago: LOM.
- Melucci, A. (1989). *Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary society*. (J. Keane y P. Mier, Eds.). Londres: Hutchinson Radius.
- Melucci, A. (1994). Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales. *Zona Abierta*, 69, 163–179.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Meschkat, K. (2003). Una Crítica a la Ideología de la Sociedad Civil. *Revista Nómadas, Universidad Complutense de Madrid*, 1.
- Meza, N. (2015). México, el país con más centros comerciales en AL. *Forbes México*. México, D.F. Recuperado a partir de <http://www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-con-mas-centros-comerciales-en-al/>
- Miller, F. (1999). The End of SDS and the Emergence of Weatherman: Demise through Success. En J. Freeman y V. L. Johnson (Eds.), *Waves of protest: social movements since the sixties* (303–324). Lanham: Rowman y Littlefield.
- Miller, T. (1997). Copper Workers, Organized Labor, and Popular Protest under Military Rule in Chile, 1973–1986. *International Labor and Working-Class History*, 52, 106–133.
- Milos, P. (2008). *Frente popular en Chile: su configuración, 1935-1938*. Santiago: Lom Ediciones.
- Milos, P. (2013). *Chile 1972: Desde “El Arrayán” al “paro de octubre”*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Ministerio de Educación. (2015). *Compendio Histórico de Educación Superior*. Santiago: Ministerio de Educación. Recuperado a partir de <http://www.mifuturo.cl/index.php/estudios/estructura-compendio>
- Mira, A. (2011). Crisis de representatividad y estallido social. *Polis. Revista Latinoamericana*, (30). Recuperado a partir de <http://polis.revues.org/2232>
- Misztal, B. A. (2003). *Theories of Social Remembering*. Maidenhead, Berkshire, England; Philadelphia, PA: Open University Press.
- Mizala, A., y Romaguera: (2001). La legislación laboral y el mercado del trabajo: 1975-2000. En R. Ffrench-Davis y B. Stallings (Eds.), *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973* (201–329). Santiago: LOM CEPAL.
- Modonesi, M. (2012). Entre desmovilización y removilización. Consideraciones sobre el estado de las luchas populares en el marco de los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos durante 2011. En *Anuario del Conflicto Social*

2011. Barcelona: Universidad de Barcelona. Recuperado a partir de <http://www.observatoridelconflicte.org/es/%C3%ADndice-anuario-2011#>
- Mönckeberg, M. O. (2013). *Con fines de lucro. La escandalosa historia de las universidades privadas en Chile*. Santiago: Penguin Random House.
- Monedero, J. C. (2009). *El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión* (1ª ed.). Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Montecinos, E. (2007). Los límites de la modernización municipal para profundizar la participación ciudadana en Chile ¿Es la gobernanza de proximidad una alternativa? *Gestión y Política Pública*, XVI(2), 319–351.
- Montecinos, V. (1998). *Economists Politics and the State: Chile 1985-1994*. Amsterdam: CEDLA.
- Montecinos, V. (2005). Notas sobre la evolución e influencia de la tecnocracia económica en Chile. En J. Estrada (Ed.), *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina* (151–174). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Moreno, M. (2006). *Emergencia del Paradigma de Gobernabilidad en América Latina* (Tesis doctoral). Universidad de Leiden, Leiden.
- Motta, S. (2005). *The Chilean third way: from anti-capitalism to neoliberalism in the Chilean Socialist Party*. Londres: University of London.
- Motta, S. (2008). The Chilean Socialist Party (PSCh): Constructing Consent and Disarticulating Dissent to Neo-liberal Hegemony in Chile. *The British Journal of Politics & International Relations*, 10(2), 303–327.
- Moulian, T. (1998). *El Consumo me consume*. Santiago: Lom Ediciones.
- Moulian, T. (2002). *Chile actual: anatomía de un mito*. Santiago: Lom Ediciones.
- Munczek, D. (2007). La desaparición forzada de personas como estrategia política del terror. En Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Ed.), *Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio: aportes psicosociales*. (pp. 137–180). San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Munk, G. (1995). Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales. *Revista Mexicana de Sociología*, 3, 17–40.
- Muñoz, Ó. (2007). *El modelo económico de la concertación 1990-2005: ¿reformas o cambio?* Santiago: Flacso Chile, Editorial Catalonia.
- Narbona, K. (2014). Antecedentes del modelo de relaciones laborales chileno. Observatorio Social del Proyecto Plataformas Territoriales por los derechos Económicos y Sociales: Previsión, Trabajo, Educación y Salud. Recuperado a partir de <http://www.fundacionsol.cl/antecedentes-del-modelo-de->

relaciones-laborales-chileno/narbona-k-antecedentes-del-modelo-de-
relaciones-laborales-chileno-5

- Navarro, C., y Herrera, M. R. (2009). Contexto micro y macro de la protesta colectiva: América Latina en la década de los noventa *Revista Mexicana de Sociología*, 71(1), 83–130.
- Navia, P. (2004). Participación electoral en Chile, 1988-2001. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 24(1), 81–103.
- Navia, P. (2012). Chile's Middle Class Flexes Its Muscles. *Current History*, 111(742), 75–76.
- Navia, P., Arriagada, A., y Schuster, M. (2008). Los recuerdos harán que te olvide. *Revista UDP*, 06/07(03), 91–96.
- Nora: (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. *Representations*, (26), 7–24.
- Nunn, F. M. (1970). *Chilean politics, 1920-1931: the honorable mission of the armed forces* (1ª ed.). México DF: University of New Mexico Press.
- Núñez, J., y Gutiérrez, R. (2004). Classism, discrimination and meritocracy in the labor market: the case of Chile. Departamento de Economía Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa s Universidad de Chile. Recuperado a partir de <http://www2.facso.uchile.cl/sociologia/1060225/docs/chile/nunez.pdf>
- Ochoa Mena, H. (1931). *La revolución de julio: la caída de la tiranía militar en Chile*. Santiago: Imp. Cisneros.
- O'Donnell, G. A. (1973). *Modernization and bureaucratic-authoritarianism: studies in South American politics*. California: University of California Press.
- O'Donnell, G., y Schmitter: (1986). Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. En G. O'Donnell: Schmitter, y L. Whitehead (Eds.), *Transitions from authoritarian rule: prospects for democracy* (1–73). Baltimore; Londres: Johns Hopkins University Press.
- O'Donnell, G., y Schmitter: C. (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- OECD. (2011). Growing Income Inequality in OECD Countries: What Drives it and How Can Policy Tackle it? *Tackling Inequality*. Recuperado a partir de <http://www.oecd.org/social/soc/47723414.pdf>
- OECD. (2012). An Overview of Growing Income Inequalities in OECD Countries: Main Findings. En *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising*. Paris: OECD Publishing.

- OECD. (2014). *Education at a Glance 2014. OECD indicators* (p. 566). Paris: OECD Publishing.
- Offe, C. (1990). *Contradicciones en el Estado de Bienestar*. Madrid: Alianza Universidad.
- Olabuénaga, J. I. R. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Olavarria, M. J. (2003). *Fractured Past: Torture, Memory and Reconciliation in Chile*. Montréal: McGill University.
- Olick, J. (2008). Collective Memory. En *International Encyclopedia of the Social Sciences* (2^a ed.: 7–8). Detroit.
- Oppenheim, L. H. (2007). *Politics in Chile: socialism, authoritarianism, and market democracy*. Boulder: Westview Press.
- Orellana, P. (1989). *Violaciones a los derechos humanos e información. La experiencia chilena*. Santiago: FASIC.
- Ortega, E. (1992). *Historia de una alianza política: el Partido Socialista de Chile y el Partido Demócrata Cristiano, 1973-1988*. Santiago: CED.
- Ortiz, F. (2005). *El movimiento obrero en Chile, 1891-1919*. Santiago: Lom Ediciones.
- Otano, R. (2006). *Nueva crónica de la transición*. Santiago: LOM Ediciones.
- Oxhorn: (1989). *Democratic transition and the democratization of civil society: Chilean shantytown organizations under the authoritarian regime* (Tesis doctoral). University Microfilms International, Ann Arbor, Mich.
- Oxhorn, P. (1994a). Understanding Political Change After Authoritarian Rule: The Popular Sectors and Chile's New Democratic Regime. *Journal of Latin American Studies*, 26(03), 737–759.
- Oxhorn, P. (1994b). Where Did All the Protesters Go?: Popular Mobilization and the Transition to Democracy in Chile. *Latin American Perspectives*, 21(3), 49–68.
- Oxhorn, P. (1995). *Organizing civil society: the popular sectors and the struggle for democracy in Chile*. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.
- Oxhorn, P. (2003). Cuando la democracia no es tan democrática. La exclusión social y los límites de la esfera pública en América Latina. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, XLVI(187), 131–176.
- Oyarzún, L. (2012). Desarrollo es acceso a la educación: Las movilizaciones estudiantiles en Chile. *Anuario CEIPAZ*, (5), 221–234.
- Páez, D., y Basabe, N. (1993). Trauma político y memoria colectiva: Freud, Halbwachs y la psicología política contemporánea: Freud, Halbwachs y la psicología política contemporánea. *Psicología Política*, (6), 7–34.
- Páez, D., Basabe, N., y Gonzalez, J. L. (1997). Social Processes and Collective Memory: A Cross-Cultural Approach to Remembering Political Events. En J.

- Pennebaker, D. Páez, y B. Rimé (Eds.), *Collective memory of political events: social psychological perspectives* (146–174). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
- Páez, D., Fernández, I., y Martín, C. (2001). Catástrofes, traumas y conductas colectivas: procesos y efectos culturales. En C. San Juan (Ed.), *Catástrofes y ayuda de emergencia: estrategias de evaluación, prevención y tratamiento* (85–147). Barcelona: Icaria Editorial.
- Paley, J. F. (2001). *Marketing democracy: power and social movements in post-dictatorship Chile*. Berkeley: University of California press.
- Palma, A. (2008). *Explaining Earnings and Income Inequality in Chile* (Tesis doctoral). University of Gothenburg. School of Business, Economics and Law., Gothenburg. Recuperado a partir de <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/9575>
- Parker, C. (2000). *Los jóvenes chilenos: cambios culturales, perspectivas para el siglo XXI*. Santiago de Chile: MIDEPLAN, Gobierno de Chile.
- Parkman: (2011). Chile, Civic Strike, 1931. En R. Powers y W. Voegelé (Eds.), *Protest, Power, and Change: An Encyclopedia of Nonviolent Action from ACT-UP to Women's Suffrage*. Nueva York: Routledge.
- Parra, M. (2005). La construcción de los movimientos sociales como sujetos de estudio en América Latina. *Athenae Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 8, 72–94.
- Partido Socialista de Chile. (1971). Resolución política XXIII Congreso (La Serena). Recuperado a partir de http://www.socialismo-chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=9
- Pastor, D. (2004). Origins of the Chilean Binominal Election System. *Revista de Ciencia Política*, 24(1), 38–57.
- Paus, E. (1994). Economic Growth through Neoliberal Restructuring? Insights from the Chilean Experience. *The Journal of Developing Areas*, 29(1), 31–56.
- Pearce, J. (1997). Civil society, the Market and Democracy in Latin America. *Democratization*, 4(2), 57–83.
- Pennebaker, J., y Banasik, B. (1997). On the Creation and Maintenance of Collective Memories: History as Social Psychology. En J. Pennebaker, D. Páez, y B. Rimé (Eds.), *Collective memory of political events: social psychological perspectives* (pp. 1–19). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
- Pennebaker, J., Páez, D., y Rimé, B. (1997). *Collective memory of political events: social psychological perspectives*. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

- Pérez, C. (2008). Violencia y política en las publicaciones clandestinas bajo Pinochet: La palabra armada en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Chile, 1983-1987. *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, 2(12), 71-90.
- Perry, M. (Próximo). *Transferencia y aprendizaje en la reflexión política de los exiliados chilenos* (Tesis doctoral). Leiden University, Leiden.
- Petras, J. (1970). *Politics and Social Forces in Chilean Development*. Berkeley: University of California Press.
- Petras, J., y Leiva, F. I. (1988). Chile: The Authoritarian Transition to Electoral Politics: A Critique. *Latin American Perspectives*, 15(3), 97-114.
- Physicians for Human Rights. (1988). *Sowing fear: the uses of torture and psychological abuse in Chile: a report*. Somerville, MA: Physicians for Human Rights.
- Pickvance, C. G. (1999). Democratisation and the Decline of Social Movements: The Effects of Regime Change on Collective Action in Eastern Europe, Southern Europe and Latin America. *Sociology*, 33(2), 353-372.
- Pinto, A. (1959). *Chile, un caso de desarrollo frustrado*. Santiago: Editorial Universidad de Santiago.
- Pinto, J. (2006). ¿Y la historia les dio la razón? El MIR en Dictadura, 1973-1981. En V. Valdivia, R. Álvarez, y J. Pinto (Eds.), *Su revolución contra nuestra revolución: izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)* (153-205). Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Pinto, J., y Salazar, G. (1999). *Historia contemporánea de Chile I*. Santiago: LOM Ediciones.
- Pinto, J., y Salazar, G. (2010). *Historia contemporánea de Chile II*. Santiago: LOM Ediciones.
- Piñera, J. (1980). Hacia un país de trabajadores-propietarios. Discurso de José Piñera para el día del trabajador. Recuperado 18 de febrero de 2015, a partir de http://www.josepinera.com/RevChilena/chile_estelares_discurso1mayo.htm
- Piper Shafir, I. (2005). *Obstinaciones de la memoria: la dictadura militar chilena en las tramas del recuerdo* (Tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
- Pizzorno, A. (1989). Algún otro tipo de alteridad: una crítica a las teorías de la elección racional. *Sistema: Revista de ciencias sociales*, (88), 27-42.
- PNUD. (1998). *Informe Desarrollo Humano en Chile: Las Paradojas de la Modernización*. Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2000). *Informe Desarrollo Humano en Chile: Más sociedad para gobernar el futuro*. Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2002). *Informe Desarrollo Humano en Chile: Nosotros los chilenos: un desafío cultural*. Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

- PNUD. (2004). *Informe Desarrollo Humano en Chile: El poder: ¿para qué y para quién?* Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2010). *Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad* (Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010). Costa Rica.
- PNUD. (2012). *Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- PNUD. (2015). *Los tiempos de la politización*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Poblete, R., y Galilea, C. (1984). *Movimiento pentecostal e Iglesia Católica en medios populares*. Centro Bellarmino, Departamento de Investigaciones Sociológicas.
- Politzer, P. (1989). *Fear in Chile: lives under Pinochet*. Nueva York: Pantheon Books.
- Popular Memory Group. (2007). Popular memory: theory, politics, method. En R. Johnson, G. McLennan, B. Schwarz, y D. Sutton (Eds.), *Making Histories: Studies in History-writing and Politics* (2ª ed.: 205–253). Oxfordshire: Routledge.
- Portales, F. (2000). *Chile: una democracia tutelada*. Santiago: Editorial Sudamericana Chilena.
- Posner: W. (1999). Popular Representation and Political Dissatisfaction in Chile's New Democracy. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 41(1), 59–85.
- Posner: W. (2004). Local Democracy and the Transformation of Popular Participation in Chile. *Latin American Politics and Society*, 46(3), 55–81.
- Posner: W. (2008). *State, market, and democracy in Chile: the constraint of popular participation*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Pridham, G. (2000). Confining Conditions and Breaking with the Past: Historical Legacies and Political Learning in Transitions to democracy. *Democratization*, 7, 36–64.
- Procupez, V., y Obarrio, J. M. (2006). Los nuevos movimientos sociales en América Latina. Proyecto EXPLORA: Las Ciencias en el Mundo Contemporáneo.
- Puga, I. (2011). Escuela y estratificación social en Chile: ¿cuál es el rol de la municipalización y la educación particular subvencionada en la reproducción de la desigualdad social? *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 37(2), 213–232.
- Puryear, J. (1994). *Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., y Nanetti, R. Y. (1994). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

- Raczynski, D. (1999). Políticas sociales en los años noventa en Chile. Balance y desafíos. En P. W. Drake y I. Jaksic (Eds.), *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa* (125–154). Santiago: LOM ediciones
- Ramírez, H. (1984). *Origen y formación del Partido Comunista de Chile*. Santiago: Editorial Progreso.
- Razeto, L., Klenner, A., Ramírez, A., y Urmeneta, R. (1990). *Las organizaciones económicas populares, 1973-1990* (Tercera). Santiago: Ediciones PET.
- Recabarren, F. (2003). *La matanza de San Gregorio: 1921, crisis y tragedia*. Santiago: Lom Ediciones.
- Ree, G. van der. (2007). *Contesting modernities : projects of modernisation in Chile, 1964-2006* (Tesis doctoral). Leiden. Recuperado a partir de <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/11402>
- Remmer, K. (1980). Political demobilization in Chile, 1973-1978. *Comparative Politics*, 12(3), 275–301.
- Reszczynski, K., Rojas, y Barceló: (1991). *Tortura y resistencia en Chile: estudio médico-político*. Santiago: Editorial Emisión.
- Revilla Blanco, M. (1994). Gobernabilidad y movimientos sociales, una relación difícil. *América Latina Hoy, Universidad de Salamanca*, (8), 21–25.
- Revilla Blanco, M. (2005). Ciudadanía y acción colectiva en América Latina. Tendencias recientes. *Estudios Políticos*, 27, 29–41.
- Revilla Blanco, M. (2010). América Latina y los movimientos sociales: el presente de la “rebelión del coro”. *Nueva Sociedad*, 227, 51–67.
- Ricoeur: (1999). *La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido*. Madrid: Arrecife Producciones, S.L.
- Ricoeur: (2007). Historia y memoria. La escritura de la historia y la representación del pasado. *Historizar el pasado vivo en América Latina*. Recuperado a partir de <http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/ricoeur.pdf>
- Roberts, K. (1992). *In search of a new identity: dictatorship, democracy, and the evolution of the left in Chile and Peru*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Roberts, K. (1994). *Renovation in the Revolution? Dictatorship, Democracy, and Political Change in the Chilean Left*. Notre Dame: Kellogg Institute.
- Roberts, K. (1998). *Deepening Democracy?: The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Rodríguez, A. (2008). Pensar la gobernabilidad en clave alternativa: En busca de fundamentos teóricos en los albores del siglo XXI. Programa de Becas CLACSO- Asdi de promoción de la investigación social 2006- 2008.

- Rojas Baeza, P. (2000). Impunity: An Impossible Reparation. *Nordic Journal of International Law*, 69(1), 27–34.
- Rojas, I. (2007). Las reformas laborales al modelo normativo de negociación colectiva del Plan Laboral. *Ius et Praxis*, 13(2), 195–221.
- Rojas, J. (1993). *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos: (1927-1931)*. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
- Rojas, J. (2012). *Sociedad Bloqueada: Movimiento estudiantil, desigualdad y despertar de la sociedad chilena*. Santiago: RIL Editores.
- Rojas, M. E. (1988). *La represión política en Chile: los hechos*. Madrid: IEPALA Editorial.
- Roniger, L., y Sznajder, M. (1999). *The Legacy of Human-Rights Violations in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay*. Nueva York: Oxford University Press.
- Rovira, C. (2007). Chile: transición pactada y débil autodeterminación colectiva de la sociedad. *Revista Mexicana de Sociología*, 69(2), 343–372.
- Ruiz, C., y Boccardo, G. (2014). *Los chilenos bajo el neoliberalismo: clases y conflicto social*. Santiago: Fundación Nodo Veintiuno : El Desconcierto.cl.
- Salazar, G. (1992). Movimiento social y construcción de Estado: la Asamblea Constituyente Popular de 1925. Documentos de Trabajo SUR Profesionales, 133.
- Salazar, G. (1998). De la participación ciudadana: capital social constante y capital social variable (explorando senderos trans-liberales). *Proposiciones*, 28.
- Salazar, G. (2000). Memoria, hermenéutica y movimiento de la “baja sociedad civil” (Chile sobre el 2000). En M. Garcés y P. Milos (Eds.), *Memoria para un Nuevo Siglo: Chile, Miradas a la Segunda Mitad Del Siglo XX* (257–270). Santiago: LOM Ediciones.
- Salazar, G. (2001). Memoria histórica y capital social. En J. Durston y F. Miranda (Eds.), *CEPAL - Capital Social y Políticas Públicas en Chile. Vol-I* (Vol. 1: 11–20). Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Salazar, G. (2006). *La violencia política popular en las “grandes alamedas”: la violencia en Chile, 1947-1987 una perspectiva histórico-popular*. Santiago: Lom Ediciones.
- Salazar, G. (2013). *Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política* (2ª ed.). Santiago de Chile: Uqbar editores.
- Salazar, G., y Pinto, J. (1999a). *Historia contemporánea de Chile II: Actores, identidad y movimiento*. Santiago: LOM Ediciones.
- Salazar, G., y Pinto, J. (1999b). *Historia contemporánea de Chile: la economía: mercados empresarios y trabajadores*. LOM Ediciones.
- Salcedo, R., y Simone, L. de. (2012). *Los malls en Chile: 30 años*. Cámara Chilena de Centros Comerciales.

- Salgado, A. (2014). La familia de Ramona Parra en la Plaza Bulnes: Una aproximación de género a la militancia política, la protesta social y la violencia estatal en el Chile del siglo veinte. *Izquierdas*, (18), 128–145.
- Salimovich, S., Lira, E., y Weinstein, E. (1992). Victims of Fear. The Social Psychology of Repression. En J. E. Corradi: Weiss, y M. A. Garretón (Eds.), *Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America* (72–89). Berkeley: University of California Press.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., y Lucio: B. (2003). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Scapusio, M. (2006). Transgeneracionalidad del daño y memoria. *Revista Reflexión*, 32, 15–19.
- Schindel, E. (2009). Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano. *Política y Cultura*, (31), 65–87.
- Schneider, C. L. (1995). *Shantytown protest in Pinochet's Chile*. Philadelphia: Temple University Press.
- Schuurman, F. J., y Heer, E. (1992). *Social Movements and NGOs in Latin America: A Case-study of the Women's Movement in Chile*. Breitenbach: Fort Lauderdale.
- Scott, A. (1990). *Ideology and the new social movements*. Boston: Unwin Hyman.
- Segovia, C., y Gamboa, R. (2012). Chile: el año que salimos a la calle. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 32(1), 65–85.
- Sehnbruch, K., y Siavelis: (Eds.). (2014). *El Balance. Política y políticas de la concertación 1990-2010*. Santiago: Catalonia.
- Seoane, J. (Ed.). (2003). *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (1ª ed.). Buenos Aires: Clacso.
- Seoane, J., y Taddei, E. (2004). Cuestionando el presente, recuperando el futuro. Juventudes, mundialización y protestas sociales. En J. M. Gómez (Ed.), *América Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas* (261–277). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Seoane, J., y Taddei, E. (2005). Movimientos sociales, democracia y gobernabilidad neoliberal en América Latina. *Revista Aportes Andinos*, (13).
- Seoane, J., Taddei, E., y Algranati, C. (2006). Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina. En G. Lechini y A. Boron (Eds.), *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina* (227–250). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

- Serpente, A. (2011). The Traces of “Postmemory” in second-Generation Chilean and Argentinean Identities. En F. Lessa y V. Druliolle (Eds.), *The memory of state terrorism in the southern cone Argentina, Chile, and Uruguay* (133–156). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Serrano, C. (1998). Participación social y ciudadanía: un debate del Chile contemporáneo. Asesorías para el Desarrollo.
- Sharim, D., Kovalskys, J., Morales, G., y Cornejo, M. (2011). Trauma psicosocial y memoria: diseño de un dispositivo biográfico para investigar el impacto de la Comisión de Prisión Política y Tortura en Chile. *Revista de Estudios Sociales Universida de los Andes*, (40), 81–88.
- Siavelis: (2002). Coalitions, Voters and Party System Transformation in Post-authoritarian Chile. *Government and Opposition*, 37(01), 76–105.
- Siavelis: (2009a). Elite-Mass Congruence, Partidocracia and the Quality of Chilean Democracy. *Journal of Politics in Latin America*, 1(3), 3–31.
- Siavelis: (2009b). Enclaves de la transición y democracia chilena. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 29(1), 3–21.
- Silva, E. (1996). *The state and capital in Chile: business elites, technocrats, and market economics*. Boulder, CO: Westview Pr.
- Silva, P. (1991). Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks. *Journal of Latin American Studies*, 23(2), 385–410.
- Silva, P. (1992). Social Democracy, Neoliberalism and Ideological Change in the Chilean Socialist Movement 1973-1992. Presentado en XVII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), Los Angeles.
- Silva, P. (1997). Ascenso tecnocrático y Democracia en América Latina. *Nueva Sociedad*, 152, 68–77.
- Silva, P. (1999). Collective Memories, Fears and Consensus: the Political Psychology of the Chilean Democratic Transition. En K. Koonings y D. Kruijt (Eds.), *Societies of Fear: the Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America*. Londres: Zed Books.
- Silva, P. (2001). Democratisation and State-Civil Society Relations in Chile, 1983-2000: From Effervescency to Deactivation. Presentado en The Role of Civil Society in Conflict Resolution, National University of Ireland, Maynooth.
- Silva, P. (2004). Doing Politics in a Depoliticised Society: Social Change and Political Deactivation in Chile. *Bulletin of Latin American Research*, 23(1), 63–78.
- Silva, P. (2006a). Los tecnócratas y la política en Chile: pasado y presente. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 26(2), 175–190.

- Silva, P. (2006b). The Politics of Neo-Liberalism in Latin America: Legitimacy, Depolitization and Technocratic Rule in Chile. En R. Robison (Ed.), *The Neoliberal Revolution: Forging the Market State* (39–57). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Silva, P. (2008). *In the name of reason technocrats and politics in Chile*. Philadelphia: Pennsylvania State University Press.
- Silva, P. (2013). Gobernabilidad y la representación democrática en el Chile post-Concertacionista. En P. Silva y F. Rojas (Eds.), *Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina: las dimensiones regionales, nacionales y locales* (177–196). San José, Costa Rica: FLACSO.
- Slater, D. (1994). Power and Social Movements in the Other Occident. *Latin American Perspectives*, 21(2), 11–37.
- Solimano, A. (2007). Sobre la reproducción de la desigualdad en Chile: concentración de activos, estructura productiva y matriz institucional. Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Recuperado a partir de <http://ciglob.org/documents/WP01%20-%20Solimano%20-%20Reproduccion%20desigualdad%20en%20Chile.pdf>
- Stallings, B. (2001). Las reformas estructurales y el desempeño socioeconómico. En R. French-Davis y B. Stallings (Eds.), *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973* (23–60). Santiago: LOM CEPAL.
- Stepan, A. (1985). State Power and the Strength of Civil Society in the Southern Cone of Latin America. En *Bringing the State Back In* (317–346). Cambridge: Cambridge University Press.
- Stepan, A. C., y Linz, J. J. (1996). Toward Consolidated Democracies. *Journal of democracy*, 7(2), 14–33.
- Stern, S. (2000). De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998). En M. Garcés y P. Milos (Eds.), *Memoria para un Nuevo Siglo: Chile, Miradas a la Segunda Mitad Del Siglo XX* (pp. 11–33). Santiago: LOM Ediciones.
- Stern, S. (2009). *Recordando en Chile de Pinochet: En vísperas de Londres 1998*. Santiago de Chile: Ediciones UDP.
- Stern, S. (2010). *Reckoning with Pinochet: the memory question in democratic Chile, 1989-2006*. Durham: Duke University Press.
- Stern, S. (2013a). Foreword. En C. Collins, K. Hite, y A. Joignant (Eds.), *The politics of memory in Chile: from Pinochet to Bachelet* (vii–xix). Boulder, Colorado: First Forum Press.

- Stern, S. (2013b). *Lanzamiento del libro Luchando por mentes y corazones: Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet*. GAM, Seminario A cuarenta años del golpe de Estado en Chile.
- Stillerman, J., y Salcedo, R. (2012). Transposing the Urban to the Mall Routes, Relationships, and Resistance in Two Santiago, Chile, Shopping Centers. *Journal of Contemporary Ethnography*, 41(3), 309–336.
- Stockdill, B. (1996). *Multiple oppressions and their influence on collective action: the case of the AIDS movement*. (Tesis doctoral). Northwestern University, Evanston.
- Svampa, M. (2007). Movimientos sociales y escenario político: Las nuevas inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina (1–15). Presentado en VI Cumbre del Parlamento Latinoamericano, Caracas: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Svampa, M. (2010). Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina. *One World Perspectives*, 1–26.
- Svampa, M., y Pandolfi, C. (2004). Los movimientos sociales en América Latina frente al librecomercio y la criminalización de la protesta. En *OSAL, Observatorio Social de América Latina* (Vol. 5: 285–296). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Sznajder, M. (1993). A Case of Non-European Fascism: Chilean National Socialism in the 1930s. *Journal of Contemporary History*, 28(2), 269–296.
- Talavera: (1985). El modelo neoliberal: aspectos teóricos y su aplicación en el Cono Sur latinoamericano. *Boletín Americanista*, (185), 137–151.
- Tarrow, S. (1995). Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention. En M. Traugott (Ed.), *Repertoires and Cycles of Collective Action* (89–116). Durham: Duke University Press.
- Tarrow, S. (1996). State and opportunities: The political structuring of social movements. En D. McAdam, J. D. McCarthy, y M. N. Zald (Eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings* (41–61). Cambridge: Cambridge University Press.
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: social movements, collective action and politics*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Taylor, L. (1998). *Citizenship, participation, and democracy: changing dynamics in Chile and Argentina*. Nueva York, N.Y.: St. Martin's Press.
- Taylor, M. (2006). *From Pinochet to the "third way": neoliberalism and social transformation in Chile*. Londres; Ann Arbor, MI: Pluto Press.
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. Boston: Addison-Wesley Pub. Co.

- Tilly, C. (1979). Repertoires of Contention in America and Britain, 1750-1830. En M. N. Zald y J. D. McCarthy (Eds.), *The Dynamics of Social Movements: Resource Mobilization, Social Control, and Tactics* (126–166). Cambridge: Winthrop Publishers.
- Tilly, C. (1984). Social Movements and National Politics. En C. Bright y S. F. Harding (Eds.), *Statemaking and Social Movements: Essays in History and Theory*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Tilly, C. (1995). To Explain Political Processes. *American Journal of Sociology*, 100(6), 1594–1610.
- Tironi, E. (1988a). La invisible victoria (los chilenos y el plebiscito). *Proposiciones*, 16. Recuperado a partir de <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=593>
- Tironi, E. (1988b). *Los silencios de la revolución. Chile: la otra cara de la modernización* (1ª ed.). Santiago: La Puerta.
- Tironi, E. (1990). *Autoritarismo, modernización y marginalidad*. Santiago: Ediciones SUR. Recuperado a partir de <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=202>
- Tironi, E. (1999). *La irrupción de las masas y el malestar de las élites: Chile en el cambio de siglo* (1a. edición). Santiago de Chile: Grijalbo.
- Tironi, E. (2003). ¿Es Chile un País Moderno? En E. Tironi, O. Larrañaga, y E. Valenzuela, *Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. Censos 1992-2002* (pp. 15–76). Santiago: Cuadernos Bicentenario.
- Tironi, M., y Carreras, F. (2008). Expectativas de equidad y ciudadanía social: Desafíos de legitimación e integración de la democracia chilena. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Recuperado a partir de <http://nuevomundo.revues.org/11402>
- Titelman, D. (1999). Reform to health system financing in Chile. *CEPAL Review*, (69), 185–199.
- Torche, F. (1998). Consumismo: alcances y limitaciones de un fenómeno en expansión. *Revista Universitaria*, (59), 53–57.
- Torche, F. (2007). Social status and cultural consumption: The case of reading in Chile. *Poetics*, 35(2–3), 70–92.
- Torres Carrillo, A. (2002). *Movimientos Sociales, Organizaciones Populares y Constitución de Sujetos Colectivos*. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
- Torres-Rivas, E. (1993). América Latina. Gobernabilidad y democracia en sociedades en crisis. *Revista Nueva Sociedad*, (128), 88–101.
- Touraine, A. (1988). *Return of the Actor: Social Theory in Post Industrial Society*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Touraine, A. (2002). The Importance of Social Movements. *Social Movement Studies*, 1(1), 89–95.

- Trafilaf, J. C., y Montero, R. (2001). Chile, sindicalismo y transición política. En E. De la Garza (Ed.), *Los sindicatos frente a los procesos de transición política* (103–108). Buenos Aires: CLACSO.
- Urrutia, M. (2006). *Luchas antineoliberales en América Latina e inmunización política en Chile* (Tesis doctoral). UCL. Recuperado a partir de http://dial.academielouvain.be/handle/boreal:4843?site_name=UCL
- Valdés, T. (1986). El movimiento poblacional: la recomposición de las solidaridades sociales. FLACSO-Chile.
- Valdivia, V. (2001). Estatismo y neoliberalismo: un contrapunto militar 1973-1979. *Historia (Santiago)*, 34, 167–226.
- Valdivia, V. (2010). ¡Estamos en guerra señores!: El régimen militar de Pinochet y el “pueblo” 1973-1980. *Historia (Santiago)*, 43(1), 163–201.
- Valenzuela, A. (2013). *El quiebre de la democracia en Chile*. Santiago: Ediciones UDP.
- Vanden, H. E. (2007). Social Movements, Hegemony, and New Forms of Resistance. *Latin American Perspectives*, 34(2), 17–30.
- Véjar, D. (2012). Tendencias de un sindicalismo fracturado. Sindicalismo autoritario versus sindicalismo movimentista. En M. E. Tijoux (Ed.), *Movimientos Sociales, Populares y Sindicales* (95–113). Santiago: LOM Ediciones.
- Vera, S. (2012). El resplandor de las mayorías y la dilatación de un doble conflicto: el movimiento estudiantil en Chile 2011. En S. Aguilar (Ed.), *Anuario del conflicto social 2011* (286–309). Barcelona: Observatorio del Conflicto Social.
- Vergara, J. (2003). El Estado y las Organizaciones Sociales en Chile. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 4.
- Vergara, M. P., y Tocornal, X. (1998). La memoria del régimen militar. Un análisis psicosocial desde la perspectiva socioconstruccionista. Univ. ARCIS. Recuperado a partir de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Chile/di-uaris/20120921040402/tocor.pdf>
- Vergara: (1984). *Auge y caída del neoliberalismo en Chile: un estudio sobre la evolución ideológica del régimen militar*. Santiago: FLACSO.
- Veyl, I. (2015). “Santiago no es Chile”: cambio socioinstitucional, inequidades territoriales y políticas públicas para el desarrollo regional, 1990-2010 (Tesis doctoral). Recuperado a partir de <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/35810>
- Vidal, M. (1993). *Lo igual y lo distinto en los problemas psicopatológicos ligados a la represión política*. Colección CINTRAS, Santiago. Recuperado a partir de <http://www.cintras.org/textos/monografias/monografia3.pdf>
- Vidal: (2008). Para una crítica de la sociedad civil en Chile: una mirada a la historia y algunas políticas públicas. *Revista MAD*, 18, 57–96.

- Volkan, V. D. (2001). Transgenerational Transmissions and Chosen Traumas: An Aspect of Large-Group Identity. *Group Analysis*, 34(1), 79–97.
- Walker, I. (1990). *Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada*. Corporación de Investigación Económica para Latinoamérica.
- Weinstein, E., y Lira, E. (1987). *Trauma, duelo y reparación: una experiencia de trabajo psicosocial en Chile*. Santiago, Chile: FASIC : Interamericana.
- Weyland, K. (1999). Economic Policy in Chile's New Democracy. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 41(3), 67–96.
- White, S. C. (1996). Depoliticising Development: The Uses and Abuses of Participation. *Development in Practice*, 6(1), 6–15.
- Wilde, A. (1999). Irruptions of Memory: Expressive Politics in Chile's Transition to Democracy. *Journal of Latin American Studies*, 31(2), 473–500.
- Winn: (2004). The Pinochet Era. En P. Winn (Ed.), *Victims of the Chilean Miracle: Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973–2002* (14–70). Londres: Duke University Press.
- Winn: (2007). El pasado está presente Historia y memoria en el Chile contemporáneo. *Historizar el pasado vivo en América Latina*.
- Withuis, J., y Mooij, A. (2010). *The politics of war trauma the aftermath of World War II in eleven European countries*. Amsterdam: Aksant.
- Worldmeters. (2014). Population by Country (2014) - Worldometers. Recuperado a partir de <http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>
- World Values Survey Association. (2009). World Values Survey 1981-2008 Official Aggregate v.20090901. ASEP/JDS. Recuperado a partir de www.worldvaluessurvey.org
- Wormald, G., y Torche, F. (2004). *Estratificación y movilidad social en Chile: entre la adscripción y el logro*. Santiago: CEPAL. División de Desarrollo Social. Recuperado a partir de <http://www.cepal.org/es/publicaciones/6089-estratificacion-y-movilidad-social-en-chile-entre-la-adscripcion-y-el-logro>
- Wright, T. C. (2007). *State Terrorism in Latin America: Chile, Argentina, and International Human Rights*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Yehuda, R. (2002). Post-Traumatic Stress Disorder. *New England Journal of Medicine*, 346(2), 108–114.
- Yoclevzky, R. (1999). Democratización y transición en Chile. *Perfiles Latinoamericanos*, (14), 63–82.

- Yopo, N. (2012). *Responsabilidad en los casos de fraude por extravío, hurto o robo de la tarjeta de crédito* (Tesis de licenciatura). Universidad de Chile, Santiago. Recuperado a partir de <http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/113072>
- Zerubavel, E. (1999). *Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Zibechi, R. (2003). Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos. *OSAL: Observatorio Social de América Latina*, 9, 185–188.

Samenvatting

Het jaar 2011 markeert het begin van een proces van politisering in Chili, dat gekenmerkt werd door een steeds sterker wordend publiek debat, meer onrust en een grotere burgerbetrokkenheid. Het meest duidelijke aspect van dat proces was wellicht de toename van het aantal protesten en sociale bewegingen. Zelfs toen tijdens de regeringen van de *Concertación* (1990-2010) protestacties plaatsvonden, hadden die lang niet het massale karakter en de impact van de betogingen in 2011. Integendeel, de regeringsperiode van de *Concertación* kenmerkte zich door maatschappelijke onverschilligheid en zeer lage betrokkenheid van de civiele maatschappij bij het publieke debat. Dit, in tegenstelling tot de constante protesten en betogingen tijdens de jaren 80, alsmede later gedurende de golf van demonstraties in 2011.

Bovendien en overeenkomstig met verschillende diagnoses werd de democratische koers in Chili gekenmerkt door de versplintering en crisis van de sociale bewegingen, door de onverschilligheid van de civiele maatschappij of zelfs een civiele afwezigheid. Verschillende definities zijn gebruikt om de terugtrekking van de civiele maatschappij na het eind van het autoritarisme te beschrijven, evenals haar geringe aanwezigheid in besluitvorming en het vaststellen van de nationale politieke agenda in de post-dictatoriale fase. Het voorgaande zou zowel in strijd zijn met de sociale onrust in de rest van Latijns-Amerika tijdens die periode, als met de veronderstelling dat het herstel van de democratie burgerlijke positionering en revitalisering van de civiele maatschappij met zich mee zou brengen.

Nadat de sociale onverschilligheid van de Chileense civiele maatschappij eenmaal geïdentificeerd was, is onderzoek gedaan naar de variabelen die deze transformatie hebben vormgegeven sinds de protestacties tijdens de decennia voorafgaand aan de periode van deactivering. Deze opgave maakt deel uit van de uitgebreide literatuur over de Chileense transitie, die – door het fenomeen vanuit zowel micro-, meso- als macro- maatschappelijke processen te benaderen – het mogelijk maakt de veelvoud aan factoren in kaart te brengen, die ten grondslag liggen aan de complexiteit van het probleem van demobilisatie tijdens de democratische transitie. Dit onderzoek beoogt het debat over de activering en in het bijzonder de deactivering van de Chileense civiele maatschappij te hervatten en te verbreden. Hierbij gaat de aandacht specifiek uit naar de periode van democratisch herstel van de vier regeringen van de *Concertación* als moment van maatschappelijke demobilisatie.

Dit onderzoek observeert de post-dictatoriale sociale onverschilligheid door de culturele en maatschappelijk processen van die periode belichten. Haar voornaamste doelstelling is echter dieper ingaan op en het verbreden van het academische debat

over de factoren die van invloed zijn op de deactivering. Zoals in deze studie wordt uiteengezet, werden zowel de maatschappelijke onverschilligheid, als de belangen en de wijzen waarop de civiele maatschappij zich verenigde gedurende de periode van 1990 tot 2010 sterk beïnvloed door een post-traumatische herinnering; door de relatie tussen staat en civiele maatschappij en haar *governance* paradigma; en tenslotte door de markt en de logica van de neoliberale moderniteit. Deze variabelen en de manier waarop ze de dynamiek van de civiele maatschappij beïnvloedden – in grote of kleine mate van intensiteit, afhankelijk van het bestudeerde moment binnen de periode – verrijzen als de belangrijkste hypothesen en doelstellingen van deze studie.

Eveneens wordt gesteld dat de opkomst van de sociale bewegingen en protesten cyclische fenomenen zouden zijn, die opkomen en afnemen overeenkomstig met politieke veranderingen en externe kansen. De sociale bewegingen worden dus alleen in tijdelijke en beperkte context en ruimte zichtbaar, maar daarmee onthullen ze netwerken die in de alledaagsheid van sociale relaties ondergronds of verborgen blijven. De mobilisatie of actie wordt alleen zichtbaar wanneer een bepaald conflict of welbepaalde omstandigheden dat toestaan. Anders verkeert ze in een staat van latente aanwezigheid of potentiële actie. Dat impliceert geenszins inactiviteit, maar constructie en reconstructie van actievormen die worden gevoed door de constante productie van alternatieve kaders.

Op die manier geobserveerd en benaderd, wordt de post-dictatoriale periode geanalyseerd vanuit de oorzaken van de onverschilligheid, maar eveneens vanuit een onderzoek naar het herstel van de identiteit, dat de noodzakelijke grondslag legde voor de fase van mobilisatie die in 2011 van start ging. Zo wordt het uitgangspunt van burgerlijke verzwakking of afwezigheid in de periode van 1990-2010 opnieuw aan de orde gesteld om veeleer te worden beschouwd als een fase van herstel van de civiele maatschappij waarin nieuwe identiteiten en collectieve waarden worden gegenereerd en vormgegeven. De perioden van ogenschijnlijke sociale deactivering zouden zo deel uitmaken van een meer brede cyclus van collectieve actie gekenmerkt door ondergrondse en onzichtbare bewegingen van herstructurering en herstel van de identiteit, die zal dienen als *input* voor toekomstige acties.

De verzameling ideeën die dienen als leidraad voor deze studie wordt in het eerste hoofdstuk uitgewerkt. In dat hoofdstuk worden de theorieën over het fenomeen van activering en deactivering van de civiele maatschappij tot in detail gepresenteerd. Ook worden de voornaamste kenmerken en elementen van maatschappelijke actie opnieuw behandeld, waarmee een reeks analytische instrumenten ontwikkeld wordt ten behoeve van het onderzoek naar maatschappelijke onverschilligheid in post-dictatoriaal Chili. Om de Chileense casus in een bredere context te plaatsen, wordt

tevens het verloop van de (de)mobilisatie van de civiele maatschappij in Latijns-Amerika gepresenteerd. In het bijzonder wordt de invloed samengevat van de drie variabelen die beschouwd worden als de grote demobiliserende krachten van de Chileense civiele maatschappij tijdens het proces van re-democratisering op de activiteiten van de Latijns-Amerikaanse civiele maatschappij. Bovendien wordt het probleem van maatschappelijke deactivering voor het democratisch herstel in Chili uitgebreid bestudeerd om vervolgens de factoren te presenteren die zijn toegepast om de maatschappelijke deactivering gedurende die periode te verklaren.

Het tweede hoofdstuk is meer beschrijvend van aard, verschaft de historische context en presenteert de belangrijkste eigenschappen van het traject van sociale mobilisatie en demobilisatie dat de civiele maatschappij gedurende de twintigste eeuw heeft doorgemaakt. Aan de hand van de historische constellatie van 1920-1938, de *Estado de Compromiso* en de regering van de *Unidad Popular* worden de karaktereigenschappen van een politieke cyclus uiteengezet, die gekenmerkt werd door een poging tot democratisering van de macht en een verband met toenemende sociale participatie en mobilisatie. Vervolgens worden de scherpomlijnde fases van sociale onverschilligheid en mobilisatie tijdens het – door repressie en autoritarisme gekenmerkte - dictatoriale regime geanalyseerd. Uit de beschouwing in dit hoofdstuk kan worden geconcludeerd dat de perioden van maatschappelijke (de)activering werden beïnvloed door interne factoren met betrekking tot de sociale bewegingen, zoals bijvoorbeeld de acties van leiders en mobiliserende krachten of door een collectieve identiteit of herinnering. Ook externe variabelen als politieke uitdagingen en behoeften van de staat of fluctuaties van de markt en economie definiëren de cyclus maatschappelijke (de)activering en brengen de mobilisatie of juist terugtrekking van de civiele maatschappij teweeg.

Overeenkomstig met de drie grote hypotheses, het empirische onderzoek en de verzamelde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt het thema van maatschappelijke onverschilligheid in de kernhoofdstukken van het boek tot in detail geanalyseerd. In hoofdstuk drie staat de band tussen de post-traumatische herinnering en sociale onverschilligheid centraal. Gesteld wordt dat in Chili na decennia van directe of indirecte blootstelling aan geweld, conflict en overheersing een collectief trauma is ontstaan. Via verschillende feiten en door op verschillende niveaus te werk te gaan, wordt in dit hoofdstuk aangetoond dat het collectieve trauma een multidimensionaal karakter kent en heeft geleid tot het einde van het regime in een klimaat van zwijgen, vergeten, ontkennen, sociaal-maatschappelijke ontwrichting en burgerlijke terugtrekking; allen ingrediënten voor de post-dictatoriale fase van sociaal-maatschappelijke onverschilligheid van de civiele maatschappij. In de eerste plaats

wordt het Chileense sociaal-politieke proces van de laatste decennia uiteengezet vanuit een beschrijving van de belangrijkste elementen van de traumatische ervaring. Aangetoond wordt hoe de genoemde elementen een klimaat van zwijgen en burgerlijke terugtrekking richting de privésfeer hebben voortgebracht. Daarmee worden de eerste aanwijzingen blootgelegd die de maatschappelijk onverschilligheid gedurende de periode van 1990 – 2010 helpen te begrijpen. Zo wordt ook wat er vanaf 1990 is gebeurd met de civiele maatschappij en haar sociale bewegingen geanalyseerd als consequentie van het collectieve post-trauma. In het bijzonder wordt de wijze waarop de sociale deactivering het resultaat zou zijn van de impact van het trauma op de Chileense maatschappij gedetailleerd uiteengezet. Dat laatste zowel vanwege overlevingsmechanismen en reactie op het collectieve trauma ten gevolge van het wantrouwen en in diskrediet brengen van de sociale organisatie, als vanwege de maatschappelijke overdracht of het chronisch worden van het trauma.

In het vierde hoofdstuk wordt de invloed van de acties van de staat en politieke partijen op de genoemde maatschappelijke onverschilligheid bestudeerd. Zo worden de politieke variabelen en externe factoren die de sociale bewegingen beïnvloeden belangrijke deactiverende elementen. Een aantal theoretische details, de herkomst en kenmerken van het Chileense *governance* paradigma en de implicaties voor de relatie van de staat en zijn politieke partijen met de civiele maatschappij worden gepresenteerd. Het hoofdstuk zet de belangrijkste lessen omtrent de politieke geleerdheid van de elites omtrent de definitie en praktijk van democratie uiteen om vervolgens de specifieke lessen en conclusies te presenteren betreffende de civiele maatschappij en haar sociale bewegingen. Voorgesteld wordt dat deze reflexieve opgave heeft geresulteerd in een breuk en de vervreemding tussen de staat, zijn politieke partijen en de civiele maatschappij. Evenzo wordt de invloed van de bestuurlijke strategieën - die de regeringen van de *Concertación* in de praktijk hebben gebracht – op de onverschilligheid in die periode geanalyseerd. Gezien de controle die de regering en politieke partijen uitoefenden op sociale organisaties en bewegingen en gezien het geheel aan publieke beleidsmaatregelen gericht op de tertiaire sector werd concreet verondersteld dat de sociale deactivering het resultaat was van het karakter van de transitie en de overheersende rol van de elites.

De derde hypothese wordt uitgebreid uiteengezet in het vijfde hoofdstuk. In 1973 ging een ambitieus project van start om de Chileense maatschappij te herstructureren en herdefiniëren middels een aantal mechanismen die het sociale en maatschappelijke leven depolitiseerden. Deze mechanismen omvatten de versterking van de regulerende rol van de markt, de verkleining van staatsinterventie en toenemende technocratie. Tevens werd gezocht naar versterking van het individualisme en de uitroeiing van de

institutionele gronden die de vorming van collectieve structuren faciliteerden. Gezien deze achtergrond zet het hoofdstuk de gevolgen uiteen van de zogenaamde kapitalistisch revolutie en de consequenties ervan op ideologisch en cultureel gebied die een demobilisatie van de Chileense maatschappij middels verschillende media faciliteerden. In de eerste plaats een identitaire destructurering en destructurering van de traditionele normatieve kaders door een nieuw en geaccelereerd stratificatieproces dat gepaard ging met een stijgende krachtige sociale mobiliteit. Tevens bevorderden een sterke economische groei, de toegang tot krediet en consumptie fascinatie en euforie ten opzichte van de markt, terwijl de ruimten voor het debat en de traditioneel politiek beraad aan relevantie en interesse van het publiek verloren. Uiteindelijk faciliteerden de snelheid van de economische vooruitgang en een algemene verbetering van de materiële levensomstandigheden de opkomst van nieuwe wereldbeschouwingen als meritocratie en ondernemerschap, beiden geformuleerd in individualistische taal.

Echter, en naarmate de transitie vorderde, begonnen bovengenoemde factoren en hun invloed op de civiele maatschappij te evolueren en nieuwe discoursen en collectieve identiteiten voort te brengen met gevolgen voor de activiteiten van de sociale bewegingen. Het jaar 2011 markeert de opkomst van een nieuwe politieke cyclus met de grootste en meest impactvolle protestacties van de laatste decennia. In het zesde en laatste hoofdstuk wordt de wijze waarop de factoren die de sociale onverschilligheid van het begin van de jaren negentig hadden veroorzaakt, al spoedig begonnen te evolueren en transformeren, geanalyseerd. Daarmee beïnvloeden en faciliteren ze een langzame (re)generatie van identiteiten en centrale ideeën voor de collectieve actie van de protestcyclus in 2011. De structuur van dit onderzoek volgende, zet dit hoofdstuk uiteen hoe collectieve herinnering en geheugen evolueren, nieuwe interpretaties van het verleden voortbrengen en de afsluiting van het zogeheten transitionele geheugenverlies produceert met gevolgen voor de acties van de sociale bewegingen. Tevens wordt de relatie tussen de bestuurlijke strategieën en de (de)mobilisatie van de civiele maatschappij geanalyseerd. Ook wordt de doorwerking van de evolutie van de definitie van *governance* onderzocht en de gevolgen van de veranderingen in sociaal-politieke context voor de sociale bewegingen in Chili. Tenslotte richt het hoofdstuk zich op het neoliberale economische model, het probleem van ongelijkheid en de concentratie van macht. Deze worden naast maatschappelijke verwachtingen en hogere standaarden, geanalyseerd als de drijvende elementen achter de opkomst van een nieuwe set maatschappelijke waarden en, daarmee, nieuwe vraag naar maatschappelijke actie.

Tijdens de fase van maatschappelijke onverschilligheid ontstond onder de regeringen van de *Concertación* een transitie en superpositie tussen een oude en nieuwe maatschappij. Daarmee wordt een langzaam verlies van traditionele waarden en gedragsregels waargenomen en de latere vervanging door nieuwe normatieve componenten. Het dictatoriale regime was een heroprichtingsproject dat impliceerde dat nieuwe en oude vormen van maatschappelijke systemen versneld door elkaar gemengd werden. De samenleving en identiteiten die eerder een idee van toebehoren en sociale cohesie voortbrachten, brokkelden af en gemeenschappelijke of collectieve doelen raakten ontbonden. In een context waar gedragsregels, normen en waarden vreemd of onbekend werden, ontstond een verwijdering van de individuen ten aanzien van de groep. Met andere woorden, na het eind van de dictatuur deed zich in Chili een culturele transitie en mutatie voor, inclusief een desintegratie die individuen dwong om zich bij wijze van identitair beschermingsmechanisme terug te trekken tot de privé sfeer. In deze context wordt het privé domein relevant, evenals een bepaalde individuele apathie en onverschilligheid over de koers die de maatschappij volgt. Deze processen zouden noodzakelijk zijn voor het behoud van de collectieve herinnering en aanleiding geven tot innovaties die altijd voorafgaan aan de wedergeboorte van culturen.

De thesis van de verandering van regime, de instorting van een gemeenschappelijk vijand, maar ook de komst van democratie en het behalen van de doelen van de protestacties van de jaren tachtig, behoren tot de duidelijkste en meeste gebruikte factoren om de onverschilligheid vanaf 1990 te verklaren. Wat betreft de civiele maatschappij vanaf de jaren negentig verklaren deze treffende variabelen slechts oppervlakkig één aspect van de gebeurtenissen. Ook liggen ze ten grondslag aan het feit dat een meer diepgaande analyse die de complexiteit in beschouwing neemt is vergeten of weggelaten. Door middel van dit onderzoek wordt de complexiteit en diepgang van de sociaal-politieke processen van de laatste decennia duidelijk. Immers, naast de overschakeling van een dictatuur naar een democratisch regime werd de civiele maatschappij geraakt door een constellatie van psychologische, politieke en economische factoren die het ontstaan van maatschappelijke actie en betrokkenheid in grote mate belemmerden.

De maatschappelijk betrokkenheid én de onverschilligheid van de civiele maatschappij worden geobserveerd als de twee gezichten van hetzelfde verschijnsel. Geconstateerd wordt dat gedurende elke nieuwe golf van activering – en, in het bijzonder, tijdens de periode van transitionele deactivering – de politieke praktijk, de cultuur, de normatieve kaders en het *value framework* de neiging hebben te worden geherdefinieerd. Het constante eb en vloed van de Chileense civiele maatschappij

houdt ook verband met het bereiken en uitbreiden van burgerrechten. Zo kan gesteld worden dat het politieke proces dat de koers van de sociale (de)mobilisatie in Chili behelst, samenhangt met de uitbreiding van sociale rechten.

Daarmee worden maatschappelijke (de)mobilisatie en de uitbreiding van rechten afhankelijk van elkaar, vormend en elkaar versterkend. Met andere woorden, middels sociale mobilisatie of actie worden bepaalde rechten verworven en uitgebreid. Deze uitbreiding maakt het mogelijk dat de normatieve horizon wordt veranderd, evenals de evaluatie en vereiste van nieuwe sociale eisen. In de casus van Chili gedurende de laatste jaren maakte het democratisch herstel - dat werd aangedreven door de protesten uit de jaren tachtig - de ontwikkeling en consolidering van een democratie mogelijk. De democratische ontwikkeling veroorzaakte op zijn beurt een op waarden gebaseerde transformatie en de opkomst van een nieuwe cultuur met postmaterialistische kenmerken, evenals nieuwe kaders en sociale eisen.

Vanaf het onderzoek naar de koers van maatschappelijke actie en betrokkenheid en in het bijzonder door in te zoomen op de onverschilligheid van de civiele maatschappij tijdens het herstel van de democratie, wordt een analyse gemaakt van het sociaal-politieke proces en de grote sociale transformaties die de Chileense maatschappij de laatste decennia heeft doorgemaakt. Daarmee wordt de erosie en ondergang geconstateerd van een traditionele sociaal-politieke matrix, die de relatie tussen de staat, de markt en de civiele maatschappij gedurende een groot deel van de twintigste eeuw definieerde. Bovendien wordt parallel aan nieuwe collectieve identiteiten, vormen en mogelijkheden van maatschappelijke actie en betrokkenheid, de - nog voortdurende - vorming van een nieuwe maatschappelijke en politieke structuur geconstateerd. De invloed van politieke, psychologische en economische factoren als grote remmers van een eventuele mobiliserende actie tijdens de transitie werd tegelijkertijd tot component van deze nieuwe sociaal-politieke matrix gemaakt. Daarmee werden nieuwe identiteiten mogelijk gemaakt en tegelijkertijd aan het licht gebracht tijdens de cyclus van acties in 2011.

Summary

A process of politicisation began in Chile in 2011, which was marked by an increase in public debate and conflict and greater citizen involvement. Perhaps the most obvious sign of this was an increase in the number of social protests or demonstrations. Even though there were demonstrations during the Concertación governments (1990-2010), these were far from having the same scale and impact as the ones in 2011. In fact, the Concertación period was characterised by a decrease in the number of demonstrations and hardly any civilian participation in public debate. This was in stark contrast to the constant protests and demonstrations of the 1980s, as well as the later wave of demonstrations in 2011.

Moreover, according to different diagnoses, the advent of democracy in Chile was characterised by a fragmentation of and crisis within social movements, due to the lack of demonstrations by civilian society and even due to an absence of civilians. Different definitions have been used to describe the gradual withdrawal of citizens from public after the end of authoritarianism, as well as their lack of presence in decision-making and in the definition of the national political agenda in the post-dictatorial phase. The former goes against both the social effervescence in the rest of Latin America during this period as well as the supposition that democratic reconstruction would occur with citizens adopting certain positions and civilian society being revitalised.

Once the lack of demonstrations in Chilean civilian society has been identified, an analysis of the variables that shaped this transformation, from the demonstrations of previous decades to deactivation, is carried out. This exercise is part of the extensive literature on Chilean 'transitology' which, tackling the phenomenon from the perspective of micro, meso or macrosocial processes, allows for the identification of multiple factors that reveal the complexity of the demobilisation problem during re-democratisation. The aim of this study is to examine and open up debate on activation processes and the deactivation of Chilean civil society in particular, paying special attention to the period of democratic reconstruction during the four Concertación governments as a time of social demobilisation.

In the same way as this study observes post-dictatorial demobilisation, attempting to shed light on the cultural and social processes of the period, its main aim is to go into more depth and broaden academic discussion on the factors that influenced this deactivation. As set out throughout the book, social demobilisation, as well as the interest in it and ways in which civil society connected with it from 1990 to 2010, were heavily influenced by traumatic post-dictatorial memories, by civil society's

relationship with the state and the paradigm of governability and, finally, by the market and logic of neoliberal modernity. These variables - and the way in which they influenced the dynamics of civil society to a greater or lesser extent depending on the specific moment being analysed within the timeframe – arise as the main hypotheses and aims of this work.

It is also proposed that the emergence of social movements and protests is a cyclical phenomenon that is either more or less likely depending on political changes and opportunities that do not rely on the movement itself. Social movements thus only become visible in limited, temporary areas or spaces and, on doing so, reveal networks that are submerged or hidden within routine social relations. Mobilisation only becomes visible again when a determined conflict or certain specific circumstances allow it, otherwise remaining in a state of latency or potential mobilisation. This does not imply inactivity, but rather the construction and reconstruction of forms of action that are fed by the constant production of alternative frameworks of meaning.

Thus observed and tackled, the analysis of the post-dictatorial period is based not only on the causes of demobilisation but also on an examination of the reconstruction of identity that created the basis needed for the mobilisation phase that began in 2011. In this way, the premise of a weakening or absence of citizens between 1990-2010 is once again posed and considered as one of the stages of the reconstruction of civil society, in which new identities and collective values are generated and ‘incubated’. Periods of apparent social deactivation thus form part of a wider circle of collective action, characterised by underground and invisible movements that restructure and reconstruct identity and which serve to supply upcoming demonstrations.

The group of ideas that underpin this work are developed in the first chapter, where the theories on the activation and deactivation of the civil society phenomenon are presented in detail. The main characteristics and elements that make up social action are described and the set of analytical tools used to study social demobilisation in post-dictatorial Chile developed. In the same way, the main trajectories of the (de)mobilisation of civil society in Latin America are presented, thus framing the Chilean example in a wider context. Specifically, their influence on the work of Latin American civil society is summarised, as a result of the three variables that are suggested as being great agents of demobilisation in Chilean society during re-democratisation. In the same way, the problem of social demobilisation following the return to democracy in Chile is extensively examined to present the factors that have been used to explain social deactivation in the period in a general way.

Of an essentially descriptive nature, the second chapter involves historical contextualisation and presents the main trajectories of mobilisation and demobilisation in Chilean civil society during the twentieth century. From the 1920-1938 historical period, the State of Compromise and the Popular Unity government, the characteristics of a political cycle marked by attempts to democratise power and a correlation between participation and increasing social mobilisation are presented. Next, the specific phases of demobilisation and mobilisation during the dictatorship, defined by repression and authoritarianism, are analysed. As a result of what is related in this chapter, it can be seen that periods of social (de)activation are influenced by internal factors within social movements, such as the actions of leaders or mobilising agents or an identity and collective memory. In the same way, cycles are identified by external variables, such as the challenges and political needs of the state or market or economic fluctuations, with demonstrations or the withdrawal of civilian society from public being the response.

In the book's main chapters, the topic of demobilisation is examined in depth, based on the three main hypotheses, empiric work and the quantitative and qualitative data gathered. The link between post-traumatic memory and social demobilisation is the topic of the third chapter. It is suggested that direct or indirect exposure for decades to different violent situations, conflict and methods of social domination provoked a collective trauma in Chile. As a result of different events and acting at diverse levels, it is shown that the impact of this trauma was multidimensional and resulted in the regime ending in a climate of silence, oblivion, denial, social dismantling and citizen retraction. All these were ingredients for the demobilisation phase of the post-dictatorial society. First, the socio-political process in Chile in the last few decades is presented, with a description of the main elements that made up such a traumatic experience. The way in which said elements generated a climate of citizen silence and withdrawal into privacy is described, thus revealing the first clues to understanding demobilisation in the period between 1990 and 2010. In the same way, what occurred in civil society and its social movements from 1990 onwards is also analysed as a result of collective post-trauma. Specifically, details are given of the way in which social deactivation is a result of the impact of trauma on Chilean society, both through survival mechanisms and the reaction to collective trauma, as a result of distrust and the de-legitimisation of social organisations as well as social transmission or how the trauma was chronicled.

In the fourth chapter, the influence of the state's and political parties' actions on said demobilisation is examined, with the political variable and external factors beyond social movements themselves becoming more important as deactivation elements.

Several theoretical specifications, as well as the origin and characteristics of the paradigm of Chilean governability and its implications on the relationship between the state and its political parties and civil society, are presented. This chapter develops the main political lessons the elite can learn about the definition and practice of democracy, presenting specific lessons and conclusions about civil society and social movements. It is suggested that this exercise in reflection translated into the state and its political parties breaking away and distancing themselves from civil society. In the same way, the influence of the governability strategies on demobilisation put into practice by the Concertación governments in the observed period is analysed. Specifically, it is proposed that social deactivation was a result of the transition's characteristics and the prevailing role of the elite, due to the control exercised by both the government and political parties on organisations and social movements, as well as by the group of public policies centred in the third sector.

The third hypothesis is extensively developed in the fifth chapter. In 1973, an ambitious project began to restructure and redefine Chilean society through mechanisms that made society less political. These mechanisms included the strengthening of the regulatory role of the market, a reduction in state intervention and the promotion of technocrats. In the same way, this project sought to reinforce individualism and eradicate the institutional fundamentals that made the formation of collectives easier. Given this scenario, this chapter describes the consequences of the so-called capitalist revolution and its implications on an ideological and cultural plane, making the demobilisation of Chilean society using different means easier. First, there was a deconstruction of identity and of the traditional regulatory frameworks, accompanied by a new and accelerated process of stratification and energetic, upward social mobility. In the same way, vigorous economic growth and access to credit and consumption fostered a fascination with the market and a certain euphoria, while traditional opportunities for debate and political deliberation became less relevant and interesting for citizens. Finally, the speed of economic progress and a general improvement in material living conditions allowed for the emergence of new world views such as meritocracy and new business ventures, both formulated around individuality.

However, as the transition advanced, said factors and their influence on civil society started to develop and give origin to new discourses and collective identities, with implications for the work of social movements. In 2011, a new political cycle emerged, with mobilisations on a greater scale and with a greater impact than those observed in the last few decades. In the sixth and final chapter, the way in which the factors that produced demobilisation at the beginning of the 1990s began to develop

and transform themselves is analysed, as well as their influence and how they allowed for a slow (re)generation of identities and the strengthening of ideas for collective action in the 2011 round of protests. Following the format of this research, this chapter describes the way in which collective memory both develops and gives origin to new interpretations of the past and how the end of so-called transitional amnesia is produced, with its implications for the actions of social movements. In the same way, the relationship between governability strategies and the (de)mobilisation of civil society are examined. The repercussions of the development of the definition of governability and the consequences of changes in the socio-political context on social movements in Chile are also analysed. Finally, the chapter focuses on the neoliberal economic model, the problem of inequality and the concentration of power. Together with social expectations and higher standards, this is analysed as one of the driving forces for the emergence of a new group of social values, with which came new demands for social mobilisation.

In the Concertación governments' demobilisation phase, there was a transition and overlap between old and new society. With this, a slow loss of values and of the rules of traditional conduct was observed, as well as their subsequent replacement by new regulatory components. The dictatorial regime was a project that once again suggested that old and new forms of social order could be mixed together very quickly. Society and the identities that once generated a feeling of belonging, as well as social cohesion, became fragile and common and collective aims dissolved. Individuals became more distanced from groups in a context where regulations, rules of behaviour and values became foreign or unknown. In other words, after the end of authoritarian rule in Chile, a cultural transition and mutation took place, with a disintegration that forced individuals to resort to privacy as a way of protecting their identities. In this context, the private domain became more relevant and a certain apathy and individual lack of interest about the path followed by society was noted. These processes were essential to preserve collective memory and give rise to the innovations that have always preceded cultural 'rebirths'.

In the same way, the theory of the change in regime and the defeat of a common enemy, as well as the arrival of democracy and the carrying out of the aims of the demonstrations in the 1980s, are the most obvious and widely-used factors that help understand demobilisation from 1990 onwards. These variable certainties, however, only superficially explain one aspect of what happened in terms of civil society from the nineties onwards. In the same way, they have made it easier for a more detailed analysis that considers such complexity to be put off or omitted. Through this study, the complexity and depth of the socio-political processes of the last few decades can

be seen, since, beyond the move from a dictatorship to a democratic regime, civil society received the impact of an array of psychological, political and economic factors that, to a great extent, made social mobilisation difficult.

The mobilisation and demobilisation of civil society are observed as two faces of the same phenomenon. It can be stated that in each new wave of activation – and, specifically, during the period of transitional deactivation – political practices, culture and regulatory and value frameworks tend to be redefined. The constant and repetitive flows of Chilean civil society have, in this same way, been correlated as far as the carrying out and broadening of civil rights are concerned. It can thus be said that the political process contained in the trajectories of (de)mobilisation in Chile correlates to the widening of social rights. With this, (de)mobilisations and the expansion of rights are conditioned and are constituent elements which mutually strengthen each other. In other words, through social mobilisation, certain rights are obtained and expanded and this allows for the modification of the regulatory horizon, as well as the valuation of and request for new demands. In the case of Chile in the last few years, the return to democracy that was driven by the demonstrations in the 1980s allowed for the development and consolidation of democracy. At the same time, democratic development caused a transformation of values and the emergence of a new culture, with post-materialistic characteristics as well as new frameworks of social meaning and demands.

As a result of examining the history of mobilisations and, in particular, by focusing on the demobilisation of civil society in the return to democracy, an analysis is carried out on the socio-political process and the huge social transformations in Chilean society in the last few decades. The erosion and decline of the traditional socio-political mould that defined the relationship between the State, market forces and civil society for the majority of the twentieth century can be seen, as well as the ongoing formation of a new social and political structure, linked to new collective identities and means, as well as opportunities for action and social mobilisation. The influence of political, psychological and economic factors as important inhibitors of eventual mobilising actions in the transition become, at the same time, components of this new socio-political mould. With this, new identities became possible and were also brought to light during the 2011 cycle of demonstrations.

Currículum Vitae

Camila Jara Ibarra nació en Santiago de Chile. Estudió Sociología en la Universidad Católica Silva Henríquez, recibiendo su licenciatura (con distinción) el año 2007. Durante el 2008, cursó el Diplomado “Análisis Organizacional, Colaboración y Sociedad Civil” en la Universidad de Chile. En paralelo, se desempeñó como investigadora para distintas organizaciones en Chile hasta el año 2010, cuando viaja a Europa para continuar sus estudios, recibiendo más tarde el título Master in Sciences in Statistics, *cum laude*, en la Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica. Luego de obtener el apoyo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología (CONICYT) de Chile y más tarde el patrocinio de Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), desarrolla su tesis doctoral en la Universidad de Leiden entre los años 2011 y 2016. Actualmente, se desempeña como asesora de estudios para diferentes organizaciones públicas y privadas, entre ellas, el Ministerio de Educación de Chile.